

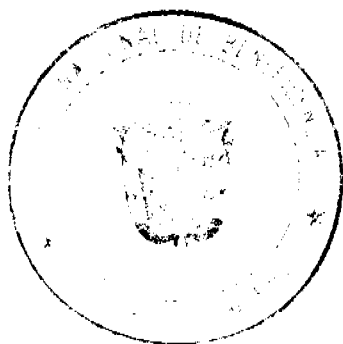
Panamá:

Nación, Estado y Canal

Selección, compilación y presentación
de

LUIS NAVAS PÁJARO

■



Revista Cultural
Lotería
EDICIÓN
EXTRAORDINARIA

Agosto de 1999
AÑO MCMXCIX

**JUNTA DIRECTIVA
DE LA LOTERÍA NACIONAL
DE BENEFICENCIA**

LCDO. ROLANDO A. MIRONES, h.
Presidente

LCDO. ENRIQUE MOU PINZÓN
Representante del Ministerio de Gobierno
y Justicia

SR. VÍCTOR RAÚL VÁSQUEZ
DR. JOSÉ EMILIO SIMONS BRAGIN
Representantes de Compradores
de Billetes

SR. GUILLERMO MANFREDO BERNAL
Representante Suplente de Compradores
de Billetes

LCDA. LUTZIA FISTONICH
Representante de la Contraloría

SRA. LEOCADIA TORRES ÁLVAREZ
Representante del Sindicato de Billeteros

PROF. RUBÉN PATIÑO R.
Representante Suplente del Sindicato
de Billeteros

**LOTERÍA NACIONAL
DE BENEFICENCIA**

LCDO. M. EVERARDO DUQUE
Director General

ING. ROLANDO LUQUE
Subdirector General

PROF. MARCELA F. DE RODRÍGUEZ
Directora de Desarrollo Social y Cultural

.....

REVISTA LOTERÍA

JUSTO ARROYO
Editor

Consejo Editorial
ANIBAL ILLUECA S.
DEMETRIO C. TORAL
URANIA A. UNGO

REVISTA LOTERÍA

Publicación de la Dirección de Desarrollo Social y Cultural
ISSN 0024-662X

© Lotería Nacional de Beneficencia, 1999.

Prohibida la reproducción total o parcial de este material
sin autorización de la Lotería Nacional de Beneficencia
de Panamá.

SUSCRIPCIONES Y CONSULTAS SOBRE REVISTA LOTERÍA:
ROMMEL ESCARREOLA PALACIOS
Departamento Cultural
Teléfono: 227-1316 • Apartado Postal N° 21, Panamá 1, Panamá.



Diseño y diagramación: PABLO MENACHO
Dibujo de Portada: OLOGUAGDI

Contenido

PRESENTACIÓN	7
--------------------	---

Iª PARTE

NEGOCIACIONES Y CONCESIÓN CANALERA

Nombramiento de Phillipe Bunau-Varilla	11
Nombramiento del equipo negociador	12
Decreto Número 5 de 1903	13
Decreto Número 9 de 1903	14
Agenda de las negociaciones	15
Convenio del Canal Istmico o Tratado Hay Bunau Varilla	18

EL PROBLEMA JURISDICCIONAL

Delimitación de la ciudad de Panamá y su bahía	29
A. Convenio	31
B. Delimitación (Ciudad de Panamá y su bahía)	34
C. Delimitación (Ciudad de Colón y su bahía)	35

CARENCIA DE UNIDAD

Nota de Tomás Arias (16 de junio de 1904)	37
Nota de Nicolás Victoria (26 de agosto de 1904)	38
Nota de Tomás Arias (29 de septiembre de 1904)	40
Nota de José D. de Obaldía	43
Declaración del Presidente Roosevelt	56
Convenio monetario	58
Convenio Taft (1904)	61

LA FIJACION DE LAS FRONTERAS NACIONALES

Convención de Límites (1914)	76
Tratado Thomson Urrutia (1914)	93
Decreto Número 130 (de 29 de agosto de 1914)	97
Fallo White (1914)	99

LOS PRIMEROS ESFUERZOS REVISIONISTAS

El proyecto de Tratado Porras Morales (1915)	134
Los 32 puntos de Alfaro	141

El Tratado Kellog-Alfaro (1926)	143
---------------------------------------	-----

INTERVENCIONISMO Y REPÚBLICA MEDIATIZADA

Solicitud de desarme de la Policía Nacional (1915).....	164
Imposición del desarme	167
Protesta por la imposición de los límites con Costa Rica	172
Manifiesto a la nación (1921)	176
Lucha inquilinaria e ingerencia extranjera (1925)	182

IIª PARTE:

PANAMÁ Y LA CONFRONTACIÓN BÉLICA DE LAS POTENCIAS MUNDIALES

Declaración Conjunta Arias-Roosevelt	187
Tratado Arias-Roosevelt (1936)	189
Convenio sobre carretera transístmica.....	201
Convenio sobre maniobras militares	205
Canje de Notas Boyd-Hull (1939)	208

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LA PRESENCIA MILITAR EXTRANJERA

Solicitud de más tierras (25 de noviembre de 1940)	210
Acta de la Entrevista del Embajador Estadounidense con el Presidente Arnulfo Arias Madrid (7 de enero de 1941)	215
Memorándum de los 12 puntos (febrero de 1941)	217
Nota del Embajador Carlos N. Brin	219
A la Nación (5 de marzo de 1941)	222
Decreto Núm. 9 (20 de octubre de 1941)	224
Convenio de Sitios de Defensa (18 de mayo 1942)	226
Memorándum de los Sitios de Defensa.....	234
Sitios de Defensa solicitados después del 18 de mayo de 1942	249
Compensaciones económicas (18 de mayo de 1942).....	252
Acuerdo sobre la asignación de un Militar como Asesor del Canciller Panameño (7 de julio de 1942)	262
Convenio Filós-Hines (Diciembre de 1947)	271
Memorándum del Convenio Filós-Hines	279
Listado de sitios pretendidos	285
Declaración Conjunta Remón-Eisenhower	286
Tratado Remón-Eisenhower (4 de enero de 1955)	288
Memorándum de Entendimiento	300

IIIª PARTE:

LA ECLOSIÓN NACIONALISTA DEL 9 DE ENERO DE 1964

Revisión de los Tratados (1961)	309
Declaración conjunta Chiari-Kennedy	320
Ruptura de Relaciones Diplomáticas (10 de enero de 1964)	323
Declaración Conjunta (3 de abril de 1964)	325
Declaración Johnson-Robles (24 de septiembre de 1965)	329

TRATADOS DE 1967

Tratado del Canal	331
Tratado de Defensa y Neutralidad	388
Tratado del Canal a Nivel del Mar	423
Nota del Embajador Roberto Alemán	452

IVª PARTE:

**ETAPA ABROGACIONISTA Y LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA LUCHA PANAMEÑA POR SU SOBERANÍA**

Rechazo de los Tratados de 1967	459
---------------------------------------	-----

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU EN PANAMA

Discurso del General Omar Torrijos Herrera	478
Resolución de apoyo a la causa panameña	483
Cómo fue vetada por los Estados Unidos	485
Discurso de J. A. Tack	486
Declaración Tack Kissinger (1974)	490
Declaración de Contadora (24 de marzo de 1975)	492
Discurso del General Omar Torrijos Herrera en la Quinta Conferencia de Jefes de Estado y de Gobiernos de Países No Alineados (1976)	496
Discurso del General Omar Torrijos Herrera el 7 de septiembre de 1977	502





Presentación

A partir de noviembre de 1903, empieza una experiencia distinta a las que, hasta ese momento, había vivido la sociedad istmeña. La construcción del ferrocarril (1850-55) y el intento fallido del canal francés (1880-88) fueron propiciados por los capitalistas o inversionistas privados, como suele llamárseles ahora. En la coyuntura novembrina, una naciente potencia imperial, explotará la posición geográfica con fines comerciales y militares. El canal nunca se construyó con el único deseo altruista de beneficiar el comercio mundial. También debía, siguiendo las tesis del estratega naval Alfred T. Mahan, dilucidar el problema de la ubicación de la flota naval estadounidense, en ambos océanos. Con el canal bastaría una sola flota, la desplazarían a discreción a cualquiera de los dos océanos. Ello, a su vez, ahorraría ingentes gastos.

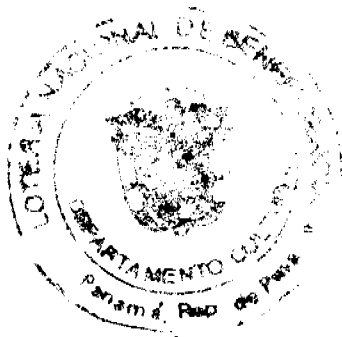
Desde aquella fecha, la presencia colonial de los Estados Unidos de América en Panamá influye en la conformación económica, social y política de la República de Panamá. Bajo el estigma de la intervención y el tutelaje extranjero, tiene lugar un proceso de amor y de odio; de aceptación y repulsa; de complacencias y de protestas; en fin, se vertebra un proyecto de defensa a la identidad nacional y se hace pervivir el Estado Nacional.

Los documentos seleccionados tienen el propósito de medir la maduración de la conciencia de los panameños ante su propio destino. Aunque las relaciones de Panamá con los Estados Unidos de América no sólo se agotan en los tratados, la Convención del Canal Istmico o Tratado Hay - Bunau Varilla, formó, en la presente centuria, la espina dorsal y, explica la consiguiente lucha por reformarlo o abrogarlo. Empeño épico de los panameños si comprendemos la resistencia estadounidense a abandonar los privilegios concedidos por Panamá a perpetuidad.

La documentación seleccionada más que enjuiciar el pasado debe servir al aprendizaje permanentemente, y para que no cometamos los mismos errores. Independientemente de las valoraciones subjetivas que hagamos, son aportes al forjamiento de la nacionalidad. La iniciamos en noviembre de 1903 y la finalizamos con la internacionalización de la causa panameña. Por consiguiente, y sin obviar el propósito académico, es un homenaje a todas aquellas personalidades, movimientos de masas, instituciones cívicas, religiosas, partidos y dirigentes políticos, que hicieron posible, reconquistar la posición geográfica y la soberanía conculcada.

Después de 500 años tenemos la oportunidad de perfeccionar la independencia y lograr que el camino transistmico le sirva al comercio de las naciones e impedir, con firme voluntad, seguir siendo un instrumento de guerra. Esa industria de la muerte siempre tendrá un pretexto al cual recurrir.

El 31 de diciembre de 1999, al medio día, hora de Panamá, debemos los panameños de esta hora, sin mezquindad de ninguna índole testimoniar el reconocimiento a cada uno de nuestros mártires, héroes y, en especial, al Comandante Omar Torrijos Herrera. El hombre que murió en el Cerro Marta, provincia de Coclé, entró a la historia.



Iª Parte

Negociaciones y concesión canalera



1

Nombramiento de Felipe Bunau-Varilla

DECRETO NÚMERO 2

(de 6 de noviembre de 1903)

POR EL CUAL SE NOMBRA AGENTE CONFIDENCIAL DE LA REPÚBLICA
EN WASHINGTON.

La Junta de Gobierno Provisional de la República de Panamá,

DECRETA

ARTÍCULO ÚNICO: Nómbrase al señor Don Felipe Bunau Varilla,
Agente confidencial de la República ante el Gobierno de los Estados
Unidos de Norte América.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá, a 9 de Noviembre de 1903.

(Fdo.) *Manuel Espinosa B.*

(Fdo.) *Tomás Arias*

(Fdo.) *José Arango*

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) *F.V. De la Espriella*

República de Panamá.

* Publicado en la *Gaceta Oficial* número 10, de 31 de diciembre de 1903.

2

Nombramiento del equipo negociador

DECRETO NÚMERO 3 (de 9 de noviembre)

POR EL CUAL SE CREA UNA LEGACIÓN EN WASHINGTON
Y SE NOMBRA EL PERSONAL QUE DEBE SERVIRLA.

La Junta de Gobierno Provisional de la República

DECRETA

ARTÍCULO 1o. Créase la legación de la República en Washington y nómbrase para desempeñarla al señor Don Felipe Bunau Varilla con el carácter de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario.

ARTÍCULO 2o. Nómbrase Secretario de la Legación al Señor Carlos Constantino Arosemena.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá, á 9 de Noviembre de 1913.

(Fdo.) *Manuel Espinosa B.*

(Fdo.) *Tomás Arias*

(Fdo.) *José Arango*

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) *F.V. De la Espriella*

República de Panamá.

* Publicado en la *Gaceta Oficial* número 10, de 31 de diciembre de 1903.

DECRETO NÚMERO 5 DE 1903

(de 9 de Noviembre)

POR EL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO PLURAL Y SE CONFIEREN FACULTADES.

La Junta de Gobierno Provisional de la República en ejercicio de sus facultades

DECRETA

ARTÍCULO 1o. Nómbrase Delegados de la República en los Estados Unidos de América a los señores Manuel Amador Guerrero y Federico Boyd con el carácter de consultores y cooperadores del Enviado Extraordinario Ministro Plenipotenciario ante el gobierno del mismo país, ajustándose a las instrucciones dadas a estos y a los especiales que verbalmente se comunicaran a ellos al entregarles el presente nombramiento.

ARTÍCULO 2o. Facúltase a los delegados de la República en los Estados Unidos para contratar un empréstito nacional hasta por la suma de un millón de pesos oro.

ARTÍCULO 3o. En caso de ser necesario a los intereses de la República los Delegados están plenamente autorizados por el presente Decreto para gestionar directamente con el gobierno de los Estados Unidos de América.

Dado en Panamá, á 9 de Noviembre de 1903.

(Fdo.) *Manuel Espinosa B.*

(Fdo.) *Tomás Arias*

(Fdo.) *José Arango*

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) *F.V. De la Espriella*

República de Panamá.

* Publicado en la *Gaceta Oficial* número 10, de 31 de diciembre de 1903.

LUIS NAVAS PAJARO

DECRETO NÚMERO 9 DE 1903
(de 14 de Noviembre)

POR EL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO.

La Junta de Gobierno Provisional
en ejercicio de sus facultades

DECRETA

ARTÍCULO ÚNICO. Nómbrase al señor Dr. Don Pablo Arosemena Abogado Consultor de los consultores y cooperadores del Enviado Extraordinario Ministro Plenipotenciario de la República cerca del Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, Señores Manuel Amador Guerrero y Federico Boyd.

Comuníquese y publíquese

Dado en Panamá, á catorce de noviembre de mil novecientos tres.

(Fdo.) *Manuel Espinosa B.*

(Fdo.) *Tomás Arias*

(Fdo.) *José Arango*

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) *F.V. De la Esprtelia*

3

Agenda de las negociaciones

NÚMERO 28.

República de Panamá.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

INSTRUCCIONES PARA SU EXCELENCIA EL ENVIADO
EXTRAORDINARIO Y MINISTRO PLENIPOTENCIARIO DE LA REPÚBLICA
ANTE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
ACORDADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO PROVISIONAL DE LA
REPÚBLICA, RELATIVAS A LA CONVENCIÓN SOBRE EL CANAL.

1. Deberá tratarse de alcanzar la modificación al Artículo I de la Convención Herrán-Hay en la parte que dice:
"...exceptuando las propiedades de Panamá y Colón, o en los puertos terminales de estas poblaciones, que pertenezcan a dichas compañías o que se hallen actualmente en su poder..." de este modo:
...exceptuando los terrenos en Panamá y Colón que pertenezcan a dichas compañías, o en los cuales tengan derecho de usufructo, que estén dados en arrendamiento, y los no ocupados en Panamá, los cuales serán propiedad de la República de Panamá.
2. También debe asegurarse en ese artículo de modo claro, la entrega a la República de Panamá por parte de la Compañía nueva del Canal, de la suma que a esta República corresponde recibir en el traspaso, pues es menester no quedar expuestos a lo que dicha Compañía, quiera hacer después de que haya recibido el pago que le hará el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
3. Asegurar también de modo eficaz que en virtud de la concesión de la Compañía nueva del Canal para hacer el traspaso al

1 Ernesto Castillero P. **Panamá y los Estados Unidos**. 4ta. ed., Litho-Impresora Panamá, Panamá, 1974. Cap II.

gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, la renuncia de parte de dicha Compañía a todo reclamo, de cualquier género que sea, contra la República de Panamá.

4. En el Artículo III se hará la modificación cónsona con la modificación del Artículo I.
5. En el mismo Artículo III se tratará de alcanzar la modificación de que el derecho de tránsito de los propietarios se extienden al Canal, sus obras adyacentes y vías férreas, inclusive la del ferrocarril de Panamá. Esto último en caso de expropiación de una parte del terreno. Es menester dejar paso y salida a las heredades pues de no hacerlo así quedarán encerradas.
6. Tratar de alcanzar que la concesión a los panameños respecto de las vías acuáticas de que trata el Artículo VII se extienda al mismo Canal siempre que lo usen en embarcaciones y que no se embarace con ellas el tráfico universal. La razón de esto es que quienes se hallen obligados para salir o entrar a sus heredades tropezando en su camino por el Canal, si no pudiera navegar por él embarcaciones menores serían grandemente perjudicados.
7. Tratar de alcanzar en el mismo Artículo VIII, el XII y en los demás que traten de la materia franquicias, que la República sí podrá cobrar impuestos sobre el tabaco en todas sus formas, las bebidas espirituosas y el opio. Esto se justifica por la naturaleza de esas especies destinadas a vicios y porque el impuesto al tabaco y cigarrillos y al opio son rentas vendidas por varios años a particulares a quienes no privarse el derechos adquiridos.
8. Tratar de alcanzar que los asuntos a que se refiere el Artículo XII, número II sean decididos por el Tribunal Mixto que se expresa en el número III.
9. Tratar de alcanzar en el Artículo XXIII o en su nuevo artículo, el Protectorado de Estados Unidos, salvo que ese gobierno quiera que se pacte una convención especial.
10. El Artículo XXIII se redactará en términos que se conformen con la idea del Protectorado por parte de los Estados Unidos a la República de Panamá.
11. El Artículo XXV se modificará en el sentido de que la República de Panamá reciba, una vez ratificada por ambas partes la convención, dos millones de pesos oro (\$2,000,000), quedando los ocho millones (\$8,000,000) restantes en poder del gobierno de los Estados Unidos, el cual pagará por ellos una renta anual de doscientos cuarenta mil pesos oro (\$240,000)

que equivale al tres por ciento (3%) anual, y además los doscientos cincuenta mil pesos oro (\$250,000) que se menciona en el referido artículo XXV.

12. Procurar alcanzar, si fuere posible, todo cuanto redunde a beneficio de la República de Panamá.



4

Convenio del Canal Istmico o Tratado Hay-Bunau Varilla (18 de noviembre de 1903)

CONVENCIÓN DEL CANAL ÍSTMICO ENTRE PANAMÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, FIRMADA EN WASHINGTON EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1903.

Deseando los Estados Unidos de América y la República de Panamá asegurar la construcción de un canal para buques a través del Istmo de Panamá para comunicar los Océanos Atlántico y Pacífico; habiendo expedido el Congreso de los Estados Unidos de América una ley aprobada el 28 de Junio de 1902 con tal fin, por la cual se autoriza al Presidente de los Estados Unidos para adquirir de la República de Colombia dentro de un plazo razonable el control del territorio necesario, y residiendo efectivamente la soberanía de ese territorio en la República de Panamá, las Altas Partes Contratantes han resuelto celebrar una Convención con tal objeto, y por consiguiente, han nombrado como sus Plenipotenciarios:

El Presidente de los Estados Unidos de América, a John Hay, Secretario de Estado, y

El Gobierno de la República de Panamá, a Philippe Bunau-Varilla, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República de Panamá, especialmente facultado para tal objeto por ese Gobierno, quienes después de haber comunicado sus respectivos plenos poderes, y de haberlos hallado en buena y debida forma, han convenido y concertado los siguientes artículos:

ARTÍCULO I

Los Estados Unidos garantizan y mantendrán la independencia de la República de Panamá.

* Secretaría de Relaciones Exteriores de Panamá, *Tratados Públicos*, Número 1 (Panamá), Imprenta Nacional, 1926, pp. 5-17.

ARTÍCULO II

La República de Panamá concede a los Estados Unidos, a perpetuidad, el uso, ocupación y control de una zona de tierra y de tierra cubierta por agua para la construcción y mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del citado Canal, de diez millas de ancho que se extienden a una distancia de cinco millas a cada lado de la línea central de la ruta del Canal que se va a construir, comenzando dicha zona en el mar Caribe a tres millas marítimas de la línea media de la bajamar y extendiéndose a través del Istmo de Panamá hacia el Océano Pacífico hasta de la bajamar, con la condición de que las ciudades de Panamá y Colón y las bahías adyacentes a dichas ciudades, que están comprendidas dentro de los límites de la zona arriba descrita, no quedan incluidas en esta concesión. La República de Panamá, concede, además, a perpetuidad, a los Estados Unidos, el uso, ocupación y control de cualesquiera otras tierras y aguas fuera de la zona arriba descrita, que puedan ser necesarias y convenientes para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del mencionado Canal, o de cualesquiera canales auxiliares u otras obras necesarias y convenientes para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección de la citada empresa.

La República de Panamá concede, además, y de igual manera a los Estados Unidos, a perpetuidad, todas las islas que se hallen dentro de los límites de la zona arriba descrita, así como también, el grupo de pequeñas islas en la Bahía de Panamá, llamadas, Perico, Naos, Culebra y Flamenco.

ARTÍCULO III

La República de Panamá concede a los Estados Unidos en la zona mencionada y descrita en el Artículo II de este Convenio y dentro de los límites de todas las tierras y aguas auxiliares mencionadas y descritas en el citado Artículo II, todos los derechos, poder y autoridad que los Estados Unidos poseerían y ejercitarían si ellos fueran soberanos del territorio dentro del cual están situadas dichas tierras y aguas, con entera exclusión del ejercicio de tales derechos soberanos, poder o autoridad por la República de Panamá.

ARTÍCULO IV

Como derechos subsidiarios de las concesiones que anteceden, la República de Panamá concede a los Estados Unidos, a

perpetuidad, el derecho de usar los ríos, riachuelos, lagos y otras masas de agua dentro de sus límites para la navegación, suministro de agua o de fuerza motriz o para otros fines, hasta donde el uso de esos ríos, riachuelos, lagos y masas de agua pueda ser necesario y conveniente para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del mencionado Canal.

ARTÍCULO V

La República de Panamá concede a los Estados Unidos, a perpetuidad, el monopolio para la construcción, mantenimiento y funcionamiento de cualquier sistema de comunicación por medio del canal o de ferrocarril a través de su territorio, entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

ARTÍCULO VI

Las concesiones que aquí se expresan de ningún modo invalidarán los títulos o derechos de los ocupantes o dueños de tierras o propiedades particulares en la mencionada zona o en cualesquiera de las tierras y aguas concedidas a los Estados Unidos según las estipulaciones de cualquier Artículo de este Tratado, ni tampoco perjudicarán los derechos de tránsito por las vías públicas que atravesen la mencionada zona o cualesquiera de dichas tierras o aguas, a menos que tales derechos de tránsito o derechos particulares estén en conflicto con los derechos aquí concedidos a los Estados Unidos, caso en el cual los derechos de los Estados Unidos prevalecerán. Todos los años causados a los propietarios de tierras o de propiedades particulares de cualquier clase con motivo de las concesiones contenidas en este tratado o con motivo de los trabajos que ejecuten los Estados Unidos, sus agentes o empleados, o con motivo de la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del mencionado Canal o de las obras de saneamiento y protección aquí estipuladas, serán valuados y ajustados por una Comisión Mixta nombrada por los Gobiernos de los Estados Unidos y de la República de Panamá, cuyas decisiones con respecto a esos daños serán definitivas y cuyos fallos por tales daños serán pagados únicamente por los Estados Unidos. No se impedirá, demorará o estorbará parte alguna del mencionado Canal o del Ferrocarril de Panamá o de cualquiera de las obras auxiliares relacionadas con uno y otro y autorizadas por los términos de este Tratado mientras estén pendientes los procedimientos en averiguación de esos datos. Los avalúos de esas tierras y de las propiedades particulares y de los daños

causados a éstas, tendrán por base el valor que tenían los bienes antes de la fecha de esta Convención.

ARTÍCULO VII

La República de Panamá concede a los Estados Unidos dentro de los límites de las ciudades de Panamá y Colón y sus bahías adyacentes y dentro del territorio adyacente a ellas, el derecho de adquirir por compra o en ejercicio del derecho de dominio eminente, las tierras, edificios, derechos de agua u otras propiedades que sean necesarias y convenientes para la construcción, mantenimiento, funcionamiento y protección del Canal y para cualesquiera obras de saneamiento, tales como la recogida y desagüe de inmundicias y las distribución de agua en las citadas ciudades de Panamá y Colón y que a juicio de los Estados Unidos pueden ser necesarias y convenientes para la construcción, mantenimiento, funcionamiento y protección del mencionado Canal y Ferrocarril. Todos los trabajos de saneamiento, de recogida y desagüe de inmundicias y de distribución de agua en las ciudades de Panamá y Colón serán ejecutados por cuenta de los Estados Unidos y el Gobierno de los Estados Unidos, sus agentes y representantes tendrán facultad para establecer y cobrar las contribuciones de agua y de albañales que sean suficientes para proveer el pago de los intereses y a la amortización del capital invertido en esas obras en un período de cincuenta años, y a la expiración de ese período de cincuenta años el sistema de albañales y el acueducto vendrán a ser propiedad de las ciudades de Panamá y Colón respectivamente, y el uso del agua será libre para los habitantes de Panamá y Colón, salvo la contribución de agua que sea necesario establecer para el funcionamiento y mantenimiento del mencionado sistema de albañales y del acueducto.

La República de Panamá conviene en que las ciudades de Panamá y Colón cumplirán, a perpetuidad, los reglamentos de carácter preventivo o curativo dictados por los Estados Unidos y en caso de que el Gobierno de Panamá no pudiese hacer efectivo o faltare a su obligación de hacer efectivo el cumplimiento de dichos reglamentos sanitarios de los Estados Unidos por las ciudades de Panamá y Colón, la República de Panamá concede a los Estados Unidos el derecho y autoridad de hacerlos efectivos.

El mismo derecho y autoridad se concede a los Estados Unidos para el mantenimiento del orden público en las ciudades de Panamá y Colón y en los territorios y bahías adyacentes, en caso

de que la República de Panamá, a juicio de los Estados Unidos, no estuviere en capacidad de mantenerlo.

ARTÍCULO VIII

La República de Panamá concede a los Estados Unidos los derechos que hoy tiene y que más tarde pueda adquirir sobre los bienes de la Compañía Nueva del Canal de Panamá y de la Compañía del Ferrocarril de Panamá como resultado del traspaso de soberanía de la República de Colombia a la República de Panamá y autoriza a la Compañía Nueva del Canal de Panamá para vender y traspasar a los Estados Unidos sus derechos, privilegios, bienes y concesiones así como también el Ferrocarril de Panamá y todas las acciones o parte de las acciones de esa Compañía; pero las tierras públicas situadas fuera de la Zona descrita en el Artículo II de este Tratado y que están actualmente incluidas en las concesiones hechas a ambas empresas y que no sean necesarias para la construcción y funcionamiento del Canal volverán a poder de la República de Panamá, con excepción de cualesquiera bienes de que en la actualidad sean dueñas o poseedoras las mencionadas compañías dentro de Panamá o Colón o dentro de sus puertos o terminales.

ARTÍCULO IX

Los Estados Unidos respecto de los puertos en ambas entradas del Canal y sus aguas y la República de Panamá respecto de las ciudades de Panamá y Colón convienen en que ellos serán libres en todo tiempo, de modo que en ellos no se impondrán ni cobrarán peajes aduaneros, derechos de tonelaje, anclaje, faros, muellaje, pilotaje, o cuarentena ni ninguna otra contribución o impuesto sobre las naves que usen el Canal o pasen por él o que pertenezcan a los Estados Unidos o sean empleadas por éstos, directa o indirectamente en la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal principal u obras auxiliares, ni sobre la carga, oficiales, tripulación o pasajeros de dichas naves, con excepción de los peajes y cargas que puedan ser establecidos por los Estados Unidos por el uso del Canal y otras obras, y con excepción de los impuestos y contribuciones establecidos por la República de Panamá sobre las mercaderías introducidas para su uso consumo en el resto de la República de Panamá, y sobre las naves que toquen en los puertos de Colón y Panamá sin pasar por el Canal.

El Gobierno de la República de Panamá tendrá el derecho de

establecer en esos puertos y en las ciudades de Panamá y Colón los edificios y resguardos que sean necesarios para la recaudación de impuestos sobre las importaciones destinadas a otras partes de Panamá y para prevenir el contrabando. Los Estados Unidos tendrán derecho a usar las ciudades y bahías de Panamá y Colón como lugares de anclaje, para hacer reparaciones, para cargar, descargar, depositar, o trasbordar cargamentos, ya sean en tránsito ya sean destinados al servicio del Canal o de otras obras relacionadas con éste.

ARTÍCULO X

La República de Panamá conviene en que no se impondrán contribuciones, ya sean nacionales, municipales, departamentales o de cualquiera otra clase sobre el Canal, los ferrocarriles y obras auxiliares, remolcadores y otras naves empleadas en el servicio del Canal, depósitos, talleres, oficinas, habitaciones para obreros, fábricas de todas clases, almacenes, muelles, maquinaria y otras obras, propiedades y efectos pertenecientes al Canal o al ferrocarril y obras auxiliares, o a sus jefes y empleados, situados dentro de las ciudades de Panamá y Colón; y que no se impondrán contribuciones o impuestos de carácter personal de ninguna naturaleza a los jefes, empleados, obreros y otros individuos en el servicio del Canal, del ferrocarril y obras auxiliares.

ARTÍCULO XI

Los Estados Unidos convienen en que los despachos oficiales del Gobierno de la República de Panamá serán transmitidos por las líneas telegráficas y telefónicas establecidas por el Canal y usadas para negocios públicos y privados, a ratas no mayores que las que se cobren a los funcionarios en el servicio de los Estados Unidos.

ARTÍCULO XII

El Gobierno de la República de Panamá permitirá la inmigración y libre acceso a las tierras y talleres del canal y a sus obras auxiliares a todos los empleados y obreros de cualquiera nacionalidad que estén contratados para trabajar en el Canal o que busquen empleo en él o que de cualquier manera estén relacionados con el mencionado Canal y sus obras auxiliares, con sus respectivas familias, y todas esas personas estarán exentas del servicio militar de la República de Panamá.

ARTÍCULO XIII

Los Estados Unidos podrán importar en todo tiempo a la mencionada Zona y tierras auxiliares, libres de derechos de aduana, impuestos, contribuciones u otros gravámenes, y si ninguna restricción, buques, dragas, locomotoras, carros, maquinaria, herramientas, explosivos, materiales, abastos y otros artículos necesarios y convenientes para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal y sus obras auxiliares, y todas las provisiones, medicinas, ropas, abastos y otros artículos necesarios y convenientes para los jefes, empleados, trabajadores y obreros al servicio y en el empleo de los Estados Unidos y para sus familias. Si tales artículos fueren enajenados para ser usados fuera de la zona y tierras auxiliares concedidas a los Estados Unidos y dentro del territorio de la República de Panamá, quedarán sujetos a los mismos derechos de importación y otros impuestos que graven artículos importados bajo las leyes de la República de Panamá.

ARTÍCULO XIV

Como precio o compensación de los derechos, poderes y privilegios otorgados por este Convenio por la República de Panamá a los Estados Unidos, el Gobierno de los Estados Unidos conviene en pagar a la República de Panamá la suma de diez millones de dólares (\$10,000,000.00) en moneda de oro de los Estados Unidos al efectuarse el canje de las ratificaciones de este Convenio y también una anualidad, durante la vida de este Convenio, de doscientos cincuenta mil dólares (\$250,000.00) en la misma moneda de oro, comenzando nueve años después de la fecha arriba expresada.

Las estipulaciones de este Artículo serán en adición a todos los demás beneficios que obtiene la República de Panamá de acuerdo con esta Convención.

Pero ninguna demora o diferencia de opinión con motivo de este artículo o de cualquiera otra estipulación de este Tratado afectará o interrumpirá la completa ejecución y efecto de esta Convención en las demás partes.

ARTÍCULO XV

La Comisión Mixta a que se refiere el Artículo VI será constituida de la manera siguiente:

El Presidente de los Estados Unidos nombrará dos personas y el Presidente de la República de Panamá nombrará dos personas,

quienes procederán a dictar su fallo; pero en caso de discordancia de la Comisión (con motivo de estar igualmente dividida en sus conclusiones) se nombrará un Dirimente por los dos Gobiernos, quien dictará el fallo. En caso de muerte, ausencia o incapacidad de un Miembro de la Comisión o del Dirimente, o en caso de omisión, excusa o cesación en el desempeño de sus funciones, su puesto será llenado mediante el nombramiento de otra persona del modo antes indicado. Los fallos dictados por la mayoría de la Comisión o por el Dirimente serán definitivos.

ARTÍCULO XVI

Los dos Gobiernos tomarán las medidas necesarias, mediante arreglos futuros, para la persecución, captura, prisión, detención y entrega a las autoridades de la República de Panamá, dentro de la mencionada Zona y tierras auxiliares, de las personas acusadas de haber cometido crímenes, delitos o faltas fuera de la citada Zona y para la persecución, captura, prisión, detención y entrega a las autoridades de los Estados Unidos, fuera de la mencionada Zona, de las personas acusadas de haber cometido crímenes, delitos y faltas dentro de dicha Zona y tierras auxiliares.

ARTÍCULO XVII

La República de Panamá concede a los Estados Unidos el uso de todos los puertos de la República abiertos al comercio, como lugares de refugio para cualesquiera naves empleadas en la empresa del Canal, y para todas las naves que pasen o intenten pasar por el Canal, que hallándose en peligro se vean forzadas a arribar a dichos puertos. Tales naves estarán exentas de los impuestos de anclaje y tonelaje por parte de la República de Panamá.

ARTÍCULO XVIII

El Canal una vez construido, y sus entradas, serán neutrales a perpetuidad y estarán abiertos a la navegación en las condiciones establecidas en la Sección del Artículo III del Tratado celebrado entre los Gobiernos de los Estados Unidos y la Gran Bretaña, el 18 de Noviembre de 1901 y de conformidad con las demás estipulaciones del mismo.

ARTÍCULO XIX

El Gobierno de la República de Panamá tendrá derecho a transportar por el Canal, a sus naves y sus tropas y elementos de gue-

rra en esas naves en todo tiempo y sin pagar derechos de ninguna clase. Esta exención se extenderá la Ferrocarril auxiliar para el transporte de personas al servicio de la República de Panamá, o de la fuerza de policía encargada de guardar el orden público fuera de la expresa Zona, así como sus equipajes, elementos de guerra y provisiones.

ARTÍCULO XX

Si en virtud de cualquier tratado vigente que se relacione con el territorio del Istmo de Panamá y cuyas obligaciones recaigan sobre la República de Panamá o sean asumidas por ésta, hubiere privilegios o concesiones en favor del Gobierno o de los ciudadanos o súbditos de una tercera potencia relativos a una vía de comunicación interoceánica, que en cualquiera de sus estipulaciones pueda ser incompatible con los términos de la presente Convención, la República de Panamá conviene en abrogar o modificar ese tratado en debida forma, para lo cual hará a la expresada tercera potencia la notificación necesaria dentro del término de cuatro meses a contar de la fecha de esta Convención; y en caso de que el tratado existente no contuviere cláusula alguna que permita su modificación o abrogación, la República de Panamá conviene en procurar su modificación o abrogación en forma tal que no haya conflicto alguno con las estipulaciones de la presente Convención.

ARTÍCULO XXI

Es entendido que los derechos y privilegios concedidos por la República de Panamá a los Estados Unidos en los Artículos que preceden, están libres de toda deuda, gravamen, fideicomiso o responsabilidad anterior o de anteriores concesiones o privilegios a otros Gobiernos, compañías anónimas, sindicatos o individuos, y en consecuencia, si surgieren reclamaciones a causa de las actuales concesiones y privilegios o por otra causa cualquiera, los reclamantes ocurrirán al Gobierno de la República de Panamá y no a los Estados Unidos en demanda de cualquiera indemnización o transacción que sea necesaria.

ARTÍCULO XXII

La República de Panamá renuncia y concede a los Estados Unidos la participación a que pueda tener derecho en las futuras utilidades del Canal de acuerdo con el Artículo XV del contrato de

concesión celebrado con Lucien N. B. Wyse, del cual es dueño hoy la Compañía Nueva de Canal de Panamá, y todos los derechos o acciones de carácter pecuniario que emanen de dicha concesión o tengan relación con ella y los que se emanen de las concesiones hechas a la Compañía del Ferrocarril de Panamá o de cualesquiera extensiones o modificaciones de las misma so que con ellas se relacionen; y de igual manera renuncia, confirma y concede a los estados Unidos, ahora y para siempre todos los derechos y bienes reservados en las citadas concesiones que de otra manera el término de noventa y nueve años de las concesiones otorgadas a las personas y compañías arriba mencionadas, y todos los derechos, títulos y acciones que en la actualidad tenga o que pueda tener en lo futuro en las tierras, canal, obras, bienes y derechos que tengan las citadas compañías en virtud de dichas concesiones o de cualquiera otra manera, y adquiridas o que adquieran los Estados Unidos de la Compañía Nueva del Canal de Panamá o por su conducto, incluyendo cualesquiera bienes y derechos que pudieran volver en lo futuro al dominio de la República de Panamá, por caducidad, decomiso o cualquiera otra causa, en virtud de cualesquiera contratos o concesiones con el citado Wyse, la Compañía del Ferrocarril de Panamá y la Compañía Nueva del Canal de Panamá.

Los derechos y bienes arriba citados estarán y quedan desde ahora libres y relevados de todo interés o reclamación actual o reversionaria a que Panamá tenga derecho, y el título de los Estados Unidos sobre ellos, cuando se efectúe la proyectada compra por los Estados Unidos a la Compañía Nueva del Canal de Panamá, será absoluto, en cuanto concierne a la República de Panamá, con excepción siempre de los derechos de la República específicamente asegurados por este Tratado.

ARTÍCULO XXIII

Si en cualquier tiempo fuere necesario emplear fuerzas armadas para la seguridad y protección del Canal o de las naves que lo usen, o de los ferrocarriles y obras auxiliares, los Estados Unidos tendrán derecho, en todo tiempo y a su juicio, para usar su policía y sus fuerzas terrestres y navales y para establecer fortificaciones con ese objeto.

ARTÍCULO XXIV

Ningún cambio en el Gobierno o en las leyes y tratados de la República de Panamá afectará, sin el consentimiento de los Esta-

dos Unidos, derecho alguno de los Estados Unidos de acuerdo con esta Convención, o de acuerdo con cualesquiera estipulaciones de tratados entre los dos países que en la actualidad existan o que en lo futuro puedan existir sobre la materia de esta Convención.

Si la República de Panamá llegare a formar parte en lo futuro de algún otro Gobierno o de alguna unión o confederación de estados, de manera que amalgamare su soberanía o independencia en ese Gobierno, unión o confederación, los derechos de los Estados Unidos, según esta Convención, no serán en manera alguna menoscabados o perjudicados.

ARTÍCULO XXV

Para mejor cumplimiento de las obligaciones de esta Convención y para la eficiente protección de Canal y el mantenimiento de su neutralidad, el Gobierno de la República de Panamá venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras adecuadas y necesarias para estaciones navales o carboneras en la costa del Pacífico y en la costa occidental de la República sobre el Caribe, en ciertos lugares que serán convenidos con el Presidente de los Estados Unidos.

ARTÍCULO XXVI

Una vez firmada esta Convención por los Plenipotenciarios de las Partes Contratantes será ratificada por los respectivos Gobiernos y las ratificaciones serán canjeadas en Washington a la mayor brevedad posible.

En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios han firmado y sellado con sus respectivos sellos la presente Convención en dos ejemplares.

Hecha en la ciudad de Washington, a los 18 de Noviembre del año de Nuestro Señor mil novecientos tres.

(fdo.) *P. Bunau-Varilla — John Hay.*

EL PROBLEMA JURISDICCIONAL

5

Delimitación de la ciudad de Panamá y su bahía

TRASPASO DE LA ZONA DEL CANAL A LAS AUTORIDADES AMERICANAS Y DELIMITACIÓN PROVISIONAL DE LA MISMA RESPECTO A LAS CIUDADES DE PANAMÁ Y COLÓN

SECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES EXTERIORES

Número 947

Panamá, mayo 25 de 1904.

Señor General:

En cumplimiento de instrucciones del Excelentísimo Señor Presidente de la República, me apresuro a haceros la siguiente exposición:

El Gobierno de la República de Panamá considera que una vez canjeadas las ratificaciones del Tratado sobre apertura de un Canal Interoceánico a través del Istmo de Panamá, cesó su jurisdicción sobre la Zona y demás tierras necesarias para la obra y conservación de la misma que describe el Artículo II de ese Tratado; pero si piensa a la vez el Gobierno de los Estados Unidos de América no puede ejercer, real y efectivamente, esa misma jurisdicción sobre todos esos mismos terrenos en tanto que no se le haga entrega material de ellos, para lo cual se le impone como medida previa su delimitación. Delimitados y entregados esos terrenos en la forma que se acuerde, las jurisdicciones de ambos países quedan claramente deslindadas y prevenidos los conflictos de índole diversa que seguramente sobrevendrían si así no se procediera. Mas para no coartar la acción jurisdiccional de los Estados Unidos sobre los mencionados terrenos, el de Panamá está dispuesto a entregarlos provisionalmente, mientras se nombren los comisionados que hayan de ejecutar la delimitación para hacer la entrega

* En: Manuel B. Moreno C. *Status jurídico de los Tratados del Canal de Panamá, 1903-1963*. Ministerio de Relaciones Exteriores. Panamá. 1964; pp. 20-27.

definitiva. En consecuencia, el Gobierno de Panamá propone comisionar a los Gobernadores de las Provincias de Panamá y Colón para que el día 1 de junio entrante, por ejemplo, entreguen al representante del Gobierno de los Estados Unidos la Zona del Canal y las demás tierras que se pidieren de conformidad con lo estatuido en el Artículo II del respectivo Tratado, mediante un acta que se levantará al efecto, y que suscribirán los comisionados de una y otra parte. Y en la fecha que se acuerde cesarán en sus funciones las autoridades y los empleados públicos actualmente al servicio de la República en la zona del Canal, quienes entregarán, por riguroso inventario a los Gobernadores los archivos públicos y demás enseres de cada oficina; mientras se acuerda el destino que deba dárseles. La entrega se hará así: al Gobernador de Panamá los archivos y enseres de los Distritos de Emperador y Gorgona, y los de los Distritos de Buenavista y Gatún, al Gobernador de Colón.

Esta sucinta exposición consulta, a mi ver, los intereses de entreambos Gobiernos y por lo mismo me comprometo que ella será acogida con la atención y oportunidad que el caso demanda.

Os ofrezco las seguridades de mi mayor consideración, y me suscribo vuestro atento y seguro servidor,

TOMÁS ARIAS

Señor General George W. Davis,
Gobernador de la Zona del Canal
Ancón

.....

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y RELACIONES EXTERIORES

Circular Número 10

Panamá, 25 de mayo de 1904.

Señor Secretario:

Acompaño con la presente nota copia auténtica de la nota número 397, dirigida al Gobernador de la Zona del Canal, a fin de que una vez impuesto Su Señoría del contenido del documento se sirva dar las órdenes que estime convenientes a las autoridades y empleados de su dependencia en la Zona del Canal con el objeto de que se preparen para hacer la entrega a los Gobernadores de las respectivas Provincias de los archivos y demás enseres de la oficina a su cargo, en la fecha que se señale para traspasar al gobierno de los Estados Unidos la jurisdicción de dicha Zona.

Soy de usted atento y seguro servidor.

TOMÁS ARIAS

A Sus señorías los Secretarios
de Hacienda, Fomento e Instrucción Pública y Justicia.
Presente.

• • • • •

A. CONVENIO

(No se incluyen copias de los mapas a los cuales se hace referencia en este Convenio).

Por cuanto por los términos y estipulaciones del Artículo 2o. de la Convención sobre construcción de un Canal Interoceánico celebrada entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá, suscrita el 18 de noviembre de 1903 por los representantes de las dos Naciones, y cuyas ratificaciones fueron canjeadas en Washington el día 26 de febrero de 1904, los Estados Unidos adquirieron los derechos de uso, ocupación y perpetuo gobierno desde el mencionado día 26 de febrero de 1904 y después de dicha fecha, en y sobre la Zona del Canal y otras tierras, aguas e islas mencionadas en dicho Artículo 2o. de la supramencionada Convención, y

Por cuanto no ha sido todavía practicable y tampoco lo es ahora, el hacer una definida y exacta localización de los límites precisos de la totalidad del terreno cedido a los Estados Unidos según los términos y estipulaciones del mencionado Artículo 2o. de la dicha Convención;

Por cuanto la feliz terminación de la obra de construir el Canal interoceánico al través del Istmo de Panamá es de trascendental importancia para los Estados Unidos, la República de Panamá y para el mundo entero; y

Por cuanto para que la mencionada obra de construcción del referido Canal Interoceánico pueda ser sistemáticamente seguida, y para que el Gobierno de la Zona del Canal creado en virtud de los términos y estipulaciones del aludido Artículo 2o. de la precitada Convención sea felizmente organizado y llevado a cumplido efecto, se hace necesario que sean determinados de modo provisional y convenidos la extensión y límites del territorio cedido al Gobierno de los Estados Unidos por el de la República de Panamá:

Por tanto, el General George W. Davis, Gobernador de la Zona del Canal de Panamá, en representación y en interés del Gobierno de dicha Zona, por una parte; y Tomás Arias, Secretario de Gobierno de la República de Panamá, y Ramón Valdés López, Procurador General de dicha República, representando conjuntamente el Gobierno de la supramencionada República, y en interés de ella, por otra parte; habiendo convenido en que el Gobierno de la República de Panamá ha entregado y el Gobierno de los Estados Unidos tiene recibida y había recibido el día 19 de mayo de 1904 para su uso, ocupación y gobierno la Zona del Canal Istmico, descrita en el mencionado artículo 2o.: de la ya memorada Convención sobre construcción de un canal interoceánico, inclusive las tierras y aguas de dicha Zona, las tierras cubiertas por agua, las islas de la misma Zona, y las de Perico, Naos, Culebra y Flamenco, convienen además en lo que sigue:

ARTÍCULO 1o.— Los linderos de la «Zona del Canal», incluyendo las tierras cubiertas por las aguas e islas cedidas, pero excluyendo las ciudades y puertos de Colón y Panamá (Las cuales tierras, aguas e islas han sido entregadas por el Gobierno de Panamá y posesión de las cuales ha sido tomada por los Estados Unidos). Se encuentran indicados y visibles en el Mapa adjunto (marcado A), firmado por las partes interesadas en el presente Convenio, y lo están (con la exactitud que es dado alcanzar para determinarlos en un plano de acuerdo con los informes que actualmente se poseen sobre la topografía de la región que atraviesa el Canal) por medio de una línea roja muy pronunciada, cruzada de negro, tirada a la distancia uniforme por escala de cinco millas inglesas de cada lado de la línea central del Canal; y el supramencionado linderero o línea de división, entre el territorio cedido por la República de Panamá a los Estados Unidos con destino para el Canal y las tierras inmediatas o confinantes pertenecientes a la República de Panamá, queda aceptado provisionalmente y habrá de ser estrictamente respetado por los dos Gobiernos hasta que los límites o fronteras de dicha Zona, aguas e islas, sean marcados, fijados y determinados de modo definitivo y concluyente.

ARTÍCULO 2o.— Los linderos de la ciudad y puerto de Panamá, tales cuales ellos se encuentran indicados y marcados por medio de una línea roja muy pronunciada, cruzada de negro, en el adjunto plano (marcado B), y tales como ellos se encuentran descritos en el papel adherido al plano en referencia, las cuales dos piezas llevan las firmas de las partes interesadas en este Conve-

nio, son aceptados provisionalmente y serán respetados estrictamente por los dos gobiernos hasta que la verdadera y definitiva línea de división entre la Zona del Canal y sus aguas, por una parte, y la ciudad de Panamá y su puerto, por la otra parte, sea medida definitivamente, amojonada, fijada y determinada, siendo entendido que el límite exterior o marítimo del puerto de Panamá será, tan pronto como sea posible, convenido y marcado por medio de boyas u otras señales.

ARTÍCULO 3o.— Los límites de la ciudad y puerto de Colón, tales cuales ellos se encuentran indicados y marcados por medio de una línea roja muy pronunciada, cruzada de negro, en el adjunto plano (marcado C), y tales como ellos se encuentran descritos en el papel adherido al plano en referencia, las cuales ambas piezas llevan las firmas de las partes interesadas en este Convenio, son aceptados provisionalmente y serán respetados estrictamente por los dos Gobiernos hasta que la verdadera y definitiva línea de división entre la Zona del Canal y sus aguas, por una parte, y la ciudad de Colón y su puerto, por la otra parte, sea medida definitivamente, y amojonada, fijada y determinada.

ARTÍCULO 4o.— A medida que ocurra la necesidad, convenios especiales les serán hechos y celebrados de tiempo en tiempo por las partes aquí interesadas o sus sucesores, con relación a la delimitación de cualesquiera tierras auxiliares o de aguas que estando fuera de la Zona del Canal llegarán a ser necesarias o convenientes para la construcción, sanidad, o para la protección del Canal interoceánico o de las obras anexas del mismo.

ARTÍCULO 5o.— El Gobernador de la zona del Canal o sus sucesores pueden emplear a los panameños residentes en el territorio de la República, para lo cual el gobierno de la República les confiere el permiso de que trata el ordinal 2o. del Artículo 7o. de la Constitución Nacional.

En fe de lo cual firman en la ciudad de Panamá, hoy 15 de junio de mil novecientos cuatro.

(Fdo.) GEO. W. DAVIS
Gobernador de la Zona
del Canal

(Fdo.) TOMÁS ARIAS
Secretario de Estado
Despacho de Gobierno

(Fdo.) RAMÓN VALDÉS LÓPEZ
Procurador General de la República

B. DELIMITACIÓN
(Ciudad de Panamá y su Bahía)

ES COMO ENSEGUIDA SE EXPRESA:

Comenzando en la línea de la orilla del Océano Pacífico, a partir desde una estaca clavada en «Punta Paitilla», más arriba, de la línea que marca la alta marea; de allí en línea recta, en dirección noroeste, a otra estaca semejante clavada en la cumbre de «Cerro Pelado», el cual cerro está situado al Sur del «camino de la Sabana», y esta última estaca se encuentra a mil ochocientos (1800) metros, aproximadamente. Nordeste, del «Puente de Calidonia»; de Aquí en línea recta a una estaca semejante clavada en la cumbre del cerro «Curundú»; de aquí en línea, recta a otra estaca igual colocada en el ángulo Sureste del globo de tierra conocido bajo la denominación de la «Sección» y sobre el lado Norte del «Camino del Hospital»; de aquí en línea recta cruzando el camino que va de Panamá al «Hospital» al través de unas dehesas y campos hasta otra estaca semejante clavada en el lado Norte del camino de Panamá a «La Boca» como a setenta y cinco metros de la antigua fuente murada «Chorrillo»; de aquí, en dirección Suroeste, en línea recta al través del «Camino de la Boca», hasta un estaca clavada en la línea de marca la alta marea sobre «Punta Mala», cerca de la islilla de Gavilán.

En cada uno de los puntos marcados por las estacas de que se ha hecho mención y en cada uno de los otros puntos de partida, supramencionados con el objeto de marcar los límites en cuestión, será erigida una mojonada de mampostería de un (1) metro cuadrado de ancho por un (1) metro de altura, y en el centro de la mampostería y proyectado sobre ella como sesenta (60) centímetros, se colocará una columna de hierro o poste del mismo metal, que llevará marcadas sobre él, del lado que mire a la Zona del Canal, las letras U.S. y sobre el lado opuesto la letra P., todas estas letras tendrán seis (6) centímetros de altura, aproximadamente, y tales monumentos serán construidos tan pronto como sea posible y por cuenta de los Estados Unidos.

Firman la presente en la ciudad de Panamá.

(Fdo.) GEO. W. DAVIS
Gobernador de la Zona
del Canal

(Fdo.) TOMÁS ARIAS
Secretario de Estado
en el Despacho de Gobierno

(Fdo.) RAMÓN VALDÉS LÓPEZ
Procurador General de la República

.....

C. DELIMITACIÓN **(Ciudad de Colón y su Bahía)**

ES COMO ENSEGUIDA SE EXPRESA:

La ciudad de Colón comprende: Toda aquella parte de la isla de Manzanillo más alta que la línea de la marea baja, exceptuando la faja de tierra conquistada sobre el mar y generalmente conocida bajo la denominación de «Terraplén de Cristóbal Colón»; y el límite entre dicho «Terraplén» y la supramencionada ciudad es como sigue:

Comenzando en un punto sobre la Orilla Norte de Boca Chica, que suele ser llamado «Folks River», estando el punto expresado cincuenta (50) metros en dirección Este del centro de la línea principal de rieles del Ferrocarril de Panamá; de aquí en Dirección Norte y Noroeste, siempre paralelamente con la mencionada línea de rieles y a distancia uniforme de cincuenta (50) metros desde la referida línea hasta la línea central de la calle Bolívar (llamada a veces calle C); de aquí, siguiendo la línea central de dicha calle Bolívar hasta la línea central de la calle Once; de aquí, siguiendo la línea central de la Calle Once hasta la línea de la baja marea en la orilla del Puerto de Colón.

PUERTO DE COLÓN: Toda aquella parte de la llamada «Bahía de Limón», que se extiende en dirección Oeste de dicha ciudad de Colón, y al Norte de una línea recta tirada desde el centro del actual monumento de Cristóbal Colón, Oeste franco, a la orilla occidental de la Bahía de Limón; sin embargo, por el presente se declara que forma parte de la Zona del Canal y que corresponde a la exclusiva jurisdicción y Gobierno de los Estados Unidos el Canal que sirve de entrada al Canal de Panamá, al través de dicho puerto de Colón, hasta su límite Sur del mismo Puerto y en una anchura de trescientos treinta (330) metros de cada lado de la línea central o eje de dicho canal de entrada, ya sea que este canal cruce el mismo puerto, ahora o más tarde; los límites de dicho canal al través del puerto mencionado serán convenientemente marcados por medio de boyas o de otro modo; y siendo además entendido que el «Terraplén» mencionado, entre el memorado monumento de Cristóbal Colón hasta la línea central de la supramencionada calle once, se extiende hasta la línea de baja marea.

Quedan excluidos de los límites de la ciudad y de su puerto el Faro que actualmente existe en la isla de Manzanillo y toda la

tierra inmediata a treinta (30) metros distantes del mismo, todo lo cual queda comprendido dentro de la Zona del Canal.

Firman el presente en la ciudad de Panamá.

(Fdo.) GEO. W. DAVIS
Gobernador de la Zona
del Canal

(Fdo.) TOMÁS ARIAS
Secretario de Estado en el
Despacho de Gobierno

(Fdo.) RAMÓN VALDÉS LÓPEZ,
Procurador General de la República

• • • • •

La Convención de Límites de 1914 se consideró definitiva, pero fue afectada posteriormente por el Artículo I de la Convención sobre el Corredor de Colón... de 1950 y por el Artículo VI del Tratado de Mutuo Entendimiento y Cooperación de 1955.

CARENCIA DE UNIDAD



6

Nota de Tomás Arias*

(16 de junio de 1904)

NOTAS CURSADAS

Secretaría de Gobierno y Relaciones Exteriores

Circular Número 11

Panamá, 16 de junio de 1904.

Señor:

Tengo el honor de llevar a conocimiento de su Señoría para los fines a que haya lugar, que según convenio firmado ayer entre el suscrito y el Procurador General de la Nación, por una parte, y el señor General George W. Davis, Gobernador de la Zona del Canal de Panamá, por la otra las autoridades y empleados públicos establecidos en dicha Zona cesan desde hoy en el ejercicio de sus funciones como miembros del Gobierno de la República de Panamá, por cuanto los Distritos de la Línea férrea donde ellos funcionan quedan segregados del territorio nacional. Próximamente se publicarán todos los documentos relacionados con este asunto.

De su Señoría con toda consideración, muy atento y seguro servidor,

Tomás Arias

Dirigida a los Secretarios de Hacienda, Fomento e Instrucción Pública y Justicia; al Tesorero General de la República y al Comandante del Cuerpo de Policía Nacional.
Presente.

* *Op. cit.*, pp. 25-29.

Nota de Nicolás Victoria***(26 de agosto de 1904)****Secretaría de Instrucción Pública y Justicia**

Sección de Justicia

Circular Número 694

Panamá, agosto 26 de 1904.

Senor Secretario de Gobierno
y Relaciones Exteriores

Acuso a Su Señoría recibo de sus notas números 202 y 72, fechadas el 20 y 17 de los corrientes; la última remisoría de copia de la que ese Despacho pasó a su Excelencia John Barrett, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de América; ambas comunicaciones concernientes a un mismo asunto; si las autoridades de la República tienen o no jurisdicción para conocer de los delitos comunes cometidos en la Zona por los sindicados Víctor Guillot, Etienne Lamour y Raimundo Lizana, antes de perfeccionarse la cesión.

Para corresponder, además, a la excitación con que Su Señoría me honra acerca del punto en cuestión, como supremo inspector del Ramo de Justicia, lo hago del modo siguiente:

Al emitir opinión sobre el particular, siento no estar de acuerdo con el ilustrado criterio de Su Señoría, pero en homenaje a Mi conciencia, no temo apartarme de él.

Deseando ser claro y conciso en mi concepto, reduciré la cuestión a dos puntos concretos: 1o.- Soberanía del Gobierno de Panamá en la Zona antes de perfeccionarse la cesión; y 2o.- Jurisdicción del mismo sobre los hechos criminosos cometidos en dicha Zona por los señores Guillot, Lizana y Lamour.

Eminentes expositores de Derecho Internacional como Fiore y Bluntschli establecen que la soberanía, como uno de los princi-

* *Op. cit.*, pp. 28-29.

pios fundamentales y constitutivos del Estado es inalienable; la universalidad de este principio es de tal fuerza que, aún en el mismo tratado sobre Canal, el Gobierno de los Estados Unidos, lo reconoció en su letra y dejó a salvo la soberanía de la República sobre dicha Zona. Siendo esto así, la cuestión de si las autoridades panameñas son competentes para conocer de los mencionados delitos, es un punto que queda resuelto probada la existencia de la soberanía de Panamá en la Zona del Canal; máxime, cuando las autoridades de esta República habían aprehendido el conocimiento de los delitos perpetrados por Guillot, Lamour y Lizana; procedimiento correcto en mi sentir por conformarse con la Teoría de la Territorialidad de la Ley, con las razones de lugar y por tratarse de dichas personas.

Si no fuera así sería ilusoria la soberanía del Estado, y se cometería, la injusticia de hacer de mejor condición los extranjeros que los nacionales.

Aún cuando los hechos del Gobierno de los Estados Unidos demuestran lo contrario, no debe olvidarse que, para que éstos constituyan derecho debe ser la expresión de un principio, de una Ley, o de una costumbre autorizada por aquél o ésta.

Respecto de si los presos deben ser puestos en libertad, opino como su Señoría que la mutua asistencia de una y otra entidad lo prohíben, y que semejante proceder envolvería una amenaza para la seguridad social.

Soy de Su Señoría con la mayor consideración, muy atento servidor.

Nicolás Victoria J.



8
Nota de Tomás Arias*
(29 de septiembre de 1904)

Secretaría de Gobierno y Relaciones Exteriores

Número 333 IV

Panamá, septiembre 29 de 1904.

Señor Secretario:

No hace sino cinco días que el cortés oficio de su Señoría, número 694, de 26 de agosto anterior, fue puesto en mi Despacho. El Jefe de la Sección de Relaciones Exteriores no había cumplido con este deber por descuido involuntario.

Principiaré por manifestar a Su Señoría que el concepto que emití en mi nota Número 202, del 20 del mismo mes, no tuvo móvil ilustrativo alguno; fue un parecer aislado mío que emití salvando el muy autorizado de Su Señoría el mismo que ha servido emitir en su cortés oficio citado, pero que acaso no haya sido comunicado a los Jueces por cuanto ellos siguen enviando por conducto de esta Secretaría diligencias en asuntos criminales para la Zona del Canal. Las más recientes son procedentes del Juzgado Superior, salvo que los Jueces panameños persistan en la idea, que también es la mía, de que los Jueces de la Zona del Canal son los Jueces naturales de los que delinquieron y delincan en aquel territorio.

Para combatir este parecer mío, acordé con el de los Jueces panameños, dice Su Señoría que es principio universal que la soberanía es inalienable, y se apoya para ello en autoridades como Fiore y Blunstchli.

Permítame Su Señoría que observe a este respecto que sólo es inalienable la soberanía individual, por ser la personalidad misma del ser humano, y enajenarla valdría tanto como enajenarse uno a sí mismo; sería la esclavitud política, repudiada por el derecho

* *Op. cit.*, pp. 30-32.

público y la moral universal. Así lo observa Tregui, expositor moderno de Ciencia Constitucional.

La soberanía nacional, a la cual se refiere Su Señoría, es o no inalienable según el Derecho positivo de cada Estado, y de ahí que el principio invocado por Su Señoría no pueda ser universal.

La Constitución Colombiana del 63, prohibió expresamente la enajenación de parte alguna del territorio de los Estados; la del 86 guardó silencio sobre esta materia, pero tal omisión la subsanó el Consejo de Delegatorios al disponer en la ley 2A. de ese mismo año, que la propiedad raíz no era transferible a Gobiernos Extranjeros, y sabido es que esa fue una de las causas determinativas del vade retro del Tratado Herrán-Hay.

Erigió el Istmo de Panamá en entidad internacional, el Gobierno Provisorio aprobó el Tratado Varilla-Hay, que concede a la Unión Americana una faja de territorio nacional para la apertura de un canal marítimo y su conservación, y la ley fundamental del nuevo Estado ratificó expresamente ese tratado, y dijo que no es transferible en la República la propiedad raíz a Gobiernos Extranjeros, salvo lo estipulado en Tratados Públicos (Artículos 145 y 118).

Como se ve, pues, el Derecho positivo panameño sí permite la enajenación de la soberanía; y que las Constituciones de otros muchos países la permiten también, lo prueba el sinnúmero de cesiones territoriales voluntarias que citan todos los tratadistas de Derecho Internacional, inclusive Fiore y Blunstchli. Casos hay además en que el soberano, aún sin facultad preexistente, puede enajenar los bienes públicos cuando una necesidad imperiosa lo demande en beneficio de la salud del Estado, porque la salvación de éste es la suprema Ley.

Ahora, que Panamá conserva su soberanía sobre la Zona del Canal, porque se la reconoce el Tratado en su letra y espíritu, es cosa que a la verdad no la veo clara. El Artículo LV del Tratado Herrán-Hay, reconoció expresamente el derecho de la soberanía de Colombia sobre la faja de territorio en alusión; pero examinado ese Tratado en sus demás detalles y en su conjunto resultaba baldía la estipulación IV. El Doctor Arosemena, que con tanta brillantez defendió ese Tratado, no pudo prescindir de confesar honradamente, que sí mermaba la soberanía nacional.

En el Tratado Varilla-Hay no veo el reconocimiento de la soberanía de que Su Señoría se sirve hacer mención, porque si en algunas cláusulas parece que se reconociera tácitamente, en otras se observa que se desconoce por completo. El Tratado es deforme

y no puede tomarse como sabe de criterio para llegar a una solución precisa. Justamente por eso el Ministro Obaldía, en la exposición que presentó al Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, y el Doctor Arosemena, en artículo publicado no ha muchos días, opinaron que procedía la celebración de un pacto adicional aclaratorio del Tratado, a fin de determinar con certidumbre los deberes y derechos de cada parte contratante.

En lo que sí parece que no hay duda y así lo he creído siempre, y así lo creen los señores Obaldía y Arosemena, es en la facultad que tienen los Estados Unidos de administrar justicia en la Zona del Canal, facultad que denomina el derecho público jurisdiccional, y no puede ejercer jurisdicción quien no posea la soberanía, porque no puede existir una cosa sin la otra. La soberanía genera la jurisdicción y la jurisdicción emana inmediatamente de la soberanía. De ahí pues, la opinión que emití en nota número 202 de 20 de agosto, en el sentido de que Panamá había cedido su soberanía en esa materia a los Estados Unidos; que según Fiore la cesión equivale a la substitución de una soberanía por otra; y que siendo eso así me parecería indudable que los Jueces de la Zona del Canal eran los Jueces naturales de los que, aún antes de perfeccionarse la cesión, hubiesen delinquido en aquel territorio.

Mas si lo expuesto no alcanzare a robustecer mi opinión, ahí está la parte final de la nota de Su Señoría que me inhibe de mayores esfuerzos en ese sentido, por cuanto en ella se reconoce expresamente el deber de la mutua asistencia de los Estados, que tiene por objeto coadyuvar la acción de la justicia que cada entidad internacional administra por derecho propio y con entera independencia.

Coinciden, pues, nuestras opiniones en el fondo del asunto, y esto me satisface plenamente.

De Su Señoría con la mayor consideración.

Muy atento y seguro servidor,

Tomás Arias

A Su Señoría el Secretario de Estado
en el Despacho de Instrucción Pública y Justicia
E.S.D.

Nota de José D. de Obaldía*



De J.D. OBALDÍA,
Ministro de Panamá en Washington
a John Hay,
Secretario de Estado de los Estados Unidos.

LEGACIÓN DE PANAMÁ

Washington, Agosto 11 de 1904.

Excelencia:

He recibido instrucciones de mi Gobierno para hacer ante el ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia las gestiones conducentes a obtener una solución satisfactoria de las dificultades que inesperadamente han surgido entre las autoridades de la República y el Señor Gobernador de la Zona del Canal, con motivo de la interpretación que éste último le ha dado a algunas de las cláusulas del convenio sobre Canal Ístmico celebrado entre los dos países el día 18 de noviembre último.

Varios son los puntos en que tal discrepancia ha ocurrido y es indispensable desde luego hacer apreciaciones generales sobre el convenio en su conjunto, para poder aplicar en cada caso la interpretación más conforme con la armonía entre sus diversas cláusulas, más en consonancia con declaraciones anteriores hechas por el ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia, y más convenientes para mantener la cordialidad que entre los dos países ha existido desde que el mío entró a formar parte de la familia de las naciones.

Como antecedente imprescindible de la convención Varilla-Hay es necesario tener presente el tratado Hay-Herrán, celebrado el 22 de enero de 1903, aprobado por el Senado de los Estados Unidos y rechazado por el de la República de Colombia.

* Secretaría de Gobierno y Relaciones Exteriores. MEMORIA. Panamá, 1907; pp. 227-235.

Ambos tratados fueron celebrados con el mismo objeto principal: facilitar a los Estados Unidos la construcción de un Canal para naves entre los mares Atlántico y Pacífico. Ni en uno ni en otro caso fue el pensamiento de las altas partes contratantes celebrar un convenio de cesión de territorio ni de renuncia absoluta de soberanía por parte de algunas de ellas. El ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia, para poner en claro ante el mundo y muy especialmente ante las naciones de Centro y Sur América el objeto real de las negociaciones que dieron por resultado la celebración del Tratado Hay-Herrán, hizo en éste la declaración formal y categórica contenida en el artículo IV que dice así:

«Los derechos y privilegios concedidos a los Estados Unidos por los términos de esta Convención no afectarán la soberanía de la República de Colombia sobre el territorio dentro de cuyos límites habrán de ejercerse tales derechos y privilegios. El Gobierno de los Estados Unidos reconoce en un todo esta soberanía y rechaza toda pretensión de menoscabarla de manera cualquiera o de aumentar su territorio a expensas de Colombia o de cualquiera de las Repúblicas hermanas de Centro y Sur América; pues desea por el contrario robustecer el poder de las Repúblicas de este Continente y promover y desarrollar y conservar su prosperidad e independencia.»

Esa declaración solemne, hecha en documento público del más elevado carácter cual es un tratado entre naciones, envuelve en concepto de mi Gobierno la promesa perpetua de una línea de conducta generosa y noble por parte de los Estados Unidos, promesa que no ha quedado destruida por el hecho de no existir el Tratado Hay-Herrán, pues la declaración en que está incorporada expresa el propósito de seguir una política franca y leal, aceptada y confirmada después por el Senado de los Estados Unidos que es la más alta corporación legislativa de este país. Esa declaración, como Vuestra Excelencia sabe, tuvo pro objeto hacer desaparecer el temor que en las Repúblicas Americanas existe de una absorción más o menos remota por parte de esta Nación tan poderosa en todos sentidos; y ella influyó de modo decisivo en el Gobierno de mi país para aprobar sin reservas y sin modificaciones la Convención Varilla-Hay.

Considerando mi Gobierno que esa declaración tan solemne

como espontánea tiene el carácter de perpetua y definitiva, confía en que el ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia interpretará el convenio sobre el Canal Ístmico del modo más armónico y consecuente con ella, y en esa convicción paso a exponer a Vuestra Excelencia otras observaciones más específicas.

I

El Convenio sobre el Canal Ístmico no importa cesión del territorio ni traspaso absoluto de soberanía.

La simple lectura del artículo IV del Tratado Hay-Herrán que es antecedente de inapreciable valor, pues en él se expresa la intención de los Estados Unidos al negociar con Colombia, es suficiente para establecer la verdad de la proposición que acabo de enunciar; pero hay además, para sustentarla, poderosas razones deducidas del Convenio Varilla-Hay que en la mayor parte de sus cláusulas es idéntico al Hay-Herrán. En efecto, como antes he tenido el honor de observar a Vuestra Excelencia en esta misma nota, ambos convenios versan sobre la concesión a los Estados Unidos del uso, ocupación y control de ciertas tierras y aguas para facilitar la construcción, conservación, explotación, sanidad y protección de un canal marítimo entre el Atlántico y Pacífico. Este es el pensamiento principal y dominante en ambos actos, en ninguno de ellos se ha usado expresión alguna que implique el traspaso o dominio absoluto sobre el territorio, ni mucho menos la transferencia de la soberanía.

Esa concesión podría haber sido hecha por Colombia antes del 3 de Noviembre de 1903, y por la República de Panamá después de esa fecha, a cualquiera Compañía o asociación legal, sin que por el hecho de su otorgamiento pudiera pretenderse derecho al pleno dominio sobre la faja de terreno en que la obra iba a ejecutarse, ni mucho menos al ejercicio de una soberanía absoluta.

La relación jurídica en ese supuesto, lo mismo que en el presente caso, sería la que existe entre un arrendador y un arrendatario. Únicamente por ser el arrendatario otra República puede haber confusión respecto del carácter y de la esencia de las relaciones contractuales creadas por el Convenio.

Si la intención de las altas partes contratantes hubiera sido en uno o en otro de los dos casos a que me he venido refiriendo, la cesión absoluta del dominio y de la soberanía sobre el territorio, ambos tratados podrían haberse reducido a dos artículos, uno en

que se especificara la cosa vendida, y otro en que se expresara el precio de la venta; pero comprendiendo ambas partes que ése no era el caso, y penetradas de que otra era la intención, viéronse obligadas a fijar en lo posible las relaciones entre el arrendador y el arrendatario teniendo en cuenta las circunstancias peculiares de aquella negociación trascendental y las necesidades podrían surgir por la naturaleza misma de la obra que se iba a emprender.

Así por ejemplo, tratándose de una empresa de indiscutible conveniencia, en la que van a invertirse considerables sumas del tesoro federal de los Estados Unidos, y con motivo de la cual pueden surgir controversias diarias en razón de los trabajos, ¿hubiera sido cuerdo por parte de Colombia, primero, y de Panamá, después, exigir la posesión de una jurisdicción absoluta sobre todas esas cuestiones y pretender el poder exclusivo de fallarlas y decidir las cuando una de las partes era una nación extraña?

Era natural pues que alguna provisión se estableciera a ese respecto, y de allí seguramente nació el pensamiento de conferir a los Estados Unidos la facultad de establecer un Poder Judicial restringido en la Zona.

En el tratado Varilla-Hay esa concesión fue más amplia que en el tratado Hay-Herrán; pero tampoco es absoluta.

El artículo III del tratado Varilla-Hay, único en que se trata de derechos de soberanía, establece que los Estados Unidos poseerían y ejercerían los derechos, poder y autoridad que la República de Panamá les concedió sobre la Zona, como si ellos fueran soberanos en el territorio, pero esa expresión lleva implícita la idea de que no lo son, y aunque en la parte final del artículo se agrega "con entera exclusión del ejercicio por la República de Panamá de tales derechos soberanos, poder y autoridad", tales palabras, que se encuentran en evidente contradicción con las que preceden, deben ser interpretadas de acuerdo con otros artículos posteriores del convenio, que demuestran la intención real de los contratantes.

En el artículo VI por ejemplo, se trata de los derechos de propiedad de particulares en la Zona, y se ha convenido que todo daño causado con motivo de las concesiones hechas a los Estados Unidos o por razón de la construcción, conservación, explotación, sanidad y protección del Canal y de sus obras auxiliares, sean investigadas, apreciadas y decididas por una comisión mixta nombrada por los dos países, y cuyas decisiones serán finales. Si los Estados Unidos poseyeran la soberanía sobre la Zona con exclusión absoluta de la República de Panamá esta cláusula sería inexplicable.

Por el artículo X de la República de Panamá se obliga a no imponer ni a permitir que se impongan contribuciones o impuestos de ningún género, ya sean nacionales, departamentales o municipales, sobre el Canal mismo o sobre el ferrocarril y obras auxiliares o sobre sus remolcadores y buques, como tampoco sobre los empleados, obreros y otros individuos al servicio del Canal, del ferrocarril y de las obras auxiliares, pero de esa estipulación se deduce que sí conserva la facultad de imponer esas contribuciones sobre las propiedades y personas no comprendidas en la excepción.

Según el artículo XII la República de Panamá está obligada a permitir la inmigración y el libre acceso a las tierras y talleres del Canal y de sus obras auxiliares de todos los empleados y obreros de cualesquiera nacionalidad que lleguen contratados ya, o en busca de trabajo, y se obliga a considerarlos como exentos del servicio militar.

De conformidad con el artículo XIII los Estados Unidos pueden importar a la Zona, a las tierras auxiliares del Canal, libres de derechos por parte de la República de Panamá, toda clase de naves, dragas, máquinas, etc., etc., necesarias y convenientes para la construcción, explotación, sanidad y protección del Canal, y de todo lo necesario para los obreros, empleados y sus familias. Cabe observar de este artículo lo mismo que he observado sobre el artículo X.

Y por último, fue convenido entre las partes según el artículo XXIII que los Estados Unidos disfrutarán del derecho de emplear para la protección del ferrocarril, del Canal y de sus obras auxiliares sus propias fuerzas de mar y tierra y podrían construir fortificaciones con este objeto.

Como se deduce de esas estipulaciones, contenidas en cláusulas anteriores el Artículo III y todas en términos claros, precisos y perentorios, la República de Panamá conserva aun parte del Poder Judicial de la Zona del Canal; se ha comprometido a permitir la entrada a la Zona del Canal de ciertos inmigrantes, lo cual implica que si la cláusula no existiera, ella podía impedirlo; se ha obligado a no poner contribuciones al Canal ni a sus obras auxiliares, etc., etc., lo cual demuestra que si no fuera por la renuncia especial contenida en el artículo conservaría su derecho soberano para imponerlas; ha convenido en admitir la introducción a la Zona, libres de derecho de importación, los artículos necesarios para el Canal, las obras auxiliares y los empleados en ellas, obligación

que no puede contraer sino quien tiene la facultad y el derecho de poner tales gravámenes; y por último ha autorizado a los Estados Unidos para usar sus fuerzas de mar y tierra en el caso de que fuesen indispensables para la protección del Canal, lo cual necesariamente supone que si esta cláusula no existiera, los Estados Unidos no tendrían tal facultad.

Ninguna de las estipulaciones que he enumerado tendría razón de ser si la República de Panamá hubiera renunciando al dominio de la zona y a sus derechos de soberanía en absoluto; pero su intención no fue nunca renunciar a esos derechos ni los Estados Unidos han tenido el propósito de adquirirlos, pues ellos muy al contrario han declarado que no pretenden aumentar un territorio a expensas de Colombia ni de ninguna otra República de Centro o Sud América, y nada hay que justifique la más remota sospecha de que tal declaración no es sincera.

En los tratados públicos no puede admitirse la existencia de cláusulas inútiles ni contradictorias; las que aparecen como inútiles deben ser interpretadas de modo que produzcan algún efecto; y las que son contradictorias deben interpretarse teniendo en cuenta el tenor de las últimas, porque es de suponerse como dice Woolsey, que ellas expresan la última idea o pensamiento de las partes.

Si existiera alguna contradicción entre las cláusulas sobre las cuales acabo de llamar la atención de Vuestra Excelencia y la III del Convenio Varilla, es claro que las últimas deben prevalecer porque son más específicas y más claras, y porque están más conformes que aquella con las demás cláusulas del mismo convenio y con la política externa de los Estados Unidos en relación con las naciones sur y centro americanas.

Mi Gobierno estima que el pensamiento de las partes contratantes está obscuro en todo cuanto se refiere a estas delicadas cuestiones del dominio y de la soberanía, pero después de un estudio cuidadoso puede llegarse a la conclusión de que los dos países ejercen conjuntamente la soberanía sobre el territorio de la Zona del Canal y que en los casos expresamente especificados en el Convenio Varilla-Hay el uso de tal derecho le corresponde a los Estados Unidos en virtud de delegación de la República de Panamá; pero en todo aquello en que el convenio guarda silencio, los derechos de la República permanecen inalterables y completos.

Tal situación que daría lugar a constantes conflictos si se prolongara, requiere la celebración de un convenio aclaratorio, discutido por las partes con el espíritu conciliador que ha prevalecido

hasta ahora en las relaciones de los dos países y a ello está dispuesto el Gobierno mío.

Pasando ahora a las cuestiones especiales que se han suscitado, permítame Vuestra Excelencia que las trate separadamente.

II PUERTOS

En la Zona del Canal tal como está descrita en el artículo II de Convenio Varilla-Hay no se comprenden las ciudades de Panamá y Colón ni sus puertos adyacentes, las unas y los otros han sido expresamente excluidos de dicha Zona, y por consiguiente, aún aceptando por concesión el supuesto de que los Estados Unidos poseyeran el derecho de soberanía sobre ella, tal derecho no podría extenderse a lo que por el mismo convenio se considera excluido de su jurisdicción.

Restaría en relación con este asunto considerar dos cosas:

- 1º Si los Estados Unidos tienen facultad según el Convenio Varilla-Hay para habilitar como puertos propios de ellos cualquier lugar comprendido dentro de la zona, y abrirlos al comercio del mundo aún con detrimento de los intereses de la República de Panamá.
- 2º Si en el supuesto de existir esa facultad, los Estados Unidos pueden extenderla hasta declarar puerto propio de ellos y sometido a su jurisdicción cualquiera, o parte de cualquiera de los que actualmente existen pertenecientes a la República de Panamá, aun incluyendo los mismos exceptuados por el Artículo II del convenio.

Desde luego es de rigor observar que el establecimiento de un puerto y su habilitación para el comercio del mundo, es una facultad inherente al soberano del territorio, y como ya he demostrado en la primera parte de esta nota, que los Estados Unidos no disfrutaban de la soberanía absoluta de la Zona, sino de los derechos especiales concedidos por el Convenio Varilla-Hay, es claro que no reside en los Estados Unidos tal facultad.

En precisión sin duda de la necesidad que los Estados Unidos pudieran llegar a tener de puertos durante la época de la construcción del Canal y después de estar éste al servicio del comercio, la República de Panamá convino en conceder a los Estados Unidos, según se ve en la parte final del artículo IX, el derecho de usar los puertos y ciudades de Panamá y Colón como lugares de anclaje, de

reparación de naves, de carga, descarga, depósito y trasbordo de cargamentos, ya en tránsito, ya con destino al servicio del Canal.

Los puertos de Panamá y Colón son por la naturaleza del terreno de las entradas mismas del Canal. Siendo así, la idea de otros puertos para el mismo uso o destino no debió presentarse a la consideración de los negociadores; y como por el Convenio, los Estados Unidos tienen derecho a usarlos, reconociéndose como pertenecientes a la República de Panamá, es claro que no están facultados para declararlos como puertos propios y sujetos a su jurisdicción exclusiva. Obvio es que tampoco pueden los Estados Unidos según el convenio declarar que una porción mayor o menor de esos puertos, está bajo su autoridad, sólo porque se emplee la ficción de un nombre diverso, como puerto Ancón o puerto Cristóbal.

El puerto de Panamá es uno sólo, que comprende todas las costas que rodean a la ciudad, las islas cercanas, y todas las aguas que bañan esa porción del territorio nacional. A ese puerto en toda su amplitud se refiere el artículo II del Convenio Varilla-Hay, y dentro de sus límites queda comprendido el lugar que se conoce con el nombre de La Boca. Como parte del puerto de Panamá, La Boca queda excluida de la Zona del Canal, pero la misma circunstancia, ese lugar puede ser usado por los Estados Unidos para cargar, descargar, depositar y trasbordar cargamentos en virtud del derecho que se les ha otorgado para ello.

Lo mismo acontece con el puerto de Colón. El lugar llamado Cristóbal no es sino un barrio de la ciudad, allí no hay nada que pueda considerarse, ni abusando de las palabras, como un puerto distinto, y por consiguiente todo él está bajo la jurisdicción exclusiva de la República de Panamá, pero los estados Unidos tienen el derecho de usarlo como lo estipula el tantas veces mencionado artículo IX del Convenio.

Si al uso de ese derecho se hubieran limitado las autoridades de la Zona su posición sería inobjetable y mi Gobierno habría cumplido con el mayor empeño las obligaciones que le incumben, pero las cosas han ocurrido de diverso modo. El señor General G. E. Davis ha dictado una disposición, sin duda de carácter legislativo, por la cual convierte en puertos de la Zona los lugares de La Boca en Panamá y de Cristóbal en Colón, los declara abiertos al comercio universal y sometidos a su jurisdicción exclusiva con prescindencia absoluta de la República de Panamá, y sin tener en cuenta la cláusula que excluye de la zona a las ciudades de Panamá y Colón junto con sus puertos adyacentes.

Mi Gobierno no puede aceptar tal situación por considerarla contraria al espíritu y a la letra del Convenio Varilla-Hay y tiene la convicción de que el procedimiento adoptado por las autoridades de la Zona no ha obedecido a instrucciones que recaigan precisamente sobre el punto que ha originado esta penosa controversia, sino que ha tenido origen en sugerencias locales.

III ADUANAS

También ha dispuesto el señor General Davis en su carácter de autoridad superior de la Zona del Canal al establecimiento de aduanas en los mismos lugares que ha habilitado como puertos, y ha puesto en vigor la tarifa de importación que actualmente rige en esta República.

No hay ninguna cláusula de la Convención Varilla-Hay que permita a los Estados Unidos el establecimiento de aduanas en los puertos de Panamá y Colón, ni el cobro de derechos de importación en ningún lugar de la Zona del Canal. Tal facultad, lo mismo que la referente a los puertos, reside en el soberano territorio y los Estados Unidos no poseen la soberanía que podría darles derecho al establecimiento de un sistema fiscal propio.

La parte de sus derechos de soberanía que la República de Panamá ha concedido en uso a los Estados Unidos por consideraciones de orden elevado, se ha referido a todo lo necesario y convenientes para dar al Canal eficaz protección en paz o en guerra, para mantenerlo libre y abierto al comercio universal, y para impedir su uso indebido por una potencia extranjera. También ha concedido la República de Panamá el uso de sus derechos para establecer una administración pública que mantenga el orden interno de la Zona de Canal a efecto de que los trabajos no se interrumpan y el servicio no sufra cuando el Canal esté concluido; pero no ha sido el pensamiento de ninguna de las partes que los Estados Unidos conviertan la Zona del Canal en fuente de recursos fiscales, estableciendo altas tarifas aduaneras aun en contra de la República de Panamá que es la dueña del territorio y quien aun posee sobre éste derecho que no ha renunciado.

Muy al contrario de eso, en varios artículos del Convenio Varilla-Hay se encuentra consignada la voluntad de las partes en el sentido de que la Zona del Canal fuera un territorio enteramente abierto y libre al comercio, y en ese concepto la República de Pa-

namá contrajo obligaciones que de otro modo no se explicarían.

El artículo IX del convenio consagra el principio de la franquicia de las entradas del Canal y de las ciudades de Panamá y Colón (ciudades y entradas que son las mismas como antes h e dicho) a efecto de que ni en una ni en otra se exigieran derechos de peaje, tonelaje, anclaje, faro, muelle, etc., etc., sobre las naves que pasaran el Canal, con excepción de los derechos que los Estados Unidos impusieran por el uso del Canal y otras obras, o que la República de Panamá estableciera sobre las mercaderías destinadas al consumo del resto de la República.

Si a esa estipulación se agrega la contenida en el artículo XIII en virtud de la cual la República de Panamá permite a los Estados Unidos la introducción a la Zona, libre de impuestos de aduana y de cualesquiera otros, de todo lo necesario para la construcción, servicio, explotación, sanidad y protección del Canal y de sus obras auxiliares, es evidente, que los Estados Unidos antes de obtener la aceptación de esa cláusula, no se consideraban con derecho para introducir a la Zona sus propias máquinas, materiales, provisiones, etc., etc., sin pagar a la República de Panamá los impuestos establecidos, y si tal es el caso, mucho más claro es que no pueden establecer una tarifa propia que en definitiva viene a ser contra la República de Panamá y especialmente contra sus principales ciudades.

Interpretando esas cláusulas de modo que se armonicen unas con otras puede llegarse a la conclusión de que si alguna tarifa de aduanas puede establecerse en los puertos de Panamá y Colón, o sean las entradas del canal sobre la importación de artículos comerciales destinados a ser usados o consumidos en la Zona, tal tarifa le corresponde la República de Panamá y no a los Estados Unidos, pues ella solo se ha obligado por el artículo XIII del Convenio a permitir que los Estados Unidos importen "en cualquier tiempo a dicha zona y obras auxiliares, libres de derechos de aduana, impuestos, contribuciones y gravámenes de toda clase y si n ninguna restricción toda clase de naves, dragas, máquinas, carros, maquinarias, instrumentos, explosivos, materiales, abastos y otros artículos necesarios y convenientes para la construcción, conservación, servicio sanidad y protección del canal y de sus obras auxiliares y todas las provisiones, medicinas, vestidos, abastos y otras cosas necesarias y convenientes para los oficiales, empleados, obreros y jornaleros al servicio o en el empleo de los Estados Unidos y para sus familias", de modo que, toda introducción hecha a la Zona, de mercadería o efectos no comprendidos en la excepción

que el artículo establece en términos claros y categóricos, es decir, toda introducción que no sea hecha por los Estados Unidos sino por particulares no empleados en el canal puede ser gravada por la República de Panamá.

Esa es la interpretación más conforme con el carácter general de la Convención sobre Canal Istmico, pues no debe perderse de vista que el objeto de ella no es ceder por una parte ni adquirir por otra, extensiones territoriales ni recursos fiscales o rentísticos, el fin contemplado es la construcción de un Canal y todo cuanto se estipula en el convenio tiene por objeto facilitar esa construcción, no entorpecerla.

IV CORREOS

En la Zona del Canal se han establecido oficinas de correo y se usan en ellas para el exterior, estampillas de valores diversos a los que actualmente usa la República de Panamá. Como los valores de esas estampillas son menores en la Zona, y no se ha puesto ninguna restricción en su venta, el público ocurre a comprarlas y a portear allá su correspondencia ocasionándole a la República un quebranto muy considerable en esa renta nacional.

Mi Gobierno considera que los Estados Unidos pueden tener un servicio doméstico de correos dentro de la Zona, pero no pueden despachar correos para el exterior del país, pues tal derecho le corresponde a la República de Panamá.

Hechas las observaciones que anteceden en las cuales me he esforzado en presentar la cuestión por su lado jurídico ciñéndome a las cláusulas del convenio Varilla-Hay, creo oportuno exponer al ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia, otras fases del asunto que son o menos dignas de consideración.

Aún suponiendo que el Convenio Varilla-Hay pudiera interpretarse en el sentido de conceder a los Estados Unidos el derecho de establecer puertos, aduanas y correos en la Zona del Canal, aun dando por claro y detenidamente reconocido en favor de los Estados Unidos el derecho absoluto al dominio y a la soberanía sobre el territorio, si el ejercicio de esos derechos redundara en daño grave e irreparable para la República de Panamá, y produjera un estado de ruina comercial y económico que las partes no tuvieran en mira ocasionar, pues nadie contrata para hacerse a sabiendas un perjuicio incalculable y sin remedio, debería ser mo-

tivo de grave meditación para el Gobierno de Vuestra Excelencia y para este país donde prevalecen un profundo espíritu de justicia y un elevado sentimiento de equidad, el poner en vigor medidas como las de que me ocupo, que producirían aquellos resultados y que darían golpe de muerte a mi país, sin producir ningún beneficio para los Estados Unidos.

Bien sé que el sentimiento no debe entrar para nada en negociaciones de este género; pero aun viendo el asunto por el lado de las conveniencias más egoístas ¿qué interés puede tener los Estados Unidos en que la República de Panamá se arruine económicamente, en que su posición financiera sea insostenible por la desaparición de sus recursos fiscales, y que al fin se vea incapacitada de cumplir ante el mundo las obligaciones inherentes a una nación libre y soberana? ¿No está por el contrario en el interés de los Estados Unidos propender al desarrollo de la República de Panamá y contribuir a su prosperidad y engrandecimiento?

Si las disposiciones dictadas sobre puertos, aduanas y correos continuaran en vigor, las ciudades principales de la República de Panamá perderían la importancia que siempre han tenido como lugares de tránsito y todo el comercio se desviaría a ellas para centralizarse en los puntos que los Estados Unidos escogieran para ello, en forma de puertos. Las rentas que por tal motivo percibe hoy la República y las que de modo indirecto recibe por el tráfico, desaparecerían por completo. Hoy mismo sucede ya que las compañías de vapores del Pacífico no quieren despachar sus naves sino por el llamado puerto Ancón, y se niegan a recibir carga para el puerto de Panamá, de modo que, si las cosas siguen así, las ciudades dichas quedarán pronto convertidas en lugares inhabilitados, aislados de todo contacto comercial directo con el mundo, es decir quedarían en condición inferior a la que tenían antes de celebrarse el contrato en que cifraban las esperanzas de su mejoramiento y progreso.

Si en la Zona del Canal siguiera en vigor la tarifa establecida contra toda introducción de mercancías que no proceda de los Estados Unidos, la industria del comercio que hasta ahora ha florecido, desaparecería por completo, o quedaría reducida, acaso, a la importación de lo necesario para los empobrecidos pueblos del interior de la República. En efecto los artefactos americanos llegarían a nuestros mercados y allí pagarían el correspondiente impuesto: no podrían pues competir con los que llegan libres a la Zona. Los artefactos que Panamá recibe de Europa no podrían

cruzar la Zona y venderse en ella sino pagando una alta tarifa, y por consiguiente, estarían sujetos a un doble impuesto que los colocaría en desventajosa situación.

Las industrias nativas encontrarían también en la tarifa de la Zona una valla infranqueable, y así el daño causado con ella sería mayor para la República de Panamá que para cualquier otro país. Ni las cosas más necesarias para la vida, ni los artículos de más continuo uso y consumo producido en el país, podrán cruzar la línea divisoria sin sufrir recargo considerables que en definitiva serían prohibitivos.

Como el golpe ha sido dado al comercio y a las industrias nativas, las rentas de la República de Panamá desaparecerían, y como por el convenio del Canal tiene contraídas ciertas obligaciones que limitan sus recursos fiscales de todo género y ciertas responsabilidades que implican gastos de consideración, el prospecto que se le presenta a mi país es de debilidad, de pobreza y de atraso, en vez del porvenir brillante que los mismos Estados Unidos han tenido en mira labrarle cuando le han extendido su mano generosa y le han ofrecido su apoyo leal y eficaz en horas de infortunio.

Mi Gobierno no cree que el de Vuestra Excelencia haya tenido el propósito de causar a la República de Panamá tan inmensos e irreparables daños, muy al contrario, confía en que bastará la exposición de ellos para que cese la situación creada y se pongan las bases de una vida común en la cual se consulten los intereses de los dos países, cosa que no es posible, sino al contrario muy hacedera.

Pero antes de que se llegue a esa Convención final que debe comprender muchos detalles y de la cual podrá tratar a Vuestra Excelencia en otra oportunidad, por ahora me limito a solicitar de Vuestra Excelencia que, haciendo uso de las facultades administrativas de que está investido, y con el objeto de poner término a la delicada situación que atraviesa la República de Panamá, imparta las órdenes del caso a efecto de que se suspendan las disposiciones dictadas por las autoridades de la Zona del Canal en lo referente a puertos, aduanas y correos, hasta tanto que sobre ellas se llegue a un acuerdo que consulte los intereses comunes.

Doy a Vuestra Excelencia seguridad completa de que el Gobierno de mi país tiene el deseo más vehemente y más sincero de llegar a ese arreglo, en términos nobles y satisfactorios para los Estados Unidos.

(fdo.) *J.D. de Obaldia*

Declaración del Presidente Theodore Roosevelt*

White House, Washington, octubre 13 de 1904

Señor:

Por Orden Ejecutiva de 9 de mayo de 1904, puse bajo la inmediata vigilancia de usted el trabajo de la Comisión del Canal Istmico, tanto en lo relacionado con la construcción del Canal, como con el ejercicio de los poderes gubernativos a que tienen derecho los Estados Unidos en la Zona del Canal, de acuerdo con el Tratado celebrado con la República de Panamá. Hay fundamento para creer que al hacer nosotros uso de los derechos concedidos por el tratado, el pueblo de Panamá se ha alarmado sin motivo con el establecimiento de un Gobierno en la Zona del Canal por la Comisión. Aparentemente se teme que se establezca en parte de su territorio una comunidad independiente y competidora, que perjudicará su comercio, reducirá su comercio, reducirá sus rentas y disminuirá su prestigio como Nación.

Los Estados Unidos van a hacer al Estado de Panamá beneficios muy grandes con los millones de pesos que gastarán en la construcción del Canal, pero por este hecho no debemos perder de vista la importancia que hay en ejercer la autoridad que nos da el Tratado con Panamá de manera de que evite cualquier sospecha, aunque sea infundada, de nuestras intenciones en los futuro. Nosotros no tenemos la menor intención de establecer una colonia independiente en el centro del Estado de Panamá, ni de ejercer funciones gubernamentales más amplias de las que sean necesarias para ponernos en aptitud de construir, mantener y explotar el Canal convenientemente y con seguridad, de acuerdo con los derechos que nos ofrece el Tratado; y lo que menos deseamos es que estorbar el comercio y la prosperidad del pueblo de Panamá. Por lejos que pudiera llevarnos una interpretación justa del tratado,

* Manuel B. Moreno C. *Op. cit.*, pp. 75-76.

así lo requiriesen las exigencias del caso, al ejercer derechos equivalentes a los del Gobierno en la Zona del Canal, en nuestra plena intención que esos derechos sean ejercidos con el mayor cuidado, a fin de no menoscabar el honor ni los intereses del pueblo de Panamá. El ejercicio de los poderes que nos concede el Tratado, dentro de los límites geográficos de Panamá, puede fácilmente, si no se demuestra verdadera simpatía tanto por el bienestar presente como futuro del pueblo de Panamá, causar sentimientos de desconfianza hacia el Gobierno Americano. Esto influirá de modo funesto en el buen éxito de nuestro gran proyecto en ese país. Es de la mayor importancia que aquellos que sean directamente responsable de la política que se sigue obtengan en el mismo terreno los informes más fidedignos que puedan adquirirse respecto de las condiciones que existen en Panamá, y de la actitud e intereses reales de ese Estado. Después de una conferencia celebrada con el Secretario de Estado y con usted, he llegado a la conclusión de que será muy ventajoso que, si le es posible, visite usted personalmente el Istmo de Panamá y conferencie con el Presidente y otras autoridades gubernamentales de la República de Panamá. Al efectuarse esto queda usted autorizado para llevar consigo a aquellas personas que usted desee, que estén familiarizadas con el estado de cosas del Istmo y que puedan ayudarlo con su consejo. Mientras más pronto haga usted esta visita tanto mejor. El Secretario de Estado dará instrucciones al Ministro de los Estados Unidos de América en Panamá para que preste toda la ayuda que esté en su poder, y el Gobernador de la Zona, General Davis, hará seguramente lo mismo. Usted informará al Presidente de la República cuál es la política de este Gobierno, y le asegurará que los Estados Unidos no tienen el propósito de sacar ventaja de los derechos que le concede el Tratado de Panamá o de las ciudades de Panamá y Colón. Cuando usted regrese me informará del resultado de su visita.

De usted atento servidor,

THEODORO ROOSEVELT

Al Secretario de la Guerra.



11

Convenio Monetario*

DECRETO NÚMERO 74 DE 1904

(6 de diciembre)

En uso de las facultades que le confiere el Artículo 13 de la ley 84 de 1904, sobre moneda.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

DECRETA:

ARTÍCULO 1o.- Apruébase en todas sus partes la Convención acordada en Washington el 20 de junio del presente año entre el Secretario de Guerra de los Estados Unidos de América y los Comisionados Fiscales de la República de Panamá, consignada en las dos comunicaciones siguientes:

Washington, junio 20 de 1904.

Señores Ricardo Arias y Eusebio A. Morales,
Comisionados Fiscales
de la República de Panamá.

Nueva York.

Señores:

Entiendo que está pendiente una Ley en la Convención de la República de Panamá que establece el sistema monetario y la acuñación de la moneda necesaria para la República. La Comisión del Canal Ístmico cuya dirección está a mi cargo, por disposición del Gobierno de los Estados Unidos, tiene marcado interés en mante-

* Op. cit., pp. 43-45.

ner en la Zona del Canal un sistema monetario sobre la base oro. Estimo de mutuo provecho para la República y para la Comisión Istmica que el sistema monetario usado en la Zona sea el mismo.

He sido informado además que la Convención de la República actualmente considera disposiciones que en sustancia son:

1o.— Que la unidad monetaria de la República ha de ser el peso de oro con peso de un gramo seiscientos setenta y dos milésimos (1 gr. 672) y cero novecientos milésimos de fino (0.900 ms) divisible en cien centavos, que será puesto en circulación como y cuando la República lo estime conveniente y necesario para sus necesidades.

2o.— Que el actual Dollar de oro de los Estados Unidos de América, y sus múltiples serán de curso legal en la República de Panamá por su valor nominal, como equivalente de un peso de oro de la República.

3o.— La moneda fraccionaria de plata deberá ser emitida por la República bajo varias denominaciones, las que deberán tener una aleación de novecientos milésimos de plata pura y cien milésimos de cobre, cuyo valor declarado deberá estar en proporción con el peso en oro a razón de 1 a 32, y que esa moneda fraccionaria deberá ser de curso legal en todas las transacciones.

4o.— Que la moneda debe ser acuñada lo será en fracciones del peso oro o Dollar, y salvo lo que se disponga en lo sucesivo, deberá acuñarse en cantidad suficiente para el cambio o conversión de los pesos de plata colombiana y sus fracciones que se hallan en circulación en la República y que la suma que deba ser convertida no exceda de tres millones de pesos de plata colombiana.

5o.— Que después del primero de julio de 1905 podrá ser acuñada y emitida en moneda fraccionaria de plata por la República la suma adicional suficiente por valor de un millón quinientos mil pesos oro o Dollars (\$1,500.000) que es el equivalente de tres millones de piezas de medios Dollars conforme lo solicite del Poder Ejecutivo de la República el Secretario de Guerra de los Estados Unidos cuando a su juicio lo crea necesario y prudente para la construcción del Canal Istmico.

6o.— La República de Panamá para asegurar la paridad y equivalencia de la moneda fraccionaria de plata con el patrón de oro, deberá depositar en alguna institución bancaria de los Estados Unidos una suma en moneda legal de esos Estados equivalente al quince, por ciento del valor nominal de la moneda de plata emitida por la República y el valor igual al Señoreaje de la moneda que

solicite el Secretario de Guerra en la forma antes dicha, menos el costo de la acuñación y transporte.

7o.- Que después de conferenciar con la Comisión Istmica del Canal o sus Representantes o Agentes Fiscales, la República de Panamá girará sobre ese depósito cuando sea necesario para evitar que la paridad de la moneda de plata con el patrón de oro pueda ser alterada.

8o.- Que la acuñación de la moneda deberá hacerse en alguna casa de moneda de los Estados Unidos.

Admitiendo que la legislación en sustancia corresponda a lo anteriormente expresado, convengo a nombre de la Comisión Istmica del Canal y bajo la Dirección del Presidente de los Estados Unidos en lo siguiente:

1o.- Que la Comisión Istmica del Canal por medio de disposiciones legales hará que la moneda de oro y de plata y de oro de la República de Panamá sea de curso legal en la Zona del Canal.

2o.- Que la Comisión empleará para sus desembolsos en la Zona y en la República, la cantidad de plata y de oro de la República de Panamá que juzgue conveniente.

3o.- La Comisión Istmica del Canal cooperará con la República de Panamá a fin de mantener la paridad de la moneda de plata de la República con el patrón de oro, en la venta de letras a ratas razonables sobre los depósitos que se hagan para evitar que esa paridad pueda ser alterada.

4o.- Queda entendido que lo estipulado en las anteriores cláusulas en nada restringen el derecho que tiene la República de Panamá para reducir la cantidad de numerario en plata después de abierto el Canal al comercio, a la suma que crea conveniente y retirar a pro rata la reserva o depósito que corresponda a la Reducción de la suma de moneda acuñada.

Ojalá ustedes se sirvieran confirmar su asentimiento, a lo anterior,

De ustedes atento servidor,

WM. H. Taft
Secretario de Guerra

• • • • •

Nota del compilador: El Convenio Monetario sufrió algunas modificaciones en las siguientes fechas: 26 de marzo 24 de abril de 1930; 28 de mayo-6 de junio de 1931; 2 de marzo de 1936; 17 de junio de 1946; 9-24 de mayo de 1950; 11 de septiembre 22 de octubre de 1953; 23 de agosto-25 de octubre de 1961, y 13 de marzo 23 de octubre de 1962.

12
Convenio Taft*
(1904)

**ÓRDENES EJECUTIVAS
DEL SECRETARIO DE GUERRA DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA**

DECRETO NÚMERO 182 DE 1904
(de 6 de diciembre)

En desarrollo de la Orden Ejecutiva expedida por el Secretario de Guerra de los Estados Unidos de América con fecha 3 de los corrientes.

El Presidente de la República de Panamá.

Por cuanto de las conferencias celebradas entre el Excelentísimo Señor Secretario de Guerra de los Estados Unidos de América y el de Gobierno y Relaciones Exteriores de la República de Panamá, se ha llegado a un arreglo que establece mutuas concesiones, cuyos términos se hallan contenidos en la Orden Ejecutiva de aquel Secretario, de fecha 3 de los corrientes; por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y de acuerdo con el dictamen del Consejo de Gabinete,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. Expídanse por las respectivas Secretarías de Estado las disposiciones necesarias para cumplir con las estipulaciones convenidas, a fin de que la citada Orden Ejecutiva sea efectiva.

PARÁGRAFO. La Orden expresada es como sigue:

* Secretaría de Relaciones Exteriores de Panamá. **Tratados Públicos**— Suplemento al Número 1, (Panamá, Imprenta Nacional, 1926), pp. 3-22.

Por disposición del Presidente, y con sujeción a la acción del 58º Congreso, conforme a la Ley de 28 de Abril de 1904,

Se Ordena:

ARTICULO 1º. No se importarán a Ancón o Cristóbal, puertos terminales del Canal, artículos, efectos y mercaderías, con excepción de aquellos artículos, efectos y mercaderías que describe el Artículo XIII del Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos, cuyas ratificaciones fueron canjeadas el 26 de Febrero de 1904, y con excepción de artículos, efectos y mercaderías en tránsito a través del Istmo, exceptuándose el carbón y el aceite mineral crudo para combustible para su venta en Ancón o en Cristóbal a los buques de alto bordo, admitiéndose en dichos puertos tales carbón y aceite para el objeto indicado, libres de derechos.

A condición, sin embargo, que esta Orden no tendrá efecto, primero, si la República de Panamá no reduce del 15% al 10% los derechos ad-valorem sobre los artículos importados y descritos en la Clase 2 de la Ley expedida por la Convención Nacional de Panamá el 5 de Julio de 1904 y puesta en vigor el 1º de Octubre de 1904, o si aumenta los derechos de aduana sobre los artículos importados y descritos en las otras Clases de dicha Ley, con excepción de toda clase de vinos, licores, alcohol y opio importados sobre los cuales la República de Panamá puede fijar impuestos más altos; segundo, si el Artículo 38 de la Constitución, tal como fue reformado por el Artículo 146 de la misma, no queda en pleno vigor y sin modificación, en cuanto se refiere a la importación y venta de mercaderías de toda clase; tercero, si los derechos consulares y gravámenes de la República de Panamá con respecto a la entrada de toda clase de buques y a las importaciones a dichos puertos de Panamá y Colón, no se reducen al 60% de las tarifas en vigor en la actualidad; y cuarto, a menos que los artículos que se importen a los puertos de Panamá y Colón, consignados a cualquier parte de la Zona de Canal y con destino a ella, no queden sujetos en la República de Panamá a ningún otro impuesto o gravamen directo o indirecto.

ARTICULO 2º. En vista de la proximidad del puerto de Ancón al puerto de Panamá, y del puerto de Cristóbal al puerto de Colón, el funcionario competente de la Aduana o del Puerto de la Zona del Canal, cuando no esté en pugna con los intereses de los Estados Unidos y a petición de la autoridad competente de la República de Panamá, permitirá a cualquier buque recibido en los puertos de Panamá y Colón o despachado de ellos, junto con su carga y pasa-

jeros, de acuerdo con reglamentos adecuados para el tránsito de mercaderías importadas y de pasajeros que lleguen al territorio de la República de Panamá y salgan de él, que haga uso y disfrute de muellaje y de otras facilidades de los puertos de Ancón y de Cristóbal, respectivamente, mediante el pago correspondiente de muellaje a los dueños de dichos muelles.

A condición, sin embargo, que las autoridades de la República de Panamá concedan privilegios recíprocos de muellaje y de otras facilidades en Panamá y Colón, junto con arreglos adecuados para el tránsito de mercaderías importadas y de pasajeros con destino al territorio de la Zona del Canal o que salgan de ella, cuando no esté en pugna con sus intereses, a cualquier buque, junto con su carga y pasajeros, recibido en Ancón o en Cristóbal o despachado de esos puertos, siendo entendido, además, que nada de lo que aquí se establece afectará la plena jurisdicción administrativa, policiva y judicial de los dos Gobiernos sobre sus respectivos puertos y bahías, con excepción de lo que se estipula más adelante en el Artículo 6º.

Siendo entendido, también, que los buques que entren al puerto de Panamá o que salgan de él tendrán el derecho absoluto de anclar, cargar y descargar libremente sus cargamentos por medio de lanchas, con destino a Panamá o procedentes de dicha ciudad, en los fondeaderos acostumbrados en las inmediaciones de las Islas de Perico, Flamenco, Naos y Culebra, aun cuando esas islas están incluidas en el puerto de Ancón de conformidad con la delimitación provisional tal como queda reformada más adelante en el Artículo 5º; así como también usar las aguas de dicho puerto para todo fin comercial lícito.

ARTÍCULO 3º Los manifiestos, facturas y otros documentos que se relacionan con buques o cargamentos despachados de los puertos de Panamá y Colón o consignados a ellos, serán visados, como hasta ahora, por funcionarios de la República de Panamá. Los manifiestos facturas y otros documentos que se relacionen con buques o cargamentos despachados de los puertos de Ancón o Cristóbal o consignados a ellos, serán visados por funcionarios de los Estados Unidos.

ARTÍCULO 4º. Las autoridades de la Zona del Canal no gravarán con derechos de importación, peajes o contribuciones de ninguna clase, los artículos, efectos, efectos y mercaderías importados ni a las personas que pasen del territorio de la República de Panamá a la Zona del Canal; y por la presente queda derogado el

Artículo 5º de la Orden Ejecutiva de 24 de Junio de 1904, que dispone que la importación será gravada en la Zona del Canal de acuerdo con los derechos de importación establecidos por el Congreso sobre mercancías extranjeras importadas a los puertos de los Estados Unidos; pero esta disposición no surtirá efecto a no ser que las autoridades de la República de Panamá concedan, por medio de la orden correspondiente, la importación libre y recíproca de artículos, efectos y mercaderías y el tránsito libre de personas del territorio de la Zona de Canal al de la República de Panamá.

ARTÍCULO 5º. Las disposiciones de esta orden tampoco surtirán efecto sino a condición de que la delimitación de las ciudades y bahías de Colón y Panamá, firmada el 15 de junio de 1904, por los representantes autorizados de los Gobiernos de la República y de la Zona del Canal, quede en vigor provisionalmente, mientras esté ésta vigente con el consentimiento de ambas partes, la delimitación provisional comprenderá no sólo los términos expresados en el respectivo texto, sino también lo siguiente, a saber: que la Bahía de Panamá comprenderá las aguas marítimas que quedan al frente de la citada ciudad extendiéndose tres millas marítimas desde la línea media de la baja mar, con excepción de las aguas marítimas que quedan al oeste de una línea trazada desde un poste enterrado en Punta Mala a través de la isla central de las tres islas llamadas Tres Hermanas y que se extiende tres millas marinas desde la línea media de la baja mar en Punta Mala, aguas que se considerarán pertenecientes al puerto de Ancón.

ARTÍCULO 6º. Esta Orden tampoco surtirá efecto a menos que las autoridades gubernamentales de la República de Panamá concedan facultad a las autoridades de la Zona del Canal para ejercer inmediata y completa jurisdicción en asuntos de sanidad y cuarentena en las aguas marítimas de los puertos de Panamá y Colón.

ARTÍCULO 7º. La Orden Ejecutiva de 24 de Junio de 1904, que se refiere al establecimiento de oficinas postales y al servicio postal en la Zona del Canal, queda reformado y adicionado por las siguientes estipulaciones:

Los correos que se despachen del territorio de la Zona del Canal para la República de Panamá o de tránsito por ésta para los Estados Unidos o para países extranjeros, llevarán estampillas de la República de Panamá sobrecargadas con una marca impresa del Gobierno de la Zona del Canal, de igual valor a las que usa el

Gobierno de los Estados Unidos para su franqueo interior y exterior, exactamente como si los Estados Unidos y la República de Panamá fueran para este objeto territorio común. Las autoridades de la Zona del Canal comprarán a la República de Panamá las estampillas que las autoridades de la Zona del Canal deseen usar en la Zona del Canal al cuarenta por ciento (40%) de su valor nominal; pero esta orden quedará sin efecto a menos que las autoridades de la República de Panamá, provean por medio de arreglo adecuado con las autoridades postales de los Estados Unidos, lo necesario para el transporte de correos entre las oficinas postales del Istmo de Panamá y las oficinas de correos de los Estados Unidos a las mismas ratas que en el actualidad se cobran en los Estados Unidos por el servicio interior; con excepción de la correspondencia legalmente libre de porte que lleven los llamados sobres de multa del Gobierno de los Estados Unidos, y que verse sobre asuntos oficiales de los Estados Unidos, la que será transportada gratis tanto por el Gobierno de Panamá como por el de la Zona del Canal; a condición, sin embargo, que las autoridades de la Zona del Canal con el objeto de facilitar el transporte de correos directos entre la Zona y los Estados Unidos en una y otra dirección, podrán incluir tales correos directos legalmente porteados, en valijas cerradas que no serán abiertas por las autoridades de la República de Panamá cuando sean de tránsito, con la condición de que el valor del transporte de tales valijas será cubierto por el Gobierno de la Zona.

ARTÍCULO 8º. Esta Orden tampoco surtirá efecto a menos que el Convenio Monetario celebrado en Washington el 20 de Junio de 1904, por los Representantes de la República de Panamá y el Secretario de Guerra de los Estados Unidos con aprobación del Presidente de los Estados Unidos, para el establecimiento del talón de oro en la República de Panamá y la correspondiente acuñación, sea aprobado y ejecutado por el Presidente de la República de Panamá, en virtud de la autorización que le confirió la Ley de la República de Panamá número 84, aprobada el 20 de Junio de 1904; y a no ser, también, que el Presidente de la República de Panamá, con el objeto de evitar, que al ponerse en vigor el mencionado Convenio Monetario que asegura y mantiene el talón de oro en la República de Panamá, haya dificultades de ninguna clase, suprima el impuesto de uno por ciento (1%) sobre la exportación del oro acuñado de la República de Panamá, en virtud de la autorización que le fue conferida por Ley número 65, expedida por la Asamblea Nacional de Panamá el 6 de Junio de 1904.

ARTÍCULO 9º. Los ciudadanos de la República de Panamá que en cualquier tiempo residan en la Zona del Canal, tendrán completa libertad, en cuanto concierne a los Estados Unidos, de votar en las elecciones que se verifiquen en la República de Panamá y sus Provincias y Municipalidades, en los lugares fuera de la Zona del Canal que la República tenga a bien fijar, y bajo las condiciones que la República determine; pero nada de lo que aquí queda expresado deberá interpretarse como encaminado a limitar el poder de la República de excluir o restringir el derecho de tales ciudadanos para que voten de acuerdo con lo que ella juzgue conveniente.

ARTÍCULO 10º. El camino real que se extiende desde los límites al Este de la ciudad de Panamá, tal como se fijan en el convenio de delimitación provisional arriba mencionado de 10 de Junio de 1904, hasta el punto más al Este aún, donde el camino hacia "Las Sabanas" atraviesa la línea de la Zona (que queda 5 millas al Este del eje central del Canal), será reparado y conservado en buen estado de servicio pro cuenta de las autoridades de la Zona del Canal y a su cargo, y también y de igual manera el mencionado camino desde el límite Este de la ciudad de Panamá hasta el puente del Ferrocarril en la ciudad de Panamá, será reparado por cuenta de las autoridades de la Zona del Canal; pero esta Orden no tendrá efecto a menos que la República de Panamá desista de su reclamación de compensación por el uso a perpetuidad de los edificios municipales situados en la Zona del Canal.

ARTÍCULO 11º. Los Estados Unidos construirán, conservarán y administrarán uno o más hospitales ya sea en la Zona del Canal o en territorio de la República, a opción de los Estados Unidos, para el tratamiento de alienados y leprosos, y para enfermos indigentes, y los Estados Unidos admitirán en ese hospital u hospitales a las personas que estén en las condiciones arriba citadas cuya asistencia solicite la República de Panamá, pero esta orden no tendrá efecto: primero, si la República de Panamá no proporciona gratuitamente las tierras necesarias para ese objeto, si los Estados Unidos construyen dicho hospital y hospitales en territorio de la República; y segundo, a no ser que la República contribuya y pague a los Estados Unidos una cuota diaria y razonable pro cada persona que entre al hospital a petición de la República, la que será fijada por el Secretario de Guerra de los Estados Unidos.

ARTÍCULO 12º. La vigencia de esta Orden Ejecutiva y su ejecución por funcionarios de los Estados Unidos por una parte, o el

cumplimiento y ejecución de las condiciones a que su vigencia está sujeta por la República de Panamá, y sus funcionarios por la otra, no se considerará como una limitación, definición, restricción o interpretación restrictiva de los derechos de una u otra parte de acuerdo con el Tratado entre los Estados Unidos y la República de Panamá.

Esta Orden entrará en vigor el día 12 de Diciembre de 1904.

WM.H. TAFT,
Secretario de Guerra

.

Panamá, Diciembre 3 de 1904.

Excelencia:

Después de muy detenidas conferencias con V. E. y sus consejeros, he redactado una Orden Ejecutiva, que estoy autorizado por el Presidente de los Estados Unidos para firmar y poner en vigor, y me parece que su vigencia y el cumplimiento de sus disposiciones ofrecen una solución honrosa y satisfactoria para ambas naciones de las diferencias entre los Estados Unidos y la República de Panamá.

Incluyo un borrador de la Orden. Entiendo que V. E. y sus consejeros están de acuerdo con la sabiduría de esta solución, mas desearía tener la aprobación expresa de V.E. antes de firmar formalmente la orden y poner en vigor. Vuestra Excelencia notará que la orden está redactada de manera que comience a surtir sus efectos el 12 de Diciembre. Esta demora tiene por objeto darle completa publicidad para beneficio de todos los interesados.

Tengo el honor de suscribirme, con sentimientos de mi más distinguida consideración.

De V. E. obsecuente servidor,
WM. H. TAFT,
Secretario de Guerra.

Dr. Don Manuel Amador Guerrero,
Presidente de la República de Panamá.
Panamá.



.....

República de Panamá.— Poder Ejecutivo Nacional.— Presidencia.—
Panamá. 3 de Diciembre de 1904.

Honorable William H. Taft,
Secretario de Guerra de los Estados Unidos.
Panamá.

Señor:

Como complemento de los arreglos verificados por nuestros respectivos Gobiernos, después de las extensas y satisfactorias conferencias que se han celebrado entre usted, yo y sus consejeros, tengo el placer de expresar el acuerdo de la República con la Orden Ejecutiva del Secretario de Guerra expedida según instrucciones del Presidente de los Estados Unidos hoy 3 de Diciembre de 1904.

Aparte de la sabiduría y justicia que se evidencia con esta feliz solución que se le han dado a las diferencias entre los Estados Unidos y la República de Panamá, permítame usted expresar en nombre de la República y en el mío propio y de mis consejeros, nuestra gratitud por su benévola visita a Panamá y su consideración laboriosa, juiciosa y política de los asuntos de que se ha tratado.

Con sentimientos de mi más alta estima, tengo el honor de suscribirme, señor Secretario.

De usted atento servidor,

M. AMADOR GUERRERO
Presidente de la República de Panamá.

Santiago de la Guardia,
Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores

.....

Panamá, Diciembre 3 de 1904.

Señor:

Bajo esta cubierta remito a usted una Orden Ejecutiva de esta misma fecha para su publicación y cumplimiento.

De usted respetuosamente,

WM. H. TAFT,
Secretario de Guerra.

Contralmirante John G. Walker, U.S.N.
Presidente de la Comisión del Canal Ístmico.
Panamá

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá, a 6 de Diciembre de 1904.

M. AMADOR GUERRERO.

El Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores, SANTIAGO DE LA GUARDIA. -

El Secretario de Hacienda, F. V. DE LA ESPRIELLA. - El Secretario de Instrucción Pública y Justicia, NICOLÁS VICTORIA J. - El Secretario de Fomento, MANUEL QUINTERO V.

.....

Panamá, Diciembre 6 de 1904.

Excelencia:

Adjunto remito a usted una Orden Suplementaria, la cual tiene por solo objeto aclarar lo que ya ha recibido su aprobación.

¿Puedo solicitar de V. E. que exprese si está de acuerdo con su tenor?

De V. E. muy respetuosamente me suscribo.

WM. H. TAFT,
Secretario de Guerra.

A.S.E. Manuel Amador Guerrero
Presidente de la República de Panamá.
Panamá.

.....

ORDEN EJECUTIVA de 6 de Diciembre de 1904, aclaratoria de la ORDEN EJECUTIVA de 3 de Diciembre de 1904.

ARTÍCULO 1º. Las consignaciones de artículos, efectos y mercaderías que por virtud del Artículo 1º de la Orden de 3 de Diciembre de 1904 arriba citada, no puedan ser declaradas para su im-

portación a los puertos de Ancón o de Cristóbal, podrán, sin embargo, a opción del embarcador, ser desembarcadas en los puertos de Ancón o de Cristóbal, respectivamente, si vienen acompañadas de la Factura Consular del Cónsul de la República de Panamá en el puerto de origen, en tránsito para cualquier parte de la Zona del Canal o de la República de Panamá, mediante el pago de los derechos respectivos a la República de Panamá, de acuerdo con arreglos adecuados iguales a los estipulados en el Artículo 2º de la citada Orden de 3 de Diciembre de 1904.

Pero no se permitirá el desembarque en Ancón o en Cristóbal de tales artículos, efectos y mercaderías sino vienen acompañados de la Factura Consular del Cónsul de la República.

ARTÍCULO 2º. Deberá entenderse que la Orden de 3 de Diciembre de 1904, permite la libre exportación y consignación de artículos, efectos y mercaderías y el libre tránsito de personas y de vehículos de la República de Panamá a través de las Zona del Canal y de los puertos terminales de ella.

Panamá, Diciembre 6 de 1904.

WM. H. TAFT,
Secretario de Guerra.

.....

República de Panamá.— Poder Ejecutivo Nacional.— Panamá, Diciembre 6 de 1904.

Excelentísimo señor William H. Taft,
Secretario de Guerra de los Estados Unidos.
Presente.

Señor:

Tengo el honor de acusar recibo a V. E. de la carta remisoria de la Orden Ejecutiva de fecha 6 de los corrientes, Orden que aclara el Artículo 1º de la que dictó V. E., el 3 del presente mes.

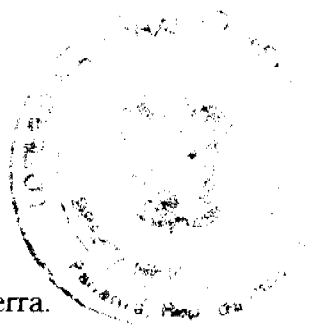
Me complazco en expresar a V. E. que estoy de acuerdo con el contenido de ese nuevo documento y aprovecho la ocasión para reiterar a V. E. mi alta consideración y aprecio.

De V. E. atento servidor.

M. AMADOR GUERRERO

Presidente de la República de Panamá.

Santiago de la Guardia,
Secretario de Gobierno y Relaciones
Exteriores.



.....

Departamento de Guerra.

Washington, Diciembre 28 de 1904.

Señor:

Por disposición del Presidente se ordena lo siguiente, en sustitución de la Orden de 25 de Junio de 1904, que se relaciona con el establecimiento y administración del servicio de aduanas en la Zona del Canal, en el Istmo de Panamá, que fue derogada por la Orden del 16 de Diciembre de 1904:

ARTÍCULO 1º. Para la administración de las aduanas en la Zona del Canal se establece por medio de la presente un distrito de aduanas, que comprende todas las tierras y aguas dentro del control y jurisdicción de los Estados Unidos en el Istmo de Panamá y las aguas marítimas contiguas a las playas de la citada Zona del Canal que se extienden a una distancia de tres millas marinas desde la línea media de la baja mar, sin incluir ninguna de las aguas marítimas que pertenecen a los puertos de las ciudades de Panamá y Colón en la República de Panamá, puertos que están suficientemente demarcados de acuerdo con el convenio provisional de delimitación firmado por los representantes autorizados de los Gobiernos de Panamá y de la Zona del Canal el día 15 de Junio, y modificado con el consentimiento de las partes, de conformidad con la descripción que contiene el Artículo 5º de la Orden Ejecutiva de 3 de diciembre de 1904.

ARTÍCULO 2º. Habrá dos puertos de entrada en la Zona del Canal, a saber: Ancón, en el extremo Pacífico del Canal, y Cristóbal, en el extremo Atlántico, por los cuales podrán importarse y exportarse artículos, efectos y mercaderías y en los que se podrá recibir y despachar buques, de conformidad con las Órdenes Ejecutivas de 3 y 6 de Diciembre de 1904.

ARTÍCULO 3º. La subdivisión de la rama ejecutiva del Gobierno

de la Zona del Canal, conocida con el nombre de Departamento de Ingresos, tendrá a su cargo la ejecución de las leyes de aduanas y disposiciones arancelarias vigentes en la referida Zona. El Colector de impuestos, quien por Ley de la Comisión del Cana Ístmico es, ex-oficio, el Colector de Aduanas recibirá como sueldo el que le corresponde por ley, y deberá ejercer las funciones de Colector de Aduanas como lo disponen las leyes vigentes en la actualidad en la Zona del Canal o que se dicten en lo futuro.

ARTÍCULO 4º. Los Sub-Collectores y los Inspectores de Aduanas, los Oficiales de Sanidad y los Capitanes de los Puertos de Ancón y de Cristóbal recibirán las compensaciones que la ley les señala y ejercerán sus funciones en esos puertos de la manera que establecen las leyes y reglamentos vigentes en la Zona.

ARTÍCULO 5º. La Orden del 16 de Diciembre de 1904, que deroga la Orden de 24 de Junio de 1904, junto con esta Orden, serán proclamadas en la Zona del Canal, Istmo de Panamá y entrarán en vigor el día de su proclamación.

WM. H. TAFT,
Secretario de Guerra.

Al Presidente de la Comisión del Canal Ístmico.

Washington, D.C.

.....

**ORDEN del Secretario de Guerra de 7 de Enero de 1905.
Importación de mercaderías a los puertos de la Zona del
Canal.**

Departamento de Guerra

Washington, D. C., Enero 7 de 1905.

Por disposición del Presidente, se ordena por la presente que:

1º. Para permitir la importación de artículos, efectos y mercaderías a Ancón y a Cristóbal, puertos terminales del Canal Ístmico, Zona del Canal, Istmo de Panamá, es necesario que se establezca por medio de un certificado otorgado por un Miembro de la Comisión del Canal Ístmico o por el Jefe del Departamento de Materiales y Abastos, que tales artículos, efectos y mercaderías son nece-

sarios y convenientes para la construcción del Canal Ístmico o para el uso y consumo de determinados jefes y empleados en el servicio de los Estados Unidos y del Gobierno de la Zona del Canal y para sus familias, radicados en el Istmo de Panamá, y que se destinan exclusivamente para ese objeto.

2º. Los certificados arriba indicados se otorgarán solamente cuando los artículos, efectos y mercaderías que se certifican son: (1) propiedad de los estados Unidos, incluyendo semovientes y forraje o bajo contrato de compra por los Estados Unidos y que sean para su uso en el trabajo de construcción del Canal o en el saneamiento del Istmo, o para el servicio de Gobierno de la Zona del Canal; (2) propiedad, incluyendo semovientes y forraje, de un contratista con los Estados Unidos o con el Gobierno de la Zona del Canal o bajo contrato de compra, para su uso en la construcción del Canal Ístmico o en el saneamiento del Istmo de Panamá, estipulándose que cualesquiera artículos, efectos o mercaderías que se ofrezcan a la venta por cualquier contratista o sus empleados o de otra manera no tendrán derecho a este privilegio; (3) municipalidad de la mencionada Zona, (4) los bienes y las provisiones que se destinan para la venta, en los comisariatos establecidos y administrados por la Comisión del Canal Ístmico, a los jefes, empleados y contratistas de la Comisión del Canal Ístmico, de la Compañía del Ferrocarril de Panamá o a cualquiera contratista con la Comisión del Canal Ístmico para trabajar en el Istmo (junto con las familias de tales personas) que son ciudadanos de los Estados Unidos o que reciben compensación en lo que se conoce como nómina de oro (gold roll) de la Comisión de la Compañía del Ferrocarril o de tal contratista; (5) muebles de tales jefes y empleados de la Comisión del Canal Ístmico radicados en la Zona del Canal o en la República de Panamá, incluyendo tales artículos, efectos y mobiliario como retratos, libros, instrumentos de música, loza, ropa de hilo de cama y de mesa, y utensilios de cocina, ropa, objetos de tocador y artículos de uso personal, libros, herramientas de mano e instrumentos, joyerías y servicios de mesa, en cantidades y de calidad adecuada al rango y a la posición de tales jefes y empleados que se destinen a su propio uso y beneficio y no para negociar con ellos o para su venta y que se importen de los Estados Unidos.

3º. Esta Orden excluye de los beneficios de los comisariatos establecidos y mantenidos por la Comisión a todos los empleados y trabajadores que son oriundos de países tropicales en donde

prevalecen condiciones climatológicas iguales a las del Istmo de Panamá, y quienes, por lo tanto, pueden conseguir, según se entiende, los artículos de alimentación, ropa, objetos de casa y mobiliarios de la misma clase y calidad a que están acostumbrados, de los comerciantes de Panamá y Colón y de las poblaciones de la Zona del Canal, y cuyos medios ordinarios de vía pueden suplirse sin necesidad de ocurrir a los comisariatos del Gobierno. Si se encontrare después que los citados comerciantes cobran precios en exceso de una ganancia legítima, o practican otros medios de extorsión, los Estados Unidos, para protección y ayuda de todos sus empleados, ya sean de la zona tropical o de la templada, suplirán sus comisariatos con los artículos que necesiten y deseen los habitantes de países tropicales, y permitirá a todos sus empleados y trabajadores, así como a los de los contratistas, que se aprovechen de los beneficios y privilegios que les conceden los comisariatos del Gobierno.

Esta Orden entrará en vigor el 7 de Enero de 1905.

WM. H. TAFT,
Secretario de Guerra.

Al Presidente de la Comisión del Canal Istmico.

Washington, D. C.

.

ORDEN del Secretario de Guerra de 5 de Enero de 1911, que modifica las Órdenes relacionadas con los derechos de importación y con la exclusión de los empleados tropicales de los privilegios de los comisariatos.

Departamento de Guerra

Washington, D.C., Enero 5 de 1911.

ORDEN

1º. Por disposición del Presidente se ordena que el párrafo del artículo 1º de la Orden expedida por el Secretario de Guerra, por disposición del Presidente, el 3 de Diciembre de 1904, que fue promulgada por Circular número 4 de la Comisión del Canal

ístmico, el 30 de Diciembre de 1904, queda reformado de manera que se lea así:

"A condición, sin embargo, que esta Orden no surtirá efecto:

PRIMERO. Si la República de Panamá aumentare en cualquier tiempo la tarifa de los derechos de importación, sobre los artículos descritos en la Clase 2 de la Ley de la Convención Nacional de Panamá expedida el 5 de Junio de 1904, y puesta en vigor el 12 de Octubre de 1904, a más del quince por ciento ad-valorem, que se estipula en la citada ley; o si la mencionada República aumentare en cualquier tiempo las tarifas de los derechos de importación sobre los artículos descritos en las otras Clases de la dicha Ley, con excepción de toda clase de vinos, licores, alcoholes y opio importados, sobre los cuales la República puede fijar tarifas más altas;

SEGUNDO. Si el artículo 38 de la Constitución de la República de Panamá, tal como fue reformado por el Artículo 146 de la misma, es abrogado o modificado en cualquier tiempo en lo que respecta a la importación y venta de toda clase de mercancías.

TERCERO. Si los derechos consulares y peajes de la República de Panamá, con respecto a la entrada de buques y a las importaciones a los mencionados puertos de Colón y Panamá fueran aumentados más allá de las tarifas ahora en vigor y que se entiende son el 60% de las tarifas vigentes antes de la promulgación de la citada orden de 3 de Diciembre de 1904;

CUARTO. Si los artículos importados a los puertos de Colón y Panamá, consignados o con destino a cualquier puerto de la Zona del Canal, fueren gravados en cualquier tiempo en la República de Panamá con cualquier otro impuesto o gravamen directo o indirecto".

2º. El párrafo 3º de la Orden citada por el Secretario de Guerra, por disposición del Presidente, el 7 de Enero de 1905 y que excluye de los beneficios de los comisariatos a los empleados y trabajadores oriundos de países tropicales, queda derogado por la presente.

J. M. DICKINSON,
Secretario de Guerra.



LA FIJACIÓN DE LAS FRONTERAS NACIONALES



13 **Convención de Límites*** **(1914)**

CONVENCIÓN DE LÍMITES **Entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América** **1914**

Los Gobiernos de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América, considerando: Que el 15 de junio de 1904 se celebró un convenio entre el señor Tomás Arias, por entonces Secretario de Relaciones Exteriores, el señor Ramón Valdés López, en esa fecha Procurador General de la nación, ambos en representación de la República de Panamá, y el General George W. Davis, que era Gobernador de la Zona del Canal, en representación de los Estados Unidos de América; que de conformidad con las condiciones del mencionado convenio, la República de Panamá entregó a los Estados Unidos para su uso, ocupación y dominio a perpetuidad, una Zona de tierra de diez millas de anchura expresada y determinada en los Artículos 2o. y 3o. del Tratado del Canal firmado por la República de Panamá y los Estados Unidos de América, de fecha 18 de noviembre de 1903; que el dicho convenio estableció los límites de la mencionada Zona que fueron posteriormente fijados sobre el terreno y amojonados y así mismo los de las ciudades de Panamá y Colón y sus respectivas bahías;

Que el Presidente de la República de Panamá, por medio del Decreto Número 46, de 17 de mayo de 1912, entregó a los Estados Unidos para su uso, ocupación y dominio, el área de tierras que ha de ser cubierta por las aguas del lago de Gatún y toda la extensión desde las orillas del Lago hasta una altura de cien pies sobre el nivel del mar, de acuerdo con los Artículos 2o. y 3o del referido Tratado del Canal;

Que desde la promulgación de dicho Decreto de 17 de mayo de 1912, y de conformidad con dichos Artículos del referido Tratado,

* Manuel B. Moreno C. *Op. cit.*, pp. 97-101.

los Estados Unidos tienen el uso, ocupación y dominio de las islas existentes en dicho lago de Gatún, y de las penínsulas que penetran en dicho lago a las cuales no hay acceso sino por las aguas del expresado lago, o por tierras que se encuentran dentro de la jurisdicción de la Zona del Canal;

Por tanto, deseando los Gobiernos de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América, respectivamente, fijar de un modo definitivo la línea divisoria que ha de constituir el límite de las tierras y aguas mencionadas así entregadas a los Estados Unidos, han resuelto con tales fines, celebrar la siguiente convención y para este propósito el Presidente de la República de Panamá ha comisionado a Su Excelencia el señor Ernesto T. Lefevre, Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y el Presidente de los Estados Unidos de América ha comisionado a Su Excelencia el señor William Jennings Price, Enviado Extraordinario y ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante el Gobierno de Panamá, quienes, habiendo canjeado sus respectivos plenos poderes, han formalizado la convención de límites de que se trata, de la siguiente manera:

I

Se conviene en que los linderos de la Zona de tierra de diez millas de anchura descritas en el Artículo 2o. de dicho Tratado del Canal, permanecerán según están descritos y establecidos en el Convenio de 15 de Junio de 1904, arriba mencionado, que han sido determinados posteriormente y amojonados sobre el terreno, como aparece marcado en el mapa (A) Anexo a esta convención, con las modificaciones que enseguida se expresan referentes a las ciudades de Panamá y Colón y sus bahías adyacentes.

II

De conformidad con los Artículos 2o. y 3o. de dicho Tratado, por la presente queda reconocido el derecho de los Estados Unidos al uso, ocupación y dominio del área de tierra que debe quedar cubierta por las aguas del Lago Gatún y toda aquella parte de las riberas del lago que alcance una elevación de cien pies sobre el nivel del mar y de las islas existentes en dicho lago, y también el derecho de los Estados Unidos al uso, ocupación y dominio de las penínsulas que de las riveras de dicho lago penetran en sus aguas y a las cuales no existe acceso excepto por las tierras de la Zona del Canal o por las aguas del Lago Gatún.

La línea del perímetro, a cien pies de altura según queda arriba especificado, como también las penínsulas arriba determinadas serán convenientemente amojonadas y marcadas sobre el terreno por los Estados Unidos, con intervención del representante o representantes que el Gobierno de la República de Panamá designe al efecto, y dibujados en un mapa especial.

III

Se conviene en que los linderos permanentes entre la ciudad de Panamá y la Zona del Canal serán los que siguen:

El punto en donde principia la línea divisoria es un mojón de mampostería, colocado sobre la línea de la alta marea en la orilla de la Bahía de Panamá, al Sur del camino de Balboas en la vertiente del promontorio, llamado Punta Mala, Norte treinta y dos grados y treinta minutos Oeste (N. $32^{\circ}30'$ O) y ciento cincuenta (150) metros aproximadamente, del centro de la isla llamada Gavilán.

Desde el mojón de mampostería arriba mencionado (marcado «A» en el mapa) la línea divisoria sigue al Norte veinte grados y dos minutos Este (N. $20^{\circ}02'$ E.), seiscientos treinta y tres metros y siete décimos de metro (633.7) hasta un mojón de mampostería (marcado «B» en el mapa), situado en el cruce de la línea oriental del camino que limita la Zona y la línea Norte del camino que conduce de Panamá a Balboa; de allí Norte treinta y seis grados y cuarenta y dos minutos Este (N. $36^{\circ}42'$ E), novecientos sesenta y seis metros y ochenta y cinco centésimos de metro (66.85) hasta un mojón de mampostería (marcado «C» en el mapa) del lado Norte del camino que conduce a los terrenos del Hospital de Ancón; de allí Norte tres grados y diez y nueve minutos Este (N. $3^{\circ}19'$ E) ciento cuarenta y ocho metros y cuarenta y seis centésimos de metro (148.46) hasta un mojón de un riel de hierro; de allí Norte ocho grados y catorce minutos y cuarenta segundos Oeste (N. $8^{\circ}14'40''$ O.), ciento cincuenta y un metro y treinta y tres centésimos de metro (151.33) a un punto; de allí Norte treinta y siete grados y cuarenta y cinco minutos Este (N. $37^{\circ}45'$ E.) catorce metros y treinta y tres centésimos de metro (14.33) a un punto en el camino de la actual línea divisoria Norte cero grados y cuarenta y siete minutos oeste (N. $0^{\circ}47'0''$.), 66 metros y cuarenta y cuatro centésimos de metro (66.44) a un punto; de allí Norte setenta y seis grados y cincuenta y nueve minutos Este (N. $76^{\circ}59'$ E), cuarenta y dos metros y cuarenta y cinco centésimos de metro (42.45) a un punto; de allí Sur setenta y dos grados y once minutos Este ($72^{\circ}11'$

E.) ciento cincuenta y nueve metros y veintisiete centésimos de metro (159.27) a un punto cerca del puente de Calidonia; de allí Norte tres grados y ocho minutos Este (N. 3°8' E.) atravesando la línea del Ferrocarril de Panamá, setenta y siete metros y tres décimos de metro (77.3) a un punto doce metros y dos décimos de metro (12.2) de la línea central de la vía principal de dicho Ferrocarril de Panamá; de allí en línea paralela a la vía férrea dicha, y en dirección Noroeste, doscientos noventa metros y cinco décimos de metro (290.5) a un punto en la actual línea divisoria; de allí Norte cuarenta y nueve grados, trece minutos y diez segundos Oeste (No. 49°13'10" O.) ciento sesenta y cinco metros y treinta y siete centésimos de metro (165.37) hasta un mojón de un riel de hierro, doce metros y tres décimos de metro (12.3) del centro de la vía férrea principal del ferrocarril de Panamá; de allí Norte cuarenta y seis grados, treinta y nueve minutos y treinta segundos Oeste (N. 46°39'30" O.), doscientos veinte metros y cuatro centésimos de metro (220.04) a un mojón de límites del Ferrocarril de Panamá veintidós metros y un décimo de metro (22.1) de la línea entre la vía principal del Ferrocarril de Panamá, de allí Norte cuarenta y nueve grados y catorce minutos Oeste (49°14' O) y paralelo con la vía del Ferrocarril de Panamá, doscientos noventa metros y treinta y seis centésimos de metro (290.36) hasta el Río Curundú; de allí siguiendo el curso del Río Curundú aguas arriba hasta un punto (marcado «E» en el mapa) en donde dicho Río Curundú es cortado por una línea recta que pasa por el punto de intersección en el eje del Canal (marcado «Cocali» en el mapa) perpendicular a aquella parte del eje del Canal del año de 1906, que se extiende en línea recta en dirección Sudeste del punto marcado «Cocali» hasta el punto de intersección (marcado «Bay» en el mapa); el punto anterior de intersección se halla situado entre Miraflores y Corozal, y el último punto en la Bahía de Ancón; de allí a partir de «E» Norte sesenta y tres grados y treinta minutos Este (N. 63°30' E.) dos mil ocho metros y seis décimos de metro (2008.6) hasta un mojón de mampostería (marcado «F» en el mapa) en el actual límite entre la República de Panamá y la Zona del Canal; de allí a lo largo de esta frontera Sur veintiséis grados y treinta y cuatro minutos Este (S. 26°34' E.) aproximadamente cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro metros y cinco décimos de metro (4744.5) hasta el mojón número noventa y nueve (99), y de allí continuando por la misma línea hasta la orilla de la Bahía de Panamá en donde marca la baja marea; de allí sigue la línea media de la bajamar alrededor de la

orilla de la Bahía de Panamá hasta un punto en la línea fronteriza entre el Puerto de Panamá y el Puerto de Ancón; de allí Norte setenta y dos grados, catorce minutos Oeste (N. 72°14' O.) hasta un mojón «A» punto inicial, excepto que toda el área de la isla que está en el medio en el mapa, llamada «Las tres hermanas», queda bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América.

Los puntos «A», «B» y «C», arriba especificados, son los mismos puntos mencionados en el convenio original entre el gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la Zona del Canal, de fecha 15 de junio de 1904.

Todas las medidas geodésicas de estas descripciones y las que aparecen en el mapa arriba especificado, se refieren al verdadero meridiano, y todas las coordenadas están de acuerdo con el datum Panamá-Colón.

El Gobierno de Panamá, conviene en que la parte del camino que actualmente existe entre la oficina Postal de Ancón y el Dispensario del Tivoli con los caminos que conducen a Balboa y a los terrenos del Hospital de Ancón, que pasa a la jurisdicción de Panamá, como resultado de los límites establecidos de acuerdo con la precedente de descripción, será mantenido abierto y en el mismo declive que tiene actualmente y conservado en buenas condiciones de servicio por dicho Gobierno de Panamá, de manera que sea una vía pública permanente, libre, sin interrupción, ni obstrucción, a menos que en lo futuro se arregle de manera distinta por medio de convenio mutuo entre los jefes de las autoridades ejecutivas de la República de Panamá y del Canal de Panamá.

IV

Se conviene en que el puerto de la ciudad de Panamá comprende las aguas marítimas al frente de la ciudad de Panamá que se extienden hacia el Norte y Este de una línea que comienza en un mojón de concreto erigido en Punta Mala, marcado «A» en el mapa a que ya se ha hecho referencia en esta Convención, y que se adelanta hacia el Sur setenta y dos grados y catorce minutos Este (S. 72°14' E.) a través de la isla central de las tres islas conocidas con el nombre de las Tres Hermanas, pero con exclusión de dicha isla central y extendiéndose tres millas marítimas desde la marca de la línea media de bajar en Punta Mala; y que el puerto de Ancón incluirá las aguas que se encuentran al Sur y Oeste de dicha línea, que será considerada dentro del puerto de Ancón. La dicha isla central que en ésta se incluye dentro del puerto de An-

cón está situada en dirección general Sur doce grados treinta minutos oeste (S. $12^{\circ}30'$ O.) ochocientos cincuenta y seis metros (856) desde el extremo de las Bóvedas y se encuentra en latitud Norte ocho grados, cincuenta y seis minutos (N. $8^{\circ}56'$) más mil cincuenta y ocho metros y ochenta y ocho centésimos de metro (1058.88) y longitud Oeste setenta y nueve grados y treinta y dos minutos ($O.79^{\circ}32'$) más trescientos cuarenta y dos metros y seis décimos de metro (342.6), el datum de dicha latitud y longitud es el conocido generalmente con el nombre de Panamá-Colón Datum. Todas las medidas geodésicas se refieren al verdadero meridiano.

La precedente descripción de la ciudad de Panamá y del puerto de Panamá está conforme con el mapa adjunto y marcado Anexo «B».

Se conviene en que la línea limítrofe permanente entre la ciudad de Colón y la Zona del Canal será como sigue:

Comienza en un punto situado en la orilla occidental de Boca Chica (algunas veces llamada Folks River) marcada «A» en el mapa, y cincuenta metros (50) al Este de la línea Central de la vía férrea del Ferrocarril de Panamá; de allí al norte y Noroeste, siempre paralelo con dicha vía férrea y a una distancia uniforme de cincuenta (50) metros del centro de dicha vía, hacia el centro de la Calle Bolívar (algunas veces llamada Calle «C»), dicho punto está marcado «B» en el mapa; de allí hacia el Norte a lo largo de la línea central de dicha Calle Bolívar, hacia la línea central de la Calle Once, este punto de intersección se halla marcado «C» en el mapa, de allí hacia el Oeste a lo largo de la línea central de la Calle Once, a una distancia de ciento sesenta y dos metros y cincuenta y tres centésimos de metro (162.53) hasta llegar a una cruz que está en el malecón de la Bahía de Limón; dicho punto está marcado «D» en el mapa; de allí hacia el Norte setenta y ocho grados y treinta minutos y treinta segundos Oeste (N. $78^{\circ}30' 30''$ O.) hasta la orilla de la Bahía de Limón en el punto que marca la línea media de la baja mar; de allí sigue la línea media de la baja mar alrededor de la ribera en una dirección Norte, Este, Sur, y Oeste hacia el punto inicial, con la excepción de que en el sitio en donde está el faro viejo de Colón se hace una desviación, tal como está representado en el mapa, para excluir una área de tierra que se dedicará para colocar allí una batería de los Estados Unidos, cuyo recinto será considerado como dentro de la Zona del Canal.

El sitio que se dedica para la batería de los Estados Unidos que arriba se menciona y que debe ser incluido dentro de la jurisdicción de la Zona del Canal se describe como sigue:

El punto inicial es un perno sobre una estaca enclavada en un punto de Colón, determinado con referencia a ciertos puntos salientes como a continuación se expresa: Sur cuarenta y un grados, seis minutos Este (S. $41^{\circ}6' E.$) veinticinco y veintidós centésimos (25.22) pies desde la esquina interior del pavimento superior del estanque de natación; Sur once grados treinta y siete minutos Oeste (S. $11^{\circ}37' O.$) ciento veintisiete y sesenta y ocho centésimos (127.68) pies desde una cruz gravada sobre un perno empotrado en una base de concreto a trece y nueve décimos (13.9) pies hacia el Nordeste del centro del borde Nordeste del estanque de natación; Sur treinta y cinco grados diez y ocho minutos Oeste (S. $35^{\circ}18' O.$) doscientos sesenta y seis y setenta y cinco centésimos (266.75) pies de la esquina Noroeste del Hotel Washington; y Norte sesenta y ocho grados, veintinueve minutos Oeste (N. $68^{\circ}29' O.$) quinientos cuarenta y tres y noventa y cinco centésimos (543.95) pies desde una cruz hecha sobre un riel colocado en una base de concreto en un punto donde la línea general Sur de edificación de la Calle Segunda intersecta la línea central de Bottle Alley; desde este punto inicial hacia el Sur cuarenta y tres grados cero minutos Oeste (S. $43^{\circ}00' O.$) doscientos cincuenta y ocho y cinco décimos (258.5) pies hasta un punto; de allí Norte cuarenta y siete grados cero minutos Oeste (N. $47^{\circ}00' O.$) noventa y sesenta y cuatro centésimos (90.64) pies hasta un punto; de allí por medio de una curva a la derecha con un radio de cincuenta y seis y ochenta y seis centésimos (56.86) pies y un ángulo central de cuarenta y cinco grados, cero minutos ($45^{\circ}00'$) cuarenta y cuatro y sesenta y seis centésimos (44.66) pies hasta un punto; de allí por una curva hacia la derecha con un radio de noventa y un pies (91.0) y un ángulo central de cuarenta y cinco grados cero minutos ($45^{\circ}00'$) setenta y uno y cuarenta y siete centésimos (71.47) pies hasta un punto; de allí al Norte cuarenta y tres grados, cero minutos Este (N. $43^{\circ}00' E.$) ciento setenta y siete y cinco décimos (177.5) pies hasta un punto; de allí hacia el Sur cuarenta y siete grados, cero minutos Este (S. $47^{\circ}00' E.$) ciento cincuenta y siete y cinco décimos (157.5) pies hasta el punto inicial. El área contenida en el espacio circunscrito por la línea especificada es de noventa y un centésimo (0.91) acres, más o menos. Todas las medidas se refieren al meridiano verdadero (Panamá-Colón Datum).

Fue modificado por el Artículo I de la Convención sobre el Corredor de Colón y ciertos otros corredores a través de la Zona del Canal de 24 de mayo de 1950, y posteriormente fue subrogado por

el Artículo VI del Tratado de Mutuo Entendimiento y Cooperación de 1955, así:

«ARTICULO I

El Artículo V de la Convención de Límites entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América, firmada el 2 de septiembre de 1914, queda modificado a fin de efectuar el siguiente cambio en la línea limítrofe entre la Ciudad de Colón y la Zona del Canal:

Comenzando en el monumento «B», el cual es una barrita de bronce enclavada en la línea limítrofe existente entre la Ciudad de Colón y la Zona del Canal (según se estipuló en el Artículo V de la Convención de Límites de 1914) hallándose dicho monumento «B» en latitud Norte $9^{\circ}21' + 1468.75$ pies y longitud Oeste $79^{\circ}54' + 1894.74$ pies, con referencia a la Base Panamá-Colón del Sistema de Triangulación de la Zona del Canal, y en el centro de la Avenida Bolívar entre las Calles 13 y 14; de allí S $15^{\circ}57'40''$ E., 117.10 pies a lo largo de la línea central de la Avenida Bolívar al monumento No. A-8, el cual es una barrita de bronce enclavada en la intersección con la línea central de la Calle 14 prolongada en sentido Oeste, en latitud Norte $9^{\circ}21' + 1356.18$ pies y longitud Oeste $79^{\circ}54' + 1862.57$ pies; de allí No. $73^{\circ}59'35''$ E., 172.12 pies a lo largo de la línea central de la Calle 14 al monumento No. A-7, el cual es una barrita de bronce enclavada en la intersección con la línea del cordón occidental de la Calle del Límite prolongada en sentido Norte, en latitud Norte $9^{\circ}21' + 1403.64$ pies y longitud Oeste $79^{\circ}54' + 1697.12$ pies; de allí en sentido Sur a lo largo del cordón occidental de la Calle del Límite y su prolongación al monumento No. A-4 el cual es una barrita de bronce enclavada en la intersección de dos curvas, en latitud Norte $9^{\circ}21' + 833.47$ pies y longitud Oeste $79^{\circ}54' + 980.94$ pies (esta línea últimamente mencionada pasa a lo largo de una curva a la izquierda con radio de 40.8 pies e intersección de sus tangentes en el punto A-6 en latitud Norte $9^{\circ}21' + 1306.23$ pies y longitud Oeste $79^{\circ}54' + 1669.37$ pies y de una curva a la derecha con radio de 1522 pies e intersección de sus tangentes en el punto A-5 en latitud Norte $9^{\circ}21' + 958.14$ pies y longitud Oeste $79^{\circ}54' + 1105.89$ pies); de allí a lo largo de una curva a la izquierda con radio de 262.2 pies e intersección de sus tangentes en el punto A-3 en latitud Norte $9^{\circ}21' + 769.7$ pies y longitud Oeste $79^{\circ}54' + 955.43$ pies; una curva a la derecha con radio de 320.0 pies e intersección de sus tangentes en el punto A-2 en latitud Norte $9^{\circ}21' + 673.38$ pies y longitud Oeste $79^{\circ}54' +$

836.40 pies; y una curva a la izquierda con radio de 2571.5 pies e intersección de sus tangentes en el punto A-1 en latitud Norte $9^{\circ}21' + 302.15$ pies y longitud Oeste $79^{\circ}54' + 680.96$ pies al monumento No. «A», el cual es un monumento de hormigón de 8 pulgadas en cuadro, con una barra redonda de bronce de 1-1/2" que tiene grabadas en la parte superior las letras «R.P.» y «C.Z.», latitud Norte $9^{\circ}21' + 45.60$ pies y longitud Oeste $79^{\circ}54' + 487.65$ pies; de allí N $21^{\circ}34' 50''$ E. 136.19 pies al monumento «Z», el cual es una barra de bronce de 1-1/2" en latitud Norte $9^{\circ}21' + 172.24$ pies y longitud Oeste $79^{\circ}54' + 437.56$ pies enclavada en la esquina Sudoeste del muelle de hormigón que se interna en Folks River y sobre la línea limítrofe existente entre la Ciudad de Colón y la Zona del Canal (según se estipuló en el Artículo V de la Convención de Límites de 1914 y la cual es la línea media de la bajamar en Folks River). La línea limítrofe descrita arriba aparece en el Mapa I, Anexo A, que acompaña y forma parte de esta Convención».

«ARTICULO VI

El Artículo V de la Convención de Límites firmada el 2 de septiembre de 1914 entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América, quedará subrogado por las siguientes estipulaciones:

«Se conviene en que los límites permanentes entre la Ciudad de Colón (inclusive la Bahía de Colón, según se define en el Artículo VI de la Convención de Límites firmada el 2 de septiembre de 1914, y otras aguas adyacentes a las playas de Colón) y la Zona del Canal serán los siguientes:

Partiendo de un punto no marcado que se denomina «E», el cual está situado en el lindero Nordeste del Corredor de Colón (en su extremidad que queda hacia Colón) y cuya posición geodésica, con referencia a la Base de Panamá-Colón del Sistema de Triangulación de la Zona del Canal es de $9^{\circ}-21'$ más 0.000 metros (0.00 pies) de latitud Norte y $79^{\circ}-54'$ más 108.536 metros (356.09 pies) de longitud occidental, se sigue desde dicho punto inicial «E» con los siguientes linderos y medidas:

En dirección Este se mide una distancia de 811.632 metros (2662.83 pies) a lo largo de latitud Norte $9^{\circ}-21'$ más 0.000 metros (0.00 pies) hasta llegar a un punto no marcado en el Río Folks, denominado «F» situado a $70^{\circ}-53'$ más 1127.762 (3700.00 pies) de longitud occidental.

Luego con rumbo N- $36^{\circ}-36'-36''$ -E y una distancia de 797.358

metros (2616.00 pies) se llega a un punto no marcado en la Bahía de Manzanillo denominado «G»;

Luego con rumbo N-22°-41'-30"-O y una distancia de 363.322 metros (1192.00 pies) se llega a un punto no marcado en la Bahía de Manzanillo denominado «H»;

Luego con rumbo N-56°-49'-00"-O y una distancia de 236.830 metros (777.00 pies) se llega a un punto no marcado en la Bahía de Manzanillo denominado «I»;

Luego con rumbo N-29°-51'-00"-O y una distancia de 851.308 metros (2793.00 pies) se llega a un punto no marcado en la Bahía de Manzanillo denominado «J»;

Luego con rumbo N-50°-56'-00"-O y una distancia de 1003.404 metros (3292.00 pies) se llega a un punto no marcado en la Bahía de Limón denominado «K»;

Luego con rumbo S-56°-06'-11"-O y una distancia de 1298.100 metros (4258.85 pies) se llega a un punto no marcado en la Bahía de Limón denominado «L», situado en el lindero Norte del puerto de Colón.

De allí a lo largo del lindero del Puerto de Colón, según lo estipulado en el Artículo VI de la Convención de Límites firmada entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América, el 2 de septiembre de 1914, hasta llegar al monumento «D», como sigue:

En dirección N-78°-30'-30"-O y una distancia de 641.523 metros (2104.73 pies), en línea con el Faro de Punta Toro hasta llegar a un punto no marcado en la Bahía de Limón denominado «M», que está situado a 330.00 metros (1082.67) en dirección Este y en ángulo recto con el eje del Canal de Panamá;

En dirección S-00°-14'-50"-O en línea paralela al eje del Canal de Panamá a 330.00 metros (1082.67 pies) al Este de dicho eje, se mide una distancia de 937.097 metros (3074.46 pies) hasta llegar a un punto no marcado en la Bahía de Limón denominado «N»;

En dirección S-78°-30'-30"-E una distancia de 1204.868 metros (3952.97 pies) hasta llegar al monumento «D» que es un monumento de concreto situado en la playa oriental de la Bahía de Limón.

De allí a lo largo del lindero entre la Ciudad de Colón y la Zona del Canal, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo V de la Convención de Límites firmada el 2 de septiembre de 1914, hasta llegar al monumento «B», como sigue:

Desde el punto «D» con rumbo S-78°-30'-30"-E y una distancia de 78.837 metros (258.65 pies) se pasa por los monumentos 28 y 27, que consisten en pernos de latón en el pavimento, con distan-

cias sucesivas de 48.756 metros (159.96 pies), 8.614 metros (28.26 pies) y 21.467 metros (70.43 pies) hasta llegar al punto «D», que es un monumento de concreto;

Desde este punto se sigue con rumbo N-74°-17'-35"-E y una distancia de 162.642 metros (533.60 pies) a lo largo del eje de la Calle Once pasando por los monumentos Nos. 26, 25, 24 y 23, que consisten en pernos de latón en el pavimento, con distancia sucesiva de 29,005 metros (95.16 pies), 27,743 metros (91.02 pies) 50.813 metros (166.71 pies), 48.360 metros (158.66 pies) y 6.721 metros (22.05 pies) hasta llegar a «C», que es un punto no marcado debajo del pedestal del reloj sobre el eje de la Avenida Bolívar;

Desde este punto se sigue con rumbo S-15°-58'-00"-E y una distancia de 294.312 metros (965.59 pies) a lo largo del eje de la Avenida Bolívar pasando por los monumentos Nos. 22, 21, 20, y 19, que consisten en pernos de latón en el pavimento, con distancias sucesivas de 4.374 metros (14.35 pies), 43.626 metros (143.13 pies), 72.777 metros (238.77 pies), 99.600 metros (326.77 pies) y 73.935 metros (242.57 pies) hasta llegar al monumento «B» que consiste en un perno de latón. (El monumento «B» es el punto de partida a que se refiere el Artículo I de la Convención entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América relativa al Corredor de Colón y ciertos otros corredores por la Zona del Canal de Panamá, firmada en Panamá el 24 de mayo de 1950).

De aquí, a lo largo del lindero entre la Ciudad de Colón y la zona del Canal, hasta llegar al monumento «A» según lo estipulado en el Artículo I de la Convención sobre el Corredor a que hace referencia el párrafo anterior:

En dirección S-15°-57'-40"-E, se miden 35,692 metros (117.10 pies) a lo largo del eje de la Avenida Bolívar hasta llegar al monumento número «A-8» que consiste en un perno de latón situado en la intersección con el eje de la Calle 14 proyectado en dirección Oeste el cual está a 9°-21' más 413.364 metros (1356.18 pies) de latitud Norte y 79°-54' más 567.712 metros (1862.57 pies) de longitud occidental.

Desde allí con rumbo N-73°-59'-35"-E se mide una distancia de 52,462 metros (172.12 pies) a lo largo del eje de la Calle 14 hasta llegar al monumento número «A-7» que consiste en un perno de latón situado en la intersección con la línea del cordón occidental de la Calle del Límite, proyectado hacia el Norte y que está a 9°-21' más 427.830 metros (1403.64 pies) de latitud norte y 79°-54' más 517.283 metros (1697.12 pies) de longitud Occidental.

Desde allí, en dirección Sur a lo largo del cordón occidental de la Calle del Límite y su prolongación hasta el monumento número «A-4» que consiste en un perno de latón situado en la intersección de dos curvas a $9^{\circ}-21'$ más 254.042 metros (833.47 pies) de latitud norte y $79^{\circ}-54'$ más 298.991 metros (980.94 pies) de longitud occidental pasando esta última línea por una curva a la izquierda con un radio de 12.436 metros (40.8 pies) y la intersección de sus tangentes en el punto «A-6» que está a $9^{\circ}-21'$ más 398.140 metros (1306.23 pies) de latitud norte y $79^{\circ}-54'$ más 508.825 metros (1669.37 pies) de longitud occidental y una curva a la derecha con un radio de 463.907 metros (1522.00 pies) que tiene la intersección de sus tangentes en el punto «A-5» cuya latitud es de $9^{\circ}-21'$ más 292.042 metros (958.14 pies) de latitud norte y $79^{\circ}-54'$ más 337.076 metros (1105.89 pies) de longitud occidental.

Desde el punto «A-4» se sigue por una curva a la izquierda la cual tiene un radio de 79.919 metros (262.2 pies) y la intersección de sus tangentes en el punto «A-3» que está a $9^{\circ}-21'$ más 234.413 metros (769.07 pies) de latitud norte y $79^{\circ}-54'$ más 291.216 metros (955.43 pies) de longitud occidental; luego por una curva a la derecha la cual tiene un radio de 97.536 metros (320.00 pies) y la intersección de sus tangentes en el punto «A-2» que está a $9^{\circ}-21'$ más 205.247 metros (673.38 pies) de latitud norte y $79^{\circ}-54'$ más 254.935 metros (836.40 pies) de longitud occidental y luego por una curva a la izquierda la cual tiene un radio de 783.975 metros (2571.5 pies) y la intersección de sus tangentes en el punto «A-1» que está a $9^{\circ}-21'$ más 92.096 metros (302.15 pies) de latitud norte y $79^{\circ}-54'$ más 207.557 metros (680.96 pies) de longitud occidental llegando entonces al monumento denominado «A» que consiste en un perno redondo de latón de pulgada y media ubicado en el viejo muro frente al mar, que está a $9^{\circ}-21'$ más 13.899 metros (45.60 pies) de latitud norte y $79^{\circ}-54'$ más 148.636 metros (487.65 pies) de longitud occidental.

De allí con rumbo $S-21^{\circ}-34'-50''-O$ y una distancia de 8.897 metros (29.19 pies) se llega a un punto no marcado denominado No. 1; luego en dirección Sudeste, se mide una distancia de 7.090 metros (23.26 pies) a lo largo de una curva a la izquierda la cual tiene un radio de 791.409 metros (2596.48 pies) y cuya cuerda lleva la dirección $S-37^{\circ}-28'-20''-E$, y mide 7.090 metros (23.26 pies) hasta llegar a un punto no marcado denominado No. 2 situado en el lindero sudoeste del Corredor de Colón punto que está a $9^{\circ}-21'$ más 0.000 metros (0.00 pies) de latitud norte.

La dirección de las líneas se refiere al meridiano verdadero.

Los linderos descritos arriba son los que aparecen en el Plano de la Compañía del Canal de Panamá No. 6117-22, titulado «Línea Límitrofe entre la Ciudad de Colón y la Zona del Canal», escala 1 pulgada igual 600 pies, fechado 23 de diciembre de 1954, preparado para el Gobierno de la Zona del Canal, el cual se agrega como Anexo a este Tratado y forma parte del mismo».

El Artículo VIII del Tratado General firmado el 2 de marzo de 1936, tal como fue reformado por el Artículo III de la Convención firmada el 24 de mayo de 1950 entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América, Artículo que se refiere al Corredor de Colón y ciertos otros corredores a través de la Zona del Canal, queda modificado excluyéndose del extremo occidental o de Colón, del Corredor de Colón, la parte de dicho Corredor que se encuentra al Norte de la latitud 9°-21' Norte, de manera que dicha parte quede dentro de los límites de la Ciudad de Colón arriba descritos.

Este Artículo entrará en vigor al terminar la salida de los Estados Unidos de América de los sectores de la Ciudad de Colón conocidos como Nuevo Cristóbal, Playa de Colón y el área de De Lesseps, a excepción de los lotes que retenga para usos consulares, pero queda entendido que en ningún caso entrará a regir antes del canje de ratificaciones de este Tratado y del canje de los instrumentos de ratificación de la Convención firmada el 24 de mayo de 1950 a la cual se refiere el anterior parágrafo».

VI

El Puerto de Colón consistirá de las aguas marítimas que se encuentran al Oeste de la Ciudad de Colón, y sus límites serán los siguientes:

La línea limitrofe del Puerto de Colón hacia la parte del Sur consiste en una línea que se dirige hacia el Norte setenta y ocho grados treinta minutos treinta segundos Oeste (N. 78°30'30" O.), la cual comienza en una cruz grabada en el malecón de concreto hacia el lado Este de la Bahía de Limón y en la línea central de la Calle Once de Colón en su prolongación Oeste. Este punto está marcado con la letra «D» en el mapa (Exhibit C). Principiando en la marca de la línea media de la baja marea en la Bahía de Limón sobre la línea anteriormente descrita, la demarcación continúa hacia el Noroeste a lo largo de la línea hasta un punto en la Bahía de Limón marcado «E» en el mapa y situado trescientos treinta

metros (330) al Este de la línea central del Canal de Panamá. Desde aquí, volviendo a la derecha y siguiendo en dirección Norte la línea corre paralelamente a la línea central antes mencionada y a una distancia de trescientos treinta (330) metros al Este, desde aquí hasta encontrar una línea recta imaginaria trazada a través del faro de Punta de Toro, esta línea lleva una orientación Sur setenta y ocho grados, treinta minutos y treinta segundos Este (S. $78^{\circ}30'30''$ E.) y su punto de intersección está marcado «F» en el mapa, desde aquí, volviendo a la derecha y siguiéndose a lo largo de la ya mencionada línea hacia el Sur setenta y ocho grados, treinta minutos y treinta segundos (S. $78^{\circ}30'30''$ E.) hasta un punto sobre el límite del sitio arriba especificado para la batería de los Estados Unidos; de allí torciendo a la derecha y siguiendo a lo largo de la dicha línea limítrofe del sitio mencionado hasta la línea, que marca la línea media de la baja marea en la Bahía de Limón. De allí volviendo a la derecha y siguiendo a lo largo de dicha línea marítima en una dirección generalmente hacia el Sur, hasta el punto inicial al pie de la calle once.

Todas las medidas de esta descripción y del plano arriba mencionado se refieren al meridiano verdadero (Panamá-Colón Datum).

La descripción que antecede de la Ciudad de Colón y del Puerto de Colón está conforme con el plano adjunto marcado «C».

VII

Se conviene en que la República de Panamá conservará el derecho de usar libremente las aguas de la Zona del Canal en las bahías de Limón y Manzanillo con el fin de que las naves destinadas al tráfico con la ciudad de Colón tengan libre entrada al Puerto de Colón y libre salida del mismo, sujeta en su tránsito a los reglamentos y leyes de policía y a las disposiciones de cuarentena y de sanidad que los Estados Unidos y las autoridades de la Zona del Canal establezcan en dichas aguas.

Los Estados Unidos convienen también en que las pequeñas embarcaciones pueden atracar en el malecón que está al Este y que se extiende a lo largo de la ribera al sur de la terminación de la Calle Novena, recientemente construida por el Ferrocarril de Panamá, en la Bahía de Colón libre de todo derecho de muellaje o de embarque y desembarque que de acuerdo con las condiciones de la concesión que obtuvo del gobierno de Colombia pudiera percibir dicha compañía; y los Estados Unidos se comprometen además a construir y sostener un muelle de Embarque y desembar-

que en una pequeña ensenada que queda del lado Sur de la Isla de Manzanillo, en la parte Noroeste del brazo de mar conocido con el nombre de Boca Chica (algunas veces llamado Folks River) que se usará como puerto de refugio para las pequeñas embarcaciones costaneras de la República de Panamá sin pagar ningún derecho de muellaje ni de embarque y desembarque.

El segundo párrafo de este Artículo fue totalmente abrogado por el Artículo VII del Tratado de Mutuo Entendimiento y Cooperación de 1955, así:

«ARTICULO VII

El segundo párrafo del Artículo VII de la Convención de Límites suscrita el 2 de septiembre de, 1914, entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América, quedará totalmente abrogado en la fecha en que entre en vigor el presente Tratado.

El muelle ubicado en la pequeña ensenada situada al Sur de la Isla de Manzanillo, construido de conformidad con lo estipulado en el párrafo segundo del Artículo VII de la Convención de Límites de 1914, celebrada entre los dos países, pasará a ser propiedad de la República de Panamá en la fecha en que entre en vigor el presente Tratado».

VIII

Por cuanto por el presente Convenio la vía conocida con el nombre de «Camino de las Sabanas» quedará completamente dentro de los linderos de la ciudad de Panamá, las autoridades de la Zona del Canal quedarán por el presente relevadas de la obligación de reparar y sostener este camino o cualquier parte de él, lo cual será hecho y costado en adelante por las autoridades de la República de Panamá.

IX

Se conviene en que la República de Panamá no construirá ni permitirá que se construya ninguna vía férrea que atraviese las Sabanas o cualquier otro territorio transferido por la presente a dicha República sin que antes medie un arreglo mutuo y satisfactorio entre los dos gobiernos; y ello será sin menoscabo de cualquier derecho que puedan tener los Estados Unidos para objetar la construcción de tales ferrocarriles de conformidad con las estipulaciones del Tratado del Canal de 18 de noviembre de 1903.

X

Las partes contratantes convienen por medio de la presente en que esta Convención no disminuirá ni extinguirá o alterará ninguno de los derechos adquiridos por ellas anteriormente de conformidad con el Tratado del Canal de 18 de noviembre de 1903; y se conviene además expresamente en que los Estados Unidos en ejercicio de los derechos que le fueron concedidos de acuerdo con los Artículos 2o. y 3o. de dicho Tratado del Canal sujetándose a lo previsto en el Artículo 6o. del mismo Tratado podran entrar a usar, ocupar y tener el dominio de toda o cualesquiera partes de las tierras de las Sabanas, o cualquier otro territorio que por la presente le sea transferido a la República de Panamá, según sea necesario o conveniente para la construcción, funcionamiento, conservación, sanidad o protección del Canal o de cualesquiera canales auxiliares, u otros trabajos necesarios o convenientes para la construcción, conservación, funcionamiento, sanidad o protección de dicha empresa.

XI

Este convenio se entiende que no modifica el derecho que tienen las autoridades de la Zona del Canal para emplear ciudadanos de la República de Panamá residentes en el territorio de la República de acuerdo con el Artículo 5o. del arriba mencionado Convenio del 15 de julio de 1904, para el cual objeto el Gobierno de la República concedió el permiso necesario de acuerdo con el parágrafo 2o. del Artículo 7o. de la Constitución Panameña.

XII

Las causas civiles y criminales que estén pendientes en los Tribunales de la República de Panamá y en los de la Zona del Canal al ponerse en vigor esta Convención, no serán afectadas por ella y en consecuencia las respectivas Cortes de Justicia en donde estén pendientes, las sustanciarán y fallarán en definitiva como si esta Convención no hubiese sido celebrada.

XIII

Los mapas anexos a esta Convención se firman por los representantes de los respectivos Gobiernos para su identificación.

Este Convenio, cuando sea firmado por los Plenipotenciarios de las altas partes contratantes, será ratificado por los dos Gobiernos de conformidad con sus respectivas leyes constituciona-

les y la ratificación será canjeada en Panamá dentro del menor tiempo posible.

En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios firmamos la presente Convención por duplicado, en español y en inglés y colocamos nuestros respectivos sellos. Hecho en la Ciudad de Panamá, a los dos días del mes de septiembre del año de Nuestro Señor Mil novecientos catorce.

(Sello)

(Fdo.) *E. T. Lefevre*

(Sello)

(Fdo.) *William Jennings Price.*

REPÚBLICA DE PANAMÁ.— Poder Ejecutivo Nacional.— Panamá, 5 de septiembre de 1914.

APROBADA

Sométase a la consideración de la Asamblea Nacional.

(Fdo.) BELISARIO PORRAS

El Secretario de Relaciones Exteriores

(Fdo.) *E.T. Lefevre*

Aprobada por la Ley número 29, de 8 de diciembre de 1914, y por Resolución (del Senado de los Estados Unidos de América) de 22 de octubre de 1914.

El Canje de las ratificaciones se efectuó en Panamá, el 11 de febrero de 1915.

14
Tratado Thomson-Urrutia*
(1914)

**TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
FIRMADO EN BOGOTÁ EL 6 DE ABRIL DE 1914.**

**TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
PARA EL ARREGLO DE SUS DIFERENCIAS PROVENIENTES
DE LOS ACONTECIMIENTOS REALIZADOS
EN EL ISTMO DE PANAMÁ EN NOVIEMBRE DE 1903.**

La República de Colombia y los Estados Unidos de América, deseando remover todas las divergencias provenientes de los acontecimientos políticos ocurridos en Panamá en noviembre de 1903, restaurar la cordial amistad que anteriormente caracterizó las relaciones entre los dos países, y también definir y regularizar sus derechos e intereses respecto del Canal interoceánico que el Gobierno de los Estados Unidos está construyendo a través del Istmo de Panamá, han resuelto con tal propósito celebrar un Tratado, y en consecuencia han nombrado Plenipotenciarios suyos:

Su Excelencia el Presidente de la República de Colombia, a Francisco José Urrutia, Ministro de Relaciones Exteriores; Marco Fidel Suárez, primer Designado para ejercer el Poder Ejecutivo; Nicolás Esguerra, ex-Ministro de Estado; José María González Valencia, Senador, Rafael Uribe, Senador, y Antonio José Uribe, Presidente de la Cámara de Representantes; y su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos de América, a Thaddeus Austin Thomson, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia de los Estados Unidos de América ante el Gobierno de la República de Colombia;

* Eduardo Guzmán Esponda, *Tratados y convenciones de Colombia*, (Bogotá, Imprenta Nacional, 1939), págs. 75-78.

Quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes respectivos, que fueron hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO I

El Gobierno de los Estados Unidos de América, deseoso de poner término a todas las controversias y diferencias con la República de Colombia provenientes de los acontecimientos que originaron la actual situación del Istmo de Panamá, en su propio nombre y en nombre del pueblo de los Estados Unidos, expresa sincero sentimiento por cualquier cosa que haya ocurrido ocasionada a interrumpir o alterar las relaciones de cordial amistad que por tan largo tiempo existieron entre las dos naciones.

El Gobierno de la República de Panamá, en su propio nombre y en nombre del pueblo colombiano, acepta esta declaración en la plena seguridad de que así desaparecerá todo obstáculo para el restablecimiento de una completa armonía entre los dos países.

ARTÍCULO II

La República de Colombia gozará de los siguientes derechos respecto al Canal interoceánico y al ferrocarril de Panamá:

- 1º. La República de Colombia podrá transportar en todo tiempo por el canal interoceánico sus tropas, material de guerra y buques de guerra, aun en caso de guerra entre Colombia y otro país, sin pagar ningún derecho a los Estados Unidos.
- 2º. Los productos del suelo y de la industria colombiana que pasen por el Canal, así como los correos colombianos estarán exentos de todo gravamen o derechos distintos de aquellos a que puedan estar sometidos los productos y correos de los Estados Unidos. Los productos del suelo y de la industria colombiana, tales como ganado, sal y víveres serán admitidos en la Zona del Canal, así como en las islas y tierra firme ocupadas o que se ocupan por los Estados Unidos como auxiliares y accesorios de la empresa, sin pagar otros derechos o impuestos que los que deben pagarse por productos similares de los Estados Unidos.
- 3º. Los ciudadanos colombianos que atraviesen la Zona del Canal quedarán exentos de todo peaje, impuesto o derecho a que no estén sujetos los ciudadanos de los Estados Unidos, con la condición de que presenten la prueba competente de su nacionalidad.
- 4º. Durante la construcción del canal interoceánico y después siempre que esté interrumpido el tráfico por el Canal o que por

cualquier otra causa sea necesario hacer uso del ferrocarril, las tropas, materiales de guerra, productos y correos de la República de Colombia, arriba mencionados, serán transportados, aun en caso de guerra entre Colombia y otro país, por el ferrocarril entre Ancón y Cristóbal o por cualquiera otro ferrocarril que los sustituya, pagando solamente los mismos impuestos y derechos a que están sujetos las tropas, materiales de guerra, productos y correos de los Estados Unidos. Los Oficiales, agentes y empleados del Gobierno de Colombia, mediante la comprobación de su carácter oficial o de su empleo, tendrán también derecho a ser transportados por dicho ferrocarril en las mismas condiciones de los Oficiales, agentes y empleados del Gobierno de los Estados Unidos. Las disposiciones de este parágrafo no serán aplicables, sin embargo, en caso de guerra entre Colombia y Panamá.

- 5º. El carbón, el petróleo y la sal marina que se produzcan en Colombia y pasen de la Costa Atlántica de Colombia a cualquier puerto colombiano en la costa del Pacífico, y viceversa, se transportan en el dicho ferrocarril, libres de todo gravamen, excepto el coste efectivo de transporte y de carga y descarga de los trenes, coste que en ningún caso podrá ser superior a la mitad del flete ordinario que se cobre por productos similares de los Estados Unidos que pasen por el ferrocarril en tránsito de un puerto a otro de los Estados Unidos.

ARTÍCULO III

Los Estados Unidos de América convienen en pagar a la República de Colombia, dentro de los seis meses siguientes al canje de las ratificaciones de este Tratado, la suma de veinticinco millones de pesos (\$25.000.000.00) oro, en moneda de los Estados Unidos.

ARTÍCULO IV

La República de Colombia reconoce a Panamá como nación independiente, y conviene en que los límites entre los dos Estados sean tomados como base la Ley colombiana de 9 de junio de 1855, los siguientes: del cabo Tiburón a las cabeceras del río de la Miel, y siguiendo la cordillera por el cerro de Gandi a la sierra de Chugar gún y de Mali a bajar por los cerros de Nigue a los altos de Aspavé, y de allí a un punto sobre el Pacífico equidistante de Cocalito y la Ardita.

En consecuencia de este reconocimiento, el Gobierno de los

Estados Unidos, tan pronto como sean canjeadas las ratificaciones de este Tratado, dará los pasos necesarios para obtener del Gobierno de Panamá el envío de un Agente, debidamente acreditado, que negocie y concluya con el gobierno de Colombia un Tratado de paz y amistad que tenga por objeto, tanto el establecimiento de relaciones diplomáticas regulares entre Colombia y Panamá, como el arreglo de todo lo relativo a obligaciones pecuniarías entre los dos países, de acuerdo con precedentes y principios jurídicos reconocidos.

ARTÍCULO V

Este Tratado se aprobará y ratificará por las Altas Partes contratantes de conformidad con sus respectivas leyes, y las ratificaciones se canjearán en la ciudad de Bogotá, lo más pronto que fuere posible.

En fe de lo cual los dichos Plenipotenciarios han firmado en doble ejemplar el presente Tratado y le han puesto sus respectivos sellos.

Hecho en la ciudad de Bogotá el día seis de abril del año de Nuestro Señor de mil novecientos catorce.

(Sello) *Francisco José URRUTIA*

(Sello) *Nicolás ESGUERRA*

(Sello) *Rafael URIBE URIBE*

(Sello) *Marco Fidel SUÁREZ*

(Sello) *José M. González VALENCIA*

(Sello) *Antonio José URIBE*

(Sello) *Thaddeus Austin THOMSON*

15
Decreto Número 130*
(de 29 de agosto de 1914)



POR EL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACION
A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PARA EL CONTROL DE LA COMUNICACIÓN RADIO-TELEGRÁFICA.

El Presidente de la República, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que conforme al tratado Bunau-Varilla Hay la República de Panamá está obligada a facilitar a Estados Unidos todos los medios necesarios y convenientes para la conservación, protección y defensa del canal interoceánico construido a través del Istmo;

Que dicho Gobierno considera indispensable para ese efecto asumir desde ahora de modo permanente y completo el control de las estaciones telegráficas inalámbricas, fijas y móviles, en todo el territorio y aguas de la República de Panamá;

Que los intereses y a la misma seguridad de la República de Panamá conviene que la comunicación radiográfica este dirigida y reglamentada por la Nación que garantiza su independencia en pacto solemne.

DECRETA:

ARTICULO ÚNICO. Desde esta fecha las estaciones radiográficas, fijas y móviles, y todo lo relativo a las comunicaciones inalámbricas en territorio y aguas panameñas, estarán bajo el control permanente y completo de los Estados Unidos de América y para afianzar ese fin dicho Gobierno tomará las medidas que crea necesarias.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Panamá a los veintinueve días del mes de agosto de mil novecientos catorce.

BELISARIO PORRAS

* *Gaceta Oficial* No. 2115. Panamá, 1 de septiembre de 1914, pp. 5112.

.....

Se deroga el Decreto Número 130, de 1914.

DECRETO NÚMERO 175 DE 1930* (de 29 de diciembre)

POR EL CUAL SE DEROGA EL DECRETO NÚMERO 130 DE 1914.

El Presidente de la República, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que la Asamblea Nacional, por medio de la ley 34 de 7 de noviembre de 1930, ratificó la Convención radiográfica Internacional suscrita en Washington el 25 de noviembre de 1927.

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga en todas sus partes el Decreto número 130 de 29 de agosto de 1914, por el cual se concede una autorización a los Estados Unidos de América para el control de las comunicaciones radiotelegráficas, expedido por el Órgano de esta Secretaría.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Panamá, a los veinte y nueve días del mes de diciembre de mil novecientos treinta.

F.H. Arosemena

El Secretario de Gobierno y Justicia,
Daniel Ballen

NOTA DE LA DIRECCIÓN.— Se publica este decreto en esta fecha por haberse encontrado que no había sido promulgado conforme ordena la ley.

* Gaceta Oficial No. 6623. Panamá, 2 de agosto de 1933; p. 1.

16
Fallo White*
(1914)



Washington, Septiembre 12 de 1914.

Antes de proceder al examen del asunto que se ha de resolver, y con objeto de evitar una interrupción en la continuidad de esta exposición, se hace observar que una moción hecha por una de las partes al efecto de que se desecharan ciertos documentos por no haber sido presentados por duplicado, y una moción de la otra parte al efecto de que se eliminaran ciertos documentos porque se dice que son parciales y por lo tanto faltos de autoridad, han sido ambas consideradas y halladas improcedentes para la decisión del caso, y las mociones son por lo tanto desechadas sin más declaración al respecto.

Asimismo, antes de proseguir, declaro que cuando se aceptó la obligación de estudiar este caso de acuerdo con lo dispuesto en la Convención, quedó entendido que todos los documentos y papeles escritos en idioma español serían vertidos al inglés por las partes y por consiguiente, las referencias que se hagan a dichos documentos se harán a las traducciones que las partes han proporcionado.

Para permitir una apreciación más clara de las materias acerca de las cuales se ha de decidir, es conducente establecer desde un principio, en primer lugar, la situación geográfica de los dos países, que son partes en este arbitraje, y en segundo lugar, la historia de la naturaleza origen, desarrollo y hechos no discutidos de la controversia. Al hacerlo así para los efectos de los derechos con los cuales se relaciona este arbitraje, Costa Rica se tomará como representando no solamente los derechos de que goza en su nombre, sino todos aquellos relacionados con el asunto que aquí se discute, que posee en concepto de sucesor de un gobierno anterior, o sea la República de Centro América; y Panamá será también tomada como representando para los mismos fines, no solamente sus propios derechos

* Secretaría de Relaciones Exteriores. MEMORIAS. Imprenta Esto y Aquello, Panamá. 1916; pp. 11-37.

sino también los de sus anteriores gobernantes, la República de Colombia, la República de Nueva Granada, los Estados Unidos de Colombia y la República de Colombia.

PRIMERO. Los dos países tienen extensas costas en el Atlántico y en el Pacífico, y el territorio entre los océanos está dividido por la cadena principal de las Cordilleras. Sin tomar en cuenta ningún conflicto en cuanto a límites, si es que existe alguno, entre Panamá y la República de Colombia, que se encuentra al Sudeste de Panamá, el territorio de Costa Rica y Panamá en el Atlántico se extiende desde el límite superior de Costa Rica aproximadamente en el oncenso paralelo de latitud en dirección Sudeste hacia abajo hasta cerca de 80°40', en una distancia aproximada de 450 millas sin tener en cuenta las sinuosidades de la costa.

SEGUNDO. Durante setenticinco u ochenta años ha habido controversias entre Panamá y Costa Rica o sus antecesores con respecto a la extensión de su autoridad territorial. Todas las disputas a que se ha hecho referencia han surgido de dos puntos de vista que difieren entre sí fundamentalmente, el uno que consiste en la pretensión por parte de Panamá de que su soberanía territorial comprendía toda la costa atlántica, no solamente a lo largo de su propio frente, sino también a lo largo del frente de Costa Rica y Nicaragua, país que se encuentra más allá de Costa Rica, puesto que su pretensión de soberanía sólo terminaba en el Cabo Gracias a Dios, que era prácticamente el límite más extremo de Nicaragua que divide ese país de Honduras. Esta pretensión se basaba en que lo que se afirmaba era el efecto de una Real Orden Española de 1803. La otra pretensión, distinta de la anterior porque descansa sobre consideraciones de otro orden, y que necesitaría ser considerada aún en el caso de que la primera se tuviera por infundada, se relacionaba con el límite que divide el territorio de los dos países en la extensión desde el Atlántico hasta las Cordilleras, a través de estas y hasta la costa del Pacífico. En lo que se refiere a toda la pretensión territorial y a los puntos de la mera controversia de límites que conciernen al cruce de las Cordilleras y a la línea limítrofe en el lado del Pacífico, no precisa hacer ninguna declaración por las razones que luego se indicarán. Por tanto, el aspecto de la controversia que ha de considerarse aquí envuelve solamente el límite entre los dos países en el territorio situado en el lado del Atlántico entre ese océano y la línea de las Cordilleras.

Por parte de Costa Rica, en substancia y desde un principio, se ha venido alegando que su límite inferior comprendía una isla en el

Océano Atlántico conocida con el nombre de Escudo de Veraguas, al frente de la boca de un río llamado el Chiriquí que desemboca en el Atlántico un poco más abajo de lo que se conoce con el nombre de Bahía del Almirante, y siguiendo el curso de ese río a las cordilleras. Este límite pretendido, si fuese válido, había necesariamente privado a Panamá o a sus antecesores de una extensa área de territorio sobre la cual ese país mantenía jurisdicción. El hecho de alegar Costa Rica derecho a ese límite estaba basado principalmente, en lo que se afirmaba ser el resultado de ciertas Cédulas o Capitulaciones españolas de 1540, 1573 y 1600, además de una referencia a otros documentos o decretos españoles. También por razones que se harán aparentes más adelante, los hechos concernientes a la justicia de esta pretensión de límite por parte de Costa Rica no necesitan ser más extensamente enumerados.

Por otra parte, la pretensión por parte de Panamá o de sus antecesores era que la línea limítrofe la constituía un río que tenía su nacimiento en las Cordilleras y desembocaba en el Atlántico en un punto mucho más arriba de la Bahía de Almirante. El río, que, según alegaba Panamá, constituía el límite, fue designado con varios nombres y el punto en que desembocaba en el Atlántico parecería que por tiempo considerable ha sido dudoso. Sin embargo, no puede ser objeto de verdadera controversia el hecho de que llegó a admitirse que Panamá reconocía que el río que ella tenía la seguridad y seguía insistiendo constituía el límite en todo su curso desde las montañas, desembocaba en el Océano Atlántico un poco más abajo de un punto designado indistintamente con los nombres de Punta Carreta o Punta Mona —que dicho río era en verdad el primero que desembocaba en el Atlántico abajo de ese punto— y que en su desembocadura cuando menos el río en cuestión era conocido con el nombre de Sixaola. La controversia de límites envolvía por lo tanto el territorio que se extiende entre los dos ríos objeto de la contienda en sus cursos desde la línea de montañas en la cual directa o indirectamente tenían su nacimiento hasta el Océano, y el área y extensión de la controversia, por consiguiente, dependía naturalmente de la dirección del curso de los ríos limítrofes que las partes tenían en mente y los cuales aseguraban, respectivamente, constituían la división entre los dos países.

Como la exposición que acaba de hacerse de un modo general se refiere a las cuestiones de hecho y de derecho acerca de las cuales se ha de decidir, pudiera tomarse propiamente como adecuada para los fines del mero bosquejo a que me referí en un prin-

cipio, y por consiguiente me dispensaría de la necesidad de hacer ahora otra declaración antes de entrar en el análisis de las cuestiones de derecho y de hecho para la decisión de acuerdo con el presente arbitraje.

Pero como cuando se llega a la ejecución de ese deber, se hará aparente que en su último análisis cada conclusión tendiente a establecer la decisión envolverá una apreciación de los hechos concernientes a la alegación por Panamá de un límite fluvial, toda vez que la aserción del límite fluvial hecha por Costa Rica está, como lo he dicho, fuera de caso con objeto de evitar repeticiones y dejar el camino bien abierto para llegar a las conclusiones, me propongo establecer los hechos que se refieren a los puntos esenciales que deben ser considerados con relación a la pretensión de Panamá, bajo un tercer encabezamiento, como sigue:

TERCERO. El origen de la pretensión de Panamá, los actos, procedimientos y admisiones de ese Gobierno o de sus predecesores en relación con dicha pretensión, las negociaciones para un arbitraje anterior, las circunstancias de esas negociaciones, los tratados hechos conviniendo en el mismo el fallo, la conducta seguida por las partes al ejecutarlo, la controversia que resultó ya sea en lo tocante a su interpretación ya en cuanto a su fuerza obligatoria, el haber suscrito la convención de arbitraje que ahora está en ejecución y otros hechos adicionales que se encuentran en esta relación y pueden considerarse y tomarse en cuenta en conexión con las cuestiones de derecho acerca de las cuales se ha de decidir.

Con el fin de proceder ordenadamente, establezco los puntos que abraza esta proposición general bajo cuatro encabezamientos separados, distinguidos (a), (b), (c) y (d).

- a) El origen de la pretensión de límite de Panamá y aserciones oficiales de Panamá, de su derecho por medio de negociaciones o intentos de negociaciones con Costa Rica con referencia a la misma o a otras.

No hay ningún documento en el expediente sobre el cual pueda decirse que descansa como título de apoyo original la aserción hecha por Panamá o sus predecesores con respecto al límite fluvial antes referido, y por consiguiente puede asumirse la no existencia de documento de esa índole. Digo esto porque, aunque el señor Madrid, publicista colombiano, en 1852, en un informe dado al Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, declaró que existían documentos oficiales a ese efecto, el señor Borda, otro publicista

colombiano, en época tan reciente como 1896, en una obra preparada oficialmente para uso del Gobierno colombiano declaró que no se habían encontrado esos documentos oficiales y que no podía decirse que existían a no ser que se considerara que consistían en dos pretendidos mapas alegados, a los que se refería.

Pero sin hacer referencia al origen del título, la existencia de la discusión con relación al límite de una época remota está claramente demostrada, puesto que Costa Rica, en 1825, como uno de los estados de las Provincias Unidas de Centro América, en su constitución declaraba que su límite era el Escudo de Veraguas, la isla situada frente al río de Chiriquí, el cual, como he dicho, es límite que afirma ahora Costa Rica ser el suyo. Y el mismo año, sin duda como resultado de una disputa relacionada con este límite, la República de Colombia (Panamá) y las Provincias Unidas de Centro América (Costa Rica) firmaron una Convención por la cual se obligaban "a respetar los límites la una de la otra tal como existen en la actualidad" y expresaban su intención de fijar sus límites sobre esa base y tenían en vista un futuro convenio o convención para poner en práctica esa intención. Las disposiciones a que me refiero estaban contenidas en los artículos VII y VIII de la Convención. No había convenio expreso entre las partes para el arreglo o demarcación de la contienda de soberanía territorial sobre la costa hasta el Cabo de Gracias a Dios, aunque el artículo IX de la convención contenía una disposición para un *modus vivendi* entre las partes acerca de esa contienda.

Claro como es el texto del tratado en cuestión acerca de los dos puntos distintos mencionados, si hubiera lugar a oscuridad, sería grandemente aclarado por medio de un examen de las negociaciones que precedieron a la adopción del tratado. Digo esto porque en esas negociaciones una proposición hecha por Colombia (Panamá) para arreglar o comprometerse a arreglar la contienda territorial más grande sobre una base determinada, fue inmediatamente desechada por Costa Rica, y por otra parte, una proposición hecha por el representante de Colombia al efecto de que "en cuanto a los límites es necesario atenerse al *uti possidetis* de 1810 o 1820 como se desee", fue aceptada inmediatamente por Costa Rica, lo que indica por qué en cuanto a la contienda grande sólo se insertó una cláusula para un *modus vivendi*, mientras que en cuanto a la contienda de límites propiamente dicha se convino en una base para su arreglo y se hizo una declaración del propósito de llevar a cabo ese convenio en lo futuro. No aparece lo que era exactamente el límite

posesorio que se tenía por existente entonces. Subsiguientemente, no habiéndose llevado a efecto el proyecto de determinar los límites mencionados en la convención, en 1836, la República de Nueva Granada (Panamá) al establecer un nuevo territorio llamado Bocas del Toro fijó los límites de ese territorio en la Costa Atlántica desde el río llamado Concepción a la boca de un río descrito como el Culebras, y luego "en el Noroeste (es decir, de las montañas a la boca del río Culebra) por la línea fronteriza que separa en ese lado la República de Nueva Granada de la de Centro América". Es aparente que esta descripción, si bien constituye un intento para fijar definitivamente una línea de delimitación en la costa Atlántica a la entrada del río Culebras, no definió la línea de ese límite desde el punto de la boca de ese río a las Cordilleras principales, sino que la dejó seguir el curso de la línea limítrofe existente entre los dos países, omisión que fue motivada probablemente por el hecho de que según los artículos VII y VIII de la Convención de 1825 como hemos visto, la línea de delimitación debía ser determinada por la aplicación de la doctrina de *uti possidetis* y la demarcación subsiguiente que se proyectaba pero que no había tenido lugar. Debe observarse, sin embargo, que, si bien la línea desde la boca del río a las montañas quedada así sin definir para ser marcada más tarde, la disposición señala claramente que la línea de delimitación o frontera tal como entonces existía y como estaba entendida entre las partes, considerada en su dirección desde las montañas a la boca del río, corría en una dirección Nordeste, o viceversa desde la boca del río escogido a las montañas en una dirección Sudoeste.

Siguiendo las aserciones de derecho hechas por Costa Rica de tener por límite Sur el río Chiriquí como se ha manifestado en un principio, y las de Panamá, de tener su límite Norte en la boca del río llamado Culebras, que corre desde las montañas hasta el océano en una línea que tiene la dirección arriba indicada, tuvieron lugar muchas negociaciones posteriores que exponemos brevemente a continuación:

En 1856 se hizo un tratado entre Nueva Granada (Panamá) y Costa Rica, por el cual el límite Norte entre los dos países en el Atlántico fue fijado por un río llamado el Doraces desde su nacimiento en las Cordilleras "río abajo por el centro del canal principal de este río hasta que desemboca en el Atlántico". Cuando el Congreso de Nueva Granada (Panamá) vino a discutir ese Tratado definió la boca de este río en el Atlántico como siendo "el primer río que encuentra a una corta distancia al Sudeste de Punta Carreta

(Punta Mona)*. Como resultado de esta definición el Tratado no fue ratificado porque Costa Rica no quiso convenir en la definición, la cual, naturalmente, si hubiera sido aceptada, habría destruido su pretensión de ser su límite el Chiriquí cuya desembocadura en el Atlántico estaba muchas millas abajo de Punta Carreta. Y esto sirve para demostrar que la diferencia real entre las partes, por lo menos en lo que se refiere al límite en el lado del Atlántico, no surgió del hecho de que las partes estaban discutiendo acerca de la dirección de uno u otro de los ríos limítrofes que ellas alegaban respectivamente, sino que estaban disputando y constantemente en desacuerdo acerca de cuál de los ríos era el límite.

De nuevo en 1865 se hizo un nuevo intento para fijar como límite por medio de tratado un río descrito como el Cañaveral, el cual, si se hubiera hecho límite, hubiera en substancia, es decir prácticamente, creado un límite equivalente al que pretendía Costa Rica, en el río Chiriquí. El tratado no fue ratificado, y sin entrar en detalles, puede decirse en verdad que la falta de ratificación, cuando menos en parte, obedeció a la imposibilidad de conseguir un acuerdo de los dos países sobre el abandono de las pretensiones de límite fluvial abrigadas por ambos lados, y no tenía relación con la contienda en un lado o el otro con respecto al curso o dirección del río limítrofe que cada uno pretendía, si dicho río hubiera sido aceptado como límite.

En 1873 otro tratado fue celebrado el cual definía el límite como constituido por un río llamado el bananos que corre desde su nacimiento en las Cordilleras hasta el Atlántico desembocando en la Bahía de Almirante. Como la aceptación de este río como límite hubiera claramente dado al traste con la pretensión de Panamá, previamente sustentada de ser el límite un río que desembocaba en el Atlántico, el primero que desemboca en el Atlántico abajo de Punta Carreta o Punta Mona, su ratificación hubiera destruido todo derecho de Panamá a esa pretensión. Pero el tratado no fue ratificado, proporcionando así de nuevo una ilustración de lo que constituía en realidad la disputa, es decir, cuál de los ríos era el límite y de la dificultad de conseguir la ratificación de un tratado sobre el asunto.

En el largo periodo de tiempo en que tuvieron lugar los hechos a los que acabo de referirme, se hicieron varias declaraciones oficiales de autoridades responsables del gobierno de Colombia (Panamá), y todas ellas hacían descansar su contienda de límites sobre un límite fluvial, y no se encuentra ni una palabra de insinua-

ción que tienda en el más leve grado a demostrar que hubiera otra pretensión cualquiera de un límite que no fuera un río, cualesquiera que puedan haber sido las controversias y dudas sugeridas con relación al nombre del río o del punto en que desembocaba en el Atlántico, y, en realidad, esto también es verdad con relación al curso general del río limítrofe alegado. Hago estas afirmaciones, sin dejar de tomar en cuenta el hecho de que hay ejemplos en que Punta Mona, lugar en la costa del Atlántico que no está en la desembocadura de ningún río, se menciona como límite, y hasta un caso en que fue declarado que Humboldt prestaba autoridad a esa declaración, aunque el mismo funcionario que hizo la declaración observó que el límite era el río Culebras el cual, como entonces se entendía, era un río que entraba en el océano abajo de punta Mona; del mismo modo, Madrid, el distinguido publicista colombiano al que antes me he referido, en su informe presentado al Senado colombiano, dijo al referirse al límite en el Pacífico lo mismo que al límite en el Atlántico y al cruce de la línea limítrofe por la cadena de Cordillera, que toda la línea limítrofe, en los lados Atlántico y Pacífico, incluyendo el cruce de las montañas, consistía en una línea que debía tirarse desde el centro del Golfo Dulce al lado del Pacífico, luego cruzando las Cordilleras y atravesando al lado del Atlántico hasta "la boca del río Doraces o Culebra, a corta distancia de Punta Carreta, que es también aproximadamente, el límite indicado por el Barón de Humboldt y otros célebres exploradores", confirmando así efectivamente un límite fluvial como se ha alegado por Panamá desde un principio y en todo tiempo sin titubeo ni desvío, y demostrando además claramente que el curso y dirección del río limítrofe como lo entendían las partes era el que ha sido indicado anteriormente.

b) La luz arrojada en el asunto, si es que alguna puede arrojarse, por un examen de los mapas y cartas aplicables a la pretensión.

Está fuera de duda que en los mapas primitivos había gran incertidumbre con respecto al nombre del río alegado como límite señalando algunos un río llamado Dorces, Doraces o Dorados, algunos un río llamado Culebras y algunos señalando dos ríos distintos, uno llamado Dorces, Doraces o Dorados, y el otro culebra. Sin embargo, debe decirse en verdad que en general todos los ríos así llamados se señalan en esos mapas que tienen una dirección general Nordeste desde las Cordilleras, en las cuales, o en la vecindad de las cuales, se dice que toman su nacimiento, y corren

hacia el Océano Atlántico, sea cual fuere la confusión en los respectivos mapas con respecto al punto exacto de situación de los ríos o del punto en que desembocan en el Atlántico. Por ejemplo la que se conoce como la Carta Esférica de 1805-9 muestra el Río Dorados corriendo desde la región de las montañas en una dirección Nordeste sin tributarios hasta su desembocadura en el Atlántico, la primera abajo de Punta Mona, mientras el mapa de Ponce de León y Paz de 1864, muestra el Culebras o Dorados con el mismo curso general y desembocando en el Atlántico encima de Punta Mona. Pero ninguna de esas diferencias sirven para hacer confusa la situación cuando se examinan comprensivamente, es decir, no sirven para hacer nacer ninguna duda material respecto al río limítrofe, el primero abajo de Punta Mona, alegado por Panamá, y al curso general en dirección Nordeste que se consideraba tenía ese río desde el punto de su nacimiento en las montañas y siguiendo de allí al punto en que desembocaba en el océano.

Y en verdad es digno de observarse también aquí que esta coincidencia naturalmente corresponde en su curso general con la aserción hecha por Colombia (Panamá) de su línea limítrofe en la primera ocasión en que encontró exacta expresión en la definición del límite en el acto de crear el territorio de Bocas del Toro, a que me he referido.

- c) La prueba de la naturaleza exacta de la pretensión, suministrada por la ocupación o colonización del territorio cubierto por el límite durante el período de la disputa.

Debe observarse, además, que es obvio que si las partes creían que el límite era un río que corre desde las montañas al océano en una dirección Nordeste, la margen oriental de dicho río pertenecería a Colombia (Panamá) y la margen occidental a Costa Rica, acuerdo que indudablemente fue el mantenido por los dos gobiernos. Digo esto porque está aquí probado de manera adecuada y comprensiva que la margen occidental de un río que así corría fue ocupado por Costa Rica y colonizada bajo su jurisdicción, y que, en cuanto a las ocupaciones hechas por Colombia (Panamá), la margen oriental fue tomada como el límite de su jurisdicción de esa región. Esto está ilustrado propiamente por los siguientes hechos: Una colonia colombiana se estableció en la desembocadura del río limítrofe, el primero abajo de Punta Mona, que vino a ser conocido como el Sixaola. Esta margen, si se hubiere tenido en vista que corriera en dirección Este y Oeste en su curso desde las

cordilleras al mar, hubiera sido la margen sur del río, pues en verdad en el punto del establecimiento de la colonia, para hablar con precisión, era esa margen debido a la dirección del curso del Sixaola en la región inmediata a su desembocadura. Pero dejando aparte esa circunstancia puramente local y teniendo en mira a todas luces el estado de la cuestión en cuanto se refiere al curso de la línea limítrofe que había mantenido desde el principio y la dirección general del río que había sido desde el principio y sin cambio alguno considerado por ella como el límite, Colombia (Panamá) se quejó a Costa Rica de intrusión sobre "el pueblo colombiano de Sixaola situado en el lado oriental de aquel río". Y un lenguaje semejante fue empleado repetidas veces en el curso de las negociaciones entre las partes. Realmente, puede decirse correctamente que, cualquiera que haya podido ser el conocimiento más preciso adquirido después acerca de los nombres de los ríos y de su verdadera situación y direcciones y distancias, no hay nada absolutamente en el expediente que indique paso dado o expresión pronunciada que sirva para justificar directa o indirectamente la creencia de que hasta la fecha en que fue dado el fallo anterior, cuyo examen haremos a continuación, la línea limítrofe entre los dos países, como Panamá afirma con insistencia, fuese formada de otro modo que por un río de la misma dirección y curso que el río o ríos a los cuales nos hemos referido y que en la práctica eran considerados como línea divisoria -una práctica que, como llevo dicho, fue mostrada por medidas oficiales en diversas formas, por el ejercicio de dominio por los respectivos países y comprobada por ocupaciones que manifestaban la concepción que prevalecía en la práctica con respecto a la situación real del límite.

- d) El punto de vista primordial que se desprende de la actitud de Panamá con respecto al sometimiento del asunto a un arbitraje anterior, y la influencia dominante de su conducta en conexión con la discusión y sometimiento así hecho anteriormente.

El no haber efectuado la delimitación exacta de la línea limítrofe como quedó proyectado en la Convención de 1825, puede presumirse que produjo sus resultados naturales. Está fuera de duda que, como se había dejado de efectuarlo no sólo en el lado del Atlántico sino también en el lado del Pacífico, de las montañas, en 1880, como resultado de las disputas acerca de los derechos de posesión y de jurisdicción sobre el territorio del lado del Pacífico, sobrevino una ruptura entre los dos países y la guerra entre ellos era inminente.

En vista de estas circunstancias apremiantes y teniendo en mira una proyectada negociación con Costa Rica para un arreglo que pudiera evitar un conflicto armado, el Senado de Colombia (Panamá), el 14 de julio de 1860, formuló una declaración de lo que pedía Colombia que contenía las siguientes conclusiones:

- “1. Colombia tiene, de acuerdo con títulos que emanan del Gobierno español y con el *uti possidetis* de 1810 un perfecto derecho de dominio y está en posesión del territorio que se extiende hacia el Norte entre los océanos Atlántico y Pacífico a la línea siguiente.
Desde la desembocadura del río Culebras, en el Atlántico, siguiendo el curso hacia arriba, de allí una línea a lo largo de la cresta de la cadena de montañas de Las Cruces al origen del Río Golfito; de allí siguiendo el curso natural de este último río hasta su desembocadura en el Golfo Dulce en el Pacífico.
2. Colombia tiene títulos que acreditan su derecho, que emanan del Rey de España, al litoral Atlántico comprendido desde la boca del río Culebras hasta el Cabo Gracias a Dios.
3. Colombia ha estado en posesión no interrumpida del territorio comprendido dentro de los límites señalados en la Conclusión 1ª.

Y en otra conclusión que no reproduzco, fue declarado virtualmente que como condición anterior a las negociaciones debe haber una “evacuación por parte de Costa Rica de cualquiera porción de territorio en la cual esa nación puede haber establecido sus autoridades más allá de los límites marcados en la Conclusión 1ª”. Aunque estas Conclusiones fueron comunicadas para servir de guía al Negociador que representaba a Colombia quien estaba esforzándose por llegar a un arreglo con Costa Rica, es digno de observarse que las instrucciones transmitiendo al negociador las Conclusiones del Senado, si bien insistían en que, como condición *sine qua non* para las negociaciones, cierto territorio situado en la costa del Pacífico que era la causa más inmediata de la disputa fuera evacuado, no hacían ninguna petición de ese carácter con relación a un sólo pie de terreno en el lado del Atlántico basada en la falta de derecho a poseer a lo largo del río limítrofe que tenía el curso y la dirección que he indicado. Esta conducta ciertamente demuestra que a pesar de la intensa luz que debe haber sido arrojada en la controversia entre los dos países como resultado de la casi inminencia de la guerra, las partes, con respecto al límite de

la costa Atlántica, no mantuvieron ni sugirieron ninguna otra pretensión de límite sino un río, sea cual fuere el nombre con que se le denominara, siguiendo la dirección general y curso del río limítrofe que había sido alegado por Panamá desde el principio, y que las ocupaciones hechas por Costa Rica en la Costa Atlántica que no tenían relación o intervención con dicho límite no eran en realidad objeto de seria discusión entre los dos países. Es digno de notarse también que, aunque la petición territorial más grande de la Costa Atlántica al Cabo Gracias a Dios estaba comprendida en las conclusiones del Senado en el párrafo (2), no se dieron al Negociador instrucciones expresas de ninguna clase con respecto a esta petición, y es, además, de importancia saber que el Presidente de Colombia lanzó una proclama referente a las pretensiones de ese Gobierno y aunque en dicha proclama él incorporaba en las mismas palabras las proposiciones contenidas en las conclusiones del Senado con referencia a la aserción del límite fluvial, no se hacía mención alguna de la pretensión de soberanía sobre la costa hasta el Cabo de Gracias a Dios como se mencionaba en las Conclusiones del Senado, puesto que la declaración del Senado concerniente a ese derecho alegado quedó enteramente omitido en la proclama, hecho que viene a apoyar la opinión de que dicha controversia no estaba comprendida en el Tratado de 1880.

Se evitó ruptura entre los dos países y se negoció y ratificó un tratado entre ellos, en el cual se convino someter al arbitraje del Rey de España las controversias mencionadas en el tratado. El preámbulo de este tratado rezaba que su objeto era "terminar el único origen de las diferencias que podían surgir entre ellos, el cual no es otro que la cuestión de límites prevista en los artículos VII y VIII de la Convención de 15 de marzo de 1825, entre Centro América y Colombia, y que ha sido con posterioridad objeto de varios tratados entre Costa Rica y Colombia", declaración de propósito que abarca claramente la disputa de límites fluvial que fue el asunto que tenían en mira los artículos de la Convención de 1825 referidos y cuyos artículos fueron en consecuencia virtualmente incorporados en el tratado y se convirtieron por referencia en parte integrante del mismo. El primer artículo, que vino a cumplir el propósito así expresado en el preámbulo, si se interpretan racionalmente sus términos, se refería a la determinación de un límite a lo largo de la línea disputada, que estuviera dentro del alcance de los artículos VII y VIII de la Convención de 1825, a fin de que la posesión de ambas partes pudiera quedar asegurada

dentro de su propio territorio, límite que como he podido ver, por los hechos y declaraciones de Colombia, por los escritos autorizados de los publicistas de ese país, y por las mismas conclusiones del Senado que llevaron a la celebración del tratado, había venido a significar un río que corría desde su nacimiento en las Cordilleras en dirección Nordeste a un punto donde desemboca en el océano Atlántico, siendo el primer río que tenía su desembocadura abajo en Punta Mona. Y el hecho de que éste era el asunto que tenía en mira el tratado queda demostrado además cuando se considera que la Convención de 1825, contenía un artículo que se refería expresamente a un *modus vivendi* concerniente a la petición territorial mayor respecto de la costa Atlántica hasta el Cabo Gracias a Dios, y que no se hizo en el tratado referencia o incorporación de las disposiciones acerca del asunto, -punto de vista sostenido así mismo por las instrucciones dadas al Negociador que principió la gestión del tratado y por el Presidente en su proclama, pues en ambos casos la controversia acerca de la soberanía en la línea de la costa fue tratada como punto de poca importancia para el efecto de las negociaciones que el tratado consumaba.

El Rey de España aceptó, pero antes de haber cumplido su misión, aunque el gobierno de España había dado ya los primeros pasos, el Rey murió. Posteriormente, en 1886, los dos gobiernos negociaron un tratado adicional de arbitraje. El preámbulo de esta Convención después de citar el tratado anterior, la aceptación del Rey de España, el comienzo por el Gobierno español, la ejecución de la misión inherente al arbitraje y la muerte del Rey, declaró que las partes, "para desvanecer cualquiera duda con respecto a la competencia de su sucesor (del Rey) para continuar ejerciendo jurisdicción en dicho juicio arbitral hasta su sentencia final, han convenido en llevar a cabo la siguiente convención *ad referendum* adicional, a la firmada en Diciembre 25 de 1880". El primer artículo de este Tratado reconocía expresamente el derecho de sucesor del Rey o del gobierno de España "para continuar ejerciendo jurisdicción en el arbitraje propuesto por las dos Repúblicas, y para dar un fallo irrevocable y definitivo en la controversia pendiente acerca de los límites territoriales entre las Altas Partes Contratantes". Si bien no se hizo referencia expresa a un poder adicional para considerar y decidir como árbitro la contienda territorial mayor, no puede constituir objeto de seria discusión el hecho de que bajo los términos del tratado se daba al árbitro una facultad adicional a la conferida por el tratado anterior, para fallar en cuanto a la pretensión sus-

tentada por Panamá de que su soberanía territorial se extendía a lo largo de la línea de la costa de Cabo de Gracias a Dios. Digo esto porque tal es la consecuencia natural de una enumeración de los límites del territorio en disputa que contiene el artículo II y de la declaración contenida en el artículo III con respecto a la autoridad dada al Arbitro para decidir las controversias.

No reproduzco el texto de los dos artículos toda vez que viene transcrito más adelante (página 23) en el análisis de las cuestiones legales que van envueltas en los méritos de la controversia. Pero, en mi concepto, el hecho de que se diera poder adicional con respecto a la contienda territorial no vino a cambiar ni a hacer más extenso el poder conferido por el tratado anterior en lo referente a la contienda de límites, ya que esa conclusión se hace absolutamente necesaria si se tiene en cuenta las declaraciones expresas del tratado a las cuales me he referido, de que el poder dado anteriormente y que había sido parcialmente ejecutado debía continuar hasta la sentencia final, y también la disposición que salva al tratado anterior de ser abrogado como resultado de la adopción de este último.

Como resultó, por razones puramente de conveniencia que no es necesario mencionar, que el Rey de España no completó el cumplimiento de la misión de Arbitro asumida de acuerdo con el primer tratado ni entró en el cumplimiento de la que resultó del segundo tratado, las partes en 1896 concluyeron una convención en la que convinieron en someter los asuntos al arbitraje del Presidente de la República Francesa. La Convención declaró expresamente que no adoptaba ningún cambio en los asuntos fundamentales ya mencionados, y que sólo tenía por objeto someter la controversia bajo los términos y limitaciones de la misma al arbitraje de un nuevo tribunal. Antes de que el Presidente de la República Francesa hubiera asumido las obligaciones creadas por este tratado, el representante autorizado de Costa Rica le dirigió una carta incluyéndole el texto del tratado de arbitraje, y pidiéndole que aceptara la misión que le imponía.

La carta decía además: "Incluyo también un mapa geográfico del territorio en litigio en el cual se indican los límites alegados por cada una de las partes contratantes". El mapa así enviado marcaba claramente el río limitrofe, el Chiriquí, alegado por costa Rica, el río que Colombia (Panamá) pretendía hacer su límite, ese río estaba marcado en el mapa como que desembocaba en el Atlántico, el primero abajo de Punta Mona, y que tiene en su curso desde

las montañas hasta el océano una dirección general Nordeste, de acuerdo con el curso y dirección del río límite que, como ha podido verse, había prevalecido desde un principio sin cuestión y sin vacilación. El río así delineado en el mapa era designado con el nombre de "Yurquin" (Yorkín) desde su nacimiento en o cerca de las Cordilleras hasta un punto en que desembocaba en un río llamado "Sixola" (Sixaola), los dos en el curso y dirección indicados estaban así señalados en el mapa como el río límite que alegaba Colombia. No hay prueba alguna en este expediente de que esa carta escrita por el representante de Costa Rica haya sido nunca comunicada a los representantes de Panamá, pero no hay nada en el mismo que indique que ocurriera algo que hiciera necesaria su comunicación, del mismo modo que no hay nada que demuestre que hubiera un indicio de controversia entre las partes acerca de la dirección y curso del río límite alegado por Colombia como límite si la controversia general entre Colombia y Costa Rica sobre cuál de los dos ríos era el límite que debía ser determinada en favor de Colombia. La misión confiada por los tratados fue aceptada por el Presidente de la República Francesa y el caso fue presentado y sometido para el fallo.

Panamá presentó un laborioso alegato para sostener el derecho de ese país a la soberanía sobre la costa Atlántica hasta el Cabo de Gracias a Dios, y además un argumento para de acuerdo con la Real Orden de 1803, apoyar una amplia petición de autoridad territorial de acuerdo con una real Cédula de dos de Marzo de 1537, la cual parece fue presentada por primera vez en el alegato en cuestión. Aparte del laborioso alegato antes mencionado no había por parte de Panamá ninguna discusión detallada o argumento con respecto a la disputa entre ella y Costa Rica acerca de cuál de los dos ríos era el límite y no se decía nada absolutamente con relación al curso y dirección y situación del río alegado por Panamá como límite para el caso de que el río afirmado por ella se encontrara ser el verdadero límite, ni nada que contradijera siquiera levemente las declaraciones hechas sobre el asunto en la carta escrita por el Ministro de Costa Rica, ni nada que en algún modo pusiera en duda el nacimiento, el curso o la dirección antes indicada del río alegado por Colombia como resultado de la historia de la controversia de límites desde un principio. Digo esto, porque la única declaración acerca de estos puntos contenida en el argumento presentado por Colombia después de una discusión relacionada con la validez de su pretensión a ejercer jurisdicción

sobre la línea de la costa, fue una referencia al título de Colombia a lo que llamaba el Ducado de Veraguas, que Colombia poseía según manifestación admitida, y al derecho contenido en las siguientes palabras que afirmaba tener como consecuencia de la posesión de ese título: "Este título sólo bastaría para demostrar el verdadero derecho de posesión de Colombia sobre la laguna de Chiriquí, la Bahía del Almirante (Bahía de Almirante) y la región contigua en dirección del río Sixaola (dans la direction du Río Sigsaula)".

La argumentación de Costa Rica tendía a refutar el reclamo mayor de soberanía sobre la costa hecha por Panamá y, además, en cuanto a la disputa de límites, a establecer que el río Chiriquí era el verdadero límite y a demostrar por ello, a sensu contrario, que el río alegado por Colombia no lo era. Pero no había una sola palabra en el alegato que tendiera a demostrar que considerara que si la pretensión de Colombia en cuanto al límite era justa, comprendía otro territorio u otro río distinto del que había sido descrito en la carta del Árbitro, y cuya descripción estaba de acuerdo con todos los hechos que, conforme he declarado, están demostrados por la historia de la controversia de sus orígenes.

Toda la documentación que tenía ante sí el Árbitro anterior, no forma parte de este expediente, pero ninguna de las partes niega, aunque no concuerden en los términos, que los hechos esenciales que he citado anteriormente formaban parte del expediente que se formó para el arbitramento anterior. Antes de dictar su fallo y con objeto de proporcionarse una ayuda para hacerlo, el Árbitro nombró una comisión de distinguidos funcionarios del Cuerpo Diplomático Francés, y además el Archivero de Mapas de la Biblioteca Nacional para que estudiara el asunto sometido a su arbitraje. El informe escrito de esa comisión, si es que hubo alguno, no existe en este expediente.

El fallo del Árbitro fue dictado el 11 de septiembre de 1900. Dejando aparte cierta cláusula incluida en el mismo acerca de islas a lo largo del Atlántico y del Pacífico, la parte del fallo que es necesario considerar aquí es como sigue, advirtiendo que la traducción del francés está tomada del alegato de la República de Panamá en este caso, no habiendo objeción de la otra parte en cuanto a su exactitud sustancial:

"La frontera entre las Repúblicas de Colombia y Costa Rica será formada por el contrafuerte de la cordillera que parte del Cabo Mona sobre el océano Atlántico, y cierra al norte

el valle del río Tarire o Sixaola; luego por la cadena que divide las aguas entre el Atlántico y el Pacífico hasta los 9 grados de latitud próximamente; seguirá luego la línea que separa las aguas de Chiriquí viejo y los afluentes del Golfo Dulce para terminar en la Punta Burica, sobre el océano Pacífico”.

Al tener conocimiento de este fallo, el Ministro de Costa Rica, que había sido también su agente para los efectos del proceso relacionado con el arbitraje, dirigió una carta a Monsieur Declassé, Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, en nombre de Costa Rica, encaminada a buscar por lo menos una interpretación del fallo y pidiendo que una línea especial fuera indicada por el Árbitro como límite. La línea así sugerida en concepto de la interpretación de lo que había sido fallado era semejante en substancia a lo que el Ministro de Costa Rica había marcado en el mapa que envió al Presidente de la República Francesa antes de que principiara el arbitraje como demostrativo de la pretensión de Colombia en cuanto al río que afirmaba ser la frontera y por lo tanto, como demostrativa de lo que constituiría su derecho si su pretensión era aceptada.

A esta carta el Ministro de Relaciones exteriores contestó como sigue:

“Contestando a la petición que usted se ha servido expresar en sus cartas de 29 de septiembre y 23 de octubre último, tengo el honor de informarle que debido a la falta de datos geográficos exactos, el Árbitro sólo pudo fijar el límite por medio de indicaciones generales: creo, por consiguiente, que habría dificultad en fijarlas en un mapa. Pero no hay duda, como usted observa, que de conformidad con los términos de los artículos 2 y 3 de la Convención de París de 20 de enero de 1896, esta línea limítrofe debe ser trazada dentro de los límites del territorio en disputa, tal como están determinados por texto de dichos artículos.

Es de acuerdo con estos principios que la República de Colombia y Costa Rica deben proceder a la delimitación material de sus fronteras y el Árbitro confía en este punto, en el espíritu de conciliación y buena inteligencia en que los dos Gobiernos en litigio se han inspirado hasta la fecha”.

Costa Rica se negó a aceptar el fallo a no ser que fuera interpretado de acuerdo con su modo de ver como se establecía en la carta escrita por su Ministro, Monsieur Declassé, y Colombia insistió en que el fallo no requería interpretación y debía ejecutarse

de acuerdo con sus términos. El fallo quedó sin efecto práctico a pesar de que hubo varias negociaciones sobre el asunto y a pesar de que se celebró un tratado para zanjar las diferencias, el cual no fue ratificado. En este estado las cosas, se firmó la Convención que encomendaba la misión de Árbitro en el asunto al Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, arbitraje que es el que ahora se está llevando a cabo. En esa Convención, se declaró expresamente que el fallo anterior era obligatorio en cuanto a la costa del Pacífico, en cuanto a la línea que cruza las cordilleras y en cuanto a la línea divisoria en esa cadena de montañas "hasta un punto más allá de Cerro Pando... cerca del noveno grado de latitud norte", y por consiguiente, toda controversia concerniente a esos puntos fue dado por terminada. Resulta de ello por lo tanto, que la Convención aceptada en su totalidad el fallo en cuanto a la costa del Pacífico y disponía únicamente el examen y la decisión, por los métodos y en la extensión contemplados por sus términos, los cuales tendré más adelante ocasión de establecer y considerar de manera específica, acerca de la controversia en relación con el fallo referente a la discusión del límite entre los dos países en la costa Atlántica, desde las montañas hasta el Océano.

El expediente contiene cerca de cincuenta tomos, y los alegatos sometidos en cuanto al asunto objeto de la controversia son voluminosos, abarcando por uno y otro lado, el más ancho campo posible y todos los aspectos de cuantos hechos han tenido lugar en el largo periodo de tiempo al cual me he referido. Sin referirme de modo material a los puntos que aquí han de decidirse hay ciertamente esta diferencia entre este expediente que ahora está en consideración y el que tenía ante sí el Arbitro anterior, diferencia que no debiera pasar sin mención. Por los términos de la presente Convención, se dispuso el nombramiento de una comisión "para practicar un reconocimiento y medición del terreno", y habiéndose solicitado así en Octubre de 1911, se organizó dicha comisión, compuesta de cuatro miembros, uno nombrado por el Presidente de Costa Rica, otro por el Presidente de Panamá, y los otros dos por el Árbitro. Los nombrados eran todos ingenieros civiles de la más alta reputación y distinción en su carrera. Eran los siguientes: Profesor John F. Havford, de la Universidad del Noroeste, Evanston, Illinois, Presidente; Profesor Ora M. Leland, de la Universidad Cornell, Ithaca, Nueva York, Secretario; Mr. P.H. Ashmead, de la ciudad de Nueva York; y Mr. Frank W. Hodgdon, de Boston, Massachusetts.

Después de la organización de la comisión y después de la adopción de un plan para establecer el modo de llevar a cabo su cometido, cuyo plan fue aprobado por ambos países, se emprendió y terminó una medición en el campo después de una labor ardua y prolongada, y sus resultados fueron presentados en un informe y en muchos mapas y cartas que dan a conocer la situación del modo más cuidadoso, comprensivo y exacto. Puede sentarse como verdad, dejando a un lado lo que puede calificarse como diferencias pequeñas, que la comisión estuvo en sustancia de acuerdo. Y grande como es la satisfacción producida por la conducta de la comisión de reconocimiento y medición, existe otra causa adicional muy importante de congratulación resultante del hecho de que su trabajo en cuanto a arreglos fiscales y en todos los demás respecto fue ayudado y facilitado por los dos países cuya controversia fue sometida a decisión. No entro en detalles acerca del informe o del mapa o mapas que lo acompañaban, toda vez que el caso, tomado desde el punto de vista que ahora se toma, no depende de su análisis o declaración. Pero, a pesar de que no es esencial a la conclusión a que he llegado, es pertinente a las contenciones que me veré obligado a examinar antes de enunciar esta conclusión, establecer los hechos demostrados por el informe y los mapas de la Comisión con relación a un contrafuerte seguido (hilera o estribo) que extiende desde la Cordillera madre a Punta Mona que fue dado como la línea limítrofe en el fallo anterior. Estos hechos demuestran que hay indudablemente un contrafuerte elevado que se proyecta en dirección de Punta Mona desde la hilera principal por una distancia de unas nueve millas, pero hay entonces una depresión brusca de cerca de 3.600 pies en menos de cuatro millas, donde empieza una región elevada, pero quebrada, llena de picos en dirección transversal al contrafuerte. Desde esta región continuando hacia el Atlántico hay un descenso gradual exceptuando algunas cumbres de cuando en cuando, alcanzando una elevación de cerca de seiscientos pies al llegar a una distancia de unas diez y seis millas de Punta Mona y descendiendo todavía más hasta trescientos pies en la mayor parte del camino y finalmente descendiendo a un pantano que tiene una anchura de una milla y media, hasta que se llega a una pequeña eminencia que marca Punta Mona. Si la designación de "contrafuerte" fue, como se pretende, aplicada equivocadamente a semejante situación o no, es asunto que no estoy llamado a considerar, ya que mi conclusión como llevo dicho, es totalmente independiente de ese hecho.

No hay verdadera controversia entre las partes en cuanto a los hechos indicados anteriormente. Digo verdadera controversia, porque, si es que hay alguna discusión sobre el asunto, la preponderancia de la evidencia hace que sea tan clara la prueba consiguiente a dichos hechos que puede decirse con exactitud que no son discutibles. Y en mi opinión puede decirse también con verdad que de igual modo las inferencias que he deducido de los hechos enunciados en el curso de esta exposición son evidenciados por los hechos de tal modo que están también fuera de discusión. Ahora voy a considerar las proposiciones alegadas por las partes a la luz de los hechos y las inferencias que he deducido hasta ahora o que pueda hacer luego de los mismos bajo el encabezamiento de "Los Méritos de la Controversia".

LOS MÉRITOS DE LA CONTROVERSIA

Costa Rica, insiste, primero, en que, de acuerdo con los hechos, la selección hecha por el Arbitro de Punta Mona como punto inicial de la línea limítrofe y el hacer que esa línea sea constituida por un Contrafuerte o estribo de montañas que se extiende de allí a las Cordilleras era nula, porque estaba fuera del alcance de las atribuciones que correspondían al Arbitro. Segundo, insiste en que, sea como fuere, como no puede hacerse algo de lo que no existe, resulta de ello que la selección de la línea era también nula en otros respectos, puesto, que, según las pruebas, queda demostrado que la cadena de montañas que se tomó como base del fallo no existe.

Por parte de Panamá la contención no existe, primero, en que, aún asumiendo que los hechos que he establecido al hacer la exposición del asunto fueren ciertos, sin embargo la determinación de ese límite constituido por una montaña estaba dentro de las atribuciones del Arbitro, porque se le confirió poder para hacerlo en el tratado que sirvió de base al arbitraje. Y, segundo, que este criterio permanece inalterado aún en el supuesto que la cadena de montañas no existiera, porque la línea de delimitación que fue la intención que esa cadena de montañas demarcara, queda allí y puede discernirse claramente por la configuración del terreno, y por la vertiente que contiene. Tercero, Panamá insiste además en que la validez de la línea de delimitación constituida por esa montaña debe ser apreciada no por aplicación de los principios generales de derecho que regulan el arbitraje sino solamente por ante-

rior tratado de arbitraje, porque la Convención según la cual se ejercita ahora la facultad de arbitrar limita los poderes del actual Arbitro para determinar si el fallo anterior estaba dentro de los términos del tratado anterior y no le otorga facultades para declarar el fallo anterior nulo si estaba dentro de los términos del tratado, fundándose en que estaba en conflicto con los principios generales y fundamentales del derecho.

Considerando estas proposiciones en conjunto, como no puede haber discusión con respecto al derecho que tenían los dos Gobiernos de concertar los tratados de arbitraje anteriores y de incluir en ellos las cláusulas que les parecieran más convenientes, resulta claramente que la primera proposición sentada por Panamá, si su premisa es cierta, está bien fundada y es concluyente, puesto que no puede decirse que lo actuado de acuerdo con los tratados era nulo por falta de facultades, si se encontraba dentro de la autorización que dichos tratados conferían. También es evidente, si esto es así, que no puede sostenerse, de acuerdo con la actual Convención, que lo hecho de acuerdo con el tratado anterior fuera nulo, aunque haya sido sancionado por el mencionado tratado, debido a alguna concepción de los principios generales del derecho. Este debe ser el caso porque argumentar así equivaldría a decir que esta Convención daba facultades para desechar hechos que fueron autorizados por el tratado anterior. Así se viene necesariamente a sentar que la cuestión fundamental acerca de la cual se ha de decidir requiere que se determine si la línea de delimitación fijada por el arbitraje anterior estaba dentro de las facultades conferidas por el tratado o los tratados anteriores. Y si no lo estaba, debe seguirse de ello que su corrección está dentro de las facultades conferidas por el tratado o los tratados anteriores. Y si no lo estaba, debe seguirse de ello que su corrección está dentro de las facultades conferidas por la actual Convención; y si lo estaba, no otorga esta Convención facultades para revisarla. Es por lo tanto una verdad que todo el caso se reduce a la cuestión indicada, que el alcance y significación del tratado o de los tratados de arbitraje anteriores, y la solución de esa cuestión decidirá tanto acerca de las proposiciones alegadas por Costa Rica, como de las alegadas por Panamá.

El estudio de esta cuestión bajo el punto de vista del alegato presentado por Panamá exige la inmediata consideración del texto del tratado anterior, el de 1886, cuyos artículos pertinentes al caso son los siguientes:

“ARTÍCULO II. El límite territorial que la República de Costa Rica reclama por la parte del Atlántico, llega hasta la isla Escudo de Veraguas, y el río Chiriquí (Calovébora) inclusive; y, por la del Pacífico, hasta el río Chiriquí Viejo inclusive, al Este de Punta Burica.

El límite territorial que reclaman los Estados Unidos de Colombia llega por la parte del Atlántico, hasta el Cabo Gracias a Dios, inclusive; y por el lado del Pacífico, hasta la desembocadura del río Golfito, en el Golfo Dulce.

ARTÍCULO III. El fallo arbitral deberá circunscribirse al territorio disputado, que queda dentro de los límites extremos ya descritos, y no podrá afectar en manera alguna los derechos que un tercero, que no haya tomado parte en el arbitramento, pueda alegar a la propiedad del territorio comprendido dentro de los límites indicados”.

La interpretación en que se apoya la aserción de que el límite de montañas estaba dentro de esas disposiciones del tratado y por consiguiente era válido y no susceptible de ser revisado de acuerdo con esta Convención es la siguiente: El artículo segundo, se dice, establece específicamente, los puntos exteriores del vasto territorio que estaba en disputa y por consiguiente colocaba dentro de la jurisdicción del Arbitro todo lo que se encontraba dentro de esos límites exteriores y les daba facultades, a su entera discreción, sin tener en cuenta ninguna controversia pendiente o discusión existente en cuanto a las pretensiones dentro de los límites, para fijar en esa línea de delimitación como lo creyera conveniente dentro de los límites exteriores. Y en apoyo de esta proposición se cita la cláusula del artículo III que dice: “El fallo arbitral deberá circunscribirse al territorio disputado que queda dentro de los límites extremos ya descritos”, dándose a estas palabras el sentido de que autorizan el fijar no sólo una línea con relación a una disputa acerca de los límites exteriores sino también una línea dentro de los límites exteriores sin referirse para nada a las disputas que prevalecen entre las partes en cuanto a territorio dentro de los límites exteriores. La demostración del resultado extremo que se derivaría de sostener esa interpretación es tan clara que no requiere más que fijarse en las consecuencias que traería su aceptación, consecuencias de las cuales no se podría dar mejor ejemplo que los hechos de esta causa, en la cual, en una disputa que solamente se refiere a cuál de los dos ríos es el límite, sin discutir sobre lo que cualquiera de las dos partes tendría derechos si el río

alegado por ella fuese establecido como límite, no se estableció un río por límite, sino que se dijo que el límite era una montaña, otorgando con ello una gran extensión de terreno a la cual la parte favorecida no hubiera podido tener ningún derecho si cada una de las pretensiones que fueron expuestas en la disputa acerca de ese límite hubiese sido tenido por correcta. Además, en vista del texto lo extraño de la premisa sobre la cual se asienta su argumentación es patente toda vez que, en esencia, consiste en que, de una concesión de facultades para decidir "acerca del territorio disputado que queda dentro de los límites extremos" se deduce el derecho a decidir acerca del territorio que se encontraba dentro de los límites acerca de los cuales no había controversia alguna. Y que lo anómalo del resultado de la proposición no es exagerado se pone de manifiesto en la declaración que sobre este asunto se hace en el alegato de Panamá, donde se dice:

"El artículo III sólo establece que el fallo deberá circunscribirse a territorio en disputa dentro de los límites fijados por el artículo II, y no puede afectar los derechos de terceros.

Se observará que la única limitación que esos artículos imponían al Arbitro era con respecto a los puntos terminales del límite que debía fijar. No podía, en el Atlántico, fijar una línea que empezara al Sur o al Este del Escudo de Veraguas o en la desembocadura del río Chiriquí, ni al Norte de la frontera norte de Costa Rica; ni tampoco podía fijar una línea que se encontrara con el Pacífico en un punto al Sur de Chiriquí Viejo o al Norte del Gofito.

Pero, exceptuando este punto su jurisdicción era ilimitada. Ninguna de las dos partes expuso pretensión alguna acerca de límites interiores y nada en el tratado prescribe regla alguna sobre este punto. Mientras los puntos terminales en las dos costas estuvieran dentro de los expuestos, quedaba en completa libertad, en el interior, de unirlos por una línea que corriera en cualquiera dirección que creyera justa".

No me detendré a observar que sería realmente necesario recurrir a todos los razonamientos posibles para salvar los artículos del tratado de la interpretación que se les da, si fuera cierta la premisa que sirve de base de que su texto sólo basta para decidir la cuestión de las atribuciones concedidas para la determinación de límites. Pero la cuestión de atribuciones no debe ser resuelta solamente por el artículo tratado en que se apoya Panamá puesto

que, según lo que aparece en el expediente es aparente que debe ser resuelta por el texto de un tratado distinto el cual, si bien se considera, hace imposible atribuir a las provisiones referidas el sentido que se les da.

Una breve repetición de la historia que ya se ha hecho de este caso pondrá esto en claro: pues esa relación demuestra sin lugar a duda que la controversia de límites se dispuso por primera vez en el tratado de 1880, y contenía una limitación o indicación basada en el tratado de 1825 entre Colombia (Panamá) y América Central (Costa Rica), que hace imposible el suponer que el amplio poder que ahora se alega, se confirió con respecto a la discusión de límites. Esto resulta más evidente todavía si fuera posible aumentar su caridad, cuando se recuerda que, al formular el tratado de 1886, quedó declarado expresamente que se mantenían los poderes conferidos por el anterior tratado de 1880 y que los poderes creados de conformidad con el nuevo tratado se adicionaban a los conferidos por el primero y, para que hubiera doble seguridad, se le agregó al tratado de 1886 una cláusula para evitar la derogación del tratado de 1880.

Aún basándose en la hipótesis de que el tratado de 1880 contenía disposiciones referentes tanto a la discusión de límites como al reclamo territorial hasta el Cabo Gracias a Dios, que abarca del lado del Atlántico los límites exteriores mencionados subsiguientemente en el tratado de 1886, ese aserto no implicaría ninguna consecuencia porque no sería posible presumir que la inclusión del reclamo territorial mayor y totalmente distinto se hiciera con la intención de destruir las limitaciones expresas concernientes al reclamo de límites que abarcó el tratado refiriéndose como se refirió en ese asunto, a los artículos del tratado de 1825. Y, ciertamente, este sería el resultado si se supusiera además, por vía de argumento, que el tratado de 1880 y el de 1886 se incorporaron en uno solo y se convirtieron en un mismo instrumento con motivo de la adopción del de 1886, según queda expresado, que era intención manifiesta de ese tratado mantener intactos y sin cambios alguno los poderes, deberes y limitaciones previamente creados, y por lo tanto imponer la obligación de poner en vigor ambos armónicamente de modo que de modo que pudieran cumplirse las estipulaciones de ambos.

Aunque estas consideraciones eliminan todos los argumentos principales presentados para sostener la opinión de que el texto del tratado de 1886 mantiene el amplio poder afirmado, y muy

bien podría yo concluir aquí este asunto; sin embargo, antes de hacerlo así y para evitar que aparezca como que yo hago caso omiso de indicaciones hechas o que necesariamente han surgido, procedo a anotar algunas consideraciones en relación con algunas palabras del texto que se juzgan de importancia, pero que yo no había anotado anteriormente para no interrumpir la continuidad del argumento. Por razones cuya importancia no se discierne claramente se sugiere que la cláusula del artículo III del Tratado de 1886, que pone a salvo los derechos de un tercero, presta fuerza a la opinión de que ese tratado confirmó el amplio poder que se alega. Pero es obvio que esta cláusula en vez de suprimir una limitación, impuso una, puesto que sus términos claros evidencian que sólo se tuvo la intención en todo caso de restringir la ejecución del fallo de tal manera que no afectara a un tercero, —restricción que se presume fue insertada porque cuando se formuló el tratado, los Estados Unidos insistían en que los derechos que se alegaban, podrían ser afectados sin esa restricción y además, porque la línea comprendida en el reclamo de Panamá solo la costa, conforme he visto, se extendía más allá del territorio de Costa Rica hasta el Cabo Gracias a Dios. Y a la contención, bajo otro aspecto, presenta una confusión como la que ya he citado puesto que sería en verdad singular decir que una limitación que fue insertada con el fin de proteger a los que no habían sido oídos, tenía por objeto ampliar el alcance del arbitraje, de modo que hiciera abarcar en lo referente a las partes contratantes de la convención el derecho absoluto del árbitro a condenarlos sin ser oídos lo cual naturalmente sería el resultado si la cláusula tuviera la excesiva interpretación en que se insiste ahora que le corresponde.

De estas consideraciones se establecen las siguientes conclusiones:

1. Que la controversia de límites que ha existido entre las partes durante tantos años fue contraída a una línea de delimitación alegada por una de las partes y a la alegada por la otra, siendo el territorio en disputa entre ellas, por consiguiente, el comprendido entre las líneas de los respectivos linderos alegados por las partes.
2. Que los tratados anteriores de 1880 y 1886, por los cuales la cuestión de límites así expuesta fue sometida a arbitraje, en lugar de traspasar los principios generales del derecho que de otra manera hubieran sido aplicables y de conferir un poder extremo para dar un fallo sin referirse abso-

lutamente a la disputa o al territorio disputado, por sus mismos términos circunscribieron el fallo a la materia en disputa y al territorio disputado.

3. Que como la línea de límites fijada por el fallo anterior de Punta Mona a la Cordillera, no estaba dentro de la materia en disputa, ni dentro del territorio disputado, resultada que dicho fallo se salió fuera de lo sometido al arbitraje y que al Arbitro no tenía poder para dictarlo, y por consiguiente debe desecharse y considerarse como no existente. La única cuestión entonces es: ¿Cuál es en otros respectos el deber que de esa situación resulta en el presente arbitraje?

Como por los términos de la presente convención, el fallo anterior no fue desechado en toda su extensión y sólo se concedió autorización para corregirlo en aquello en que pudiera encontrarse fuera de la autorización conferida, la conclusión en que todos los resultados que necesariamente se derivan de la selección, de una línea de montaña de Punta Mona a lo largo del referido contrafuerte, que pueden sostenerse como consecuencia del tratado anterior deben sostenerse aún cuando la misma línea de montaña sea nula por falta de autorización para fijarla. Aún cuando en términos expresos no fue presentado así, del argumento puede desprenderse que la controversia es que si la línea de montaña se desechara por ilegal, quedaría como parte del fallo anterior una línea fluvial compuesta de los ríos Sixaola, Tarire, puesto que el fallo declaró que la línea de montaña limitaría al Norte los valles de dichos ríos, y por consiguiente ellos pueden constituir un lindero dentro del fallo anteriormente proferido.

Para eliminar esta opinión basta señalar la falacia de la premisa en la cual se basa, puesto que esa premisa es virtualmente que la selección anterior era una línea formada por los ríos Sixaola y Tarire, en lugar del contrafuerte o cadena de montañas. Pero esto se refuta tan obviamente por la historia de los documentos, que con pocas palabras puede demostrarse su error. En primer lugar la línea fijada anteriormente no principia siquiera en la boca de un río, sino en Mona, y en términos expresos se declaraba que seguía a lo largo del contrafuerte. Es verdad, como se sugiere, que se dijo que la línea así hecha limitaba en el Norte el valle del Sixaola y Tarire, pero esta declaración no convirtió el lindero de la montaña en lindero de río. En verdad tal interpretación del fallo anterior sólo podía tenerse como resultado de premisas y conjeturas enteramente inadmisibles. Es cierto, como indica la carta de Monsieur Declassé, ante-

riormente transcrita, que no se tenía un conocimiento completo de la geografía del terreno cuando se profirió el fallo anterior; y también es cierto que durante el arbitramento anterior se presentaron mapas en que aparecía una cadena de montañas de Punta Mona a la cordillera ostensiblemente de un carácter tan permanente y dominante que si existiera llegaría a constituir una frontera natural que dividiera para todos los fines prácticos el territorio de un lado del que estuviere en el otro. Cuando esto se tiene en cuenta no es difícil presumir una razón que hubiera podido dar lugar a la selección de las montañas, puesto que la frontera natural que su existencia estableciera y el beneficio consiguiente al establecimiento de tal frontera, bien puede haber inducido a considerar ese asunto desde el punto de vista del estadista solamente y por consiguiente sin saberlo a concentrar exclusivamente la atención sobre las ventajas del tal lindero y así distraer la de la consideración de límites que era inherente a lo discutido. Al contrario, la sugestión contemplada necesariamente obliga a presumir que, aún cuando se escogió un límite fluvial, se estableció por razones inexplicables y no reveladas un lindero de montaña.

Como ambas partes reconocen que de acuerdo con esta convención existe el poder y el deber de sustituir la línea desecheda por una línea dentro de la esfera de la facultad concedida por el Tratado anterior "que estuviera más conforme con la correcta interpretación y verdadera intención" del fallo anterior, vengo a considerar esta materia.

Como era imposible hacer la selección anterior de una línea de montaña sin rechazar la pretensión de Colombia (Panamá) a la costa hasta el cabo Gracias a Dios, como también sin decir adversamente la pretensión de Costa Rica al lindero del río Chiriquí, ambos de estos fallos expresos o entendidos, permanecen inalterables por el hecho que ahora se sostiene de que el lindero de montañas era nulo. Y por el mismo razonamiento se desprende que el punto inicial del lindero que debe sustituir el que se rechaza, debe ser y no puede ser otro que la boca del primer río cerca de Punta Mona, el Sixaola, puesto que no existe ninguna otra boca de río que físicamente corresponda a la pretensión alegada en las circunstancias citadas. Además, este resultado es inevitable, por que la boca de tal río, de conformidad con los hechos presentados, es indudablemente el punto inicial en el Atlántico del límite fluvial que contemplaron las partes desde un principio y que es sostenido por los hechos a que me he referido en cuanto a negociaciones,

declaraciones y convenios, y al ejercicio de la autoridad gubernamental de ambos países, como consecuencia de ello. Es verdad que resulta de las declaraciones mencionadas que el río que pedía Colombia (Panamá) como límite se designaba con distintos nombres debido a la falta de conocimientos geográficos exactos. Pero cualquiera que hubiera sido la Babel de nombres, no puede haber duda de que todos ellos llegaron a usarse para designar virtualmente uno y el mismo río que desemboca en el Atlántico, aproximadamente en uno y en el mismo lugar, y el mismo curso o corriente que parte desde la fuente cerca de las montañas hacia la boca en el Atlántico. Nada podía servir para evidenciar este punto como la declaración que fue hecha por el Congreso Colombiano en 1836, la cual, al describir el río como el Dorace, fijaba su desembocadura como la primera abajo de Punta Mona y la ilustración adicional suministrada por los hechos antes citados por Colombia, referentes a los caseríos en la boca del Sixaola, y el reclamo de autoridad que de acuerdo con esto sostuvo el Gobierno de ese país. Y esto sirve para aclarar más a qué río se hacía referencia con el nombre de Culebras, pues el Presidente del Estado de Panamá había declarado en 1870, que ese río era el Doraces. Más aún, apreciando correctamente la situación, estos hechos explican fácilmente por qué en las Resoluciones del Senado Colombiano que precedieron inmediatamente al Tratado de 1880, el río que se alegaba como lindero, fue descrito como el Culebra, y no el Sixaola, siendo este último el río conocido entonces como el río cuya desembocadura era la primera, abajo de Punta Mona, y por consiguiente era el mismo Doraces o Culebras. Pero la reclamación de Colombia cuando por primera vez fue formulada en 1866 en la organización del territorio conocido con el nombre de Bocas del Toro, designaba como el Culebras, el río cuya desembocadura se había señalado como el lindero. Y así, pues, es muy natural asumir que al expresar el reclamo para los propósitos de las Resoluciones y la controversia entonces pendiente, deseosos de no perder nada del derecho original y de retener todo lo que había acrecentado con motivo de las negociaciones, admisiones y convenios, se mantuvo y reiteró la descripción original, conclusión cuya fuerza lógica es reforzada en mucho cuando se considera que años antes el señor Madrid, publicista colombiano, había reconocido que el río a que se refería Colombia como el Culebras era el río al cual se refería Costa Rica como el Sixaola. Adoptar opiniones contrarias a las arriba expuestas, conduciría necesariamente a la con-

clusión de que, por haber Colombia, al formular su reclamo con el objeto de preservarlo íntegramente, recurrido a la definición de ese reclamo como se expresó primitivamente, había por ello abandonado su derecho o lo que equivale a lo mismo, que por recurrir a la manera más eficiente de expresar ese reclamo, había adquirido uno no existente, nunca oído o imaginario.

La única cuestión que queda entonces, en pies es: ¿Cómo debe proseguir la línea limítrofe de la Boca del río Sixaola a la cordillera hasta unirse con la línea que termina más allá del Cerro Pando?

De un lado se pretende que tal línea debe seguir el curso del río Sixaola al punto en donde se une con un río llamado el Yorquín, de allí siguiendo de este arroyo en una dirección Sur a su origen en las montañas o cerca de ellas y de allí al punto "más allá del Cerro Pando". Del otro lado la contención es que la línea debe seguir por el Sixaola pasando la entrada del Yorquín a un punto en donde se encuentra con el Tarire y de allí seguir este río hasta su fuente en la cordillera y de aquí por una línea al punto más allá del Cerro Pando. Esta contención descansa sobre la suposición de que se ha probado que el río Sixaola y el Tarire son realmente uno y el mismo, a pesar de ser designados por nombres diferentes. No se puede negar que la dirección del río limítrofe, si se escoge el Sixaola-Tarire, estaría completamente en pugna con el rumbo del lindero fluvial contemplado desde el principio y proyectaría una línea de delimitación dentro del territorio sobre el cual la autoridad de Costa Rica nunca fue cuestionada y así daría a Panamá lo que nunca había pretendido. Mientras al contrario, la línea del Sixaola-Yorquín, si se siguiera, concordaría en esencia en su curso y dirección con la que había sido reconocida como la dirección de la línea limítrofe desde el principio y había tratada como materia no sujeta a discusión hasta que principió el proceso bajo el tratado anterior y durante este proceso. Y no se da ninguna razón para salirse de la línea fluvial que así se señala como la línea de limitación dentro de la disputa entre las partes, cuando se sugiere que otra línea fluvial concordaría más con los intereses de los gobiernos y serviría mejor el propósito de una delimitación. Admitir tales consideraciones equivaldría en esencia a abundar en opiniones sobre principios de justicia e interés público que llevarían la mente fuera de la proposición fundamental que aquí es predominante, esto es, el cumplimiento de la misión del arbitraje que requiere un fallo en cuanto a una disputa entre las partes y no da lugar a aplicación de un criterio discrecional fuera del límite que

esa consideración necesariamente impone.

Discreción o compromiso o arreglo, por más convincentes que sean las razones que llevaron la mente más allá del dominio del poder legítimo y por mucho que ellos pudieran controlar si se hubiera incurrido en extralimitación de autoridad, no pueden tenerse en cuenta en el cumplimiento del deber de arbitrar un asunto en disputa, de acuerdo con lo sometido a ese arbitraje y de no salirse del mismo. No podría darse golpe más fatal a la posibilidad del arbitraje para solucionar disputas internacionales que eliminar del acuerdo de someter el punto controvertido de tales disputas el elemento de seguridad que surge de las restricciones hace poco indicadas. En estas circunstancias, puesto que la obligación ahora no es dilucidar y formar juicio sobre meras cuestiones abstractas de geografía ni sustituir lo más práctico al juicio, sino determinar cuál era el río reclamado como el límite por Colombia, declarado por ella como el lindero por tantos años, al cual ella alegaba derechos y que virtualmente fue reclamado como el límite que ella sostenía antes de entrar en el Tratado anterior de arbitraje y en los procedimientos de acuerdo con el Tratado, es claro que la línea Sixaola-Yorquín es la que debería reemplazar la línea Punta Mona a lo largo del contrafuerte de la cordillera, hasta el punto más allá del Cerro Pando, como se declara en el fallo anterior.

Al formar el fallo y llegar a especificar detalladamente la nueva línea, puede surgir alguna dificultad debido a la falta de datos geográficos precisos en cuanto a la situación de las cabeceras del río Yorquín y por consiguiente a las consideraciones que deberían predominar en el trazado de la línea de esas cabeceras a la cordillera. En el alegato de esta causa, Costa Rica sugirió una fórmula de sentencia que consideró debería incorporarse bajo la hipótesis de que el fallo aquí proferido fuera contrario al límite de montaña y favorables a la línea Sixaola-Yorquín, y Panamá no presentó ninguna objeción a los términos de la sentencia propuesta. Siguiendo la línea a las cabeceras del Yorquín, la sentencia propuesta de allí establece una línea determinada a la cordillera. Esta línea se basa en la suposición de que las cabeceras del Yorquín se encuentran en la región de la falda del Norte de la vertiente Norte de un río conocido como el Changuinola y la línea propuesta sigue de las cabeceras del Yorquín a lo largo de esa vertiente de la cordillera. La situación que por la sentencia propuesta se presume que existe en la región de las cabeceras del Yorquín, está conforme con mapas que figuran en el expediente, uno de los cuales fue hecho

por la Comisión de Ingenieros nombrados en este pleito, pero que no es, sin embargo, el resultado de un reconocimiento hecho por ese cuerpo, porque ninguna de las partes le pidió que lo hiciera. Como la línea así sugerida aparece por todos conceptos como la más razonable, la adoptaré con algunas modificaciones en las palabras como parte del fallo que va a dictarse, pero con la siguiente salvedad. Sin perjuicio del derecho de las partes a que, en caso de que existan diferencias entre ellas, resultantes de contenciones sobre la topografía del terreno entre las cabeceras del Yorquín y las cordilleras por ser diferentes de la arriba expresada, puedan suscitar esta cuestión de cualquiera manera apropiada, compatible con las provisiones de la Convención que ahora se pone en vigor.

En mérito de lo expuesto y de las conclusiones seducidas de ello, y por la autoridad que confiere el convenio, vengo a dictar el fallo que sigue

1. Que la línea de delimitación que se significó establecida por el fallo anterior desde Punta Mona a la cadena principal de la cordillera y que se declaró ser un contrafuerte o estribo de montañas descrito en dicho fallo sea y por el presente es considerada como no existente.
2. Y ahora se decide que el límite entre los dos países "que está más de acuerdo con la interpretación correcta y la verdadera intención" del fallo anterior, es una línea que, partiendo de la desembocadura del río Sixaola en el Atlántico, sigue el canal de dicho río aguas arriba hasta llegar al río Yorquín o Zhorquín; luego sigue el canal del río Yorquín hasta llegar a aquella de sus cabeceras que está más cerca del contrafuerte que es el límite Norte del área de drenaje del río Changuinola o Tilorio; de allí siguiendo el canal que contiene dicha cabecera hasta dicho contrafuerte, de allí a lo largo de dicho contrafuerte al contrafuerte que separa las aguas que van al Atlántico de las que van al Pacífico; de allí a lo largo de dicho contrafuerte que separa las aguas que van al Atlántico de las que van al Pacífico, de allí a lo largo de dicho contrafuerte Atlántico-Pacífico hasta el punto cerca del noveno grado de latitud Norte más allá del Cerro Pando que es el punto a que se refiere el artículo 1 de la Convención de 17 de marzo de 1910; y por la presente se decreta y establece esa línea como límite correcto".
3. Que este fallo queda sujeto a las siguientes salvedades, además de la arriba mencionada:

- a. Que nada en el mismo se podrá considerar como que abre nuevamente o cambia el fallo del anterior arbitraje que rechaza directamente o por deducción necesaria el reclamo de Panamá al límite territorial hasta el Cabo de Gracias a Dios o el reclamo de Costa Rica hasta el límite del río Chiriquí.
- b. Y, además, que nada en este fallo se podrá considerar como que afecta al anterior fallo que concede las islas enfrente de la costa, toda vez que ninguna de las dos partes ha promovido bajo ningún respecto en este juicio cuestión alguna acerca de dichas islas.
- c. Que nada en el fallo ahora dictado debe ser interpretado por su silencio sobre ese punto como que afecta al derecho que compete a una u otra parte para proceder de conformidad con el artículo VII de la Convención que dispone la demarcación del límite fijado si así se deseara.

.....

**Secretaría de Relaciones Exteriores.— No. S-4739.—
Panamá, 17 de octubre de 1914.**

Señor Ministro:

El señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de esta República en Washington ha comunicado a esta Cancillería que con fecha 12 de septiembre último le fue notificado el laudo proferido por el Honorable Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en la Controversia de límites entre Panamá y Costa Rica, y al mismo tiempo ha remitido una copia de ese fallo arbitral.

Del estudio que ha hecho esta sentencia, el Gobierno de Panamá ha llegado a las siguientes conclusiones:

1. Que por la Convención Porras-Anderson el Honorable Arbitro White recibió poder y jurisdicción para determinar cuál es el límite entre Panamá y Costa Rica más conforme con la verdadera intención y correcta interpretación del Laudo Loubet, única cuestión que Panamá, de acuerdo con su Constitución, podía someter a arbitramento.
2. Que aquella misma Convención reconoció que el Laudo

Loubet fijaba el límite entre Panamá y Costa Rica y declaró que ese límite desde Punta Burica hasta Cerro Pando, es claro e indubitable. La línea del Pacífico quedó, pues, reconocida, no porque las partes la consignaran en el tratado de 10 de marzo de 1910, sino porque el Laudo la estableció.

3. Que el tratado referido establece también que las partes "no han podido ponerse de acuerdo respecto de la inteligencia que deba darse al Laudo arbitral en cuanto al resto de la línea fronteriza", agregando así nueva fuerza a la actitud de Panamá de no consentir en someter a discusión la validez y corrección del Laudo.
4. Que es claro por consiguiente que la validez y corrección del Laudo Loubet no fueron sometidas al arbitramento del Honorable "Chief Justice" White y que por la misma razón él carecía de jurisdicción para considerar o decidir esos puntos.
5. Que la cuestión esencial sometida a la decisión del Honorable Arbitro White fue la interpretación del Laudo Loubet en lo que se refería a una parte de la línea fronteriza y él tenía poder únicamente para determinar esa parte de la línea, tomando por base ese Laudo y de la manera más conforme con él.
6. Que el Honorable Arbitro White, en lugar de interpretar la línea fronteriza señalada por el Laudo Loubet, ha prescindido completamente de ella y ha fijado una línea que no tiene contacto en ningún punto con la establecida por el Presidente Loubet.
7. Que, a pesar de que la Convención Porras-Anderson estableció como cuestión fundamental la validez del Laudo Loubet al someterlo a interpretación, el Honorable Arbitro White ha establecido como cuestión fundamental que debía resolver su sentencia "el determinar si la línea fijada en el arbitraje anterior está dentro del tratado o tratados anteriores".
8. Que Panamá, antes de haber comenzado el juicio arbitral y en el curso de este; —fundándose en la Convención que dio vida a ese juicio—, ha sostenido constantemente que el Arbitro no tenía facultad para revisar o corregir el laudo Loubet y que si por alguna razón él encontraba inaplicable dicho Laudo, debía abstenerse de dictar decisión sobre el fondo de la controversia; y, a pesar de esto, el Honorable Arbitro White ha declarado que se le confirió poder para corregir el Laudo, en cuanto encontrara que dicho Laudo se halla fuera de la

- jurisdicción concedida al Árbitro anterior.
9. Que el Honorable "Chief Justice" en la parte resolutive de su fallo describe el límite entre los dos países como "el más conforme con la correcta interpretación y verdadera intención del Laudo Loubet", pero Panamá no puede considerar esa expresión como congruente con los fundamentos del fallo desde luego que declara *inter alia* que la línea fronteriza fijada por el Presidente Loubet desde Punta Mona hasta la Cordillera no está dentro del territorio disputado y que por lo mismo debe prescindirse de ella y considerarla como no existente.
 10. Que, en resumen, el honorable Arbitro White ha efectuado una verdadera revisión del laudo Loubet en lugar de la interpretación a que fue llamado por la Convención Arbitral y como consecuencia de tal revisión ha fijado una línea fronteriza del todo extraña a aquel Laudo.

Por las razones anteriores el Gobierno de Panamá considera que el Honorable Arbitro White ha extralimitado los poderes que le fueron concedidos por la Convención Porras-Anderson; que por esa causa el laudo proferido por él es nulo a la luz del derecho internacional, y que la República de Panamá no se considera obligada al cumplimiento de un fallo que es jurídicamente ineficaz para dirimir la contienda sobre límites entre Panamá y Costa Rica.

Con verdadera pena comunico lo anterior al Gobierno de Vuestra Excelencia, expresando al mismo tiempo la esperanza fundada que abriga mi Gobierno de que lo ocurrido no alterará en lo mínimo la armonía que felizmente reina entre nuestros dos países y protestando al mismo tiempo que el deseo y propósito invariable de Panamá es el de no buscar para la solución de sus cuestiones internacionales más medios que los indicados por el derecho.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi consideración más distinguida y aprecio personal.

(fdo.) E.T. LEFEVRE

A Su Excelencia
el Señor Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Costa Rica,
San José.

.....

**Secretaría de Relaciones Exteriores.— No. S-4740.—
Panamá, 17 de octubre de 1914.**

Excelencia:

Con fecha de hoy dirige esta Cancillería a Vuestra Excelencia una importante comunicación en la cual expone el Gobierno de Panamá su opinión respecto del fallo proferido el 12 de septiembre anterior por el Honorable Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en el arbitraje pactado entre Panamá y Costa Rica por la Convención celebrada en Washington el 10 de marzo de 1910.

Dada la importancia del asunto a que dicha comunicación se refiere, esta Cancillería ha designado al señor don Enrique Jiménez para que, como Correo de Gabinete, lleve esa comunicación a su alto destino y la entregue en manos de Vuestra Excelencia.

Al mismo tiempo se ha comisionado al señor don Ricardo J. Alfaro para que, con el carácter de Agente Confidencial y en nombre del Gobierno de Panamá reitere al de la República de Costa Rica las expresiones de simpatía consignadas en la nota que lleva el señor Jiménez y para que de viva voz manifieste a ese Gobierno amigo que la actitud invariable de Panamá en sus cuestiones internacionales es únicamente la de una Nación inspirada en altos ideales de justicia, de confraternidad y de buena voluntad, especialmente para con la digna Nación Costarricense, a la cual está unida con vínculos de amistad que Panamá se propone estrechar cada vez más.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi consideración más distinguida y aprecio personal.

(fdo.) E.T. LEFEVRE

A Su Excelencia
el Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Costa Rica,
San José.

LOS PRIMEROS ESFUERZOS REVISIONISTAS

17

El proyecto de Tratado Porras-Morales*

(1915)

La República de Panamá y los Estados Unidos de América considerando que la Convención suscrita en Washington entre los dos países el día 18 de noviembre de 1903 sobre la construcción de un canal entre los océanos Atlántico y Pacífico a través del Istmo de Panamá contiene cláusulas que requieren aclaración o reforma; considerando que tal Convención tenía en mira el proyecto de construcción del Canal y que la obra está ya concluida y se halla al servicio del Comercio Universal desde el 15 de agosto de 1914; y considerando, finalmente que está en el interés de los dos países resguardar y proteger sus respectivos derechos emanados de la citada Convención del 18 de noviembre de 1903 y asegurar el pleno y perpetuo goce de los beneficios políticos, estratégicos y comerciales que la obra del Canal ha creado para las dos naciones que directamente han contribuido a su construcción.

Han convenido en celebrar una adicional para aclarar y reformar la de 18 de noviembre de 1903 y para establecer al mismo tiempo las bases de una cooperación eficaz entre los dos países para la defensa de sus derechos respectivos y de sus intereses comunes y con tal fin han designado sus plenipotenciarios, así: etc. etc. quienes han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO I: Los Estados Unidos de América declaran que desde el día... de febrero del año de mil novecientos quince, fecha en que fue ratificada la convención de límites de la Zona del Canal celebrada entre los dos países, los Estados Unidos de América se hallan en posesión legal y definitiva de todas las tierras y aguas necesarias para la construcción, mantenimiento, sanidad, servicio y defensa del Canal de Panamá, tierras y aguas comprendidas y descritas en dicha convención de límites; y declara asimismo que la República de Panamá ha cumplido a satisfacción de los

* *La Estrella de Panamá*, Vol. LXVII, No. 17,802, Domingo 26 de septiembre, Panamá, 1915, p.1.

Estados Unidos de América las obligaciones que contrajo referentes a la concesión y entrega de esas tierras y aguas de la República de Panamá. Las aguas y tierras que puedan ser necesarias en lo futuro para la defensa y protección del Canal, se regirán por otras cláusulas de esta convención.

ARTÍCULO II: Es convenido entre las altas partes contratantes que para evitar conflictos de soberanía que puedan ocurrir con motivo de poseer una de ellas bienes o propiedades raíces de dominio privado bajo jurisdicción de la otra, los Estados Unidos de América transfieren a la República de Panamá los derechos de usufructo que en las tierras de la Isla de Manzanillo posee la Compañía del Ferrocarril de Panamá y el dominio de las tierras que dicha Compañía posee en la ciudad de Panamá, exceptuándose de tal traspaso los terrenos actualmente ocupados con edificios de propiedad de la Compañía del Ferrocarril, destinados al servicio directo de tal Compañía como empresa de transporte. Si la mencionada Compañía poseyera dentro de las ciudades de Panamá y Colón edificios destinados a otros usos, ellos pasarán también al dominio de la República de Panamá mediante justo-precio hecho por la Comisión Mixta de que tratan los artículos VI y XV del Tratado del Canal y el pago del valor que se fije será hecho por la República de Panamá a la Compañía del Ferrocarril.

Una vez realizados los traspasos de bienes a que se refiere esta cláusula, es entendido entre las altas partes contratantes que quedarán cancelados y sin valor ninguno los contratos de privilegios y concesiones que la Compañía del Ferrocarril de Panamá tenía celebrados con la República de Colombia y dichos contratos quedarán totalmente reemplazados por las convenciones directas celebradas ya o que en lo sucesivo se celebrasen entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá.

ARTÍCULO III: Es convenido entre las partes contratantes que las obras de los acueductos y pavimentación de las ciudades de Panamá y Colón, llevadas a cabo por el Gobierno de los Estados Unidos de conformidad con el artículo VII de la Convención sobre el Canal Istmico de 18 de noviembre de 1903, pasarán a ser propiedad de las ciudades de Panamá y Colón, respectivamente desde el día que esta convención sea ratificada y canjeada. El valor de tales obras será reembolsado por las respectivas Municipalidades al Gobierno de los Estados Unidos, en la forma convenida en dicho artículo VII garantizando el Gobierno de la República de Panamá el cumplimiento de tales obligaciones.

Desde el día en que este arreglo entre en vigor, el Gobierno de los Estados Unidos queda exonerado de la obligación que tiene contraída de continuar anticipando el costo de tales obras, costo que ha venido creciendo a medida que las ciudades de Panamá y Colón aumentan en extensión.

El Gobierno de Panamá se obliga a mantener un empleado superior que dirija y vigile el manejo de dichas obras y servicios a efecto de organizar y conservar una administración económica y eficiente.

ARTÍCULO IV: Deseosos los Estados Unidos de América de promover y desarrollar el comercio y las industrias de la República de Panamá, para que esta reciba de la obra del Canal todos los beneficios a que puede aspirar con justicia, le hacen a la República de Panamá la concesión de los siguientes favores:

- I. Los productos de suelo y de la industria de Panamá que haya necesidad de transportar por el Ferrocarril de Panamá con destino a otro punto de la misma República o al exterior, pagará solamente la mitad de fletes establecidos por la Compañía para el transporte de productos similares de otros países.
- II. En caso de que los Estados Unidos de América graven la importación de azúcar, la República de Panamá gozará del beneficio de la reducción de este impuesto en un veinte por ciento.
- III. Los buques mercantes construidos en la República de Panamá que naveguen bajo bandera panameña, podrán ejercer el comercio de cabotaje entre los puertos del Pacífico y los del Atlántico de los Estados Unidos de América, siempre que pertenezcan a ciudadanos panameños o americanos, o a compañías panameñas o americanas, quedando sujetos los dueños a la obligación de entregar dichas naves al Gobierno de los Estados Unidos, en caso de ser necesarias para la defensa de los Estados Unidos, de la República de Panamá o del Canal de Panamá, mediante las indemnizaciones consiguientes por el uso o por el deterioro de dichas naves.
- IV. Las tarifas de transporte de la Compañía del Ferrocarril de Panamá serán justas y equitativas y se suprimirá toda discriminación en contra de los comerciantes e industriales establecidos en el territorio.
- V. Las compañías o empresas de cualquier naturaleza que están establecidas o que se establezcan en la Zona del Canal estarán sujetas a los mismos impuestos que las Compañías o Empresas similares pagan en la República de Panamá, y cuando ha-

gan negocio en ésta, directa o indirectamente le pagarán al Tesoro panameño los impuestos que pagarían si estuvieran establecidos en territorio panameño. El Gobierno de la Zona del Canal auxiliará eficazmente al de la República de Panamá en el cobro de esos impuestos.

- VI. Los Estados Unidos de América se obligan a suprimir los establecimientos oficiales del Gobierno americano existentes en las ciudades de Balboa y de Cristóbal en la Zona del Canal, conocidos con los nombres de Comisariatos y reemplazar éstos con los simples almacenes de provisiones y de otros artículos que los Departamentos de Guerra y de Marina acostumbraban a tener en sus puestos militares o en naves o establecimientos navales. Esta obligación quedará sin efecto si la República de Panamá eleva a más del 10% ad-valorem su tarifa general de importación de mercaderías siendo entendido que si podría libremente elevar los derechos especiales que hoy existen sobre ciertos artículos. Si la tarifa general se eleva a más del 10% ad-valorem los Estados Unidos quedan en libertad de restablecer los Comisariatos.

ARTÍCULO V: Las altas partes contratantes convienen en considerar incorporados en este tratado las recíprocas concesiones que hallan consignadas en el Decreto del Gobierno panameño y en las Ordenes Ejecutivas del Gobierno de los Estados Unidos conocidas con el nombre de Convenio Taft y que llevan fecha del 3 y 6 de diciembre de 1904, con las modificaciones que se desprendan de la convención definitiva de la delimitación de la Zona del Canal y las que se introduzcan en ese Tratado.

ARTÍCULO VI: En consideración a las ventajas que se consigan en el artículo IV, la República de Panamá se compromete a reorganizar dentro de los próximos diez años, su sistema tributario en el sentido de darle facilidad al comercio universal, reduciendo gradualmente los impuestos de introducción de mercancías, con excepción de las clases gravadas hoy con derechos especiales, y fomentando el establecimiento de depósitos para la reexportación de mercaderías.

Además desde el día que esta convención sea ratificada y canjeada entrará a la República de Panamá, libres de derechos, todas las maquinarias, instrumentos y utensilios de agricultura fabricados en los Estados Unidos, y los animales de cría y aves de corral que se importen de los Estados Unidos para mejorar las razas o aumentar la producción en la República de Panamá.

ARTÍCULO VII: La República de Panamá conviene en prestar en todo tiempo su leal concurso a los Estados Unidos para la defensa del Canal de Panamá y con ese objeto en mira se obliga:

1. A establecer un sistema de enseñanza militar obligatoria de conformidad con arreglos posteriores que se hagan entre los dos Gobiernos, siendo entendido que el Gobierno de los Estados Unidos de América suministrará a Panamá, gratuitamente, los armamentos y equipos necesarios para la enseñanza y los instrumentos que fueren indispensables.
2. A conceder gratuitamente al Gobierno de los Estados Unidos de América el terreno indispensable para la construcción de fortificaciones que quedarán bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América desde el día en que las fortificaciones estén terminadas y sean ocupadas por las guarniciones militares correspondientes.
3. En caso de guerra entre los Estados Unidos de América y cualquier otro país, los Estados Unidos de América pueden requerir a la República de Panamá para que llame al servicio militar a todos los ciudadanos capaces de tal servicio, con el fin de defender el territorio de la Zona del Canal, y repeler en común cualquier ataque al territorio panameño. Las tropas panameñas tendrían sus jefes nacionales, panameños, pero éstos procederán de acuerdo con los planes de defensa que haya preparado el Gobierno de los Estados Unidos de América. Los gastos de movilización y de las operaciones militares en general serán hechos por los Estados Unidos.

ARTÍCULO VIII: Es convenido entre las altas partes contratantes que los Estados Unidos de América le prestarán su eficaz concurso a la República de Panamá para que ésta pueda construir dos líneas férreas en su territorio así:

Una parte de la ribera derecha del Río Bayano, bajando éste y que termine en la ciudad de David, provincia de Chiriquí. Una que parta de algún punto de la Bahía de Almirante o de la Laguna de Chiriquí y termine en la antigua ciudad de San Lorenzo de Chagres.

El Gobierno de los Estados Unidos emitirá bonos por la suma total del costo de esas dos líneas férreas y los irá entregando a la República de Panamá para su venta a medida que sea indispensable para cubrir el costo de las obras.

Los bonos referidos llevarán un plazo de cincuenta años y la

República de Panamá se obliga a pagarlos constituyendo un fondo de amortización en poder de los Estados Unidos de América, principiado a crear tal fondo diez años después de concluidas las obras y haciéndolo progresivo en períodos de diez años de modo que sea menos durante la primera década y mayor en las siguientes.

ARTÍCULO IX: Los ferrocarriles que la República de Panamá construya de acuerdo con el artículo anterior, lo mismo que las demás líneas que haya construido o construya en el futuro, podrán ser usadas por los Estados Unidos de América, en todos los casos de guerra o de temores de guerra, que requieran su uso para la protección y defensa del Canal o de la República de Panamá. Los daños que tales ferrocarriles sufran en tales casos serán indemnizados por los Estados Unidos de América.

ARTÍCULO X: Los Estados Unidos de América declara que en virtud de quedar abrogados por esta Convención todos los privilegios que la República de Colombia le había otorgado a la Compañía del Ferrocarril de Panamá, la República de Panamá queda en libertad de construir ferrocarriles en su territorio sin la adquiescencia de dicha Compañía, siempre que no contravenga lo estatuido en el Artículo V de la Convención del Canal en lo referente a línea férreas entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

ARTÍCULO XI: La expresión orden público (public order) usadas por las altas partes contratantes en el párrafo final del Artículo VII de la Convención sobre el Canal Istmico, celebrada el 18 de noviembre de 1903, significa el funcionamiento pacífico y tranquilo de los poderes públicos de la República de Panamá y la facultad y autoridad conferida a los Estados Unidos de América para mantener ese orden público se limita a los casos de rebeldía armada o de movimientos revolucionarios armados que le impedían al Gobierno de Panamá el ejercicio de su autoridad constitucional legal o que destruyan esa autoridad. En tales casos la intervención de los Estados Unidos de América se llevará a cabo cuando le pida el Poder Ejecutivo de la República de Panamá.

ARTÍCULO XII: Todas las diferencias que surjan entre las altas partes contratantes y que no puedan ser arregladas por las vías diplomáticas serán sometidas a decisión de un tribunal arbitral de un miembro designado por cada país y uno por cada uno de los Presidentes de las Repúblicas Argentina, el Brasil y Chile. El Tribunal Arbitral se reunirá donde las altas partes contratantes convengan y adoptará las reglas de procedimiento establecidos en la Corte Arbitral Permanente de La Haya.

Las altas partes contratantes establecerán las condiciones del compromiso arbitral en un protocolo que podrá firmarse en Washington entre el Secretario de Estado de los Estados Unidos y el Ministro de Panamá o en la ciudad de Panamá entre el Secretario de Relaciones Exteriores de la República de Panamá y el Ministro de los Estados Unidos de América. El protocolo que así se firme tendrá carácter de tratado público para los fines de la jurisdicción del tribunal arbitral y de la fuerza obligatoria del fallo.

18

Los 32 puntos de Alfaro

PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LA REPÚBLICA DE PANAMÁ COMO BASES GENERALES DE UN CONVENIO CON LOS ESTADOS UNIDOS QUE REEMPLACE EL LLAMADO CONVENIO TAFT*

1. Determinación final de las tierras necesarias para la construcción, mantenimiento, funcionamiento y saneamiento del Canal.
2. Adquisición de tierras necesarias para la protección del Canal.
3. Expropiación de tierras para el Canal.
4. Status legal de la Compañía del Ferrocarril de Panamá.
5. Tierras en la ciudad de Colón.
6. Contribución de agua y alcantarillado en las tierras que posee la Compañía de Ferrocarril de Panamá.
7. Contribuciones generales sobre las tierras que posee la Compañía del Ferrocarril de Panamá. Actividades industriales de la Compañía distintas de la explotación del ferrocarril.
8. Fletes que cobra el ferrocarril de Panamá.
9. Administración de los comisariatos del Canal de Panamá o de la Compañía del Ferrocarril de Panamá.
10. Ventas y servicios a las naves que cruzan el Canal.
11. Facilidades marítimas en el puerto de Balboa.
12. Empresas privadas establecidas en el territorio de la Zona del Canal.
13. Legalización de facturas y manifiestos de cargamentos consignados a comerciantes de Panamá y Colón.
14. Cementerio para la ciudad de Colón.
15. Mantenimiento de la Orden de Despoblación dictada por el Presidente de los Estados Unidos en diciembre de 1912 de

* En Alfaro, Ricardo J.: **Historia documentada de las negociaciones para la celebración del Tratado de 1926**. Estudio preliminar de Celestino Andrés Araúz. Editorial Universitaria. Panamá, 1982. pp. 52-54.

conformidad con la Ley del Congreso llamada «Del Canal de Panamá» (Panamá Canal Act).

16. Almacenes de depósito.
17. Establecimiento de resguardos de la República de Panamá en los puertos terminales del Canal para el examen de mercancías, equipajes y pasajeros que se dirijan o vengán consignados a las ciudades de Panamá y Colón.
18. Pasaportes
19. Aplicación de la Ley Volstead.
20. Comunicaciones radiográficas.
21. Comunicaciones aéreas.
22. Jurisdicción sanitaria en las ciudades de Panamá y Colón y en sus puertos.
23. Cobro de la contribución de agua y alcantarillados en las ciudades de Panamá y Colón.
24. Comunicación entre las ciudades de Panamá y Colón y el resto de la República.
25. Servicio postal.
26. Moneda.
27. Status y administración de las estaciones inalámbricas que posee el Gobierno de los Estados Unidos en territorio de la República de Panamá.
28. Extradición.
29. Exequatur a los cónsules que ejercen sus funciones en la Zona del Canal.
30. Hospital de Santo Tomás.
31. Ejercicio por los funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos de los derechos y privilegios otorgados al dicho Gobierno por el Tratado de Canal y por el contrato celebrado con el Ferrocarril de Panamá.
32. Comercio de cabotaje en relación con el Artículo IV del Tratado del Canal.

(fdo.) *R. J. Alfaro*

Washington, D.C. enero 4 de 1924.

19
El Tratado Kellog-Alfaro*
(1926)

**TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
FIRMADO EN WASHINGTON,
28 DE JULIO DE 1926.**

La República de Panamá y los Estados Unidos de América deseando arreglar ciertos puntos de divergencia existentes entre ellos que han surgido con motivo del ejercicio por los Estados Unidos de derechos soberanos en la Zona del Canal por virtud del Tratado de 18 de Noviembre de 1903, y deseando también, regular ciertas fases de sus relaciones futuras, provenientes de la contigüedad de la República de Panamá y de la Zona del Canal, han resuelto celebrar un Tratado y en tal virtud han designado como sus Plenipotenciarios:

El Presidente de la República de Panamá, a los Excelentísimos Señores Doctor Ricardo J. Alfaro, Enviado Extraordinario y Ministerio Plenipotenciario de Panamá en los Estados Unidos y Doctor Eusebio A. Morales, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Panamá en misión especial; y

El Presidente de los Estados Unidos de América, a los Excelentísimos Señores Frank B. Kellog, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, y Francis White, Jefe de la Sección de Asuntos Latino Americanos del Departamento de Estado;

Quienes, habiéndose comunicado sus respectivos Plenos Poderes, los que han sido hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

* Instituto Nacional de Panamá. *Documentos históricos sobre la Independencia del Istmo de Panamá*, (Panamá, Imprenta Nacional, 1930), págs. 439-464.
N.E.: Este Tratado no fue ratificado por la Asamblea Nacional de Panamá.

ARTÍCULO I

El Artículo XV y la parte final del Artículo VI del Tratado del Canal de Panamá, entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América, de 18 de Noviembre de 1903, quedan subrogados como sigue, y las estipulaciones de la segunda parte del Artículo VI quedan reformadas de la siguiente manera, en lo que respecta el método para el avalúo de los daños que se causen a los dueños de propiedades particulares:

En caso de que el Gobierno de los Estados Unidos tuviere necesidad de adquirir propiedad privada, después de la fecha de este Tratado, de conformidad con las estipulaciones contenidas en el mencionado Tratado de 18 de Noviembre de 1903, dicho Gobierno dará debido y razonable aviso por la vía diplomática a la República de Panamá, ya sea por nota dirigida por el Departamento de Estado a la Legación de Panamá en Washington, o por oficio dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la ciudad de Panamá, en que se manifieste la intención del Gobierno de los Estados Unidos de adquirir por expropiación tales terrenos o propiedades, de conformidad con las concesiones del Tratado de 18 de Noviembre de 1903, y en cada caso se considerará que el título ha pasado del dueño de los bienes a los Estados Unidos, desde el momento en que haya sido cumplida la formalidad del aviso. El Gobierno de Panamá adoptará acto continuo las medidas necesarias para el traspaso de jurisdicción a los Estados Unidos, con la debida protección de los intereses de todos los habitantes que estén en el territorio cuya jurisdicción sea así traspasada. El valor de las tierras y propiedades particulares y el valor de los daños causados a las mismas será estimado y ajustado por una Comisión Mixta, formada por un Magistrado Principal o Sustituto de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, designado por el Presidente de la República de Panamá, y el Juez del Distrito de la Zona del Canal, pero en caso de discordancia de la Comisión, los dos Gobiernos nombrarán un Dirimente quien dictará el fallo. Los fallos dictados por la Comisión o por el Dirimente serán definitivos. El avalúo de las propiedades particulares y de los daños causados a éstas tendrá por base el valor de los bienes al tiempo de ser expropiados. Los procedimientos de la Comisión Mixta o del Dirimente, de acuerdo con lo estipulado en este Artículo no impedirán, demorarán ni estorbarán parte alguna de los trabajos del Canal o del Ferrocarril o de cualquiera de las obras auxiliares relacionadas con uno u otro y autorizadas por el susodicho Tratado.

ARTÍCULO II

La República de Panamá concede a los Estados Unidos a perpetuidad el uso, ocupación y control de la parte de la Isla de Manzanillo, en el extremo Atlántico del Canal, alinderada y descrita de la siguiente manera:

Partiendo de un poste de cobre en el muelle de hormigón que queda cerca al extremo Norte del antiguo depósito de carga de Colón, el cual está situado a 0.5 pies del frente del muelle y equidistante de ambas extremidades, siendo las coordenadas de dicho poste 9°21' más 4682.0 pies de Latitud y 79°54' más 3315.5 pies de Longitud; se sigue de allí al Norte 74°15' Este en una distancia de 100.42 pies hasta un perno de hierro empotrado en hormigón en el suelo, cuyas coordenadas son 9°21' más 4709.3 pies de Latitud y 79°54' más 3218.8 pies de Longitud; de allí al Norte 15°52' Oeste en una distancia de 727.63 pies hasta un perno de hierro en el centro del extremo Occidental de la Calle Segunda, perno cuyas coordenadas son 9°21' más 5409.2 pies de Latitud y 79°04' Este en una distancia de 379.93 pies hasta una cruz trazada en un anillo de hierro empotrado en hormigón en la intersección de las Calles Segunda y de Bolívar, cuyas coordenadas son 9°21' más 3052.4 pies de Longitud; de allí al Norte 15°59' Oeste en una distancia de 210.57 pies hasta un poste de hierro en el centro de la Calle de Bolívar, cuyas coordenadas son 9°21' más 5715.9 pies de Latitud y 79°54' más 3110.4 pies de Longitud; de allí al Norte 73°49' Este en una distancia de 1038.11 pies hasta un poste de cobre empotrado en hormigón en un tubo de dos pulgadas, siendo las coordenadas de dicho poste 9°21' más 6005.2 pies de Latitud y 79°54' más 2113.4 pies de Longitud; de allí al Norte 65°49' más 2113.4 pies de Longitud; de allí al Norte 65°49' Este en una distancia de 315.3 pies hasta un poste de hierro colocado en el centro de Coconut Alley, poste cuyas coordenadas son 9°22' más 86.9 pies de latitud y 79°54' más 1825.8 pies de Longitud; de allí al Sur 15°54' Este en una distancia de 261.41 pies hasta un poste de hierro empotrado en hormigón en la intersección de Coconut Alley y la Calle Segunda, poste cuyas coordenadas son 9°21' más 5883.0 pies de Latitud y 79°54' más 1754.2 pies de Longitud; de allí al Norte 74°11' Este a lo largo de la línea del centro de la Calle Segunda en una distancia de 179.24 pies hasta un perno de cobre empotrado en hormigón en el centro de la Calle G, perno cuyas coordenadas son 9°21' más 5931.8 pies de Latitud y 79°54' más 1581.7 pies de Longitud; de allí al Sur 15°56' Este a

lo largo del centro de la Calle G, en una distancia de 1762.7 pies hasta un perno de cobre empotrado en hormigón en la intersección de las Calles Séptima y G, perno cuyas coordenadas son 91°21' más 4236.9 pies de Latitud y 79°54' más 1097.8 pies de Longitud; de allí al Norte 74°06' Este a lo largo del centro de la Calle Séptima en una distancia de 1408.5 pies, hasta un perno de cobre empotrado en hormigón en un tubo de hierro galvanizado de dos pulgadas clavado en el centro del círculo que se halla en la intersección de las Calles Séptima y K, perno cuyas coordenadas son 9°21' más 4622.7 pies de Latitud y 79°53' más 5749.6 pies de Longitud; de allí al Sur 15°52' Este a lo largo del centro de la Calle K en una distancia de 755.2 pies hasta un perno de cobre empotrado en hormigón en la intersección de las Calles Novena y K, perno cuyas coordenadas son 9°21' más 3896.3 pies de Latitud y 79°53' más 5543.1 pies de Longitud; de allí al Norte 74°00' Este a lo largo de la línea central de la Calle Novena y de la línea central que se produce en una distancia de 960 pies más o menos, hasta la línea media de la bajamar en la Bahía de Manzanillo; de allí siguiendo la dicha línea media de la bajamar en dirección Norte, Oeste y Sur hasta el punto de partida. Todos los rumbos se refieren al verdadero meridiano.

Se conviene que la Bahía de Colón estará constituida por las aguas marítimas que se extienden hasta el Oeste de la ciudad de Colón, y cuyos linderos son los siguientes:

Comenzando en la línea media de la bajamar en la Bahía de Limón, desde un perno de cobre empotrado en un mojón de hormigón, marcado «D prima» en el mapa denominado «Anexo A», el lindero sigue hacia el Norte 78° 30' 30" Oeste hasta un punto en la Bahía de Limón marcado «E» en el mapa arriba mencionado y situado a 330 metros al Este de la línea central del Canal de Panamá; de allí volteando a la derecha y siguiendo en dirección Norte la línea corre paralela a la citada línea central, a una distancia de 330 metros al Este de ella en una distancia de 660 metros, más o menos, hasta un punto en la Bahía de Limón, marcado «F prima» en el mapa arriba citado, de allí volteando a la derecha y siguiendo en dirección Norte la línea corre paralela a la citada línea central, a una distancia de 330 metros al Este de ella en una distancia de 660 metros, más o menos, hasta un punto en la Bahía de Limón, marcado «F prima» en el mapa citado; de allí volteando hacia la derecha y siguiendo en dirección Este y paralelamente con el citado lindero Sur, hasta un punto marcado «G» en el mapa referido;

de allí empotrado en el muelle de hormigón de la Compañía del Ferrocarril junto al extremo Norte del antiguo depósito de carga de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, siendo este perno de cobre al punto de partida del lindero de Nuevo Cristóbal; de allí volteando hacia la derecha y siguiendo la línea media de la bajamar en dirección general Sur hasta el punto de partida.

Se conviene, además, que se agregarán a la Bahía de Colón las aguas marítimas situadas en la Bahía de Boca Chica o Folks River al Norte del lindero que se describe como sigue:

Comenzando en un punto de la línea media de la bajamar (que se señala con un tubo de hierro galvanizado de dos pulgadas) en la orilla Sudeste de la Isla de Manzanillo, cuyas coordenadas son 9°21' más 466.9 pies de Latitud y 79°53' más 3987.3 pies de Longitud, el lindero sigue con rumbo Sur exacto hacia Folks River, en una distancia de 334.9 pies; de allí con rumbo Oeste exacto en Folks River en una distancia de 1473.7 pies, de allí al Sur 38° 30' Oeste, en Folks River en una distancia de 1290 pies hacia el punto más meridional de la orilla occidental de Folks River, punto cuyas coordenadas son 9°20' más 5170 pies de Latitud y 79°54' más 257 pies de Longitud; de allí siguiendo la línea media de la bajamar en dirección general Norte y Este hasta el punto de partida. Todos los rumbos se refieren al verdadero meridiano.

Se conviene, además, que en la Bahía de Colón los Estados Unidos retendrán jurisdicción y control sobre todos los cables tendidos allí incluyendo sus salidas a tierra, y que tendrán el derecho de tender en la Bahía cualesquiera otros cables que consideren convenientes y de sacarlos a tierra en las orillas de la Bahía, conservando igual control y jurisdicción sobre tales cables adicionales y sus salidas.

Y se conviene, además, que el acueducto y albañales de la mencionada ciudad de Colón y de área incorporada a la Zona del Canal en virtud de este Tratado, y el uso de dichos sistemas por los Estados Unidos les obligará a cargar con una cuota equitativa de los gastos de funcionamiento y mantenimiento, gastos que se determinarán por las cantidades proporcionales de agua y de inmundicias que pasen por los dichos sistemas al usarse conjuntamente.

Y se conviene, además, que sin menoscabar las estipulaciones del Artículo VII del Tratado de 18 de Noviembre de 1903, los Estados Unidos dispondrán el reembolso a la República de Panamá del valor que en la actualidad tengan las expresadas obras públicas llevadas a cabo en el área incorporada a la Zona del Canal en

virtud de este Tratado, siempre que tales obras hayan sido ejecutadas mediante convenios anteriores a expensas de la República de Panamá, y la cuantía de ese reembolso, a falta de arreglo director, será fijada por la Comisión Mixta a que se refiere el Artículo I de este Tratado.

El uso, ocupación y control del área terrestre descrita en este Artículo y del área marítima situada entre la Bahía tal como queda constituida según este Tratado y el lindero septentrional de la Bahía actual, según fue determinado por la Convención de Límites entre los Estados Unidos y la República de Panamá, de 2 de Septiembre de 1914, se concede a los Estados Unidos a perpetuidad como parte de la Zona del Canal y en consecuencia las estipulaciones del Artículo III de dicho Tratado de 18 de Noviembre de 1903 tendrán aplicación allí. Para identificar mejor las áreas marítimas y terrestres descritas en este Artículo, se agrega a este Tratado un mapa heliográfico de ellas, firmado en nombre de los Estados Unidos, por los Plenipotenciarios Americanos; y por los Plenipotenciarios Panameños en nombre de la República de Panamá, el cual ha sido marcado «Anexo A».

Como compensación de la concesión hecha a perpetuidad por la República de Panamá a los Estados Unidos del uso, ocupación y control de la porción de la Isla de Manzanillo y del área marítima mencionadas y descritas en este Artículo, y de las demás condiciones de este Tratado, se conviene que el lindero permanente entre la ciudad de Colón y la Zona del Canal en la orilla occidental de Boca Chica (llamada también Folks River), será el siguiente:

Comenzando en el punto más meridional de la orilla occidental de Folks River, siendo las coordenadas de dicho punto 9°20' más 5170 pies de Latitud y 79°54' más 257 pies de Longitud; de allí al Sur 73°41' Oeste en una distancia de 120 pies hasta un poste de cobre que se halla en el cordón oriental del camino de Mount Hope, siendo las coordenadas de dicho punto 9°20' más 5136.2 pies de Latitud y 79°54' más 372.5 pies de Longitud; de allí al Norte 16°05' Oeste en una distancia de 794.3 pies hasta un segundo poste de cobre colocado en el cordón oriental del camino de Mount Hope, cuyas coordenadas son 9°20' mas 5899.4 pies de latitud y 79°54' mas 592.4 pies de Longitud; de allí en dirección Noroeste siguiendo la línea del cordón oriental del camino de Mount Hope hasta su intersección con la línea de la acera Sur de la Calle 14; de allí en dirección Sudoeste siguiendo la línea de dicha acera hasta un punto en el centro de la Calle de Bolívar de allí hacia el

Norte siguiendo en el centro de dicha Calle hasta unirse con otro punto situado también en el Centro de ella y denominado punto «B» en el maña marcado «Anexo A».

Todos los rumbos mencionados en este Artículo y en el mapa marcado «Anexo A» se refieren al verdadero meridiano.

Como compensación adicional de la concesión hecha por la República de Panamá a los Estados Unidos del uso, ocupación y control, a perpetuidad, de la parte de la Isla de Manzanillo y del área marítima mencionada y descrita en este Artículo, y en virtud de las otras estipulaciones de este Tratado, se conviene lo siguiente:

Los Estados Unidos emprenderán la construcción de una carretera pavimentada de Paraíso (en la Zona del Canal) por la vía de Summit, Alajuela y Cativá, hasta empalmar con la carretera de la Zona del Canal entre Colón y Fort Randolph; y una carretera pavimentada desde un punto de este camino al Sur de la Bahía de Las Minas hasta la ciudad de Portobelo, completando toda la nivelación necesaria de los caminos con un lecho de 26 pies de ancho y con un piso de hormigón de no menos de 6 pulgadas de espesor y de 18 pies de ancho en el centro, junto con todas las cuentas necesarias y puentes de una sola vía, con resistencia suficiente para soportar una aplanadora de 15 toneladas.

Se conviene que los Estados Unidos emprenderán la construcción de las carreteras descritas en este Artículo después que la República de Panamá haya dispuesto lo conducente a satisfacción de los Estados Unidos para reembolsar los gastos que ellos hagan en la construcción de todas las carreteras mencionadas al Norte de Alajuela con excepción de \$1,250,000 que se conviene será el total de los gastos que los Estados Unidos sufragarán en la construcción de esta parte de la red de caminos. Se conviene además, que el valor total de los gastos de construcción de las carreteras descritas en este Artículo y que quedan entre Paraíso y Alajuela serán sufragadas por los Estados Unidos.

ARTÍCULO III

1. La República de Panamá conviene en construir los caminos especificados en los incisos, a, b, c y d, del parágrafo 2 de este Artículo, completando toda la nivelación necesaria para caminos con un lecho de veinte pies de ancho y con una faja de piso acabado de diez pies de ancho en el centro. La República de Panamá conviene además en construir nuevas cuentas a lo largo de los caminos mencionados, de longitud suficiente para

permitir el ensanche posterior del lecho de los caminos hasta veintiséis pies. Los Estados Unidos convienen en que cuando las estructuras de hormigón existentes entre la línea de la Zona del Canal y la Quebrada Herradura, cerca de El Creó, queden empalmadas con el nuevo camino, ensancharán tales estructuras en la medida necesaria, al tiempo de colocar el piso que se especifica en el parágrafo 2º de este Artículo. La República de Panamá conviene en erigir los puentes que sean necesarios en los caminos que se van a construir y que tales puentes sean de estructura permanente, de una sola vía y de resistencia suficiente para soportar una aplanadora de quince toneladas. Convienen las Altas Partes Contratantes que las condiciones de construcción expresadas se aplicarán a los caminos que quedan en territorio panameño, hasta la cuneta sobre la Quebrada Herradura, cerca de El Creó, por el Oeste y hasta Pacora por el Este, pero si la República de Panamá lo desea, la faja de piso acabado que más adelante se menciona, será omitida en los caminos comprendidos dentro de esos límites. Los Estados Unidos convienen, además, en que cuando el Congreso de los Estados Unidos vote la partida necesaria para la construcción de caminos en la Zona del Canal, pagará a la República de Panamá la suma de \$35.000.00 por la construcción previa por la República de Panamá del puente sobre el Río Caimito.

2. Los Estados Unidos convienen en completar la nivelación y en colocar un piso sólido de 18 pies de ancho sobre el lecho de los mencionados caminos, en la medida que en seguida se expresa:
 - a) Piso de hormigón de no menos de seis pulgadas de espesor, de la línea de la Zona cerca de Arraiján, al Río Caimito.
 - b) Macadam bituminoso de seis a diez pulgadas de espesor, del Río Caimito pasando por La Chorrera y La Laguna a la cuenta sobre la Quebrada Herradura en la vecindad de El Creó;
 - c) Piso de hormigón de no menos de seis pulgadas de espesor, desde el término del actual camino de hormigón cerca de la Estación de Policía de Las Sabanas, hasta un punto como a una milla más allá del Río Tocumen;
 - d) Macadam bituminoso de seis a diez pulgadas de espesor, del término del camino de hormigón que indica el inciso c) hasta Pacora;
 - e) Los Estados Unidos convienen en ensanchar a veintiséis pies el lecho de todos los caminos arriba citados antes de colocar el pavimento o piso.

3. Los Estados Unidos convienen además que cuando la República de Panamá construya en territorio panameño un camino que llegue hasta la línea de la Zona, en punto conveniente, los Estados Unidos construirán y mantendrán en servicio un puente de acero a través del canal, en las esclusas de Pedro Miguel, o establecerán y mantendrán un servicio de transporte por medio de barca a través del Canal en el lado del Pacífico, y construirán un camino con pavimento de hormigón de diez y ocho pies de ancho y de no menos de seis pulgadas de espesor, desde el puente o desde el desembarcadero de la barca hasta la línea de la Zona cerca de Arraiján, y construirán los puentes necesarios a lo largo de este camino, que serán de estructura permanente.
4. Cada uno de las Altas Partes Contratantes conviene en mantener, en la porción respectiva de la red de caminos estipulados en este Tratado, los caminos y puentes que quedan dentro de su jurisdicción. El Gobierno de Panamá conviene en que las sumas que sean necesarias para el mantenimiento adecuado de la red de caminos dentro de su territorio, que no serán menos de \$55,000 por año, serán votadas en el Presupuesto de cada bienio y usadas exclusivamente en dicho mantenimiento. Con el objeto de asegurar que este trabajo se lleve a cabo, la República de Panamá conviene en que los gastos de los fondos arriba mencionados, se harán únicamente de acuerdo con la recomendación conjunta del Ingeniero en Jefe a cuyo cargo esté la vigilancia y mantenimiento de los caminos en la República de Panamá y de un Ingeniero designado por los Estados Unidos.
5. Los Estados Unidos continuarán gozando en todo tiempo el uso libre y gratuito de todos los caminos en territorio panameño, y la República de Panamá tendrá en todo tiempo el uso libre y gratuito de todos los caminos en la Zona del Canal, incluyendo el puente a través del Canal en las Esclusas de Pedro Miguel, salvo cuando por necesidades militares en tiempo de guerra los Estados Unidos se vean precisados a restringir este derecho.
6. Se conviene, además, que los Estados Unidos tendrán el derecho de instalar, y mantener y hacer funcionar para uso oficial tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, líneas telefónicas y telegráficas a lo largo de todos los caminos que serán construidos en el territorio panameño de conformidad con este Tratado.
7. Es convenido por las Altas partes Contratantes que la red de caminos mencionada en este Artículo será concluida dentro

del término de tres años contados desde la fecha del canje de ratificaciones de este Tratado.

ARTÍCULO IV

Con el fin de estrechar las relaciones amistosas que afortunadamente han existido entre Panamá y los Estados Unidos, los Estados Unidos convienen a perpetuidad lo siguiente:

1. Con excepción de las ventas a los buques, que los Estados Unidos continuarán haciendo como hasta ahora, la venta de artículos importados a la Zona del Canal por el Gobierno de los Estados Unidos será limitada por éste a los jefes, empleados, artesanos y jornaleros al servicio o en el empleo de los Estados Unidos o de la Compañía del Ferrocarril de Panamá y a las familias de tales personas, y a los contratistas que trabajan en la Zona del Canal y sus empleados, artesanos y jornaleros, y a sus familiar, y a las demás personas a quienes los Estados Unidos, de acuerdo con las estipulaciones del párrafo 4º de este Artículo, permitan residir en la Zona del Canal, y que efectivamente residan en la mencionada Zona, siendo entendido que no quedan incluidos los huéspedes de los hoteles administrados por el Canal de Panamá o la Compañía del Ferrocarril de Panamá, a no ser que estén comprendidos en alguna de las categoría de las personas a quienes pueden hacerse tales ventas. Es entendido, además, que las estipulaciones de este párrafo no perjudicarán en manera alguna el funcionamiento de los Almacenes de depósito que los Estados Unidos continuarán extendido el privilegio de comprar en sus comisariatos y depósitos a los funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en la República de Panamá que el Gobierno de Panamá solicite específicamente.
2. El Gobierno de los Estados Unidos continuará cooperando por todos los medios apropiados con la República de Panamá, en la prevención del contrabando a la República de artículos comprados en los comisariatos.
3. Los Estados Unidos no permitirán que se radiquen en la Zona del Canal más empresas comerciales privadas que las existentes allí al tiempo de firmarse este Tratado. Esta estipulación de ninguna manera debe interpretarse como prohibitiva del establecimiento de los almacenes de depósito arriba mencionados, que son para el montaje, depósito, reempaque o distribución de artículos de comercio al por mayor y no al por me-

nor, ni del funcionamiento de las compañías de cables, de aceite, de vapores u otras empresas que tengan relación directa con la construcción, funcionamiento, mantenimiento, saneamiento y protección del Canal.

4. Con excepción de los huéspedes de los hoteles administrados por la Compañía del Ferrocarril de Panamá o por el Canal de Panamá, no podrá residir en la Zona del Canal ninguna persona que no esté comprendida dentro de las siguientes clases, a saber:

Jefes, empleados, artesanos y obreros de los Estados Unidos, del Canal de Panamá o de la Compañía del Ferrocarril de Panamá.

Contratistas que trabajen en la Zona del Canal y sus empleados, artesanos u obreros;

Jefes, empleados u obreros de Compañías que tengan derecho a hacer negocios en la Zona del Canal, de acuerdo con el párrafo 3 de este Artículo;

Colonos dedicados al cultivo de pequeñas parcelas; buhoneros, dueños y dependientes de pequeños establecimientos de comercio, dedicados a proveer a esos colonos y a otros empleados; y Miembros de las familias y sirvientes domésticos de las personas antes mencionadas.

No se darán en arrendamiento, a plazo o con sujeción a desahucio, casas o habitaciones pertenecientes al Gobierno de los Estados Unidos o a la Compañía del Ferrocarril de Panamá, situadas en la Zona del Canal, a personas no comprendidas entre las clases exceptuadas.

5. Con el objeto de cooperar al cumplimiento de las disposiciones de la ley panameña, los Estados Unidos convienen en no permitir el desembarque en los puertos de Balboa y Cristóbal, de mercancías consignadas a la República de Panamá, a no ser que las facturas y manifiestos que cubran esas mercancías sean legalizados por los representantes consulares de la República de Panamá.
6. El Gobierno de los Estados Unidos continuará dando a los comerciantes residentes en la República de Panamá las facilidades de que hoy gozan para hacer ventas a los buques que pasan el Canal, con sujeción siempre a sus reglamentos policivos y militares.

ARTÍCULO V

Habrá importación completamente recíproca y libre de artícu-

los de comercio y mercancías en general del territorio de la Zona del Canal, al de la República de Panamá y de la República de Panamá al territorio de la Zona del Canal, estipulándose, sin embargo, que ninguna mercadería introducida a la Zona del Canal para su venta en los Comisariatos o a los buques de acuerdo con este convenio, o para su distribución o reexportación por los almacenes de depósito, podrá entrar al territorio de la República de Panamá sin pagar los derechos de importación que la República haya establecido o establezca en lo futuro sobre mercancías extranjeras, entendiéndose, no obstante, que los artículos comprados en los Comisariatos pueden entrar a la República de Panamá, libres de derechos de importación y de otros gravámenes, cuando sean de propiedad o para el uso de los jefes, agentes y empleados de los Estados Unidos, del Canal de Panamá y de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, que residan o que se hallen temporalmente en la República de Panamá, mientras prestan sus servicios a los Estados Unidos, al Canal de Panamá o al Ferrocarril de Panamá, y los efectos sean destinados a su propio uso y beneficio personal o de sus familias, del mismo modo que cualesquiera efectos que pertenezcan o sean usados por contratistas que estén actuando en la Zona del Canal, en servicio de los Estados Unidos, del Canal de Panamá o de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, o por representantes, agentes y empleados de tales contratistas y sus familias, siempre que esos efectos sean destinados a su propio uso y beneficio personal y que ellos residan o se hallen en la República de Panamá, mientras presten sus servicios en la Zona del Canal y además los efectos destinados al uso de los funcionarios diplomáticos y consulares de los Estados Unidos radicados en la República de Panamá.

ARTÍCULO VI

El Artículo IX del Tratado de 18 de Noviembre de 1903 queda subrogado así:

Los Estados Unidos convienen en que los puertos en ambas entradas del Canal y sus aguas serán libres en todo tiempo, de modo que en ellos no se impondrán ni cobrarán peajes aduaneros, derechos de tonelaje, anclaje, faros, muellaje, pilotaje o cuarentena ni ninguna otra contribución o impuesto sobre la carga, oficiales, tripulación o pasajeros de dichas naves, con excepción de los peajes y cargas que establezcan los Estados Unidos por el uso del Canal u otras obras y con excepción de los que se impongan a las

mercancías introducidas en la Zona del Canal para su uso y consumo allí y sobre las naves que toquen en los puertos del Canal sin pasar por él.

La República de Panamá conviene en que las ciudades de Panamá y Colón y sus bahías adyacentes serán libre en todo tiempo, de modo que en ellas no se impondrán ni cobrarán peajes aduaneros, derechos de tonelaje; anclaje, faros, muellaje, pilotaje o cuarentena ni ninguna otra contribución o derecho sobre las naves que usen el Canal o pasen por él, o que pertenezcan a los Estados Unidos o que sean empleadas por ellos directa o indirectamente, en relación con la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal u obras auxiliares; ni sobre la carga, oficiales, tripulación o pasajeros de tales naves, con excepción de los impuestos y contribuciones establecidos por la República de Panamá sobre las mercaderías introducidas para su uso o consumo en el territorio de la República de Panamá y sobre las naves que toquen en los puertos de Colón y Panamá sin pasar por el Canal.

Los Estados Unidos convienen en suministrar a la República de Panamá libre de gravamen el espacio necesario para la construcción de edificios para aduanas en los puertos de la Zona del Canal para la recaudación de impuestos sobre las importaciones destinadas a la República y para el examen de mercancías, equipajes y pasajeros consignados o destinados a las ciudades de Panamá y Colón, así como para prevenir el comercio de contrabando, siendo entendido que la recaudación de impuestos y el examen de mercancías y de pasajeros por los funcionarios del Gobierno de Panamá, de conformidad con esta estipulación, tendrá lugar únicamente en las aduanas que establecerá el Gobierno de Panamá de acuerdo con lo aquí estipulado.

Las autoridades de los Estados Unidos no impondrán contribuciones de ninguna clase a las personas que pasen del territorio de la República de Panamá a la Zona del Canal, y las autoridades de la República de Panamá concederán libre y reciproca entrada a las personas que no sean inmigrantes a la República y que pasen del territorio de la Zona del Canal al de la República de Panamá.

Los Estados Unidos tendrán derecho en caso de emergencia, de hacer uso de las ciudades y bahías de Panamá y Colón como lugares de anclaje, y para hacer reparaciones, para cargar, descargar, depositar o trasbordar cargamentos, ya sean en tránsito ya sean destinados al servicio del Canal o de otras obras relacionadas con éste.

ARTÍCULO VII

Queda acordado que no se aplicará pena o decomiso, conforme a las leyes de los Estados Unidos, ni a los licores alcohólicos ni a los vehículos ni a las personas, por razón del transporte de tales licores cuando se hallen en tránsito, bajo sello y certificado de la autoridad panameña, de los puertos terminales del Canal a las ciudades de Panamá y Colón y de las ciudades de Panamá y Colón a los puertos terminales del Canal, cuando dichos licores sean para la exportación, y entre las ciudades de Panamá y Colón y cualquier otro punto de la República y entre dos puntos cualesquiera del territorio de la República, cuando en cualquiera de esos casos el medio directo o natural de comunicación sea a través del territorio de la Zona del Canal y siempre que tales licores permanezcan bajo dichos sellos y certificados mientras pasen por territorio de la Zona del Canal.

ARTÍCULO VIII

En desarrollo de los fines del Artículo VII del Tratado del 18 de noviembre de 1903, en cuanto se relaciona con el saneamiento de las ciudades de Panamá y Colón, se conviene en que el Gobierno de los Estados Unidos continuará poniendo en vigor los reglamentos y ordenanzas sobre cuarentena y sanidad de carácter preventivo o curativo dictados hasta ahora o que dicten los Estados Unidos después para las ciudades de Panamá y Colón y sus bahías adyacentes, y que la ejecución de dichos reglamentos y ordenanzas será efectuada por medio de los Oficiales de Sanidad que los Estados Unidos mantendrán en cada una de las ciudades de Panamá y Colón. Se conviene que las ordenanzas y reglamentos sanitarios prescritos por los Estados Unidos para las ciudades de Panamá y Colón y sus bahías adyacentes serán promulgadas por medio de decreto del Presidente de Panamá, siendo entendido, sin embargo, que los Estados Unidos no prescribirán ni los dichos Oficiales de Sanidad pondrán en vigor bajo aquella denominación reglamentos sobre edificación u otros que se hallan dentro de la esfera de las autoridades municipales de la República de Panamá, excepto en cuanto esos reglamentos sobre edificación u otros se refieran a asuntos de sanidad. Se conviene, además, que cuando cualquier parte de la República de Panamá sea invadida o amenazada por alguna enfermedad o epidemia que pueda ser considerada por las autoridades del Canal de Panamá como una amenaza para la sanidad de la Zona del Canal y de las ciudades de Panamá

y Colón, las autoridades de Panamá, a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos, aplicarán a dicha región las ordenanzas y reglamentos sanitarios y de cuarentena prescritos por el Jefe de Sanidad del Canal de Panamá. En caso de que la epidemia sea de tal severidad que los recursos y esfuerzos de la República de Panamá para combatir o dominar la epidemia parezcan insuficientes o infructuosos al Jefe de Sanidad del Canal de Panamá, la República de Panamá concede a los Estados Unidos el derecho y autoridad de poner en vigor tales ordenanzas y reglamentos de la misma manera prescrita para las ciudades de Panamá y Colón. Las medidas anteriores seguirán rigiendo hasta que haya cesado la amenaza para la Zona de Canal y las ciudades de Panamá y Colón. Los gastos que cause la ejecución de las medidas de sanidad y cuarentena que sean necesarias serán sufragados por los Estados Unidos cuando, de acuerdo con lo dispuesto arriba, éstos hayan tomado a su cargo su ejecución.

Todo el dinero recaudado en las ciudades de Panamá y Colón provenientes de multas, penas y decomisos, de acuerdo con dichos reglamentos y ordenanzas, será retenido por las autoridades panameñas como un fondo de emergencia, para usarlo en casos especiales con fines sanitarios exclusivamente en las ciudades de Panamá y Colón, donde se haya hecho la recaudación respectiva, con aprobación del Jefe de Sanidad del Canal de Panamá.

En desarrollo de lo dispuesto por el Artículo VII del Tratado de 18 de Noviembre de 1903, se conviene que el Presidente de la República de Panamá y el Presidente de los Estados Unidos harán de vez en cuando arreglos sobre establecimiento de hospitales para asistir a dementes o leprosos y a enfermos pobres de la República de Panamá, en las condiciones que dichos Presidentes tengan a bien determinar por mutuo acuerdo en cuanto a su administración, y en cuanto al costo de su construcción y mantenimiento.

ARTÍCULO IX

Las Altas Partes contratantes convienen que con excepción de las estaciones especificadas en el parágrafo 3º de este Artículo y de las que posea y tenga en servicio oficial el Gobierno de Panamá, en el territorio de la República de Panamá no se importará ni se permitirá erigir ni poner a funcionar instalaciones, estaciones o aparatos receptores radiográficos, sin licencia expedida por el Gobierno de Panamá. Panamá dará a conocer a los Estados Unidos las solicitudes de licencia que se le hagan a medida que vayan

presentándose y no concederá la licencia en caso de que dentro de los quince días siguientes al recibo del aviso, los Estados Unidos hagan objeción a alguna estación, instalación o aparato receptor radiográfico, por considerarlos peligrosos para la eficiente protección, defensa o funcionamiento del Canal. Los traspasos de licencia estarán sujetos al mismo procedimiento establecido arriba para la expedición de la licencia original.

Las licencias para instalaciones, estaciones o aparatos receptores radiográficos en la República de Panamá establecerán que la estación, instalación o aparato receptor, estarán sujetos en todo tiempo a inspección por los Estados Unidos y a censura, control o clausura por el Gobierno de Panamá. El Gobierno de Panamá conviene en cerrar sin demora, a petición del Gobierno de los Estados Unidos, cualquiera estación, instalación o aparato receptor radiográfico que, en concepto de los Estados Unidos, sea perjudicial para la seguridad y funcionamiento del Canal y sus defensas y para los movimientos de las flotas o fuerzas militares de los Estados Unidos. Se conviene, sin embargo, que con la excepción de enemigos en tiempo de guerra, la Compañía o individuos correspondientes serán compensados por las pérdidas que les cause la clausura y que los daños resultantes de ella serán avaluados y ajustados por la Comisión Mixta a que se refiere el Artículo I de este tratado, y serán pagados por los Estados Unidos en caso de que la clausura haya sido llevada a cabo por la República de Panamá a petición de los Estados Unidos.

Con la mira de cooperar al más eficaz funcionamiento del Canal, la República de Panamá concede a los Estados Unidos el derecho de instalar, mantener y poner en servicio en la República de Panamá, las estaciones radiográficas que el Gobierno de los Estados Unidos considere necesarias para que funcionen en combinación con las otras estaciones establecidas en la República de Panamá o en la Zona del Canal, o con el objeto de dirigir los movimientos de su ejército y armada. Es convenido que las estaciones radiográficas erigidas, mantenidas y manejadas por los Estados Unidos serán puestas en servicio público y transmitirán mensajes comerciales cuando no haya servicio radiográfico comercial de empresas privadas siendo entendido que los mensajes oficiales tendrán preferencia.

La República de Panamá tendrá completa soberanía en el territorio ocupado por las estaciones radiográficas que establezcan los Estados Unidos en la República de Panamá para la protección

del Canal y dirección de los movimientos del ejército y armada de los Estados Unidos, con la excepción que los Estados Unidos ejercerán jurisdicción exclusiva sobre los sitios en que se hallen esas estaciones, sobre las propiedades allí existentes y sobre el personal empleado en su funcionamiento, así como sobre los miembros del ejército y de la marina de los Estados Unidos que se ocupen en abastecer esas estaciones. Estas estipulaciones se aplicarán a las estaciones radiográficas situadas en La Palma y Puerto Obaldía, que los Estados Unidos tienen en servicio en la actualidad

En caso de guerra o de amenaza de hostilidades, se aplicará lo estipulado en el Artículo XI de este Tratado.

ARTÍCULO X

Las naves aéreas y centros de aviación en la República de Panamá que no sean de los que pertenecen a las fuerzas defensivas del Canal de Panamá, ni de los que posea y tenga en servicio oficial el Gobierno de Panamá, ni de los que posea y tenga en servicio oficial el Gobierno de Panamá, estarán sujetos a la inspección de los Gobiernos de Panamá y los Estados Unidos, con el fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y reglas que se convengan posteriormente.

Las naves aéreas pertenecientes a ciudadanos de Panamá o de los Estados Unidos y que sean manejadas por ellos, pueden navegar en la República de Panamá, siempre que, tanto las naves como sus pilotos, estén provistos de una licencia conjunta de Panamá y Estados Unidos expedida por una junta compuesta de representantes de los Gobiernos de Panamá y de los Estados Unidos, y que por lo demás se ajusten a las restricciones que recomienda la Convención sobre Reglamentación de la Navegación Aérea firmada en París el 13 de Octubre de 1919, o a las otras restricciones que ambos países, de tiempo en tiempo, convengan en dictar conjuntamente.

Las naves aéreas que no sean de las pertenecientes a las fuerzas defensivas del Canal ni de las que posea y tenga en servicio oficial el Gobierno de Panamá, deberán seguir las rutas prescritas conjuntamente por Panamá y por los Estados Unidos, al volar sobre la República de Panamá; deberán aterrizar en los campos de aterrizaje o aeródromos designados conjuntamente por Panamá y por los Estados Unidos y deberán sujetarse a las demás restricciones que los dos países prescriban de tiempo en tiempo.

Al aplicar y hacer efectivas las disposiciones y reglamentos

relativos a naves aéreas y centros de aviación, los dos Gobiernos considerarán como factor decisivo la seguridad del Canal de Panamá.

La República de Panamá conviene en no permitir volar en territorio panameño sobre áreas cercanas a las defensas del canal, salvo mediante acuerdo con los Estados Unidos.

En tiempo de guerra o cuando amenacen hostilidades, se aplicará lo estipulado en el Artículo XI de este Tratado.

ARTÍCULO XI

La República de Panamá conviene en cooperar por todos los medios posibles con los Estados Unidos en la protección y defensa del Canal de Panamá. En consecuencia, la República de Panamá se considerará en estado de guerra en caso de cualquier conflicto armado en que los Estados Unidos sean beligerantes; y con el fin de hacer más efectiva la defensa del canal, si ello fuere necesario ****pto del Gobierno de los Estados Unidos, les traspasará a éstos, durante el período de hostilidades o mientras haya amenaza de ellas, en todo el territorio de la República de Panamá, el funcionamiento, y control de las comunicaciones radiográficas e inalámbricas, naves aéreas, centros de aviación y navegación aérea.

Las autoridades civiles y militares de la República de Panamá dictarán y pondrán en vigor todas las órdenes y decretos que se requieran para el mantenimiento del orden público y para la seguridad y defensa del territorio de la República de Panamá, durante las hostilidades o mientras haya amenazas de ellas, y los Estados Unidos tendrán la dirección y control de todas las operaciones militares en cualquier parte del territorio de la República de Panamá.

Para la eficaz protección del Canal, la República de Panamá conviene también que en tiempo de paz las fuerzas armadas de los Estados Unidos tendrán libre tránsito en toda la República para ejecutar maniobras y otros fines militares, a condición, sin embargo, de que se dé aviso oportuno a Gobierno de la República de Panamá cada vez que hayan de entrar tropas armadas a su territorio. Es entendido que lo estipulado en materia de notificación no es aplicable a las naves aéreas del ejército o de la marina de los Estados Unidos.

ARTÍCULO XII

Mientras la República de Panamá dé curso forzoso ilimitado al dollar de oro de los Estados Unidos a la par con el Balboa establecido por la Ley 84 de 1903, el Gobierno de los Estados Unidos conviene en dar a la moneda fraccionaria de plata acuñada por la República de Panamá curso forzoso en la Zona del Canal, con las condiciones siguientes:

1. La moneda panameña expresa no será de curso forzoso para el pago de peajes por el uso del Canal de Panamá;
2. El valor nominal de la citada moneda fraccionaria de plata panameña no excederá de la cantidad de \$1.000.000.00;
3. La República de Panamá, con el fin de mantener la paridad legal y la equivalencia de tal moneda fraccionaria de plata con el talón de oro, establecerá y mantendrá un fondo de reserva, depositando en una institución bancaria respetable de los Estados Unidos, una suma de moneda legal de los Estados Unidos, que equivalga siempre a no menos del quince por ciento del valor nominal de la moneda fraccionaria de plata acuñada por la República, a medida que ésta es acuñada, junto con una cantidad igual al señoreaje de las monedas de plata acuñadas, menos los gastos necesarios de acuñación y transporte;
4. La República de Panamá conviene además en mantener la paridad de su moneda de plata con el talón de oro, cambiando monedas de plata cuando se presenten en sumas o múltiplos de veinte dollar o veinte Balboas por oro tomando, en relación con el cambio y por medio de giros sobre este fondo de reserva, las medidas tendientes a evitar trastornos en la paridad legal de la moneda fraccionaria de plata de la República de Panamá con el talón de oro;
5. La moneda de plata panameña expresada tendrá un valor intrínseco igual o mayor que las correspondientes monedas de plata de los Estados Unidos;
6. La moneda de plata de los Estados Unidos será de curso forzoso en la República de Panamá, en la misma proporción que lo es actualmente en los Estados Unidos;
7. La República de Panamá no prohibirá, restringirá o gravará la exportación de oro acuñado.

ARTÍCULO XIII

Es entendido y convenido expresamente que nada de lo que se estipula en este Tratado afectará en manera alguna los derechos

de una u otra de las dos Altas partes contratantes, ni será tomado como limitación, definición, restricción o interpretación restrictiva de los derechos de cada parte de acuerdo con el tratado de 18 de Noviembre de 1903 y con el Tratado del 2 de septiembre de 1914, excepto en cuanto así lo disponga expresamente este Tratado; y es entendido expresamente, además, que los derechos de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, adquiridos en virtud de las concesiones que le otorgó la República de Colombia o de otra manera y los derechos de los Estados Unidos adquiridos por compra de los derechos de la Compañía Francesa del Canal, no quedan en modo alguno alterados, menoscabados ni disminuidos por ninguno de los términos de este Tratado.

ARTÍCULO XIV

Este Tratado será ratificado de acuerdo con las formas constitucionales de las Altas Partes Contratantes, y surtirá efecto inmediato al canjearse las ratificaciones, lo cual tendrá lugar en Washington.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado este Tratado en duplicado y han estampado en él sus sellos.

Hecho en la ciudad de Washington el 28 de julio de 1926.

(fdo.) *R.J. Alfaro*

(fdo.) *Eusebio A. Morales*

(fdo.) *Frank B. Kellog*

(fdo.) *Francis White*

• • • • •

RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL*

La Asamblea Nacional de Panamá,

CONSIDERANDO:

Que desde el 15 de diciembre de 1926 está sometido a la consideración de la Asamblea Nacional el Tratado suscrito por los plenipotenciarios de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América;

* Alfaro, Ricardo J. **Op. cit.** pp. 214-215.

Que la Comisión de la Asamblea a cuyo estudio pasó el Tratado no ha considerado todavía el expresado pacto y que está próxima la clausura de sus sesiones actuales;

Que el Senado de los Estados Unidos de América no ha considerado todavía el expresado pacto y que está próxima la clausura de sus sesiones actuales;

Que algunas de las estipulaciones del Tratado han producido honda repercusión en el ánimo del pueblo panameño y lo mantienen en ansiosa expectativa; y

Que es altamente conveniente para los intereses de la República mantener las más cordiales relaciones con los Estados Unidos de América, para lo cual es preciso que esas relaciones queden reguladas de tal manera que en lo futuro no pueda surgir ninguna clase de divergencia.

RESUELVE:

Suspender la consideración del Tratado suscrito en Washington el 28 de julio de 1926 por los plenipotenciarios de la República de Panamá y los Estados Unidos de América, hasta tanto el poder Ejecutivo haya tenido oportunidad para gestionar una vez más lo conducente a conseguir soluciones que satisfagan plenamente las aspiraciones de la Nación.

Publiquese.

El Presidente

HECTOR CONTE B.

El Secretario,

Antonio Alberto Valdés

• • • • •

El texto de esta Resolución —como dije antes en el prólogo— fue acordado y redactado en un ambiente de comprensión y de patriotismo entre dos diputados a la Asamblea, caracterizados opositores del tratado, y dos de los negociadores. Sus nombres: Harmodio Arias y Domingo H. Turner; Eduardo Chiari y Ricardo J. Alfaro

INTERVENCIONISMO Y REPÚBLICA MEDIATIZADA

20

Solicitud de desarme de la Policía Nacional* (1915)

PETICIÓN DEL GOBIERNO AMERICANO PARA QUE SE IMPIDIERA A LA POLICÍA NACIONAL EL USO DE ARMAS DE LARGO ALCANCE EN LAS CIUDADES DE PANAMÁ Y COLÓN

Con fecha 15 de Octubre de 1915, el señor Ministro de los Estados Unidos de América en esta Capital dirigió a esta Cancillería una comunicación, en la cual, cumpliendo instrucciones de su Gobierno, después de hacer algunas consideraciones sobre las riñas o peleas ocurridas en las ciudades de Panamá y Colón, entre ciudadanos americanos y panameños o nacionales de otras partes y en las cuales intervino la Policía panameña, y sobre las consecuencias de esas riñas, y de afirmar que en ellas nuestra Policía ha estado armada con rifles de gran calibre, además de las armas pequeñas, lo que en su opinión constituye un peligro para los soldados y civiles americanos que visitan el territorio colocado bajo la jurisdicción panameña, concluía pidiendo al Gobierno de Panamá que impidiera a la Policía de las ciudades de Panamá y Colón, el uso de rifles de gran calibre.

Esta Cancillería, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno y Justicia, contestó con fecha 12 de noviembre de 1915, manifestando su extrañeza por esa petición, pues la Policía no ha tenido nunca por costumbre usar rifles en el servicio de seguridad urbana y además que con anterioridad se habían dado órdenes terminantes para no permitir que nuestra Policía ocurriera a esa clase de armas para establecer el orden en las riñas o peleas que se susciten entre particulares. Se hacía constar que de acuerdo con las disposiciones dictadas, la Policía solo usaba rifles para las paradas mensuales de la revista, para servir la Guardia de Honor en el Palacio de la Presidencia de la República, la guardia de preven-

* Secretaría de Relaciones Exteriores. MEMORIA. Panamá, 1916; pp. XXII-XXV.

ción en el Cuartel Principal de esta ciudad y el de Colón, las guardias de presidio y la custodia de presos.

Nada replicó el Gobierno Americano, hasta el 9 de mayo del año en curso, en cuya fecha, el Ministerio de los Estados Unidos en esta Capital, se dirigió nuevamente a esta Cancillería comunicando que había recibido instrucciones de su Gobierno para que informara al de Panamá que, después de haber considerado detenidamente el asunto, había llegado a la conclusión definitiva de que el uso de rifles de largo alcance por la Policía Nacional en las ciudades de Panamá y Colón, constituía una fuente de peligro tan grande para sus connacionales que creía indispensable insistir en su petición de que se privara a nuestro Cuerpo de Policía en ambas ciudades de esos rifles de largo alcance, que podrían ser depositados en los cuarteles de la zona del Canal para ser retirados de allí en caso de cualquier emergencia.

El Gobierno consideró la petición hecha por los Estados Unidos como un asunto de suma gravedad y en conferencias celebradas con el señor Ministro Americano y cumpliendo instrucciones del señor Presidente de la República, el suscrito se esforzó por hacerle comprender la ninguna razón que asistía a su Gobierno para semejante exigencia, ya que el derecho que se concede a los Estados Unidos en el Tratado del Canal "para el mantenimiento del orden público en las ciudades de Panamá y Colón y sus territorios y bahías adyacentes en caso de que, a juicio de los Estados Unidos, la República de Panamá no puede mantenerlo" no los autorizaba para decidir acerca de la clase de armas que debe usar nuestra Policía cuando el orden está debidamente mantenido por ese Cuerpo.

Como todas nuestras gestiones fueron vanas y el señor Ministro manifestara que tenía instrucciones de hacer que los rifles de la Policía fueran entregados a las autoridades militares de la Zona del Canal, creímos que tal vez se conseguiría algo por medio de un mensaje dirigido por el Presidente de nuestra República al Presidente Wilson, apelando a su espíritu de justicia y a las ideas que sobre Panamericanismo ha exteriorizado el actual Gobernante de los Estados Unidos y el Excelentísimo señor Presidente de la República se dirigió también a los residentes de Argentina, Brasil y Chile, con el objeto de conseguir su cooperación; pero tampoco dieron resultado esas gestiones, pues a los tres días el señor Ministro de los Estados Unidos recibió un cablegrama suscrito por el Secretario de Estado en que se le ordenaba exigiera el inmediato

retiro de las armas de largo alcance a la Policía Nacional de las ciudades de Panamá y Colón.

En vista de ello se convocó a una Reunión de Notables que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Asamblea Nacional el 13 de mayo del año en curso. A ella concurrieron, además de los Secretarios de Estado, 42 personalidades, de distintas opiniones políticas, y si bien muchos de los miembros del partido de oposición, creyendo equivocadamente ver en la actitud de los Estados Unidos una censura al Gobierno por haber sido hecha la petición en vísperas de las elecciones, fueron de opinión que debía accederse a ella, la mayoría de los presentes protestaron patrióticamente contra las pretensiones del Gobierno de los Estados Unidos y opinaron que sólo debía accederse a ellas si no era posible evitarlo y al hacerlo que fuera bajo protesta.

El Gobierno entonces resolvió que las armas de largo alcance usadas por la Policía en las ciudades de Panamá y Colón, fuesen vendidas en los Estados Unidos, por mediación del Cónsul de la República en New York.

En reunión celebrada en el Despacho de esta Secretaría el 15 de mayo del año en curso, a la que concurrieron además del suscrito, el señor Secretario de Gobierno y Justicia, el Ministro Americano, el Gobernador del Canal y el Comandante General de las Tropas Americanas estacionadas en el Istmo, quedó convenido que nuestro cuerpo de Policía dejaría de usar rifles en las ciudades de Panamá y Colón, con excepción de los necesarios para la Guardia de Honor del Presidente de la República, que conservaría el uso de carabinas para la custodia de presos, guardia de los Cuarteles y otros servicios y que los rifles se enviarían a los Estados Unidos para ser vendidos allí. También se convino que, mientras no llegaran las carabinas, se conservarían 125 rifles, que serían vendidos también cuando se recibieran aquellas. Se especificó que el arreglo se limitaba a las ciudades de Panamá y Colón solamente.

En seguida esta Cancillería contestó con fecha 18 de mayo la nota del señor Ministro Americano, expresando su protesta por la exigencia injustificada de su Gobierno.

En los anexos de esta Memoria encontraréis el texto de dicha nota-protesta.

21 Imposición del Desarme

NOTA DE PROTESTA*

Secretaría de Relaciones Exteriores.— No.S-9736.— Panamá, mayo 18 de 1916.

Señor Ministro:

Honda sorpresa ha producido en el ánimo de Su Excelencia el Presidente de la República y de los miembros todos de su Gabinete, la inesperada comunicación de Vuestra Excelencia No. 304, de fecha 9 de los corrientes, en que de manera categórica y terminante exige Vuestra Excelencia, en nombre de su Gobierno, el inmediato desarme del Cuerpo de Policía Nacional en las ciudades de Panamá y Colón.

Tal sorpresa se explica fácilmente al considerar lo injustificado de la solicitud y la manera excesivamente dura como se ha hecho, inexplicable para el Gobierno de Panamá, mediando como median las más cordiales y sinceras relaciones entre los dos gobiernos y después de las razones y explicaciones que se dieron a Vuestra Excelencia por la Cancillería a mi cargo cuando por primera vez hizo Vuestra Excelencia tal solicitud, razones y explicaciones que se juzgaron convincentes y que parecieron serlo en vista del silencio que sobre ellas guardó Vuestra Excelencia desde el día 12 de noviembre de 1915, fecha de la última nota relativa a este asunto, y en vista del desistimiento por un periodo de siete meses de la petición que ahora renueva Vuestra Excelencia.

Después de los sucesos del 4 de julio de 1912 y del 2 de abril de 1915 en Colón, que según manifiesta Vuestra Excelencia, sirven de fundamento a su Gobierno para exigir el desarme de la Policía Nacional en las ciudades de Panamá y Colón, ningún caso nuevo ha ocurrido que permita abrigar el temor de que dicho cuerpo sea un elemento peligroso. Las relaciones entre nuestra Policía y la de la zona del Canal son de lo más cordiales y benéficas por la

* *Op. cit.*, pp. 182-84.

cooperación que se prestan y mi Gobierno puede afirmar enfáticamente que desde la fecha en que se pudieron en vigor los acuerdos que rigen hoy sobre el modo cómo deben visitar las ciudades de Panamá y Colón los soldados y marinos de los Estados Unidos, ningún conflicto ha ocurrido entre ellos y nuestra Policía.

Por tales razones la actitud del Gobierno de Vuestra Excelencia es absolutamente inexplicable, y estudiado el incidente desde el punto de vista de las relaciones internacionales y contractuales que existen entre los dos países, tal actitud es también injustificable.

En efecto, siendo Panamá una nación soberana e independiente, el Gobierno de los Estados Unidos no tiene derecho para decidir si este país puede o no tener una fuerza nacional armada de rifles de largo alcance. El decidir tal punto es una cuestión de política interna del país y su solución definitiva le corresponde únicamente a nuestra Asamblea nacional, de conformidad con el inciso 12 del artículo 55 de nuestra Constitución.

Vuestra Excelencia me ha manifestado en alguna ocasión que el Gobierno de los Estados Unidos tiene facultad, según el último aparte del artículo VII del Tratado del Canal para tomar a su cargo la Policía en las ciudades de Panamá y Colón. Es ésta la ocasión de reiterar a Vuestra Excelencia que el Gobierno de Panamá rechaza definitiva y solemnemente tal interpretación del Tratado de 1903.

El aparte referido establece que en caso de que al Gobierno de Panamá le sea imposible mantener el orden público en dichas ciudades, a juicio del Gobierno de los Estados Unidos, éste podrá mantenerlo. Se trata pues, del mantenimiento del orden público que consiste en el funcionamiento tranquilo de los altos poderes nacionales y el objeto claro y visible es que el Gobierno Nacional que reside en la ciudad de Panamá esté en capacidad de defenderse de rebeliones o de revoluciones, aún en el caso extremo de que fuera impotente para reprimir éstas. Tal facultad, por otra parte, está considerada en el Tratado como una función transitoria y no permanente, pues sería absurdo admitir que dos países celebraran un tratado por el cual uno de ellos se obliga solemnemente a garantizar la independencia y la soberanía del otro y que en el mismo documento se consigne otra cláusula que desconoce la garantía y sirve para destruir en cualquier momento la independencia y la soberanía garantizadas.

No es fácil al Gobierno de Panamá penetrar el verdadero móvil que ha guiado al gobierno Americano para ponerlo en la crítica situación de consentir en el desarme de la Policía en las ciudades de Panamá y Colón, acto reñido con todo principio de justicia y

que sorprende más en los presentes momentos en que el Jefe del Gabinete Americano.

Mi Gobierno considera ofensiva para la dignidad nacional la solicitud de desarme de nuestro Cuerpo de Policía en las ciudades de Panamá y Colón y conceptúa que no han sido siquiera apreciadas y menos correspondidas sus repetidas y valiosas pruebas de simpatía y lealtad al pueblo Americano. No ha habido una sola ocasión, sea ésta la oportunidad de decirlo de manera categórica, en que al país se le haya hecho una solicitud por el Gobierno de los Estados Unidos sin ser inmediatamente complacido, concesiones de tierras y aguas; expedición de leyes especiales, entre ellas las que dispone el castigo de los que enganchan obreros del Canal de Panamá, medidas de sanidad, de comunicaciones inalámbricas, de inmigración o seguridad de cuartel para patrols, cuanto ha pedido le ha sido otorgado, y, en cambio de ésto, hemos visto cómo cada día se ejerce mayor coacción sobre el país, haciendo competencia ruinosa a nuestro comercio con los comisariatos y con ello obstaculizando el desenvolvimiento de nuestras industrias, mezclándose en el manejo de nuestras finanzas y tratando a menudo de ejercer control en nuestros actos de soberano, sin que nuestras protestas hayan sido nunca escuchadas, pues parece como que hubiera empeño por parte de un poderoso país de cien millones de habitantes en deprimir y humillar a una modesta República de sólo quinientas mil almas.

El sentimiento nacional ha sido herido vivamente. No es la República de Panamá poderosa, no tiene la suprema razón que hoy priva en el mundo para defenderse, y sólo le toca hacer lo que a todos los débiles: doblegarse bajo el peso que no puede resistir, dejar que se cumpla el injustificable deseo del Gobierno de Vuestra Excelencia, más no sin que el Gobierno panameño presente ahora su más solemne y formal protesta por la exigencia y por el modo de llevarla a cabo, que considera como violatorio de su soberanía.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi consideración más distinguida y aprecio personal,

(Fdo.) E.T. Lefevre

A su Excelencia
Wm. Jennings Price,
Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario
de los Estados Unidos de América.



**CONTRATO NUMERO 10
DE 1917***

Entre los suscritos, a saber, Eusebio A. Morales, en su carácter de Secretario de Gobierno y Justicia, por una parte, que en lo sucesivo se llamará el Gobierno, y Albert R. Lamb, en su propio nombre, por otra, se ha celebrado un contrato en los términos siguientes:

PRIMERO.— Albert R. Lamb se obliga a servir al Gobierno como Instructor e Inspector del Cuerpo de Policía Nacional, por el término de dos años contados desde el 17 de septiembre de 1917.

Las obligaciones que Lamb contrae son las siguientes:

- a. Estudiar la organización actual del Cuerpo de Policía Nacional y presentar, dentro de treinta días contados desde la fecha de este Contrato, un informe detallado sobre las condiciones de dicho Cuerpo, junto con el plan de organización y de reformas que él crea convenientes para la mayor eficacia en el servicio.
- b. Servirle de Consultor al Comandante Primer Jefe del Cuerpo.
- c. Dirigir la reorganización del Cuerpo de Policía de conformidad con los planes que el Gobierno haya adoptado, haciendo uso de las facultades que se le hayan conferido expresamente.
- d. Establecer, organizar y dirigir una sección de detectivismo en todo el país, fundar un Gabinete de identificación de criminales de acuerdo con los últimos adelantos del ramo, y enseñarle éste a los Oficiales y agentes que el Gobierno designe.

SEGUNDO.— El Gobierno se obliga:—

- a. A pagarle a Lamb un sueldo de doscientos cincuenta dollars (D/250.00) mensuales que principiará a correr desde el día 17 de septiembre en curso y por el término de dos años que expirarán el 17 de septiembre de 1919.
- b. A suministrarle a Lamb una habitación amueblada convenientemente en el piso alto del Cuartel Central de Policía de esta ciudad. En caso de que Lamb traiga su familia a vivir en la ciudad de Panamá, el Gobierno le concederá una suma mensual adicional de veinticinco balboas (B/25.00) por el tiempo que ella permanezca aquí.
- c. A pagarle a Lamb sus gastos de venida, calculados en ciento cincuenta balboas (B/15.00) y de regreso a la terminación de este Contrato, calculados en la misma suma.

* Secretaría de Gobierno y Justicia. MEMORIA. Panamá, 1918; pp. 204-205.

- d. A suministrarle a Lamb para su uso en relación con el servicio, un automóvil pequeño que pertenece actualmente a la Nación y un caballo que él designará de entre los que el Cuerpo de Policía posee y tiene en uso.
- e. A pagarle a Lamb los gastos de transporte que son necesarios para visitar cuando reciba ordenes del Gobierno, las distintas secciones de la Policía Nacional.

TERCERO. — El Gobierno podrá ponerle término a este Contrato en cualquier tiempo, pagándole a Lamb una indemnización equivalente al sueldo de tres meses, o sean la suma de setecientos cincuenta dollars (D/750.00).

Hecho en dos ejemplares de un mismo tenor en Panamá, a los 24 día del mes de Septiembre del año de 1917.

El Secretario de Gobierno y Justicia,
(Fdo.) *Eusebio A. Morales*

El Contratista,
(Fdo.) *A. R. Lamb*

República de Panamá, — Presidencia, — Panamá septiembre 24 de 1917.

Aprobado.
(Fdo.) *Ramón M. Valdés*



Protesta por la imposición de los límites con Costa Rica*

(mejor conocida como Guerra de Coto)

NOTA-PROTESTA DEL DR. GARAY AL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Washington, agosto 24 de 1921.— Excelentísimo Señor: Tengo el honor de acusar recibo de las muy importantes comunicaciones que se ha servido dirigirme Vuestra Excelencia con fechas 18 y 23 de los corrientes. En la primera de ellas transcribe Vuestra Excelencia el texto del despacho que Su Excelencia el Ministro de los Estados Unidos en Panamá recibió instrucciones de comunicar a mi Gobierno el 18 del actual a propósito de la determinación del Gobierno de los Estados Unidos de no seguir interponiendo su mediación amistosa entre Panamá y Costa Rica en el sentido de obtener de Costa Rica que demorara por más tiempo la toma de posesión de los territorios del Pacífico que le adjudicó una parte del laudo proferido por el Presidente de Francia el 11 de septiembre de 1900. Esa comunicación ha visto la luz pública en diferentes diarios de esta capital y su contenido es universalmente conocido.

En la segunda nota transcribe Vuestra Excelencia el texto de la respuesta que ha dado el Gobierno de los Estados Unidos a la aclaración solicitada por mi Gobierno en relación con la comunicación anterior sobre si debía entender que el Gobierno de los Estados Unidos se apartaba del conflicto y dejaba a Panamá en libertad de entenderse con Costa Rica en el terreno de las armas o si, por el contrario, ese Gobierno estaba dispuesto a impedir de todos modos que se renovaran las hostilidades entre Panamá y Costa Rica. Esa respuesta también pertenece ya al dominio público y sería superfluo reproducir aquí su contenido.

Simultáneamente con estos despachos, es público y notorio que el Gobierno de Vuestra Excelencia ha enviado a Panamá un batallón de marinos con el propósito de mantenerse listo a desem-

* Secretaría de Relaciones Exteriores. **Memoria**, Panamá. 1972. pp. 378-381.

barcar en el territorio en disputa en caso de que Panamá intente defenderse del despojo que contra ella se va a consumar, imponiéndole así, por medios coercitivos, la orden perentoria que el Gobierno de los Estados Unidos le ha impartido de que acepte, mal de su agrado, la mitad meridional del laudo Loubet, sin previo amojonamiento y sin haberse resuelto previamente por un tribunal imparcial y competente si la República está obligada o no a cumplir en forma fragmentaria un laudo arbitral que desde el primer momento estuvo dispuesta —y lo está todavía— a cumplir en su totalidad. En vista de las comunicaciones arriba citadas y de la demostración de fuerza que las respalda, mi gobierno ha resuelto retirar sus autoridades del territorio en litigio y cortar la comunicación telefónica que existe entre las poblaciones de Coto y Progreso. Al notificar a Vuestra Excelencia esta resolución que razones de fuerza mayor le imponen a mi Gobierno, Vuestra Excelencia me ha de permitir que la acompañe de algunas consideraciones pertinentes.

La Misión Especial que el Excelentísimo Señor Presidente de la República de Panamá me dio el encargo de desempeñar ante el Gobierno de Vuestra Excelencia, ha sido ante todo una misión de amistad, de paz y de panamericanismo. Desde la primera audiencia que Vuestra Excelencia se dignó concederme en su Despacho, le puse de manifiesto que la situación difícil porque atraviesan en estos momentos las relaciones entre nuestros dos países era el campo más propicio para que aquellos sentimientos de buena voluntad y solidaridad continental pudieran ejercitarse y hacer obra fecunda. Me esforcé por llevar al ánimo de Vuestra Excelencia la convicción de que una solución violenta de las diferencias legales que mediaban entre Panamá y Costa Rica tendría consecuencias acaso más funestas para los Estados Unidos que para Panamá, porque el espectáculo del débil oprimido suscita siempre las simpatías de las almas nobles y los corazones generosos, en tanto que el gesto duro del fuerte despierta aversión y odiosidad. Hice ver a Vuestra Excelencia que países tan estrechamente vinculados entre sí como los nuestros, debían convivir en un ambiente de cordialidad y buen entendimiento y que someter a mi país a una imposición en un litigio de fronteras en que los Estados Unidos no eran parte, sería un atentado contra la soberanía y dignidad de Panamá, que ese pueblo, amigo de los Estados Unidos, no olvidaría jamás. Mis llamados vehementes a la moderación, al empleo de medios pacíficos y legales para resolver el conflicto: arbitraje, arreglo directo, mediación de potencias continentales imparciales y desinteresadas, etc., se inspiraron en el más

sincero y mejor intencionado propósito de preservarle a esta gran democracia americana del Norte, la simpatía y la buena voluntad de un pueblo de cuya lealtad ha recibido pruebas señaladas el Gobierno de los Estados Unidos. Casi todas esas razones y otras destinadas a poner de relieve que una solución basada en la fuerza sería contraria a los propósitos de pacificación centroamericana que persigue el Gobierno de los Estados Unidos, porque sembraría entre los pueblos limítrofes los gérmenes de un odio inextinguible, fueron consignados en el Memorandum que tuve el honor de someter a la consideración de Vuestra Excelencia en junio último. Pero Vuestra Excelencia se ha mostrado inaccesible a esas sugerencias pacíficas y ha preferido precipitar el desenlace colocando en la balanza del conflicto el poder militar o naval de los Estados Unidos o inclinándola a favor de Costa Rica y en contra de Panamá.

EL TIEMPO ES EL MEJOR JUEZ DE LOS ACTOS DE LOS HOMBRES Y DE LOS PUEBLOS. EL DIRÁ SI LOS MEDIOS CONCILIADORES Y AMISTOSOS RECOMENDADOS POR ESTA MISIÓN RESPONDÍAN O NO A UNA NOCIÓN CLARA DE LA VERDADERA NATURALEZA DEL CONFLICTO Y A LOS ANHELOS DE PAZ, TRANQUILIDAD Y TRABAJO QUE SE HACEN SENTIR HOY EN ESA REGIÓN DEL ISTMO. EN PRESENCIA DE LA ACTITUD INEQUÍVOCA ASUMIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE.UU. PANAMÁ SE VE OBLIGADA A SOMETERSE A SU DURO DESTINO; PERO EN SU MISMA DEBILIDAD ENCUENTRA ENERGÍAS SUFICIENTES PARA CLAMAR AL CIELO CONTRA LA INJUSTICIA Y LA VIOLENCIA A QUE SE LA SUJETA, Y PARA DECLARAR QUE MIENTRAS PALPITEN CORAZONES PANAMEÑOS EN EL MUNDO, CONSERVARÁ VIVA LA HERIDA PROFUNDA INFERIDA A SU DIGNIDAD Y A SU ALTIVEZ Y MIRARÁ CON ANSIEDAD HACIA EL PORVENIR EN ESPERA DE ESA JUSTICIA REDENTORA QUE HOY SE LE DENIEGA, PERO QUE LLEGARÁ PARA ELLA ALGÚN DÍA POR INEXORABLE DESIGNIO DE DIOS.

Los actos que ejecute el Gobierno de Costa Rica amparado por el de los Estados Unidos, serán impotentes para matar o debilitar el derecho de Panamá a seguir ocupando el territorio panameño del STATUS QUO fronterizo mientras las objeciones legales que ha formulado contra la validez del Fallo White no sean examinadas y resueltas por jueces imparciales y desinteresados; y los hechos de que va a ser teatro el territorio disputado del pacífico sólo demuestran que en el estado actual del mundo, la fuerza rige todavía las relaciones de los Estados y que los derechos de los pueblos sólo valen en razón directa de los rifles, ametralladoras y cañones con que cuentan para respaldarlos. El Gobierno de los Estados Uni-

dos, asumiendo poderes que no le confiere el Tratado del Canal, ni las leyes, ni la Constitución de Panamá, ha actuado como tribunal judicial en este conflicto y decidido sin pedimento de parte que las excepciones alegadas por Panamá contra la validez del Fallo White son infundadas.

El Gobierno de los Estados Unidos interpretando a su arbitrio y extensivamente el Tratado del Canal, y prescindiendo del derecho que tiene la otra parte contratante a interpretar el Tratado de que es signataria, le señala límites a la República de Panamá sin la intervención ni el consentimiento de ésta. El Gobierno de los Estados Unidos, por último, dando un paso de grandísimas consecuencias para el porvenir de la causa del arbitraje, acaba de constituirse en Poder Ejecutivo Internacional compeliendo a otras soberanías al cumplimiento de los fallos arbitrales. Mi Gobierno considera estos hechos como otros tantos excesos de poder que afectan hondamente la independencia y soberanía de la Nación Panameña, y de la manera más formal y solemne protesta contra ellos ante el Gobierno de Vuestra Excelencia.

No obstante los hechos cumplidos y la natural depresión que ellos han dejado en el ánimo de esta Misión, su confianza en el espíritu de justicia del pueblo de los Estados Unidos permanece inquebrantable; y esa fe profunda no habría flaqueado un instante aún cuando del seno de esta gran democracia no hubieran surgido aún, como han surgido ya, voces favorables a la causa de Panamá, voces que mañana se harán más perceptibles, encauzando la corriente de la opinión pública y determinando el acto reparador que mi país se promete en un porvenir más o menos cercano.

Al abandonar el suelo de los Estados Unidos, permítame Vuestra Excelencia que le manifieste una vez más mi reconocimiento por sus cortesías y deferencias durante el desempeño de mi Misión, y le reitere al mismo tiempo las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

NARCISO GARAY

Excelentísimo Señor
Charles E. Hughes,
Secretario de Estado
de los Estados Unidos,
Washington, D.C.



23

Manifiesto a la Nación*

(1921)

Cuando en el mes de febrero del presente año Costa Rica invadió el territorio nacional de manera alevosa y sin más antecedente diplomático inmediato que una misión de cordialidad y fraternidad encabezada por un Plenipotenciario, la República de Panamá, inerme pero llena de dignidad, se levantó como un solo hombre para rechazar al invasor y en tres acciones de guerra castigó su audacia, lo redujo a la impotencia y después, llena de nobleza, cuidó de sus heridos, halagó sus prisioneros y les dio la libertad a todos.

Los Estados Unidos de América se ofrecieron como mediadores en el conflicto y aceptada por Panamá la mediación, las hostilidades quedaron suspendidas y comenzaron las gestiones diplomáticas. El Gobierno Nacional, representado en Washington por el Secretario de Gobierno y Justicia hizo numerosas y enérgicas argumentaciones ante la Cancillería americana, para demostrar cuán injustificada esa la actitud de Costa Rica tanto desde el punto de vista del derecho como desde el punto de vista del hecho incalificable de la invasión militar, sin que la precediera una amenaza, una advertencia, una reclamación, una demanda siquiera, después de seis años de silencio, transcurridos desde las últimas notas canjeadas después de que Panamá proclamó la nulidad del Fallo White.

Panamá había declarado oficialmente desde octubre de 1914, inmediatamente después de proferido el Fallo White, que éste era nulo por exceso de jurisdicción, desde luego que llamado el Arbitro a interpretar el Laudo Loubet, lo que hizo fue declarado nulo y tenerlo por no existente. Y esta proposición jurídica no es fruto de un patriotismo ciego, sino consecuencia clara de los principios del derecho internacional. Por eso hemos visto que la han sostenido también con su gran prestigio científico jurista tan eminentes como el profesor cubano, Dr. Antonio S. de Bustamante, el profesor chileno Ricardo Montaner Bello y los reputados jurisconsultos ame-

* *Diario de Panamá*. Año XVII, No. 10105. Panamá, 25 de agosto de 1921, p. 1.

ricos William Nelson Cronwell, Edward Bruce Hill y William J. Dulles.

El Gobierno mediador no se dio por convencido sin embargo y en nota de fecha 2 de mayo de 1921 que tenía carácter de ULTIMÁTUM notificó al Gobierno de la República que la cuestión de límites con Costa Rica debía ser arreglada conforme al fallo White, que Panamá debía proceder a entregar en seguida a Costa Rica la región que ocupaba del lado del Pacífico conforme al statu quo y que si esto no se hacía dentro de un plazo razonable, "el Gobierno de los Estados Unidos se verá obligado al PROCEDER DEL MODO QUE FUERA NECESARIO con el objeto de asegurar que se traspasara de manera apropiada el ejercicio de la jurisdicción".

La cuestión asumía, pues, otra faz, porque el Gobierno mediador no solamente se arrogaba la facultad de dictaminar sobre la validez de un laudo en el cual ese Gobierno no había sido ni parte ni juez, sino que se convertía de hecho en ejecutor de una sentencia internacional por ser a su juicio correcta, y nos amenazaba con medidas coercitivas para su ejecución, dejándonos en la tortura de la incertidumbre, pues nunca ha declarado el Gobierno americano cuáles iban a ser esas medidas de coerción que se proponía emplear contra Panamá.

En estas circunstancias el Gobierno Nacional decidió hacer un supremo esfuerzo diplomático para el efecto de obtener una solución honrosa y satisfactoria del doble conflicto que la actitud del Gobierno americano planteaba: la controversia de fronteras con Costa Rica y la divergencia con los Estados Unidos, a causa de las facultades que esta Nación se atribuía con el propósito de obligarnos a aceptar contra nuestra voluntad un laudo jurídicamente ineficaz. Para consumir tal esfuerzo el Gobierno decidió enviar a Washington en misión especial al Secretario de Relaciones Exteriores y decidió además enviar al Sur cuatro misiones plenipotenciarias acreditadas ante las Repúblicas de Argentina, Brasil, Chile y el Perú, las cuatro potencias latinoamericanas que mantienen embajadas en Washington.

El objeto de estas misiones era el de dar a conocer a aquellos pueblos hermanos los fundamentos de la actitud que había asumido Panamá en esta emergencia, actitud que no era la de una nación rebelde al principio del arbitraje, como se empenaba en demostrar propaganda malévola e interesada, sino que era por el contrario la de una nación que proclamaba precisamente los principios fundamentales de esa institución jurídica, salvaguardia de los pueblos

débiles. También se proponía el Gobierno con el envío de esas misiones, el lograr que las cuatro potencias latinoamericanas, por medio de sus respectivas embajadas en Washington coadyuvaran con sus buenos oficios y en la forma que les fuera dable, a la labor que se encomendaba al Canciller de la República. Estas misiones fueron confiadas a cuatro ilustrados compatriotas que hicieron cuantos esfuerzos pudieron en desempeño de su cometido y en conjunto los resultados obtenidos fueron satisfactorios y correspondieron en mayor o menor grado a los anhelos del Gobierno.

El Secretario de Relaciones Exteriores en Washington comenzó su labor presentando nuevamente un resumen conciso pero completo de los argumentos con que Panamá justifica su actitud; mas no logró obtener que el Departamento de Estado americano se diera por convencido. Alentado por el mismo Departamento para que entrara en negociaciones directas con el representante de Costa Rica, inició con éste conferencias tendientes a llegar a un arreglo directo, pero bien pronto se vio que Costa Rica no mostraba intención sincera de llegar a una transacción honrosa sino a la imposición de sus pretensiones extremas; los tales arreglos no tenían por objeto en la mente de Costa Rica, sino poner en práctica los medios de llegar a la ejecución del fallo repudiado por nosotros. Fue necesario en consecuencia, desechar toda esperanza de arreglo directo con Costa Rica y se rompieron las negociaciones entabladas.

Como los Estados Unidos al convertir en ejecutores del fallo White venían a crear con Panamá un conflicto diplomático que sólo podía resolver o por el medio pacífico del arbitraje o por medio de la fuerza, Panamá invitó a los Estados Unidos a que sometieran a la Corte de Justicia de La Haya la controversia existente entre los dos países. Pero los Estados Unidos rehusaron el arbitraje, declarando que ellos no eran parte en el conflicto. Entonces Panamá, teniendo en cuenta que Costa Rica es miembro de la Liga de las Naciones y que ha firmado además la Convención de Arbitraje de La Haya, la invitó a someter la actual diferencia al medio civilizado del arbitraje, pero Costa Rica, por un lado temerosa sin duda de someterse a un arbitraje que a ser expresión de la justicia le habría sido adverso y por otro lado alentada por la actitud inflexible de los Estados Unidos de atenerse al fallo White como única solución posible del asunto, rehusó también al arbitraje.

Por nota de fecha de 5 de agosto el Gobierno de los Estados Unidos transmitió al Secretario de Gobierno, encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores, la demanda hecha por el Gobierno

de Costa Rica, de que el Presidente de Panamá nombrará un miembro de la Comisión demarcadora que estableció el Convenio Arbitral Anderson-Porras, a efecto de que procediera a llevar a cabo la demarcación de la frontera internacional desde Punta Burica hasta Cerro Pando. El encargado de la Cancillería respondió que siendo nulo el fallo White, había caducado la Convención arbitral que le dio vida; que, por tanto, la demanda de Costa Rica era improcedente y que en consecuencia Panamá proclamaba una vez más su derecho a seguir ejerciendo jurisdicción sobre los territorios que ocupaba de conformidad con el status quo, mientras la cuestión de fronteras no se arreglara en forma que tenga eficacia jurídica, emanada de la voluntad soberana de las dos naciones interesadas.

El día 19 de los corrientes una nueva nota del Departamento de Estado, transmitida por el Señor Ministro Americano, declaraba que en vista de que había transcurrido ya el plazo razonable de que hacía mención en su nota de fecha 2 de mayo, sin que Panamá hubiese tomado las medidas que allí se le exigían, el Gobierno de los Estados Unidos no se sentía obligado a sugerir al de Costa Rica que demorara por más tiempo el asumir jurisdicción sobre el territorio que adjudicó a aquella nación el Laudo Loubet. Al mismo tiempo notificaba a Panamá que Costa Rica iba a proceder inmediatamente a tomar posesión de dicho territorio.

El Gobierno panameño consideró de su deber asumir la misma actitud levantada en que se colocó cuando el conflicto armando estalló la primera vez, con tanta mayor razón cuanto que la nota no era terminante respecto a darle los Estados Unidos a Costa Rica apoyo militar para el logro de sus aspiraciones. Por tanto el Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores, en conferencia celebrada con el Señor Ministro Americano, manifestó a éste la voluntad y la decisión de Panamá de rechazar por la fuerza de las armas la anunciada toma de posesión por Costa Rica. Agregó dicho Secretario que deseaba una manifestación terminante sobre el particular, ya que los Estados Unidos habían manifestado en el mes de abril que no permitirían hostilidades entre Panamá y Costa Rica y por cuanto Panamá no quería colocarse en la actitud insensata de provocar un conflicto armado con los Estados Unidos. El Gobierno dio enseguida, mientras llegaba la respuesta, las órdenes conducentes para tenerlo todo preparado para la defensa armada del honor nacional en caso necesario.

La respuesta del Gobierno americano llegó el día 23 y en ella se nos hacía saber de manera inequívoca y terminante que los

Estados Unidos no permitirían abrir hostilidades contra Costa Rica con el objeto de oponerse a la toma de posesión por parte de ésta. Tal declaración vino, además, reforzada con noticias oficiales procedentes de Washington, de haber sido despachado de Filadelfia, a bordo del acorazado Pennsylvania un fuerte destacamento de marinos, con equipo de campaña completo, que venían al Istmo con el fin ostensible de respaldar la actitud de los Estados Unidos. Ante estos hechos que revelan que el conflicto ha quedado resuelto por la fuerza y no pudiendo Panamá contrarrestar en manera alguna el inmenso poder militar, naval económico y político de los Estados Unidos de América, Panamá se ve impotente para resistir por las armas la ofensa que Costa Rica le irroga, y considerando inútil sacrificar los pocos representantes de la soberanía nacional que se encuentran en la población de Coto, e innecesario igualmente exponer a los ultrajes del invasor la bandera panameña que allí flameó victoriosa sobre nuestros enemigos cuando pudimos batirnos con ellos, ha resuelto abandonar esa población antes de que entren allí las tropas de Costa Rica, respaldadas por la poderosa nación cuyo apoyo han tenido en este conflicto.

El Gobierno tiene conciencia de que ha hecho todos los esfuerzos, ha expuesto todos los argumentos, ha movido todos los resortes, ha puesto en juego todos los recursos, ha realizado todos los afanes, ha sufrido todas las angustias y ha consumado todos los sacrificios posibles para obtener una solución satisfactoria de esta crisis. Pero nada ha hecho variar la actitud inflexible de los Estados Unidos y la única satisfacción del Gobierno es haber presenciado el magnífico espíritu de nacionalismo, el valor y la entereza que el pueblo panameño ha puesto en evidencia durante todo el conflicto.

Panamá protesta ante el mundo por el acto de fuerza que se ha llevado a cabo contra ella y se reserva la facultad de ocupar en la forma y en el tiempo que crea oportunos los territorios que le fueron adjudicados por el Laudo Loubet, así como también la de hacer efectivos los derechos nacidos del acto sin precedentes por medio del cual Costa Rica ha violado el status quo existente entre las dos naciones, ha violado las reglas y práctica que se estilaban entre pueblos civilizados, ha violado el pacto de la Liga de las Naciones y ha violado, por último, el espíritu de solidaridad y confraternidad que debe existir entre los países latinoamericanos.

24 de Agosto de 1921.

El presidente de la República
BELISARIO PORRAS

El Secretario de Gobierno y Justicia,
Encargado del Despacho de Relaciones Exteriores,
RICARDO J. ALFARO

El Secretario de Hacienda y Tesoro
EUSEBIO A. MORALES

El Secretario de Instrucción Pública,
JEPHTHA B. DUNCAN

El Secretario de Fomento y Obras Públicas,
MANUEL QUINTERO V.

24

Lucha inquilinaria y la injerencia extranjera*

(1925)

DEMANDAS POPULARES Y LA INJERENCIA EXTRANJERA

S.P. No. 2454.— Panamá, Octubre 12 de 1925.

Señor Encargado de Negocios:

Tengo el honor de confirmarle la conversación que tuve en la mañana de hoy con Vuestra Señoría en la cual le trasmití las instrucciones que había recibido del Excelentísimo señor Presidente de la República para solicitar, por conducto de Vuestra Señoría, la cooperación del Gobierno de los Estados Unidos en la crisis por la cual atraviesa el país.

Vuestra Señoría no ignora que desde hace algunos días elementos subversivos han venido agitándose y hoy amenazan seriamente el orden en esta ciudad.

Mi Gobierno, en los actuales momentos cuenta con la fuerza necesaria para dominar la situación, pero ha pensado que si las autoridades militares de los Estados Unidos prestasen su ayuda, de acuerdo con las bases convenidas en la reunión que tuvimos esta mañana con Vuestra Señoría, el Gobernador de la Zona y el General Lassiter, al movimiento subversivo que nos amenaza se le pondría fin con rapidez, sin derramamiento de sangre ni desgracias que lamentar. Por consiguiente, me permito, a nombre de mi gobierno, solicitar la ayuda de las fuerzas americanas acantonadas en la Zona del Canal, mientras las circunstancias así lo requieran, a juicio del Gobierno de Panamá.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más distinguida consideración.

H.F. Alfaro

* Ministerio de Relaciones Exteriores. MEMORIA. Panamá, 1926, pp. 253-55.

Honorable Señor Dana G. Munro,
Encargado de Negocios interino de los Estados Unidos de América.— Ciudad.

• • • • •

**Legación de los Estados Unidos de América.—No. 402.—
Panamá, octubre 13 de 1925.**

Excelencia:

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de Vuestra Excelencia de fecha 12 de octubre, en la cual a nombre del Gobierno de usted solicita Vuestra Excelencia que las fuerzas americanas acantonadas en la Zona del Canal ayuden al Gobierno de Panamá en el mantenimiento del orden público en esta ciudad en la forma expuesta en la conferencia habida entre Su Excelencia el Presidente de Panamá, usted, el Gobernador interino del Canal de Panamá, el General Comandante del Departamento del Canal de Panamá y el suscrito. En la mencionada conferencia Su Excelencia el Presidente de la República había manifestado que para el mantenimiento del orden era necesario que las autoridades de policía de la Zona del Canal asumieran el control en la ciudad de Panamá, lo mismo que para evitar un serio derramamiento de sangre.

Inmediatamente trasmití la solicitud de Vuestra Excelencia al Gobernador interino del Canal de Panamá, quien, como Vuestra Excelencia lo sabe ya, dio inmediatamente instrucciones al General Comandante del Departamento del Canal de Panamá para que enviara a la ciudad de Panamá la policía militar y las tropas que fueren necesarias para mantener el orden y hacer el servicio de policía de la ciudad. Estas tropas permanecerán en la ciudad solo el tiempo necesario para restablecer el orden público.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración.

Dana G. Munro

Su Excelencia
Horacio F. Alfaro
Secretario de Relaciones Exteriores.—República de Panamá.

• • • • •

S.P. No. 2644.— Panamá, octubre 30 de 1925.

Señor Encargado de Negocios:

Cumpliendo instrucciones de mi Gobierno tengo el honor de expresar a Vuestra Señoría y por su conducto al Gobierno de la Zona del Canal y al Comandante General del Departamento del Canal de Panamá nuestro agradecimiento por la cooperación eficaz prestada por las fuerzas militares de los Estados Unidos para mantener el orden en la ciudad de Panamá durante los disturbios ocurridos en el presente mes.

Ha sido particularmente grato para el Poder Ejecutivo apreciar la buena voluntad con que Vuestra Señoría y los altos funcionarios antes mencionados, atendieron la solicitud del gobierno de Panamá, impuesta por circunstancias muy graves y urgentes.

En especial, deseo dejar constancia de la manera atinada y correcta con que el señor General Charles H. Martín, su Estado mayor y los Oficiales e individuos de tropa cumplieron la delicada misión que les fue encomendada, así como la excelente armonía que reinó entre ellos y las autoridades locales, durante todo el tiempo en que las fuerzas permanecieron en la ciudad.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Señoría las seguridades de mi alta consideración y aprecio.

H. F. Alfaro

Honorable señor doctor

Dana G. Munro,

Encargado de Negocios Interino

de los Estados Unidos de América.—Ciudad.

IIª Parte

Panamá y la confrontación bélica de las potencias



Declaración Conjunta Arias-Roosevelt*

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS PRESIDENTES ARIAS DE PANAMÁ Y ROOSEVELT DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DADA A LA PRENSA EN WASHINGTON, EL 17 DE OCTUBRE DE 1933.

Hemos explorado de la manera más amistosa y cordial el campo de las relaciones panameño-americanas.

El hecho de que la Zona del Canal se halla localizada en el centro de Panamá nos hace vecinos en el más íntimo sentido de la palabra y está en el interés de nuestros dos países que seamos "Buenos vecinos".

Estamos de acuerdo en que ciertos principios generales forman las bases de las relaciones entre panamá y los Estados Unidos en lo que respecta a la Zona del Canal así:

PRIMERO: Hallándose ya construido el Canal de Panamá las estipulaciones del Tratado de mil novecientos tres entre los Estados Unidos y Panamá para el fin del mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal.

SEGUNDO: En vista de ese fin se reconoce que la República de Panamá tiene derecho como nación soberana a aprovechar las ventajas comerciales inherentes a su posición geográfica hasta donde pueda hacerlo sin estorbar el mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal de Panamá por los Estados Unidos de América, quienes desean vehementemente la prosperidad de la República de Panamá.

TERCERO: El Gobierno de los Estados Unidos considera con simpatía la solicitud que le hace el Gobierno de Panamá para resolver por medio de arbitraje cualquier cuestión importante que pueda surgir entre los dos Gobiernos y que parezca no poder arreglarse por medio de negociaciones directas, siempre que tal cues-

* Moreno C. Manuel B., *Op. cit.*, pp. 122-23.

ción sea de naturaleza puramente económica y no afecte el mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal.

Con relación a las actividades de los Estados Unidos en la Zona del Canal, Panamá considera que algunas de esas actividades constituyen competencia perjudicial para el comercio panameño. Los Estados Unidos han convenido en restringir y regular ciertas actividades, por ejemplo: se ejercerá vigilancia especial para prevenir el contrabando de artículos en los comisariatos; las ventas de artículos para turistas por los Comisariatos de la Zona del Canal para su reventa a bordo de los buques que pasen por el Canal serán prohibidas; las ventas de otras mercancías a los buques por los comisariatos de la Zona del Canal serán reglamentadas teniendo en cuenta los intereses de los comerciantes de Panamá.

Los servicios de los hospitales y dispensarios de los Estados Unidos en la Zona del Canal serán limitados a los funcionarios y empleados del Gobierno de los Estados Unidos y de la Compañía del Ferrocarril de Panamá y sus familias exceptuándose únicamente los casos de emergencia; la entrada a los restaurantes, clubes y cinematógrafos de la Zona será restringida de igual manera.

El Gobierno de los Estados Unidos intenta igualmente solicitar al Congreso que vote una partida para ayudar a la repatriación de algunos de los extranjeros que fueron al Istmo traídos para trabajos de la construcción del Canal y que han venido a constituir grave problema de desocupación para Panamá.

La cláusula que obliga a los arrendatarios o contratistas de los restaurantes a comprar sus provisiones en los comisariatos o por conducto de ellos será abrogada. El Gobierno de los Estados Unidos, además, está listo para hacer los arreglos necesarios a efectos de que Panamá pueda establecer en los puertos terminales los edificios y resguardos que sean necesarios para la recaudación de impuestos sobre las importaciones destinadas a otras partes de Panamá y para prevenir el contrabando.

2
Tratado Arias-Roosevelt*
(1936)

**TRATADO GENERAL DE AMISTAD Y COOPERACIÓN ENTRE
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ,
FIRMADO EN WASHINGTON EL 2 DE MARZO DE 1936.**

Los Estados Unidos de América y la República de Panamá por el deseo de fortalecer más los lazos de amistad y de cooperación entre los dos países y de regular sobre una base firme y mutuamente satisfactoria algunas cuestiones que han surgido como resultado de la construcción del Canal interoceánico a través del Istmo de Panamá, han resuelto celebrar un tratado y en tal virtud han designado como sus Plenipotenciarios:

El Presidente de los Estados Unidos de América.

Al Señor Cordell Hull, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América y al señor Sumner Welles, Subsecretario de Estado de los Estados Unidos de América; y

El Presidente de la República de Panamá:

A los Excelentísimos Señores Doctor Ricardo J. Alfaro, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Panamá en los Estados Unidos, y Doctor Narciso Garay, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Panamá en misión especial;

Quienes, habiéndose comunicado sus respectivos Plenos Poderes, los que han sido hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO I

El Artículo I de la Convención de 18 de Noviembre de 1903 queda subrogado así:

Habrá perfecta, firme e inviolable paz y sincera amistad entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá y entre sus ciudadanos.

* Secretaría de Relaciones Exteriores, MEMORIA, Imprenta Nacional, Panamá, 1936, pp. 51-61.

En vista de la apertura forma y oficial del Canal de Panamá el 12 de Julio de 1920, los Estados Unidos de América y la República de Panamá declaran que las estipulaciones de la Convención de 18 de Noviembre de 1903 tienen en mira el uso, ocupación y control por los Estados Unidos de América de la Zona del Canal y de las tierras y aguas adicionales bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América, para los fines del eficiente mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal y de sus obras auxiliares.

Los Estados Unidos de América continuarán manteniendo el Canal de Panamá para fomento y uso del comercio interoceánico y los dos Gobiernos declaran su voluntad de cooperar en cuanto les sea factible al propósito de asegurar el goce pleno y perpetuo de los beneficios de todo orden que el Canal debe proporcionar a las dos naciones que hicieron posible su construcción, así como también a todas las naciones interesadas en el comercio universal.

ARTÍCULO II

Los Estados Unidos de América declaran que la República de Panamá ha cumplido leal y satisfactoriamente las obligaciones que asumió por el Artículo II de la Convención de 18 de Noviembre de 1903, por el cual concedió a perpetuidad a los Estados Unidos de América el uso, ocupación y control de la zona de tierras y de tierra cubierta por agua que se describe en dicho artículo, de las islas situadas dentro de los límites de la mencionada zona, del grupo de pequeñas islas en la bahía de Panamá nombradas Perico, Naos, Culebra y Flamenco, y de cualesquiera otras tierras y aguas fuera de la zona citada necesarias y convenientes para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal de Panamá o de cualesquiera canales auxiliares u otras obras y en reconocimiento de ello de los Estados Unidos de América renuncian por el presente artículo a la concesión que le hizo a perpetuidad la República de Panamá, del uso, ocupación y control de tierras y aguas, además de las que ahora están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América fuera de la zona descrita en el Artículo II de la mencionada Convención, que fueran necesarias y convenientes para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal de Panamá o de cualesquiera canales auxiliares y otras obras necesarias y convenientes para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección de dicha empresa.

Si bien los dos Gobiernos convienen en que la necesidad de

nuevas tierras y aguas para el ensanche de las actuales facilidades del Canal se estima improbable, reconocen sin embargo, de acuerdo con las estipulaciones de los Artículo I y X de este tratado, su obligación conjunta de asegurar el efectivo y continuo funcionamiento del Canal y el mantenimiento de su neutralidad, y en consecuencia, si en el evento de alguna contingencia ahora imprevisible la utilización de tierras o aguas adicionales a las que se están ya usando fuere realmente necesaria para el mantenimiento, saneamiento o eficiente funcionamiento del Canal o para su protección efectiva, los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República de Panamá acordarán las medidas que sea necesario tomar para asegurar el mantenimiento, saneamiento, eficiente funcionamiento y protección efectiva del Canal, en el cual los dos países tienen interés conjunto y vital.

ARTÍCULO III

Con el objeto de que la República de Panamá pueda beneficiarse de las ventajas comerciales inherentes a su posición geográfica, los Estados Unidos de América convienen:

- 1) La venta a individuos de artículos importados a la Zona del Canal o comprados, producidos o manufacturados allí por el Gobierno de los Estados de América será limitada por éste a las personas incluidas en las categorías (a) y (b) de la Sección 2ª de este Artículo. Con respecto a las personas incluidas en las categorías (c), (d) y (e) de la mencionada Sección y miembros de sus familias, las ventas arriba referidas sólo podrán hacerse cuando tales personas residan realmente en la Zona del Canal.
- 2) No podrá residir en la Zona del Canal ninguna persona que no esté comprendida en las siguientes categorías:
 - (a) Jefes, empleados, artesanos en servicio o en el empleo de los Estados Unidos de América, del Canal de Panamá o de la Compañía del Ferrocarril de Panamá y miembros de sus familias que realmente vivan con ellos;
 - (b) Miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América, y miembros de sus familias que realmente vivan con ellos;
 - (c) Contratistas que trabajen en la Zona del Canal y sus empleados, artesanos y obreros durante el cumplimiento de sus contratos;
 - (d) Jefes, empleados u obreros de compañías que tengan derecho a hacer negocios en la Zona del Canal según la Sec-

ción 5 de este artículo;

- (e) Personas que se ocupen en actividades religiosas, de asistencia Pública, de caridad, de educación, de recreo y científicas, exclusivamente en la Zona del Canal;
 - (f) Sirvientes domésticos de todas las personas antes mencionadas y miembros de las familias de las personas correspondientes a las categorías (c), (d) y (e) que realmente vivan con ellos.
- 3) No se darán en arrendamiento, a plazo o con sujeción a desahucio ni se subarrendarán, casas o habitaciones pertenecientes al Gobierno de los Estados Unidos de América o a la Compañía del Ferrocarril de Panamá y situadas en la Zona del Canal, a personas no comprendidas en las categorías (a) a (e) inclusive de la Sección 2 arriba citada.
 - 4) El Gobierno de los Estados Unidos de América continuará cooperando por todos los medios apropiados con el Gobierno de la República de Panamá, para prevenir violaciones de las leyes de la República en materia de aduanas y de inmigración, inclusive el contrabando al territorio bajo la jurisdicción de la República de artículos importados a la Zona del Canal o comprados, producidos o manufacturados allí por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
 - 5) Con excepción de las empresas que tengan relación directa con el funcionamiento, mantenimiento, saneamiento o protección del Canal, o sean las de cable, navieras, petroleras o de combustible, los Estados Unidos de América no permitirán que se radiquen en la Zona del Canal más empresas comerciales privadas que las existentes allí al tiempo de firmarse este tratado.
 - 6) En vista de la proximidad de puerto de Balboa a la ciudad de Colón, los Estados Unidos de América continuarán permitiendo, de acuerdo con reglamentos adecuados y mediante el pago de los derechos correspondientes, a las naves que entren a los puertos de la zona y salgan de ellos, el uso y goce de los muelles y otras facilidades en los mencionados puertos, para el objeto de cargar y descargar mercaderías y recibir o desembarcar pasajeros que entren al territorio bajo la jurisdicción de la República de Panamá o que salgan de él.

La República de Panamá permitirá a las naves que entren a los puertos de Panamá o Colón o que zarpen de ellos, en caso de emergencia y también de acuerdo con reglamentos adecuados y mediante el pago de los derechos correspondientes, el

uso y goce de los muelles y de otras facilidades de dichos puertos con el objeto de recibir y desembarcar pasajeros con destino a territorio de la República de Panamá bajo jurisdicción de los Estados Unidos de América o procedentes del mismo, y para cargar o descargar mercaderías en tránsito o destinadas al servicio del Canal o de obras pertenecientes al Canal.

- 7) El Gobierno de los Estados Unidos de América dará a los comerciantes residentes en la República de Panamá plena oportunidad para hacer ventas a las naves que lleguen a los puertos terminales del Canal o que pasen por él, con sujeción siempre a los reglamentos administrativos pertinentes de la Zona del Canal.

ARTÍCULO IV

El Gobierno de la República de Panamá no impondrá derechos de importación ni contribuciones de ninguna clase a las mercancías remitidas o consignadas a las agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América en la República de Panamá cuando las mercancías sean destinadas para el uso oficial de tales agencias, ni a las mercancías remitidas o consignadas a las personas comprendidas en las categorías (a) y (b) de la Sección 2 del Artículo III de este tratado, que residan o se hallen temporalmente en territorio bajo la jurisdicción de la República de Panamá, mientras presten sus servicios a los Estados Unidos de América, al Canal de Panamá o a la Compañía del Ferrocarril de Panamá, siempre que las mercancías sean destinadas al uso y beneficio exclusivo de esas personas.

Los Estados Unidos de América no impondrán derechos de importación ni contribuciones de ninguna clase a los artículos, efectos y mercaderías que pasen del territorio bajo la jurisdicción de la República de Panamá a la Zona del Canal.

Las autoridades de los Estados Unidos de América no impondrán contribuciones de ninguna clase a las personas que residan en la República de Panamá y que pasen de la jurisdicción de la República de Panamá a la Zona del Canal, y las autoridades de la República de Panamá no impondrán contribuciones de ninguna clase a las personas en el servicio de los Estados Unidos de América o que residan en la Zona del Canal y que pasen de la Zona del Canal a territorio bajo la jurisdicción de la República de Panamá, quedando sujetas a los plenos efectos de las leyes de inmigración de la República de Panamá todas las otras personas que pasen de la Zona del Canal a territorio bajo la jurisdicción de la República de Panamá.

En vista del hecho de que la Zona del Canal divide el territorio bajo jurisdicción de la República de Panamá, los Estados Unidos de América convienen en que, con sujeción a las disposiciones policivas que las circunstancias requieran, a los ciudadanos panameños que ocasionalmente sean deportados de la Zona del canal se les garantizará el tránsito a través de dicha Zona para trasladarse de una parte a otra del territorio sujeto a la jurisdicción de la República.

ARTÍCULO V

El Artículo IX de la Convención de 18 de Noviembre de 1903 queda subrogado así:

La República de Panamá tiene el derecho de imponer a las mercancías destinadas a ser introducidas para uso y consumo en territorio bajo la jurisdicción de la República de Panamá y a las naves que toquen en puertos panameños y a los oficiales, tripulación o pasajeros de dichas naves, los impuestos o gravámenes establecidos por las leyes de la República de Panamá; conviniéndose que la República de Panamá continuará ejerciendo directa y exclusivamente su jurisdicción sobre los puertos de Panamá y Colón y la explotación, con personal panameño exclusivamente, de las obras marítimas ya establecidas o que se establezcan en dichos puertos por la República de Panamá o por su autoridad. Sin embargo, la República de Panamá no impondrá ni cobrará gravámenes o contribuciones sobre las naves que usen el Canal o que pasen por él sin tocar en puertos bajo la jurisdicción panameña, ni a los oficiales, tripulación o pasajeros de dichas naves, a no ser que entren a la República; siendo entendido además que las contribuciones y gravámenes que imponga la República de Panamá a las naves que usen el Canal o que pasen por él y que toquen en puertos bajo la jurisdicción panameña o a la carga, oficiales, tripulación o pasajeros de dichas naves, no serán más altos que los que se impongan a las naves que toquen únicamente en los puertos bajo la jurisdicción panameña sin pasar por el Canal y a la carga, oficiales, tripulación o pasajeros de dichas naves.

La República de Panamá tiene también el derecho de determinar qué personas o clases de personas que lleguen a los puertos de la Zona del Canal serán admitidas a la República de Panamá y asimismo el de determinar a qué personas o clases de personas que lleguen a esos puertos se les negará entrada a la República de Panamá.

Los Estados Unidos de América suministrarán a la República de Panamá libres de todo gravamen los sitios necesarios para la

construcción de edificios para aduanas en los puestos de la Zona del Canal para la recaudación de impuestos sobre las importaciones destinadas a la República de Panamá y para el examen de mercancías, equipajes y pasajeros consignados o destinados a la República de Panamá, y para prevenir el comercio de contrabando, siendo entendido que la recaudación de impuestos y el examen de mercancías y pasajeros por los funcionarios del Gobierno de la República de Panamá, de conformidad con esta estipulación, tendrá lugar únicamente en las aduanas que establezca el Gobierno de la República de Panamá de acuerdo con lo aquí estipulado, y que la República de Panamá ejercerá jurisdicción exclusiva dentro de los sitios donde se hallen las aduanas en cuanto concierne a la efectividad de las leyes de inmigración y de aduanas de la República de Panamá, como también sobre los efectos de todas clases allí existentes y sobre el personal empleado en ellas.

Para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos anteriormente, el Gobierno de los Estados Unidos de América conviene en que, con el objeto de obtener información útil para determinar si a las personas que lleguen a los puertos de la Zona del Canal con destino a puntos dentro de la jurisdicción de la República de Panamá debe permitirse o negarse la entrada a la República, los funcionarios de inmigración de la República de Panamá tendrán el derecho de libre acceso a los buques a su llegada a los muelles de Balboa o de Cristóbal llevando pasajeros con destino a la República; y que las autoridades competentes del canal de Panamá adoptarán con respecto a las personas que entren por los puertos de la Zona del Canal con destino a puntos dentro de la jurisdicción de la República de Panamá, los reglamentos administrativos que faciliten a las autoridades de Panamá el ejercicio de su jurisdicción en la forma estipulada en el párrafo 4º de este artículo, para los fines expuestos en el párrafo 3º del mismo.

ARTÍCULO VI

El primer período del Artículo VII de la Convención de 18 de Noviembre de 1903, queda modificado omitiéndose la siguiente frase: «o por el ejercicio del derecho de dominio eminente».

El Párrafo tercero del Artículo VII de la Convención de 18 de Noviembre de 1903, queda abrogado.

ARTÍCULO VII

Comenzando con la anualidad pagadera en 1934 los pagos de

acuerdo con el Artículo XIV de la Convención de 18 de Noviembre de 1903, celebrada entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá, serán de cuatrocientos treinta mil Balboas (B/.430,000.00) según los define el convenio incorporado en canje de notas de esta fecha. Los Estados Unidos de América pueden cumplir su obligación con respecto a cualquiera de dichos pagos mediante el pago en cualquier moneda, siempre que la cantidad que se pague sea el equivalente de cuatrocientos treinta mil Balboas (B/.430,000.00) definidos como queda expresado.

ARTÍCULO VIII

Con el fin de que la ciudad de Colón pueda disfrutar de un medio directo de comunicación por tierra, bajo jurisdicción panameña, con el resto del territorio bajo jurisdicción de la República de Panamá, los Estados Unidos de América transfieren a la República de Panamá jurisdicción sobre un corredor cuyos límites exactos serán convenidos y demarcados por los dos Gobiernos, de acuerdo con la descripción siguiente:

- (a) El término del corredor en Colón empalma con el extremo Sur de la mitad Este del Paseo del Centenario en la Calle 16 de Colón; de allí el corredor sigue en dirección general Sur, paralela a la Carre-tera Bolívar y al Este de ella hasta la vecindad de la orilla Norte de Silver City; de allí hacia el Este cerca de la ribera de Folks Ri-ver, doblando la esquina Nordeste de Silver City, de allí en dirección Sudeste y paralela en general al camino que va a France Field y Fort Randolph hasta cruzar el mencionado camino como a 1200 pies al Este de la Derivación Este; de allí en una dirección general Nordeste hasta la línea Este del límite de la Zona del Ca-nal cerca de la esquina Sudeste de la Reserva de Fort Randolph al Sudoeste de Cativá. El trazado aproximado del corredor es el que muestra el mapa anexo a este Tratado, firmado por los Plenipotenciarios de los dos países y denominado «Anexo A».
- (b) La anchura del corredor será como sigue: 25 pies de ancho desde su extremo en Colón hasta un punto este de la línea Sur de Silver City; de allí 100 pies de ancho hasta el camino de Fort Randolph con la salvedad de que en cualquier cruce elevado del camino de Fort Randolph sobre el ferrocarril que pueda construirse, la anchura del corredor no será mayor que la necesaria para incluir el viaducto y no incluirá parte alguna del camino de Fort Randolph propiamente dicho ni de la servidumbre de trán-

sito del ferrocarril, y con la salvedad de que en caso de hacerse cruce a nivel con el camino de Fort Randolph con el ferrocarril, el corredor quedará interrumpido por esa carretera y por el ferrocarril a partir de ese punto el corredor tendrá 200 pies de ancho hasta la línea fronteriza de la Zona del Canal.

El Gobierno de los Estados Unidos de América extinguirá cualesquiera títulos de propiedad privada existentes o que puedan existir respecto de las tierras comprendidas dentro del corredor arriba mencionado.

Los cruces de corrientes y desagües en los caminos que se construyan sobre el corredor no restringirán el paso de las aguas a menos de la capacidad de las corrientes y desagües existentes.

No se hará ninguna otra construcción en el corredor, fuera de la relativa a la construcción de una carretera y a la instalación de líneas de transmisión de energía eléctrica, de teléfonos y de teléfonos; y las únicas actividades que serán las correspondientes a la construcción, mantenimiento o usos comunes de una carretera y de líneas de comunicación y de transmisión de fuerza.

Los Estados Unidos de América disfrutarán en todo tiempo el derecho al tránsito irrestricto a través del expresado corredor por cualquier punto y el de transitar a lo largo de dicho corredor con sujeción a los reglamentos de tráfico que sean establecidos por el Gobierno de la República de Panamá, y el Gobierno de los Estados Unidos de América tendrá derecho al uso del corredor en cuanto pueda ser necesario para la construcción de empalmes o cruces de carreteras o ferrocarriles, de líneas de transmisión de fuerza, aéreas o subterráneas, líneas de teléfonos, de telégrafos, o de tuberías y de canales de drenaje adicionales, a condición de que estas estructuras y el uso de ellas no estorben los fines del corredor, según lo arriba estipulado.

ARTÍCULO IX

Con el fin de proveer directo de comunicación por tierra con espacio para la instalación de líneas de transmisión de energía de alta tensión, bajo jurisdicción de los Estados Unidos de América, de la Represa Madden a la Zona del Canal, la República de Panamá transfiere a los Estados Unidos de América jurisdicción sobre un corredor, cuyos límites serán demarcados por los dos Gobiernos, de acuerdo con la descripción siguiente:

Una faja de tierra de 200 pies de ancho, que se extiende 62.5 pies de la línea central de la Carretera Madden sobre su límite

Este y 137.5 pies de la línea central de la Carretera Madden sobre su límite Oeste, y que contiene un área de 105.8 acres o 42.81 hectáreas, como se indica en el plano que se acompaña a este Tratado, firmado por los Plenipotenciarios de los dos países y marcado «Anexo B».

Comenzando en la intersección de la línea central localizada sobre la Carretera Madden con la línea limítrofe de cinco millas entre la Zona del canal y la República de Panamá, estando situado este punto al Norte 29°20' Oeste se sigue en una distancia de 168.04 pies a lo largo de la línea del mencionado límite desde el monumento limítrofe Número 65, siendo la posición geodésica de dicho monumento número 65 la de 9°07' de Latitud Norte más 9,948.8 pies y 79°37' de Longitud más 1,174.6 pies; de allí al Norte 43°10' Este es una distancia de 541.1 pies al monumento 324, más 06.65 pies; de allí siguiendo una curva de 3° hacia la izquierda, en una distancia de 347.2 pies al momento 327, más 53.9 pies; de allí al Norte 32°45' Este en una distancia de 656.8 pies al monumento 334, más 10.7 pies; de allí siguiendo una curva de 3° hacia la izquierda en una distancia de 455.55 pies al monumento 338, más 66.25 pies; de allí al Norte 19°05' Este en una distancia de 1,135.70 pies; al monumento 350, más 01.95 pies; de allí siguiendo una curva de 8° hacia la izquierda en una distancia de 650.7 pies al monumento 356, más 52.7 pies; de allí al Norte 32°58' Oeste en una distancia de 636.0 pies al monumento 362, más 88.7 pies; de allí siguiendo una curva de 10° hacia la derecha en una distancia de 227.3 pies al monumento 365, más 16.0 pies; de allí al Norte 10°14' Oeste en una distancia de 314.5 pies al monumento 368, más 30.5 pies; de allí siguiendo una curva de 5° hacia la izquierda en una distancia de 178.7 pies al monumento 370, más 09.2 pies; de allí al Norte 19°10' Oeste en una distancia de 4,250.1 pies al monumento 412, más 59.8 pies; de allí siguiendo una curva de 5° hacia la derecha en una distancia de 720.7 pies al monumento 419 más 80.0 pies; de allí al Norte 16°52' Este en una distancia de 1,664.3 pies al monumento 436 más 44.3 pies; de allí siguiendo una curva de 51 hacia la izquierda en una distancia de 597.7 pies al monumento 442, más 42.0 pies; de allí al Norte 13°01' Oeste en una distancia de 543 pies al monumento 447, más 85.8 pies; de allí siguiendo una curva de 5° hacia la derecha en una distancia de 770.0 pies al monumento 445, más 56.5 pies; de allí al Norte 25°31' Este en una distancia de 1,492.2 pies al monumento 470 más 48.7 pies; de allí siguiendo una curva de 5° hacia la derecha

en una distancia de 808.0 pies al monumento 478, más 56.7 pies; de allí al Norte $65^{\circ}55'$ Este en una distancia de 281.8 pies al monumento 485, más 84.9 pies; de allí al Norte $30^{\circ}12'$ Este en una distancia de 479.6 pies al monumento 490 más 64.5 pies; de allí siguiendo una curva de 51° hacia la izquierda en una distancia de 329.4 pies al monumento 493 más 93.9 pies; de allí al Norte $13^{\circ}44'$ Este en una distancia de 1.639.9 pies al monumento 510, más 33.8 pies; de allí una curva de 5° hacia la izquierda en una distancia de 832.3 pies, al monumento 518, más 66.1 pies; de allí al Norte $27^{\circ}53'$ Oeste en una distancia de 483.9 pies al monumento 523 más 50.0 pies; de allí siguiendo una curva de 8° hacia la derecha en una distancia de 469.6 pies al monumento 528, más 19.6 pies; de allí al Norte $9^{\circ}41'$ Este en una distancia de 1,697.6 pies al monumento 545, más 17.2 pies; de allí siguiendo una curva de 10° hacia la izquierda en una distancia de 451.7 pies hasta el monumento 549, más 68.9 pies; que es el punto marcado Punto Z en el mapa arriba mencionado denominado «Anexo B».

(Todos los rumbos se refieren al verdadero meridiano).

El Gobierno de la República de Panamá extinguirá cualesquiera títulos de propiedad privada existentes o que pueden existir respecto de las tierras comprendidas dentro del corredor arriba mencionado.

Los cruces de corrientes y desagües en todos los caminos que se construyan sobre el corredor no restringirán el paso de las aguas a menos de la capacidad de las corrientes y desagües existentes.

No se hará ninguna otra construcción en el corredor, fuera de la relativa a la construcción de una carretera y a la instalación de líneas de transmisión de energía eléctrica, de teléfonos y de telégrafos; y las únicas actividades que serán ejercidas dentro de dicho corredor serán las correspondientes a la construcción, mantenimiento y usos comunes de una carretera, de líneas de comunicación y de transmisión de fuerza y de las obras auxiliares de las mismas.

La República de Panamá disfrutará en todo tiempo el derecho al tránsito irrestricto a través del expresado corredor por cualquier punto y el de transitar a lo largo de dicho corredor, con sujeción a los reglamentos de tráfico que sean establecidos por las autoridades del Canal de Panamá, y el Gobierno de la República de Panamá, tendrá el derecho al uso del corredor en cuanto pueda ser necesario para la construcción de empalmes o cruces de carreteras o ferrocarriles, de líneas de transmisión de fuerza, aéreas o subterráneas, líneas de teléfonos, de telégrafos o de tuberías y de

canales de drenaje adicionales, a condición de que estas estructuras y el uso de ellas no estorben los fines del corredor, según lo arriba estipulado.

ARTÍCULO X

En caso de conflagración internacional o de existencia de cualquier amenaza de agresión en que peligren la seguridad de la República de Panamá o la neutralidad o seguridad del Canal de Panamá, los Gobiernos de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América tomarán las medidas de prevención y defensa que consideren necesarias para la protección de sus intereses comunes. Las medidas que parezca esencial tomar a uno de los dos Gobiernos en guarda de dichos intereses que afecten el territorio bajo la jurisdicción de otro Gobierno serán objeto de consulta entre los dos Gobiernos.

ARTÍCULO XI

Las estipulaciones de este tratado no afectarán los derechos y obligaciones de ninguna de las dos Altas Partes Contratantes de conformidad con los tratados vigentes hoy entre los dos países, ni serán consideradas como limitación, definición, restricción o interpretación restrictiva de tales derechos y obligaciones, pero sin perjuicio del pleno vigor y efecto de las estipulaciones de este tratado que constituyen adición, modificación, abrogación o subrogación de las estipulaciones de los tratados anteriores.

ARTÍCULO XII

El presente tratado será ratificado de acuerdo con las formas constitucionales de las Altas Partes Contratantes y entrará en vigor inmediatamente al canjearse las ratificaciones, lo cual tendrá lugar en Washington.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios han firmado este tratado en duplicado en Inglés y en Español, siendo ambos textos auténticos, y han estampado en él sus sellos.

Hecho en la ciudad de Washington, a los dos días del mes de Marzo de 1936.

(Fdo.) *Cordell Hull*
Sumner Welles
R. J. ALFARO
Narciso Garay

CONVENCIÓN SOBRE CARRETERA TRANSISTMICA*

Entre la República de Panamá y Los Estados Unidos de América, firmada en Washington el 2 de marzo de 1936, aprobada por la Asamblea Nacional Legislativa de Panamá el 24 de Diciembre por medio de la Ley 37 de 1936 y ratificada por el Senado de los Estados Unidos de América el 25 de Junio de 1939.

(El Canje de Ratificaciones se efectuó en Washington el 27 del mismo mes y año)

La República de Panamá y los Estados Unidos de América, con el fin de concertar la terminación de una carretera entre las ciudades de Panamá y Colón a través de territorio bajo sus respectivas jurisdicciones, que en lo sucesivo se denominará la Carretera Transistmica, han resuelto celebrar una Convención con ese objeto...

ARTÍCULO I

Con el fin de hacer posible la terminación de la Carretera Transistmica, el Gobierno de los Estados Unidos de América se compromete a conseguir que la compañía del Ferrocarril de Panamá renuncie su derecho exclusivo de construir caminos a través del Istmo de Panamá hasta donde sea necesario para que el Gobierno de la República de Panamá pueda construir una carretera desde un punto en el límite del área de la Represa Madden en Alajuela hasta un punto en el límite de la Zona del Canal cerca de Cativá.

ARTÍCULO II

Como contribución a la terminación de la Carretera Transistmica, los Estados Unidos de América construirán sin demora y a sus expensas la parte de la Carretera comprendida entre el límite de la Zona del Canal cerca de Cativá y el empalme con el camino de Fort Randolph cerca de France Field, parte cuyo mantenimiento tendrá a su cargo en adelante la República de Panamá.

ARTÍCULO III

Antes de emprender nuevos trabajos en la Carretera Transistmica, cada Gobierno nombrará igual número de Representantes que constituirán una Junta Mixta con autoridad para

* Moreno C. Manuel B. *Op. cit.*, pp. 159-162.

ajustar cuestiones de detalle respecto de la ubicación, trazado y construcción de las partes de la carretera que queden bajo la jurisdicción de cada gobierno. Las cuestiones de detalle acerca de las cuales no haya acuerdo en la Junta, serán sometidas a los dos Gobiernos para su arreglo.

ARTÍCULO IV

Las secciones de la Carretera Transistmica que hayan de ser construídas por cada Gobierno tendrán las siguientes especificaciones mínimas:

PAVIMENTO: Hormigón; ancho normal, 18 pies, ensanchado convenientemente en las curvas de 5 grados o más pronunciadas; del tipo de borde grueso con sección de 9", 7", 9" , con el debido refuerzo de acero conforme a las buenas prácticas de vialidad proveyendo además juntas longitudinales y transversales, rellenas con asfalto y con los tramos adyacentes debidamente ensamblados.

DECLIVES: Máximo 8 por ciento.

CURVAS: Máximo 12 Grados; pavimento debidamente elevado y convenientemente ensanchado cuando sean de 5 grados o más pronunciadas.

PUNTES Y ALCANTARILLAS: Deben ser de tráfico doble con un ancho de 20 pies; con capacidad para soportar un peso de 14 toneladas sobre el eje trasero y de 6 toneladas sobre el eje delantero y con localización, tamaño y luz tales que provean un desagüe adecuado en las corrientes máximas.

SERVIDUMBRE DE TRANSITO: Debe ser suficientemente ancha para dar cabida al pavimento, más hombros de 4 pies y zanjas de desagüe y para proveer pendientes adecuadas en los cortes y rellenos; reservándose cada Gobierno el Derecho de Instalar y usar líneas telegráficas y telefónicas de postes o de cable subterráneo en la parte de la Carretera Transistmica sujeta a la jurisdicción del otro Gobierno.

ARTÍCULO V

Las partes de la Carretera Transistmica que los dos Gobiernos van a construir de acuerdo con las estipulaciones de esta Convención, quedarán terminadas en un período de diez años a contar de la fecha en que ella entre en vigor. Los dos Gobiernos se consultarán mutuamente, con la mira de coordinar la construcción de las partes de la carretera hasta donde sea factible a fin de que el

servicio de una parte no se perjudique indebidamente, por no terminarse la otra parte.

ARTÍCULO VI

La República de Panamá y los Estados Unidos de América mantendrán en buen estado de conservación en todo tiempo las partes de la Carretera Transistmica, que queden dentro de sus respectivas jurisdicciones.

ARTÍCULO VII

La República de Panamá y los Estados Unidos de América tendrán por igual el uso de la Carretera Transistmica, con sujeción a las leyes y reglamentos vigentes en las respectivas jurisdicciones sobre tráfico de vehículos.

ARTÍCULO VIII

La presente Convención será ratificada de acuerdo con las formas constitucionales de las altas partes contratantes y entrará en vigor inmediatamente al canjearse las ratificaciones, lo cual tendrá lugar en Washington.

EN FE DE LO CUAL los Plenipotenciarios han firmado esta Convención en duplicado en español y en inglés, siendo ambos textos auténticos, y han estampado en ella sus sellos.

HECHA en la ciudad de Washington, a los dos días del mes de marzo de 1936.

R.J. ALFARO
CORDELL HULL

NARCISO GARAY
SUMNER WELLES

1. En virtud del Artículo III de la Convención, los dos Gobiernos efectuaron un Canje de Notas de fechas 19 y 23 de Octubre de 1939, 20 de Diciembre de 1939 y 4 de Enero de 1940, constitutivos de un arreglo relativo a la Junta Mixta de la Carretera Transistmica, compuesta de un representante de cada Gobierno.
2. Un acuerdo relativo a la Construcción de la Carretera fue concertado después por Canje de Notas de fechas Agosto 31 y Septiembre 6 de 1940, incluso un memorándum del procedimiento a seguir, de fecha 29 de agosto de 1940. Mediante dicho acuerdo el Gobierno de los Estados Unidos asume el costo total de la obra de ingeniería para una doble carretera y la

construcción de un pavimento de veinte pies entre la Represa Madden y Cattivá.

3. La Convención, finalmente, quedó modificada parcialmente por el Convenio Relativo al Corredor de Colón concertado a vía de *modus vivendi* por Canje de Notas de 26 de mayo de 1947, al cual se dio forma apropiada y permanente mediante la Convención sobre el Corredor de Colón y ciertos otros corredores a través de la Zona del Canal de 24 de mayo de 1950.



CONVENIO SOBRE MANIOBRAS MILITARES*

En territorio bajo la jurisdicción de la República de Panamá. Este Convenio fue celebrado en Washington por las Comisiones negociadoras de los dos países durante la sesión del 2 de marzo de 1936.

WELLES: Entonces podemos pasar a otro asunto. Hay un punto de grandísima importancia sobre el cual el Gobierno de los Estados Unidos desea tener un entendimiento con el Gobierno de Panamá. Mi gobierno considera que la ejecución de maniobras militares en territorio adyacente a la Zona del Canal, es una medida esencial de preparación para la protección de la neutralidad del Canal de Panamá. Deseo hacer una averiguación a los Comisionados de Panamá con el fin de poner en claro si acerca de este asunto el Gobierno de los Estados Unidos puede contar con la amistosa cooperación del Gobierno de Panamá. me doy cuenta de que en este asunto ha habido en el pasado cierta falta de inteligencia entre los dos Gobiernos, y en consecuencia creo que el procedimiento que se ha seguido en el pasado debe cambiarse por uno que esté basado en un acuerdo e inteligencia completos entre nuestros dos Gobiernos.

ALFARO: El Gobierno de Panamá mantiene la opinión de que el Dr. Garay y yo hemos declarado varias veces durante el curso de estas negociaciones, de que la cuestión de practicar maniobras en territorio bajo la jurisdicción de Panamá, es cuestión que no puede ser objeto de una obligación contractual por parte de la República de Panamá y que sólo puede ser determinada como cuestión de política basada en los intereses comunes, las obligaciones y responsabilidades mutuas de los dos países, los vínculos especiales existentes entre ellos y los principios de cooperación, consulta y acuerdo que deben gobernar sus relaciones conforme al nuevo tratado. Por consiguiente, estamos autorizados por nuestro gobierno para declarar que, sobre la base de la completa soberanía de Panamá, y como quiera que la práctica de maniobras en tiempo de paz en territorio contiguo a la Zona del Canal es una medida esencial de preparación para la protección de la neutralidad del Canal de Panamá, no tenemos la menor duda de que puede convenirse en un método de satisfactoria cooperación en este asunto.

* Moreno C. Manuel B. *Op. cit.*, pp. 164-166.

WELLES: En vista de las declaraciones que acaban de hacer los Comisionados de Panamá, el Gobierno de los Estados Unidos cree que en el futuro, cuando surja la necesidad de efectuarse maniobras, la legación Americana en Panamá, dirigirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores una carta redactada en los términos siguientes:

"Señor:

Ciertas medidas de preparación que incluyen las maniobras ocasionales de tropas en tiempo de paz para fines de entrenamientos, en territorio contiguo a la Zona del Canal, constituyen un elemento necesario para habilitar a los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República de Panamá para cumplir sus obligaciones mutuas de asegurar el funcionamiento del Canal de Panamá y la conservación de su neutralidad; y como mi Gobierno desea que tales medidas se lleven a cabo en completa cooperación con el Gobierno de la República de Panamá, de acuerdo con los amplios principios de cooperación e interés común asentados en los Artículos I, II y X del tratado firmado en (tal fecha), tengo el honor de inquirir si sería aceptable por el Gobierno de la República de Panamá que maniobras militares tuvieran lugar en la vecindad de (.....) en (tal fecha).

Me complacería recibir cualesquiera sugerencias que Su Excelencia pudiera desear hacer con respecto a las proyectadas maniobras, a fin de que ellas puedan tener lugar de una manera satisfactoria para ambos Gobiernos.

Acepte etc."

Deseo averiguar de los Comisionados qué respuesta dará el Gobierno de Panamá a la nota sugerida cuando se reciba ésta en las circunstancias indicadas.

ALFARO: Sobre la base declarada por mí más arriba, y presumiendo que no existe razón para que las proyectadas maniobras no hayan de ser autorizadas por el Gobierno de Panamá, mi Gobierno nos ha dado instrucciones para que declaremos que el Gobierno de Panamá responderá como sigue:

"Señor:

Tengo a honra acusar recibo de la nota de Vuestra Excelencia de fecha... por medio de la cual se sirve inquirir si este Gobierno estaría de acuerdo en que se celebraran maniobras militares en

la vecindad..... el..... para fines de adiestramiento y como medida de preparación que constituye elemento necesario para poner a los Gobiernos de Panamá y de los Estados Unidos de América en capacidad de cumplir con su obligación conjunta de asegurar el funcionamiento del Canal de Panamá y el mantenimiento de su neutralidad.

De acuerdo con los principios de cooperación y de interés común consignados en los Artículos I, II y X del Tratado de..... considerando la naturaleza excepcional de los vínculos existentes entre los dos países y la posición en que se hallan colocados por razón de la construcción del Canal Interoceánico a través del Istmo de Panamá; y en vista del hecho de que este Gobierno no halla inconveniente en que se celebren maniobras para fines de adiestramiento en la localidad y en la fecha arriba expresada, este Gobierno da su autorización correspondiente para ellas para que las maniobras tengan lugar convenientemente y a satisfacción de ambos Gobiernos."



LUIS NAVAS PAJARO

CANJE DE NOTAS HULL-BOYD*

LEGACION DE PANAMA
Washington, D.C.

Febrero 10. de 1939.

Señor Secretario:

Tengo el honor de referirme a la importante comunicación de Vuestra Excelencia de esta fecha referente al Tratado General firmado entre los Gobiernos de la República de Panamá y de Estados Unidos de América de 2 de Marzo de 1936, y a las actas de las conferencias celebradas por los Comisionados de Panamá y de los Estados Unidos de América durante las negociaciones que precedieron a la firma del mencionado tratado. Vuestra Excelencia llama mi atención sobre el hecho de que durante el curso de las negociaciones y después de las discusiones un acuerdo mutuo fue concluido con respecto a la interpretación que debía dársele a ciertas estipulaciones que serían eventualmente incorporadas en el Tratado. Vuestra Excelencia afirma que estas discusiones y entendimientos fueron, después de cada sesión, incorporadas en las actas mecanografiadas.

Vuestra Excelencia opina en seguida que en vista del informe favorable presentado al clausurarse la última reunión del Congreso por el Comité de Asuntos Extranjeros del Senado de Estados Unidos de América sobre el Tratado General y las varias Convenciones anexas, algunos miembros del Senado, durante los debates relativos al Tratado General y a las Convenciones que tuvieron lugar en la presente reunión del Congreso, podrían solicitar aclaraciones en cuanto al significado de ciertas estipulaciones del Tratado General concernientes a la Seguridad y Neutralidad del Canal de Panamá. Con el propósito de anticiparnos a tal eventualidad y de evitar nuevos retardos en la consideración del Tratado General de 2 de Marzo de 1936, Vuestra Excelencia afirma que le parece conveniente a su gobierno efectuar un Canje de Notas con mi Gobierno, con el fin de reiterar la interpretación dada a ciertos puntos en las actas.

Me complace en informar a Vuestra Excelencia que mi Go-

* *Op. cit.*, pp. 167-168.

bierno me ha autorizado para efectuar el canje de notas y aclarar los puntos propuestos por Vuestra Excelencia, los cuales, para mayor claridad, se enuncian a continuación en inglés:

1. En relación con la voluntad declarada por los dos Gobiernos, el de Estados Unidos de América y el de la República de Panamá, de cooperar en el propósito de asegurar el goce pleno y perpetuo de los beneficios de todo orden que el Canal debe proporcionar a las dos Naciones (Artículo I del Tratado General de 2 de Marzo de 1936), la palabra "mantenimiento" cuando se refiera al Canal se extenderá en tal forma que permita la expansión y nuevas construcciones siempre que éstas se lleven a cabo por el Gobierno de los Estados Unidos de América en acuerdo con el mencionado Tratado.

2. La práctica de maniobras o ejercicios por las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América en territorio adyacente a la Zona del Canal es una medida esencial de preparación para la protección de la neutralidad del Canal de Panamá y, cuando se practiquen las referidas maniobras o ejercicios, las partes deberán seguir el procedimiento indicado en las actas de las sesiones de las negociaciones del Tratado General de 2 de Marzo de 1936.

3. Conforme se indica en las actas de las sesiones de las negociaciones del Tratado General celebrado el 2 de Marzo de 1936, y en las discusiones que tuvieron lugar el 16 de marzo de 1935, en la eventualidad de una emergencia tan súbita que obligue a tomar medidas preventivas de carácter imperativo, para salvaguardar la neutralidad o seguridad del Canal, y si por razón de tal emergencia fuera imposible consultar el Gobierno de los Estados Unidos no está obligado a retardar las medidas necesarias para confrontar la emergencia mientras estuviere pendiente la consulta aunque hará todo esfuerzo, en caso de que tal consulta no se hubiere llevado a cabo antes de proceder a tomar las medidas necesarias, para consultar al Gobierno de Panamá tan pronto como fuere posible.

Aprovecho la ocasión para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más distinguida consideración.

AUGUSTO S. BOYD,
Ministro

Honorable Cordell Hull
Secretario de Estado.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LA PRESENCIA MILITAR EXTRANJERA

3

Solicitud de más tierras* (25 de noviembre de 1940)

EXIGENCIAS MILITARES (TRADUCCIÓN)

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

No. 426

Panamá, noviembre 25 de 1940.

Excelencia:

Tengo el honor de referirme a nuestra reciente discusión acerca del problema de la defensa, que tuvo lugar en el transcurso de la audiencia que Su Excelencia el Presidente de la República cortesmente concedió al General Van Voorhis y a mí el 7 de noviembre, y de manifestar que, de conformidad con este intercambio de ideas y para aclarar ciertos puntos, el General Van Voorhis ha preparado una declaración concerniente a la necesidad de hacer instalaciones por toda la República de Panamá para la defensa efectiva del Canal de Panamá. Me permito transcribir los siguientes pasajes de esta declaración para la información confidencial del Gobierno de Vuestra Excelencia:

“La necesidad de hacer instalaciones por toda la República de Panamá para la defensa efectiva del Canal de Panamá:

- “1. Aunque se han tomado medidas para albergar personal y guardar material dentro de la Zona del Canal de Panamá de las fuerzas de defensa de los Estados Unidos, es de suma importancia, cuando la defensa activa del Canal se hace necesaria, que perso-

* Ministerio de Relaciones Exteriores. Departamento de Documentos y Archivos. *Correspondencia Diplomática—1940*. pp. 00002-6.

nal y material sea desplegado en varios puntos por toda la República de Panamá de manera que a tiempo oportuno se pueda hacer contacto con el enemigo y que éste sea prontamente acometido con el fin de que su avance sea retardado o que sea derrotado antes de alcanzar el área en la vecindad inmediata del Canal. Este requerimiento se aplica especialmente a las fuerzas aéreas, y en menor grado a nuestras tropas de tierra.

Aunque estas instalaciones pueden ser consideradas como objetivos militares y su distribución por toda la República de Panamá aumenta la zona de combate dentro de la República, sus instalaciones son de una naturaleza tan temporal y limitada que no es probable que ellas vendrían a ser un blanco para el enemigo puesto que los planes del enemigo sólo tendrían en consideración aquellas instalaciones sensibles (sensitive) dentro de la Zona del Canal.

2. Estos requerimientos son de cinco categorías:
 - (1) Campos de aterrizaje auxiliares
 - (2) Campos de aterrizaje de emergencia
 - (3) Estaciones de Servicio para Avisos de precaución a las aeronaves.
 - (4) Posiciones para reflectores eléctricos
 - (5) Caminos

a. **Campos de aterrizaje auxiliares. Localizados en Chame, Río Hato, Aguadulce, David y Garachiné.**

En los anteriores lugares, excepto en Río Hato, será necesario proveer habitación para destacamentos de aproximadamente veinticinco hombres, con suficientes tiendas de campaña en almacenaje para atender el personal de un grupo de bombardeo de aproximadamente mil hombre, cuando se hace necesario ocupar estas estaciones para encontrarse con fuerzas enemigas. En Río Hato algún albergue temporal adicional está construido o se está construyendo.

En adición a lo anterior también hay que proveer para el almacenaje de bombas y gasolina para llenar los requisitos de un grupo de bombardeo.

b. **Campos de Aterrizaje de emergencia.— Localizados en Piñas, Tocumen, La Chorrera, Puerto, La Mesa, Las Lajas y Almirante.**

Será necesario preparar canchas de una naturaleza temporal y suministrar obreros civiles en número suficiente para

conservarlas en condición servible. El objeto de estos campos es estar preparados para aterrizajes de emergencia que tengan que hacer aeroplanos, incluyendo los civiles, que encuentren dificultades mientras vuelan de una estación a otra.

- c. **Estaciones de Servicio para Avisos de Precaución a las aeronaves.— Localizadas en Almirante, Punta Gorda, Isla de Coiba, Punta Mala (Cape Mala), Punta de Jaqué, Molineca y Puerto Sapsuru (Pto. Sapsuru).**

Estas son estaciones a puntos distantes en las cuales están instalados aparatos mecánicos para descubrir la aproximación de aeroplanos a gran distancia. Esta información así obtenida será transmitida a estaciones aéreas para que las fuerzas en ellas estacionadas puedan estar alertas. Una área muy pequeña será requerida para estas estaciones, con albergue suficiente para un destacamento de aproximadamente veinte hombres necesarios para operar los detectores.

- d. **Posiciones para reflectores eléctricos:**

Estas posiciones son cuarenta y seis en número, localizadas en la vecindad de la Zona del Canal situadas adelante de las baterías antiaéreas, localizadas dentro de la zona del Canal, y necesarias para iluminar aeroplanos enemigos acercándose al Canal.

- e. **Caminos:**

Para proveer acceso a las posiciones de proyectores eléctricos será necesario construir algunos caminos. Estos caminos serán macadamizados diez pies en anchura y estarán disponibles para el uso por los nacionales panameños que vivan en sus vecindades. Estos caminos serán convertidos por el Gobierno de los Estados Unidos en caminos de concreto de dos vías cuando, en la opinión del Gobierno panameño, tal construcción está garantizada y cuando haya fondos disponibles.

3. En adición a lo anteriormente mencionado una área limitada en las islas de Melones y Bona será requerida para posiciones de reflectores eléctricos y estaciones de observación."

Se incluyen, también para la información confidencial del Gobierno de Vuestra Excelencia, dos mapas que muestran la localización de los sitios a que se ha referido la declaración anterior.

Con referencia a las condiciones bajo las cuales los terrenos necesarios para fines de defensa serían hechos disponibles para

su utilización por el Ejército de los Estados Unidos, el General Van Voorhis presenta las sugerencias siguientes, teniendo en mente las observaciones hechas por Su Excelencia el Presidente en el transcurso de nuestra reciente entrevista:

- a. Todas las negociaciones serán, desde luego, celebradas con el Gobierno de la República de Panamá.
- b. Todas las tierras, cuando no sean necesitadas más por los Estados Unidos, serán abandonadas por los Estados Unidos y sus usos revertirán a la República de Panamá.
- c. El término de ocupación será por noventa y nueve años, el Gobierno de los Estados Unidos reservándose el derecho a renovar los contratos de arrendamiento con las Administraciones subsiguientes.
- d. Los alquileres serán sobre bases anuales, y las sumas serán acordadas entre los Gobiernos de los Estados Unidos y de la República de Panamá.
- e. El Gobierno de Panamá puede, a solicitud suya, enviar un representante debidamente autorizado para que visite cualquiera instalación con el fin de que pueda ser informado acerca de los pasos tomados para la defensa en el interés común.
- f. El Gobierno de los Estados Unidos ejercerá jurisdicción sobre su propio personal. Otras personas culpables de ofensas civiles serán entregadas a las autoridades panameñas para que éstas tomen la acción que corresponda a la naturaleza de la ofensa.

El General Van Voorhis y yo creemos que las condiciones arriba mencionadas están substancialmente de acuerdo con los deseos de Su Excelencia el Presidente tal como los expresó en nuestra reciente entrevista y que ellas ofrecen bases mutuas satisfactorias para otras negociaciones concernientes al arrendamiento de los terrenos en cuestión, lo cual será mi privilegio arreglar con Vuestra Excelencia.

Mientras tanto y en vista de la urgencia extrema del trabajo que se proyecta hacer, tal como ya se ha explicado a Vuestra Excelencia, tengo el honor de solicitar, por instrucciones de mi Gobierno, que el Gobierno de Vuestra Excelencia autorice a las autoridades militares de los Estados Unidos a que den inmediatamente los pasos necesarios para la preparación preliminar de las posiciones a que se ha hecho referencia anteriormente. Tales pasos consistirían principalmente en la limpieza de matojos, necesarias para

hacer inspecciones que determinen la localización exacta de las posiciones y la conveniencia de las áreas para campos de aterrizaje, como se indica en los mapas adjuntos.

Es innecesario llamar la atención hacia la necesidad de tomar inmediata acción en la presente emergencia y en vista del interés expresado por su Excelencia el Presidente en la cooperación del Gobierno panameño en las medidas que tienen por objeto, no solo la protección del Canal de Panamá, sino también la defensa hemisférica, estoy seguro que el gobierno de vuestra Excelencia concederá la autorización solicitada.

Acepte, Excelencia, las renovadas seguridades de mi más alta consideración.

(Fdo.) *William Dawson*

Anexos: Dos mapas.

Su Excelencia
Señor Doctor Don Raúl de Roux
Secretario de Relaciones Exteriores

Traductor: *M.J.M. Jr.*

**Acta confidencial de una conversación tenida
por el Excelentísimo Señor Presidente de la
República, Arnulfo Arias Madrid, con el embajador
de los Estados Unidos en Panamá, Sr. William
Dawson, el 7 de enero de 1941 a las 11:30 a.m.***

El señor Embajador había venido para ver al Presidente de la República y tratarle, especialmente, de la cooperación que quería prestar el Gobierno Norteamericano y en particular las autoridades de la Zona del Canal para reprimir la campaña de propaganda que contra el Gobierno de Panamá hacían a la sazón algunos periodistas norteamericanos, inspirados principalmente por elementos panameños. En el curso de la conversación mencionó, sin embargo, el interés que tenía el Gobierno de los Estados Unidos en que el Gobierno de Panamá firmase los contratos de arrendamiento para el establecimiento de bases aéreas, reflectores, detectores, etc. en territorio panameño fuera de la jurisdicción de la Zona. En vista de la situación europea, dijo el señor Embajador, las autoridades norteamericanas estaban urgidas por que el Gobierno panameño firmase los contratos de arriendo a plazos largos. El Excelentísimo Señor Presidente le manifestó sin rodeos al señor Embajador, que el actual Gobierno de Panamá no podía de ninguna manera firmar esos contratos y menos por plazos largos como los querían el Departamento de Estado de Washington y las autoridades militares de la Zona del Canal. Esto no significaba que el gobierno de Panamá se negase a prestar la colaboración que creía de rigor en la obra de defensa del Canal; el punto del Gobierno Panameño era que esta cooperación podría brindarse, sin ceder por plazo mayor de seis o siete años los terrenos solicitados por las autoridades militares de la Zona del Canal en distintos lugares de la República.

El Señor Embajador dijo que a su modo de ver el Departamento de Estado de Washington no estaba dispuesto a dar al Gobierno de

* Correspondencia diplomática-- 1940, pp. 00055-57.

Panamá ninguna compensación económica como lo había pedido en conversaciones anteriores el Presidente de la República; y que esta decisión de Washington era a su modo de ver, última o definitiva. El señor Presidente de la República dijo que el Gobierno de Panamá tampoco podía, por su parte, acceder a la cesión solicitada en las condiciones propuestas por las autoridades norteamericanas; y que en estas circunstancias siendo Panamá un pequeño país sin grandes recursos materiales ni medios adecuados para defenderse, las autoridades militares de la Zona del Canal podían si lo creían conveniente y si querían romper con la solidaridad interamericana, vulnerar los derechos de Panamá como República libre e independiente; efectuar la ocupación solicitada, por la fuerza.

El Excelentísimo Señor Presidente de la República añadió, de acuerdo con declaraciones anteriores, que era inadmisibile que los Estados Unidos a más de desconocer los derechos libres y soberanos de Panamá se negase a darle a nuestro país una compensación razonable o juiciosa, por la cesión de terrenos solicitados por los Estados Unidos y que Panamá estaba dispuesta a consentir pero sin menoscabo de su soberanía y en condiciones razonables. El propio Señor Presidente de la República añadió que en el mismo día de hoy se pondría al habla con la Cancillería Panameña para que Ésta cablegrafiase a nuestro Embajador en Estados Unidos precisando claramente la posición del Gobierno de Panamá.

El Presidente de la República insistió en la conveniencia de que el Embajador de los Estados Unidos cablegrafiase al Departamento de Estado en Washington poniendo de relieve la razonable que son las reivindicaciones panameñas y la actitud justiciara del mismo Gobierno Panameño que no se negaba a considerar favorablemente las solicitudes norteamericanas sino que lo hacía teniendo en cuenta los derechos soberanos de Panamá y haciendo mérito también de que las reivindicaciones adelantadas por nosotros los panameños, además de ser legítimas si armonizaban con las solicitudes de las autoridades norteamericanas. En fin, el Excelentísimo Señor Presidente de la República dijo que, en el evento de que el Departamento de Estado no deseara dar cumplida satisfacción a Panamá en forma directa y tomando en cuenta las reivindicaciones panameñas que son conocidas, lo puede hacer indirectamente asumiendo por su cuenta otras obligaciones. Por ejemplo, podría hacerse cargo de la construcción o de la continuación de la carretera central desde Río Hato hasta el límite con Costa Rica.

Esta conversación terminó a las 12.00 m del día 7 citado.

5
Memorándum de los 12 puntos*
(Febrero de 1941)

MEMORÁNDUM DE LOS 12 PUNTOS
QUE EL EMBAJADOR DE PANAMÁ EN WASHINGTON, D.C.,
PRESENTA AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El Gobierno de Panamá, basándose en la tradicional amistad y comunidad de intereses que siempre ha existido con el Gobierno de los Estados Unidos, se permite presentar, por conducto de su Embajador en Washington, ciertas demandas que por considerarse primordiales para el desarrollo económico, industrial y político del país, vería con especial agrado que fueran acogidas favorablemente por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Dichas demandas se enumeran, en forma general, a continuación:

1. Que el acueducto de las ciudades de Panamá y Colón, hoy día en manos de la Administración del Canal de Panamá, pase al Gobierno de Panamá.
2. Que Panamá adquiera las tierras pertenecientes a la Compañía del Ferrocarril, que de conformidad con el contrato firmado con el Gobierno de Colombia y sancionado el 15 de agosto de 1867, deberán revertir a la República en agosto de 1966.
3. Que se llegue a un arreglo equitativo para evitar el contrabando y la competencia ruinosa que en la actualidad los comisarios causan al comercio panameño. Las comisiones creadas por el Tratado de 1936 no han rendido el resultado esperado, más que todo debido al cambio de situación como consecuencia de la afluencia de inmigrantes con motivo de la construcción del tercer juego de esclusas.
4. Que el Gobierno de los Estados Unidos construya un túnel bajo el Canal o un puente sobre el mismo, abierto constantemente.

* Ministerio de Relaciones Exteriores. MEMORIA. Panamá, 1943, pp. 180-182.

- te al tráfico irrestricto de los vehículos de Panamá. Esta medida, desde el punto de vista militar, sería de gran provecho para la defensa del Canal y además es de urgente necesidad para el tráfico entre la capital y el interior de la República.
5. Que las carreteras que el Gobierno de los Estados Unidos pueda construir en territorio bajo jurisdicción panameña sean vigiladas en común con fines de seguridad absoluta para Panamá y para la Zona del Canal.
 6. Que los jamaicanos traídos para trabajar en la construcción del Canal sean repatriados y que se formule una promesa formal de no traer más contingentes. Que los trabajadores que se necesiten en las obras del Canal sean traídos de países latinoamericanos siempre y cuando que no pertenezcan a razas cuya inmigración sea prohibida por la Constitución panameña.
 7. Que los agentes municipales de la policía de la Zona del Canal mientras se encuentren en territorio bajo jurisdicción panameña no porten armas de ninguna clase, pudiendo conservar tan solo el tolete.
 8. Que la represa de Alhajuela suministre a Panamá, cuando así le sea solicitado por el Gobierno, energía eléctrica a precio no mayor de un centavo por kilowatio-hora.
 9. Que el Gobierno de los Estados Unidos pague íntegro el costo de la carretera hasta Río Hato por lo menos, y que devuelva lo ya pagado por la República de Panamá.
 10. Que el ferrocarril traslade la Estación a otra parte dentro del territorio sometido a la jurisdicción de los Estados Unidos y que el actual patio y demás sitios ocupados por aquél queden libres y pasen a Panamá, para ensanche de la vía de comunicación entre los barrios residenciales y el centro de la ciudad.
 11. Que en el evento de que se interrumpa el tráfico en las carreteras de la República por el transporte de material de guerra o tropas de los Estados Unidos, se reconozca a Panamá indemnización razonable.
 12. Que el Gobierno norteamericano ceda al de Panamá espacio adecuado, cercano a los muelles de Balboa, para la instalación de tres tanques de petróleo, gasolina, etc., cuyas capacidades serán luego determinadas.

Washington, D.C., 18 de febrero de 1941.

INFORME DEL EMBAJADOR CARLOS N. BRIN*

Número A-70

Febrero 19 de 1941.

Señor Ministro:

Tengo a honra informar a Vuestra Excelencia que ayer miércoles 17 al medio día fui recibido por el Presidente Roosevelt en audiencia que tuvo a bien concederme y en la cual le hice entrega del memorándum de los Doce Puntos.

Deseo manifestar a Vuestra Excelencia que la entrevista fue muy cordial y que pude notar que el Presidente Roosevelt aparenta estar inclinado a concedernos varias de las peticiones incluidas en nuestro memorándum. Le agregué, verbalmente, el avance del pago de cincuenta anualidades del Canal para atender a la cancelación entera de nuestra deuda externa, ya que nuestros esfuerzos para refundir esta deuda de Panamá había fracasado. Esto de parte mía le interesó y a la vez me manifestó que averiguaría inmediatamente con el Secretario del Tesoro Morgenthau, si sería posible conseguir esta suma de dinero sin una legislación especial de parte del Congreso. Cúmpleme manifestar a Vuestra Excelencia me anhelan vivas esperanzas en poder conseguir ese dinero.

Al hacer referencia a los «DOCE PUNTOS» que, verbalmente traduje al inglés y que se los expliqué lo mejor posible en el corto lapso de tiempo que duró la audiencia, no contestó en la negativa a ninguno de ellos, prometiéndome que los estudiaría detenidamente y que me contestaría tan pronto como le fuera posible.

Complázcome también en informar a Vuestra Excelencia que durante esa entrevista el Presidente Roosevelt me leyó la comunicación que el día anterior había enviado a S.E. el Embajador Dawson, en la cual declaraba el estado de peligro inminente en que se encuentra el Canal de Panamá, debido a la conflagración mundial y por lo cual esperaba la absoluta cooperación temporal de parte de Panamá para defender de manera adecuada el Canal. comentó el presidente Roosevelt el número de aviadores alemanes que aún hay en Colombia y de los probables campos de aterrizaje que existen en Costa Rica y en Colombia, que se sospecha están en manos de japoneses y de otros miembros del Axis.

* *Correspondencia Diplomática—1940*, pp. 0000118-20.

Me dijo nuevamente el Presidente Roosevelt que las áreas que con tanta insistencia solicita y requiere su Gobierno serían ocupadas solo temporalmente y serían desocupadas una vez terminada la crisis actual y que haya desaparecido el peligro inminente que en la actualidad existe para el Canal.

Deseo manifestar a Vuestra Excelencia que mi impresión es que el presidente Roosevelt está anuente a ayudarnos en la realización de nuestras aspiraciones, pero a cooperar solo después que nuestro Gobierno les facilite las áreas que necesitan para la mejor defensa del Canal, sin que esto afecte en lo absoluto nuestra soberanía sobre tales áreas.

Abrigo la esperanza que nuestro Gobierno pueda llegar de manera decorosa a un arreglo mutuamente satisfactorio, ya que de esta manera, como bien realizará Vuestra Excelencia, me facilitaría en extremo mi labor para poder lograr conseguir, por lo menos, parte de nuestras justas aspiraciones.

A continuación me es grato transcribir a Vuestra Excelencia los radiogramas que sobre esta entrevista con el Presidente Roosevelt se han cruzado entre esa Cancillería de su digno cargo y esta Embajada:

«EXTERIORES

Febrero 18 de 1941.

WASHINGTON

NUMERO 31

TUVE HOY MEDIODÍA CORDIAL ENTREVISTA CON PRESIDENTE ROOSEVELT DURANTE LA CUAL LE EXPUSE LAS PRINCIPALES ASPIRACIONES DE PANAMÁ. TENGO ESPERANZAS DE PODER CONSEGUIR PARA NUESTRO PAÍS ALGUNAS DE MIS PETICIONES. ESCRÍBOLE MAÑANA POR CORREO AÉREO DANDO DETALLES. BRIN»

• • • • •

«PANAEMBA

WASHINGTON

Febrero 19 de 1941.

NUMERO 20

URGE CONOCER DETALLES ENTREVISTA VUECENCIA CON PRESIDENTE ROOSEVELT. SUGIÉROLE CONVENIENCIA ANTI-

CIPARNOS POR RADIOGRAMA CIFRADO NOTA AEREA PROMETIDA. EMBAJADOR AMERICANO PRESENTO AYER A PRESIDENTE ARIAS NUEVO AIDE MEMOIRE QUE PARECE CONSULTAR LOS PUNTOS DE VISTA DEL GOBIERNO PANAMENO Y QUE SE CONSIDERA PARTICULARMENTE FAVORABLE AL DESARROLLO DE LAS NEGOCIACIONES. CANCELLERÍA DESEARIA CONTESTAR SIN DEMORA DICHO AIDE-MEMOIRE Y PARA ELLO NECESITA RECIBIR INFORMACIÓN CONFERENCIA VUECENCIA. DEROUX.»

• • • • •

«EXTERIORES

PANAMÁ

Febrero 19 de 1941.

NUMERO 32

REFIRIÉNDOME A RADIOGRAMA VUECENCIA NUMERO 20 NOTA DETALLES ENTREVISTA PRESIDENTE ROOSEVELT VA POR CORREO AÉREO ESTA NOCHE Y LLEGARA ALLÁ MANANA JUEVES POR LA TARDE. BRIN.»

Aprovecho la ocasión para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Carlos N. Brin

Embajador



6

A la Nación

(5 de marzo de 1941)

Los Gobiernos de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América han cruzado recientemente ideas, por iniciativa de este último, sobre la situación creada por la actual conflagración europea en cuanto pueda ella afectar la seguridad del Canal de Panamá. Las conversaciones se han desarrollado en un espíritu de amplia y perfecta comprensión y a la luz del Tratado Arias-Roosevelt, de 2 de marzo de 1936.

El Gobierno panameño armonizando el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con el deber imperioso e indeclinable de salvaguardar sus propios derechos soberanos, ha considerado detenidamente las solicitudes del gobierno norteamericano. Estas tienden concretamente a obtener el uso de algunos sitios fuera de la Zona del Canal y en territorio panameño para la instalación de bases aéreas, reflectores y detectores, que el gobierno de Washington considera indispensables en la defensa de la misma vía interoceánica; apoyándose, para su demanda, en el Artículo X del Tratado. El Gobierno de Panamá, después de estudiar cuidadosamente la situación en diferentes reuniones del Consejo de Gabinete, ha resuelto acceder a los requerimientos del Gobierno de los Estados Unidos en vista de que éste "ha llegado a la conclusión de que, de acuerdo con los términos del Artículo X del Tratado de 1936, una CONFLAGRACIÓN INTERNACIONAL se ha declarado, trayendo con ella la existencia de una amenaza a la seguridad del Canal de Panamá la cual requiere de parte de los Estados Unidos la adopción de medidas para su defensa". La preocupación de defender los fueros legítimos de Panamá, en punto a su integridad territorial y a su independencia política, juntamente con la aplicación del Tratado de 1936, han llevado al Gobierno de la República a subordinar el uso de los terrenos pedidos a determinadas condiciones, entre otras las que siguen. En primer lugar, que las autoridades militares norteamericanas ocuparán dichos territorios

• *Correspondencia Diplomática*—1940. pp. 0000152-53.

únicamente por el tiempo que dure la actual conflagración europea, de modo que hayan de ser desocupados tan pronto como aquella termine. En segundo lugar, que el Gobierno norteamericano reconozca al de Panamá compensaciones adecuadas. Y, por último, que la República de Panamá ejerza jurisdicción sobre los civiles dentro de los sitios ocupados, de acuerdo con modalidad que, a juicio de ambos Gobiernos, se imponga para la defensa del Canal.

Ante la premura mostrada por el Gobierno estadounidense, el Gobierno de Panamá ha consentido a las autoridades de la Zona del Canal iniciar las preparaciones del caso. El mismo Gobierno panameño estima que las condiciones arriba indicadas y los convenios finales entre las dos partes directamente interesadas darán lugar a que las negociaciones futuras se desenvuelvan sin la menor dificultad y de acuerdo con la letra y el espíritu del Tratado de 2 de marzo de 1936.

Panamá, marzo 5 de 1941.

ARNULFO ARIAS

Presidente de la República.

El Ministro de Gobierno y Justicia,

Encargado del Ministerio de Hacienda y Tesoro,

Ricardo Adolfo de la Guardia

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Raúl de Roux

El Ministerio de Educación,

José Pezet

El Ministro de Salubridad y Obras Públicas,

Encargado del Ministerio de Agricultura y Comercio,

Manuel V. Patino

El Secretario General de la Presidencia,

Secretario del Consejo de Gabinete,

Cristóbal Rodríguez

7
Decreto No. 9*
(de 20 de octubre de 1941)

POR EL CUAL SE AUTORIZA EL ARTILLAMIENTO
DE NAVES MERCANTES CON BANDERA PANAMEÑA.

El Encargado del Poder Ejecutivo en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO:

- Que el día seis de los corrientes el Gobierno resolvió no autorizar el artillamiento de naves con bandera panameña.
- Que esa decisión es desde todo punto de vista inconveniente, toda vez que recientemente se ha venido registrando el hundimiento de naves con bandera panameña, efectuado por fuerzas navales del Gobierno alemán;
- Que esos ataques a las naves que ostentan nuestra bandera no han tenido justificación alguna y han constituido violaciones flagrantes de nuestros derechos como Nación y de los principios consagrados por el Derecho Internacional;
- Que no poseyendo la República de Panamá fuerzas navales que le permitan dar una protección adecuada a las naves panameñas, debe interesarse porque estas naves tengan, por lo menos, la facilidad de ejercer su derecho de defensa propia.

DECRETA:

ART. 1: Revocar la resolución del Poder Ejecutivo de seis de los corrientes, y autorizar a los dueños de naves que ostenten bandera panameña que provean, a sus expensas, dichas naves de las armas necesarias para su legítima defensa contra estos ataques que constituyen violación de la libertad de los mares y del Derecho Internacional.

• Gaceta Oficial No. 8690. Panamá, 26 de diciembre de 1941, p. 1.

ART. 2: Dejar constancia de que la República de Panamá no asume para con los dueños de estas naves ninguna obligación por los perjuicios pecuniarios o de otra índole que sufren dichas naves en su tráfico internacional; quedando entendido que al hacer esta salvedad, la República de Panamá se reservará el derecho a reclamar oportunamente de los agresores las indemnizaciones correspondientes.

Comuníquese y publíquese.

DADO EN PANAMÁ A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO.

RICARDO ADOLFO DE LA GUARDIA

El Ministro de Gobierno y Justicia
Camilo De La Guardia Jr.

El Ministro de Relaciones Exteriores
Octavio Fábrega

El Ministro de Hacienda y Tesoro
José A. Sosa J.

El Ministro de Educación
Víctor F. Goytia

El Ministro de Salubridad y Obras Públicas
Manuel Pino R.

El Ministro de Agricultura y Comercio
E. B. Fábrega

El Secretario General de la Presidencia
Agustín Ferrari

8
Convenio de Sitios de Defensa*
(18 de mayo de 1942)

**CONVENIO SOBRE ARRENDAMIENTO
DE SITIOS DE DEFENSA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**

Panamá, 18 de mayo de 1942.

Los suscritos a saber: Octavio Fábrega, Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, y Edwin C. Wilson, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América, para lo cual estamos legal y suficientemente autorizados, hemos celebrado el siguiente Convenio:

El Gobierno de la República de Panamá y el de los Estados Unidos de América, conscientes de su mutua obligación, expresada en el Tratado General de Amistad y Cooperación suscrito el 2 de marzo de 1936, de tomar todas las medidas que requiera la protección efectiva del Canal de Panamá en el cual ambos países están conjunta y vitalmente interesados, se han consultado recíprocamente y han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO I

La República de Panamá concede a los Estados Unidos el uso temporal, para fines de defensa, de todas las tierras mencionadas en el Memorándum anexo a este Convenio y que forma parte integrante del mismo. Estas tierras serán evacuadas y cesará el uso de ellas por parte de los Estados Unidos de América un año después de la fecha en que haya entrada en vigor el Convenio definitivo de paz que haya hecho cesar el conflicto bélico ahora existente. Si durante este periodo los dos Gobiernos estiman que, no obstante el cese de hostilidades, continúa existiendo el estado de inseguridad internacional que haga imperiosa necesidad la conti-

* Ministerio de Relaciones Exteriores. MEMORIA. Imprenta Nacional, Panamá, 1943. pp. 330-336.

nuación de cualesquiera de dichas bases o áreas de defensa mencionadas, los dos Gobiernos nuevamente procederán a consultarse mutuamente y celebrarán el nuevo Convenio que las circunstancias requieran.

Las autoridades nacionales de la República de Panamá tendrán acceso adecuado a los sitios de defensa mencionados.

ARTÍCULO II

La concesión mencionada en el artículo anterior incluye el derecho de usar las aguas adyacentes a dichas áreas de terreno y a mejorar y profundizar las entradas a las mismas y el anclaje en dichos lugares, así como el de llevar a cabo en dichas áreas de terreno todos los trabajos que puedan ser necesarios en relación con la protección efectiva del Canal. Esto no dará derecho a la explotación o utilización comercial del suelo o del subsuelo ni de las playas ni corrientes adyacentes.

ARTÍCULO III

Los acciones militares y navales de Panamá tendrán derecho a aterrizar y zarpar de los aeropuertos establecidos o que se establezcan dentro de las áreas a que se refiere el Artículo I. Igualmente los aviones militares o navales de los Estados Unidos tendrán derecho a usar los aeropuertos navales y militares establecidos o que se establezcan en la República de Panamá. Los reglamentos que rijan este uso recíproco serán confeccionados en un acuerdo que será negociado por los funcionarios respectivos de ambos países.

ARTÍCULO IV

La República de Panamá retiene su soberanía sobre las áreas de terreno y de aguas mencionadas en el Memorándum de que trata la cláusula I y también sobre el espacio de aire que las cubre, y retiene también plena jurisdicción en asuntos civiles siendo entendido, sin embargo, que durante el período de ocupación temporal a que este Convenio se refiere, el Gobierno de los Estados Unidos tendrá el uso pleno de dichas áreas y jurisdicción exclusiva y plena sobre el personal civil y militar de los Estados Unidos allí establecido y sobre sus familias, y podrá, además, excluir sin tener en cuenta su nacionalidad, sin perjuicio de lo estipulado en el segundo inciso de la cláusula I de este Convenio; y podrá también arrestar, juzgar y castigar a todas las personas que, dentro de dichas áreas, cometer cualquier delito contra la seguridad de las

instalaciones militares que allí se encuentran, siendo entendido, sin embargo, que todo ciudadano panameño que fuere arrestado o detenido por cualquier causa será entregado a las autoridades de la República de Panamá para su juzgamiento y castigo.

ARTÍCULO V

La República de Panamá y los Estados Unidos reiteran su entendimiento respecto al carácter temporal de la ocupación de los sitios de defensa a que este Convenio se refiere. En consecuencia los Estados Unidos, reconociendo la importancia de la cooperación prestada por Panamá al proporcionar estos sitios temporales de defensa y reconociendo también la carga que la ocupación de estos sitios significa para la República de Panamá, se obligan expresamente a evacuar los terrenos a que este Convenio se refiere y a cesar completamente en el uso de los mismos, a más tardar dentro de un año después de la fecha en que haya entrado en vigor el convenio definitivo de paz que haya hecho cesar el conflicto bélico ahora existente. Queda entendido, según se ha expresado en la Cláusula I, que si en este período los dos Gobiernos estiman que, no obstante el cese de hostilidades, continúa existiendo un estado de inseguridad internacional que haga de imperiosa necesidad la continuación de cualesquiera de dichas bases o sitios de defensa mencionados, los dos Gobiernos nuevamente procederán a consultarse mutuamente y celebrarán el nuevo Convenio que las circunstancias requieran.

ARTÍCULO VI

Todos los edificios y estructuras erigidos por los Estados Unidos en las áreas mencionadas serán de propiedad de los Estados Unidos y podrán ser removidas por los Estados Unidos antes de la expiración del presente Convenio. Cualesquiera otros edificios o estructuras existentes en las áreas mencionadas al tiempo de su ocupación podrán ser usados por los Estados Unidos. Ni los Estados Unidos ni la República de Panamá estarán en la obligación de reconstruir o reparar la destrucción o daño infligido, por cualquier causa, a cualesquiera edificios o estructuras que pertenezcan o sean usados por los Estados Unidos en dichas áreas. Los Estados Unidos no estarán obligados, al expirar el presente arrendamiento, a devolver a Panamá las áreas mencionadas en las mismas condiciones en que estaban al tiempo de su ocupación, ni tampoco estará obligada la República de Panamá a reconocer com-

pensación alguna a los Estados Unidos por mejoras que se hayan hecho en dichas áreas ni por los edificios es estructuras que en ellas se dejaren, todos los cuales vendrán a ser de propiedad de la República de Panamá al terminar el uso por parte de los Estados Unidos de las áreas en las cuales han sido erigidas dichas estructuras o efectuadas dichas mejoras.

ARTÍCULO VII

Las áreas de terreno a que se ha hecho referencia en el artículo I, así como las propiedades de los Estados Unidos situadas en ellas y el personal civil y militar de los Estados Unidos y sus familias que vivieren en dichas áreas, estarán exentos de todo impuesto, contribución o exacción de otra naturaleza por parte de la República de Panamá o de las subdivisiones políticas de ésta durante el término del presente Convenio.

ARTÍCULO VIII

Los Estados Unidos terminarán a sus expensas la construcción de las carreteras que a continuación se describen, bajo las condiciones y con el material que aquí se especifica:

A-3 (Comprenderá desde Piña, en el lado Atlántico del Istmo, hasta el límite con la Zona del Canal en Río Providencia. Tendrá por lo menos diez pies de ancho y será construida de macadam).

La extensión de la carretera transistmica siguiendo la línea del camino P-8. (Las especificaciones serán las mismas que las de la carretera transistmica. La extensión comenzará en Madrinal, pasando sobre la Represa Madden mediante un puente sobre el Río Chagres, más abajo de la represa, hasta conectar con el camino P-8 en Roque y luego se extenderá el camino P-8 desde Pueblo Nuevo hasta la ciudad de Panamá. Queda entendido que el pavimento del puente sobre el Río Chagres quedará situado a una elevación superior a la de la línea limítrofe de la Zona del Canal).

Al terminarse estas carreteras el Gobierno de los Estados Unidos asumirá la responsabilidad por cualesquiera trabajos que sean necesarios con posterioridad a la construcción de las mismas, es decir, por los trabajos necesarios para proteger la construcción original hasta tanto dichas carreteras queden estabilizadas. El Gobierno de Panamá garantiza que todas las carreteras bajo su jurisdicción usadas periódica y frecuentemente por las fuerzas armadas de los Estados Unidos, serán debidamente mantenidas en todo tiempo. El Gobierno de Panamá podrá pedir la coopera-

ción del Gobierno de los Estados Unidos en el trabajo de reparación y mantenimiento de dichos caminos, siempre que dicha cooperación será considerada como necesaria para cumplir la garantía arriba mencionada, tal como por ejemplo, en el caso de emergencia o de situaciones que requieran una pronta acción.

El Gobierno de los Estados Unidos asumirá la tercera parte del costo total anual del mantenimiento de todos los caminos panameños usados periódica y frecuentemente por las fuerzas armadas de los Estados Unidos, costo que cubrirá los gastos de cualquier uso o deterioro causado a los caminos por el movimiento relativo a las actividades de defensa. La sumas que pagará el Gobierno de los Estados Unidos se basarán sobre las cuentas presentadas anualmente por la República de Panamá, dando en detalle los gastos anuales totales efectuados en cada camino usado periódica o frecuentemente por las fuerzas armadas de los Estados Unidos, sobre las cuentas similarmente presentadas por el Gobierno de Estados Unidos, dando similar detalle de los gastos efectuados por ese Gobierno en respuesta a solicitud del Gobierno de Panamá, como arriba se indica.

En el evento de que el Gobierno de Estados Unidos haya rendido cooperación en el mantenimiento de dichos caminos, los gastos efectuados por ese Gobierno por tal motivo serán acreditados a la parte que le corresponde pagar a Estados Unidos del costo total del mantenimiento de los caminos bajo la jurisdicción de Panamá.

En vista de las obligaciones y responsabilidades de los Estados Unidos aquí mencionadas, el Gobierno de la República de Panamá concede el derecho de tránsito para el movimiento rutinario de los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, del personal civil de dichas fuerzas y sus familias, así como el de animales, vehículos de motor o tirados por animales, empleados por las fuerzas armadas o por los contratistas empleados por éstas para trabajos de construcción o cualesquiera otros cuyas actividades se relacionen, en cualquier forma, con el programa de defensa. Este derecho de tránsito será a través de los caminos construidos por los Estados Unidos en territorio bajo la jurisdicción de la República de Panamá y a través de las demás carreteras nacionales que comunican a dichas áreas de defensa. Queda entendido que los Estados Unidos tomarán en todo tiempo las precauciones necesarias para evitar, si fuere posible, interrupciones de tránsito en la República de Panamá.

ARTÍCULO IX

Todos los caminos construidos por los Estados Unidos en territorio bajo la jurisdicción de la República de Panamá estarán bajo la jurisdicción de Panamá. En cuanto a aquellos caminos secundarios construidos por los Estados Unidos con el fin de tener acceso para cualesquiera sitios de defensa, Panamá otorga a las autoridades militares de los Estados Unidos el derecho a restringir o prohibir el tráfico público en dichos caminos dentro de una distancia razonable de dichos sitios de defensa, siempre que tal restricción o prohibición sea necesaria para la protección militar de dichos sitios de defensa. Queda entendido que tal restricción o prohibición no perjudicará el libre acceso a sus respectivas propiedades a los habitantes establecidos dentro de las áreas restringidas. Queda también entendido que tal restricción o prohibición no se aplicará a ninguna parte de ningún camino principal.

ARTÍCULO X

El Gobierno de los Estados Unidos de América al construir las bases aéreas y aeropuertos en cualesquiera de los sitios de defensa mencionados en el Artículo I, tomarán en cuenta, además de los requisitos de carácter técnico necesario para la seguridad de los mismos, los reglamentos que sobre la materia hayan sido o fueren promulgados por la Junta Mixta de Aviación.

La República de Panamá no permitirá, sin llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, la erección o mantenimiento de líneas puestas en el aire y otras obstrucciones que puedan constituir un peligro para las personas que vuelen en las inmediaciones de las áreas destinadas a bases aéreas o aeropuertos. Si al construir dichas bases aéreas o aeropuertos fuere necesario remover líneas colgantes de alambres, en vista de que constituyan un obstáculo, el Gobierno de los Estados Unidos pagará los gastos que ocasionare la remoción de éstas y de su instalación en otra parte.

ARTÍCULO XI

El Gobierno de los Estados Unidos se obliga a tomar las medidas necesarias para impedir que los artículos importados para su consumo dentro de las áreas referidas en el Artículo I, pasen a cualquier otro territorio de la República de Panamá sin cumplir con las leyes fiscales de Panamá. Siempre que fuera posible, el aprovisionamiento y equipo de las bases de defensa mencionadas en el artículo I así como el del personal de las mismas será hecho

con productos, artículos y comestibles provenientes de la República de Panamá, siempre que éstos puedan obtenerse a precios razonables.

ARTÍCULO XII

Los sitios de defensa a que se ha hecho referencia en el artículo I consisten en terrenos pertenecientes al Gobierno de la República de Panamá y de terrenos de propiedad particular.

En cuanto a los terrenos de propiedad particular que el Gobierno de Panamá adquirirá de sus dueños y que serán dados en uso temporal por el Gobierno de Panamá al Gobierno de los Estados Unidos, queda convenido que el Gobierno de los Estados Unidos pagará al Gobierno de Panamá un canon de arrendamiento anual de cincuenta balboas o dólares (B/.50.00) por hectárea, siendo entendido que el Gobierno de Panamá asumirá el costo de las expropiaciones necesarias así como el de las indemnizaciones y gastos por razón de los edificios, cultivos, instalaciones o mejoras que puedan existir dentro de los sitios de defensa mencionados.

En el caso de tierras pertenecientes al Gobierno de Panamá los Estados Unidos pagarán al Gobierno de Panamá un canon de arrendamiento anual de un balboa o dólares (B/.1.00) por todas dichas tierras.

Se exceptúan expresamente las tierras situadas en el Corregimiento de Río Hato designadas con el número doce (12) en el Memorándum anexo, siendo entendido que por toda esta parcela de terreno el Gobierno de los Estados Unidos pagarán al Gobierno de Panamá un canon anual de arrendamiento de diez mil balboas o dólares (B/.10,000).

El canon de arrendamiento mencionado en este artículo será pagado en balboas tal como éstos han quedado definidos en el convenio contenido en el canje de notas fechadas el 2 de Marzo de 1936, a las cuales se hace referencia en el Artículo VII del Tratado de esa fecha entre los Estados Unidos de América y Panamá, o en el equivalente de éstos en dólares y será pagado desde la fecha en que comenzó el uso, aunque provisional, de dichas tierras por los Estados Unidos, con excepción de las tierras situadas en el Corregimiento de Río Hato y designadas con el número doce (12) en el Memorándum anexo, respecto a las cuales el canon de arrendamiento comenzará el 1º de Enero de 1943.

ARTÍCULO XIII

Este Convenio podrá ser terminado por las partes contratantes por mutuo acuerdo, aún antes de que tenga lugar la expiración del mismo de conformidad con las cláusulas I y V que anteceden, quedando entendido también que, antes de ese plazo, podrán ser desocupadas, por parte de los Estados Unidos, cualesquiera de las áreas a que este Convenio se refiere y cesar el uso de éstas por parte de los Estados Unidos.

ARTÍCULO XIV

Este Convenio entrará en vigor en cuanto sea aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional de Panamá y por la Asamblea Nacional de Panamá.

Hecho en Panamá por duplicado, en español y en inglés, hoy 18 de Mayo de 1942.

A nombre y en representación del Gobierno de la República de Panamá,

OCTAVIO FÁBREGA

Ministro de Relaciones Exteriores

A nombre y en representación del Gobierno de los Estados Unidos de América,

EDWIN C. WILSON,

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América



**MEMORÁNDUM DE LOS SITIOS DE DEFENSA,
ANEXO AL CONVENIO SOBRE ARRENDAMIENTO
DE DICHOS SITIOS Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE
DE DICHO CONVENIO***

1. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en Puerto Armuelles, Provincia de Chiriquí. Cabida: ocho hectáreas con tres décimos de hectárea (8.3). Consiste en una parcela de terreno de trescientos (300) pies por siete mil cuatrocientos cincuenta (7.450) pies aproximadamente, que se extiende desde los límites de la República de Costa Rica con Panamá, hasta la costa, cerca de once (11) millas al Sur de Puerto Armuelles, incluyendo el derecho a fondear en aguas hondas y a depositar cables y líneas de tuberías.
2. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en David, Provincia de Chiriquí. Cabida: cuarenta y siete hectáreas con cuatro décimos de hectárea (47.4). Consiste en dos parcelas de terreno que se describen así: la primera mide, aproximadamente, ciento cincuenta (150) pies por cinco mil (5.000) pies, cerca del Aeropuerto Nacional de David, junto con el derecho de tránsito de una extensión de doscientos (200) pies hasta dicho aeropuerto, así como el derecho a transportar aeroplanos rodándolos a través de la carretera pública adyacente a dicho aeropuerto. La segunda es una parcela de trescientos (300) pies por mil seiscientos (1.600) pies aproximadamente, que, en la actualidad, forma parte del Aeropuerto Nacional de David e incluye el uso de las facilidades de aterrizaje del Aeropuerto Nacional de David.
3. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en Las Lajas, Provincia de Chiriquí. Cabida: doscientas cincuenta y nueve hectáreas con un décimo de hectárea (259.1). Consiste en una parcela de terreno que mide, aproximadamente, dos (2) millas al Noroeste de Las Lajas y al Sur de la Carretera nacional, cerca del camino público que la conecta con dicha carretera nacional.
4. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la isla de Coiba, Provincia de Veraguas. Cabida: cuarenta y dos hectáreas con nueve décimos de hectárea (42.9). Consiste en una parcela de terreno de trescientos (300) pies por diez y seis mil

* Panamá: Ministerio de Relaciones Exteriores. Departamento de Documentos y Archivos. *Tratados Bilaterales*, EE.UU. Parte Segunda, No. 15.

- (16.000) pies aproximadamente, que se extiende hasta la playa en la isla de Colba, con el derecho a fondear en aguas hondas y a depositar cables y líneas de tuberías.
5. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en La Mesa, Provincia de Veraguas. Cabida: ciento noventa y seis hectáreas con dos décimos de hectáreas (196.2). Consiste en una faja de terreno de tres (3) millas aproximadamente al Noreste de La Mesa y que se extiende a través de la vía pública e incluye también el derecho a transportar aeroplanos rodándolos a través de la vía pública.
 6. Sitio solicitado una parte el 11 de octubre de 1940 y la otra el 20 de diciembre de 1941, situado en Aguadulce, Provincia de Coclé. Cabida: quinientas treinta y una hectáreas con dos décimos de hectárea (531.2). Consiste de dos fajas de terreno que se describen así: la primera, o sea la solicitada el 11 de octubre de 1940, es una faja de terreno que mide, aproximadamente, noventa y cuatro hectáreas con un décimo de hectárea (94.1), cerca de la ciudad de Aguadulce y adyacente, hacia el Norte, a la Carretera Nacional. La segunda, o sea la solicitada el 20 de diciembre de 1941, es una faja de terreno adyacente a la primera, en dirección contraria a la ciudad de Aguadulce y tiene una cabida aproximada de cuatrocientas treinta y siete hectáreas con un décimo de hectárea (437.1).
 7. Sitio solicitado en parte el 11 de octubre de 1940 y la parte restante el 19 de diciembre de 1941, situado en Pocrí, Provincia de Los Santos. Cabida: ciento sesenta y una hectárea; con cuatro décimos de hectárea (161.4). consiste de dos fajas de terreno que se describen así: la primera, o sea la solicitada el 11 de octubre de 1940, es una faja que mide, aproximadamente, cuatro (4) millas al Noroeste de Pocrí y dos (2) millas al Sudeste del Puerto de Mensabé e incluye un derecho de tránsito de cien (100) pies hasta el camino entre dicho puerto y La Palma, o una cabida aproximada de cuarenta y una hectárea con tres décimos de hectárea (41.3). La segunda parte, o sea la solicitada el 19 de diciembre de 1941, consiste en una faja de terreno adyacente a la primera y con una cabida aproximada de ciento veinte hectáreas con seis décimos de hectárea (120.6).
 8. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en Punta Mala, Provincia de Los Santos. Cabida: siete hectáreas con tres décimos de hectárea (7.3), aproximadamente. Consiste en una parcela de terreno de trescientos veinticinco (325) pies por mil ocho-

- cientos (1.800) pies y de otra parcela que la conecta con la playa de trescientos (300) pies por seiscientos sesenta (660) pies, aproximadamente, cerca de siete (7) millas hacia el oeste, desde el extremo de Punta Mala, incluyendo el derecho a fondear en aguas hondas y a depositar cables y líneas de tuberías.
9. Sitio solicitado el 17 de marzo de 1942, situado en Punta Mala, provincia de Los Santos. Cabida: aproximadamente una hectárea (1.0). Consiste en una parcela de terreno situada, aproximadamente, a dos (2) millas al Sur en el camino que conduce hacia el Sur de Limón, población ésta situada, aproximadamente, a dos (2) millas al Sur de Pedasí.
 10. Sitio solicitado en parte el 19 de diciembre de 1941 y la parte restante el 17 de enero de 1942, situado en Penonomé, Provincia de Coclé. Cabida: aproximadamente mil ochenta y cuatro hectáreas con nueve décimos de hectárea (1084.9). Consiste en dos extensiones de terreno que se describen así: la primera, o sea la solicitada el 19 de diciembre de 1941, es un cuadrado que por cada lado mide diez mil (10.000) pies y está situado, aproximadamente, a nueve (9) millas al Sur de Penonomé y tiene una cabida aproximada de setecientos treinta y cuatro hectáreas con nueve décimos de hectáreas (734.9). La segunda, o sea la solicitada el 17 de enero de 1942, está situada al lado Sur de la Carretera Nacional cerca de cuatro (4) millas y dos (2) décimos de milla de Penonomé y mide, aproximadamente, trescientas cincuenta hectáreas (350.0).
 11. Sitio solicitado el 17 de enero de 1942, situado en Antón, Provincia de Coclé. Cabida: doscientas treinta y cinco hectáreas (235.0), aproximadamente. Consiste en una faja de terreno cerca de Antón al Sur de la Carretera Nacional y adyacente a dicha carretera.
 12. Sitio solicitado formalmente el 26 de agosto de 1940, situado en el Corregimiento de Río hato, provincia de Coclé. Cabida: aproximadamente siete mil setecientos setenta y cuatro hectáreas (7774.0). Consiste en una extensión de terreno cuyo lindero Este comienza en la Carretera Nacional y el puente sobre el Río Majagual, siguiendo luego dicho río Majagual hacia el Norte hasta sus cabeceras, de allí se traza una línea hacia el Noroeste hasta las cabeceras del Río Farallón; de allí siguiendo la línea de la costa del Golfo de Panamá hacia el Noreste a una distancia aproximada de dos (2) millas hasta un punto que queda, aproximadamente, a doscientos (200) me-

- tros al Oeste de la Posada de Santa Clara; de allí sigue una pequeña quebrada sin nombre en dirección Noreste a una distancia de una (1) milla, aproximadamente, hasta la Carretera Nacional; de allí, siguiendo dicha Carretera Nacional hacia el Este, a una distancia de tres (3) millas y media, aproximadamente, hasta el punto de partida. Queda excluida de dicha extensión de terreno la casa de campo y su cerca inmediata que quedan adyacentes al campo de aterrizaje.
13. Sitio solicitado en parte el 11 de octubre de 1940 y la parte restante el 17 de enero de 1942, situado en Chame, Provincia de Panamá. Cabida: trescientas setenta y dos hectáreas con nueve décimo de hectárea (372.9), aproximadamente. Consiste de dos fajas de terreno que se describen así: la primera, o sea la solicitada el 11 de octubre de 1940, es una faja de una cabida aproximada de noventa y dos hectáreas con nueve décimos de hectárea (92.9), situada cerca de la población de Chame a tres mil quinientos (3.500) pies, aproximadamente, al Sur de Bejuco y al Oeste de la Carretera Nacional y adyacente a dicha carretera. La segunda parte, o sea la solicitada el 17 de enero de 1942, es una faja de terreno de una cabida aproximada de doscientos ochenta hectáreas (280.0), situada al Norte y al Oeste de la primera faja de terreno arriba mencionada.
 14. Sitio solicitado el 29 de noviembre de 1941, situado en la Punta de Chame, Provincia de Panamá. Cabida: cincuenta hectáreas (50.0), aproximadamente. Consiste en una faja de terreno de cuatro mil (4.000) pies de ancho, aproximadamente, que se extiende a todo lo largo de la Punta de Chame.
 15. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la isla de Boná, Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente catorce hectáreas con ocho décimos de hectárea (14.8). Consiste en una faja de terreno de trece hectáreas con seis décimos de hectárea (13.6) que comprende toda la parte que se encuentra sobre la línea de cuatrocientos (400) pies de contorno que circunda la isla e incluye el derecho de tránsito de cien (100) pies de ancho desde el lado Norte de dicha parcela hasta la playa, incluyendo también el derecho a fondear en aguas hondas y a depositar cables y líneas de tuberías.
 16. Sitio solicitado en parte el 11 de octubre de 1940 y la parte restante el 17 de enero de 1942, situado en La Chorrera, Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente doscientas sesenta y nueve hectáreas con nueve décimos de hectáreas (269.9).

Consiste en dos extensiones de terreno que se describen así: la primera, o sea la solicitada el 11 de octubre de 1940, tiene una cabida aproximada de sesenta y nueve hectáreas con nueve décimos de hectáreas (69.9) y es una faja situada cerca de milla y media al Sudoeste de la población de La Chorrera y adyacente a la Carretera Nacional. La segunda parte, o sea la solicitada el 17 de enero de 1942, tiene una cabida aproximada de doscientas hectáreas (200.0) y es una faja adyacente al campo de emergencia de aterrizaje de La Chorrera a una (1) milla, aproximadamente, al Sudoeste de la población de La Chorrera.

17. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la isla de Taboga, Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente quince hectárea (15.0), consiste en una parcela de terreno cerca de la cumbre de la isla de Taboga, de forma casi rectangular que tiene, aproximadamente, dos mil (2.000) pies de largo hacia el Este y el Oeste y mil (1.000) pies de ancho hacia el Norte y hacia el Sur y que está adyacente al cerro «El Vigía» circundándolo en parte hacia el Este, Sur y Oeste.
18. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la isla de Taboguilla, Provincia de Panamá. Cabida: ciento cuarenta y siete hectáreas con tres décimos de hectárea (147.3), aproximadamente. Es una extensión de terreno que cubre la totalidad de la isla de Taboguilla a partir de la línea de la bajamar incluyendo el derecho a fondear en aguas hondas y a depositar cables y líneas de tuberías, pero exceptuando de la extensión de tierra mencionada varias parcelas a las que se hace referencia en el mapa respectivo, designándolas como parcela «A», de una cabida de mil ciento cinco hectáreas (1105.0); parcela «B», de una cabida de mil ciento cinco hectáreas (1105.0) y parcela «C», de una cabida de cero punto cuatro décimos de hectárea (0.4), incluyendo el derecho de tránsito de la parcela «A» a la parcela «C», de la parcela «C» a la parcela «B», de la parcela «C» a la línea de la bajamar y de la parcela «C» al Farallón de Tierra. Las parcelas «A», «B» y «C» mencionadas no han sido ocupadas en virtud del presente Convenio.
19. Sitio solicitado en parte el 11 de octubre de 1940 y la parte restante el 17 de enero de 1942, situado en el Corregimiento de Pacora (La Joya), Provincia de Panamá. Cabida: mil setecientas veinte hectáreas con ocho décimos de hectárea (1720.8), aproximadamente. Este sitio consiste de dos extensiones de terreno que se describen así: la primera, o sea la solicitada el 11 de

octubre de 1940, tiene una cabida aproximada de setenta hectáreas (70.0) y está situada entre Tocumen y la población de Pacora, incluyendo un derecho de tránsito de cien (100) pies hasta la Carretera Nacional que conduce a Chepo. La segunda, o sea la solicitada el 17 de enero de 1942, tiene una cabida aproximada de mil seiscientos cincuenta hectáreas (1650.0) y está situada hacia el Sur de la Carretera Nacional y al Oeste de Pacora.

20. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Bahía de Piñas, antigua Provincia del Darién, hoy Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente ocho hectáreas con nueve décimos de hectárea (8.9). Consiste en una faja de terreno que mide, aproximadamente, trescientos (300) pies por tres mil ochenta y tres (3.083) pies, situada en la Punta de Jaqué, incluyendo el derecho a fondear en aguas hondas y a depositar cables y líneas de tuberías.
21. Sitio solicitado en parte el 11 de octubre de 1940 y la parte restante el 19 de diciembre de 1941, situado en Jaqué, antigua Provincia del Darién, hoy Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente cuatrocientas setenta y tres hectáreas con dos décimos de hectárea (473.2). Consiste de dos extensiones de terreno que se describen así: la primera, o sea la solicitada el 11 de octubre de 1940, tiene una cabida aproximada de ciento cincuenta y seis hectáreas con ocho décimos de hectárea (156.8) y está situada en la Bahía de Piñas cerca de la Punta de Jaqué e incluye el derecho a fondear en aguas hondas y a depositar cables y líneas de tuberías. La segunda, o sea la solicitada el 19 de diciembre de 1941, tiene una cabida aproximada de trescientos diez y seis hectáreas con cuatro décimos de hectárea (316.4) y consiste en una faja de terreno adyacente a la primera.
22. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en Pinogana, antigua Provincia del Darién, hoy Provincia de Panamá. Cabida: diez hectáreas con tres décimos de hectárea (10.3), aproximadamente. Consiste en una parcela de tierra en forma casi triangular en la ribera izquierda del Río Tuira e incluye el derecho a fondear en aguas hondas y a depositar cables y líneas de tuberías.
23. Sitio solicitado en parte el 11 de octubre de 1940 y la parte restante el 17 de enero de 1942, situado en Puerto Obaldía, Comarca de San Blas. Cabida: cuarenta hectáreas con ocho décimos de hectárea (40.8), aproximadamente. Consiste en dos parcelas de terreno que se describen así: la primera, o sea la

- solicitada el 11 de octubre de 1940, tiene una cabida aproximada de veinte y cuatro hectáreas con ocho décimos de hectárea (24.8) y mide, aproximadamente, trescientos (300) pies por novecientos (900) pies, situada cerca de puerto Obaldía e incluye el derecho a fondear en aguas hondas y a depositar cables y líneas de tubería. La segunda, o sea la solicitada el 17 de enero de 1942, tiene una cabida aproximada de diez y seis hectáreas (16.0) y comprende una faja a lo largo de la playa y al Norte de la población de Puerto Obaldía.
24. Sitio solicitado el 27 de enero de 1942, situado en la Comarca de San Blas (Punta de San Blas). Cabida: quince hectáreas con cuatro décimos de hectárea (15.4), aproximadamente. Está situado al extremo de la Punta de San Blas al borde de la Bahía de mandinga e incluye el acceso al muelle.
 25. Sitio solicitado el 17 de enero de 1942, situado en la Comarca de San Blas. Cabida: doscientas veinte hectáreas (220.0), aproximadamente y consiste en una extensión de terreno cerca del golfo de Mandinga a media milla hacia tierra adentro y al Sudeste del muelle.
 26. Sitio solicitado el 17 de enero de 1942, situado en el Lago Madden, Provincia de Panamá. Cabida: doscientas quince hectáreas (215.0), aproximadamente. Consiste en una extensión de terreno de una milla, aproximadamente, al Oeste y al Sudeste de Calzada Larga.
 27. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en Almirante, Provincia de Bocas del Toro. Cabida: quince hectáreas con cinco décimos de hectárea (15.5), aproximadamente. Consiste en una faja de terreno que mide, aproximadamente, trescientos (300) pies por cinco mil trescientos treinta (5.330) pies sobre la estrecha línea de rieles de trece (13) millas desde Almirante hacia tierra adentro.
 28. Sitio solicitado el 1 de abril de 1942, situado en Chepo, Provincia de Panamá. Cabida: media hectárea (1/2), aproximadamente. Consiste en una parcela de terreno a ciento diez y siete (117) pies de altura de una extensión aproximada de un tercio de milla en dirección sur de la población de Chepo.
 29. Sitio solicitado el 1 de abril de 1942, situado en Coclé del Norte, Provincia de Coclé. Cabida: media hectárea (1/2), aproximadamente. Consiste en una parcela de terreno cercana a la estación de observación que está en operación en Coclé del Norte.
 30. Sitio solicitado el 1 de abril de 1942, situado en las cercanías de

- Divisa, Provincia de Veraguas. Cabida: media hectárea (1/2), aproximadamente. Consiste en una parcela situada cerca de una (1) milla de los cerros hacia el Este de la población de Santa María y trescientas (300) yardas al Norte del camino a Chitré.
31. Sitio solicitado el 1 de abril de 1942, situado en las cercanías de Pacora, Provincia de Panamá. Cabida: media hectárea (1/2), aproximadamente. Consiste en una parcela de terreno a ciento cincuenta (150) yardas aproximadamente, al Sur de la carretera de Panamá a Pacora.
 32. Sitio solicitado el 17 de marzo de 1942, situado en la isla del Rey del Archipiélago de las Perlas. Cabida: una hectárea (1.0), aproximadamente. Consiste en una parcela de terreno a mil (1.000) pies aproximadamente de la extremidad Sur de la isla del Rey.
 33. Sitio solicitado el 17 de marzo de 1942, situado en el Corregimiento de Río Hato, Provincia de Coclé. Cabida: una hectárea (1.0), aproximadamente. Consiste en una parcela de terreno a ocho décimos de milla, aproximadamente, de la intersección entre la antigua carretera nacional y la nueva carretera de concreto.
 34. Sitio solicitado el 6 de mayo de 1942, situado en la isla de Taboga, Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente quince hectáreas (15.0). Está situado en la sección denominada La Restinga, llegando hasta la playa e incluyendo el uso del mar y la construcción de muelles y demás accesorios requeridos.
 35. Sitio solicitado el 4 de mayo de 1942, situado en la vecindad de Punta Portogandi, Comarca De San Blas. Cabida: aproximadamente tres hectáreas (3.0).
 36. Sitio solicitado el 4 de mayo de 1942, situado en la vecindad del Río Pacora, Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente tres hectáreas (3.0). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a cinco (5) millas al Noreste de la población de Pacora.
 37. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la provincia de Colón. Cabida: aproximadamente trece hectáreas con siete décimos de hectárea (13.7). Consiste en un trecho de aproximadamente tres cuartos de milla desde la carretera transistmica cerca de Cativá, con servidumbre de tránsito de cien (100) pies hasta la carretera.
 38. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Colón. Cabida: aproximadamente doce hectáreas con un décimo de hectárea (12.1). Consiste en un trecho de aproximadamente media milla desde el camino de transporte A-3 cerca de Río Salina, con cien (100) pies de servidumbre de

tránsito hasta la carretera.

39. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Colón. Cabida: aproximadamente diez hectáreas con un décimo de hectárea (10.1). Consiste en un trecho en el proyectado camino de transporte A-3, aproximadamente una milla al Norte de Río Arriero.
40. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Colón. Cabida: aproximadamente veinte y siete hectáreas con seis décimos de hectárea (27.6). Consiste en un trecho de aproximadamente cuatro (4) millas desde el proyectado camino de transporte A-3, cerca del nacimiento del Río Quebrado Chunga, con derecho a cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia el camino.
41. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Colón. Cabida: aproximadamente diez y ocho hectáreas con seis décimos de hectárea (18.6). Consiste en un trecho de aproximadamente dos (2) millas desde la proyectada carretera de transporte A-3 cerca del nacimiento de Río Arriero y el límite con la Zona del Canal, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia el camino.
42. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Colón. Cabida: aproximadamente once hectáreas con seis décimos de hectárea (11.6). Consiste en un trecho de aproximadamente cero punto tres décimos de milla desde la proyectada carretera transistmica, cerca de Camp Young, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hasta la carretera y el lago Gatún.
43. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Colón. Cabida: aproximadamente quince hectáreas con nueve décimos de hectárea (15.9). Consiste en un trecho de cerca de una (1) milla desde el Lago Gatún cerca de Quebrada Media, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia el Lago.
44. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Colón. Cabida: aproximadamente quince hectáreas (15.0). Consiste en una parcela de terreno cerca de Nuevo Chagres, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hasta Lagarto.
45. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Colón. Cabida: aproximadamente veinte y cuatro hectáreas con siete décimos de hectárea (24.7). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a dos (2) millas al Sur de Lagarto, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hasta tocar el proyectado camino que conduce al sitio 44.

46. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la provincia de Colón. Cabida: aproximadamente veinte y cuatro hectáreas con siete décimos de hectárea (24.7). Consiste en una parcela de terreno cerca de Loma Rancho, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hasta tocar el proyectado camino que conduce al sitio 45.
47. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Colón. Cabida: aproximadamente diez y nueve hectáreas con ocho décimos de hectárea (19.8). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a una (1) milla con cinco décimos de milla al Norte de Cerro Ullama, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hasta el Lago Gatún.
48. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la provincia de Colón. Cabida: aproximadamente quince hectáreas (15.0). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a una (1) milla con cinco décimos de milla tierra adentro del desembarcadero de yerba Verde en el Lago Gatún, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hasta el Lago.
49. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Colón. Cabida: aproximadamente doce hectáreas con cinco décimos de hectárea (12.5). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a una (1) milla al Sur de Escobal, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hasta el Lago Gatún.
50. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la provincia de Colón. Cabida: aproximadamente doce hectáreas con cinco décimos de hectárea (12.5). Consiste en una parcela de terreno cerca de la desembocadura de Quebrada Larga, media milla al Este del límite con la Zona del Canal, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia Quebrada Larga.
51. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Colón. Cabida: aproximadamente doce hectáreas con cinco décimos de hectárea (12.5). Consiste en una parcela de terreno cerca de la desembocadura de Río Jobo, con derecho a cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia el Lago Gatún.
52. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Colón. Cabida: aproximadamente quince hectáreas (15.0). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a una (1) milla al Sur de Santa Rita y a una (1) milla al Este de la proyectada carretera Transistmica, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia la carretera.
53. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la provincia

- de Colón. Cabida: aproximadamente diez y nueve hectáreas con ocho décimos de hectárea (19.8). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a una (1) milla con cinco décimos de milla al Este de Puerto Real, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia la proyectada carretera transistmica.
54. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Colón. Cabida: aproximadamente doce hectáreas con cinco décimos de hectárea (12.5). Consiste en una parcela de terreno cerca del cruce de Río Viejo y la proyectada carretera hacia Porto Bello (Belo), con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia la carretera.
 55. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Colón. Cabida: aproximadamente diez y ocho hectáreas con cinco décimos de hectáreas (18.5). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a dos (2) millas con tres décimos de milla rumbo al Sudeste del pueblo de Piña entre Río Paulina y Río Medio, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia el proyectado camino de transporte A-3.
 56. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente doce hectáreas con cinco décimos de hectárea (12.5). Consiste en una parcela de terreno en el extremo Sudeste de la isla de Taboga.
 57. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente diez hectáreas con un décimo de hectárea (10.1). Consiste en una parcela de terreno en la isla de Melones.
 58. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente quince hectáreas (15.0). Consiste en una parcela de terreno en Punta Vique, e incluye el derecho a fondear en aguas hondas y a depositar cables y líneas de tuberías.
 59. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente catorce hectáreas (14.0). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a cuatro mil (4.000) pies al Este del proyectado camino P-8, cerca del cruce de Río Chilibre y Quebrada Ancha, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia el camino.
 60. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente diez y ocho hectáreas con un décimo de hectárea (18.1). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a dos (2) millas al Norte de la

- Carrètera nacional donde ésta cruza el Río Aguacate, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia la carretera.
61. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente catorce hectáreas con dos décimos de hectárea (14.2). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a cuatro mil quinientos (4.500) pies al Este del proyectado camino de tránsito P-8, cerca de la Tinajita, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia el camino.
 62. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente doce hectáreas con tres décimos de hectárea (12.5). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a dos mil trescientos (2.300) pies al Este del proyectado camino de transporte P-8, cerca de Santa Rita, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia el camino.
 63. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente diez y ocho hectáreas con nueve décimos de hectárea (18.9). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a dos (2) millas al Sur de la Carretera Nacional cerca de Rancho Vique con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia la carretera.
 64. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente catorce hectáreas con dos décimos de hectárea (14.2). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a cuatro mil trescientos (4.300) pies rumbo al Sudoeste del proyectado camino de transporte P-8, en el Cerro de Peñoncita, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia el camino.
 65. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente diez hectáreas con un décimo de hectárea (10.1). Consiste en una parcela de terreno cerca de Panamá Viejo.
 66. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente doce hectáreas con cinco décimos de hectárea (12.5). Consiste en una parcela de terreno cerca de Paja en el camino Empire-Paja, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia el camino.
 67. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente quince hectáreas (15.0). Consiste en una parcela de terreno en la isla de Taboguilla.
 68. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente diez hectáreas con

- un décimo de hectárea. Consiste en una parcela de terreno en la Carretera Nacional, cerca del cruce del Río Aguacate.
69. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente trece hectáreas con siete décimos de hectárea (13.7). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a una (1) milla al Norte de Río Abajo, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia el camino de Río Abajo.
 70. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente doce hectáreas con cinco décimos de hectárea (12.5). Consiste en una parcela de terreno cerca de Pueblo Nuevo, con servidumbre de tránsito en cien (100) pies hasta el camino de Pueblo Nuevo.
 71. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente once hectáreas con tres décimos de hectárea (11.3). Consiste en una parcela de terreno cerca de Nuevo San Francisco, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia la Carretera Nacional.
 72. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente quince hectáreas (15.0). Consiste en una parcela de terreno en Punta Vaquita, aproximadamente una (1) milla al interior, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia la costa con derecho a fondear en aguas hondas y a depositar cables y líneas de tuberías.
 73. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente diez y nueve hectáreas con ocho décimos de hectárea (19.8). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a tres cuartos de milla al Noroeste de Puerto Padre, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia la Carretera Nacional.
 74. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente doce hectáreas con cinco décimos de hectárea (12.5). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a media (1/2) milla al Norte de la Carretera Nacional al Oeste del Río Berdino, cerca de San José, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia la Carretera.
 75. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente doce hectáreas con cinco décimos de hectárea (12.5). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a media (1/2) milla al Oeste del camino Empire-Paja, cerca de Congo, con cien (100) pies de ser-

- vidumbre de tránsito hacia la Carretera.
76. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente veinte y cuatro hectáreas con siete décimos de hectárea (24.7). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a dos (2) millas y tres cuartos de milla al Noroeste de Paja y al Oeste de Río Paja, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia el límite de la Zona del Canal.
 77. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente quince hectáreas (15.0). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente una (1) milla al Este del camino de la Represa Madden, cerca del cruce del Río Chilibre, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia el camino de la Represa Madden.
 78. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente veinte y cuatro hectáreas con siete décimos de hectárea (24.7). Consiste en una parcela de terreno cerca del nacimiento de la Quebrada Federico con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia el proyectado camino de transporte P-8.
 79. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente veinte y cuatro hectáreas con siete décimos de hectárea (24.7). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a tres cuartos de milla al Sur de Laguna, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hasta llegar al camino que conduce al sitio 78.
 80. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente diez y nueve hectáreas con ocho décimos de hectárea (19.8). Consiste en una parcela de terreno aproximadamente a una (1) milla al Norte de Cerro Viento, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia la Carretera Nacional que conduce a Chepo.
 81. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente quince hectáreas (15.0). Consiste en una parcela de terreno cerca de San Antón, con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hacia la Carretera Nacional que conduce a Chepo.
 82. Sitio solicitado el 11 de octubre de 1940, situado en la Provincia de Panamá. Cabida: veinte y dos hectáreas con tres décimos de hectárea (22.3). Consiste en una parcela de terreno en Cerro Ventana cerca de dos (2) millas y media (1/2) al Oeste

del proyectado camino de transporte P-8 con cien (100) pies de servidumbre de tránsito hasta el camino.

83. Sitio solicitado el 20 de abril de 1942, situado cerca del lago Madden, Provincia de Panamá. Cabida: aproximadamente cinco hectáreas con cinco décimos de hectárea (5.5). Esta parcela de terreno se encuentra situada diez (10) millas al oeste del lago Madden y cerca de dos (2) millas al Norte de Río Agua Sucia y a quinientas (500) yardas al Noroeste de la carretera Transistmica. (Queda entendido que la expresión «fondear en aguas hondas» incluye el derecho a construir muelles).

* * * * *

La cabida de todos y cada uno de los sitios de defensa mencionados en este memorándum, así como la descripción de los mismos son aproximadas, hasta tanto se efectúe la medición y verificación completa de estas cabidas y descripciones en forma tal que permita expresar su descripción y extensión definitivas.

Hasta tanto se verifiquen esas mediciones el canon de arrendamiento a que se refiere el Artículo XII del Convenio de esta misma fecha, será liquidado y pagado a base de las dimensiones y descripciones que aparecen en el presente Memorándum, siendo entendido que, al efectuarse la verificación de los mismos, se harán las liquidaciones, devoluciones o reintegros que sean necesarios.

En fe de lo cual se suscribe el presente Memorándum en duplicado, en español y en inglés, en Panamá a los diez y ocho días del mes de mayo de 1942.

A nombre y en representación del Gobierno de la República de Panamá,

Octavio Fábrega,
Ministro de Relaciones Exteriores.

A nombre y en representación del Gobierno de los Estados Unidos de América,

Edwin C. Wilson,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de los Estados Unidos de América.

PANAMÁ, 18 DE MAYO DE 1942.

**SITIOS DE DEFENSA
SOLICITADOS DESPUÉS DEL 18 DE MAYO DE 1942***

1. Sitio solicitado el 26 de mayo de 1942, situado en la provincia de Colón. Cabida: aproximadamente quince hectáreas con nueve décimos de hectárea (15.9). Este sitio es para sustituir el que figura en el Memorándum con el No. 43.
2. Sitio solicitado el 9 de junio de 1942, situado en la Comarca de San Blas. Cabida: aproximadamente una hectárea (1). Incluyendo el derecho de fondear en aguas hondas y a depositar líneas de tuberías.
3. Sitio solicitado el 12 de junio de 1942, situado en la Isla del Rey, Archipiélago de las Perlas. Cabida: aproximadamente cincuenta (50) hectáreas. Este sitio es para ensanchar el que figura en el Memorándum con el No. 32.
4. Sitio solicitado el 18 de junio de 1942, situado en la Isla de Taboga. Cabida: aproximadamente media (.5) hectárea.
5. Sitio solicitado el 30 de junio de 1942, situado en Chame. Cabida: aproximadamente ciento sesenta y siete (167) hectáreas. Esta área es para ensanchar la que figura en el Memorándum con el No. 13.
6. Sitio solicitado el 8 de julio de 1942, situado en el Lago Madden. Cabida: aproximadamente trescientas setenta y cinco (375) hectáreas. Esta área es para ensanchar la que figura en el Memorándum con el No. 26.
7. Sitio solicitado el 8 de julio de 1942, cercano a Juan Díaz. Cabida: aproximadamente tres (3) hectáreas.
8. Sitio solicitado el 8 de julio de 1942, (por medio de la misma nota en que se solicitó el que precede), cercano a San José. Cabida: aproximadamente tres (3) hectáreas.
9. Sitio solicitado el 4 de agosto de 1942, situado en la vecindad de El Real, Darién. Cabida: aproximadamente 9.92 hectáreas, con derecho a servidumbre para tener acceso.
10. Sitio solicitado el 4 de agosto de 1942, situado en la Isla de Taboga. Cabida: aproximadamente siete hectáreas con siete décimos de hectáreas, más dos hectáreas con cinco décimos (2.5) para el camino de acceso.
11. Sitio solicitado el 12 de agosto de 1942, situado en la provincia

* *Op. cit.*

de Colón. Cabida: aproximadamente nueve (9) hectáreas. Está justamente afuera de la Carretera Transistmica y a quinientos (500) pies del puente sobre el Río Gatuncillo. También dos centésimos de hectárea (.02) de hectárea para camino de acceso a la carretera.

12. Sitio solicitado el 9 de septiembre de 1942, para reinstalar la posición de reflectores registrada en el memorándum con el No. 68. Cabida: aproximadamente cinco hectáreas y tres décimos de hectárea (5.3). Esto incluiría un camino de acceso desde la Carretera Nacional, con una cabida de aproximadamente ocho décimos (.8) de hectárea.
13. Sitio solicitado el 14 de septiembre de 1942, de una parcela para adicionarla al sitio situado en Juan Díaz. Cabida: aproximadamente dos hectáreas y media (2-1/2).
14. Sitio solicitado el 21 de julio de 1942, situado en la Campana. (No hay información sobre la cabida).
15. Sitio solicitado el 24 de septiembre de 1942, situado en la Isla de Urabá. Cabida: aproximadamente cuatro (4) hectáreas, que incluiría un camino de acceso.
16. Sitio solicitado el 6 de octubre de 1942, situado en la Isla de Chepillo. Cabida: aproximadamente una hectárea con cinco décimos (1.5).
17. Sitio solicitado el 12 de octubre de 1942, para ensanchar el sitio situado en Juan Díaz. Cabida: aproximadamente una (1) hectárea.
18. Sitio solicitado el 29 de octubre de 1942, situado en Santiago de Veraguas. Cabida: aproximada: seis y media (6-1/2) hectáreas, de las cuales una y media (1-1/2) hectáreas son para un camino de acceso.
19. Sitios solicitados el 9 de noviembre de 1942, situados en:
Alegandi, en la Comarca de San Blas. Cabida: aproximadamente seis y media (6-1/2) hectáreas. De éstas, dos (2) hectáreas son para un camino de acceso. (20) David, en la Provincia de Chiriquí. Cabida: seis (6) hectáreas, de las cuales una (1) es para un camino de acceso. (21) Isla Grande, con una cabida de cinco (5) hectáreas, de las cuales una (1) es para un camino de acceso. Con derecho a establecer muelles y a instalar cables y líneas de tuberías. (22) Península Valiente, con una cabida de seis y media hectáreas, de las cuales una y media (1-1/2) son para un camino de acceso. Con derecho para establecer muelles y a instalar cables y líneas de tuberías.

23. Sitios solicitados el 5 de noviembre de 1942, situados en: Río Gatuncillo, con una cabida de aproximadamente once (11) hectáreas, de las cuales una sería para un camino de acceso. (24) Santa Rosa, con una cabida de aproximadamente tres y media (3-1/2) hectáreas, de las cuales media (1/2) es para un camino de acceso.
25. Sitio solicitado el 19 de noviembre de 1942, situado en Río Pito, Comarca de San Blas. Cabida: aproximadamente trescientas cincuenta (350) hectáreas.
26. Sitio solicitado el 23 de noviembre de 1942, situado en Estero de Lagarterito, con cabida de aproximadamente seis y media (6-1/2) hectáreas, de las cuales media (1/2) hectárea es para un camino de acceso.
27. Sitio solicitado el 23 de noviembre de 1942, situado en Río Agua Sucia, en la Provincia de Colón, con una cabida de aproximadamente cinco hectáreas y media (5-1/2), de las cuales (1/2) media hectárea es para un camino de acceso.
28. Sitio solicitado el 23 de noviembre de 1942, situado en Río Pescado, Provincia de Panamá, con una cabida de aproximadamente seis y media hectáreas (6-1/2), de las cuales una y media hectárea (1-1/2) se necesitan para un camino de acceso.

Miguel J. Moreno Jr.,

Segundo Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores,

CERTIFICA: que los anteriores datos son tomados de las notas correspondientes.

Expedido en Panamá, el día treinta de abril de mil novecientos cuarenta y tres.



9
Compensaciones económicas*
(18 de mayo de 1942)

ANEXO «E»
CONVENIO SOBRE COMPENSACIONES*
(Canje de Notas)
(Traducción)

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Washington, D.C.

Mayo, 18 de 1942.

Excelencia:

Tengo el honor de referirme al memorándum que el Embajador de Panamá entregó al Presidente de los Estados Unidos el 18 de febrero de 1941, y a la memoranda del Departamento, de julio 8, julio 18 y diciembre 2 de 1941 en respuesta a aquél, referentes a doce puntos en las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, con respecto a los cuales se solicitó acción positiva por parte de este Gobierno.

Las negociaciones subsiguientes han conducido felizmente a acuerdo entre nuestros Gobiernos sobre todos esos puntos, tengo entendido, en la forma siguiente:

1. Obras hidráulicas en Colón y Panamá

Cuando la autorización del Congreso de los Estados Unidos haya sido obtenida, el Gobierno de los Estados Unidos traspasará al Gobierno de la República de Panamá libre de gastos todos sus derechos, títulos e intereses del sistema de alcantarillado y acueductos en las ciudades de Panamá y Colón.

En esa fecha Estados Unidos renunciará los derechos que obtuvo en el parágrafo primero del Artículo VII del Convenio entre Estados Unidos y la República de Panamá firmado en Washington el 18 de Noviembre de 1903 tal como quedó modificado por el

* Ministerio de Relaciones Exteriores. MEMORIA. Panamá, 1943, pp. 361-369.

artículo VI del Tratado entre Estados Unidos y Panamá firmado en Washington el 2 de marzo de 1936, de adquirir tierras, edificios, derechos de aguas u otras propiedades necesarias para los fines de sanidad, tales como la recolección y disposición de despojos y la distribución del agua en las ciudades de Panamá y Colón. Estados Unidos renunciará así mismo la autorización contenida en el Artículo VII del antes mencionado convenio de 1903, de imponer y cobrar tarifas de agua y alcantarillado en esas ciudades, que será suficiente para proveer al pago de los intereses y amortizaciones del costo principal de dichas obras. Queda entendido que no habrá reembolso para Panamá de los pagos de intereses o amortizaciones o de los cargos de cualquier clase basados en el Convenio de 1903 y en los contratos del 30 de septiembre de 1910.

Si el Gobierno de Panamá así lo desea, las ciudades de Panamá y Colón pueden continuar recibiendo abastecimientos de agua de la Zona del Canal en las salidas que se encuentran en el límite de la zona del Canal a un precio razonable que acuerden los dos Gobiernos.

De igual manera, si el Gobierno de Panamá así lo desea, las ciudades de Panamá y Colón pueden continuar usando en las condiciones actuales y con las facilidades disponibles, los servicios de alcantarillados de la zona del Canal. El precio del agua que se acuerde incluirá el costo de estos servicios.

Si en cualquier momento el Gobierno de la República de Panamá desea renunciar en parte el uso del suministro de agua y las facilidades de alcantarillado de la Zona del Canal antes referidos, los dos Gobiernos acordarán la suma que ha de pagar la República de Panamá por el uso de las facilidades que desee retener.

Queda entendida que a los empleados del Canal de Panamá y de la Compañía del Ferrocarril de Panamá residentes en la República de Panamá no se les cobrará mayor precio de agua que el que se cobra a los otros residentes de Panamá y Colón, respectivamente, por servicios similares.

Debe indicarse que la entrega al Gobierno de la República de Panamá de las propiedades físicas de los sistemas de acueducto y alcantarillado y la administración de los mismos, incluyendo el cobro de las tarifas del agua no modifica en forma alguna el acuerdo existente por la responsabilidad de los servicios de salubridad pública en las ciudades de Panamá y Colón, como se especifica en el parágrafo segundo del Artículo VII del Convenio entre los Estados Unidos de América y Panamá, firmado en Washington el 18 de

Noviembre de 1903. Así, pues, la República de Panamá continuará pagando solamente el coto de las medidas sanitarias por las cuales ha sido responsable en el pasado.

Este Gobierno, al continuar manteniendo los servicios de salubridad en las ciudades de Panamá y Colón, confía en que el Gobierno de la República de Panamá cooperará plenamente con los respectivos funcionarios de la zona del Canal en la realización del acuerdo referente a la mayor participación de personal panameño en las actividades de sanidad en esas ciudades, tal como se estableció en el canje de notas que acompañó al Tratado General de 2 de marzo de 1936, que a su vez se refiere a la proposición anterior de octubre de 1931.

2. Lotes del Ferrocarril en Panamá y Colón

El Presidente pedirá la autorización del Congreso de los Estados Unidos para traspasar a la República de Panamá, libre de gastos, todos sus derechos, títulos e intereses sobre las tierras pertenecientes a la Compañía del Ferrocarril de Panamá, o de las cuales tiene ésta el usufructo en las ciudades de Panamá y Colón, y que no se necesiten en el presente o en el futuro para el mantenimiento, operación, sanidad y protección del Canal de Panamá o sus obras auxiliares o para el funcionamiento del ferrocarril de Panamá. La Compañía del Ferrocarril de Panamá traspasará a la República de Panamá las tierras que posee en la parte de la Isla de Manzanillo situada en el área limitada por una línea descrita como sigue: (Véase copia del mapa M-5038-3 transmitida con el memorándum del Departamento, de 8 de julio de 1941).

Comenzando en el punto donde la línea limítrofe de la Zona del Canal con la ciudad de Colón cruza la línea de la orilla occidental del brazo de la Bahía de Manzanillo conocido con el nombre de "Boca Chica" o "Folks River"; de allí sigue la línea limítrofe de la Zona del Canal con la ciudad de Colón en la dirección Norte de la Calle Once, y en dirección Oeste sobre la Calle Once al centro de la Avenida del Frente; de allí hacia el Norte a lo largo del centro de la Avenida del Frente y su prolongación al centro de la Calle Segunda; de allí hacia el Este a lo largo del centro de la Calle Segunda al centro de la Avenida Bolívar; de allí hacia el Norte a lo largo del centro de la Avenida Bolívar por una distancia de 222 pies, más o menos; de allí hacia el Este, aproximadamente paralela a la Calle Segunda y siguiendo generalmente una acera existente al centro del Paseo del Centenario (Avenida Central); de allí hacia el Sur a lo

largo del centro del Paseo del Centenario (Avenida Central); por una distancia de 71 pies, más o menos, a un punto opuesto a la prolongación de una cerca "contra ciclones" que constituye el lindero Sur del campo de juegos de la Escuela de Cristóbal; de allí, hacia el Este, hacia el Norte y hacia el Noreste, a, y a lo largo de la cerca mencionada y su prolongación al centro del palmar; de allí hacia el Este a lo largo del centro de la Calle Segunda al centro de la Avenida Meléndez (calle "G"); de allí hacia el Sur a lo largo de la Avenida Meléndez (Calle "G") al centro de la Calle Séptima; de allí hacia el Este a lo largo del centro de la Calle Séptima al centro de la Avenida de Roosevelt; de allí hacia el Sur a lo largo del centro de la Avenida de Roosevelt al centro de la Calle Novena; de allí hacia el Este a lo largo del centro de la Calle Novena y su prolongación a la línea limítrofe de la Zona del Canal con la ciudad de Colón a la línea media de marea baja sobre la orilla occidental de la Bahía de Manzanillo; de allí siguiendo a lo largo de la antes mencionada línea limítrofe en una dirección Sur y Oeste a un punto donde dicha línea limítrofe cruza la prolongación del borde del cordón de la acera sobre el lado occidental de la Avenida Meléndez (Calle "G"); de allí hacia el Norte a lo largo de dicha prolongación y del borde del cordón de la acera en el lado occidental de la Avenida Meléndez (Calle "G") hasta su intersección con el borde del cordón de acera del lado Sur de la prolongación de la Calle Dieciséis; de allí hacia el Oeste y hacia el Sur a lo largo del borde del cordón de la acera del lado Sur de la prolongación de la Calle Dieciséis a su intersección con la línea del centro de la prolongación de la Avenida Domingo Díaz a su intersección con la línea limítrofe de la Zona del Canal y la ciudad de Colón a la línea media de marea baja en la orilla Norte de Folks River; de allí hacia el Oeste y hacia el Sur a lo largo de dicha línea limítrofe hasta el punto de partida, exceptuando, sin embargo, el lote No. 22, de la cuadra No. 26 como aparece en el diseño del Canal de Panamá S 6104-78, hoja 65, y el lote No. 1189, como aparece en el diseño del Canal de Panamá S 6104-78, hoja 16, que están ubicados dentro del área antes descrita.

La Compañía del Ferrocarril de Panamá retendrá en la ciudad de Panamá como área necesaria para su funcionamiento las tierras actualmente ocupadas por sus estaciones terminales para pasajeros y carga con sus respectivos rieles y patios. Las áreas restantes que ahora posee la Compañía del Ferrocarril de Panamá en la ciudad de Panamá serán traspasadas a la República de Pa-

namá. (Véase copia del mapa transmitido con el memorándum del Departamento, de 8 de julio de 1941).

3. Los comisariatos y *post exchanges*

El Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la República de Panamá, de acuerdo con el canje de notas que acompañaron al Tratado entre ellos firmado el 2 de marzo de 1936, "continuarán cooperando por todos los medios posibles... para impedir el contrabando al territorio bajo la jurisdicción de la República de artículos importados a la Zona del Canal", y con tal objeto se acuerda que el Gobernador del Canal de Panamá nombrará un representante que ha de reunirse con un representante nombrado por el Gobierno de la República para que haya oportunidad regular y continua de entrevistas y cambios de puntos de vista sobre esta cuestión.

4. La construcción de un túnel o un puente que permita el tránsito por debajo o sobre el Canal en Balboa

El Gobierno de los Estados Unidos está bien enterado de la importancia que tiene para el Gobierno y el pueblo de Panamá la constante y rápida comunicación a través del Canal de Panamá en Balboa y está dispuesto a convenir en la construcción de un túnel por debajo o un puente sobre el Canal en ese punto, cuando haya terminado la presente emergencia. Mientras esté pendiente la realización de este proyecto, el Gobierno de los Estados Unidos dará urgente atención, compatible con las exigencias de la presente emergencia, al mejoramiento del actual servicio de ferry.

5. Jurisdicción sobre los caminos y carreteras en territorio de la República de Panamá

Estados Unidos completará la construcción, a su propia costa, de las carreteras descritas a continuación, bajo las condiciones y con los materiales especificados:

Carretera A-3. (Se extenderá desde Piña en el lado Atlántico del Istmo a la línea limítrofe de la Zona del Canal en Río Providencia. Será de lo menos diez pies de ancho, y construida de macadam).

Extensión de la Carretera Transistmica siguiendo la línea del camino P-8 (Las especificaciones serán las mismas de la Carretera Transistmica. La extensión comenzará en Madrinal, derivando la Represa Madden por un puente sobre el Río Chagres debajo de la Represa para conectarse con el camino P-8 desde Pueblo Nuevo

hasta la ciudad de Panamá. Queda entendido que el pavimento del puente sobre el Río Chagres estará situado por encima de la elevación establecida como límite de la Zona del Canal).

A la terminación de estas carreteras, el Gobierno de los Estados Unidos asumirá la responsabilidad por cualesquiera operaciones post-construcción, es decir, la ejecución del trabajo necesario para perfeccionar la construcción original hasta tanto los caminos queden estabilizados.

El Gobierno de Panamá garantiza que todos los caminos bajo su jurisdicción que usan periódica o frecuentemente las fuerzas de los Estados Unidos estarán bien y apropiadamente mantenidos en todo tiempo. El Gobierno de Panamá solicitará la cooperación del Gobierno de los Estados Unidos en la ejecución de trabajos de reparación y mantenimiento sobre dichos caminos cuando quiera que estime necesaria esa cooperación a fin de cumplir las garantías anteriormente mencionadas, como por ejemplo en el caso de emergencias o situaciones que requieran una pronta acción.

El Gobierno de los Estados Unidos aportará un tercio del total anual del costo del mantenimiento de todos los caminos panameños usados periódica o frecuentemente por las fuerzas armadas de los Estados Unidos, costo que cubrirá los gastos por deterioro o daño a los caminos, causados por movimientos relacionados con las actividades de defensa. La suma que deberá pagar Estados Unidos se basará en las cuentas presentadas anualmente por la República de Panamá en que se dará en detalle el total de los gastos anuales hechos por ella en cada carretera usada periódica o frecuentemente por las fuerzas de los Estados Unidos y en las cuentas asimismo presentadas por el Gobierno de los Estados Unidos en que se dará en detalle similar los gastos hechos por el Gobierno en respuesta a solicitudes del Gobierno de Panamá, como queda antes establecido. En el caso de que el Gobierno de los Estados Unidos haya prestado cooperación en el mantenimiento de dichos caminos, los gastos en que incurra dicho Gobierno debido a ello serán acreditados a la parte correspondiente a Estados Unidos en el mantenimiento total de los caminos bajo la jurisdicción de Panamá.

En consideración de las anteriores obligaciones y responsabilidades de los Estados Unidos, el Gobierno de la República de Panamá concede el derecho de tránsito para el movimiento de rutina de los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, los miembros civiles de tales fuerzas y sus familias, así como los ani-

males, vehículos de tracción animal y de motor empleados por las fuerzas armadas o por los contratistas empleados por ellos para los trabajos de construcción u otros cuyas actividades se relacionen en alguna forma con el programa de defensa, por los caminos construidos por Estados Unidos en territorio bajo la jurisdicción de la República de Panamá, y en las otras carreteras nacionales que ponen a la Zona del Canal en comunicación con las áreas de defensa, y a estas últimas entre sí. Debe tenerse por entendido que Estados Unidos tomará en todo momento las precauciones necesarias para evitar, si es posible, las interrupciones del tránsito en la República de Panamá.

Todos los caminos construidos por Estados Unidos en territorio bajo la jurisdicción de Panamá. En cuanto a los caminos secundarios construidos por Estados Unidos con el objeto de dar acceso a cualquier sitio de defensa, Panamá concede a las autoridades militares de los Estados Unidos el derecho de restringir o prohibir el tránsito público por esos caminos dentro de una distancia razonable de tales sitios, si esa restricción o prohibición es necesaria para la protección militar de esos sitios. Queda entendido que tal restricción o prohibición es sin perjuicio del libre acceso a los habitantes establecidos dentro de las áreas restringidas, a sus respectivas propiedades. Es entendido también que tal restricción o prohibición no se ejercerá en parte alguna de ninguna carretera principal.

6. Trabajo para la Zona del Canal

El Gobierno de los Estados Unidos está enterado de la política de inmigración de la República de Panamá según dispone el Artículo XXIII de la Constitución de esa República, promulgada el 2 de enero de 1941, y aunque la jurisdicción sobre inmigración a la Zona del Canal incumbe exclusivamente al Gobierno de los Estados, ese Gobierno cooperará hasta donde sea factible bajo las presentes circunstancias a amoldarse a la expresada política de Panamá en este asunto. Específicamente el Gobierno de los Estados Unidos tratará hasta donde sea práctico de llenar las necesidades de trabajadores en la Zona del Canal con las clases de personas cuya inmigración es permitida por la República de Panamá y prohibirá la entrada en el territorio de la República, excepto cuando sea necesario en asuntos breves de rutina oficial, de aquellas personas a quienes las autoridades de la Zona del Canal hayan encontrado o encuentren que es necesario introducir en la Zona del Canal, pero cuya inmigración a la República es prohibida por la Repúbli-

ca de Panamá. Tales personas serán repatriadas una vez que sus servicios no sean ya necesarios.

7. Deseo del Gobierno de Panamá de que nuestra policía MILITAR y la policía de la ZONA estén armadas únicamente con toletes mientras se encuentren en territorio de Panamá.

El Gobierno de los Estados Unidos conviene en que únicamente los oficiales comisionados de la policía militar y los oficiales comisionados de los "patroles" de marina de los Estados Unidos puedan portar armas de cinto cuando estén de servicio en las ciudades de Panamá y Colón. Conviene en que los miembros de la policía municipal de la Zona del Canal no pueden portar armas de ninguna clase mientras estén en la República de Panamá, y similarmente el gobierno de la República convendrá en que los miembros de la policía de la República de Panamá no portarán armas de cinto mientras estén en la Zona del Canal, excepto cuando esté de tránsito a través de la Zona hacia otro territorio de la República.

8. Abastecimiento de corriente eléctrica de la Represa de Alajuela para el uso en la República

El Gobierno de los Estados Unidos conviene en que energía eléctrica, siempre que haya un exceso más allá de las necesidades de los Estados Unidos en cantidades comerciales disponibles en la planta generadora del Canal de Panamá en la Represa Madden, se suministrará a solicitud del Gobierno de Panamá, a las ciudades de Panamá y Colón, a precios y en lugares que serán acordados entre los dos gobiernos.

9. Asunción del costo total de la carretera de Río Hato por los Estados Unidos

El Gobierno de los Estados Unidos, después de haberse obtenido los fondos necesarios mediante partida del Congreso, liquidará el crédito de \$2,500,000 facilitado a la República de Panamá por el Banco de Exportación para la construcción de la parte correspondiente a Panamá del camino de Chorrera a Río Hato.

10. Traslado de la estación del ferrocarril en Panamá

El Gobierno de los Estados Unidos conviene en cumplir con

los deseos de la República de Panamá en relación con el traslado de su actual sitio, de las facilidades terminales de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, inclusive la estación, patios y otras pertenencias. Este acuerdo está sujeto, sin embargo, a que la República de Panamá facilite al gobierno de los Estados Unidos, sin gasto alguno para éste, un nuevo lugar que los dos Gobiernos estimen conveniente para tal uso.

11. El deseo del Gobierno de Panamá de una indemnización en caso de que el tránsito sea interrumpido a causa de nuestros movimientos de tropas.

El Gobierno de los Estados Unidos no está actualmente preparado para entrar en acuerdo formal en relación con indemnizaciones por la interrupción del tránsito en las carreteras de la República de Panamá. Sin embargo, si ocurriesen interrupciones serias de tránsito, el Gobierno de los Estados Unidos tendrá mucho placer en examinar con espíritu amigable cualquier reclamo adelantado por la República de Panamá.

12. El deseo del Gobierno de Panamá de obtener tres tanques de gasolina o aceite en Balboa.

El gobierno de los Estados Unidos facilitará a la República de Panamá un derecho de servidumbre comenzando en el puerto de Balboa y terminando en el límite de la Zona del Canal con la ciudad de Panamá, en un punto que será convenido por los dos Gobiernos, para la construcción de una tubería de petróleo. Convenirá también en que las facilidades del Canal de Panamá para el desembarque de productos petrolíferos en masa de los buques atracados en Balboa, y para la conducción de tales productos a la mencionada tubería serían disponibles en turnos regulares para la República de Panamá, a un precio razonable. Debe entenderse que la República de Panamá sobrellevará el costo de la construcción de la tubería así como el pago de cualquier daño que pueda causar a la propiedad de los Estados Unidos como resultado de la construcción y mantenimiento de la misma. El gasto de impeler esos productos petrolíferos desde Balboa hasta el límite de la Zona del Canal con la ciudad de Panamá sería sufragado por la República de Panamá, que instalaría y mantendría las facilidades necesarias para ese fin.

Agradecería si Vuestra Excelencia confirmara mi entendimiento del acuerdo a que se ha llegado tal como queda expuesto antes.

Aceptad, Excelencia, las renovadas seguridades de mi más alta consideración.

(Fdo.) *CORDELL HULL*

Su Excelencia
Señor Don Ernesto Jaén Guardia
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de Panamá



Acuerdo sobre la asignación de un militar como asesor del Canciller panameño*

(7 de julio de 1942)

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

De conformidad con la solicitud del Ministerio Interno de Relaciones Exteriores de la República de Panamá al Secretario de Estado de los Unidos de América, el Presidente de los Estados Unidos de América ha autorizado el nombramiento de un oficial del Ejército de los Estados Unidos para prestar servicios en la República de Panamá de acuerdo con las condiciones estipuladas a condiciones estipuladas a continuación:

TÍTULO I Servicios y Duración

- Artículo 1** El Gobierno de los Estados Unidos de América pondrá la disposición del gobierno de la República de Panamá los servicios técnicos y profesionales de un oficial del Ejército de los Estados para actuar como asesor del Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá en asuntos relacionados con la defensa de la República de Panamá.
- Artículo 2** El oficial que el gobierno de los Estados Unidos de América ha de designar para este servicio será el Coronel Horace S. Eakins, del Ejército de los Estados Unidos, u otro oficial igualmente idóneo en su reemplazo si fuere necesario, según se disponga por mutuo acuerdo entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de los Estados Unidos de América.

* Panamá: Ministerio de Relaciones Exteriores. Departamento de Documentos y Archivos. *Tratados Bilaterales, EE.UU.* Parte Primera, No. 31.

- Artículo 3** Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su forma y continuará en vigencia por un período de un año, a manos que sea terminado antes en la forma que se establece más adelante.
- Artículo 4** Si el Gobierno de la República de Panamá deseara que los servicios del oficial fueren prorrogados más allá del período estipulado en el Artículo 3, hará una propuesta por escrito con este objeto seis meses antes de la expiración de este Acuerdo.
- Artículo 5** Este Acuerdo podrá terminarse antes de la expiración del período de un año prescrito en el Artículo 3, o antes de la expiración de la prórroga autorizada en el Artículo 4, de la manera siguiente*:
- a) Por cualquiera de los dos Gobiernos mediante aviso por escrito al otro Gobierno con tres meses de anticipación*;
- Al retirar el Gobierno de lo Estados Unidos de América al oficial en razón de interés público de los Estados Unidos de América, sin necesidad de cumplir con el inciso de este Artículo.
- Artículo 6** El oficial será reemplazado si quedare inhabilitado para desempeñar sus servicios por razón de incapacidad física prolongada.

TÍTULO II

Requisitos y Condiciones

- Artículo 7** El oficial desempeñará sus funciones en la República con el mismo grado que tiene en el Ejército de los Estados Unidos y llevará al uniforme correspondiente a su grado en el Ejército de los Estados Unidos.
- Artículo 8** El oficial se registrará por los reglamentos disciplinarios del Ejército de los Estados Unidos.
- Artículo 9** El oficial será sola y directamente responsable ante el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.
- Artículo 10** Durante el período en que este oficial presente servicios conforme a los términos de este Acuerdo o cualquier prórroga del mismo, el Gobierno de la República de Panamá no contratará los servicios del personal de ningún otro gobierno extranjero para los servicios y

propósitos de que trata este Acuerdo.

Artículo 11 El oficial no divulgará, ni por ningún medio revelará a gobierno extranjero alguno, o a persona alguna, ningún secreto ni asunto confidencial que puedan llegar a su conocimiento, ya sea como consecuencia natural de sus funciones o en cualquiera otra forma, entendiéndose que continuará respetándose este requisito aun después de la expiración o cancelación del presente Acuerdo o cualquier prórroga del mismo.

Artículo 12 En todo este Acuerdo se entenderá que el término «familia» del oficial sólo abarca a la esposa y a los hijos no emancipados.

Artículo 13 El oficial tendrá derecho anualmente a un mes de licencia con goce de sueldo, o a una parte proporcional de dicha licencia con sueldo por cualquier fracción de un año. Las partes de dicha licencia de que no hicieron uno, se podrán acumular de año en año mientras el oficial preste servicios conforme a los términos de este Acuerdo.

Artículo 14 La licencia a que se refiere el Artículo 13 puede ser disfrutada en países extranjeros, siempre que se observen las instrucciones vigentes de la Secretaría de Guerra de los Estados Unidos de América respecto a visitas al exterior. En todos los casos el oficial sólo podrá disfrutar de dicha licencia, o de parte de ella, previa consulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá con el propósito de determinar la conveniencia mutua del gobierno de la República de Panamá y del oficial con respecto a dicha licencia.

Artículo 15 Los gastos de viaje y de transporte que no sean abonables de acuerdo con las disposiciones de este Acuerdo, serán pagados por el oficial que disfruta de la licencia. Todo el tiempo que se emplee en viajar se contará como parte de la licencia y no se añadirá al tiempo autorizado en el Artículo 13.

TÍTULO III **Remuneración**

Artículo 16 Por los servicios que se estipulan en el Artículo 1 de este Acuerdo, el oficial recibirá del Gobierno de la Re-

pública de Panamá la remuneración neta anual, computada en moneda de los Estados Unidos, que sea acordada entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de los Estados Unidos de América. Esta remuneración se abonará en doce (12) mensualidades, tan iguales como sea posible, que vencen y deben pagarse el último día de cada mes. El pago puede hacerse en moneda nacional panameña. Los pagos que se hagan fuera de la República de Panamá se harán en moneda nacional de los Estados Unidos de América. La remuneración no estará sujeta a ningún impuesto, que esté en vigor o se imponga en el futuro, del Gobierno de la República de Panamá ni de ninguna de sus subdivisiones políticas o administrativas. Sin embargo, si al presente o durante la vigencia de este Acuerdo existieren impuestos que pudiesen afectar esta remuneración, tales impuestos serán pagados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.

Artículo 17 La remuneración que se estipula en el artículo 16 comenzará a regir desde la fecha en que el oficial para de los Estados Unidos de América, y continuará, después de la terminación de sus servicios en la República de Panamá, durante el viaje de regreso a los Estados Unidos de América, y en lo sucesivo por el período que dure la licencia acumulada a que el oficial tenga derecho.

Artículo 18 La remuneración que se deba por el período que dure el viaje de regreso y por el de la licencia acumulada se le pagará al oficial antes de su partida de la República de Panamá, y tal pago se calculará como si el viaje se hiciere por la ruta marítima, aéreas, o terrestre o cualquier combinación de éstas, hasta el puerto de entrada de los Estados Unidos de América.

Artículo 19 El Gobierno de la República de Panamá proporcionará al oficial y a su familia pasajes de primera clase para el viaje que se requiera y efectúe de conformidad con este Acuerdo entre el puerto de embarque de los Estados Unidos de América y su residencia oficial en la República de Panamá, tanto para el viaje de ida como para el de regreso. Los gastos de transporte por mar y tierra de los efectos domésticos y equipaje del oficial, inclusive su automóvil, del puerto de embarque de los Estados Uni-

dos de América a la República de Panamá y regreso, serán pagados también por el Gobierno de la República de Panamá. Estos gastos incluirán todos los gastos necesarios relacionados con la descarga de a bordo del vapor a su llegada a la República de Panamá, los del transporte desde el vapor hasta la residencia del oficial en la República de Panamá, y los de embalaje y carga a bordo del vapor de Panamá una vez que terminen sus servicios. El transporte de estos efectos domésticos, equipaje y automóvil se hará en un solo embarque y todo embarque subsiguiente correrá por cuanta del oficial, excepto cuando tales embarques los requieran circunstancias ajenas a la voluntad del oficial.

Artículo 20 Los efectos domésticos y personales así como el equipaje, inclusive un automóvil, del oficial y su familia estarán exentos de derechos de aduana en la República de Panamá, y si tales derechos de aduana se impusieren y requirieren, el Gobierno de los República de Panamá pagará una asignación adicional equivalente para satisfacer dichos derechos. Durante su servicio en la República de Panamá se le permitirá al oficial importar los artículos que necesite para su uso personal y para el uso de su familia sin pagar derechos de aduana, siempre que su solicitud de entrada libre haya recibido la aprobación del Embajador de los Estados Unidos o del encargado de Negocios ad interim,

Artículo 21 Si los servicios del oficial fueren terminados por el Gobierno de los Estados Unidos de América antes de cumplir un año de servicio, las disposiciones del Artículo 19 no serán aplicados al viaje de regreso. Si los servicios del oficial terminaren otra razón antes de cumplir el año de servicio, el oficial recibirá del Gobierno de la República de Panamá todas las compensaciones, emolumentos y obvenciones como si hubiera cumplido un año de servicio*; pero el sueldo anual cesará de abandonarse como se dispone en el Artículo 17. Mas si el Gobierno de los Estados Unidos de América retirase al oficial por faltas cometidas contra la disciplina, el Gobierno de la República de Panamá no pagará el costo del viaje de regreso a los Estados Unidos de América del oficial, su familia, efectos domésticos, equipaje y automóvil.

- Artículo 22** La compensación por gastos de transporte de viaje en la República de Panamá cuando se trata de comisiones oficiales del Gobierno de la República de Panamá será proporcionada por el Gobierno de la República de Panamá.
- Artículo 23** El Gobierno de la República de Panamá proporcionará una oficina debidamente equipada para el uso del oficial.
- Artículo 24** El Gobierno de la República proporcionará al oficial, siempre que sea posible, un automóvil adecuado, con chofer, para uso oficial.
- Artículo 25** Si se reemplaza al oficial durante la vigencia de este Acuerdo o durante una prórroga del mismo, los términos estipulados en este Acuerdo se aplicarán también al oficial reemplazante, con la excepción de que el oficial reemplazante recibirá la remuneración anual que se convenga entre los dos Gobiernos.
- Artículo 26** El Gobierno de la República de Panamá proporcionará atención médica adecuada al oficial y a su familia. En caso de que el oficial o cualquier miembro de su familia se enferme o sufra lesiones, será hospitalizado en el hospital que el oficial considere adecuado, después de consultar al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. En todos los casos el oficial pagará los gastos de subsistencia relacionados con su hospitalización o la de cualquier miembro de su familia.
- Artículo 27** Si el oficial o cualquier miembro de su familia falleciere en la República de Panamá durante el período en que este Acuerdo esté en vigencia, el Gobierno de la República de Panamá hará transportar los restos hasta lugar de los Estados Unidos de América que determine la familia, pero al costo para el Gobierno de la República de Panamá no excederá el costo del transporte de los restos del lugar del fallecimiento a la ciudad de Nueva York. Si el fallecido fuere el oficial, se considerará que sus servicios han terminado quince (15) días después de su muerte. Se proporcionará transporte de regreso a los Estados Unidos de América para la familia del oficial fallecido y para sus efectos domésticos, equipaje y automóvil, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 19. Toda remuneración debida al oficial fallecido y todo reembolso adeudado al oficial por gastos y trans-

porte en viajes realizados en asuntos oficiales del Gobierno de la República de Panamá, se pagará a la viuda del oficial o a cualquiera otra persona que haya sido designada por escrito por el oficial, disponiéndose que no se pagará a la viuda o la otra persona por la licencia acumulada a que tenía derecho al fallecido*; y disponiéndose, además, que estos pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días después del fallecimiento del oficial.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han firmado este Acuerdo en los idiomas español e inglés, en duplicado, en Washington, el día siete de julio de 1942.

POR LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

ENRIQUE JAÉN GUARDIA
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República de
Panamá en Washington

POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CORDELL HULL
Secretario de Estado de los
Estados Unidos de América

• • • • •

Panamá, octubre 8 de 1962.

Señor Embajador:

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de Vuestra Excelencia número 218 fechada septiembre 20 de 1962 que dice lo siguiente*:

«Tengo el honor de referirnos a recientes negociaciones entre representantes del Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Panamá respecto a proposiciones para asignar a una Misión Militar en Panamá personal mutuamente

satisfactorio que prestaría servicios por lapso indefinido y durante la vigencia del acuerdo de 7 de julio de 1942 y sus reformas bajo los términos y condiciones de dicho Acuerdo. Fundado en esas negociaciones, tengo el honor de proponer, en nombre de mi Gobierno, que el antedicho Acuerdo sea modificado para que se lea*:

«(1) El Preámbulo se reforma para que se lea*:

«El Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Panamá han acordado acreditar en Panamá han acordado acreditar en Panamá una Misión Militar de los Estados Unidos de América bajo las condiciones específicas siguientes*:

«(2) El Artículo 1 del Título I se reforma para que se lea*:

«El Gobierno de los Estados Unidos de América pondrá a la disposición del Gobierno de la República de Panamá los servicios técnicos y profesionales de personal del Ejército de los Estados Unidos para servir como asesores del Ministerio de Gobierno y Justicia en asuntos relativos a la defensa de la República de Panamá, inclusive adiestramiento militar, así como el Ministerio de Agricultura, Comercio e Industria en Asuntos sobre veterinario.»

«(3) El Artículo 3 del Título I se reformará para que se lea*:

«De conformidad con el Canje de Notas No. 612 de la Embajada de los Estados Unidos de América, de marzo 26 de 1962, y No. PREU-510/1230 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de julio 6 de 1962, este Acuerdo continuará en vigor por lapso indefinido pero sujeto a terminación tal como se estipula más adelante.»

«(4) El Artículo 4 del Título I será suprimido.*

«(5) El Artículo 5 del Título I se reformará para que se lea*:

«Este Acuerdo podrá terminarse de la manera siguiente*:

Por cualquiera de los dos Gobiernos mediante aviso por escrito al otro Gobierno con tres meses de anticipación*:

Al retirar al Gobierno de los Estados Unidos de América la Misión en razón de interés público de los Estados Unidos de América, sin necesidad de cumplir con el aparte (a) de este Artículo.»

«(6) El Artículo 9 del Título II se reforma para que se lea*:

«El oficial será sola y directamente responsable ante los Ministros de Gobierno y Justicia y de Agricultura, Comercio e Industrias de la República de Panamá.»

«(7) El Artículo 14 del Título II se reforma para que se lea*:

“La licencia a que se refiere el Artículo 13 puede ser disfrutada en países extranjeros, siempre que se observen las instrucciones vigentes del Departamento del Ejército de los Estados Unidos de América respecto visitas al exterior. En todos los casos el oficial sólo podrá disfrutar de dicha licencia, o de parte de ella, previa consulta con los Ministros de Gobierno y Justicia, y de Agricultura, Comercio e Industrias, de la República de Panamá con el propósito de determinar la conveniencia mutua del Gobierno de la República de Panamá y del oficial con respecto a dicha licencia.”

«(8) En los Artículos restantes del Acuerdo se entenderá por la palabra “oficial” cualquier oficial asignado a la Misión.

«En caso de que estas proposiciones satisfagan al Gobierno de Vuestra Excelencia, esta nota y la contestación favorable de Vuestra Excelencia vendrán a constituir un convenio modificativo del Acuerdo de 7 de Julio de 1942 y de sus reformas, el que entrará en vigor en la fecha de la nota de contestación de Vuestra Excelencia».

Me es placentero comunicar a Vuestra Excelencia que el contenido de su referida nota Nº218 satisface al Gobierno de la República de Panamá y lo acepta como modificativo del Acuerdo de 7 de Julio de 1942 y sus reformas para que surta efectos desde hoy.

Aprovecho la ocasión para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

GALILEO SOLÍS

Ministro de Relaciones Exteriores

12
Convenio Filós-Hines*
(Diciembre de 1947)

**CONVENIO SOBRE SITIOS DE DEFENSA ENTRE PANAMÁ
Y LOS ESTADOS UNIDOS**

El Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de los Estados Unidos de América se han consultado entre sí para considerar todas las fases de la situación internacional existente así como también para deliberar acerca de las experiencias de la Segunda Guerra Mundial en relación con la defensa del Canal de Panamá; después de un intercambio de informaciones con relación a las necesidades actuales, han reafirmado su interés conjunto de proveer lo necesario para la continua y efectiva protección del Canal de Panamá y la seguridad de la República según se estipula en el Tratado General firmado en Washington el 2 de marzo de 1936 y en el canje de notas relativo al mismo; han llegado a la conclusión de que en las actuales circunstancias debe mantener temporalmente un número limitado de sitios de defensa en territorio jurisdiccional de Panamá en virtud de lo cual han decidido celebrar un convenio con el fin de realizar los objetivos antes expresados y con ese propósito han nombrado sus respectivos representantes así:

Su Excelencia Doctor Francisco A. Fillos, Ministro de Relaciones Exteriores interino de la República de Panamá, y su Excelencia Frank T. Hines, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Panamá, quienes debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I

Los dos gobiernos acuerdan que los sitios de defensa, a que el

* Panamá: Ministerio de Relaciones Exteriores. Departamento de Documentos y Archivos. *Tratados Bilaterales, E.E.UU.* Parte Segunda, No. 19.

presente convenio se refiere, se regirán con las condiciones estipuladas en los artículos siguientes.

ARTÍCULO II

La República de Panamá designa las áreas especificadas en el anexo adjunto a este Convenio y del cual forma parte integrante, para servir como sitios destinados a la defensa del Canal de Panamá y de la República de Panamá, por el periodo limitado que se especifica respecto de cada sitio.

ARTÍCULO III

Con el fin de asegurar el funcionamiento eficiente y mutuamente satisfactorio de los sitios de defensa así como para asegurar el ejercicio de los derechos soberanos de la República de Panamá, el Gobierno de los Estados Unidos designa al Comandante local de sus fuerzas armadas o a su delegado, y el Gobierno de la República de Panamá designa al Ministro de Gobierno y Justicia como sus respectivos representantes para integrar una comisión conjunta, cuyos miembros, los representantes antes mencionados, se consultarán con respecto a todos los asuntos relativos al uso de los sitios de defensa con la salvedad de que todos los asuntos de índole militar o que comprendan de alguna forma el ejercicio del Comando Militar, quedarán dentro de la exclusiva responsabilidad y jurisdicción de las autoridades militares de los Estados Unidos. Efectuada tal consulta, los dos Gobiernos, en desarrollo de lo estipulado en este Convenio adoptarán mediante canje de notas, las recomendaciones de los representantes antes mencionados.

ARTÍCULO IV

La República de Panamá otorga a los Estados Unidos los poderes y autoridad necesarios para asumir la plena responsabilidad militar, técnica y «económica de los sitios de defensa». Los Estados Unidos ejercerán por consiguiente, dentro de los sitios de defensa y sobre los espacios aéreos correspondientes a ellos todos los derechos y autoridad que sean necesarios para la efectividad de esas responsabilidades.

En el ejercicio de tales derechos el Gobierno de los Estados Unidos de América pueden emplear contratistas y otro personal.

ARTÍCULO V

La República de Panamá mantiene su Soberanía sobre las áreas usadas como sitios de defensa y sobre los espacios aéreos correspondientes a las mismas, así como la jurisdicción en asuntos civiles y criminales en esas áreas, siendo entendido, sin embargo, que los Estados Unidos tendrán jurisdicción exclusiva con respecto a cualesquiera contravenciones que pueda cometer dentro de los sitios de defensa su personal civil o militar empleado u ocupado en alguna forma en relación con el funcionamiento de los sitios de defensa, y con respecto a sus familias. Los Estados Unidos, en virtud de la responsabilidad militar que asumen, de conformidad con el artículo IV, tendrán el derecho de arrestar, y el juzgar y castigar si fuere caso, a todas las personas que en cualquier sitio de defensa comentan cualquier otro acto contra la seguridad del sitio, de las instalaciones militares del mismo, o del personal situado en el mismo estipulados sin embargo, que los ciudadanos panameños arrestados o detenidos por razón de cualquier cargo serán entregados a las autoridades de la República de Panamá. Las autoridades nacionales de los dos gobiernos tendrán facilidades adecuadas de acceso a los sitios de defensa pero las autoridades de los Estados Unidos podrán excluir a otras personas de los sitios de defensa.

ARTÍCULO VI

El Gobierno de los Estados Unidos de América pagará al Gobierno de la República de Panamá el día primero de febrero de cada año o antes una compensación anual de diez y siete mil doscientos cincuenta (17,250) balboas por todas las tierras usadas como sitios de defensa durante el año precedente de acuerdo con los términos de este convenio. El pago será reducido proporcionalmente en el caso de períodos menores de un año.

Se exceptúan expresamente de las anteriores disposiciones de este artículo:

- A) El globo de terreno en el corregimiento de Río Hato designado con el No. 1 en el Anexo, por el cual el gobierno de los Estados Unidos de América pagará al gobierno de la República de Panamá una compensación anual de diez mil setecientos cincuenta (10,750) balboas.
- B) El área toda de la Isla de San José, en el Archipiélago de las perlas en la Bahía de Panamá designada con el Número 2 en el Anexo por el cual el Gobierno de los Estados Unidos pagará al

Gobierno de la República de Panamá una compensación anual de quince mil (15,000) balboas.

El Gobierno de la República de Panamá asumirá, con respecto a las tierras usadas como sitios de defensa, todos los gastos de expropiación así como las indemnizaciones y reembolsos por instalaciones, cultivos u otras mejoras que puedan existir en ellas.

Las compensaciones establecidas en este artículo serán pagadas en balboas tal como fueron estos definidos en el canje de notas efectuado el 2 de marzo de 1936 a que se hace referencia en el Artículo VII del Tratado de esa fecha entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá o el equivalente en dólares y serán pagaderas proporcionalmente con respecto a cada uno de los sitios de defensa que figuren en el Anexo, a partir de la fecha de la vigencia de este convenio.

ARTÍCULO VII

Cuando un sitio de defensa o parte del mismo no sea requerido para la defensa del Canal de Panamá y de la República de Panamá su uso será discontinuado en fecha que fijarán los Estados Unidos. La República de Panamá será notificada sobre la proyectada discontinuación no menos de noventa días antes de la fecha señalada, a menos que los dos gobiernos convengan en un término menor.

Todos los edificios, construcciones, instalaciones o accesorios que hayan sido erigidos o colocados por los Estados Unidos en un sitio de defensa, podrán ser retirados por los Estados Unidos en cualquier momento antes de la fecha señalada para la discontinuación del uso del sitio. Los edificios, construcciones, accesorios, cosechas, cultivos o cualesquiera otras mejoras que existían al tiempo de ser ocupado por primera vez en sitio de defensa podrán ser usados por los Estados Unidos sin negación de pagar los daños causados en cualquier forma a los mismos. La República de Panamá no estará obligada a pagar compensación a los Estados Unidos por mejoras hechas en un sitio de defensa o por los edificios, construcciones dejados en ellos por los Estados Unidos, todo lo cual vendrá a ser propiedad de la República de Panamá al discontinuarse el uso del sitio de defensa de acuerdo con este Convenio.

ARTÍCULO VIII

Los Estados Unidos y la República de Panamá reiteran su entendimiento respecto al carácter temporal de la ocupación de los

sitios de defensa a que este Convenio se refiere. En consecuencia, los Estados Unidos, reconociendo la importancia de la cooperación prestada por Panamá al proporcionar estos sitios temporales de defensa y reconociendo también la carga que el mantenimiento de estos sitios significa para la República de Panamá, se obligan expresamente a acordar con ella las medidas necesarias para la desocupación de los dichos sitios se efectúe no más tarde de la fecha de expiración del período estipulado respecto de cada sitio en el Anexo, o antes, si a juicio de los dos Gobiernos hubieren cesado las causas y circunstancias que han determinado el mantenimiento de los sitios de defensa.

ARTÍCULO IX

Las aeronaves de propiedad del Gobierno de la República de Panamá o que estén a su cargo, tendrán el derecho de aterrizar o levantar el vuelo en las bases aéreas establecidas dentro de los sitios de defensa, de acuerdo con los reglamentos que establezca la Comisión Conjunta creada de conformidad con las estipulaciones del Artículo III.

Las aeronaves civiles y las aeronaves de otros gobiernos que no sean el de la República de Panamá y el de los Estados Unidos, no podrán aterrizar o levantar el vuelo en ningún sitio de defensa establecido de acuerdo con este Convenio, excepto en casos de emergencia o para fines estrictamente militares.

La República de Panamá no permitirá la erección o existencia de obstáculos que puedan entorpecer el funcionamiento seguro de las bases aéreas establecidas en los sitios de defensa. Si fuere necesario alterar, remover o reubicar alguna estructura, los Estados Unidos sufragaron los gastos correspondientes.

ARTÍCULO X

La República de Panamá conviene en que todos los caminos bajo su jurisdicción que se usen para el movimiento de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de un sitio de defensa a otro, y entre los sitios de defensa y la Zona del Canal, serán mantenidos en buen estado en todo momento. En caso de emergencia los Estados Unidos podrán iniciar las reparaciones necesarias notificando inmediatamente su acción a la República de Panamá. Para las necesidades normales o rutinarias los Estados Unidos podrán ofrecer ayuda para la ejecución de trabajos de reparación y mantenimiento, cuando quiera que ello parezca apropiado.

Los Estados Unidos pagarán anualmente a la República de Panamá el día primero de febrero de cada año o antes, la suma de ciento treinta y siete mil quinientos (137,500) balboas o el equivalente en dólares como contribución suya al costo de los trabajos de reparación o mantenimiento durante el año precedente de los caminos usados por las fuerzas armadas de los Estados Unidos. El primero de estos pagos se hará el día último de febrero de 1948 o antes, por el año de 1947. En el caso de que cualquier año los Estados Unidos ejecuten trabajos de reparación o mantenimiento de acuerdo con las estipulaciones del parágrafo primero de este Artículo, los gastos efectuados por los Estados Unidos por dichos trabajos serán deducidos del próximo pago anual que hagan los Estados Unidos a la República de Panamá.

Si los gastos efectuados por los Estados Unidos en cualquier año excedieren la suma correspondiente al pago de ese año, dicho pago anual quedará cancelado y los Estados Unidos no harán reclamación alguna por razón de la suma gastada en excesos.

En consideración a la antedicha contribución de los Estados Unidos al costo del mantenimiento de los caminos en la República de Panamá, se concede a los Estados Unidos el derecho de libre tránsito por todos los caminos bajo la jurisdicción de la República de Panamá. El derecho de libre tránsito antes mencionado será aplicable a los movimientos rutinarios o tácticos de los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y los empleados civiles de dichas fuerzas armadas, y sus familias, así como animales, vehículos de tracción animal, y vehículos de motor empleados por las fuerzas armadas, o por los contratistas empleados por las fuerzas armadas otros cuyas actividades se relacionen con la defensa del Canal de Panamá. Los Estados Unidos no obstruirán el uso libre de ninguno de los caminos bajo la jurisdicción de la República de Panamá en virtud del movimiento rutinario o táctico de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, excepto en casos de emergencia.

Los Estados Unidos mantendrán y permitirán el libre uso de cualesquiera caminos existentes que atraviesen los sitios de defensa o podrán hacer nuevo trazado de dichos caminos de acuerdo con la recomendación de la Comisión Conjunta.

ARTÍCULO XI

La República de Panamá otorga a los Estados Unidos el derecho de mantener y usar líneas telegráficas y telefónicas aéreas.

cables submarinos, cables subterráneos, tal como están actualmente establecidos.

Los Estados Unidos, de conformidad con los reglamentos que se acuerden mediante recomendación de la Comisión Conjunta y hasta donde lo permitan las exigencias militares, compartirán con la República de Panamá el uso de las líneas telegráficas y telefónicas militares existentes, así como los cables y cualesquiera otras facilidades similares de las fuerzas armadas de los Estados Unidos que en adelante se construyan en la República de Panamá.

ARTÍCULO XII

La República de Panamá otorga a los Estados Unidos la autoridad para instalar, manejar y mantener dentro de los sitios de defensa las facilidades de radiocomunicación que sean necesarias a las fuerzas armadas de los Estados Unidos para la defensa del Canal de Panamá y de la República de Panamá. De la misma manera se permitirá el uso de las facilidades de radiocomunicación por las fuerzas armadas de los Estados Unidos en el territorio y aguas jurisdiccionales de la República de Panamá, de acuerdo con los reglamentos que se dicten mediante recomendación de la Comisión Conjunta.

ARTÍCULO XIII

El personal civil y militar de los Estados Unidos que funcione en los sitios de defensa o se emplee con relación al funcionamiento de dichos sitios, inclusive contratistas que trabajen exclusivamente en los sitios de defensa y las familias de ese personal, así como también los bienes y los efectos destinados a los sitios, estarán exentos de todo impuesto, contribución o gravamen de cualquier clase por parte de la República de Panamá o sus subdivisiones políticas durante la vigencia de este Convenio.

Las autoridades del Gobierno de los E.U. impedirán la venta o traspaso de mercancías o artículos importados o vendidos dentro de los sitios de defensa para el uso o consumo del personal civil y militar empleado en el mismo, a persona que no tengan el derecho de comprar tales mercancías o artículos. Dichas autoridades, además de prevenir el abuso con respecto a las exenciones concedidas por este convenio cooperarán con las autoridades de la República de Panamá con el objeto de evitar el contrabando de dichas mercancías y artículos.

ARTÍCULO XIV

Este Convenio puede ser terminado por los dos Gobiernos mediante mutuo acuerdo antes de la expiración de los periodos estipulados en el Anexo.

ARTÍCULO XV

Este Convenio entrará en vigor en la fecha en que cada uno de los Gobiernos notifique al otro Gobierno por escrito, su aprobación del mismo, si ambas notificaciones son hechas en el mismo día; y si las notificaciones son hechas en días diferentes, el Convenio entrará en vigor en la fecha de la notificación posterior.

En fe de lo cual los plenipotenciarios de las Altas Partes Contratantes han firmado este Convenio en duplicado en inglés y español, ambos textos de igual autenticidad, y han fijado sus respectivos sellos.

Hecho en la ciudad de Panamá a los diez días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.

(Fdo.) *Francisco A. Filós*

(Fdo.) *Frank T. Hines*

**MEMORÁNDUM
DEL CONVENIO FILÓS-HINES DE 1947***

MEMORÁNDUM QUE DESCRIBE LOS SITIOS DE DEFENSA Y ESTIPULA EL PERÍODO DE OCUPACIÓN DE LOS MISMOS, ANEXO AL CONVENIO SOBRE SITIOS DE DEFENSA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESE CONVENIO.

MEMORANDUM DESCRIBING THE DEFENSE SITES AND STIPULATING THE PERIOD OF OCCUPANCY OF THE SAME, ANNEXED TO THE DEFENSE SITES AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE REPUBLIC OF PANAMA, AND FORMING AN INTEGRAL PART OF THAT AGREEMENT.

Los linderos exactos de los sitios de defensa se indican en detalle en los mapas y dibujos del Ejército de los Estados Unidos que a continuación se mencionan, de los cuales tiene copias en su poder el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Para mayor identificación se dan, donde ello es posible, los números bajo los cuales aparecían dichas bases en el Anexo al Convenio sobre Arrendamiento de Sitios de Defensa en la República de Panamá, de 18 de mayo de 1942.

The exact boundaries of the defense sites are shown in detail on the United States Army maps and drawings listed below, copies of which are in the possession of the Ministry of Foreign Relations of Panama. for further identification, where possible, there are given the numbers under which said bases appeared in the Annex to the Agreement for the Lease of Defense Sites in the Republic of Panama, of may 18, 1942.

SITIO DE DEFENSA No. 1, RIO HATO, anteriormente conocido como No. 12, está situado en el corregimiento de ese nombre en la Provincia de Coclé aproximadamente a 57 millas al Oeste, a lo largo de la Carretera Nacional, de la zona del Canal y se extiende desde la costa del Golfo de Panama a través de la Carretera Nacional por una distancia de aproximadamente 16 millas. El sitio consiste de dos parcelas, una con una cabida de 7,675.96 hectáreas, y la otra de 12.32 hectáreas, o sea un total de 7,788.28 hectáreas. Los linderos se muestran en los Dibujos del "Department Engineer" Nos. 5889 y

* Op. cit.

5889-1. Período de ocupación: diez años, prorrogables por un período de diez años, a opción de los Estados Unidos de América.

DEFENSE SITE No. 1, RIO HATO, formerly known as No. 12, is located in the township of that name and Province of Coclé approximately 57 miles westward, along the National Highway, from the Canal Zone and extends from the shore of the Gulf of Panama northward across the National Highway for a distance of approximately 16 miles. The site consists of two parcels, one with an area of 7,675.96 hectares and the other of 12.32 hectares, or a total area of 7,688.28 hectares. The boundaries are shown on Department Engineer Drawings Nos. 5889 and 5889-1. Period of occupancy: Ten years, renewable for an additional period of ten years, at the option of the United States of America.

SITIO DE DEFENSA No. 2, ISLA DE SAN JOSE, comprende toda la isla de ese nombre situada en la Bahía de Panamá, en el Archipiélago de las Perlas, aproximadamente a 55 millas S 40° E de Balboa, Zona del Canal. Su cabida es aproximadamente de 4,460 hectáreas. Período de ocupación: Cinco años.

DEFENSE SITE No. 2, SAN JOSE ISLAND, comprises the entire island of that name and is located in the Bay of Panama, approximately 55 miles S 40° E of Balboa, Canal Zone. Its area is approximately 4,460 hectares. Period of occupancy: Five years.

SITIO DE DEFENSA No. 3, ISLA DE TABOGA, situado en la isla de ese nombre en la Bahía de Panamá aproximadamente 11 millas en la dirección Sur de Fuerte Amador, Zona del Canal, comprende tres parcelas de terreno anteriormente conocidas con el No. 17 con una área conjunta de 26.79 hectáreas cuyos linderos se describen en los Dibujos del "Department Engineers" Nos. 6020, 6026, 6073, 6075, 6077 y 6078; y otra parcela de 14.5 hectáreas, anteriormente conocida como No. 56 y descrita en los Dibujos del "Department Engineers" Nos. 6020 y 6022; la cabida total de este sitio es de 41.29 hectáreas. Período de ocupación: Cinco años.

DEFENSE SITE No. 3 TABOGA ISLAND, located on the island of that name which lies in the Bay of Panama approximately 11 miles due S of Fort Amador, Canal Zone. It comprises three parcels of land formerly known as No. 17 with an aggregate area of 26.79 hectares, the boundaries of which are described in Department Engineer Drawings 6020, 6026, 6073, 6075, 6077 and 6078; and of another parcel of 14.5 hectares, formerly known as No. 56 and described in Department Engineer Drawings 6020 and 6022; the total area of this site being 41.29 hectares. Period of occupancy: Five years.

SITIO DE DEFENSA No. 4, ISLA DE TABOQUILLA, anteriormente conocido como No. 18, situado en la isla del mismo nombre, en la Bahía de Panamá, a menos de una milla al Este de la Isla de Taboga previamente identificado. El sitio comprende 132.06 hectáreas cuyos linderos se describen en los Dibujos del "Department Engineer" Nos. 5311, 5820, 5821 y 5885. Periodo de ocupación: Cinco años.

DEFENSE SITE No. 4, TABOQUILLA ISLAND, formerly known as No. 18, is located on the island of the same name, in the Bay of Panama less than one mile E of Taboga Island which has been previously identified. The site comprises 132.06 hectares, the boundaries of which are described in Department Engineer Drawings 5311, 5820, 5821 and 5885. Period of occupancy: Five years.

SITIO DE DEFENSA No. 5, SALUD, situado en la Provincia de Colón sobre el Mar Caribe, aproximadamente a 19 millas al Suroeste a lo largo de la costa desde el Fuerte Sherman, Zona del Canal, entre las poblaciones de Salud y Lagarto. Comprende 49.996 hectáreas, y está delimitado en la Hoja 122 del Mapa de Terreno del Estudio Topográfico Militar de Panamá, Escala 1:20,000. Periodo de ocupación: Cinco años.

DEFENSE SITE No. 5, SALUD, is located in the Province of Colón on the Caribbean Sea, approximately 19 miles SW along the coast from Fort Sherman, Canal Zone, between the villages of Salud and Lagarto. It comprises 49.996 hectares and is delimited in sheet 122, Terrain Map, Military Survey of Panama, Scale 1:20,000. Period of occupancy: Five years.

SITIO DE DEFENSA No. 6, ISLA DEL REY, situado en la extremidad meridional de la isla de ese nombre, la mayor del Archipiélago de las Perlas, en el Golfo de Panamá, aproximadamente a 69 millas S 40° E de Albrook Field, Zona del Canal. El sitio, conocido anteriormente como No. 32, consiste de dos parcelas con una cabida total de 100.05 hectáreas y se muestra en el Dibujo del "Department Engineer" No. 5672. Periodo de ocupación: Cinco años.

DEFENSE SITE No. 6, REY ISLAND, is located on the southernmost part of the island of that name, the largest of the Perlas Archipelago, lying in the Gulf of Panama approximately 69 miles S 40° E of Albrook Field, Canal Zone. The site, formerly known as No. 32, consists of two parcels with a total area of 100.05 hectares and is shown on Department Engineer Drawing 5672. Period of occupancy: Five years.

SITIO DE DEFENSA No. 7, JAQUE, con una cabida total de 149.01 hectáreas, consiste de una parcela de 9.02 hectáreas, conocido anteriormente como No. 20, situado en la Bahía de las Piñas en la

Provincia de Panamá, aproximadamente 30 millas al Noroeste a lo largo de la Costa del Pacífico desde la frontera colombiana, y se describe en el Dibujo del "Department Engineer No. 5865; y de otra parcela de 139.99 hectáreas conocido anteriormente como No. 21, situada tierra adentro aproximadamente a una milla del anterior, y la cual aparece en el Dibujo del "Department Engineer" No. 6039. Período de ocupación: Cinco años.

DEFENSE SITE No. 7, JAQUE, with a total area of 149.01 hectares, consists of one parcel of 9.02 hectares, formerly known as No. 20, located at Piñas Bay in the Province of Panama, approximately 30 miles NW along the Pacific Coast from the Colombian border, and described in Department Engineer Drawing 5865; and of another parcel of 139.99 hectares, previously known as no. 21, located island approximately 1 mile from the former and shown on Department Engineer Drawing 6039. Period of occupancy: Five years.

SITIO DE DEFENSA No. 8, POCRI, anteriormente conocido como No. 7, está situado en la Provincia de Los Santos sobre la costa del Golfo de Panamá de la península de Los Santos, aproximadamente a 92 millas aéreas S 26° O de Albrook Field, Zona del Canal y 10 millas E de la ciudad de Las Tablas. Consiste de dos parcelas con una cabida conjunta de 157.2 hectáreas y se indica en los Dibujos del "Department Engineer" Nos. 2002-1 Revisado, 6002-1-2 y 6002-3. Período de ocupación: Cinco Años.

DEFENSE SITE No. 8, POCRI, formerly known as No. 7, is located in the Province of Los Santos on the Gulf of Panama coast of Los Santos penninsula, approximately 92 air-miles S 26° W of Albrook Field, Canal Zone and 10 miles E from the town of Las Tablas. It consists of two parcels with an aggregate area of 157.2 hectares and is shown on Department Engineer Drawings 2002-1 Revised, 6002-1-2 and 6002-3. Period of occupancy: Five years.

SITIO DE DEFENSA No. 9, PUNTA MALA, está situado en la Provincia de Los Santos en la extremidad SE de la península de Los Santos, aproximadamente a 108 millas aereas S 16° O de Albrook Field, Zona del Canal, y comprende dos parcelas con una cabida total de 20.07 hectáreas. La primera, de 15.03 hectáreas, conocida anteriormente como No. 8, aparece en el Dibujo del "department Engineer" No. 6061; y la otra, conocida anteriormente como No. 126, tiene una cabida de 5.04 hectáreas y aparece en el Dibujo del "Department Engineer" No. 6356. Período de ocupación: Cinco años.

DEFENSE SITE No. 9, CAPA MALA, is located in the Province of Los Santos at the SE extremity of Los Santos penninsula, approximately

108 air-miles S 16° W from Albrook Field, Canal Zone, and comprises two parcels with a total area of 20.07 hectares. The first, of 15.03 hectares, formerly known as No. 8, is shown on Department Engineer Drawing 6061; while the other, previously known as No. 126, has an area of 5.04 hectares and is shown on Department Engineer Drawing 6356. Period of occupancy: Five years.

SITIO DE DEFENSA No. 10, PUNTA DE SAN BLAS, conocido anteriormente como No. 24, situado en la Comarca de San Blas sobre la costa del Caribe en una península en la extremidad occidental del Golfo de San Blas y aproximadamente 61 millas aéreas No. 82 E de France Field, Zona del Canal. Tiene una cabida de 23.87 hectáreas y aparece en el Dibujo del "Department Engineer" No. 4781. Período de ocupación: Cinco años.

DEFENSE SITE No. 10, SAN BLAS PONT, formerly known as No. 24, is located in the Comarca of San Blas on the Caribbean coast on a peninsula at the western end of the Gulf of San Blas and approximately 61 air-miles N 82° E from France Field, Canal Zone. It has an area of 23.87 hectares and is shown on Department Engineer Drawing 4781. Period of occupancy: Five years.

SITIO DE DEFENSA No. 11, ISLA GRANDE, conocido anteriormente como No. 96, situado en la Provincia de Colón sobre un islote de ese nombre en la Costa del Caribe, aproximadamente 30 millas aéreas N 51° E de France Field, Zona del Canal. Consiste de dos parcelas que tienen una cabida total de 8.66 hectáreas, cuyos linderos se indican en el Dibujo del "Department Engineer" No. 6167 Revisado. Período de ocupación: Cinco años.

DEFENSE SITE No. 11, ISLA GRANDE, formerly known as No. 96, is located in the Province of Colón, on a small island of that name on the Caribbean Coast, approximately 30 air-miles N 51° E of France Field, Canal Zone. It consists of two parcels having a total area of 8.66 hectares, the bound-aires of which are shown on Department Engineer Drawing 6167 Revised. Period of occupancy: Five Years.

SITIO DE DEFENSA No. 12, VICTORIA, conocido anteriormente como No. 36, tiene una cabida de 5.4 hectáreas, situado aproximadamente a 5 millas al NE del corregimiento de Pacora en la Provincia de Panamá, y aparece en el Dibujo del "Department Engineer" No. 6019. Período de ocupación: Cinco años.

DEFENSE SITE No. 12, VICTORIA, formerly known as No. 36, has an area of 5.4 hectares, lies approximately 5 miles NE of the town of Pacora in the Province of Panama, and is shown on Department Engineer Drawing 6019. Period of occupancy: Five years.

SITIO DE DEFENSA No. 13, LAS MARGARITAS, conocido anteriormente como No. 127, situado cerca de la población del mismo nombre, en la Provincia de Coclé. El sitio tiene una cabida de 2.13 hectáreas y aparece en el Dibujo del "Department Engineer" No. 6438-A Revisado. Período de ocupación: Cinco años.

DEFENSE SITE No. 13, LAS MARGARITAS, formerly known as No. 127, is located near the village of the same name, in the Province of Coclé. The site has an area of 2.13 hectares and is shown on Department Engineer Drawing No. 6438-A-Revised. Period of occupancy: Five years.

En fe de lo cual se firma este memorandum en duplicado, en Inglés y Español, en Panamá hoy día diez del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.

In witness whereof, this memorandum is signed in duplicate in English and Spanish, in Panamá, this tenth day of December, A.D. 1947.

(Fdo.) Francisco A. Filós

(Sgd.) Frank T. Hines

Es fiel copia de sus originales.—

Panamá, 31 de mayo de 1948.

.....

LISTADO DE SITIOS PRETENDIDOS

ANNEX "A" - SITES REQUIRED BY THE UNITED STATES IN THE REPUBLIC OF PANAMA

(Detailed descriptions to be submitted subsequently)

1. Río Hato (defense site No. 12)
Period of occupancy: 30 years.
2. Taboga Island (defense sites No. 17 and No. 56)
Period of occupancy: 10 years
3. San José Island
Period of occupancy: 10 years
4. Taboguilla Island (Defense site No. 18)
Period of occupancy: 10 years
5. Salud
Period of occupancy: 10 years

6. San Carlos (old defense site No. 133)
Period of occupancy: 10 years
7. Rey Island (defense site No. 32)
Period of occupancy: 10 years
8. Jaqué - (defense sites No. 20 and No. 21)
Period of occupancy: 10 years
9. Pocrí (defense site No. 7)
Period of occupancy: 10 years
10. Cape Mala (defense site No. 8 and No. 126)
Period of occupancy: 10 years
11. San Blas Point (defense site No. 24)
Period of occupancy: 10 years
12. Isla Grande (defense site No. 96)
Period of occupancy: 10 years
13. Victoria (defense site No. 36)
Period of occupancy: 10 years
14. Las Margaritas (defense site No. 127)
Period of occupancy: 10 years



Declaración Conjunta Remón-Eisenhower* (1953)

DECLARACIÓN CONJUNTA FORMULADA POR LOS PRESIDENTES REMÓN-EISENHOWER

Dentro del espíritu de la estrecha amistad que une a los pueblos y gobiernos de Panamá y los Estados Unidos, hemos considerado los aspectos principales de las singulares relaciones existentes entre los dos países, movidos por el ferviente deseo de hacer que estas relaciones sean lo más satisfactorias posibles.

En nuestras conversaciones hemos tratado principalmente la parte de nuestras relaciones que emana directamente del hecho de que el Canal que une las aguas de los dos Océanos y el territorio de la Zona adyacente al mismo corren a través del corazón del territorio de Panamá, y que por tanto han surgido ciertas cuestiones cuya solución es de gran importancia.

Al considerar estas relaciones hemos considerado oportuno en primer lugar reiterar los principios básicos que fueron asentados por nuestros dos Gobiernos en 1903 y 1936.

Hemos convenido en que estos principios básicos aplicables a las relaciones entre los dos países, deben tener como consecuencia la adopción de medidas tendientes a hacerlos más efectivos a fin de que haya un beneficio equitativo de las dos naciones que hicieron posible la construcción de un Canal así como habilitar el comercio y la industria de Panamá para que obtengan la ventaja del mercado que ofrecen la Zona del Canal y los buques que transitan por el Canal.

Hemos convenido igualmente en que, como quiera que los dos países tienen un interés mutuo y vital en la obra del Canal de Panamá, el principio de igualdad de oportunidad y trato debe tener pleno efecto con respecto a los ciudadanos de Panamá y los Estados Unidos empleados en la Zona del Canal tal como se estableció en el Canje de Notas de 2 de marzo de 1936 sobre este

* Moreno C. Manuel B., *Op. cit.*, pp. 207-08.

asunto y que cuando quiera que se presenten circunstancias que en alguna forma se interpongan al cumplimiento de ese principio, los Estados Unidos tomarán las medidas apropiadas.

De conformidad con el primero de los dos principios antes expuestos, hemos reconocido la conveniencia de dar la debida consideración, en los casos de las tierras concedidas en el pasado para los fines del Canal y que no sean ya necesarias para esos fines, a efecto de que se hagan los arreglos necesarios para el traspaso de esas tierras a la República de Panamá.

Es sumamente grato hacer presente que las comisiones designadas por los dos Gobiernos para revisar nuestras relaciones y el funcionamiento de nuestros tratados están ya elaborando con la mira de entrar en cualquier arreglos que puedan considerarse necesarios para asegurar para el futuro relaciones que sean mutuamente satisfactorias y ventajosas.

El Presidente de la República de Panamá ha expresado en el curso de estas conversaciones su profundo aprecio de la actitud cordial y amistosa del Presidente de los Estados Unidos y ha reiterado las expresiones de sincera amistad que animan al pueblo y Gobierno de Panamá para con el pueblo y Gobierno de los Estados Unidos de América, y ha expresado así mismo su plena solidaridad con los Estados Unidos en la defensa de la democracia, y la firme voluntad de Panamá de cooperar como lo ha hecho en dos guerras mundiales, en el mantenimiento de la paz y la seguridad en un mundo libre.

El Presidente de los Estados Unidos, por su parte, ha expresado el interés del pueblo y Gobierno de los Estados Unidos en cuanto al bienestar del pueblo y Gobierno de Panamá. Ha asegurado al Presidente de la República de Panamá que todos los puntos que los representantes de Panamá deseen plantear recibirán consideración con su mayor simpatía a la luz de las relaciones particularmente estrechas que existen entre los dos países. En vista de la naturaleza de los nexos especiales entre los dos países, él ha expresado el deseo de los Estados Unidos de continuar cooperando en el desarrollo de la Economía Nacional de Panamá.

Se estima que esta entrevista ha obtenido el alto grado de mutua comprensión y confianza que en el interés común de las dos naciones y de este mundo libre, deben caracterizar los vínculos entre ellas.

Tratado Remón-Eisenhower**(25 de enero de 1955)****TRATADO DE MUTUO ENTENDIMIENTO Y COOPERACIÓN
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ***

El Presidente de los Estados Unidos de América y el Presidente de la República de Panamá, deseosos de celebrar un tratado que demuestre una vez más el mutuo entendimiento y la cooperación entre los dos países y que fortalezca los lazos de entendimiento y amistad entre sus respectivos pueblos, han nombrado con tal propósito como sus respectivos Plenipotenciarios:

El Presidente de los Estados Unidos de América:

Selden Chapin, Embajador Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Panamá.

El Presidente de la República de Panamá:

Octavio Fábrega, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.

Quienes, habiéndose comunicado sus respectivos plenos poderes, los que han sido hallados en buena y debida forma, y reconociendo que ni las estipulaciones de la Convención firmada el 18 de Noviembre de 1903, ni el Tratado General firmado el 2 de Marzo de 1936, ni el presente Tratado, pueden ser modificados excepto por mutuo consentimiento, convienen en los siguientes Artículos:

ARTÍCULO I

Comenzando con la primera anualidad pagadera después del canje de las ratificaciones del Presente Tratado, los pagos de acuerdo con el Artículo XIV de la Convención para la construcción de un Canal Marítimo, celebrada entre los Estados Unidos de Améri-

* Ministerio de Relaciones Exteriores, MEMORIA. Imprenta Nacional, Panamá, 1956, pp. 5-16.

ca y la República de Panamá el 18 de Noviembre de 1903, tal como quedó modificado por el Artículo VII del Tratado General de Amistad y Cooperación firmado el 2 de Marzo de 1936, serán de un millón novecientos treinta mil balboas (B/. 1,930,000) como los define el convenio incorporado en el canje de Notas del 2 de Marzo de 1946, entre el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América y los Miembros de la Comisión Panameña del Tratado. Los Estados Unidos de América pueden cumplir su obligación con respecto a cualquiera moneda, siempre que la cantidad que se pague sea el equivalente de un millón novecientos treinta y mil balboas (B/. 1,930,000) definidos como queda expresado.

En la fecha del primer pago de acuerdo con el presente Tratado, las estipulaciones de este Artículo subrogarán las estipulaciones del Artículo VII del Tratado General firmado el 2 de Marzo de 1936.

No obstante lo estipulado en este Artículo, las Altas Partes Contratantes reconocer la inexistencia de obligación alguna de parte de cualquiera de las Partes de alterar el monto de la anualidad.

ARTÍCULO II

- (1) No obstante lo estipulado en el Artículo X de la Convención firmada el 18 de Noviembre de 1903 entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá, los Estados Unidos de América convienen en que, con sujeción a las estipulaciones de los parágrafos (2) y (3) del presente Artículo, la República de Panamá puede establecer impuestos sobre las rentas (inclusi- ve las obtenidas de fuentes dentro de la Zona del Canal) de todas las personas que estén empleadas en el servicio del Canal, del ferrocarril y obras auxiliares, ya sea que residan dentro de la Zona del Canal o fuera de ella, excepto:
 - (a) los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América,
 - (b) los ciudadanos de los Estados Unidos de América, incluyendo aquellos que tengan doble nacionalidad, y
 - (c) otras personas que no sean ciudadanos de la República de Panamá y que residan dentro de la Zona del Canal.
- (2) Queda entendido que todo impuesto a que se refiere el parágrafo (1) de este Artículo será establecido sobre una base no discriminatoria y que en ningún caso será establecido a razón mayor o más gravosa que la aplicable en general a las rentas de los ciudadanos de la República de Panamá.
- (3) La República de Panamá conviene en no establecer impuestos

sobre las pensiones, anualidades, pago de auxilio u otros pagos similares, o pagos en concepto de compensación por lesiones o muerte que ocurran en relación con el servicio en el Canal, el ferrocarril y obras auxiliares o que fueren hechos directamente o para beneficio de miembros de las Fuerzas Armadas o de ciudadanos de los Estados Unidos de América o de los beneficiarios legales de dichos miembros o ciudadanos que residan en territorio bajo la jurisdicción de la República de Panamá.

Las estipulaciones de este Artículo empezarán a surtir sus efectos respecto a los años gravables que comiencen el primero de Enero o después del primero de Enero del año siguiente a aquel en que entre en vigor este Tratado.

ARTÍCULO III

Los Estados Unidos de América convienen, con sujeción a lo dispuesto en los párrafos subsiguientes, en que el monopolio otorgado a perpetuidad por la República de Panamá a los Estados Unidos de América de conformidad con el Artículo V de la Convención firmada el 18 de Noviembre de 1903 para la construcción, mantenimiento y funcionamiento de cualquier sistema de comunicación por medio del canal o ferrocarril a través de su territorio entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, quedará abrogado en la fecha en que entre en vigor este Tratado, en cuanto se relacione con la construcción, mantenimiento y funcionamiento de cualquier sistema de comunicación transistmica por medio del ferrocarril dentro del territorio sujeto a la jurisdicción de la República de Panamá.

Los Estados Unidos de América convienen además en que, con sujeción a los párrafos subsiguientes, el derecho exclusivo de establecer carreteras a través del Istmo de Panamá, adquirido por los Estados Unidos de América como resultado de la concesión otorgada por medio de contrato a la Compañía del Ferrocarril de Panamá quedará abrogado, a partir de la fecha en que este Tratado entre en vigor, en cuanto ese derecho se refiere al establecimiento de carreteras dentro del territorio sujeto a la jurisdicción de la República de Panamá.

En vista del interés vital de los dos países en la protección efectiva del Canal, las Altas Partes Contratantes convienen además en que dicha abrogación queda sujeta al entendimiento de que ningún sistema de comunicación interoceánica dentro del territorio sujeto a la jurisdicción de la República de Panamá por medio del ferrocarril o carretera podrá ser costeadado, construido,

mantenido o explotado por un tercer país o ciudadanos del mismo, ya sea directa o indirectamente, a menos que en opinión de las dos Altas Partes Contratantes dicho costo, construcción, mantenimiento o funcionamiento no afecte la seguridad del Canal.

Las Altas Partes Contratantes convienen también en que la abrogación de que se trata este Artículo no afectará en modo alguno el mantenimiento y funcionamiento del actual Ferrocarril de Panamá en la Zona del Canal ni en territorio sujeto a la jurisdicción de la República de Panamá.

ARTÍCULO IV

El segundo párrafo del Artículo VII de la Convención firmada el 18 de Noviembre de 1903, que trata de la expedición, el cumplimiento y aplicación de reglamentos sanitarios en las ciudades de Panamá y Colón, quedará totalmente abrogado en la fecha en que entre en vigor el presente Tratado.

ARTÍCULO V

Con sujeción a la expedición de la correspondiente ley o leyes por el Congreso, los Estados Unidos de América convienen en traspasar libre de costo a la República de Panamá todo derecho, títulos e interés que los Estados Unidos de América o sus agencias tengan sobre ciertas tierras y mejoras ubicadas en territorio sujeto a la jurisdicción de la República de Panamá, en la oportunidad y forma en que los Estados Unidos de América determinen ya no sean necesarias para el funcionamiento, mantenimiento, saneamiento y protección del Canal de Panamá o sus obras auxiliares, o para otros fines que los Estados Unidos de América estén autorizados para llevar a cabo en la República de Panamá. Las tierras y mejoras a que se hace referencia en el período anterior y las determinaciones de los Estados Unidos de América respecto a las mismas quedan designadas y expresadas en el Punto 2 del Memorándum de Entendimientos Acordados que lleva la misma fecha de este Tratado, con sujeción a la expedición de la correspondiente ley o leyes por el Congreso. También convienen los Estados Unidos de América, con sujeción a la expedición de la correspondiente ley o leyes por el Congreso, en traspasar libres de costo a la República de Panamá todos sus derechos, títulos e intereses sobre las tierras y mejoras en el área conocida como Punta Patilla y que al efectuarse ese traspaso los Estados Unidos de América renunciarían todo derecho, poder y autoridad concedidos sobre di-

cha área de conformidad con la Convención firmada el 18 de Noviembre de 1903. La República de Panamá conviene en mantener a salvo al Gobierno de los Estados Unidos de América de toda reclamación que pueda surgir por razón del traspaso a la República de Panamá del área conocida como Punta Paitilla.

ARTÍCULO VI

El artículo V de la Convención de Límites firmada el 2 de Septiembre de 1914 entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá, quedará subrogado por las siguientes estipulaciones:

«Se conviene en que los límites permanentes entre la ciudad de Colón (inclusive la Bahía de Colón, según se define en el Artículo VI de la Convención de Límites firmada el 2 de Septiembre de 1914, y otras aguas adyacentes a las playas de Colón) y la Zona del Canal serán las siguientes:

Partiendo de un punto no marcado que se denomina "E", el cual está situado en el lindero Nordeste del Corredor de Colón (en su extremidad que queda hacia Colón) y cuya posición geodésica, con referencia a la Base Panamá-Colón del Sistema de Triangulación de la Zona del Canal es de $9^{\circ}21'$ más 0.000 metros (0.00 pies) de Latitud Norte y $79^{\circ}54'$ más 108.536 metros (356.00 pies) de Longitud Occidental, se sigue desde dicho punto inicial "E" con los siguientes linderos y medidas:

En dirección Este se mide una distancia de 811.636 metros (2662.83 pies) a lo largo de Latitud Norte $9^{\circ}21'$ más 0.000 metros (0.00 pies), hasta llegar a un punto no marcado en el Río Folks, denominado "F", situado a $79^{\circ}53'$ más 1127.762 metros (3700.00 pies) de Longitud Occidental.

Luego con rumbo $N-36^{\circ}36'30"$ E y una distancia de 797.358 metros (2616.00 pies) se llega a un punto no marcado en la Bahía de Manzanillo denominado "G".

Luego con rumbo $N-22^{\circ}41'30"$ O y una distancia de 363.322 metros (1192.00 pies) se llega a un punto no marcado en la Bahía de Manzanillo denominado "H";

Luego con rumbo $N-56^{\circ}49'00"$ O y una distancia de 236.830 metros (777.00 pies) se llega a un punto no marcado en la Bahía de Manzanillo denominado "I";

Luego con rumbo $N-29^{\circ}51'00"$ O y una distancia de 851.308 metros (2793.00 pies) se llega a un punto no marcado en la Bahía de Manzanillo denominado "J";

Luego con rumbo N-50°56'00" O y una distancia de 1003.404 metros (3292 pies) se llega a un punto no marcado en la Bahía de Limón denominado "K".

Luego con rumbo S-56°06'11" O y una distancia de 1298.100 metros (4258.85 pies) se llega a un punto no marcado en la Bahía de Limón denominado "L", situado en el lindero Norte del Puerto de Colón.

De allí a lo largo del lindero del Puerto de Colón según lo estipulado en el Artículo VI de la Convención de Límites firmada entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá, el 2 de septiembre de 1914, hasta llegar al monumento "D", como sigue:

En dirección N-78°30'30" O y una distancia de 641.523 metros (2104.73 pies), en línea con el Faro de Punta Toro hasta llegar a un punto no marcado en la Bahía de Limón denominado "M", que está situado a 330.00 metros (1082.67 pies) en dirección Este y en ángulo recto con el eje del Canal de Panamá;

En dirección S-00°14'50" O en línea paralela al eje del Canal de Panamá a 330.00 metros (1082.67 pies) al Este de dicho eje, se mide una distancia de 937.097 metros (3074.46 pies) hasta llegar a un punto no marcado en la Bahía de Limón denominado "N".

En dirección S-78°30'30" E, una distancia de 1204.868 metros (3952.97 pies) hasta llegar al monumento "D" que es un monumento de concreto situado en la playa oriental en la Bahía de Limón.

De allí a lo largo del lindero entre la Ciudad de Colón y la Zona del Canal, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo V de la Convención de Límites firmada el 2 de septiembre de 1914, hasta llegar al monumento "B", como sigue:

Desde el punto "D" con rumbo S-78°30'30" E y una distancia de 78.837 metros (258.65 pies) se pasa por los monumentos 28 y 27, que consisten en pernos de latón en movimiento, con distancias sucesivas de 48.756 metros (159.96 pies), 8.614 metros (28.26 pies) y 21.467 metros (70.43 pies) hasta llegar al punto "D", que es un monumento de concreto;

Desde este punto se sigue con rumbo N-74°17'35" E y una distancia de 162.642 metros (533.60 pies) a lo largo del eje de la Calle Once pasando por los monumentos Nº 26, 25, 24 y 23, que consisten en pernos de latón en el pavimento, con distancias sucesivas de 29.005 metros (95.16 pies), 27.743 metros (91.02 pies), 50.813 metros (166.71 pies), 48.360 metros (158.66 pies) y 6.721 metros (22.05 pies) hasta llegar a "C", que es un punto no marcado debajo del pedestal del reloj sobre el eje de la Avenida Bolívar;

Desde este punto se sigue con rumbo S-15°58'00" E y una distancia de 294.312 metros (965.59 pies) a lo largo del eje de la Avenida Bolívar pasando por los monumentos N° 22, 21, 20 y 19, que consisten en pernos de latón en el pavimento, con distancias sucesivas de 4.371 metros (14.35 pies), 43.626 metros (143.13 pies), 72.777 metros (238.77 pies), 99.600 metros (326.77 pies) y 73.935 metros (242.57 pies) hasta llegar al monumento "B" que consiste en un perno de latón. (El monumento "B" es el punto de partida a que se refiere el Artículo I de la Convención entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá relativa al Corredor de Colón ciertos otros corredores por la Zona del Canal de Panamá, firmada en Panamá el 24 de mayo de 1950).

De allí a lo largo del lindero entre la Ciudad de Colón y la Zona del Canal, hasta llegar al monumento "A" según lo estipulado en el Artículo I de la Convención sobre el Corredor a que hace referencia el párrafo anterior:

En dirección S-15°57'40" E, se miden 35.692 metros (117.10 pies) a lo largo del eje de la Avenida Bolívar hasta llegar al monumento número "A-8" que consiste en un perno de latón situado en la intersección con el eje de la Calle 14 proyectado en dirección Oeste el cual está a 9°21' más 413.364 metros (1356.18 pies) de Longitud Occidental.

Desde allí con rumbo N.73°59'35" E se mide una distancia de 52.462 metros (172.12 pies) a lo largo del eje de la Calle 14 hasta llegar al monumento número "A-7" que consiste en un perno de latón situado en la intersección con la línea del cordón occidental de la Calle del Límite, proyectado hacia el Norte y que está a 9°21' más 427.830 metros (1403.64 pies) de Latitud Norte y 79°54' más 517.283 metros (1697.12 pies) de Longitud Occidental.

Desde allí, en dirección Sur, a lo largo del Cordón occidental de la Calle del Límite y su prolongación hasta el monumento número "A-4" que consiste en un perno de latón situado en la intersección de dos curvas a 9°21' más 254.042 metros (833.47 pies) de Latitud Norte y 79°54' más 298.991 metros (980.94 pies) de Longitud Occidental, pasando esta última línea por una curva a la izquierda con un radio de 12.436 metros (40.8 pies) y la intersección de sus tangentes en el punto "A-6" que está a 91°21' más 398.140 metros (1306.23 pies) de Latitud Norte y 79°54' más 508.825 metros (1669.37 pies) de Longitud Occidental, y una curva a la derecha con un radio de 463.907 metros (1522 pies) que tiene la intersección de sus tangentes en el punto "A-5" cuya Lati-

tud es de $9^{\circ}21'$ más 292.042 metros (968.14 pies) de Latitud Norte y $79^{\circ}54'$ más 337.076 metros (1105.89 pies) de Longitud Occidental.

Desde el punto "A-4" se sigue por una curva a la izquierda la cual tiene un radio de 79.919 metros (262.2 pies) y la intersección de sus tangentes en el punto "A-3" que está a $9^{\circ}21'$ más 234.413 metros (769.07 pies) de Latitud Norte y $79^{\circ}54'$ más 291.216 metros (955.43 pies) de Longitud Occidental; luego por una curva a la derecha la cual tiene un radio de 97.536 metros (320.00 pies) y la intersección de sus tangentes en el punto "A-2" que está a $9^{\circ}21'$ más 205.247 metros (673.38 pies) de Latitud Norte y $79^{\circ}54'$ más 254.935 metros (836.40 pies) de Longitud Occidental y luego por una curva a la izquierda la cual tiene un radio de 783.795 metros (2571.5 pies) y la intersección de sus tangentes en el punto "A-1" que está a $9^{\circ}21'$ más 92.096 metros (302.15 pies) de Latitud Norte y $79^{\circ}54'$ más 207.557 metros (680.96 pies) de Longitud Occidental llegando entonces al monumento denominado "A" que consiste en un perno redondo de latón de pulgada y media ubicado en el viejo muro frente al mar, que está a $9^{\circ}21'$ más 13.889 metros (45.60 pies) de Latitud Norte y $79^{\circ}54'$ más 148.636 metros (487.65 pies) de Longitud Occidental.

Desde allí con rumbo $S-21^{\circ}34'50''$ O y una distancia de 8.897 metros (29.19 pies) se llega a un punto no marcado denominado N°1;

Luego en dirección Sudeste, se mide una distancia de 7.090 metros (23.26 pies) a lo largo de una curva a la izquierda la cual tiene un radio de 791.409 metros (2596.48 pies) y cuya cuerda lleva la dirección $S-37^{\circ}28'20''$ E, y mide 7.090 metros (23.26 pies), hasta llegar a un punto no marcado denominado N°2, situado en el lindero sudoeste del Corredor de Colón, punto que está a $9^{\circ}21'$, más 0.000 metros (0.00 pies) de Latitud Norte.

La dirección de las líneas se refiere al meridiano verdadero.

Los linderos descritos arriba son los que aparecen en el Plano de la Compañía del Canal de Panamá N° 6117-22, titulado "Línea Limítrofe entre la ciudad de Colón y la Zona del Canal", escala 1 pulgada igual a 600 pies, fechado 23 de diciembre de 1954, preparado para el Gobierno de la Zona del Canal, el cual se agrega como anexo a este Tratado y forma parte del mismo".

El Artículo VIII del Tratado General firmado el 2 de marzo de 1936, tal como fue reformado por el Artículo III de la Convención firmada el 24 de mayo de 1950 entre los Estados Unidos de Amé-

rica y la República de Panamá, Artículo que se refiere al Corredor de Colón y a ciertos otros corredores a través de la Zona del Canal, queda modificado excluyéndose del extremo occidental o de Colón, del Corredor de Colón, la parte de dicho corredor que se encuentra al norte de la latitud 9°21' Norte, de manera que dicha parte quede dentro de los límites de la ciudad de Colón arriba descritos.

Este Artículo entrará en vigor al terminar la salida de los Estados Unidos de América de los sectores de la ciudad de Colón conocidos como Nuevo Cristóbal, Playa de Colón y el área de De Lesseps, a excepción de los lotes que retenga para usos consulares, pero queda entendido que en ningún caso entrará a regir antes del canje de ratificaciones de este Tratado y del canje de los instrumentos de ratificación de la Convención firmada el 24 de mayo de 1950 a la cual se refiere al anterior párrafo.

ARTÍCULO VII

El según párrafo del Artículo VII de la Convención de Límites suscrita el 2 de septiembre de 1914, entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá, quedará totalmente abrogada en la fecha en que entre en vigor del presente Tratado.

El muelle ubicado en la pequeña ensenada situada al sur de la Isla de Manzanillo, construido de conformidad con lo estipulado en el párrafo segundo del Artículo VII de la Convención de Límites de 1914, celebrada entre los dos países, pasará a ser propiedad de la República de Panamá en la fecha en que entre en vigor el presente Tratado.

ARTÍCULO VIII

- (a) La República de Panamá reservará exclusivamente para fines de maniobras y adiestramiento militares el área descrita en los mapas (N° SGN-7-54 y SGN-8-54, fechados ambos el 17 de noviembre de 1954) y las descripciones que los acompañan, preparados por la Comisión Catastral de la República de Panamá, anexos de este Tratado y permitirá a los Estados Unidos de América, sin costo y sin ningún gravamen, utilizar exclusivamente dicha área, para los fines indicados por un término de quince (15) años, prorrogable mediante acuerdo entre los dos Gobiernos. Esta autorización incluye el libre acceso a dicha área, la salida de ella y los movimientos dentro y sobre la misma. Esta autorización no afectará la soberanía de la Re-

- pública de Panamá ni la vigencia de la Constitución y leyes de la República sobre el área mencionada.
- (b) Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, los miembros de la misma y sus familias que realmente vivan con ellos, y los nacionales de los Estados Unidos de América al servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América o que acompañen a las mismas, con carácter oficial, y los miembros de sus familias que realmente vivan con ellos, estarán exentos dentro de dicha área de todo impuesto de la República de Panamá o de cualquiera subdivisión política de esta.
 - (c) Los Estados Unidos de América tendrán derecho, antes del vencimiento del término estipulado en este Artículo y dentro de un período razonable posterior al mismo y sin limitación ni restricción, a retirar de esta área de adiestramiento y maniobras toda estructura, instalación, obra, equipo y suministros llevados a dicha área de adiestramiento y maniobras o construidas o erigidas dentro de ella por los Estados Unidos o por cuenta de éstos, o a disponer de tales bienes en cualquier otra forma. La República de Panamá no estará obligada a reembolsar a los Estados Unidos de América por ninguna estructura, instalación, obra, equipo y suministros no retirados o de que no se haya dispuesto en otra forma según se estipula en este Artículo.
 - (d) Los Estados Unidos de América no estarán obligados a restaurar a su estado original esta área de adiestramiento y maniobras ni las obras o instalaciones en la misma al terminar la vigencia, de este Artículo, excepto la pista para aeronaves, la cual será devuelta por lo menos en las mismas condiciones en que se encuentra a la fecha de entrada en vigor de este Artículo.
 - (e) Las estipulaciones de este Artículo no invalidan ni modifican las estipulaciones referentes a la práctica de maniobras militares en la República de Panamá consignadas en el Canje de Notas accesorio al Tratado General firmado el 2 de marzo de 1936, salvo en cuanto a lo aquí estipulado respecto al área de adiestramiento y maniobras de que trata este Artículo.

ARTÍCULO IX

La República de Panamá renuncia al derecho que tiene según el Artículo XIX de la Convención suscrita el 18 de noviembre de 1903 al transporte por ferrocarril dentro de la Zona del Canal y sin costo alguno, de las personas al servicio de la República de Panamá o de la fuerza de policía encargada de mantener el orden

público fuera de la Zona del Canal, y de sus bagajes, municiones de guerra y provisiones.

ARTÍCULO X

Las Altas Partes Contratantes convienen en que, en el evento de que cesen las actividades del Ferrocarril de Panamá y de que los Estados Unidos de América construyan o terminen la construcción de una carretera estratégica a través del Istmo, totalmente dentro de la Zona del Canal, destinada a servir primordialmente para el funcionamiento, mantenimiento, gobierno civil, saneamiento y protección del Canal de Panamá y la Zona del Canal, los Estados Unidos podrán a su discreción, y no obstante cualquier estipulación contraria del Artículo VI de la Convención firmada el 18 de noviembre de 1903, prohibir o restringir el uso del tramo de la referida carretera comprendida entre Mount Hope, Zona del Canal, y el cruce de dicha carretera con la sección de la Carretera Transísmica que queda en la Zona del Canal y a la cual se refiere la Convención sobre Carretera Transísmica entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá, firmada el 2 de marzo de 1936, por autobuses o camiones que al tiempo de usar dicho tramo no esté dedicados exclusivamente a servir las instalaciones, obras o residentes de la Zona del Canal o al transporte de suministros para las mismas.

ARTÍCULO XI

No obstante las estipulaciones del Artículo III del Tratado General firmado el 2 de marzo de 1936, la República de Panamá conviene en que los Estados Unidos de América podrán hacer extensivo al personal militar de otras naciones amigas que se encuentren en la Zona del Canal bajo el auspicio de los Estados Unidos de América el privilegio de comprar en los puestos de ventas militares artículos menudos de su conveniencia personal y artículos necesarios para uso profesional.

ARTÍCULO XII

Los Estados Unidos de América convienen en que, a partir del 31 de diciembre de 1956, quedarán excluidas del privilegio de hacer compras en los comisariatos y en otros establecimientos de venta en la Zona del Canal, así como del de hacer importaciones a la Zona del Canal, todas las personas que no sean ciudadanos de los Estados Unidos de América y que no residan realmente en la

Zona del Canal, excepto los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, aunque tales personas estén incluidas en las categorías de personas autorizadas para residir en dicha Zona, quedando entendido, sin embargo, que al personal de la agencias de los Estados Unidos de América se les permitirá, bajo restricciones adecuadas, la compra de artículos de escaso valor tales como comida servida, pastillas, gomas de mascar, tabaco y artículos similares, cerca del lugar de su trabajo.

Los Estados Unidos de América convienen además en que, a partir del 31 de diciembre de 1956 y no obstante las estipulaciones del primer párrafo del Artículo IV del Tratado General firmado el 2 de marzo de 1936, el Gobierno de la República de Panamá podrá imponer derechos de importación y otros gravámenes a mercancías remitidas o consignadas a personas que no sean ciudadanos de los Estados Unidos de América, incluidas en la clase (a) de la Sección 2 del Artículo III de dicho Tratado, que residan o se hallen temporalmente en territorio sujeto a la jurisdicción de la República de Panamá mientras presten sus servicios a los Estados Unidos de América o a sus agencias, aunque tales mercancías sean destinadas al uso y beneficio exclusivo de esas personas.

ARTÍCULO XIII

El presente Tratado está sujeto a ratificación y los instrumentos de ratificación serán canjeados en Washington. El Tratado entrará en vigor en la fecha del canje de los instrumentos de ratificación.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios han firmado este Tratado en duplico, en Inglés y en Español, siendo ambos textos auténticos, y han estampado en él sus sellos.

Hecho en la Ciudad de Panamá, a los 25 días del mes de enero de 1955.

Por los Estados Unidos de América,
(Seal) SELDEN CHAPIN

Por la República de Panamá,
(Seal) OCTAVIO FÁBREGA



**MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTOS
ACORDADOS ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
FIRMADO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ
EL 25 DE ENERO DE 1955***

En relación con las negociaciones llevadas a cabo durante los años 1953 y 1954 entre representantes de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América, las cuales han dado por resultado la celebración de un Tratado entre los dos países, se ha llegado a los siguientes entendimiento:

De parte de los Estados Unidos de América:

1. Se solicitará la expedición de la ley o leyes que autoricen a cada una de las agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América en la Zona del Canal para conformar las prácticas a que sigan en materia de salarios en la Zona del Canal a los siguientes principios:
 - a) El salario básico de toda categoría será siempre el mismo para todo empleado elegible para nombramiento para el cargo, ya sea ciudadano de la República de Panamá o de los Estados Unidos de América.
 - b) En el caso de empleados que sean ciudadanos de los Estados Unidos de América puede agregarse al salario básico un aumento que represente una diferencia por razón de su traslado, más una asignación por razón de aquellos elementos que, como los impuestos, resulten en una reducción de la renta disponible de tales empleados en comparación con los empleados residentes en la región.
 - c) Los empleados que sean ciudadanos de Estados Unidos de América podrán también recibir mayores beneficios de licencia anual y viáticos, por razón de la necesidad de vacaciones periódicas en los Estados Unidos de América para fines de recuperación y para que dichos empleados mantengan contacto con su hogar.

Se solicitará la expedición de la ley o leyes que permitan que la Ley de Jubilaciones por Servicio Civil sea aplicable por igual a los ciudadanos de la República de Panamá y de los Estados Unidos de

* Ministerio de Relaciones Exteriores. MEMORIA. Panamá, 1961, pp. 106-112.

América empleados en la Zona del Canal por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Los Estados Unidos de América proporcionarán a los ciudadanos de la República de Panamá igualdad de oportunidades para empleo en todos los cargos del Gobierno de los Estados Unidos de América en la Zona del Canal para los cuales estén capacitados y en los cuales, a juicio de los Estados Unidos de América, no se requiera el empleo de ciudadanos de los Estados Unidos de América por razones de seguridad.

Las agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América evaluarán, clasificarán y darán denominación a todos los empleos en la Zona del Canal, sin consideración a la nacionalidad de quien los desempeñe o hubiere de desempeñarlos.

Se proporcionará a los ciudadanos de Panamá oportunidad de participar en los programas de adiestramiento de empleados que desarrollen las agencias de los Estados Unidos de América en la Zona del Canal.

2. Con referencia a la parte del Artículo V del Tratado suscrito hoy que trata del traspaso a la República de Panamá, libres de costo, de todos los derechos, títulos e intereses que tengan los Estados Unidos de América o sus agencias sobre ciertas tierras y mejoras situadas en territorio bajo la jurisdicción de la República de Panamá, se tomarán las medidas que se disponen en este Punto.

a) Se solicitará la expedición de la ley o leyes que autoricen y ordenen el traspaso a la República de Panamá de todos los derechos, títulos e intereses que tengan los Estados Unidos de América o sus agencias sobre los siguientes bienes raíces:

1. Los terrenos «J. N. Viallette» y «Huerta de Sandoval», en la ciudad de Panamá y de «El Aspinwall» en la Isla de Taboga.

2. Las reservas militares denominadas «Las Isletas» y «Santa Catalina» en la Isla de Taboga. Este traspaso incluirá las servidumbres para cable que tienen una anchura de 6.10 metros (20 pies) y comprenden desde la Reserva Militar de la Ensenada de Ancón hasta la Reserva Militar de Santa Catalina, y desde la Reserva Militar de El Vigía hasta la Reserva Militar de las Isletas.

3. El lote en Colón actualmente reservado para usos consulares.

4. Ciertas tierras situadas en la orilla occidental de la ciudad de Colón que se describen aproximadamente como comprendidas entre el lindero Sur del área conocida con el nombre de «De Lesseps» (extensión de la Calle 4ª) y el límite entre Colón y la Zona del Canal, y colindante por el Este con el muro oriental del antiguo edificio de depósito y más abajo de dicho edificio, con una línea que queda a 7.622 metros (25 pies) al Oeste de la línea central de la carretera situada más hacia el Oeste. Este traspaso incluirá las mejoras que consisten en el antiguo edificio de depósito y el Muelle Nº 3 de Colón.
- b) Se solicitará la expedición de ley o leyes que autoricen y ordenen a la Compañía del Canal de Panamá que traslade sus operaciones terminales de ferrocarril de la ciudad de Panamá y que transfiera a la República de Panamá, libres de costo, todos los derechos, títulos e intereses de la Compañía del Canal de Panamá sobre las tierras conocidas como Patios del Ferrocarril de Panamá, con las mejoras en ellas existentes, inclusive la estación de pasajeros.
Esta medida relevará además al Gobierno de la República de Panamá de la obligación de suministrar libre de costo al Gobierno de los Estados Unidos de América un nuevo sitio adecuado para dichas instalaciones terminales, de conformidad con el Punto 10 del Convenio General de las Relaciones entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América firmado el 18 de mayo de 1942.
- c) Con respecto a las áreas de la ciudad de Colón denominadas «De Lesseps», «Playa de Colón» y «Nuevo Cristóbal» (exceptuando dos lotes en el área de «De Lesseps» que los Estados Unidos de América se proponen destinar a usos consulares) se solicitará la expedición de la ley o leyes que autoricen y ordenen la salida gradual de dichas áreas y el traspaso a la República de Panamá, libres de costo, de todos los derechos, títulos e intereses de los Estados Unidos de América y de su agencia, la Compañía del Canal de Panamá, sobre las tierras y las mejoras allí existentes. De conformidad con este proceso de salida gradual, ni el Gobierno de los Estados Unidos de América ni sus agencias quedarán obligados a levantar nuevas edificaciones en dichas áreas y, a medida que dejen de necesitarse partes separables de las mismas, se traspasarán las tierras y sus

mejoras. El carácter de separable de partes de dichas áreas depende de varias consideraciones prácticas actuales de los Estados Unidos de América con respecto a los sistemas de acueducto y albañales, a limpieza y pavimentación de calles, al suministro de agua, etc., en dichas áreas, según se estipuló en el Instrumento de Traspaso de los Sistemas de Acueductos y Albañales suscrito por el Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá y el Gobernador del Canal de Panamá el 28 de diciembre de 1945.

- d) Con respecto al sitio de la estación de pasajeros del ferrocarril en la ciudad de Colón y al edificio allí existente, se solicitará la expedición de la ley o leyes que autoricen y ordenen la salida de dicho sitio y edificio en la fecha en que se hubiere terminado la salida de las áreas denominadas «De Lesseps», «Playa de Colón» y «Nuevo Cristóbal» de que trata el parágrafo precedente, y que autoricen y ordenen el traspaso a la República de Panamá, libres de costo, de todos los derechos, títulos e intereses de los Estados Unidos de América y de su agencia la Compañía del Canal de Panamá, sobre dichos sitios y edificios. Sin embargo, los carriles y área de carrilera de Colón que se requieren para el cambio de vías al servicio de los muelles de Cristóbal, serán retenidos para tal propósito.
 - e) Todos los traspasos de tierras y mejoras que, previa autorización y mandato legislativo, se tienen en mira en este Punto, quedarán necesariamente sujetos a los arrendamientos que estén en vigor en las áreas respectivas, y contendrán también estipulaciones que pongan al Gobierno de los Estados Unidos de América a salvo de toda reclamación de parte de los arrendatarios por daños y pérdidas que puedan surgir como resultado de dichos traspasos.
 - f) Los traspasos que, previa autorización legislativa, se tienen en mira en este Punto son en adición al traspaso de la Punta Paitilla de que trata específicamente el Artículo V del Tratado suscrito hoy y al traspaso de bienes raíces estipulado en el Artículo VI de dicho Tratado.
3. Los artículos, materiales y abastos extraídos, producidos o manufacturados en la República de Panamá y que se comprenden para ser usados en la Zona del Canal, estarán exentos de las disposiciones de la ley de los Estados Unidos de América denominada «Buy American Act».

4. Con referencia al Canje de Notas de 2 de marzo de 1936, accesorio al Tratado General entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América, firmado en esa fecha, y relativo a la venta a las naves de artículos importados a la Zona del Canal por el Gobierno de los Estados Unidos de América, los Estados Unidos de América convienen en que a partir del 31 de diciembre de 1956 y en beneficio del comercio panameño dejarán totalmente de hacer ventas a las naves, y de la fecha expresada en adelante se abstendrán de hacer tales ventas, siempre que lo dispuesto en este Punto no se aplique:
 - a) a la venta a naves manejadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América o por cuenta de éstos;
 - b) a la venta de combustibles lubricantes; y
 - c) a la venta o suministro de efectos navales que sea incidental a las operaciones de reparación de naves que efectúe cualquier agencia del Gobierno de los Estados Unidos de América.
5. Se solicitará autorización legislativa y la partida necesaria para la construcción de un puente en Balboa al cual se hace referencia en el Punto 4 del Convenio General de Relaciones de 1942.
6. Los Estados Unidos de América convienen en que, a partir del 31 de diciembre de 1956, retirarán a las personas empleadas por agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América en la Zona del Canal que no sean ciudadanos de los Estados Unidos de América y que no residan realmente en la Zona del Canal el privilegio de recibir los servicios que sean ofrecidos dentro de dicha Zona, excepto aquellos que sean necesarios para la salud de dichas personas y para permitirles el cumplimiento de las obligaciones de su trabajo.
7. La política de las agencias del Canal de Panamá y la de las Fuerzas Armadas en la Zona del Canal, al hacer compras de materiales, abastos y equipo, y en cuanto lo permita la legislación de los Estados Unidos de América, es y continuará siendo la de proporcionar a la economía de la República de Panamá plena oportunidad de competir en estos negocios.
8. Con referencia general a la cuestión de importación de mercaderías para su reventa en los establecimientos de venta de la Zona del Canal, lo práctico que seguirán las agencias correspondientes será la de adquirir dichas mercaderías ya sea de fuentes de los Estados Unidos de América o de fuentes de la

República de Panamá salvo que, en ciertos casos, no fuera factible hacerlo aquí.

9. Con respecto a la manufactura y tratamiento de artículos para la venta a particulares o para el consumo de éstos, que actualmente llevan a cabo la Compañía del Canal de Panamá la política que seguirán los Estados Unidos de América será la de terminar dichas actividades siempre que, y mientras que, dichos artículos o clases determinadas de ellos, pueda, según determinación de los Estados Unidos de América, obtenerse en la República de Panamá de modo continuo, en cantidad y calidad satisfactorias y a precios razonables. Los Estados Unidos de América darán pronta consideración a la solicitud escrita que le haga el Gobierno de la República de Panamá respecto a la terminación de la manufactura o tratamiento a que este punto se refiere y respecto a los cuales el Gobierno de la República de Panamá considere que se han observado las normas especificadas en este Punto.
10. Será objeto de pronta consideración la cesación de las actividades de trasbordo de carga comercial en los muelles de la Zona del Canal tan pronto como funcionen satisfactoriamente en Colón obras portuarias panameñas.
11. Los Estados Unidos de América convienen en que la expresión «obras auxiliares» que se usa en el Tratado incluye a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América.

De parte de la República de Panamá:

1. La República de Panamá dará en arrendamiento a los Estados Unidos de América, mediante la estipulación nominal de sólo un balboas y sin ningún otro costo, por el término de 99 años, dos parcelas de terreno contiguas al sitio actual de la residencia de la Embajada de los Estados Unidos de América, según se designa en el plano (Nº SGN-9-54, de fecha 19 de noviembre de 1954) y en las descripciones que lo acompañan, preparados por la Comisión Catastral de la República de Panamá, que se anexan:
2. La República de Panamá asegura a los Estados Unidos de América que el terreno descrito en el plano (Nº SGN-6-54, de fecha octubre 1954) y en la descripción que lo acompaña preparados por la Comisión Catastral de la República de Panamá, que se anexan, que queda frente al edificio de oficinas de la Embajada de los Estados Unidos de América y comprendido entre la Bahía de Panamá y la Avenida Bal-

boa, en cuanto ésta pueda prolongarse entre las Calles 37 y 39, será mantenido permanentemente como parque y no será utilizado para fines comerciales o residenciales.

3. Mientras los Estados Unidos de América mantengan en vigor las disposiciones de la Orden Ejecutiva Nº 6997, del 25 de marzo de 1935, que tratan de la importación de bebidas alcohólicas a la Zona del Canal, la República de Panamá otorgará una reducción de 75% del derecho de importación sobre bebidas alcohólicas que sean vendidas en Panamá para importación a la Zona del Canal de conformidad con dicha Orden Ejecutiva.
4. En relación con la autorización otorgada a los Estados Unidos de América por el Artículo VIII del Tratado, los Estados Unidos de América tendrán libre acceso a las áreas de playa contiguas al área de maniobras descrita en dicho Artículo VIII para fines relacionados con adiestramiento y maniobras, con sujeción al uso público de dicha playa consagrado por la Constitución de la República de Panamá.

Las estipulaciones de este Memorándum de Entendimientos acordados entrarán a regir al efectuarse el canje de los instrumentos de ratificación del Tratado suscrito hoy entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América.

HECHO en duplicado en la ciudad de Panamá, en Español y en Inglés, a los 25 días del mes de enero de 1955.

POR LA REPÚBLICA DE PANAMÁ:

(fdo.) *Octavio Fábrega*.

Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá

POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:

(fdo.) *Selden Chapin*.

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Panamá.

IIIª Parte

La eclosión
nacionalista del
9 de enero de 1964

1

Revisión de los Tratados

(1961)

Panamá, 8 de septiembre de 1961.

Excelentísimo Señor Presidente:

Las relaciones entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América vienen rigiéndose, en lo fundamental y desde 1903, por la Convención del Canal Ístmico, suscrita en Washington el 18 de noviembre de ese año, entre el Secretario de Estado, señor John Hay, y el ciudadano francés Philippe Bunau Varilla, quien actuaba temporalmente como enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Panamá.

Las cláusulas de esa Convención han sido, desde el momento de su firma, y seguirán siendo, mientras tengan vigencia, motivo de constantes fricciones, desaveniencias y conflictos entre ambos gobiernos y entre el pueblo panameño y la población norteamericana que reside en la Zona del Canal.

En 1936 Panamá logró, gracias a la labor tesonera del entonces Presidente de Panamá, Dr. Harmodio Arias, y de sus colaboradores, Doctores Ricardo J. Alfaro y Narciso Garay, y gracias también a la clara comprensión, al amplio espíritu justiciero y a la gran bondad del Presidente Franklin D. Roosevelt, suprimir tres derechos que la Convención de 1903 otorgó al Gobierno de los Estados Unidos, a saber: (A) El derecho a intervenir en los asuntos internos de la República de Panamá cuando a juicio de los Estados Unidos fuera ello necesario para mantener el orden; (B) El derecho a ocupar cualesquiera tierras y aguas panameñas que a juicio de los Estados fueran necesarias para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y defensa del Canal; (C) El derecho de 'construcción' de un canal a través del Istmo de Panamá.

En 1936, y más tarde en 1942 y en 1955, Panamá logró también otras modificaciones de detalle en cuanto a la interpretación

* Moreno C., Manuel B. *Op. cit.*, pp. 242-253.

y manera de aplicar algunas disposiciones de la Convención de 1903.

Pero todavía están en plena vigencia las estipulaciones de esa Convención que en la práctica han tenido y tienen el efecto de haber dividido a la República de Panamá en dos partes separadas mediante la intercalación, entre ellas, de una zona en la cual el Gobierno de los Estados Unidos se considera con derecho al ejercicio de plena autoridad y plena jurisdicción soberanos, no obstante que todos los derechos que le fueron concedidos por Panamá están limitados a los fines, expresamente pactados, de mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y defensa del Canal.

La verdadera causa de todos los vicios y errores de la Convención de 1903, radica en que tal Convención nunca fue negociada. Cuando, inmediatamente después de proclamada la independencia de Panamá, llegaron a Washington los representantes panameños enviados para negociar el Tratado, se encontraron ante la trágica sorpresa de que el día anterior, cuando acababan de llegar ellos al Puerto de Nueva York, el Secretario de Estado John Hay y el francés Bunau Varilla habían firmado precipitadamente la «Convención del Canal Istmico» sin ninguna negociación previa sino mediante una rápida confabulación entre ellos dos, que entregaban a merced del Gobierno de los Estados Unidos, a perpetuidad, como si pudiera haber cosas humanas perpetuas.

Por estas razones, esa Convención Istmica de 1903, conlleva en sí misma las causas de su propia extinción.

No es necesario que yo entre en detalles sobre la manera como se escribió y firmó esa Convención, porque ellos constan en los anales del Congreso de los Estados Unidos.

Fue posible que se suscribiera e impusiera a Panamá esa convención totalmente injusta, porque al comenzar este siglo llegó a su apogeo en el mundo la expansión colonialista de los Estados fuertes en detrimento de las Naciones débiles por la ignorancia y sumisión de las masas populares. En aquella época, ninguna voz se levantaba para acudir en auxilio eficaz de países sometidos, por la fuerza bruta o por circunstancias insalvables, a la dominación de un Estado Poderoso.

Después de medio siglo y de dos guerras mundiales, el panorama es totalmente diferente: las colonias están acabando de desaparecer, el respeto a la personalidad de cada Estado es ya axioma en Derecho Internacional, el principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado se ha abierto paso victoriosamente, y la

estructura de la organización mundial de las naciones está demostrando, cada vez con mayor eficiencia, la influencia de las naciones pequeñas unidas, en los problemas y conflictos internacionales.

No cabe ya en la mentalidad del hombre de esta segunda mitad del Siglo XX, la tesis de que un Estado, por fuerte que sea, pueda ejercer derechos soberanos sobre ninguna parte del territorio de otro Estado, por pequeño y débil que éste sea.

Esto no quiere decir, sin embargo, que si dos Estados soberanos e independientes tienen intereses comunes, no puedan llegar a entendimientos que, sin herir la soberanía y la dignidad de ninguno de los dos, permitan a ambos defender y amparar sus justos intereses y derechos sin desconocer o dañar los justos intereses y derechos del otro.

Fue por estas razones por las que, ante la indisoluble comunidad de intereses de Panamá y Estados Unidos; ante la necesidad cada vez más apremiante de establecer y mantener relaciones recíprocas en un pie de sincera amistad, de mutuo respeto y de bien correspondida consideración; y ante la permanente fuente de discordias que es la Convención de 1903. Me permití enviaros por conducto de Vuestro representante personal a la Conferencia de Ministros de Relaciones y de Economía celebrada en Tegucigalpa en julio del presente año, mi mensaje personal para sugeriros lo conveniente y necesario que es que Panamá y Estados Unidos dialoguen sin prejuicios, sin resentimientos, con olvido de los problemas y agravios del pasado, como naciones sinceramente amigas y sinceramente empeñadas en buscar soluciones justas, para analizar y discutir sus relaciones hoy día, a la luz de las doctrinas que rigen ahora en el Mundo, con miras a lograr entendimiento permanentes, sobre bases justas, que garanticen a cada parte la obtención y el disfrute de lo que en justicia y en equidad a cada una corresponde, sin agenda previa, de modo que cada parte pueda poner con franqueza las cartas que quiera sobre la mesa.

Abrigo la más íntima confianza de que si Panamá y los Estados Unidos echan a un lado las interminables y hasta ahora casi infructuosas discusiones sobre lo que debe ser la correcta interpretación de los Tratados existentes, y se disponen a abordar el análisis de las relaciones existentes entre ambos con criterio realista y a la luz de los principios y normas de Derecho Internacional, ya universalmente admitidas, encontrarán las fórmulas adecuadas para resolver, una vez por todas y para siempre, una convivencia estable y duradera que les permita cumplir armónicamente

el destino común que la existencia del Canal de Panamá les impone. El prejuicio, fundado e infundado, de que tales resultados puedan ser de difícil o imposible alcance, no debe ser obstáculo para que se haga el esfuerzo de intentarlo.

La «Alianza para el Progreso», que propusisteis con tanto acierto y que, con la cooperación de todas las naciones americanas ha sido puesta en marcha en Montevideo, no podría encontrar mejor y más ejemplar realización en las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos que buscando la fórmula que coloque esas relaciones en un plan de claros y justos entendimientos que permitan a Panamá el mayor uso de sus potenciales económicos, sin restar la debida consideración a los intereses de los Estados Unidos por razón de la obra del Canal que ambos países hicieron posible y en cuya operación tienen interés común.

Es para mí motivo de verdadera complacencia aprovechar esta ocasión para reiteraros los sentimientos de mi más alta consideración y elevado aprecio.

ROBERTO F. CHIARI

Presidente de la República de Panamá

Al Excelentísimo Señor

John F. Kennedy,

Presidente de los Estados Unidos de América

The White House,

Washington, D.C.

• • • • •

LA CASA BLANCA

Washington

2 de noviembre.

Mi querido señor Presidente:

He leído con gran interés su carta del 8 de septiembre de 1961, que me fue entregada por su hermano el día 15 de septiembre. Estoy además sumamente complacido de haber conversado con su hermano en esa oportunidad.

Estoy de acuerdo con usted en que entre la República de Pa-

namá y los Estados Unidos existe una poco usual comunidad de intereses. Desde el nacimiento de su Nación nuestros respectivos Gobiernos y pueblos han mantenido estrecha asociación. El Canal de Panamá ha sido factor de importancia en el desarrollo y robustecimiento de las relaciones entre nuestros países, y ha contribuido, además a afianzar los lazos de unión que ligan a todas las Repúblicas Americanas.

El Gobierno de los Estados Unidos aspira a mantener y fortalecer las relaciones entre nuestras dos naciones cimentándolas en el mutuo respeto y la amistad sincera. Abrigo la seguridad de que el Gobierno de Panamá también comparte este sentimiento.

Una vez más, a nombre del Gobierno de los Estados Unidos, yo realirmo nuestro propósito de cooperar en forma decidida con el Gobierno de Panamá a fin de garantizarle un aprovechamiento total de los diversos beneficios que el Canal debe proporcionar a las dos naciones que hicieron posible su construcción. Además deseamos que estos beneficios también alcancen a todas las naciones con intereses en el comercio internacional

Como le señalé a su hermano el 15 de septiembre, yo comprendo que la histórica amistad y cooperación entre nuestros dos países, en ocasiones ha sido empañada debido a diferencias de interpretación en cuanto a los derechos conferidos a los Estados Unidos por la República de Panamá. En el pasado estos problemas han sido resueltos de diversas formas —algunas veces a través de negociaciones formales y tratados y otras veces por medio de discusiones amigables y la subsiguiente adopción de medidas específicas acordadas por los representantes de los dos gobiernos.

Mi Gobierno reconoce que diferencias inevitables suelen ocurrir aún entre las naciones más amigas, y cree que estas diferencias deben ser discutidas a fondo y en una forma franca, a fin de aclarar los intereses y actitudes de cada una de las partes. En consecuencia, pareciera evidente que cuando dos naciones amigas se encuentran ligadas por disposiciones de tratados que no son plenamente satisfactorias para una de las partes, deben hacerse arreglos que permitan que representantes autorizados de ambas naciones discutan estos puntos de divergencias con miras a encontrarles solución.

He impartido instrucciones a los distintos Departamentos y Agencias pertinentes del Gobierno de los Estados Unidos a fin de que lleven a cabo una revisión completa de nuestras necesidades actuales y futuras en relación con las facilidades del Canal Ístmico.

Espero que este estudio estará terminado dentro de pocos meses, y en esa oportunidad mi Gobierno se comunicará prontamente con el Gobierno de Panamá. Abrigo la confianza de que los representantes de nuestros dos Gobiernos, después de un franco intercambio de puntos de vista y una cuidadosa consideración de nuestras mutuas necesidades e intereses, lograrán conclusiones fructíferas que habrán de promover el bienestar de ambos países.

Con cordiales saludos,
Sinceramente,

JOHN F. KENNEDY

A su Excelencia
Roberto F. Chiari
presidente de la República
de Panamá.

.....

30 de abril de 1962.

Querido Señor Presidente:

En respuesta a su carta del 8 de septiembre de 1961, concerniente a las relaciones entre nuestros dos países, le escribí a usted el día 2 de noviembre manifestándole que mi Gobierno se pondría en comunicación con el Gobierno de Panamá, tan pronto como los distintos departamento y agencias pertinentes del Gobierno de los Estados Unidos hubieran efectuado una revisión completa de las necesidades presentes y futuras en relación con las facilidades del Canal Ístmico. Le expresé mi confianza en que representantes de nuestros dos Gobiernos, después de un franco intercambio de puntos de vista y una cuidadosa consideración de las necesidades e intereses mutuos, pudieran alcanzar conclusiones fructíferas para mutuo beneficio de nuestros países. La revisión de las presentes y futuras necesidades acaba de ser terminada, y me apresuro a informar a usted de sus resultados.

La cuestión central ha consistido en la posibilidad de construir en el futuro un Canal Interoceánico a nivel en la región del Istmo. No dudo de que usted estará de acuerdo en que la respues-

ta a esta importante cuestión tiene una trascendental importancia tanto para panamá como para los Estados Unidos, así como para todos los demás países del hemisferio. Debido a esta realidad, sólo después de un exhaustivo estudio del problema es posible tomar una decisión. Para arribar a una solución, es necesario considerar las siguientes circunstancias: (1) La función del Canal de Panamá en el tráfico del comercio universal y el desarrollo económico mundial y el posible impacto que en el futuro podrían tener las limitaciones del actual canal de esclusas; (2) Los adelantos tecnológicos en los transportes que podrían tener repercusiones en el transporte marítimo de productos; (3) Los medios más factibles de construir y financiar el canal a nivel, localización de las rutas y costos; y (4) los efectos que el proyecto en si habrá de tener en los países directamente interesados, particularmente en Panamá. El estudio recientemente terminado por el Gobierno de los Estados Unidos ha demostrado la necesidad de un mayor acopio de informaciones sobre las cuestiones antes mencionadas, antes de adoptar una decisión, y los Estudios para obtener dichas informaciones serán iniciados de inmediato.

Estamos viviendo en una era en que cada nuevo día nos ofrece avances tecnológicos y científicos, particularmente en el campo de los transportes. En el curso de la última década, hemos presenciado radicales innovaciones en el acarreo tanto de personas como de bienes en toda fronteras del espacio; y es imposible predecir aún cuál será el impacto futuro de estos viajes. Confío en que los estudios que nos proponemos efectuar habrán de arrojar luces sobre la aplicación de nuevos recursos al tráfico marítimo del futuro y como consecuencia, a las necesidades del nuevo canal. Con fundamento en estos estudios estaremos en condiciones de adoptar decisiones consonas con el mundo en que vivimos y propiciar el incremento de las buenas relaciones entre nuestros dos países. Los efectos de los recientes adelantos tecnológicos deben ser debidamente evaluados antes de tomar una decisión con respecto al Canal a nivel. Según nuestros cálculos es necesario efectuar investigaciones sobre cuestiones científicas y de ingeniería por varios años a fin de completar esta evaluación.

Considero, entre tanto, que existe un número de medidas transitorias que podrían ser discutidas provechosamente por representantes de nuestros dos gobiernos, con miras a mantener y estrechar las relaciones con fundamento en el respeto mutuo y la sincera amistad. Me sentiría en alto grado complacido y honrado

si usted aceptara una invitación para visitar los Estados Unidos durante los primeros días del mes de junio me permito sugerirle, si es conveniente para usted, del 12 al 18 de junio. En esa oportunidad, podremos personalmente exponer nuestros puntos de vista sobre los programas para obtener las informaciones necesarias para un posible futuro canal a nivel, así como sobre otras áreas de discusión que podrán ser consideradas por los representantes con miras a obtener mutuos beneficios para nuestros dos países.

Sinceramente,

JOHN F. KENNEDY

A su Excelencia
Roberto F. Chiari
Presidente de la
República de Panamá

.....

Panamá, mayo 17 de 1962.

Excelentísimo Señor Presidente:

De manos del Embajador de los Estados Unidos de América, recibí la atenta carta que su Excelencia me ha enviado con fecha 30 de abril.

El día 8 de septiembre de 1961 remití a Su Excelencia carta personal en la cual, después de algunas consideraciones sobre las relaciones existentes entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América y sobre los Tratados que rigen esas relaciones, sugerí a su Excelencia la conveniencia y la necesidad de que nuestros dos Gobiernos dialoguen 'para analizar y discutir sus relaciones hoy día, a la luz de las doctrinas que rigen ahora en el Mundo, con miras a lograr entendimientos permanentes, sobre bases justas, que garanticen a cada parte la obtención y el disfrute de lo que en justicia y en equidad a cada una corresponde, sin agenda previa, de modo que cada parte pueda poner con franqueza las cartas que quiera sobre la mesa'.

Agregué en dicha carta que abrigó la más íntima confianza de que si Panamá y los Estados Unidos echan a un lado las intermi-

nables y hasta ahora casi infructuosas discusiones sobre lo que debe ser la correcta interpretación de los tratados existentes, y se disponen a abordar el análisis de las relaciones existentes entre ambos con criterio realista y a la luz de los principios y normas del Derecho Internacional, ya universalmente admitidas, encontrarán las fórmulas adecuadas para resolver, una vez por todas y para siempre, una convivencia estable y duradera que les permita cumplir armónicamente el destino común que la existencia del Canal de Panamá les impone.

En contestación a esa carta mía del 8 de septiembre del año pasado, recibí la de Su Excelencia, fechada el día 2 de noviembre del mismo año, en la cual me manifestó que su Gobierno se comunicaría con el Gobierno de Panamá, tan pronto como varios departamentos y agencias responsables del Gobierno de los Estados Unidos hubieran hecho un completo reexamen de las necesidades corrientes y futuras con respecto a facilidades del Canal Istmico.

En su reciente carta de este mes, Su Excelencia me informa que ese reexamen de las necesidades corrientes y futuras ha sido completado y que se apresura a informarme los resultados.

Me manifiesta su Excelencia que la cuestión central ha sido la posible futura necesidad de construir un canal a nivel en la región del Istmo, y después de avanzar consideraciones sobre esta cuestión, concluye que la mejor estimación es la de que se necesitarán investigaciones científicas y de ingeniería por un período de años para completar la evaluación.

Agrega Su Excelencia que hay un número de medidas internas que pueden ser discutidas fructuosamente entre nuestros dos Gobiernos para mantener y fortalecer relaciones a base de mutuo respeto y sincera amistad.

Termina Su Excelencia su carta expresando su agrado si yo aceptara una invitación para visitar los Estados Unidos en el mes de junio y sugiere las fechas del 12 al 18 de dicho mes para ese efecto, e insinúa que durante esa visita podríamos intercambiar puntos de vista sobre programas para obtener datos relativos a un posible futuro canal a nivel y sobre áreas para discusión por representantes nuestros con miras al mutuo beneficio de nuestros dos países.

Desde luego, sería para mí muy grato y honroso aceptar la invitación que Su Excelencia me hiciera para visitar los Estados Unidos, lo que me proporcionaría la singular oportunidad de re-

unirme con Su Excelencia y de tratar cuestiones y problemas que para Panamá son de vital y fundamental importancia, derivados de la existencia del Canal de Panamá dentro de territorio panameño, construido, operado y mantenido por el Gobierno de los Estados Unidos, cuestiones y problemas que constituyen las causas que determinan la falta de un completo y cordial entendimiento entre Panamá y los Estados Unidos, y que sólo podrán solucionarse mediante una revisión integral de los tratados existentes.

En lo que respecta a un posible canal a nivel, mi Gobierno considera que cualquier pronunciamiento de su parte sobre esta cuestión sería prematuro, porque la iniciativa en cuanto a la posibilidad, necesidad y conveniencia de construir ese nuevo canal corresponde al Gobierno de los Estados Unidos de América. Sólo cuando ese Gobierno haya llegado a conclusiones al respecto, se justificaría que Panamá estuviera anuente a discutir y negociar el convenio o convenios necesarios para la ejecución de esa nueva obra; y, sin duda alguna, lo haría con el mismo espíritu de cooperación franca, leal y sincera, para con los Estados Unidos, que invariablemente ha demostrado desde que se inició la construcción del presente canal de esclusas hasta ahora; pero sin las estipulaciones lesivas al prestigio y a la dignidad de la República de Panamá que aparecen todavía en los tratados que hoy rigen entre nuestros dos países.

Estoy plenamente de acuerdo con Su Excelencia en que, independientemente de la cuestión de un posible canal a nivel, hay un número de cuestiones que pueden ser discutidas por representantes de nuestros dos Gobiernos en busca de soluciones que mantengan y fortalezcan sus relaciones a base de mutuo respeto y de sincera amistad, pero esto implicaría, como ya le he expresado, la revisión de los tratados existentes entre nuestras dos naciones.

En cualquier reunión de representantes de nuestros Gobiernos para discutir cuestiones relativas a las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos derivadas de los instrumentos vigentes sobre el Canal de Panamá, los representantes panameños tendrán que actuar dentro del espíritu claramente expuesto en mi carta para Su Excelencia fechada el 8 de noviembre de 1961, por medio de la cual me permití tomar una iniciativa que ha tenido la buena fortuna de culminar en la sugestión, honrosa para mí, que Su Excelencia hace de una invitación que me sería hecha para visitar los Estados Unidos.

Reitero a Su Excelencia que me sería grato y honroso aceptar tal invitación, y que, además del placer que sería para mí conocer

personalmente a Su Excelencia, la visita me proporcionaría una oportuna ocasión para someter a su consideración, con sinceridad y franqueza, las quejas y aspiraciones de Panamá, para encontrar, en un plano de equidad y de justicia, las soluciones y remedios que logren mantener y fortalecer, en forma estable y duradera, las relaciones entre nuestros dos países a base de respeto mutuo y de verdadera y sincera amistad.

Ruego a Su Excelencia recibir y aceptar las seguridades de mi más alta consideración y aprecio.

ROBERTO F. CHIARI

Presidente de la República de Panamá

Excelentísimo Señor

John F. Kennedy

Presidente de los Estados Unidos de América,

Washington, D.C.

.....

LA CASA BLANCA, 25 de mayo de 1962

Querido Señor Presidente:

Me he sentido complacido al enterarme por su carta del 17 de mayo que usted ha aceptado mi invitación para visitar los Estados Unidos, y deseo anticiparle la más cordial bienvenida.

Me siento agradecido de la oportunidad que se me brinda de poder ofrecerle hospitalidad al distinguido Jefe de Estado de un país con cuyo pueblo hemos mantenido tantos vínculos de estrecha amistad y con el cual tenemos relaciones tan especiales.

Espero su llegada que nos proporcionará la oportunidad de explorar conjuntamente muchos aspectos de las relaciones entre nuestros países y revisar nuestras mutuas inquietudes y problemas como presidentes.

Mientras tanto, sírvase aceptar mis saludos más cordiales.

Sinceramente,

JOHN F. KENNEDY

2

Declaración Conjunta Chiari-Kennedy

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS PRESIDENTES CHIARI Y KENNEDY, DE 13 DE JUNIO DE 1962.

La Declaración Conjunta, que fue expedida por los Presidentes Chiari y Kennedy el 13 de junio de 1962, es como sigue:

«Las reuniones del Presidente de la República de Panamá y el Presidente de los Estados Unidos de América durante los dos días pasados se han caracterizado por un espíritu de franqueza, comprensión y se han caracterizado por un espíritu de franqueza, comprensión y sincera amistad. Durante las conversaciones, los dos presidentes han discutido las relaciones en general y los tratados existentes entre los dos países, sus intereses mutuos en el Canal de Panamá y tópicos de interés mundial y hemisférico. Han hecho hincapié sobre los estrechos y amistosos vínculos sobre los cuales ha sido establecida una asociación mutuamente ventajosa como socios en la empresa del Canal de Panamá. Al concluir estas conversaciones han convenido en publicar la siguiente declaración conjunta:

«Ellos reafirman la amistad tradicional entre Panamá y los Estados Unidos —una amistad basada en la devoción común a los ideales de la Democracia representativa, y a la determinación de que ambas naciones operen como socios iguales en la causa de la paz, la independencia, el progreso económico y la justicia social.

«Los presidentes reconocen que los dos países están vinculados por una relación especial que surge de la ubicación y operación del Canal de Panamá, el cual ha desempeñado un papel muy importante en la historia de los dos países.

«El presidente de Panamá y el Presidente de los Estados Unidos han convenido en el principio de que cuando dos naciones

* Op. cit., pp. 255-256.

amigas están vinculadas por estipulaciones de un tratado que no son satisfactorias para una de las dos partes, deben hacerse los arreglos para permitir a ambas naciones discutir esos puntos de insatisfacción. En consecuencia, los presidentes han convenido en nombrar representantes de alto nivel para llevar a cabo estas discusiones. Estos representantes comenzarán su trabajo prontamente.

«Con respecto a algunos de estos problemas, fue convenido que la base para su solución puede indicarse desde ahora. En consecuencia, los dos presidentes han convenido, además, en instruir a sus representantes para que elaboren medidas para ayudar a la República de Panamá a aprovechar las oportunidades disponibles mediante una mayor participación de las empresas privadas panameñas en el mercado que ofrece la Zona del Canal, y para que resuelvan cuestiones laborales en la Zona del Canal tales como igualdad de oportunidades de empleo, salarios, y prestaciones de seguro social.

«También han convenido que sus representantes harán los arreglos para el enarbolamiento de banderas panameñas de manera apropiada en la Zona del Canal.

«Con el fin de apoyar los esfuerzos del Gobierno de Panamá para mejorar el cobro de impuestos para confrontar mejor las necesidades del pueblo de Panamá, el Presidente Kennedy ha convenido en principio en instruir a sus representantes para que, conjuntamente con los representantes panameños, lleguen a un arreglo en virtud del cual el Gobierno de los Estados Unidos retendrá en la fuente los impuestos sobre renta de los ciudadanos panameños y los ciudadanos no estadounidenses que trabajan en la Zona y que están obligados a pagar dicho impuesto según los tratados existentes y según la ley panameña.

«El presidente de Panamá mencionó otros problemas prácticos en las relaciones entre los dos países que son de actual preocupación de su Gobierno, incluyendo la necesidad de Panamá de facilidades de muelles, y los dos presidentes acordaron que sus representantes en los meses que vienen discutirán estos problemas, así como otros que puedan surgir.

«Los presidentes reafirmaron su adhesión a los principios y compromisos de la carta de Punta del Este. Convinieron en la necesidad de poner en ejecución rápida todas las medidas necesarias para hacer eficaz la alianza para el progreso, reconociendo que la alianza es un esfuerzo mutuo que requiere planificación

para el uso eficaz de recursos tanto internos como externos, reformas de carácter institucional, reformas tributarias, aplicación vigorosa de leyes vigentes y una distribución justa de los frutos del desarrollo nacional entre todos los sectores de la nación.

«Los dos presidentes han declarado que la Democracia, la independencia nacional y la autodeterminación de pueblos son principios políticos que forman la política nacional de Panamá y de los Estados Unidos. Ambos países están unidos en un esfuerzo hemisférico para acelerar el progreso económico y la justicia social.

«En conclusión, los dos presidentes expresaron su gratificación por esta oportunidad de tener un intercambio de puntos de vista y de fortalecer los amistosos y mutuamente benéficos vínculos que han existido entre Panamá y los Estados Unidos. Su reunión fue una demostración del entendimiento y cooperación recíproca de los dos países que ha reforzado los lazos de interés común y de amistad entre los dos pueblos.

3
Ruptura de relaciones diplomáticas*
(10 de enero de 1964)

**AGRESIÓN ARMADA CONTRA EL PUEBLO PANAMEÑO
POR FUERZAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
ACANTONADAS EN LA ZONA DEL CANAL
(Enero 9 de 1964)**

DOCUMENTOS

NOTA HISTÓRICA DEL ROMPIMIENTO DE RELACIONES

A su Excelencia
Dean Rusk
Secretario de Estado de los
Estados Unidos de América,
Washington, D.C.

Panamá, 10 de enero de 1964.

Senor Secretario de Estado:

En nombre del Gobierno y pueblo de Panamá presentó a Vuestra Excelencia formal protesta por los actos de despiadada agresión llevados a cabo por las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América acantonadas en la Zona del Canal, contra la integridad territorial de la República y su población civil indefensa durante la noche del día de ayer y la mañana de hoy.

La injustificada agresión a que antes me he referido, sin paralelo en la historia de las relaciones entre nuestros dos países, ha tenido hasta ahora para nosotros los panameños un trágico saldo de diez y siete muertos y más de doscientos heridos. Además, los edificios y bienes situados en ciertos sectores de la ciudad de Panamá colindantes con la Zona del Canal, han sufrido danos de

* Op. cit., pp. 271-272.

consideración como consecuencia de los incontrolables actos agresivos de las fuerzas armadas norteamericanas.

La forma inhumana como la policía de la Zona del Canal y luego como las fuerzas armadas norteamericanas agredieron a una romería de no más de cincuenta jóvenes estudiantes de ambos sexos de escuela secundaria, que pretendían desplegar en forma pacífica la enseña nacional en esa faja de territorio panameño, carece de toda justificación. El incalificable incidente ha revivido episodios del pasado que creíamos que no volverían a ocurrir en tierras de América.

Los condenables actos de violencia que motivan esta nota no pueden ser disimulados y menos tolerados por Panamá. Mi Gobierno consciente de su responsabilidad, hará uso de todos los medios que ponen a su alcance el derecho, el sistema regional americano y los organismos internacionales, con el fin de lograr justa indemnización por las vidas truncadas, por los heridos y por los bienes destruidos, la aplicación de sanciones ejemplares a los responsables de tales desmanes y las seguridades de que en el futuro ni las fuerzas armadas acantonadas en la Zona del Canal ni la población civil norteamericana residente en esa faja de territorio nacional, volverán a desatar semejantes actos de agresión contra un pueblo débil y desarmado pero decidido en la defensa de sus derechos inalienables.

Finalmente, cumpro con informar a Vuestra Excelencia, que debido a los sucesos a que antes me he referido, el Gobierno de Panamá considera rotas sus relaciones diplomáticas con su ilustrado Gobierno, y en consecuencia, ha impartido instrucciones a Su Excelencia el Embajador Augusto G. Arango, para que regrese cuanto antes a la patria.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración.

GALILEO SOLÍS.

Ministro de Relaciones Exteriores.

Declaración Conjunta del 3 de abril de 1964*

El día 21 de marzo el Presidente de los Estados Unidos, señor Lyndon B. Johnson, hizo en conferencia de prensa las siguientes declaraciones:

«Es motivo de profundo pesar la actual incapacidad para resolver nuestras diferencias con Panamá.

«Nuestros dos países están ligados no sólo por un convenio o un interés determinado. Estamos unidos en un Sistema Interamericano cuyo objetivo es, en las palabras de la Carta, el de proveer mediante su mutua comprensión y su respeto por la soberanía de cada uno, el mejoramiento de todos.

«De conformidad con los muchos tratados y declaraciones que forman la estructura de dicho sistema, hemos sido por mucho tiempo aliados en la lucha por fortalecer la democracia y mejorar el bienestar de nuestro pueblo.

«Nuestra historia es testigo de esta esencial unidad de interés y de credo. Panamá ha acudido sin vacilaciones a nuestro lado dos veces en este siglo cuando nos vimos amenazados por la agresión. El 7 de diciembre de 1941 Panamá declaró la guerra a quienes nos atacaron aún antes de que nuestro propio Congreso tuviese tiempo de hacerlo. Desde esa guerra, Panamá de lleno se ha unido a nosotros y a nuestras repúblicas hermanas, para forjar los convenios y los objetivos de este Continente.

«Hemos tenido también una relación muy especial con Panamá, ya que ha compartido con nosotros los beneficios, la carga y la responsabilidad de mantener el Canal de Panamá como línea vital de defensa y clave de la prosperidad hemisférica. Todas las naciones libres están agradecidas por el esfuerzo que ha dedicado a esa tarea.

«A medida que cambian las circunstancias, a medida que la Historia va forjando nuevas actitudes y aspiraciones, hemos analizado periódicamente esta relación especial.

* Ministerio de Relaciones Exteriores. MEMORIA. Panamá 1964. pp. 92-96.

«Estamos plenamente conscientes de que las demandas que hace el Gobierno de Panamá y la mayoría del pueblo panameño no surgen de malicia o del odio hacia los Estados Unidos de América. Se fundan en un hondo sentido de las necesidades sinceras y justas de Panamá. Es, por lo tanto, nuestra obligación, como aliados y compañeros, la de reexaminar estas demandas y satisfacerlas, cuando el satisfacerlas sea tanto justo como posible.

«Estamos prontos para hacerlo.

«Estamos preparados para reexaminar todas las diferencias que ahora nos dividen y todo problema que el Gobierno panameño desee presentar.

«Estamos preparados a hacerlo en cualquier tiempo y en cualquier lugar.

«Tan pronto como sea invitado por el Gobierno de Panamá, nuestro Embajador se pondrá en camino. Designaremos también un representante especial, quien llegará con plenos poderes para tratar cualquier dificultad. Se le encomendará la responsabilidad de buscar una solución que reconozca las demandas razonables de Panamá y proteja los intereses de todas las naciones americanas en el Canal. No podemos determinar, aún antes de nuestras reuniones, la mejor forma que puede tomar dicha solución. Sin embargo, sus instrucciones no impedirán ninguna solución que sea justa y se sujete a los procesos constitucionales pertinentes de nuestros dos gobiernos.

«Espero que sobre esta base podamos comenzar a resolver nuestros problemas y avancemos al encuentro de los verdaderos enemigos de este hemisferio: el hambre y la ignorancia, la enfermedad y la injusticia. Sé que el Presidente Chiari comparte esta esperanza. Pues a pesar de los desacuerdos actuales, los valores e intereses comunes que nos unen son mucho más fuertes y más duraderos que las diferencias que hoy nos dividen».

El Presidente Chiari hizo en la mañana del martes 24 de marzo la siguiente declaración de prensa:

«Considero muy interesante las declaraciones del Presidente Johnson. En muchos aspectos sus apreciaciones sobre las relaciones entre Panamá y Estados Unidos son constructivas. Ambos países se encuentran vinculados muy de cerca por el común interés de la vía interoceánica. Durante las dos grandes guerras mundiales Panamá y Estados Unidos unieron sus esfuerzos y, proporciones guardadas, contribuyeron a la victoria de la causa de la democracia como sistema de gobierno.

«No obstante lo anterior, ambas naciones han tenido serias dificultades debido a cláusulas contractuales existentes desde 1903 que lesionan la dignidad de Panamá. Es allí donde está la causa de los graves conflictos que en la actualidad nos mantienen distanciados. Si el Canal exige la convivencia sincera de panameños y norteamericanos, si para las dos naciones implica derechos y deberes, no comprendo por qué se elude la necesidad de ir al fondo de la cuestión para erradicar las causas de conflicto, sin precondiciones ni limitaciones, animados ambos gobiernos por el deseo de solucionar una vez por todas las diferencias y los problemas que afectan las relaciones amistosas y sinceras que deben y tienen que prevalecer entre ambos pueblos, precisamente por la existencia del Canal, obra a la cual están vinculados los dos países.

«Con acierto reconoce el Presidente Johnson en su declaración, que no hay malicia ni odio en los reclamos de Panamá, porque son justos y sinceros. Del texto de sus declaraciones se desprende el propósito de que las relaciones se restablezcan y se designen Representantes Especiales para solucionar estos asuntos. Si esto nos ha de llevar a un convenio justo y equitativo, yo estoy dispuesto a actuar en ese sentido. Por ello reitero mi apoyo a la fórmula anunciada por la OEA. Llegaríamos así a una solución clara, a una definición precisa de las obligaciones y de los derechos de las dos naciones, para resolver en esa forma todos sus problemas y diferencias, que nos traería un clima de sincera y estrecha convivencia, indispensable para la seguridad continental, y la estabilidad del sistema democrático.

«Mientras ambos países se ponen de acuerdo y se llenan los trámites constitucionales correspondientes, es obvio que cada uno cumplirá sus deberes y obligaciones a fin de no entorpecer las operaciones de la vía interoceánica».

El día 3 de abril de 1964.

El texto de este Comunicado es el siguiente:

«El Presidente de la Comisión General del Consejo de la Organización de los Estados Americanos, actuando provisionalmente como órgano de Consulta, se complace en anunciar que los Representantes debidamente autorizados de los Gobiernos de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América, han convenido en nombre de sus gobiernos en una Declaración Conjunta que en los idiomas español e inglés se transcribe a continuación:

DECLARACIÓN CONJUNTA

De conformidad con las amistosas declaraciones de los Presidentes de los Estados Unidos de América y de la República de Panamá del 21 y 24 de marzo de 1964, respectivamente, adjuntas a la presente, que coinciden en un sincero deseo de resolver favorablemente todas las diferencias de los dos países;

Reunidos bajo la presidencia del señor Presidente del Consejo y luego de reconocer la valiosa cooperación prestada por la Organización de los Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana de Paz y de la Delegación de la Comisión General del órgano de Consulta, los Representantes de ambos gobiernos han acordado:

1. Restablecer relaciones diplomáticas.
2. Designar sin demora Embajadores Especiales con poderes suficientes para procurar la pronta eliminación de las causas de conflicto entre los dos países, sin limitaciones ni precondiciones de ninguna clase.
3. En consecuencia, los Embajadores designados iniciarán de inmediato los procedimientos necesarios con el objeto de llegar a un convenio justo y equitativo que estaría sujeto a los procedimientos constitucionales de cada país.

Washington, D.C., 3 de abril de 1964.

5
Declaración Johnson-Robles*
(24 de septiembre de 1965)

El Presidente de la República de Panamá y el Presidente de los Estados Unidos de América anunciaron en el día de hoy haber llegado a acuerdos generales en las negociaciones que se adelantan para concertar tratados, según los lineamientos siguientes:

Con el fin de satisfacer sus necesidades presentes y futuras los dos países están negociando separadamente: un nuevo y moderno tratado que reemplace el tratado de 1903 y sus modificaciones; un acuerdo concerniente a bases militares y a status de fuerzas armadas; y un tratado conforme al cual pueda construirse en Panamá un nuevo canal al nivel del mar.

Los dos países reconocen que su interés primordial consiste en asegurar la adopción de arreglos para el funcionamiento y defensa efectivos del actual canal y de un nuevo canal que pueda en el futuro construirse en Panamá.

Respecto al estado de las negociaciones sobre un nuevo tratado que reemplace el de 1903 y sus modificaciones, se ha llegado a acuerdos generales. Los detalles de estos acuerdos generales son materia de las negociaciones en curso.

El propósito es asegurar que Panamá compartirá con los Estados Unidos la responsabilidad de la administración, manejo y funcionamiento del canal según lo determinen los tratados. Panamá también compartirá con los Estados Unidos los beneficios directos e indirectos provenientes de la existencia del Canal en su territorio.

Los acuerdos generales alcanzados son los siguientes:

1. El Tratado de 1903 será abrogado.
2. El nuevo tratado reconocerá de manera efectiva la soberanía de Panamá sobre el territorio de la actual Zona del Canal.
3. El nuevo tratado expirará en una fecha determinada o en la fecha de apertura del canal a nivel, cualesquiera que sea la que ocurra antes.

* Ministerio de Relaciones Exteriores. Departamento de Documentos y Archivos.

4. Será objetivo primordial del nuevo tratado el de proveer a una apropiada integración política, económica y social del territorio que se usa para el funcionamiento del canal con el resto de la República de Panamá. Los dos países reconocen que es necesario una transición ordenada que evite dislocaciones abruptas y posiblemente perjudiciales. Reconocemos también que deben hacerse ciertos cambios a lo largo de un período de tiempo. La nueva administración del canal tendrá facultad para hacer estos cambios de acuerdo con pautas estipuladas en el nuevo tratado.
5. Los dos países reconocen la importante responsabilidad que tienen de ser justos con y dar ayuda a los empleados de toda nacionalidad que sirven tan bien y eficientemente en el funcionamiento del Canal. Se harán arreglos apropiados para garantizar la protección de los derechos e intereses de esos empleados.

Los nuevos tratados proveerán para la defensa del canal existente y de cualquier canal a nivel que pueda ser construido en Panamá. Las fuerzas e instalaciones militares de los Estados Unidos se mantendrán conforme a un acuerdo sobre bases militares y status de fuerzas armadas.

En relación con el canal a nivel, los Estados Unidos harán estudios y exploraciones sobre el terreno acerca de posibles rutas en Panamá. Se continúan las negociaciones con respecto a métodos y condiciones de financiamiento, construcción y administración de un canal a nivel, a la luz de la importancia de dicho canal para la República de Panamá, los Estados Unidos de América, el comercio mundial y el progreso de la humanidad.

Panamá y los Estados Unidos buscarán las soluciones necesarias a los problemas económicos que causaría la construcción de un canal a nivel.

El canal actual y cualquier canal nuevo que se construya en el futuro estarán abiertos, en todo tiempo, a las naves de todas las naciones sin discriminación y con peajes que sean razonables, a la luz de la contribución de la República de Panamá y los Estados Unidos de América y del interés del comercio mundial.

Septiembre 24, 1965.

TRATADOS DE 1967



6

Tratado del Canal

ANTEPROYECTO DE TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CONCERNIENTE AL CANAL DE PANAMÁ*

Texto fechado el 21 de junio de 1967
(No. 2)

ÍNDICE

ARTÍCULO I	Abrogación de La Convención de 1903, de los Tratados de 1936 y 1955 y de otros pactos.
ARTÍCULO II	La administración Conjunta. Soberanía de Panamá. Idioma español.
ARTÍCULO III	Traspaso del uso y de los bienes del Canal y del Área del Canal a la Administración.
ARTÍCULO IV	Composición de la Junta Directiva de la Administración. El Director y Subdirector General.
ARTÍCULO V	Atribuciones de la Administración.
ARTÍCULO VI	Nombramiento y remoción del personal.
ARTÍCULO VII	Normas en materia de empleo.
ARTÍCULO VIII	Residencia en el Área del Canal.
ARTÍCULO IX	Servicios a los buques.
ARTÍCULO X	Suministro de agua.
ARTÍCULO XI	Mantenimiento y explotación del Ferrocarril de Panamá y de otros medios de transporte.
ARTÍCULO XII	Servicio postal
ARTÍCULO XIII	Otros servicios y obras.
ARTÍCULO XIV	Construcciones para residencia o negocios.
ARTÍCULO XV	Actividades comerciales en el Área del Canal
ARTÍCULO XVI	Facultad para terminar actividades comerciales.
ARTÍCULO XVII	Enajenación de bienes de la Administración.

* Ministerio de Relaciones Exteriores. Panamá, 1968. ANEXO 2-6. pp. 3645-3770.

ARTÍCULO XVIII	Condiciones para el establecimiento de negocios en el Área.
ARTÍCULO XIX	Asociaciones no lucrativas en el Área.
ARTÍCULO XX	Protección de personas, buques y bienes en el Área. Orden público.
ARTÍCULO XXI	Acuerdos entre la Administración y las Fuerzas Armadas los Estados Unidos.
ARTÍCULO XXII	Cooperación entre la Administración y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
ARTÍCULO XXIII	Cuerpo de Policía.
ARTÍCULO XXIV	Jurisdicción de Panamá en el Área del Canal.
ARTÍCULO XXV	Tribunal de Justicia de la Administración.
ARTÍCULO XXVI	Poder de reglamentación en el Área.
ARTÍCULO XXVII	Traslado de empleados.
ARTÍCULO XXVIII	Exenciones de impuestos en favor de la Administración.
ARTÍCULO XXIX	Derechos de Panamá en los puertos y otras partes del Área.
ARTÍCULO XXX	Revisión de las cuentas de la Administración.
ARTÍCULO XXXI	Régimen de las aguas del Área.
ARTÍCULO XXXII	Acceso a tierras y aguas adicionales para el uso del Canal.
ARTÍCULO XXXIII	Peajes y compensación a Panamá.
ARTÍCULO XXXIV	Neutralidad del canal.
ARTÍCULO XXXV	Defensa del Canal.
ARTÍCULO XXXVI	Manejo interino del canal hasta la entrada en vigor del nuevo Tratado.
ARTÍCULO XXXVII	Arbitraje en caso de controversias.
ARTÍCULO XXXVIII	Traspaso de tierras a la República de Panamá.
ARTÍCULO XXXIX	Reversión del Canal a la República de Panamá.
ARTÍCULO XL	Ratificaciones.
ARTÍCULO XLI	Entrada en vigor y duración del Tratado.
ANEXO I	Delineación del Área del Canal y uso de algunas otras áreas.
ANEXO II	Privilegios e Inmunidades.
Acuerdo relativo al Artículo XXVII.	
Canje de Notas relativo a la continuación de actividades de ciertas agencias de los Estados Unidos.	
Canje de Notas relativo a las escuelas.	
Nota relativa al Acuerdo con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sobre apoyo recíproco.	

Canje de Notas relativo a litigios y apelaciones en casos penales.
Canje de Notas relativo a asuntos monetarios.
Canje de Notas relativo a la construcción de una carretera moderna a La Chorrera
Nota concerniente a un lugar para facilidades portuarias.
Canje de Notas concerniente al hospital de Coco Solo.
Proyecto de Anexo Adicional sobre reversión de ciertas áreas.

ARTÍCULO I

- (1) La Convención entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América, firmada en Washington el día 18 de noviembre de 1903 queda abrogada.
- (2) El Tratado de Amistad y Cooperación firmado en Washington el 2 de marzo de 1936 y el Tratado de Mutuo Entendimiento y Cooperación y Memorándum de Entendimientos Acordados firmado en Panamá el 25 de enero de 1955, quedan abrogados.
- (3) Cualquier otro tratado o acuerdo celebrado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América o cualquiera parte de los mismos que sean contrarios a este Tratado quedan abrogados en todo lo que le sean contrario.

ARTÍCULO II

- (1) La República de Panamá y los Estados Unidos de América establecen por este medio una entidad jurídica internacional que será conocida como la Administración Conjunta del Canal de Panama (que en lo sucesivo se denominará la Administración) para que maneje el Canal de Panamá y sus obras y servicios accesorios y auxiliares, mantenga el Canal de Panamá y tales obras y servicios accesorios y auxiliares, efectúe mejoras y adiciones a los mismos y administre para los fines de este Tratado el Área del canal, la que se define en el Artículo III de este Tratado.
- (2) La Administración asumirá la totalidad de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este Tratado en la fecha que se determine de acuerdo con la República de Panamá y los Estados Unidos de América, la cual no ocurrirá antes de seis meses ni después de veinticuatro meses, contados a partir de la fecha en que entre en vigor el presente Tratado.
- (3) La República de Panamá, como soberana del Área del Canal, garantiza a la Administración el uso y goce pacíficos del Área del Canal de acuerdo con los términos del presente Tratado; así

como la continuidad del funcionamiento del Canal de Panamá.

- (4) La República de Panamá y los Estados Unidos de América facilitarán, en todo forma, el cumplimiento, por parte de la Administración, de las funciones y responsabilidad que a ésta se le señalan en este Tratado.
- (5) Los idiomas oficiales de la Administración serán el español y el inglés.

ARTÍCULO III

La República de Panamá y los Estados Unidos de América, cada uno en la medida de sus derechos, conceden a la Administración, a partir de la fecha en que ésta asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este Tratado, el uso del Canal de Panamá y de sus obras y servicios accesorios y auxiliares, así como el uso de las áreas terrestres y acuáticas delineadas en el Anexo I, que se denominarán «Áreas del Canal».

La Administración tendrá y disfrutará, conforme a los términos de este Tratado, el uso del Canal de Panamá, del Área del Canal y de todos los bienes que, en la fecha en que la Administración asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este Tratado, sean objeto de administración o uso por parte de los Estados Unidos de América por medio de sus dependencias, a saber, la Compañía del Canal de Panamá y el Gobierno de la Zona del Canal.

A partir de la fecha en que asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones de conformidad con este Tratado, la Administración asumirá todo el activo, pasivo y compromisos de la Compañía del Canal de Panamá y del Gobierno de la Zona del Canal de Panamá y del Gobierno de la Zona del Canal, según aparezcan en los últimos balances generales de la Compañía del Canal de Panamá y del Gobierno de la Zona del Canal. La parte no recobrada de la inversión de los Estados Unidos de América en el Canal de Panamá no quedará incluida en el pasivo asumido por la Administración, de acuerdo con las disposiciones de este numeral.

ARTÍCULO IV

- (1) El Órgano Directivo de la Administración será una Junta compuesta por nueve miembros, cuatro de los cuales serán nombrados por el Presidente de la República de Panamá y cinco por el Presidente de los Estados Unidos de América. Los miembros de la Junta serán nombrados por periodos de seis años.

- sujetos a remoción por justa causa por el Presidente del país que los haya designado, a excepción de los periodos de dos de los miembros nombrados por cada Presidente en la fecha en que este Tratado entre en vigor, los que serán designados por periodos de tres años solamente. Al expirar el periodo de un miembro de la Junta, éste podrá ser designado nuevamente.
- (2) La República de Panamá y los Estados Unidos de América convocarán a la Junta tan pronto como sea factible después de que este Tratado entre en vigor. Excepto en los casos que este Tratado disponga lo contrario, la Junta adoptará sus decisiones mediante el voto mayoritario de sus miembros presentes y que emitan voto, siempre que haya quórum. La mayoría de los miembros constituirá quórum de la Junta. La junta podrá adoptar su reglamento interno y sus reglas de procedimiento. Todo miembro de la Junta podrá ser representado por un suplente debidamente nombrado por el Presidente que nombró al principal. Durante el tiempo en que se desempeñe sus funciones en la junta, el miembro suplente ejercerá las mismas facultades que el mismo principal, recibirá compensaciones y asignaciones al mismo nivel que el miembro principal y gozará de los privilegios y exenciones de que trata el párrafo (9) de este Artículo.
 - (3) El Presidente de la Junta será elegido por la Junta de entre sus miembros y desempeñará el cargo por un año. El Presidente presidirá las reuniones de la Junta y desempeñará las demás funciones que determine el reglamento. La Presidencia se alternará anualmente entre los miembros nombrados por el Presidente de la República de Panamá y los miembros nombrados por el Presidente de los Estados Unidos de América.
 - (4) La compensación y asignaciones de los miembros y suplentes de la Junta serán fijadas por la Administración y pagadas de sus fondos generales.
 - (5) Habrá un Director General y un Subdirector General de la Administración, uno de los cuales será nacional de los Estados Unidos de América y el otro nacional de la República de Panamá.

El Director General y el Subdirector General serán nombrados por la Junta por un periodo de cuatro años, podrán ser reelegidos y ejercerán sus funciones hasta que las personas designadas para reemplazarlos tomen posesión de sus cargos. El Director General y el Subdirector General podrán ser removidos por justa causa.

El Director General será el dignatario ejecutivo de mayor jerarquía de la Administración y dirigirá sus negocios y actividades y

administrará sus asuntos conforme a la política y las normas señaladas por la Junta; además, ejercerá supervisión y autoridad generales sobre los otros dignatarios y empleados de la Administración.

El Subdirector General reemplazará al Director General en caso de que quede vacante el cargo de Director General o en caso de ausencia temporal o incapacidad de éste y ejercerá todas las otras atribuciones que le sean señaladas.

La Administración, los miembros de la Junta, los Jueces de los tribunales del Área del Canal y los dignatarios y empleados de la Administración (la frase dignatarios y empleados de la Administración cuando se use en este Tratado, excepto si se especifica lo contrario, incluirá al personal de los tribunales del Área del Canal) y los miembros de sus familias que residen con ellos gozarán de los privilegios y exenciones especificados en el Anexo II de este Tratado.

ARTÍCULO V

Para los fines de este Tratado, la Administración tendrá el derecho y la facultad de:

- (1) Manejar y mantener al Canal de Panamá y sus obras y servicios accesorios y auxiliares, efectuar mejoras y adiciones a los mismos y reglamentar la navegación en la aguas del Área del Canal;
- (2) administrar el Área del canal;
- (3) establecer y cobrar peajes por el uso del canal y modificar los mismos de acuerdo con las estipulaciones del Artículo XXXIII de este Tratado;
- (4) establecer, modificar y recaudar tasas, cargas y tarifas por todos los servicios, equipos, abastos y materiales que suministre;
- (5) pagar costos de funcionamiento y efectuar otros desembolsos en conformidad con lo dispuesto en este Tratado; solicitar dinero en préstamos y expedir los documentos en que consten sus obligaciones; celebrar contratos, y con sujeción a las estipulaciones de este Tratado, comparecer en juicio como demandante o demandada, pero no se expedirá ninguna orden de secuestro, embargo u otro procedimiento similar contra los salarios u otros dineros adeudados por la Administración a los miembros de la Junta, jueces de los tribunales del Área del Canal y dignatarios y empleados de la Administración, salvo en casos referentes a las relaciones familiares.

ARTÍCULO VI

- (1) Excepto en cuanto este Tratado disponga lo contrario, la Ad-

ministración tendrá el derecho y facultad de designar y remover a sus dignatarios y empleados, establecer las condiciones y requisitos conforme a los cuales deben desempeñar sus funciones y determinar la autoridad y los deberes de los mismos.

La Administración tendrá el derecho y facultad de contratar los servicios del personal de los gobiernos de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América a condición de pagar el costo de los mismos.

ARTÍCULO VII

La Administración establecerá un régimen de relaciones de trabajo. Con sujeción a las disposiciones del Artículo XXVII de este Tratado, tal régimen se ajustará a las siguientes normas:

- (a) El canal constituye una fuente primaria de ocupación para los panameños en todas las categorías de empleo;
- (b) habrá completa igualdad de trato para todos los dignatarios y empleados sin distinción de nacionalidad;
- (c) el empleo, clasificación, remuneraciones, y permanencia de los empleados en todas las categorías de empleo se basarán en el mérito, antigüedad de servicio, naturaleza del trabajo y en el principio de que a igual trabajo corresponde igual remuneración, con exclusión de cualquiera consideraciones sobre nacionalidad o lugar de contratación de los servicios; y
- (d) la Administración podrá acordar condiciones especiales de empleo y el pago de remuneraciones especiales siempre que resulte necesario hacerlo a fin de contratar servicios especializados que no puedan obtenerse mediante los procedimientos normales de contratación de servicios.

ARTÍCULO VIII

La Administración tendrá el derecho y la facultad de otorgar permisos para residir dentro del Área del Canal a las personas comprendidas dentro de alguna de las siguientes categorías:

- (1) Dignatarios y empleados de la Administración y jueces de los tribunales del Área del Canal; personas que estén residiendo en la Zona del Canal cuando el Tratado entre en vigor y, si ello fuere conveniente, quienes suceden a tales personas en el desempeño de sus funciones; contratistas de la Administración y sus empleados durante en periodo de cumplimiento de sus contratos; personas autorizadas para dedicarse a actividades religiosas,

caritativas, benéficas, educativas, científicas y recreativas en el Área del Canal;

cualesquiera otras personas o categorías de personas a quienes se les permita mediante el voto de dos terceras partes de los miembros de la Junta;

miembros de las familias de las personas nombradas en los numerales (1) a (5) de este Artículo, siempre que vivan con tales personas, y

empleados domésticos de todas las personas comprendidas dentro de la categorías anteriores siempre que vivan con tales personas.

ARTÍCULO IX

La Administración tendrá el derecho y la facultad de suministrar a los buques todos los servicios relacionados con el tránsito por el canal, de efectuar reparaciones a los buques y de suministrarles los abastos navales usados para efectuar tales reparaciones y de vender agua, combustible y lubricantes a las naves.

La Administración seguirá la política de procurar, cuando ello sea factible, que los servicios a que se refiere el numeral (1) de este Artículo sean prestados por la empresa privada.

ARTÍCULO X

La Administración mantendrá y manejará el sistema del suministro de agua para el funcionamiento del canal y tendrá el derecho y la facultad de efectuar mejoras y adiciones al mismo. La Administración, además, tendrá el derecho y la facultad de suministrar agua para otros usos de acuerdo con las estipulaciones de este Tratado.

ARTÍCULO XI

- (1) La Administración tendrá el derecho y la facultad de mantener y manejar el Ferrocarril de Panamá para los fines de la Administración, de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América y sus dependencias. La Administración también tendrá el derecho y la facultad de manejar el Ferrocarril de Panamá como medio de transporte público, pero deberá descontinuar tal actividad dentro de los dos años siguientes a la fecha en que reciba una solicitud en tal sentido de parte del gobierno de la República de Panamá.
- (2) La Administración también tendrá el derecho y la facultad, de

conformidad con las estipulaciones de este Tratado, para adquirir, mantener y manejar buques, aeronaves y vehículos a motor para ser usados para los fines de la Administración, de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América y sus respectivas dependencias.

ARTÍCULO XII

La República de Panamá otorga a la Administración el derecho y la facultad de establecer y manejar un servicio postal en el que se cobrarán las tarifas postales prevalecientes en la República de Panamá y en el cual se usarán únicamente sellos de correo panameños, los cuales serán comprados a la República de Panamá al mismo precio de costo al que los sellos de correo sean adquiridos por la República de Panamá para ser vendidos por medio de las estafetas postales de la República de Panamá. Todo servicio postal establecido por la Administración estará al servicio de la Administración, de los Estados Unidos de América y sus dependencias establecidas en la República de Panamá, de las personas autorizadas para residir en el Área del Canal y, de las personas, empresas y otras organizaciones establecidas en el Área del Canal para negocios y otras actividades que hayan sido debidamente autorizadas, en relación con el desarrollo de sus actividades.

La República de Panamá notificará a la Unión Postal Universal y a la Unión Postal de las Américas y España que la adhesión de la República de Panamá a dichas uniones postales incluye el Área del Canal.

ARTÍCULO XIII

Con sujeción a las estipulaciones del Artículo XV de este Tratado y del numeral (2) de este Artículo, y en el desarrollo de los derechos y facultades que se le conceden por este Tratado, la Administración tendrá el derecho y la facultad para construir o adquirir, establecer, mantener y manejar, o proveer facilidades y servicios tales como los de navegación, el de abastecimiento de agua y control de inundaciones; instalaciones y servicios para el mantenimiento de estaciones marinas flotantes y fijas, de salvamento y de reparaciones; instalaciones y servicios para el manejo y depósito de combustible; instalaciones y servicios para efectuar reparaciones y mantener depósitos en general; instalaciones y servicios para el transporte por ferrocarril, aire, mar y tierra; instalaciones y servicios para la prestación de servicios públicos y siste-

mas de comunicaciones; instalaciones y servicios para edificar; instalaciones y servicios para la fabricación, mejora, reparación y mantenimiento de equipo, maquinaria, plantas y otros bienes, incluidos buques, para su propio uso; instalaciones y servicios de lavanderías y de lavado a vapor; edificios de oficina; instalaciones y servicios de protección contra incendios y de policía; cárceles y penitenciarias; otros edificios, instalaciones y servicios públicos; una imprenta; instalaciones y servicios para mantener escuelas y otras facilidades educativas; instalaciones y servicios de salud pública y saneamiento; instalaciones y servicios para mantener hospitales y prestar otros servicios médicos; bibliotecas y museos, casas de huéspedes y restaurantes; e instalaciones y servicios de entretenimiento y recreo.

Con referencia a tales instalaciones y servicios la Administración tendrá el derecho y facultad de efectuar ventas o suministrar servicios, equipo, provisiones y materiales a:

Buques, conforme a las estipulaciones del Artículo IX de este Tratado;

la República de Panamá y los Estados Unidos de América y sus respectivas dependencias;

personas que residan en el Área del Canal conforme a lo estipulado en el Artículo VIII de este Tratado, empresas y organizaciones con fines no lucrativos autorizadas para desarrollar sus actividades en el Área del Canal y nacionales de los Estados Unidos de América que sean empleados de la Administración y que residan fuera del Área del Canal;

empleados de los Estados Unidos de América y sus dependencias establecidas en la República de Panamá conforme a arreglos entre los dos países, siempre que tales empleados no sean nacionales de la República de Panamá; y

cualesquiera otras personas o entidades que sean autorizadas por la Junta mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

La Administración tendrá el derecho y la facultad de proveer servicios médicos y de hospital a sus empleados cualquiera que sea su lugar de residencia.

La Administración asumirá el manejo y mantenimiento de los cementerios de Mount Hope y Corozal.

ARTÍCULO XIV

La Administración tendrá el derecho y la facultad de construir o adquirir, establecer, mantener y manejar o proveer viviendas y

servicios afines a las personas a quienes se permita residir en el Área del Canal de acuerdo con lo estipulado en el Artículo VIII de este Tratado.

En adición, pero con sujeción a lo estipulado en el Artículo XV de este Tratado, la Administración tendrá el derecho y la facultad de construir o adquirir, establecer, mantener y manejar, o proveer establecimientos de ventas al por menor e instalaciones de elaboración y de servicio para beneficio de las personas especificadas en los párrafos (c), (d) y (e) del numeral (2) del Artículo XIII de este Tratado.

ARTÍCULO XV

Con sujeción al entendimiento de que las siguientes instalaciones y servicios seguirán proporcionándose, preferentemente, por la empresa privada y de que se continuarán desarrollando las mismas en lugares convenientes a los residentes del Área del Canal, y en conformidad con normas aprobadas por la Junta, la Administración, dentro del término de cinco años que se contarán a partir de la fecha en que la Administración asuma la totalidad de sus responsabilidades y funciones, discontinuará el manejo de tiendas de víveres, almacenes, plantas para la fabricación de productos lácteos, panaderías, reposterías, cafeterías y restaurantes; teatros, boliches, y otras facilidades recreativas cuyo uso esté sujeto a pago de entrada; tiendas de artículos ópticos; hoteles, lavanderías, plantas de lavado a vapor, imprentas, servicios de reparación de automóviles, servicios de reconstrucción de llantas y estaciones de expendio de gasolina manejados para el uso público; y, según sea acordado por la Administración, de acuerdo con las estipulaciones del Artículo XVI de este Tratado, cualesquiera otras instalaciones o servicios similares.

Al hacer los arreglos para que la empresa privada explote, dentro del Área del Canal, cualesquiera de las instalaciones o servicios a los cuales se refiere el numeral (1) de este Artículo, se seguirán las siguientes normas:

En primer término, la Administración hará publicar las especificaciones y solicitudes de propuestas, las que estarán abiertas, sin discriminación, a personas y empresas que puedan ser autorizadas a ejercer el comercio en la República de Panamá. Cualquiera persona o empresa cuya propuesta sea aceptada tendrá el derecho a obtener de la República de Panamá la autorización necesaria para desarrollar sus actividades comerciales en la República de Panamá y tal persona o empresa quedará sujeta a lo estipulado en el Artículo XVIII de este Tratado.

Si no se reciben propuestas satisfactorias dentro del período fijado en las solicitudes de propuestas, período que no excederá de 120 días, la Administración procurará negociar arreglos para la explotación por parte de la empresa privada, de las actividades objeto de la solicitud de propuesta, en los términos y condiciones que sean determinados por la Junta; sin embargo, la Administración podrá continuar el manejo de las actividades referidas si no pueden hacerse arreglos satisfactorios para tal manejo por parte de la empresa privada. En caso de que alguna de las actividades referidas continúe bajo el manejo de la administración, ésta, con respecto a tal actividad y después de vencido el período de 5 años a que se refiere el numeral (1) de este Artículo, pagará de allí en adelante a las autoridades correspondientes de la República de Panamá las cantidades equivalentes a los impuestos, derechos y otras cargas por los cuales la Administración sería responsable si su situación fuese la de una sociedad anónima comercial ordinaria establecida en la República de Panamá. La Administración manejará tal actividad con sujeción a las leyes fiscales de la República de Panamá, y cuando cualquier instalación o servicio manejados por la Administración pase a la explotación de la empresa privada de acuerdo con las estipulaciones de este Artículo, las restricciones estipuladas por este Tratado que limiten las categorías de personas o entidades que puedan utilizar tales instalaciones o servicios no tendrá aplicación a tal explotación privada.

ARTÍCULO XVI

- (1) Con sujeción a lo estipulado en este Tratado, la Administración tendrá el derecho y facultad de continuar o discontinuar cualquier actividad que se ejerza para los fines de administrar la Zona del Canal o manejar el canal de Panamá en la fecha en que la Administración asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este Tratado.
- (2) La Administración tendrá el derecho y la facultad de poner fin a cualesquiera otras actividades que considere innecesarias o no apropiadas para el cumplimiento de las responsabilidades y funciones que se le señalan en el presente Tratado.

ARTÍCULO XVII

Con sujeción a las disposiciones de este Tratado, la Administración tendrá el derecho y la facultad de:

Renunciar a favor de la República de Panamá al uso de las

tierras que decida que no son ya necesarias para el cumplimiento de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este Tratado:

disponer mediante venta, reemplazo, permuta, arrendamiento, o en cualquier otra forma, de los bienes que posea o administre, excepto en el caso de la tierra, y arrendar o conceder permisos sobre el uso de tierras. Los ingresos provenientes de la disposición que se haga de cualesquier bienes conforme a los párrafos (b) y (c) de este numeral, ingresarán a los fondos generales de la Administración.

Si la Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo (b) del numeral (1) de este Artículo, decidiera vender cualesquier bienes, la Administración, sin que ello afecte lo dispuesto en el numeral (2) del Artículo XXII de este Tratado, deberá dar aviso anticipado de la transacción en proyecto; así como de los términos y condiciones de la misma, a la República de Panamá y a los Estados Unidos de América, y ambos tendrán el derecho de comprar tales bienes, con sujeción a tales términos y condiciones.

ARTÍCULO XVIII

Con el objeto de promover el desarrollo económico de la República de Panamá, la Administración tendrá el derecho y la facultad de autorizar el establecimiento de empresas comerciales privadas de toda clase en el Área del Canal y de adoptar, expedir y hacer cumplir los reglamentos relativos a su establecimiento, funcionamiento y terminación.

La Administración se esmerará en facilitar el desarrollo del área de Diablo Heights que se describe en el numeral (4) del Anexo (1) de este Tratado con el objeto de que allí se establezcan industrias privadas, siempre que ello sea compatible con el cumplimiento de las responsabilidades señaladas a la Administración en el Área del Canal.

Las empresas privadas autorizadas por la Administración para desarrollar actividades comerciales en el Área del Canal de acuerdo con lo estipulado en este Tratado quedarán sujetas a las leyes de la República de Panamá o a los reglamentos de la Administración de acuerdo con las estipulaciones de los Artículos XXIV y XXV de este Tratado.

Durante este período a que se refiere el artículo XXXVI de este Tratado, las empresas privadas que se encuentren establecidas y que desarrollen sus actividades comerciales en la Zona del Canal

en la fecha en que este Tratado entre en vigor tendrán el derecho a continuar sus actividades de acuerdo con el régimen estipulado en dicho artículo. Expirado el expresado periodo, tendrán derecho a continuar tales actividades en el Área del Canal con sujeción a las estipulaciones de este Tratado.

Las personas que desarrollen actividades comerciales en la Zona del Canal y que residan en la misma en la fecha en que este Tratado entre en vigor, tendrán el derecho de residir en el Área del Canal mientras continúen efectuando tales actividades.

ARTÍCULO XIX

La Administración tendrá el derecho y la facultad de autorizar el establecimiento de asociaciones para fines no lucrativos en el Área del Canal y de adoptar, expedir y hacer cumplir los reglamentos relativos a su establecimiento, funcionamiento y cese de actividades.

Las asociaciones con fines no lucrativos autorizadas por la Administración para establecerse en el Área del Canal de acuerdo con lo estipulado en este Tratado estarán sujetas a las leyes de la República de Panamá o a los reglamentos de la Administración de acuerdo con las estipulaciones de los Artículos XXIV y XXV de este Tratado.

Durante el periodo a que se refiere el Artículo XXXVI de este Tratado, las asociaciones con fines no lucrativos que se encuentren establecidas y que desarrollen sus actividades en la Zona del Canal en la fecha en que este Tratado entre en vigor, tendrán el derecho a continuar sus actividades de acuerdo con el régimen estipulado en dicho artículo, y de allí en adelante tendrán derecho a continuar tales actividades en el Área del Canal con sujeción a las estipulaciones de este Tratado. Con respecto al arrendamiento de locales a dichas asociaciones, se permitirá a éstas continuar sus actividades pagando el mismo alquiler vigente con anterioridad a la fecha en que entre en vigor de este Tratado.

En caso de que la Administración decidiera revocar, por razones que no sean imputables a los usuarios, el permiso relativo al uso de terreno de que, en la fecha en que entre en vigor el presente Tratado, gocen algunas de las asociaciones con fines no lucrativos que se encuentren establecidas y que desarrollen sus actividades en el Área del Canal, la administración proveerá, sin costo para la asociación, un sitio apropiado e instalaciones adecuadas en cualquier otro lugar del Área del Canal. Si no hubiere disponible un sitio e instalaciones apropiados, la Administración compensará a

la asociación en cuestión a base del valor justo de las mejoras existentes en los terrenos desocupados.

Las personas que participen en las actividades desarrolladas en la Zona del Canal por las asociaciones para fines no lucrativos y que residan allí en la fecha en que entre en vigor este Tratado, tendrán derecho a residir en el Área del Canal mientras continúen desarrollando tales actividades.

ARTÍCULO XX

- (1) La República de Panamá otorga a la Administración el derecho y la facultad para tomar las medidas necesarias a fin de proteger las personas y bienes en el Área del Canal y para mantener el orden público en el Área del Canal.

La Administración tomará las medidas necesarias para proteger el Canal de Panamá, sus obras y servicios accesorios y auxiliares y la navegación por el canal.

La Administración podrá, si ello fuere necesario, pedir la ayuda de las Fuerzas Armadas de la República de Panamá o de los Estados Unidos de América para que le presten ayuda militar cuando estime tal ayuda necesaria para el ejercicio de sus funciones conforme a los numerales (1) y (2) de este Artículo.

Las medidas de protección que adopten la Administración serán coordinadas con las medidas de defensa y seguridad que se contemplen en el Artículo XXXV de este Tratado.

ARTÍCULO XXI

La República de Panamá otorga a la Administración el derecho y la facultad de celebrar acuerdos con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América en relación con los siguientes asuntos:

- (1) El uso, por parte de la Administración, de Áreas de Defensa usadas por las Fuerzas Armadas de acuerdo con las estipulaciones del Tratado concerniente a la defensa del canal de Panamá y de su Neutralidad firmado en esta fecha entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América y el uso, por parte de las Fuerzas Armadas, de las instalaciones y áreas cuyo uso se conceda a la Administración de acuerdo con las estipulaciones de este Tratado, siempre y cuando que el status otorgado a tales áreas por medio de los Tratados celebrados por ambos países no sea alterado, y el suministro de instalaciones, abastos y equipos; servicios de mantenimiento, energía eléctrica y agua potable; servicios de

enseñanza, hospitalización, sanidad, protección contra incendio y otros servicios de utilidad pública.

- (2) Los acuerdos celebrados de conformidad con las disposiciones del párrafo (b) del numeral (1) de este Artículo, podrán incluir medidas relativas al pago de tarifas razonables.

ARTÍCULO XXII

La Administración y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América cooperarán con el objeto de facilitar el cumplimiento de sus respectivas misiones de acuerdo con los términos de este Tratado y de los del Tratado concerniente a la Defensa del Canal de Panamá y de su Neutralidad celebrado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América en esta misma fecha y, a tal fin, continuarán los arreglos vigentes entre las referidas Fuerzas Armadas y la Compañía del Canal de Panamá y el Gobierno de la Zona del Canal en la fecha en que este Tratado entre en vigor o celebrarán otros arreglos mutuamente satisfactorios para prestarse ayuda recíproca. Tales arreglos podrán incluir disposiciones relativas al pago de cargas razonables.

En caso de que la Administración decidiera discontinuar el funcionamiento de cualquier instalación, la prestación de cualquier servicio o el desarrollo de cualquier actividad que haya sido objeto de tales arreglos celebrados con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, la Administración dará aviso anticipado de tal decisión a dichas Fuerzas Armadas y les dará la oportunidad de tomar a su cargo el suministro continuado de la referida instalación, servicio o actividad en la medida que ello sea requerido por las Fuerzas Armadas, así como la oportunidad de adquirir, libre de costo, los derechos de la Administración con respecto a cualquier bien adquirido por ésta de acuerdo con las estipulaciones del Artículo III de este Tratado, siempre que el uso de dicho bien haya contribuido a la prestación de tal instalación, servicio o actividad (excepto el derecho concedido a la Administración mediante el numeral (1) del Artículo XVII de este Tratado para disponer de tal bien). Queda entendido que si, de conformidad con este o cualquier otro tratado o acuerdo, el bien objeto del traspaso se usare para prestar servicios a la República de Panamá o a los Estados Unidos de América, el traspaso se hará con la condición de que el bien referido continuará usándose para los fines de prestar tales servicios.

ARTÍCULO XXIII

La República de Panamá otorga a la Administración el derecho y la facultad de establecer y mantener un Cuerpo de Policía que ejercerá de manera exclusiva la autoridad policial en el Área del Canal. De conformidad con lo anterior, los funcionarios de la República de Panamá tendrán el derecho de ejercer en el Área del Canal las funciones autorizadas por las leyes de la República de Panamá que sean aplicables en el Área del Canal de acuerdo con las estipulaciones del Artículo XXIV de este Tratado.

ARTÍCULO XXIV

Las leyes de la República de Panamá tendrán aplicación en el Área del Canal desde la fecha en que la Administración asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este Tratado; se exceptúan de tal aplicación los asuntos descritos en el párrafo (a) del numeral (2) de este Artículo y aquellos otros asuntos que se especifiquen en este Tratado. Las leyes de la República de Panamá no se aplicaran en forma retroactiva a ningún asunto o suceso que haya ocurrido antes de la fecha en que la Administración asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este Tratado. La República de Panamá no expedirá o hará cumplir ninguna ley que, en forma alguna, discrimine contra la Administración o contra las personas o bienes que se encuentren dentro del Área del Canal.

(a) La República de Panamá otorga a la Administración el derecho y la facultad de adoptar, mediante el voto de la mayoría absoluta de su Junta, ordenanzas que constituirán el Estatuto del Área del Canal y que tendrán aplicación en el Área del Canal, con exclusión de cualquiera otra ley, con respecto a los asuntos que a continuación se señalan:

Almirantazgo, transporte marítimo y navegación;

cuasidelitos y contratos de la Administración y contratos celebrados por contratistas y subcontratistas de la Administración o entre los mismos que se refieran a trabajos efectuados para la Administración o para su beneficio;

relaciones entre la Administración y miembros de la Junta, jueces de los tribunales del Área del Canal y dignatarios y empleados de la Administración, incluidos los términos y condiciones de empleo y otros asuntos relativos a las relaciones obrero patronales;

los servicios prestados por la Administración, las instalacio-

nes manejadas por la Administración, las funciones ejercidas por la Administración, y los derechos y poderes otorgados a la Administración de acuerdo con las estipulaciones de este Tratado, cuando la Junta considere que el cumplimiento o ejercicio de los mismos haga aconsejable la adopción de reglamentación con respecto a tales asuntos; salvo que los reglamentos adoptados por la Administración se ajustarán a las estipulaciones del párrafo (b) del numeral (2) del Artículo XV de este Tratado; y los siguientes delitos y faltas, cuando así lo considere aconsejable la Junta:

- (v-1) Delitos y faltas contra la seguridad del canal o de cualquier obra o instalación del mismo, contra la navegación en el canal;
 - (v-2) delitos y faltas cometidas dentro del Área del Canal contra los buques o sus cargas o contra sus oficiales, tripulantes o pasajeros, o cometidos por los mismos dentro del Área del Canal.
 - (v-3) delitos y faltas cometidos dentro del Área del Canal como resultado de actos ejecutados u omisiones ocurridas en el ejercicio de funciones oficiales relativas a servicios prestados a la Administración;
 - (v-4) delitos y faltas cometidas en el Área del Canal contra la Administración o sus bienes; o contra las personas o bienes de los miembros de la Junta, jueces de los tribunales del Área del Canal, dignatarios y empleados de la Administración y miembros de las familias de las personas antes mencionadas que vivan con las mismas, o contra la persona o los bienes de cualquier otro residente del Área del Canal; así como delitos y faltas cometidos dentro del Área del Canal por la Administración o por las personas mencionadas en este inciso; y delitos o faltas cometidos dentro del Área del Canal contra la paz y el orden públicos, y
 - (v-5) otros delitos y faltas, según lo determine la Junta mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Junta.
- (b) No se impondrá la pena de muerte por la comisión de ningún delito o falta.

Tan pronto como sea factible, después de que la Administración asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones que se señalan en este Tratado, la Administración adoptará el Estatuto del Área del Canal a que se refiere el párrafo (a) de este numeral. La

Administración tendrá el derecho y la facultad, mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de su Junta y de conformidad con las estipulaciones de este Artículo, de reformar, derogar o adicionar los reglamentos que formen el Estatuto del Área del Canal.

Tan pronto como sea factible, después de que su Junta haya sido nombrada, la Administración designará una comisión de juristas de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América a fin de que colabore en la preparación del Estatuto del Área del Canal a que se refiere el numeral (2) de este Artículo. La Comisión someterá sus recomendaciones a la Administración dentro de los dos años siguientes a la fecha en que dicha Comisión haya sido establecida.

Después de la fecha en que la Administración asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este Tratado y mientras se adopte el Estatuto del Área del Canal, la ley aplicable en el Área del Canal en el momento inmediatamente anterior a dicha fecha (así como los reglamentos expedidos en desarrollo de la misma que se encuentren vigentes a la sazón) tendrán aplicación en el Área del Canal con respecto a aquellos asuntos descritos en los incisos (i) a (v), inclusive del párrafo (a) del numeral (2) de este Artículo. La Administración tendrá el derecho y la facultad, sujeta a las estipulaciones de este Artículo y mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta y en la medida en que ello sea requerido para el desempeño de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este Tratado, para reformar, derogar o adicionar cualquier disposición de la ley aplicable de conformidad con este numeral.

Después de la fecha en que la Administración asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este Tratado, las garantías y derechos fundamentales consagrados por la constitución de la República de Panamá y los que estén vigentes en la Zona del Canal en la fecha en que este Tratado entre en vigor tendrán aplicación en el Área del Canal.

La Administración tendrá el derecho y la facultad, mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Junta, para suspender sentencias, otorgar libertad condicional, ordenar la conmutación de sentencias y conceder indultos por delitos o faltas.

ARTÍCULO XXV

- (1) La República de Panamá otorga a la Administración el derecho y la facultad de establecer un tribunal de jurisdicción general en

el Área del Canal; que será conocido como el Tribunal de la Administración Conjunta del Canal de Panamá (que en lo sucesivo se denominará el «Tribunal»). El Tribunal será establecido por la Administración y asumirá sus responsabilidades y funciones desde la fecha en que la Administración asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este Tratado. El Tribunal aplicará las leyes que sean aplicables de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo XXIV de este Tratado. El Tribunal también aplicará cualquier otra ley que resulte aplicable según los principios pertinentes del derecho internacional privado.

El Tribunal estará compuesto por ocho jueces, dos de los cuales actuarán como Jueces del Canal de Panamá y seis de los cuales actuarán como Conjueces del Canal de Panamá. La Administración nombrará un Juez del Canal de Panamá y tres Conjueces del Canal de Panamá, que serán escogidos de una lista de ocho personas hábiles presentada por el Presidente de la República de Panamá; y un Juez del Canal de Panamá y tres Conjueces del Canal de Panamá que serán escogidos de una lista de ocho personas hábiles presentada por el Presidente de la República de los Estados Unidos de América. Los jueces del Canal de Panamá y los Conjueces del Canal de Panamá ejercerán sus funciones por un período de seis años o por el período durante el cual el Área del Canal sea administrada por la Administración, cualquiera que sea el mas corto, a menos que sean removidos mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Junta por abandono de sus deberes o por la comisión de actos ilegales en el ejercicio de sus funciones. En el caso de muerte, renuncia, ausencia, enfermedad, impedimento, remoción u otra incapacidad para actuar de un Juez del Canal de Panamá, la Administración nombrará un Conjuez del Canal de Panamá que debe ser nacional del mismo país que el Juez del Canal de Panamá que haya de ser reemplazado, a fin de que actúe en lugar de dicho juez en el caso que se ventila o hasta tanto el Juez del canal de Panamá pueda reasumir su cargo o se designe un nuevo Juez, según fuere el caso. Los Jueces y Conjueces del Canal de Panamá podrán ser nombrados para períodos adicionales.

La remuneración y las asignaciones de los Jueces del Canal de Panamá y de los Conjueces del Canal de Panamá serán fijadas por la Administración y serán pagadas de sus fondos. Todos los gastos del Tribunal serán pagados de los fondos de la Administración.

Con sujeción a las estipulaciones de este Tratado, el Tribunal podrá adoptar sus reglas de práctica y procedimiento y podrá nom-

brar y remover el personal subalterno que requiera para el desempeño de sus funciones.

(a) Los tribunales de la República de Panamá tendrán jurisdicción sobre todos los asuntos y procedimiento civiles que se susciten en el Área del Canal con excepción de los especificados en el párrafo (b) de este numeral.

Los tribunales del Área del Canal tendrán jurisdicción sobre todos los asuntos y procedimientos civiles que se susciten en el Área del Canal, en los casos siguientes:

Juicios y procedimientos interpuestos por la Administración o en contra de ésta:

juicios y procedimientos interpuestos por un dignatario o empleado de la Administración o en contra de éste que se susciten en relación con el desempeño de funciones oficiales;

juicios y procedimientos sobre cuestiones de almirantazgo o concernientes a buques que se hallen dentro de las aguas del Área del Canal y juicios y procedimientos interpuestos contra las cargas, oficiales, tripulantes o pasajeros de tales buques o que sean presentados por los mismos, y

juicios y procedimientos con respecto a los cuales hayan de aplicarse las disposiciones del Estatuto del Área del Canal o las disposiciones de la legislación que se aplicará en el Área del Canal de acuerdo con las estipulaciones del numeral (4) del Artículo XXIV de este Tratado.

Los tribunales de la República de Panamá ejercerán jurisdicción en todas las causas penales relativas a delitos y faltas cometidos dentro del Área del Canal, con excepción de los casos especificados en el párrafo (d) de este numeral.

Los tribunales del Área del Canal ejercerán jurisdicción exclusiva en las causas penales a que dé lugar la comisión, dentro del Área del Canal, de los delitos y faltas que quedan comprendidos dentro de las categorías enumeradas en el inciso (v) del párrafo (a) del numeral (2) del Artículo XXIV de este Tratado, ya sea que la Administración haya adoptado o no la reglamentación con respecto a los mismos. Los tribunales del Área del Canal también ejercerá tal jurisdicción exclusiva con respecto a los delitos y faltas cometidos dentro del Área del Canal y que sean definidos como tales por la ley aplicable en el Área del Canal de acuerdo con las estipulaciones del numeral (4) del Artículo XXIV de este Tratado.

Las leyes de la República de Panamá podrán disponer que los procesos relativos a delitos y faltas cometidos dentro del Área del

Canal y los juicios y procedimientos civiles que se susciten dentro de la misma, sobre los cuales los tribunales de la República de Panamá ejerzan jurisdicción de acuerdo con las estipulaciones del numeral (5) de este Artículo, o que determinadas causas penales y civiles sobre las cuales dichos tribunales ejerzan tal jurisdicción, sean tramitados o ventilados en los tribunales del Área del Canal.

- (a) La Administración cooperará con las autoridades de la República de Panamá y ayudará a las mismas y a tales fines hará arrestar, dentro del Área del Canal, a las personas acusadas de haber cometido delitos y faltas con respecto a los cuales la República de Panamá ejerza jurisdicción conforme a las estipulaciones anteriores y entregará dichas personas a las autoridades de la República de Panamá cuando se le presente una orden de arresto debidamente expedida. La República de Panamá cooperará con la administración y ayudará a la misma y a tales fines hará arrestar, en el resto del territorio de la República de Panamá, a las personas acusadas de haber cometido delitos y faltas con respecto a los cuales la Administración ejerza jurisdicción conforme a las estipulaciones anteriores y entregará dichas personas a la Administración cuando se le presente una orden de arresto debidamente expedida.

Se tomarán las medidas necesarias del caso para asegurar que las personas acusadas de haber cometido delitos y faltas de menor importancia no sean privadas innecesariamente de su libertad antes de ser juzgadas.

La República de Panamá y la Administración cooperarán y se auxiliarán mutuamente para llevar a cabo la investigación necesaria de los delitos y faltas, para la obtención y presentación de pruebas y para la incautación y, cuando a ello hubiere lugar, la entrega de objetos relacionados con la comisión de un delito o falta.

Los tribunales del Área del Canal harán, dentro del Área del Canal, las citaciones y notificaciones debidamente expedidas en causas civiles por los tribunales de la República de Panamá. En el resto del territorio de la República de Panamá, los tribunales de la República de Panamá harán las citaciones y notificaciones debidamente expedidas en causas civiles por los tribunales del Área del Canal. Las citaciones y notificaciones hechas en la forma indicada en este párrafo establecerán la jurisdicción del tribunal que haya expedido las mismas sobre las personas citadas o notificadas, siempre que ello se ajuste a las estipulaciones del numeral (5) de este Artículo.

Los tribunales del Área del canal tomarán las medidas del caso

para asegurar que las citaciones expedidas por los tribunales de la República de Panamá sean hechas en el Área del Canal y obedecidas por las personas que se encuentren en el Área del Canal, y los tribunales de la República de Panamá tomarán las medidas del caso para asegurar que las citaciones expedidas por los tribunales del Área del Canal sean hechas en el resto de la República de Panamá y obedecidas por las personas que se encuentren en el territorio de la República de Panamá fuera del Área del Canal.

Las sentencias dictadas por un tribunal de la República de Panamá que sean ejecutables bajo las leyes de la República de Panamá y, que no sean contrarias a este Tratado, serán reconocidas y ejecutables en el Área del Canal por medio de los tribunales del Área del Canal.

Las sentencias dictadas por los tribunales del Área del Canal que sean ejecutable de acuerdo con las disposiciones de los Estatutos de la Administración y, que no sean contrarias a este Tratado, serán reconocidas y ejecutables en el resto del territorio de la República de Panamá por los tribunales de dicho país.

(f) La República de Panamá y la Administración acordaran y promulgaran procedimientos para el cumplimiento de lo estipulado en los párrafos (a), (b), (c), (d) y (e) de este numeral.

(a) La Administración y sus dignatarios y empleados no podrán ser demandados en juicios relacionados con el establecimiento, modificación o cobro de peajes u otras cargas relativas al tránsito de naves por el Canal del Panamá.

(b) En los casos que se enumeran a continuación, las demandas judiciales podrán ser presentadas sólo contra la Administración y sólo en los tribunales del Área del Canal:

Reclamaciones por daños causados en aguas del Área del Canal, inclusive en las esclusas, a los buques o a las cargas, tripulaciones o pasajeros de los mismos y reclamaciones referentes a cualquier acto oficial de la Administración o de sus dignatarios o empleados cometidos dentro del Área del Canal en el desempeño de sus funciones oficiales.

La Administración establecerá un sistema de procedimiento administrativo para conocer y ajustar las reclamaciones que se susciten conforme a las estipulaciones del párrafo (b) de este numeral, ya sea que tales reclamaciones se presenten contra ella o contra sus dignatarios y empleados en relación con el desempeño de sus funciones oficiales. Los reclamantes deberán agotar tal procedimiento administrativo antes de presentar acción judicial.

- (a) Todos los juicios y procedimientos ante el Tribunal, ya sean civiles o penales, serán, con sujeción a las estipulaciones de este Tratado, conocidos por un Juez del Canal de Panamá (o por el Conjuez del Canal de Panamá que actúe en reemplazo). Los fallos dictados en los casos de que trata este párrafo podrán ser apelados ante un tribunal de tres jueces, en el cual no se incluirá al Juez del Canal de Panamá o al Conjuez del Canal de Panamá contra cuyo fallo se haya apelado. Los fallos del tribunal de apelaciones serán definitivos.

En asuntos penales, el acusado tendrá derecho, a su discreción, a que se le celebre juicio ante jurado, excepto en los casos que sean del conocimiento de los tribunales de primera instancia de jurisdicción limitada establecidos de acuerdo con las disposiciones del numeral (10) de este Artículo. Los fallos absolutorios en materia penal, dictados sobre el fondo del asunto, no estarán sujetos a apelación.

El Tribunal podrá mediante la adopción de reglamentos adecuados, establecer períodos para conocer de apelaciones de acuerdo con las disposiciones de este párrafo. El Tribunal también podrá, según lo estime necesario, adoptar otros reglamentos referentes a la tramitación de juicios y apelaciones que tomarán en cuenta lo dispuesto en el numeral (11) de este Artículo.

El Tribunal tendrá el derecho y la facultad de establecer los tribunales inferiores de jurisdicción limitada que estime necesarios y convenientes. La jurisdicción de estos tribunales, sus reglas de práctica y procedimiento y el nombramiento, período, remoción y los salarios y gastos de los jueces y de otros funcionarios serán determinados por el Tribunal. La jurisdicción penal de estos tribunales estará limitada a casos en que la pena máxima no exceda de la multa de B/. 500.00 o prisión por treinta días o de ambas. Todos los gastos de los tribunales inferiores de jurisdicción limitada serán pagados de los fondos de la Administración. Las apelaciones contra las decisiones de los tribunales inferiores se regirán por la reglas del Tribunal.

Con anterioridad al establecimiento del Tribunal del Área del Canal, la República de Panamá y los Estados Unidos de América acordarán los arreglos necesarios para la continuación u otra solución de los asuntos pendientes ante los tribunales de la Zona del Canal, incluidas las apelaciones, ejecución de sentencia y otros problemas relativos a la tramitación de juicios penales y a las apelaciones de los mismos en los tribunales del Área del Canal.

ARTÍCULO XXVI

La Administración promulgará y hará cumplir todas las reglas y reglamentos necesarios para hacer efectivo el ejercicio de los derecho y facultades que se le confieren mediante este Tratado.

La Administración ejecutará todos los actos necesarios para hacer efectivos los derechos y facultades que se le confieren por medio de este Tratado y desempeñará las funciones administrativas que se requieran para el cumplimiento de los fines de este Tratado.

La Administración desempeñará cualesquiera otras funciones y ejercerá cualesquiera otros derechos y facultades que, con sujeción a las estipulaciones de este Tratado, sean autorizados por la Junta mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

ARTÍCULO XXVII

En la fecha en que la Administración asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este Tratado, las personas empleadas por la Compañía del Canal de Panamá y por el Gobierno de la Zona del Canal serán transferidas al servicio de la Administración bajo condiciones de empleo establecidas conforme al acuerdo entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América anexo a este Tratado.

ARTÍCULO XXVIII

- (a) La República de Panamá conviene en que ella y las divisiones políticas de la misma no agravarán con impuesto, derechos u otras cargas. El Canal de Panamá; las áreas de tierra y agua que integran el Área del Canal; la Administración o sus actividades o servicios, excepto en el caso señalado en el párrafo (b) del numeral (2) del Artículo XV de este Tratado; las instalaciones, edificios, materiales, equipos, abastos y otros bienes adquiridos o usados por la Administración en el ejercicio de los derechos y facultades que se le señalan en este Tratado y en el desempeño de las responsabilidades y funciones que se le señalan en el mismo; las naves y sus cargas, tripulaciones y pasajeros que pasen por el Canal de Panamá; y el uso por parte de naves o sus tripulaciones y pasajeros de las instalaciones del canal y de los servicios prestados por la Administración. Los jueces de los tribunales del Área del Canal y de los dignatarios, empleados y contratistas de la Administración y

los empleados de tales contratistas no estarán exentos del pago de tales impuestos, derechos y otras cargas excepto en los casos en que así se especifique en este Tratado.

La República de Panamá conviene en que ella y las divisiones políticas de la misma no gravaran con impuestos, derechos u otras cargas los materiales, equipos, abastos y otros bienes de los contratistas de la Administración que sean usados por tales contratistas exclusivamente en relación con trabajos efectuados para la Administración o para beneficio de ésta, excepto bienes inmuebles situados en la República de Panamá fuera del Área del Canal.

La República de Panamá permitirá a la Administración y a sus contratistas, importar, libre de derechos de aduana, impuestos, contribuciones o de otros gravámenes y libres de la obtención de licencia de importación cualesquiera materiales, equipos, abastos u otros artículos que hayan de ser usados en el ejercicio de los derecho y facultades conferidos a la Administración de acuerdo con las disposiciones de este Tratado. Los referidos privilegios de importación libre de derechos de aduana, no se extenderán a los miembros de la Junta, los jueces de los Tribunales del Área del Canal y a los dignatarios y empleados de la Administración, excepto según se estipula en el numeral (9) del Artículo IV de este Tratado, o al personal de los contratistas de la Administración o a otros residentes del Área del Canal. Después de la fecha en que la Administración asuma su totalidad de las responsabilidades y funciones que se señalan en este Tratado, los privilegios para importar la exoneración de los derechos de aduana no se extenderá a ningún artículo importado por la Administración para fines de reventa, excepto que se trate de importaciones hechas con el objeto de efectuar reventas a la República de Panamá o a los Estados Unidos de América, o a sus respectivas dependencias. La Administración y sus contratistas obtendrán bienes cultivados o desarrollados, extraídos de minas, producidos, fabricados o ensamblados en la República de Panamá, o bienes de origen de los Estados Unidos de América que puedan obtenerse en la República de Panamá, cuando la calidad de los mismos sea satisfactoria a la Administración y el costo de tales bienes a la Administración, entregados en Panamá, no sea mayor que el obtenerlos en los Estados Unidos de América.

El traspaso por parte de la Administración o de sus contratistas, a cualquier persona dentro de la República de Panamá (excepto si se trata de traspaso a la República de Panamá o los Estados Unidos de América o sus respectivas dependencias) de mate-

riales, equipos, abastos y otro bienes importados de acuerdo con las disposiciones del numeral (2) de este Artículo, será considerado como una importación, por parte del adquiriente, del bien objeto del traspaso, efectuada del país de origen en la fecha en que se haga el traspaso al adquiriente y éste estará obligado a pagar a la República de Panamá los derechos de aduana y otras cargas que graven la importación del bien adquirido, y si los derechos de importación u otras cargas son fijados ad-valorem los mismos se determinarán a base del valor del bien objeto de la venta en el momento en que ésta se efectúe.

ARTÍCULO XXIX

Después de la fecha en que la Administración asuma la totalidad de las responsabilidades u funciones que se le señalan en este Tratado:

- (1) La República de Panamá tendrá el derecho a que los buques disfruten del uso y goce de los muelles y otras obras en los puertos del Área del Canal para cargar y descargar mercaderías y embarcar y desembarcar pasajeros con sujeción a los términos y condiciones satisfactorias que acuerden la República de Panamá y la Administración, incluido el pago de cargas apropiadas fijadas por la Administración
 - (a) La República de Panamá permitirá a los buques que entren a los puertos de la República de Panamá o que zarpen de éstos, el uso y goce de los muelles y otra obra de dichos puertos con sujeción a reglamentos adecuados y previo pago de cargas apropiadas, con el fin de recibir o desembarcar pasajeros destinados al Área del Canal o procedentes de la misma y de cargar o descargar carga ya sea en tránsito o destinada para el uso de la Administración.
 - (b) La República de Panamá podrá establecer en sitios facilitados por la Administración dentro del Área del Canal y que sean mutuamente aceptables, a costo de la República de Panamá pero libre de cargas por parte de la Administración, excepto las referentes a servicios prestados por ésta los edificios e instalaciones que sean necesarios para el funcionamiento de oficinas de aduana, inmigración, salud pública y turismo, y
 - (c) Los funcionarios de inmigración y salud pública de la República de Panamá tendrán libre acceso a los buques y aeronaves que lleguen al Área del Canal con el objeto de

hacer cumplir las leyes y reglamentos de inmigración de la República de Panamá y, en lo referente a carga o pasajeros que se muevan hacia lugares en la República de Panamá fuera del Área del Canal o desde tales lugares hacia el Área del Canal, con el objeto de obtener la información necesaria para hacer cumplir las leyes y reglamentos de salubridad de la República de Panamá. En cuanto ello se conforme con la práctica internacional, las naves, incluidas las de guerra, y aeronaves que sean de propiedad de un Estado o sean manejadas o fletadas por éste y usadas exclusivamente para fines no comerciales, estarán exentas de las estipulaciones de este numeral.

ARTÍCULO XXX

- (1) La Administración llevará sus registros y libros de contabilidad de acuerdo con principios contables que sean de aceptación general y que sean aprobados por el contralor General de la República de Panamá y por el Contralor General de los Estados Unidos de América.
- (2) Con posterioridad a la fecha en que la Administración asuma la totalidad de las de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este Tratado, la Administración, dentro de los 120 días siguientes al vencimiento de cada año fiscal, entregará al Presidente de la República de Panamá y al Presidente de los Estados Unidos de América, la relación de los ingresos y las fuentes y la utilización de fondos de la administración correspondiente a dicho año fiscal y el balance de situación de la Administración correspondiente al último día de tal año fiscal. Tales estados y balance de situación señalarán en forma razonablemente detallada los resultados de las transacciones y el estado financiero de la Administración y estarán acompañados del concepto emitido por una firma independiente de contadores públicos seleccionados por la Administración con la aprobación de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América.

ARTÍCULO XXXI

La Administración tendrá uso libre y sin costo de las aguas de los lagos Madden, Gatún y Miraflores y de sus corrientes tributarias:

- (a) Para el funcionamiento y mantenimiento del Canal de Panamá; para la generación de energía eléctrica.

- (b) Para satisfacer la demanda de energía eléctrica que exceda la capacidad de producción de las plantas existentes en el Área del Canal en la fecha en que la Administración asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este tratado, la Administración comprará preferiblemente a la República de Panamá la energía eléctrica que necesita, siempre que la República de Panamá ofrezca tal energía eléctrica en condiciones Técnicas y económicas que sean aceptables a la Administración; y
- (c) para el suministro de agua para fines municipales en el Área del Canal; para las ciudades y poblaciones de la República de Panamá según los mismos términos y condiciones y en las mismas cantidades acordados entre la República de Panamá y la Compañía del Canal de Panamá con anterioridad a la fecha en que entre en vigor este Tratado o que puedan acordarse entre la República de Panamá y la Administración; y para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América de acuerdo con el párrafo (b) del numeral (1) del Artículo XXI de este Tratado.

La Administración tendrá el derecho y la facultad:

Para elevar la superficie del Lago Madden a 260 pies sobre el nivel medio del mar y la del Lago Gatún a 100 pies sobre el nivel medio del mar y bajar la superficie de dichos lagos en cuanto sea necesario a causa del uso de las aguas en ellos contenidas, con sujeción a que la determinación del nivel de los lagos será coordinada entre las dependencias responsables de la República de Panamá y la Administración con el objeto de proteger el funcionamiento del canal y el suministro de agua a la República de Panamá;

para construir, inspeccionar y mantener estaciones pluviométricas y de aforo de ríos en las cuencas de los lagos y sus tributarios siempre y cuando que la Administración facilite a la República de Panamá los datos e informaciones obtenidos, y

para inspeccionar, mantener y reparar las presas auxiliares del Lago Gatún en Lagarto, Escobal, Caño, Arroyo, Canoa y Barro.

La República de Panamá y la Administración cooperarán:

Para impedir cualquier uso o actividad que pudiera contaminar los Lagos Madden, Gatún y Miraflores y sus tributarios o en cualquier forma perturbar su uso por la Administración para los fines expresados en el numeral (1) de este Artículo;

para proteger las estaciones pluviométricas y de aforo de ríos de la

Administración contra robo o vandalismos; y para impedir cualquiera excavación o remoción de tierra o vegetación de las presas auxiliares del Lago Gatún o de sitios próximos a las mismas, o cualquier otra actividad que pudiera disminuir se estabilidad como presas.

Las estipulaciones de este Artículo no restringirán el derecho de la República de Panamá de aprovechar las referidas aguas, salvo en la medida que dicho aprovechamiento perturbe o impida el funcionamiento y mantenimiento del Canal de Panamá. La Administración prestará su cooperación y ayudará a la República de Panamá a obtener de las mencionadas fuentes, a expensas de la República de Panamá; pero libre de cargas por parte de la Administración, excepto las referentes a servicios prestados por ésta, las cantidades de agua que requiera la población de la áreas metropolitanas de las ciudades de Panamá y Colon y otras poblaciones situadas en la vecindad de dichas áreas.

La Administración y el Gobierno de la República de Panamá cooperarán para efectuar estudios sobre la viabilidad de formar lagos satélites en la cuenca de los ríos Indio, Chagres, Pequeñí, Agua Clara, Boquerón, Gatún, Agua Sucia, Ciri, Trinidad y otros ríos con el fin de aumentar las reservas de agua necesarias para el funcionamiento del Canal de Panamá y de asegurar a la República de Panamá beneficios de irrigación, generación de la energía eléctrica, viveros de peces y otros similares que sean compatibles con el funcionamiento eficiente del Canal de Panamá.

La Administración también cooperará con la República de Panamá y sus dependencias correspondientes con respecto a los siguientes asuntos:

Reconocimientos sobre el terreno, investigaciones y estudios de los recursos hidrológicos del Área del Canal y de las áreas metropolitanas de la República de Panamá adyacentes al canal, así como la elaboración de programas y el desarrollo de proyectos para la conservación y uso conjunto de tales recursos por parte de la República de Panamá y la Administración, y desarrollo del potencial hidroeléctrico de las vertientes tributarias del Canal de Panamá y reducción del costo de la producción y distribución de energía eléctrica y agua potable.

ARTÍCULO XXXII (*)

Si el uso de áreas de tierra o aguas adicionales a las mencionadas en el Artículo III de este Tratado o el acceso a las mismas fueren requeridos para los fines del funcionamiento, mantenimiento o seguridad del Canal de Panamá, la República de Panamá y la Administración acordarán las medidas que sea necesario tomar para asegurar tal uso o acceso.

ARTÍCULO XXXIII

(1) La Administración manejará el Canal de Panamá con el objeto de que la República de Panamá y los Estados Unidos de América obtenga una retribución justa a la luz de sus contribuciones a la creación y mantenimiento de dicha vía interoceánica y en el interés del comercio mundial.

(2) De conformidad con las estipulaciones siguientes y con las estipulaciones del numeral (3) de este Artículo, la Administración podrá establecer y hacer efectivas nuevas tarifas de peajes y cargas incidentales en relación con el tránsito de buques y carga por el Canal:

No habrá discriminación que se fundamente en la nacionalidad de buques o cargas.

las tarifas de peajes se establecerán equitativamente y podrán diferenciarse con fundamento en un criterio justo y Razonable.

la Administración tomará en cuenta todos los estudios sobre peajes hechos por cuenta de la República de Panamá o de los Estados Unidos de América o sometidos a su consideración por dichos gobiernos:

ningún cambio en los peajes será efectivo hasta que transcurra un periodo de 12 meses que se contará desde la fecha en que la Administración haya dado aviso público de los cambios que se proyectan en los peajes. Durante este periodo de 12 meses la Administración dará debida consideración a los puntos de vista de todas las partes interesadas, y

los peajes serán pagaderos en dólares de los Estados Unidos de América.

* El texto del Artículo XXXII fue modificado según consta en la nota MNP-12/68 del 3 de enero de 1968, del embajador Roberto R. Aleman, que aparece más adelante

Durante el primer período de tres años de funcionamiento del Canal, contado a partir desde la fecha en que la Administración asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este Tratado, la Administración, en adición a las modificaciones exigidas por el funcionamiento y mantenimiento del Canal de Panamá, modificará las tarifas de peajes con el solo objeto de cubrir los pagos que deben ser efectuados por la Administración de acuerdo con lo estipulado en el numeral (4) de este Artículo.

Los fondos de la Administración serán usados, en el orden de prelación que a continuación se indica para los fines siguientes:

Pago del costo de funcionamiento y mantenimiento del Canal, inclusive un pago anual a la República de Panamá que se efectuará al final de cada año de funcionamiento del canal así: se comienza con el pago equivalente a la cantidad de 17 centésimos de dólar de los Estados Unidos de América (\$0.17) por tonelada de 2240 libras (long ton) de carga comercial que transita por el canal durante el primer año del funcionamiento del mismo bajo la dirección de la Administración; tal pago anual se incrementará anualmente durante cada uno de los cinco años siguientes en la cantidad de un centésimo de dólar de los Estados Unidos de América (\$0.01) por tonelada de 2240 libras (long ton) de carga comercial que transite el canal durante el año respectivo; transcurridos los cinco años referidos de veintidós centésimos de dólar de los Estados Unidos de América (\$0.22) por tonelada de 2240 libras (long ton) de carga comercial que transite por el canal durante cada año de su funcionamiento;

establecimiento del capital circulante necesarios y de los fondos de reserva necesarios, inclusive las reservas para el mantenimiento de las esclusas, reemplazo de instalaciones y mejoras capitales, así como para el pago de intereses y otros costos relativos a la amortización de la deuda;

pago del costo corriente de mejoras o adiciones capitales;

pago de cualesquiera otras obligaciones asumidas por la Administración o de documentos comprobatorios de deuda expedidos por la misma; y

un pago anual a los Estados Unidos de América que se efectuará al final de cada año de funcionamiento del Canal, así: se comienza con un pago equivalente a la cantidad de 8 centésimos de dólar de los Estados Unidos de América (\$0.08) por tonelada de 2240 libras (long ton) de carga comercial que transite por el canal duran-

te el primer año del funcionamiento del mismo bajo la dirección de la Administración; tal pago anual se incrementará anualmente durante cada uno de los años siguientes en la cantidad de un centésimo de dólar de los Estados Unidos de América (\$0.01) por tonelada de 2240 libras (long ton) de carga comercial que transite el canal durante el año respectivo; transcurrido los dos años referidos, el pago anual a los Estados Unidos de América será de diez centésimos de dólar de los Estados Unidos de América (\$0.10) por tonelada que transite por el canal durante cada año de su funcionamiento.

Después de que los pagos mencionados en el numeral (1) de este Artículo hayan sido hechos de los fondos recibidos en concepto de cobro de peajes, el remanente de las entradas percibidas por la Administración se distribuirá en partes iguales entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América.

Los pagos a la República de Panamá o a los Estados Unidos de América de que se trata en este Artículo, o cualquier parte de los mismos, podrán ser renunciados por el Gobierno del país respectivo, o diferidos por la Administración con sujeción a los términos y condiciones que sean aceptables al gobierno de ese país. Los pagos que debe efectuar la Administración a la República de Panamá o a los Estados Unidos de América de acuerdo con las estipulaciones de este Artículo podrán ser aplicados por la Administración a las sumas que a la misma adeuden la República de Panamá o los Estados Unidos de América, respectivamente.

ARTÍCULO XXXIV

La República de Panamá declara la neutralidad del Canal de Panamá.

La República de Panamá y los Estados Unidos de América convienen en que la neutralidad del canal, así como la de sus entradas y aguas territoriales adyacentes a la misma, serán mantenidas de acuerdo con los principios que han regido tal neutralidad desde que el canal fue abierto al tránsito internacional.

El Canal de Panamá así como sus entradas y aguas territoriales adyacentes a la misma, estarán abiertos y libres a las buques de comercio y de guerra de todas las naciones, en términos de completa igualdad y sin discriminación alguna, con sujeción a lo siguiente:

El pago de los peajes y cargas aplicables;
el cumplimiento con las normas y reglamentos en vigencia, inclui

das aquellas normas y reglamentos que puedan establecerse en tiempo de guerra u otra emergencia; y

la obligación de que los buques que usen el Canal de Panamá no cometan actos de hostilidad en el mismo o en sus entradas o aguas territoriales adyacentes a dichas entradas.

No obstante cualesquiera otras estipulaciones de este tratado, la República de Panamá y los Estados Unidos de América tendrán derecho en todo momento a que los buques, incluidos los buques de guerra, que sean de su propiedad o que sean manejados o fletados por dichos países, así como la cargas a bordo de los mismos, transiten en canal de Panamá, siempre que sean usados exclusivamente para fines no comerciales. Para los fines señalados en el Artículo XXXV de este tratado, tales buques tendrán derecho a usar el Canal de Panamá con prioridad.

Los buques a que se refiere el numeral (4) de este Artículo pagarán los peajes establecidos por la Administración; pero el pago de tales peajes se hará deduciendo su monto de las sumas que, de acuerdo con las estipulaciones de Artículo XXXIII de este tratado, se adeuden al país que sea propietario de tales buques o manejo o haya fletado los mismos.

La República de Panamá conviene en que, con posterioridad la terminación de este tratado, los principios estipulados en los numerales (1), (2), (3) y (4) de este Artículo se continuarán aplicando al Canal de Panamá. Cualquier declaración de neutralidad hecha por la República de Panamá para poner en ejecución tales principios será hecha de acuerdo con las normas del Derecho Internacional.

ARTÍCULO XXXV

La República de Panamá y los Estados Unidos de América tomarán las medidas necesarias para la defensa, seguridad, neutralidad y continuidad de funcionamiento del Canal de Panamá; de la navegación en el mismo y de las obras y servicios accesorios y auxiliares del Canal; así como lo relativo a la defensa y seguridad del Área del Canal, de acuerdo con las estipulaciones aplicables del Tratado concerniente a la Defensa del Canal de Panamá y de su Neutralidad firmado en esta misma fecha.

Dentro del período de cinco años anterior a la terminación del Tratado de Defensa a que se refiere el numeral (1) de este Artículo, de la República de Panamá y los Estados Unidos de América acordarán las medidas para asegurar la defensa, seguridad, neutrali-

dad y continuidad de funcionamiento del Canal de Panamá después de la expiración de este Tratado. (*)

ARTÍCULO XXXVI

Durante el período que transcurra entre la fecha en que entre en vigor este Tratado y la fecha en que la Administración asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones que se le señalen en este Tratado, la República de Panamá y los Estados Unidos de América, respectivamente, continuarán disfrutando y ejerciendo los mismos derechos, facultades y autoridad que disfrutaban y ejercían de acuerdo con los Tratados abrogados y los Acuerdos terminados conforme al Artículo I de este Tratado y estarán sujetos a las mismas obligaciones que tenían conforme a los antedichos Tratados y Acuerdos.

Durante el período a que se refiere el numeral anterior los Estados Unidos de América continuarán manejando y manteniendo el Canal de Panamá y administrarán el Área del Canal de acuerdo con el sistema en vigencia en la Zona del Canal con anterioridad al momento en que este Tratado entre en vigor.

Durante el período a que se refiere el numeral (1) de este Artículo, las personas, empresas y asociaciones que residan o estén empleadas o desarrollen actividades en el Área del Canal, disfrutarán de los mismos derechos, privilegios y status de que disfrutaban con anterioridad al momento en que este tratado entre en vigor.

ARTÍCULO XXXVII

Toda controversia entre los dos Gobiernos relativa a la interpretación o aplicación de este Tratado, la validez de los actos de la Administración o las omisiones por parte de la Administración que no sea resuelta mediante negociación directa será sometida a arbitraje a solicitud de cualquiera de los dos gobiernos de acuerdo con el procedimiento aquí indicado.

El arbitraje será efectuado por un tribunal de tres árbitros nombrados como sigue:

Cada Gobierno nombrará un árbitro dentro del mes siguiente a la fecha en la cual uno de los dos Gobiernos haya hecho entrega

* El párrafo 2 del Artículo XXXV fue modificado según consta en la nota MNP-12-68 del 3 de enero de 1968, del Embajador Roberto R. Aleman, que aparece más adelante.

al otro de una solicitud de arbitraje. Dentro del mes siguiente a la fecha en que ambos árbitros hayan sido nombrados, los dos árbitros así designados nombrarán a un tercer árbitro, entendiéndose que el mismo no será nacional ni de la República de Panamá ni de los Estados Unidos de América; y

si cualquier de los dos Gobiernos dejare de designar un árbitro, o si no se llegará a un acuerdo respecto al tercer árbitro que debe ser designado, según se estipula en el párrafo (a) de este numeral, cualquiera de los Gobiernos podrá solicitar a la corte Internacional de Justicia que designe el árbitro o los árbitros que hagan falta; en caso de que la Corte Internacional de Justicia decline actuar al respecto, la solicitud podrá ser presentada al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

Los gastos del tribunal arbitral, inclusive los honorarios y gastos de los árbitros, serán compartidos igualmente por los dos Gobiernos.

Todas las decisiones del tribunal arbitral serán definitivas y obligatoria para la República de Panamá, los Estados Unidos de América y la Administración.

ARTÍCULO XXXVIII

Al entrar en vigor este Tratado, todos los derechos de los Estados Unidos de América referentes a bienes raíces situados en el territorio que constituyó la Zona del Canal pero que no se ha incluido en el Área del Canal o en las Áreas descritas en el Anexo A del Tratado Concerniente a la Defensa del Canal de Panamá y de su Neutralidad, firmado en esta fecha entre la República de Panamá y los Estados Unidos América; así como los referentes a las áreas situadas fuera de la Zona del Canal que se especifican en el numeral (6) del Anexo I de este Tratado serán derechos exclusivos de la República de Panamá libres de costo, conforme al Anexo IV de este Tratado. La República conviene en liberar a los Estados Unidos de América con respecto a cualquier reclamación relativa a tales bienes raíces que pueda ser presentada por terceras personas, incluidas las relaciones relativas al traspaso de tales derechos sobre bienes raíces a la República de Panamá.

La República de Panamá conviene en que el traspaso de derechos a que se refiere el numeral (1) de este Artículo no perjudicará el título de propiedad sobre los terrenos que constituyen los lotes numerados 641, 643, 645 y 647 situados en la esquina Suroeste de la intersección de la Avenida Bolívar y la calle 11 en Cristóbal y las

mejoras construidas sobre los mismos; dichos lotes fueron tras pasados el día 16 de abril de 1921 por la Compañía del Ferrocarril de Panamá a la Sojourners Lodge of the Ancient Free and Accepted Nasons. La República de Panamá conviene, además, en que los derechos de personas y asociaciones referentes a edificios y otras mejoras en los terrenos a que se refiere el numeral (1) de este Artículo que formaban parte de la Zona del Canal serán reconocidos bajo las leyes de la República de Panamá. La República de Panamá conviene en que permitirá a las personas o asociaciones que, en la fecha en que entre en vigor este Tratado desarrollen actividades mercantiles o no lucrativas en los terrenos en que se refiere el numeral (1) de este Artículo y que formaban parte de la Zona del Canal, continuar tales actividades en los locales que entonces ocupaban, de acuerdo con los arreglos que a este efecto sean celebrados entre la República de Panamá y las personas o asociaciones interesadas, según ello sea necesario. Si la República de Panamá exige a cualquiera de tales personas o asociaciones que cesen sus actividades, ellas recibirán una compensación justa por el valor de las mejoras que hayan efectuado sobre las tierras referidas.

Al terminar la vigencia de este Tratado, todos los derechos de los Estados Unidos y de la Administración sobre bienes inmuebles situados dentro del Área del Canal serán derechos exclusivos de la República de Panamá libre de costo, pero ello no afectará en forma alguna los derechos de los Estados Unidos estipulados en el numeral (1) del Anexo (1) del Tratado concerniente al Canal al nivel del mar que una los Océanos Atlántico y Pacífico firmado en esta fecha. La República de Panamá conviene en liberar a los Estados Unidos con respecto a cualquiera reclamación relativa a tales bienes inmuebles que pueda ser presentada por terceras personas, incluidas las reclamaciones relativas al traspaso de tales derechos sobre dichos bienes inmuebles a la República de Panamá.

ARTÍCULO XXXIX

Al terminar este Tratado: a) El Canal de Panamá pasará al control exclusivo de la República de Panamá y todas sus obras y servicios accesorios y auxiliares y todos los bienes de la Administración serán de propiedad de la República de Panamá; b) todos los derechos sobre bienes otorgados a la Administración de acuer-

do con las estipulaciones de este Tratado serán derechos exclusivos de la República de Panamá. La República de Panamá no estará obligada a pagar ninguna compensación por razón de lo estipulado en este numeral.

La República de Panamá conviene en liberar a los Estados Unidos con respecto a cualquiera reclamación que pueda ser presentada por terceras personas relativas a la adquisición, por parte de la República de Panamá, de los derechos a que se refiere el numeral (1) de este Artículo.

ARTÍCULO XL

Este Tratado será ratificado de acuerdo con los procedimientos constitucionales de los dos Gobiernos. Los instrumentos de ratificación serán canjeados en la ciudad de Panamá tan pronto como sea posible.

ARTÍCULO XLI

Este Tratado entrará en vigor al efectuarse el canje de ratificaciones y estará en vigencia hasta el día 31 de diciembre de 1999.

Si un Canal al nivel del mar que una los Océanos Atlántico y Pacífico fuera abierto al tránsito antes del día 31 de diciembre de 1999, este Tratado terminará cuando haya transcurrido un año desde la fecha de apertura de tal Canal a nivel del mar.

En el caso de que para el 31 de diciembre de 1999, o antes, los Estados Unidos hubieren comenzado la construcción del Canal a nivel del mar en la República de Panamá, conforme a lo estipulado en el Tratado Concerniente a la Construcción de un Canal a Nivel del Mar en la República de Panamá que una los Océanos Atlántico y Pacífico, firmado en esta fecha, el presente Tratado terminará en cualquiera de las siguientes fechas que ocurra primero: En la que se cumpla un año de haber sido abierto al tránsito el referido canal o el 31 de diciembre del año 2009.

El Canal a Nivel del Mar se considerará abierto al tránsito en la fecha en que cualquier nave cuyo tránsito se encuentre sujeto al pago de peajes pase a través de dicho canal.

Este Tratado se extiende simultáneamente en español e inglés y las Altas Partes Contratantes convienen en que la interpretación de cualquiera de sus estipulaciones el texto en español y el texto en inglés se considerarán igualmente válidos.

Firmado en Washington este día de 1967.

ANEXO I

- (1) Las áreas de tierras y aguas que serán conocidas como el Área del Canal y cuyo uso se concede a la Administración de acuerdo con las estipulaciones del Artículo III de este Tratado, son las situadas dentro de los límites señalados en los mapas que aparecen en el Adjunto No. 1 de este Anexo y que con mayores detalles se describen en la forma siguiente.

(Detalles de medidas y límites serán suministrados).

- (2) La República de Panamá otorga a la Administración el derecho de acceso libre y sin impedimento a las instalaciones auxiliares a la navegación, muelles para lanchas, estaciones de triangulación, estaciones de aforo pluvial y fluvial, depósitos para desperdicios de dragados, líneas de transmisión de corriente eléctrica y de telecomunicación, vías, desvíos, patios y estaciones de ferrocarril, tuberías y sistemas de acueducto y alcantarillado que estén situados fuera del Área del Canal y que sean de propiedad de los Estados Unidos de América o manejados por dicho país por medio de sus dependencias la Compañía del Canal de Panamá o el Gobierno de la Zona del Canal en la fecha en que entre en vigor este Tratado, incluyendo, pero sin que ello sea limitativo a las obras y áreas que se enumeran en el Adjunto No. 2 de este Anexo, así como el derecho de inspeccionar, mantener, manejar, reparar, usar y reemplazar los mismos.

La Administración tendrá iguales privilegios en relación con las obras adicionales que sean construidas o establecidas por la Administración fuera del Área del Canal como resultado de acuerdos celebrados entre la República de Panamá y la Administración.

- (a) Con sujeción a las leyes y reglamentos que sean aplicables, habrá libertad de tránsito en todas las vías públicas del Área del Canal y en el resto de la República de Panamá.
- (b) La Administración coordinará el control del tránsito en la intersección de la Calle Gorgas y la Calle Frangipani con las medidas de control de tránsito que se tomen en las calles fuera del Área del Canal que desembocan en las calles Gorgas y Frangipani de manera que se asegure el tránsito libre e ininterrumpido por las calles Gorgas y Frangipani entre puntos situados fuera del Área del Canal.
- (4) El área destinada a fines de desarrollo industrial a que se refiere el numeral (2) del Artículo XVIII de este Tratado es una parcela de 127.3 acres, aproximadamente, situadas al norte y

al oeste de la población de «Diablo Heights», cuyos linderos se indican en el dibujo T-100 del Adjunto No. 2 de este Anexo y que, en una forma más detallada se describe así:

Comenzando en el punto sin amojonar IB-1 situado, aproximadamente, a cinco pies al Suroeste del borde Este de una zanja de drenaje de concreto, cuya posición geodésica es, aproximadamente, latitud Norte 8 grados 58 minutos más 2500 pies, aproximadamente, y longitud Oeste 79 grados 34 minutos más 1900 pies, aproximadamente;

Partiendo de este punto inicial, con los siguientes linderos y medidas: Sur 28 grados 30 minutos Oeste, 1300 pies, aproximadamente a un punto sin amojonar IB-2, la posición geodésica del cual es, aproximadamente, latitud Norte 8 grados 58 minutos más 1280 pies, aproximadamente, la longitud Oeste 79 grados 34 minutos más 2515 pies, aproximadamente;

Suroeste, 1190 pies, aproximadamente, a lo largo de una línea paralela a la línea central de una zanja de drenaje de canales de concreto y situado a 6 pies al Noreste de la misma a un punto sin amojonar IB-3, que está situado, aproximadamente, en latitud Norte 8 grados 58 minutos más 205 pies, aproximadamente, y longitud Oeste 79 grados 34 minutos más 2025 pies, aproximadamente;

Norte 60 grados 45 minutos Oeste 493 pies, aproximadamente a un punto sin amojonar IB-4, situado, aproximadamente, a 60 pies al Noreste de la línea del centro de una puerta en una cerca de malla de ciclón que atraviesa el camino de acceso al muelle de Diablo, cuya posición geodésica es, aproximadamente, latitud Norte 8 grados 58 minutos más 450 pies, aproximadamente, y longitud Oeste 79 grados 34 minutos más 2450 pies, aproximadamente;

Norte 47 grados 30 minutos Oeste, 1830 pies, aproximadamente, pasando por IB-5, que es un punto sin amojonar, a IB-6, que es un tubo de hierro galvanizado de 2 1/2 pulgadas sentado en concreto, cuya posición geodésica es, aproximadamente, latitud Norte 8 grados 58 minutos más 1680 pies, aproximadamente, y longitud Oeste 79 grados 34 minutos más 3780 pies, aproximadamente, siendo las distancias, aproximadamente, 930 pies y 900 pies;

Norte 20 grados 17 minutos Oeste, 2400 pies, aproximadamente, a IA-37, que es un tubo de hierro galvanizado de 2 1/2 pulgadas, la posición geodésica del cual es, aproximadamente,

te, latitud Norte 8 grados 58 minutos más 3890 pies, aproximadamente, y longitud Oeste 79 grados 34 minutos más 4574 pies, aproximadamente:

Sur 89 grados 20 minutos Este, 1894.6 pies, aproximadamente, a lo largo de una línea coincidente con el límite Sur del Área de Talleres de Fort Clayton (Oeste de la Carretera Gaillard) pasando por IA-36, IA-35 y IA-34, que son tubos de hierro de 2 1/2 pulgadas sentados en concreto, a un punto sin amojonar IA-33, siendo las distancias desde el comienzo de la medición, aproximadamente, 500 pies, 414.6 pies, 500 y 480 pies, sucesivamente;

Sur 32 grados 15 minutos Este, 1680 pies, aproximadamente, a un punto sin amojonar IA-32;

Sur 66 grados 56 minutos Oeste, 50 pies, aproximadamente, hasta IB-1, el punto inicial.

Las direcciones de las líneas se refieren al meridiano verdadero.

- (a) La República de Panamá ejercerá de manera exclusiva la responsabilidad relativa a la dirección del tránsito y al cumplimiento de las leyes y reglamentos de tránsito de la República de Panamá y en la parte del Área del Canal que se describe a continuación:

La Carretera dividida de 66 pies de ancho que corre a través del puente sobre el Canal y sus accesos, la cual parte en dirección Sur desde el extremo de la Avenida de los Mártires que está identificado por la línea de ángulo recto con la Avenida de los Mártires desde un punto L1 situado en la línea divisoria del Área del Canal, y se extiende a lo largo de la intersección de la Avenida Balboa y Avenida A, donde se reduce la anchura de carretera a una vía de 22 pies que corre en dirección Oeste y otra vía de 22 pies que corre en dirección Este, convergiendo ambas vías en la rampa del puente y continúa como un solo camino por el sobrepaso de la Carretera Amador hasta un punto localizado, a 300 pies al Oeste de la Estación Naval de Rodman punto que está localizado por una línea entre los puntos S21 y T1 del Área del Canal. La República de Panamá tendrá iguales derechos y responsabilidades con respecto a la parte de cualquier nueva carretera situada dentro del Área del Canal que sea construida desde el puente y sus accesos hasta la Chorrera.

La Administración será responsable del mantenimiento del puente a que se refiere el párrafo (a) de este numeral.

Las áreas situadas fuera de la Zona del Canal a que se refiere

el numeral (1) del Artículo XXXVIII de este Tratado son las siguientes:

Reserva del Ejército en Las Minas

Cuatro parcelas situadas en la Isla de Taboguilla que se denominan así:

Reserva Militar de Cascajal;

Reserva Militar de Corotú;

Reserva Militar del Farallón de Tierra, y

Reserva Militar de Playa Blanca.

Cantera de Portobelo

Las partes de las áreas en que se mantienen instalaciones auxiliares a la navegación en Punta Mala, San José, Morro Puercos y Jicarita que sean acordadas entre la República de Panamá y las dependencias de los Estados Unidos de América interesadas o la Administración, según sea el caso.

Reserva Militar de Espiganda

Con el objeto de facilitar el cruce del Canal desde un punto a otro de la República de Panamá, la Administración permitirá el uso de las instalaciones que estén situadas en la entrada al Canal de Panamá en el sector del Atlántico, en el mayor grado posible sin poner en peligro las estructuras o instalaciones o interferir con el funcionamiento del Canal; además la Administración podrá, con tal objeto, establecer facilidades adicionales o substitutas.

- (8) La República de Panamá ofrecerá a los residentes de las casas situadas en «Rainbow City» la oportunidad de comprar las casas en que viven a un costo bajo. El arrendatario de cualquiera de dichas casas podrá, si así lo decidiere, continuar ocupando la casa y lote ocupado de la misma, por un período que no excederá cinco años, al canon de arrendamiento vigente al momento en que tales casas sean traspasadas a la República de Panamá; pero con sujeción al entendimiento de que el alquiler podrá aumentar a razón de no más de un dos por ciento al año. En cualquier momento, dentro del período de cinco años señalado, el referido arrendatario podrá comprar la casa y el lote que ocupa a un precio que se cubrirá mediante el pago de una suma que no excederá el monto del alquiler más un

recargo de cincuenta por ciento y que deberá pagar mensualmente durante un período de quince años.

• • • • •

ANEXO II

- (1) La sede y las oficinas de la Administración y del Tribunal y los archivos, documentos y correspondencia oficial de la Administración serán inviolables, a menos que sea dispuesto lo contrario por la Administración de acuerdo con las estipulaciones del numeral (2) del Artículo XXIV de este Tratado.
- (2) Los miembros de la Junta, jueces de los Tribunales del Área del Canal y dignatarios y empleados de la Administración (así como los miembros de sus familias que vivan con ellos) gozarán de los siguientes privilegios y exenciones en la República de Panamá:
 - (a) Libertad de acceso y de tránsito entre sus lugares de empleo y residencia y los puertos y aeropuertos de la República y entre los puertos y aeropuertos y puntos situados fuera de la República de Panamá, sin que se les imponga peajes o cargas discriminatorias;
 - (b) si tales personas no son nacionales de la República de Panamá, quedarán exoneradas de la obligación de tomar las medidas legales necesarias para establecer su residencia en la República de Panamá o para registrarse como extranjero residentes en el país; así como de la obligación de prestar servicio militar u otros servicios compulsorios que puedan ser requeridos por la República de Panamá; pero tales personas no adquirirán derecho a que se les considere como residentes permanentes o domiciliados en la República de Panamá, y
 - (c) si tales personas no son nacionales o residentes permanentes de la República de Panamá, quedarán exoneradas del pago de los derechos e impuestos de aduana, importación y exportación y otros impuestos relativos a mobiliario, utensilios domésticos y efectos personales, incluidos vehículos y partes de los mismos que sean importados a la República de Panamá para su uso personal, cuando lleguen por primera vez a prestar sus servicios a la República de Panamá o dentro de seis meses siguientes a dicha fecha, o que sean exportados de la República de Panamá

cuando tales personas dejen de prestar servicios a la Administración o dentro de los seis meses siguientes a dicha fecha. El traspaso, por parte de dichas personas, de cualesquiera de tales bienes, dentro de la República de Panamá, será considerado como una importación, por parte del adquirente, del bien objeto del traspaso, efectuada desde el país de origen en la fecha en que se haga el traspaso al adquirente, y éste estará obligado a pagar a la República de Panamá los derechos de aduana y otras cargas que graven la importación del bien adquirido, y si los derechos de importación u otras cargas son fijados ad-valorem, los mismos se determinarán a base del valor del bien objeto de la venta en el momento en que ésta se efectúe.

- (3) A solicitud de la Administración, la República de Panamá expedirá visas a los nacionales de los Estados Unidos de América y miembros de sus familias que viajen a la República de Panamá para prestar sus servicios a la Administración. La República de Panamá no negará la expedición de visas a personas de otras nacionalidades y miembros de sus familias que viajen a la República de Panamá con tal objeto, si tales personas llenan los requisitos exigidos por las leyes de inmigración de la República de Panamá para la obtención de tales visas.

Las personas que sean empleados de la Compañía del Canal de Panamá o del Gobierno de la Zona del Canal en la fecha en que la Administración asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este Tratado, y que no sean nacionales de la República de Panamá, serán consideradas como personas que han sido legalmente admitidas a la República de Panamá y, mientras permanezcan al servicio de la Administración, no serán requeridas para que soliciten su entrada a la República de Panamá de acuerdo con las leyes y reglamentos de la República de Panamá referentes a inmigración y expedición de visas.

• • • • •

ANEXO III*

En la fecha en que la Administración asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones que se la señalan en este Tratado:

* Con este título no figura en el Índice ya que aparece como Acuerdo Relativo al Artículo XXVIII

- (1) Los empleados de la Compañía del Canal de Panamá y del Gobierno de la Zona del Canal que así lo decidan serán transferidos al servicio de la Administración de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:

(a) Con referencia a asuntos que afecten el salario o paga, las leyes y reglamentos de los Estados Unidos de América no tendrán aplicación; pero, excepto en los casos relativos a descenso de rango o categoría por justa causa, a ningún empleado transferido al servicio de la Administración y mientras dicho empleado permanezca en el servicio de la Administración podrá reducirse su salario básico a un nivel inferior al del último salario básico que haya recibido como empleado de la Administración. El salario mínimo se pagará a los empleados transferidos al servicio de la Administración no será menor de \$1.15 por hora a partir del 1o. de febrero de 1968, \$1.30 por hora a partir del 1o. de febrero de 1969; \$1.45 por hora a partir del 1o. de febrero de 1970, y \$1.60 por hora a partir del 1o. de febrero de 1971. Si con anterioridad a la fecha en que entre en vigor este Tratado, el Congreso de los Estados Unidos de América promulgare leyes que, de no haberse celebrado este Tratado, hubiesen sido aplicables a los empleados transferidos al empleo de la Administración y tales leyes establecieren cambios en salarios y compensaciones que serán efectivos en una fecha posterior a la que entre en vigor este Tratado, tales cambios serán aplicables a los empleados transferidos al servicio de la Administración que, de acuerdo con las disposiciones del sistema vigente con anterioridad a la fecha en que entre en vigor este Tratado, hubiesen sido afectados por los cambios referidos, ya sea por el ministerio de la ley o por decisión administrativa ordinaria. Después de la fecha en que la Administración asuma la totalidad de las responsabilidades y funciones que se le señalan en este Tratado y con posterioridad a dicha fecha, durante el período de cinco años a que se refiere el Artículo XV de este Tratado, la Administración, a intervalos apropiados, revisará los salarios y compensaciones de los empleados transferidos al servicio de la Administración con el objeto de compensar cualquier aumento neto en el costo de la vida o la pérdida neta que tales empleados hayan sufrido debido a la entrada en vigor de este Tratado o por motivo de decisiones que, en cumplimiento

- del mismo, se tomen durante dicho período de cinco años.
- (b) Los empleados transferidos al empleo de la Administración quedarán al amparo de las disposiciones de la Ley de Jubilaciones del Servicio Civil de los Estados Unidos (United States Civil Service Retirement Law) mientras continúen al servicio de la Administración, a menos que los empleados, con anterioridad a la fecha de su traslado, decidan dar por terminada su relación con el sistema de jubilaciones previsto por dicha ley. La Administración efectuará las retenciones requeridas por la Ley mencionada y hará las contribuciones patronales al Fondo de Jubilación del Servicio Civil (Civil Service Retirement Fund). La Administración hará las contribuciones adicionales que, de cuando en cuando, sean señaladas por la Comisión de Servicio Civil de los Estados Unidos (United States Civil Service Commission) como necesarias para cubrir los costos en que incurra el Fondo de Jubilación así como las obligaciones adquiridas por dicho Fondo como resultado de los servicios prestados a la Administración por tales empleados. Los empleados que, al ser trasladados al servicio de la Administración, decidan no continuar al amparo de la Ley de Jubilaciones del servicio Civil (Civil Service Retirement Law), serán considerados, para los fines de dicha Ley, como empleados que se han separado involuntariamente del servicio.
 - (c) Cualquier empleado de la Compañía del Canal de Panamá o del gobierno de la Zona del Canal sujeto a las disposiciones de la Ley de Jubilaciones del Servicio Civil (Civil Service Retirement Law) que, después de haber sido trasladado al servicio de la Administración y mientras continúe en el mismo, sea separado en forma definitiva de su cargo por la Administración por motivos distintos a faltas o actos delictivos, será considerado como un empleado que se ha separado involuntariamente de su empleo de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Jubilaciones del Servicio Civil (Civil Service Retirement Law), así como para el fin de determinar el preaviso o indemnización de cesantía que se le debe pagar.

Los reglamentos de la Administración relativos a licencias de los empleados protegerán los derechos de éstos con respecto a licencias acumuladas en la fecha en que tales empleados sean trasladados al servicio de la Administración, y los empleados tendrán derecho a que se les dé crédito por las horas de licencia que

hayan acumulado o a que se les pague en efectivo la compensación correspondiente a las mismas.

La Administración adoptará las medidas necesarias para que los empleados transferidos al servicio de la misma gocen, por lo menos, de la misma protección y disfruten de los mismos beneficios que gozaban y disfrutaban al momento de ser trasladados en relación con los siguientes asuntos: Paga extra, inclusive la relativa a sobretiempo, jornada nocturna y jornada dominical, así como la sobrepaga por concepto de cierto tipo de servicios a base de una compensación anual; pagos correspondientes a salarios retenidos a empleados que sean reintegrados o restituidos a sus cargos; compensaciones relativas a lesiones o muerte causada por accidentes de trabajo; suministro de uniformes y equipos protectores; pago de preaviso o indemnización de cesantía; otorgamiento de licencias; seguros colectivos de salud y vida; pagos y compensaciones correspondientes al tiempo en que los empleados sirven como testigos; pago de gastos de viaje y transporte y beneficios conexos correspondientes a licencias otorgadas para efectuar visitas al país de origen de los empleados; repatriación de las familias de los empleados; así como el pago de los gastos relativos al transporte de los efectos personales y utensilios domésticos; gastos de viajes para fines educativos; gastos de transporte de la familia de los empleados fallecidos así como de los efectos personales y utensilios domésticos de los mismos y los gastos de transporte de los restos de los empleados fallecidos y de los dependientes de éstos; procedimientos relativos a la reducción del número de empleados y procedimientos relativos a quejas presentadas por los empleados o en contra de éstos y apelaciones referentes a estos asuntos; procedimientos relativos a quejas presentadas contra los empleados que impliquen su despido o descenso de rango o categoría o apelaciones relativas a tales procedimientos; procedimientos relativos a la clasificación de la categoría de la posición desempeñada por los empleados y apelaciones relativas a tales procedimientos; y beneficios preferenciales a los empleados veteranos transferidos al servicio de la Administración que disfruten de tales beneficios al tiempo de su traslado. Con respecto a empleados que sean separados de sus cargos como resultado de decisiones que la Administración debe adoptar en cumplimiento de las estipulaciones de este Tratado, la Administración podrá adoptar las medidas de equidad que, a este respecto, estime convenientes. Tales medidas serán adicionales al pago de preaviso o indemnización de cesantía y otros

beneficios a que los empleados tengan derecho. Cualquier apelación que con anterioridad al momento de entrar en vigor este Tratado podría haberse presentado ante autoridades superiores al jefe de la dependencia respectiva, podrá presentarse a una comisión de apelaciones independientes que será nombrada por la Junta, y

Los empleados que no acepten su traslado a la Administración serán considerados como empleados que han sido involuntariamente separados de su cargo.

Los empleados de la Administración cuyos servicios no estén sujetos a la Ley de Jubilaciones del Servicio Civil de los Estados Unidos y que no sean nacionales de los Estados Unidos de América podrán ser amparados por las leyes de seguridad social de la República de Panamá y si tales empleados fueren nacionales de los Estados Unidos de América podrán ser amparados por las leyes sobre seguridad social de dicho país. Con respecto a los empleados antes referidos, la Administración efectuará las retenciones de las contribuciones de los empleados y pagará las cuotas patronales correspondientes a los mismos en la forma señalada para el patrono por las leyes de la República de Panamá o de los Estados Unidos de América, según fuere el caso.

La Administración adoptará un plan de jubilaciones para sus empleados que será suplementario a los beneficios de seguridad social para empleados que no estén amparados por las disposiciones de la Ley de Jubilaciones del Servicio Civil de los Estados Unidos (Civil Service Retirement Law).

La República de Panamá y la Administración harán todos los esfuerzos del caso para asegurar la obtención de empleos permanentes a aquellos empleados transferidos al servicio de la Administración que no sean nacionales de los Estados Unidos de América y que, con posterioridad a su traslado a la Administración, sean separados involuntariamente de sus cargos sin que medie justa causa para ello, siempre y cuando que tales empleados no sean acreedores de inmediato al pago de una anualidad de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Jubilaciones del Servicio Civil de los Estados Unidos (United States Civil Service Retirement Law). Cuando una actividad de la Administración sea traspasada a la empresa privada, la República de Panamá y la Administración, en la medida que ello sea posible, harán los arreglos del caso para que los empleados que sirven al desarrollo de tal actividad sean trasladados al servicio del nuevo patrono en las mismas condiciones de empleo que disfrutaban con anterioridad al traslado.

Los empleados que sean nacionales de los Estados Unidos de América que no acepten ser trasladados al servicio de la Administración, o que sean involuntariamente separados de sus cargos sin que medie justa causa para ello después de su traslado, recibirán ayuda especial del Gobierno de los Estados Unidos de América para conseguirles empleos en el Gobierno de los Estados Unidos de América que ellos puedan desempeñar con aptitud debido a su experiencia y entrenamiento.

- (a) El derecho de los empleados a negociar contratos colectivos con la Administración será reconocido con sujeción a las normas, reglamentos y limitaciones que la Administración establezca. El derecho a la negociación colectiva será ejercido por medio de los sindicatos y otras asociaciones de empleados que sean designados como sus representantes exclusivos por una mayoría de los empleados que constituyan los grupos designados por la Administración como apropiados para tales fines de acuerdo con las normas, reglamentos y limitaciones antes referidos. La Administración celebrará contrato o contratos escritos con los sindicatos u otras asociaciones de empleados que sean así reconocidos; en tales contratos se incluirán los acuerdos celebrados entre las partes con respecto a los términos y condiciones de empleo, así como los acuerdos relativos a los procedimientos para resolver las disputas que se susciten en relación con la interpretación o aplicación de tales contratos.

La Administración no podrá negociar en relación con los términos y condiciones de empleo que se reglamentan por este Tratado o por las leyes aplicables en el Área del Canal, o con respecto a tales asuntos de política administrativa como la determinación de los programas de la Administración, su presupuesto, su organización, la designación de su personal, o las exigencias técnicas relativas al desempeño de funciones.

Además la Administración retendrá el derecho: i) A dirigir el trabajo de los empleados de la Administración; ii) a contratar, ascender, trasladar, destinar y retener empleados o suspender, descender de rango, despedir o tomar otras medidas disciplinarias; iii) a suspender las actividades de empleados debido a la falta de trabajo u otros motivos justificados; iv) a mantener la eficiencia de las actividades de la Administración; v) a determinar los métodos, medios y personal mediante los cuales tales actividades serán desarrolladas, y vi) a tomar las medidas necesarias para desempe-

nar tales actividades en situaciones de emergencia.

La Administración mantendrá a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América plenamente informadas con respecto al curso de los estudios que efectúe en relación con los cambios que proyecte adoptar referentes a prácticas de empleo, incluidas las relativas a fijación de salarios.

Los Gobiernos de la República de Panamá y los Estados Unidos de América procurarán que se adopte la legislación requerida para cumplir las estipulaciones de este Acuerdo.

.....

Excelencia:

Tengo el honor de referirme al Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América concerniente al Canal de Panamá, firmado en esta fecha, y a los acuerdos a que llegaron nuestros dos Gobiernos a efecto de que las actividades que más adelante se señalan se continúen desarrollando después de la fecha en que entre en vigor el Tratado arriba mencionado:

The Middle American Research Unit of the United States Public Health Service;

Las actividades de la Smithsonian Institution en la Isla de Barro Colorado, en la Isla Caleta y en la calzada (causeway) de Fuerte Amador, y

The Coast and Geodetic Survey Tide Station en Balboa.

Según queda entendido, los acuerdos relativos al funcionamiento de las actividades antes indicadas en el Área del Canal habrán de celebrarse entre la Administración Conjunta del Canal de Panamá y la entidad respectiva.

Además, tengo el honor de proponer que esta nota y la de respuesta de Vuestra Excelencia aceptando los términos de la misma constituyan un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos que entrará en vigor en la fecha en que los instrumentos de ratificación del Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América Concerniente al Canal de Panamá sean canjeados.

Acepte Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

.....

Excelencia:

Tengo el honor de referirme a los Tratados firmados hoy por los representantes de los Gobiernos de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América concernientes al funcionamiento y defensa del canal de Panamá y a los acuerdos a que llegaron los representantes de nuestros dos Gobiernos con respecto al manejo de las facilidades educativas por parte de la Administración Conjunta del Canal de Panamá.

Nuestros Gobiernos han acordado que la Administración Conjunta del Canal de Panamá tendrá derecho a manejar el sistema escolar administrado en esta fecha por el Gobierno de la Zona del Canal y que la Administración gozará de la facultad necesaria para prestar servicios educativos a los dependientes del personal del Gobierno de los Estados Unidos de América que se encuentre en Panamá y a otras personas de acuerdo con las estipulaciones del Artículo XIII del Tratado Concerniente al Canal de Panamá firmado en esta fecha. No obstante, la Administración podrá transferir sus facilidades educativas a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América y efectuar los arreglos del caso con las mismas para la prestación de servicios educativos a los dependientes de los residentes del Área del Canal y de los empleados de la Administración.

Con el objeto de facilitar tal transferencia, si así se decidiere en el futuro, las instalaciones escolares que estén situadas dentro de las Áreas de Defensa podrán ser transferidas a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con anterioridad a la fecha en que entre en vigor este Tratado.

Aunque la Administración goza de facultad para continuar prestando servicios educativos a los dependientes de los nacionales panameños que residan en el Área del Canal, la Administración, cuando sea así solicitado por el Gobierno de la República de Panamá, traspasará al sistema escolar público de la República de Panamá, libre de costos, sus facilidades escolares destinadas al uso de tales dependientes; tal traspaso se efectuará con sujeción al entendimiento de que servicios educativos equivalentes se continuarán prestando a estas mismas personas en las facilidades escolares que sean así traspasadas.

Además, tengo el honor de proponer que esta nota y la nota de respuesta de Vuestra Excelencia aceptando los términos de la misma constituyan un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos que entrará en vigor en la fecha en que los instrumentos de ratifica-

ción del Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América Concerniente al Canal de Panamá sean canjeados.

Acepte Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

.....

Excelencia:

Tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia que la ayuda que se presta de acuerdo con los Convenios existentes entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América y la Compañía del Canal de Panamá y el Gobierno de la Zona del Canal a que se hace referencia en el numeral (1) del Artículo XXII del Tratado Concerniente al Canal de Panamá, firmado en esta fecha, consistente en lo siguiente:

La Compañía del Canal de Panamá o el Gobierno de la Zona del Canal prestan a las Fuerzas Armadas servicios relativos al suministro de energía eléctrica y agua; servicios relativos al mantenimiento de sistemas de comunicaciones; servicios relativos a la recolección de basura y desperdicios; servicios de alcantarillado; servicios relativos al suministro de gasolina; servicios relativos al manejo de carga; servicios de mantenimiento del astillero de la Reserva Naval de Balboa; servicios de protección contra incendios; y servicios educativos y de hospitalización.

Las Fuerzas Armadas prestan a la Compañía del Canal de Panamá o al Gobierno de la Zona del Canal servicios relativos al suministro de artículos médicos, servicios relativos al suministro de combustible, servicios relativos al mantenimiento de sistemas de comunicaciones; servicios relativos a vivienda y servicios referentes al suministro de depósitos con refrigeración.

Sírvase aceptar Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

.....

Excelencia:

Tengo el honor de referirme al Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América Concerniente al Canal de Panamá firmado en esta fecha. El Artículo XXV numeral (11) del Tratado antes mencionado estipula, entre otras cosas, que con anterioridad al establecimiento del Tribunal del Área del Canal la

República de Panamá y los Estados Unidos de América se pondrán de acuerdo con respecto a los principios adicionales que regirán la tramitación de juicios penales y las apelaciones de los mismos en los tribunales del Área del Canal.

Tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia que, hasta tanto lo contrario sea convenido por nuestros Gobiernos, los principios mencionados con anterioridad sean los siguientes: Los casos penales en que el acusado sea nacional de la República de Panamá o de los Estados Unidos de América serán juzgados ante el Juez del Canal de Panamá cuyo nombramiento se haya hecho de la lista presentada por el país del acuerdo (o ante el Conjuez del Canal de Panamá que haya sido designado para reemplazarlo). Los fallos en los casos arriba referidos, excepto si se tratare de un fallo absolutorio sobre el fondo del asunto, podrán ser apelados ante una sala de tres jueces en la cual no actuará el Juez del Canal de Panamá ni el Conjuez del Canal de Panamá de cuyo fallo se apele; dos de los jueces de dicha Sala serán siempre de la misma nacionalidad que el acusado. Todos los otros casos penales, incluidos aquellos en que nacionales de Panamá y de los Estados Unidos de América sean acusados conjuntamente, serán juzgados en la forma que determine el Tribunal.

Además, tengo el honor de proponer que esta nota y la respuesta de Vuestra Excelencia aceptando los términos de la misma constituyan un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos que entrará en vigor en la fecha en que los instrumentos de ratificación del Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América Concerniente al Canal de Panamá sean canjeados.

Acepte Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

.

Excelencia:

Tengo el honor de referirme al Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América Concerniente al Canal de Panamá firmado en esta fecha y las discusiones entre nuestros dos Gobiernos relativas al uso de moneda circulante en el Área del canal y a otros asuntos monetarios.

Mi Gobierno tiene entendido que la República de Panamá permitirá que la moneda de los Estados Unidos de América tenga curso legal en el Área del Canal en términos de igualdad con la

moneda panameña y que se permitirá que la moneda de los Estados Unidos de América circule libremente en el Área del Canal.

Los pagos y transferencias de la Administración que se originen en el Área del Canal o que estén destinados a dicha Área y a favor de la Administración no estarán sujetos a ninguna restricción o control.

El Convenio Monetario de 1904 celebrado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América, así como los convenios reformativos del mismo, quedan por este medio abrogados.

La República de Panamá y los Estados Unidos de América se pondrán de acuerdo con respecto a las medidas monetarias que se requieren.

Tengo el honor de proponer que esta nota y la de su respuesta de Vuestra Excelencia aceptando los términos de la misma constituyan un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos que entrará en vigor en la fecha en que los instrumentos de ratificación del Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América Concerniente al Canal de Panamá sean canjeados y que continuará en vigor durante la vigencia del tratado antes mencionado.

Acepte Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

* * * * *

Excelencia:

Tengo el honor de referirme al Tratado Concerniente al Canal de Panamá, al Tratado Concerniente al Canal a Nivel del Mar que une los Océanos Atlántico y Pacífico y al Tratado Concerniente a la Defensa del Canal de Panamá y de su Neutralidad que han sido celebrados entre nuestros dos Gobiernos en esta fecha, así como el canje de notas referentes al área reservada para adiestramiento militar en Río Hato, también de esta fecha.

De conformidad con los acuerdos a que llegaron los representantes de nuestros Gobiernos relativos a la adopción de medidas que facilitarán el cumplimiento de los tratados y canjes de notas antes referidos, en consonancia con las relaciones de amistad que existen entre nuestros dos países y pueblos; así como para satisfacer las aspiraciones mutuas de nuestros dos Gobiernos de contribuir al desarrollo económico de la República de Panamá, me permito informar a Vuestra Excelencia que el Gobierno de los Estados Unidos de América se compromete a gestionar la expedición

de las leyes necesarias que autoricen al Gobierno de los Estados Unidos de América para gastar una suma de dinero equivalente a las dos terceras partes del costo de la construcción de una carretera moderna de concreto de cuatro vías que se extenderá desde la entrada Oeste del Puente sobre el Canal de Panamá a la ciudad de la Chorrera. La contribución de los Estados Unidos de América a este propósito no excederá en ningún caso la suma de seis millones de dólares de los Estados Unidos de América. Queda entendido que esta carretera será construida sobre una ruta que, en la parte que atraviere Áreas de Defensa, será aprobada por las autoridades de los Estados Unidos de América. Queda entendido, además, que el costo de construcción que será compartido por el Gobierno de los Estados Unidos de América, no incluirá los gastos relativos a la obtención de los terrenos o derechos de vía utilizados para efectuar la construcción de la carretera. Una vez terminada dicha construcción, la carretera que existe en la actualidad y que se extiende desde el puente sobre el canal hasta la ciudad de Arraiján formará parte integral de las áreas ocupadas por bases militares a través de las cuales pasa tal carretera y se reservará principalmente para el uso del tránsito militar. También se ha considerado que la nueva carretera formará parte integral de la Carretera Interamericana.

Además, tengo el honor de proponer que esta nota y la respuesta de Vuestra Excelencia aceptando los términos de la misma contribuyan a un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos que entrará en vigor en la fecha en que los instrumentos de ratificación de los tratados a que se refiere el primer párrafo de esta nota sean canjeados.

Acepte Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

• • • • •

Excelencia

Tengo el honor de referirme al Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América Concerniente al Canal de Panamá firmado en esta fecha y a las discusiones efectuadas entre nuestros dos Gobiernos relativas al establecimiento de determinadas instalaciones portuarias.

A este respecto, tengo el honor de expresar que los Estados Unidos de América en cooperación con la República de Panamá y

la Administración Conjunta del Canal de Panamá se esmerarán a fin de que la República de Panamá disponga de una área situada en la vecindad de la ciudad de Panamá para la construcción de un puerto pesquero y de cabotaje, y de las instalaciones respectivas; además, tal cooperación incluirá ayuda a la República de Panamá en lo referente a la construcción del puerto e instalaciones mencionados.

Sírvase aceptar Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

• • • • •

Excelencia:

Tengo el honor de referirme al Tratado firmado en esta fecha entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de los Estados Unidos de América Concerniente al Canal de Panamá y a los acuerdos a que llegaron los representantes de nuestros dos Gobiernos relativos al funcionamiento de instalaciones medicas y a la prestación de servicios médicos y de hospitalización por parte de la Administración Conjunta del canal de Panamá.

Tengo el honor de proponer que la Administración se le permita celebrar acuerdos con la República de Panamá a fin de que la República de Panamá preste servicios de hospitalización y otros servicios médicos a los empleados de la Administración que no sean nacionales de los Estados Unidos de América y que presten sus servicios o residan en el sector Atlántico del Canal de Panamá, así como a sus dependientes que residan con ellos.

Igualmente, tengo el honor de proponer que el Hospital de Coco Solo, cuyo traspaso a la República de Panamá ha sido acordado mediante las disposiciones del Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América Concerniente al Canal de Panamá que se ha firmado en esta fecha, continúe administrándose como un hospital durante el tiempo que ello sea necesario en relación con la prestación por parte de la República de Panamá de servicios médicos y de hospitalización a los empleados de la Administración y con sujeción a los acuerdos que se celebren entre la Administración y la República de Panamá.

Además, tengo el honor de proponer que esta nota y la de respuesta de Vuestra Excelencia aceptando los términos de la misma constituyan un acuerdo entre nuestros dos países que entrará en vigor en la fecha en que los instrumentos de ratificación del Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América

Concerniente al Canal de Panamá sean canjeados y que dicho acuerdo continúe en vigencia durante el término de duración de ese Tratado.

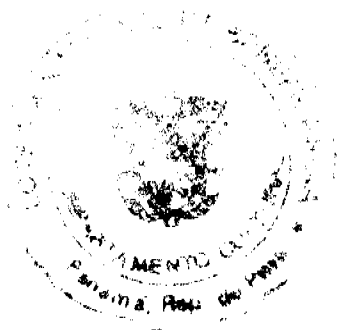
Sírvase aceptar Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

• • • • •

PROYECTO DE ANEXO ADICIONAL

El uso de las áreas que mas adelante se describen, las cuales forman parte de la Zona del Canal en la fecha en que se firma este Tratado, y que han sido excluidas del Área del Canal y de las Áreas de Defensa a que se refiere el Tratado Concerniente a la Defensa del Canal de Panamá y de su Neutralidad, firmado en esta fecha, revierte a la República de Panamá en la fecha en que este Tratado entre en vigor. Tal reversión será libre de costo a la República de Panamá y los Estados Unidos de América no estarán obligados a restablecer ninguna área o parte de la misma a su estado original. Con el objeto de facilitar que el cese del uso de las áreas referidas por parte de los Estados Unidos de América y sus dependencias, la Compañía del Canal de Panamá y el Gobierno de la Zona del Canal, se efectúe en una forma ordenada; así como con el objeto de facilitar el traslado a otros sitios de las instalaciones y equipos que, en la fecha en que se firma este Tratado, están colocados en tales áreas, se ha acordado que la reversión antes referida se hará efectiva en la forma siguiente: (aquí se especificarán las áreas que revierten a Panamá y las fechas en que la reversión será efectiva).

Los bienes dejados por los Estados Unidos de América en las áreas arriba descritas pasarán a ser de propiedad de la República de Panamá, libres de costo.



Tratado de Defensa y Neutralidad

ANTEPROYECTO DE TRATADO CONCERNIENTE A LA DEFENSA DEL CANAL DE PANAMÁ Y DE SU NEUTRALIDAD*

Texto fechado el 21 de junio de 1967
(No. 2)

ÍNDICE

PREÁMBULO	
ARTÍCULO I	Definiciones.
ARTÍCULO II	Defensa del Canal y del área. Derechos. Áreas de Defensa, Propiedad del equipo. Reversión de áreas a Panamá. Fuerzas Armadas de Panamá.
ARTÍCULO III	Banderas de Panamá y de los Estados Unidos de América.
ARTÍCULO IV	Derechos de entrada y salida de personal.
ARTÍCULO V	Compras en el mercado local y empleo de la mano de obra local.
ARTÍCULO VI	Contratistas y personal bajo contrato.
ARTÍCULO VII	Servicios públicos, obras auxiliares y equipo.
ARTÍCULO VIII	Impuestos.
ARTÍCULO IX	Aduanas y derechos de importación.
ARTÍCULO X	Jurisdicción penal de Panamá y de los Estados Unidos.
ARTÍCULO XI	Reclamaciones civiles.
ARTÍCULO XII	Telecomunicaciones.
ARTÍCULO XIII	Estudios geodésicos y similares.
ARTÍCULO XIV	Oficinas postales.
ARTÍCULO XV	Comisariatos y tiendas militares.
ARTÍCULO XVI	Saneamiento.

* *Op. cit.*, pp. 3771-3836.

ARTÍCULO XVII Licencias para conducir vehículos.

ARTÍCULO XVIII Obligaciones de los Estados Unidos en general.

ARTÍCULO XIX Comité Conjunto.

ARTÍCULO XX Entrada en vigor y terminación del tratado.

ANEXO A Áreas de Defensa.

ANEXO B Uso de frecuencias de radio, potencias y anchura de banda por el gobierno de los Estados Unidos de América en la República de Panamá.

Acuerdo Anexo relativo a asuntos varios. Aprobación de la asamblea Nacional para el uso de tierras adicionales.

Canje de notas sobre el área de Río Hato. Comisión Conjunta de Río Hato.

• • • • •

Por cuanto la República de Panamá y los Estados Unidos de América han firmado en esta fecha un Tratado para regular sobre una base mutuamente satisfactoria todos los asuntos relativos al funcionamiento, mantenimiento y seguridad del Canal de Panamá; por cuanto el artículo XXV del Tratado antes referido dispone que todos los asuntos relativos a la defensa, la seguridad y continuidad de funcionamiento del Canal de Panamá y a la defensa de su neutralidad serán regidos por las estipulaciones del Tratado Concer-niente a la Defensa del Canal de Panamá y de su Neutralidad que será celebrado entre ambos Gobiernos; por cuanto, con el objeto de tomar las medidas necesarias para defender en forma efectiva el Canal de Panamá, su seguridad, su funcionamiento continuo y su neutralidad; con el fin de definir el status de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América y del personal civil que acompa-ña a las mismas mientras se encuentren en la República de Pana-má, y con el propósito de reglamentar el uso por parte de esas Fuer-zas y personal civil de áreas e instalaciones en la República de Pa-namá. La República de Panamá y los Estados Unidos de América han designado a... quienes han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO I

En este Tratado las siguientes expresiones tendrán el signifi-cado que a continuación se expresa:

- (a) «Área de Defensa» significa un área en la República de Panamá cuyo uso la República de Panamá pone a disposición de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, de acuerdo con las estipulaciones de este Tratado.

- (b) «Defensa del Canal» significa, a menos que los dos Gobiernos acuerden otra cosa, defensa y seguridad del Canal de Panamá y de su neutralidad y continuidad de funcionamiento, de la navegación en dicho canal y de todas las instalaciones y Áreas usadas o cuyo uso se destina para el funcionamiento, defensa y seguridad de dicho canal.
- (c) «La Administración Conjunta del Canal de Panamá», en lo sucesivo denominada «La Administración», significa la entidad organizada de conformidad con el Artículo II del Tratado Concerniente al Canal de Panamá firmado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América en esta fecha.
- (d) «Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», significa las fuerzas armadas terrestres, navales y aéreas de los Estados Unidos de América, incluido el servicio de guardacostas.
- (e) «Miembros de las Fuerzas» significa el personal militar de las Fuerzas de los Estados Unidos que esté en servicio activo y que se encuentre en la República de Panamá en relación con los fines de este Tratado o del Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América Concerniente a un Canal a Nivel del Mar que una los Océanos Atlántico y Pacífico firmado en esta fecha.
- (f) «Miembros del Cuerpo Civil» significa los empleados civiles de los Estados Unidos de América que sean nacionales de ese país, que no sean ordinariamente residentes de la República de Panamá y que estén en la República de Panamá para los fines de este Tratado. Para los fines de este párrafo la residencia en la antigua Zona del Canal no se considerará como residencia ordinaria en la República de Panamá.
- (g) «Dependiente» significa el cónyuge e hijos menores de 21 años de edad de Miembros de las Fuerzas y del Cuerpo Civil y los padres y otros hijos de los Miembros de las Fuerzas y del Cuerpo Civil cuando fueren dependientes de éstos y vivieren con ellos bajo un mismo techo.

ARTÍCULO II

- (1) La República de Panamá y los Estados Unidos de América tomarán conjuntamente las medidas necesarias para la defensa del Canal y del Área del Canal, según dicha área se define en el Artículo III y se delimita en el Anexo Y del Tratado Concerniente al Canal de Panamá que la República de Panamá y los Estados Unidos de América han firmado en esta fecha. Con este fin, y

por su parte, la República de Panamá pone, por este medio, a disposición de los Estados Unidos de América el uso de las Áreas de Defensa descritas en el Anexo A de este Tratado para fines de defensa del Canal y de seguridad relacionados con el mismo. Los Estados Unidos de América tendrán el derecho conforme a este Tratado, de actuar para asegurar la defensa del Canal. Con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud de este Tratado, los Estados Unidos de América tendrán acceso a las Áreas de Defensa y al Área del Canal a que se hace referencia en este párrafo, así como derecho a transitar libremente entre las mismas. Las estipulaciones de este Tratado se aplicarán *mutatis mutandis* a la defensa y seguridad de cualquier canal a nivel del mar que se construya y funcione en el territorio de la República de Panamá, conforme a las estipulaciones del Tratado Concer-niente a la Construcción de un Canal a Nivel del Mar celebrado en esta fecha entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América, con las modificaciones del Anexo A y de las otras estipulaciones de este Tratado que los dos Gobiernos acuerden sean necesarias adoptar para asegurar la defensa y seguridad de dicho canal a nivel del mar.

- (2) En caso de conflagración conflicto armado internacionales o de existencia de cualquier amenaza de agresión o de cualquier otra emergencia que ponga en peligro la Defensa del Canal, la República de Panamá y los Estados Unidos de América tomarán las medidas de prevención y defensa que sean necesarias para la protección de sus intereses comunes en cumplimiento de las estipulaciones de este Tratado. Cualesquiera de tales medidas que parezca esencial tomar al Gobierno de los Estados Unidos de América y que hallan de afectar el territorio de la República de Panamá fuera de las Áreas de Defensa y el Área del Canal a que se refiere el numeral (1) de este Artículo serán objeto de consulta en el Comité Conjunto establecido de acuerdo con el Artículo XIX de este Tratado.
- (3) Para el logro de las misiones de defensa y seguridad de las Fuerzas Armadas de los Estado Unidos, los Estados Unidos de América, dentro de las Áreas de Defensa podrán:
 - (a) Establecer, desarrollar, manejar, mantener y defender facilidades e instalaciones, incluidas las necesarias para los fines de entrenamiento, hospitalización, recreo, educación, mantenimiento y sostén de Miembros de las Fuerzas, Miembros del Cuerpo Civil y Dependientes:

- (b) usar, instalar y emplear equipos, armas, naves, vehículos, aviones y otros materiales.
 - (c) según más adelante se acuerda, emplear los servicios de contratistas con el objeto de facilitar el establecimiento, construcción, desarrollo, funcionamiento y mantenimiento de las facilidades e instalaciones antedichas.
- (4) Las Áreas de Defensa podrán usarse como punto de sostén para misiones de búsqueda y de rescate, de auxilio y de socorro en casos de desastres, que se lleven a cabo en el área de la América Latina, en vista de los motivos humanitarios de tales misiones. La República de Panamá permitirá que se vuele sobre su territorio para éstas y otras actividades por este Tratado.
- (5) (a) La República de Panamá y los Estados Unidos de América podrán acordar la revisión del Anexo A de este Tratado con el objeto de agregar o liberar áreas o efectuar otros ajustes al mismo con el fin de hacer frente a cambios en la situación existente. Los Estados Unidos de América podrán, en cualquier momento, notificar a la República de Panamá por medio del Comité Conjunto que el uso de un Área de Defensa, o de una parte determinada de la misma, u otro derecho concedido por la República de Panamá ya no es requerido. Cuando esto ocurriere, dicho uso o derecho revertirá a la República de Panamá, libre de costo, en la fecha que determine el Comité Conjunto.
- (b) Las autoridades de la República de Panamá darán debida consideración a las solicitudes que les sean formuladas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para que se les permita el uso ocasional de áreas adicionales para efectuar maniobras y desarrollar actividades de entrenamiento durante periodos limitados. Tales solicitudes serán transmitidas por medio del Comité Conjunto.
- (6) El título de propiedad sobre equipos, instalaciones, materiales, abastos y demás bienes importados a la República de Panamá o adquiridos o construidos en Panamá por el Gobierno de los Estados Unidos de América o para su uso o beneficio será conservado por los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América podrán disponer de tales bienes dentro de la República de Panamá si tal disposición se ajustare a los fines de este Tratado o, en otros casos, si dicha disposición se hiciere bajo condiciones mutuamente acordadas. Los bienes que dejaren los Estados Unidos de América en la República de Panamá, in-

cluyendo los incorporados a estructuras y edificios que ya no sean requeridos para las operaciones conforme a este Tratado, pasarán a ser de propiedad de la República de Panamá, a menos que lo contrario sea convenido por ambos Gobiernos. La República de Panamá no tendrá que pagar compensación alguna a los Estados Unidos de América con respecto a tales bienes.

- (7) Cuando un Área de Defensa, o parte de la misma, revierta a la República de Panamá de acuerdo con lo estipulado en el numeral (5) anterior, los Estados Unidos de América no tendrán obligación de restablecer a su estado original el Área o la parte del Área objeto de la reversión.
- (8) Las entradas a las Áreas de Defensa o a cualesquiera partes de las mismas estarán bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con la cooperación de las Fuerzas Armadas de la República de Panamá en la forma en que se acuerde por medio del Comité Conjunto.
- (9) Excepto en cuanto se modifique específicamente por este Tratado o por acuerdo entre los dos Gobiernos a través del Comité Conjunto, Los Estados Unidos de América continuarán disfrutando de los derechos de operación, de usuarios, de acceso, de peso y de servidumbre (incluyendo derechos de paso o servidumbre para tuberías e instalaciones relativas a sistemas de comunicaciones, obras sanitarias y servicios públicos) que disfruten en la fecha en que este Tratado entre en vigor.
- (10) Queda mutuamente convenido que las Fuerzas Armadas de la República de Panamá podrán prestar servicios en las Áreas de Defensa cuando el Comité Conjunto lo estime conveniente para los fines de este Tratado.

ARTÍCULO III

Las Áreas de Defensa estarán bajo el pabellón de la República de Panamá. La bandera de los Estados Unidos de América también podrá ser desplegada en la forma establecida por ambos Gobiernos por medio del Comité Conjunto.

ARTÍCULO IV

- (1) Los Estados Unidos de América podrán llevar a la República de Panamá miembros de las Fuerzas, Miembros del Cuerpo Civil y sus respectivos Dependientes. Con sujeción a las estipulaciones de este Artículo, el procedimiento relativo a su entrada y salida se acordará por medio del Comité Conjunto.

- (2) Los Miembros de las Fuerzas estarán exentos de las leyes y reglamentos de la República de Panamá relativos a presentación de pasaporte y obtención de visas. Los Miembros de las Fuerzas, Miembros del Cuerpo Civil y Dependientes de los mismos estarán exentos de las disposiciones legales relativas al establecimiento de residencia en la República de Panamá y al registro de extranjeros residentes y no adquirirán ningún derecho de residencia permanente o domicilio en la República de Panamá.
- (3) Al momento de entrar en la República de Panamá o de salir de la misma, los Miembros de las Fuerzas estarán en posesión de los siguientes documentos:
 - (a) Tarjeta de identificación personal que indique el nombre, fecha de nacimiento, rango, número de serie y rama de las Fuerzas Armadas a que pertenezca el portador de dicha tarjeta; además, la tarjeta tendrá la fotografía del portador; y
 - (b) copia de la orden de viaje ya sea individual o colectiva, en la que se certifique acerca del status del individuo o grupo como miembro o miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y acerca del viaje ordenado. Mientras se encuentren en la República de Panamá y para los fines de su identificación, los Miembros de las Fuerzas portarán la tarjeta de identificación antedicha, la cual deberá ser presentada cuando así lo solicitaren las autoridades competentes de la República de Panamá.
- (4) Los Miembros del Cuerpo Civil, sus Dependientes y los Dependientes de Miembros de las Fuerzas portarán la documentación apropiada expedida por las autoridades de los Estados Unidos de América a fin de que su status pueda ser verificado por las autoridades de la República de Panamá en cualquier momento en que dichas personas se encuentren en territorio panameño o hayan de entrar en dicho territorio o salir del mismo.
- (5) Cuando el status de cualquier persona que haya entrado en territorio de la República de Panamá conforme a las estipulaciones del numeral (1) de este artículo cambiare en forma tal que dicha persona deje de llenar los requisitos referentes a su admisión, las autoridades de los Estados Unidos de América deberán notificarlo a las autoridades de la República de Panamá y serán responsables de que tales personas salgan del país, sin costo alguno para el Gobierno de la República de Panamá, cuando así lo requieran las autoridades de la República de Panamá, dentro de un período razonable después de la fecha

- en que hubieren recibido el aviso antedicho.
- (6) El Gobierno de los Estados Unidos de América tomará todas las medidas legales a su alcance para asegurar la buena conducta de todos los Miembros de las Fuerzas y de los Miembros del Cuerpo Civil y, a solicitud del Gobierno de Panamá, tomará las medidas apropiadas para que abandonen el territorio panameño cualesquiera de dichas personas cuya conducta incorrecta haga indeseables su presencia en la República de Panamá a juicio del Gobierno de dicha República.
 - (7) Si el Gobierno de la República de Panamá solicitare que un Miembro de las Fuerzas o un Miembro del Cuerpo Civil salga de su territorio, o dentro de un período razonable después de recibido el aviso de que trata el numeral (5) de este artículo, dictare una orden de expulsión contra un ex-Miembro de las Fuerzas o un ex-Miembro del Cuerpo Civil o un Dependiente, las autoridades de los Estados Unidos de América tendrán la responsabilidad de recibir en su propio territorio a la persona en cuestión o la de lograr en cualquier otra forma, que dicha persona salga de la República de Panamá. Este numeral se aplicará solamente a personas que no sean nacionales de la República de Panamá y que hayan entrado en la República de Panamá como Miembros de las Fuerzas o Miembros del Cuerpo Civil o con el objeto de formar parte de los mismos y con respecto a los Dependientes de tales personas.

ARTÍCULO V

- (1) El Gobierno de los Estados Unidos de América podrá adquirir en Panamá los suministros y servicios que se requieran para los fines de este Tratado. Se dará preferencia a la adquisición de suministros y servicios en la República de Panamá en la medida en que tales suministros y servicios sean comparables en calidad y costo con los que puedan obtenerse de otras fuentes. La política y reglamentos que se adopten para hacer efectiva esta preferencia se acordarán por medio del Comité Conjunto.
- (2) La República de Panamá o las divisiones políticas de la misma que gocen de facultad para imponer impuestos se abstendrán de gravar con impuestos cuya incidencia sobre el costo del bien o servicio objeto del mismo sea fácil de determinar, tales como impuestos sobre las ventas, impuestos de producción, impuesto sobre consumo y otros impuestos o derechos similares, a los bienes, servicios o materiales adquiridos o contratados en la

República de Panamá por el Gobierno de los Estados Unidos de América, o para su uso o beneficio, o por sus contratistas, o para su uso o beneficio, cuando ello se haya hecho para los fines de este Tratado. Las exenciones aquí concedidas no se extenderán, en ningún caso, a la incidencia que el impuesto sobre la renta o las contribuciones en materia de seguridad social puedan tener sobre los precios cobrados por los abastecedores de tales bienes, servicios o materiales. En caso de que hubiere desacuerdo sobre si deba haber exoneración del pago de un impuesto determinado, los Gobiernos de la República de Panamá y los Estados Unidos de América se comprometerán a resolver el asunto por medio del Comité Conjunto. Los procedimientos relativos al otorgamiento de las exenciones de que trata este artículo se acordarán por medio del Comité Conjunto.

- (3) De acuerdo con las estipulaciones del Artículo VI de este Tratado, las contribuciones en materia de seguridad social sólo serán pagadas con respecto a la mano de obra contratada en Panamá. La retención de tales contribuciones, así como las retenciones que deben hacerse sobre los sueldos pagados por dicha mano de obra de acuerdo con la ley panameña relativa al impuesto sobre la renta, serán efectuadas por las Fuerzas Armadas y sus Contratistas y los pagos serán hechos a las autoridades competentes de la República de Panamá.
- (4) Las estipulaciones de este Artículo no implican, en forma alguna, que los Miembros de las Fuerzas Armadas, los Miembros del Cuerpo Civil o sus respectivos Dependientes gocen de exoneración de impuestos o cargas similares en relación con las compras de índole personal, ya sea de bienes o de servicios, que efectúen dentro de la República de Panamá y que estén sujetos a tales impuestos o derechos conforme a la legislación panameña.
- (5) Salvo que las autoridades de la República de Panamá y los Estados Unidos de América así lo convengan, y conforme a condiciones mutuamente acordadas, los bienes que hayan sido comprados en la República de Panamá libres de pago de los impuestos a que se refiere el numeral (2) anterior, no podrán ser transferidos dentro de la República de Panamá a personas que no tengan derecho a comprar tales bienes con exoneración del pago de tales impuestos.

Las normas de (a) empleo, (b) niveles de salario y remuneración y (c) régimen de relaciones de trabajo que se adopten por los Estados Unidos para los fines de este Tratado, en cuanto a

la contratación de empleados en la República de Panamá, guardarán, normalmente, conformidad con las normas y régimen seguidos por la Administración. Los empleados de las fuerzas armadas que estuvieran prestando servicios en la República de Panamá, mientras exista continuidad en sus servicios, devengarán un salario que, en ningún caso, será menor al que rigiere para las posiciones que ocuparen en el momento inmediatamente anterior a la fecha en que entre en vigor este Tratado; además, tales empleados continuaran bajo la protección del sistema de jubilaciones vigente en ese entonces.

ARTÍCULO VI

- (1) Los contratistas de los Estados Unidos de América o sea las personas que sean ordinariamente residentes de los Estados Unidos de América (en el caso de sociedades anónimas, las organizadas de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos de América), cuya presencia en la República de Panamá se deba exclusivamente al propósito de cumplir contratos con los Estados Unidos de América para beneficio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y que sean designados como contratistas de los Estados Unidos por el Gobierno de los Estados Unidos de América de acuerdo con las estipulaciones del numeral (2) de este Artículo, así como los empleados de los contratistas de los Estados Unidos de América, que sean nacionales de los Estados Unidos de América, que sean ordinariamente residentes de los Estados Unidos de América y que se encuentren en la República de Panamá exclusivamente en relación con el cumplimiento de sus deberes como empleados de un contratista de los Estados Unidos de América, estarán sujetos a las leyes y reglamentos de la República de Panamá a menos que en este Artículo se disponga lo contrario.
- (2) La designación a que se refiere el numeral (1) anterior se hará previa consulta con el Gobierno de la República de Panamá y se limitará a los casos en que la adjudicación de un contrato mediante licitación pública no sea factible debido a las exigencias técnicas de los requisitos señalados a los Contratistas o a la imposibilidad de obtener en la República de Panamá los materiales o servicios requeridos por las normas de los Estados Unidos de América o a limitaciones impuestas por las leyes y reglamentos de los Estados Unidos de América. La designación de

un Contratista será retirada por el Gobierno de los Estados Unidos de América en cualquiera de los siguiente casos:

- a) Cuando haya dado cumplimiento a los contratos celebrados con los Estados Unidos de América para beneficio de las Fuerza Armadas de los Estados Unidos;
 - b) Cuando se compruebe que tales personas están dedicadas a actividades de negocios en la República de Panamá distintas a las relacionadas con el cumplimiento de los contratos celebrados con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o
 - c) Cuando tales personas se dedican a cualquier actividad ilegal en la República de Panamá.
- (3) A los contratistas de los Estados Unidos y a los empleados de los mismos a que se refiere en numeral (1) de este artículo y a sus Dependientes, previa certificación de las autoridades competentes de los Estados Unidos de América respecto de su identidad, se les extenderán los siguientes beneficios de este Tratado:
- a) El derecho a acceso a las Áreas de Defensa y a transitar libremente entre las mismas;
 - b) Los derechos relativos a entrada y salida que se otorgan a los Miembros del Cuerpo Civil de acuerdo con el Artículo IV de este Tratado;
 - c) Las exenciones del pago de derechos de aduana y otras cargas similares estipuladas en el Artículo IX de este Tratado para los Miembros de Cuerpo Civil;
 - d) Exención de las leyes y reglamentos de la República de Panamá con respecto a:
 - (i) La obtención de licencias para negocios y sociedades anónimas y de patentes comerciales, excepto que la República de Panamá podrá requerir que se presente, para su registro, documentación para acreditar la presencia legal en la República de Panamá, y (ii) los términos y condiciones de empleo de los empleados de que trata el numeral (1) de este Artículo;
 - e) En la medida en que ello sea autorizado mediante acuerdo de los dos Gobiernos en el Comité Conjunto, el derecho a usar los servicios y organizaciones de que trata el Artículo XV de este Tratado, y
 - f) El uso de los servicios e instalaciones públicas de acuerdo con las condiciones, precios y tarifas establecidos en el Artículo VII de este Tratado.
- (4) Los bienes sujetos a depreciación, con la excepción de bienes

raíces, que sean de propiedad de los contratistas de los Estados Unidos de América o que sean usados o transferidos por tales contratistas exclusivamente en relación con el cumplimiento de los contratos a que se refiere el numeral (1) de este Artículo, estarán exentos de impuestos o cargas similares en la República de Panamá.

- (5) Los contratistas de los Estados Unidos de América estarán exentos del pago de impuestos a la República de Panamá con respecto a la tenencia, uso, traspaso por causa de muerte o traspaso a persona o entidades que gozan de exención de impuestos de acuerdo con este Tratado, con respecto a bienes muebles, ya sean tangibles o intangibles, que se encuentren en Panamá debido exclusivamente a la presencia temporal de dichos contratistas en Panamá; queda entendido que tales exenciones no se aplicaran respecto a bienes tenidos con fines de inversión o de explotación de otros negocios en la República de Panamá o respecto a bienes intangibles registrados en la República de Panamá.
- (6) Los Contratistas de los Estados Unidos de América y sus empleados (excepto los empleados contratados en la República de Panamá) no pagaran el impuesto sobre la renta a la República de Panamá ni a ninguna entidad recaudadora de la República de Panamá con respecto a la renta devengada por concepto de un contrato celebrado en los Estados Unidos de América con el Gobierno de los Estados Unidos de América en relación con la construcción, mantenimiento o funcionamiento de cualquiera de las obras o instalaciones objeto de este Tratado. Las estipulaciones de este numeral no exoneran a tales personas del pago del impuesto sobre la renta con relación a rentas obtenidas de otras fuentes de la República de Panamá, ni tampoco exoneran del pago del impuesto sobre la renta panameño a aquellas personas y subempleados que, para los fines del pago del impuesto sobre la renta en los Estados Unidos de América, aleguen mantener su residencia en Panamá. Los periodos durante los cuales tales personas se encuentran en la República de Panamá sólo en relación con el cumplimiento de un contrato con el Gobierno de los Estados Unidos de América no se considerarán como periodos de residencias o domicilio en la República de Panamá para los fines de determinar la obligación de pagar impuestos.
- (7) El término «Contratistas de los Estados Unidos de América»

incluirá a los «subcontratistas» cuando tales «subcontratistas» llenen las condiciones y requisitos señalados en el numeral (1) de este Artículo y sean designados de acuerdo con las estipulaciones del mismo.

- (8) Cuando así lo solicitaren las autoridades de la República de Panamá, las autoridades de los Estados Unidos de América expedirán los certificados del caso para comprobar su derecho a recibir el beneficio de las exenciones de que trata este Artículo.

ARTÍCULO VII

- (1) (a) Sin perjuicio del derecho del Gobierno de los Estados Unidos de América a establecer y manejar servicios e instalaciones auxiliares que se requieran, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, los miembros de las Fuerzas y los Miembros del Cuerpo Civil y sus dependientes tendrán el derecho a usar los servicios e instalaciones públicos que pertenezcan a la República de Panamá o que estén bajo el control de su Gobierno o sujetos a los reglamentos del mismo. A menos que se acuerde lo contrario, las condiciones de uso, inclusive las tarifas que se cobren, serán no menos favorables que las vigentes con respecto a otros usuarios.
- (b) En relación con el uso de servicios e instalaciones públicos que se presten por medio de una planta construida, adquirida por el Gobierno de los Estados Unidos de América a sus expensas o por medio de equipo suministrado por dicho Gobierno, a sus expensas y posteriormente transferido al Gobierno de la República de Panamá libre de costo, las tarifas que se cobren por tal uso a los Estados Unidos de América se basarán únicamente en los gastos en que incurra el Gobierno de la República de Panamá por concepto del manejo y mantenimiento corrientes de la planta o equipo usado en la prestación de tales servicios e instalaciones.
- (2) (a) Los buques y aeronaves manejadas o fletados por los Estados Unidos de América o bajo su control exclusivo, tendrán acceso a las Áreas de Defensa y Derecho de tránsito entre las mismas, para fines oficiales relacionados con los propósitos de este Tratado. La República de Panamá no cobrará derechos de muellaje o aterrizaje ni tasas o peajes con respecto al uso de sus puertos o aeropuertos por parte de buques o aeronaves que sean manejados o fletados por

el Gobierno de los Estados Unidos de América para fines oficiales relacionados con los propósitos de este Tratado. Cuando los buques o aeronaves a que se refiere este numeral transporten carga, tripulantes o pasajeros que no gocen de exenciones de acuerdo con las estipulaciones de este Tratado, las notificaciones del caso serán hechas a las autoridades panameñas competentes. El Comité Conjunto adoptara los procedimientos necesarios para que la entrada de tales cargas, tripulantes o pasajeros al territorio de la República de Panamá, y salida de éste no viole las leyes y los reglamentos de la República de Panamá.

- (b) Los vehículos y equipos que sean de propiedad del Gobierno de los Estados Unidos de América, los Miembros de las Fuerzas de los Estados Unidos, los Miembros del Cuerpo Civil y sus respectivos Dependientes gozaran de derechos de acceso a las Áreas de Defensa, así como de derechos a transitar entre las mismas, y entre tales áreas a través de los puertos y aeropuertos de la República de Panamá. Los Estados Unidos de América no pagaran peajes, impuestos, ni otras cargas por tales derechos de acceso y tránsito, ni tampoco se harán tales pagos en su nombre.
- (3) Los faros y otras instalaciones auxiliares a la navegación de buques y aeronaves colocados por el Gobierno de los Estados Unidos de América en las áreas de Defensa y en sus aguas adyacentes o en la vecindad de las mismas se ajustaran, en cuanto a ello sea posible, al sistema que se use en la República de Panamá. La posición y señales distintivas de cualquier faro u otras señales de navegación y cualesquiera alteraciones de las mismas se determinaran previa consulta con las autoridades competentes del Gobierno de la República de Panamá.
- (4) Con el objeto de permitir el uso del espacio aéreo sobre las Áreas de Defensa o adyacentes o en la vecindad de las mismas, la República de Panamá y los Estados Unidos de América tomaran las medidas apropiadas a fin de asegurar que el tránsito aéreo sobre las áreas de Defensa y las áreas adyacentes a las mismas se coordine en forma tal que prevea la máxima seguridad posible para el éxito de las misiones de defensa y seguridad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y para las necesidades de la navegación aérea, tanto civil como militar. El sistema de control del Tráfico aéreo, tanto civil como militar, así como los métodos de comunicación relativos al

mismo se desarrollaran mediante una estrecha coordinación entre ambos países y se integraran en la medida en que ello sea necesario para satisfacer los fines de este Tratado.

El procedimiento necesario para hacer efectiva tal coordinación e integración, así como las reformas que posteriormente se introduzcan al mismo, se adoptaran mediante arreglos entre las autoridades competentes de ambos Gobiernos.

Con sujeción a lo anterior, el control del tráfico aéreo en la República de Panamá se continuara rigiendo por el canje de notas del día 10 de Abril de 1950 relativo al Sistema Coordinado de Control del Tráfico Aéreo que se efectuó en virtud del Artículo XV del convenio de aviación celebrado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América el día 31 de Marzo de 1949, mientras dicho canje de notas se encuentre vigente.

ARTÍCULO VIII

- (1) La República de Panamá y sus divisiones políticas convienen en no imponer impuestos o cargas similares sobre tenencia, uso o transferencia de bienes por los Estados Unidos de América o para beneficio de dicho país en la República de Panamá, sin perjuicio de las estipulaciones del numeral (6) del Artículo IX de este Tratado. Los Estados Unidos de América expedirán las certificaciones de rigor en que conste que tal tenencia, uso o transferencia de dichos bienes es para fines oficiales.
- (2) Los Miembros de las Fuerzas, los Miembros del Cuerpo Civil y sus respectivos Dependientes estarán sujetos a las leyes fiscales de la República de Panamá, excepto en cuanto se disponga lo contrario en este Artículo.
- (3) Los Miembros de las Fuerzas, los Miembros del Cuerpo Civil y sus Dependientes no estarán sujetos al pago de impuestos a la República de Panamá ni a ninguna división política de la misma con respecto a la renta recibida como resultado de los servicios prestados como empleados de los Estados Unidos de América, o con respecto a renta obtenida de fuentes fuera de la República de Panamá. Las estipulaciones de este Artículo no exoneran a tales personas de la obligación de pagar el impuesto sobre la renta con respecto a la renta obtenida de fuentes panameñas distintas a las fuentes a que se hace referencia en la primera oración de este numeral. Tales estipulaciones tampoco exoneran de la obligación de pagar impuestos sobre la renta a la Re-

pública de Panamá a los nacionales de Estados Unidos que, para los fines del pago del impuesto sobre la renta en dicho país, aleguen ser residentes de la República de Panamá.

- (4) Los Miembros de las Fuerzas, los Miembros del Cuerpo Civil y sus Dependientes estarán exentos del pago de impuesto en la República de Panamá con respecto a la tenencia, uso, traspaso ínter o traspasos por causa de muerte de bienes muebles, ya sean tangibles o intangibles, que se encuentren en la República de Panamá, debido exclusivamente a la presente temporal de tales personas en la República de Panamá; salvo que tales exenciones no se aplicaran respecto de bienes tenidos con el fin de efectuar inversiones en la República de Panamá o respecto de ningún bien intangible registrado en la República de Panamá.

ARTÍCULO IX

- (1) Los Miembros de las Fuerzas, los Miembros del Cuerpo Civil y los Dependientes estarán sujetos a las leyes y reglamentos de aduana de la República de Panamá, salvo en los casos estipulados en este Tratado.
- (2) Todos los materiales, abastos y equipos importados por los Estados Unidos de América o para su beneficio o uso, o por sus contratistas, o para su beneficio o uso, ya sea que se trate o no de contratistas designados de acuerdo con las disposiciones del Artículo VI de este Tratado o de contratistas locales, podrán ser importados a la República de Panamá libres del pago de los derechos de aduana y otras cargas afines, siempre que se trate de bienes importados para el uso oficial de las Fuerzas de los Estados Unidos de América en relación con los fines de este Tratado. Los Estados Unidos de América expedirán la certificación adecuada en que conste que tales materiales, abastos y equipos se importan para uso oficial.
- (3) Los bienes para uso personal enviados a los Miembros de las Fuerzas, a los Miembros del Cuerpo Civil y a los Dependientes quedaran sujetos al pago de los derechos de introducción y otras cargas afines. Sin embargo, quedaran exentos del pago de tales derechos y cargas el mobiliario, utensilios domésticos y efectos personales, incluidos vehículos y piezas para los mismos, que sean importados para su uso personal por los Miembros de las Fuerzas y los Miembros del Cuerpo Civil cuando lleguen por primera vez a prestar sus servicios a la República de Panamá o por los Dependientes cuando lleguen por vez pri-

mera a reunirse con los Miembros de las Fuerzas o del Cuerpo Civil. Las exenciones de que trata este numeral se otorgarán a los bienes descritos en el mismo que sean importados dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la primera reunión en la República de Panamá de las personas antes indicadas.

- (4) Las exenciones a que se refieren los numerales (2) y (3) de este Artículo se aplicarán sólo a los casos de importación de bienes y no se interpretarán en el sentido de que de que dan derecho, en el caso de compra de bienes, a solicitar la devolución de los impuestos de importación u otros impuestos internos sobre consumo correspondientes a tales bienes cuando los impuestos respectivos hayan sido recaudados por las autoridades aduaneras al introducirse los mismos a la República de Panamá.
- (5) Las autoridades de aduana de la República de Panamá se abstendrán de efectuar inspecciones en los casos siguientes:
 - (a) Con respecto al equipaje de Miembros de las Fuerzas que viajan bajo órdenes militares cuando éstos entren o salgan de la República de Panamá; queda entendido que esta disposición no se aplicará a casos de Miembros de las Fuerzas que efectúen viajes en goce de licencia o vacaciones;
 - (b) con respecto a documentos oficiales bajo sello oficial y con respecto al correo recibido o despachado por las estafetas militares bajo sello postal oficial, y
 - (c) con respecto a efectos militares consignados a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
- (6) Los bienes importados de acuerdo con este Artículo y que posteriormente sean traspasados a personas que no gocen de la facultad de importar los mismos con exención del pago de los impuestos de aduana estarán sujetos a que el adquiriente pague tales impuestos y demás cargas con sujeción a las leyes y reglamentos de la República de Panamá.
- (7) Los bienes importados de la República de Panamá libres del pago de derechos de aduana y otras cargas afines, de acuerdo con los numerales (2) y (3) de este Artículo, podrán ser reexportados libres del pago de derechos de aduana y otras cargas afines.
- (8) Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cooperarán con las autoridades de la República de Panamá a fin de evitar abuso en el disfrute de las exenciones que, de acuerdo con este Artículo, se confieren a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Miembros de las Fuerzas, Miembros del Cuerpo Civil y sus respectivos Dependientes.

- (9) (a) Con el fin de evitar violaciones de las leyes y reglamentos de aduana de la República de Panamá, las autoridades de la República de Panamá y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se prestarán ayuda mutua en la conducción de investigaciones relativas a tales violaciones, incluyendo la obtención de pruebas.
- (b) Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos prestarán toda la cooperación a su alcance para asegurar que los artículos sujetos a decomiso por parte de las autoridades de aduana de la República de Panamá o en nombre de éstas sean entregados a dichas autoridades.
- (c) Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos prestarán toda la cooperación a su alcance para asegurar el pago de derechos de aduana, impuestos y multas a que se encuentren sujetos los Miembros de las Fuerzas, Miembros del Cuerpo Civil y sus respectivos Dependientes.
- (d) Las autoridades de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos prestarán toda la cooperación a su alcance a los funcionarios panameños que, con el objeto de efectuar los exámenes de aduana, sean destinados a prestar servicios en los muelles y aeropuertos que se encuentren bajo la administración de las autoridades militares de los Estados Unidos de América.
- (e) Los vehículos y artículos pertenecientes a los Estados Unidos de América que sean decomisados a cualquier individuo por las autoridades de aduana de la República de Panamá en relación con la violación de las leyes o reglamentos fiscales o de aduana panameños, serán entregados a las autoridades competentes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

ARTÍCULO X

- (1) (a) Con sujeción a las estipulaciones de este artículo, las autoridades de la República de Panamá ejercerán jurisdicción exclusiva sobre los Miembros de las Fuerzas, Miembros del Cuerpo Civil y sus respectivos Dependientes con respecto a actos u omisiones, en la República de Panamá, inclusive actos u omisiones contra la seguridad de la República de Panamá, que sean punibles por las leyes panameñas.
- (b) Cuando un acto u omisión, inclusive un acto u omisión contra la seguridad de los Estados Unidos de América, no

sea punible por las leyes de la República de Panamá pero si lo sea por la legislación de los Estados Unidos de América, la jurisdicción sobre las personas antes referidas será ejercida por los Estados Unidos de América.

- (2) La República de Panamá otorga su consentimiento a fin de que, cuando un acto u omisión sea punible por las leyes de ambos países, las autoridades militares de los Estados Unidos de América ejerzan dentro del territorio de la República de Panamá, en forma concurrente con la jurisdicción ejercida por las autoridades panameñas, la jurisdicción criminal y disciplinaria sobre Miembros de las Fuerzas, Miembros del Cuerpo Civil y sus respectivos Dependientes, conferidas a dichas autoridades militares por las leyes de los Estados Unidos de América. Cuando el derecho a ejercer jurisdicción sea concurrente se aplicarán las siguientes reglas:
- (a) La República de Panamá tendrá el derecho primario a ejercer jurisdicción en todos los casos excepto en aquellos que se especifican en el inciso (b) del numeral (2) de este Artículo.
 - (b) Cuando las leyes pertinentes de los Estados Unidos de América confieren tal jurisdicción a las autoridades militares de los Estados Unidos de América sobre Miembros de las Fuerzas, Miembros del Cuerpo Civil y sus respectivos Dependientes, dichas autoridades tendrá el derecho primario a ejercer jurisdicción en los siguientes casos: (i) Cuando el delito fuere sólo contra los bienes o seguridad de los Estados Unidos de América; (ii) cuando el delito fuere sólo contra la persona o bienes de otro Miembro de las Fuerzas o Miembro del Cuerpo Civil o un Dependiente; o (iii) cuando el delito tuviere su origen en actos cometidos u omisiones incurridas en el desempeño de funciones oficiales.
 - (c) Si el Estado que tenga el derecho primario a ejercer jurisdicción decidiere no ejercerla, se lo notificará a las autoridades del otro Estado tan pronto como le sea posible. Las autoridades del Estado que tenga el derecho primario a ejercer jurisdicción considerarán con simpatía las solicitudes que les formulen las autoridades del otro Estado a fin de que decline el ejercicio de jurisdicción en aquellos casos en que el otro Estado considere que tal renuncia tenga una importancia especial. Excepto en los casos en los cuales la República de Panamá determine que es de importancia especial

que la jurisdicción sea ejercida por sus autoridades, la República de Panamá renunciará a favor de los Estados Unidos de América el derecho primario a ejercer jurisdicción conforme al inciso (a) del numeral (2) de este artículo.

- (3) Los Miembros de las Fuerzas, del Cuerpo Civil y de sus respectivos Dependientes se considerarán residentes del Área del Canal con respecto a la competencia y jurisdicción de la Administración y de los Tribunales del Área del Canal para los fines de los artículos XXIV y XXV del Tratado Concerniente al Canal de Panamá firmado en esta fecha. La jurisdicción que ejerzan los Tribunales del Área del Canal estará sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos de acuerdo con el numeral (1) y el inciso (b) del numeral (2) de este artículo.
- (4) Para los fines de este Tratado, se considerarán como delitos contra la seguridad de un Estado los siguientes: (i) Traición contra el Estado; (ii) sabotaje; (iii) espionaje o violación de cualquier ley relativa a secretos oficiales de ese Estado o secretos relativos a la defensa nacional de ese Estado.
- (5) Los Estados Unidos no ejercerán, en ningún caso, jurisdicción sobre nacionales de la República de Panamá a menos que se trate de un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
 - (a) Las autoridades competentes de la República de Panamá y los Estados Unidos se prestarán mutua ayuda a fin de que los Miembros de las Fuerzas, Miembros del Cuerpo Civil y sus respectivos Dependientes en la República de Panamá sean arrestados y entregados a las autoridades que han de ejercer jurisdicción de acuerdo con las estipulaciones arriba expresadas.
 - (b) Las autoridades de la República de Panamá notificarán prontamente a las autoridades militares de los Estados Unidos sobre el arresto de cualquier Miembro de las Fuerzas, Miembro del Cuerpo Civil, o Dependiente.
 - (c) En todos los casos en que un Miembro de las Fuerzas, un Miembro del Cuerpo Civil o un Dependiente haya sido acusado de la comisión de un delito y la República de Panamá haya de ejercer jurisdicción, la persona acusada permanecerá dentro del territorio de la República de Panamá durante el período de investigación y juicio, inclusive hasta la fecha en que se dicte sentencia, y en caso de que el acusado fuere condenado, hasta que se cumpla la pena, a me-

nos que la República de Panamá acuerde lo contrario.

(d) En los casos en que las autoridades militares de los Estados Unidos mantengan custodia, conforme a las estipulaciones siguientes, de la persona acusada de haber cometido un delito, tal persona, cuando ello sea así requerido por las autoridades de la República de Panamá, será puesta inmediatamente a la disposición de dichas autoridades para los fines de adelantar las investigaciones y celebrar el juicio. Las autoridades de los Estados Unidos darán debida consideración a todas las solicitudes especiales formuladas por las autoridades de la República de Panamá relativas a la custodia del acusado.

(e) La custodia de un Miembro de las Fuerzas, Miembro del Cuerpo Civil o Dependiente que haya sido acusado de la comisión de un delito y sobre quien la República de Panamá haya de ejercer jurisdicción, permanecerá en poder de las autoridades de los Estados Unidos de América siempre que el acusado se encuentre en su poder; tal custodia será ejercida por dichas autoridades hasta cuando todo el procedimiento judicial se haya terminado y la custodia sea solicitada por las autoridades de la República de Panamá. Con excepción de los casos en que la República de Panamá considere que el asunto es de importancia especial y de los casos en que los Estados Unidos de América soliciten cooperación de las autoridades de la República de Panamá para el mantenimiento de la custodia, la persona acusada que se encuentre bajo la custodia de las autoridades panameñas será entregada a las autoridades de los Estados Unidos de América, bajo cuya custodia permanecerá hasta la terminación de todo el proceso judicial y hasta cuando la custodia sea solicitada por las autoridades de la República de Panamá. En los casos antedichos, se efectuarán, por medio del Comité Conjunto, arreglos apropiados sobre custodia.

(7) (a) Las autoridades de la República de Panamá y las de los Estados Unidos se prestarán mutua ayuda para efectuar todas las investigaciones necesarias relativas a la comisión de delitos, así como en todo lo concerniente a la obtención y presentación de pruebas, incluyendo el decomiso, y cuando ello proceda, la entrega de objetos relacionados con la comisión del delito.

(b) Las autoridades de la República de Panamá y las de los Estados Unidos se harán las notificaciones pertinentes

acerca de la decisión final que tomaron en todos los casos en que exista el derecho a ejercer jurisdicción concurrente.

- (8) La pena de muerte no se ejecutará dentro del territorio de la República de Panamá por parte de las autoridades de los Estados Unidos.
- (9) Cuando el acusado sea juzgado de acuerdo con las estipulaciones de este artículo por las autoridades de la República de Panamá o las de los Estados Unidos de América y haya sido absuelto, o haya sido condenado y se encuentre cumpliendo su pena o la haya cumplido, o haya sido perdonado, dicho acusado no será juzgado nuevamente por el mismo delito, dentro del mismo territorio, por las autoridades del otro Estado. Sin embargo, las estipulaciones de este numeral no impedirán que las autoridades militares de los Estados Unidos de América juzguen a un Miembro de las Fuerzas por cualquiera violación de las reglas de disciplina relacionadas con un acto u omisión que hubiere constituido un delito por el cual hubiere sido juzgado por las autoridades de la República de Panamá.
- (10) Cuando un Miembro de las Fuerzas, Miembro del Cuerpo Civil o Dependiente sea procesado de acuerdo con las estipulaciones de este Artículo, el acusado tendrá derecho a lo siguiente:
 - (a) A que el juicio se celebre con prontitud y rapidez;
 - (b) a que, con anterioridad a la celebración de la audiencia, se le informe con respecto al cargo o cargos específicos que se le imputan;
 - (c) a que se le confronte con los testigos de cargo;
 - (d) a que los testigos que hayan de ser presentados en su favor y que se encuentren dentro de la jurisdicción de la República de Panamá sean citados judicialmente;
 - (e) a ser representados por abogado de su escogimiento o a que, de acuerdo a la legislación vigente en la República de Panamá, se le nombre un defensor de oficio;
 - (f) a que, si lo estima necesario, se le proporcionen los servicios de un intérprete competente, y
 - (g) a que un representante del Gobierno de los Estados Unidos de América presencie la audiencia, la cual será pública, excepto cuando el tribunal, de acuerdo con sus reglas de procedimiento, disponga lo contrario.
- (11) Además, el acusado gozará de los derechos y garantías procesales fundamentales que estuvieren consagradas por la Constitución de la República de Panamá y de aquéllas de que se

disfrutare en la Zona del Canal en el momento inmediatamente anterior a la entrada en vigor de este Tratado.

- (12) (a) Las unidades militares o formaciones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos debidamente asignadas para tales fines ejercerán funciones policivas en las Áreas de Defensa. La policía militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para mantener el orden y la seguridad en dichas áreas.
- (b) Fuera de las Áreas de Defensa, dicha policía militar sólo podrá ser utilizada con sujeción a los acuerdos que se celebren con las autoridades de la República de Panamá y en coordinación con las mismas y sólo en la medida en que ello sea necesario para mantener el orden y la disciplina entre los Miembros de las Fuerzas.
- (13) Cuando, de acuerdo con las estipulaciones de este Artículo, un Miembro de las Fuerzas, Miembro del Cuerpo Civil o Dependiente sea juzgado, condenado y cumpla su pena en las cárceles de la República de Panamá, se otorgarán derechos de visita repetidas, por lo menos una vez por semana, a los familiares cercanos del recluso y a los representantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Además, artículos para la salud y comodidad personal, tales como ropa, medicina y alimentos podrán ser enviados al recluso y usados por él. Las instalaciones usadas para dar cumplimiento a las penas de confinamiento, prisión o trabajos forzados, o para la detención de Miembros de las Fuerzas, Miembro del Cuerpo Civil o Dependientes llenarán los requisitos básicos que se acuerden en el Comité Conjunto.

ARTÍCULO XI

- (1) Cada uno de los Estados renuncia a reclamaciones contra el otro por daños causados a cualquier bien de su propiedad y destinado al uso de sus Fuerzas Armadas, terrestres, navales o aéreas, si tal daño:
 - (a) Fue causado por un miembro de las Fuerzas Armadas o un empleado al servicio de las Fuerzas Armadas del otro país en el desempeño de sus funciones oficiales; o
 - (b) Fue causado por el uso de un vehículo, buque o aeronave de propiedad del otro Gobierno y usado por sus Fuerzas Armadas, siempre y cuando que el vehículo, buque o aeronave que causó el daño estuviera usándose para fines ofi-

- ciales, o que el dano se hubiere causado a bienes que estuvieren usándose para tales fines
- (2) Las reclamaciones de un Gobierno contra el otro en concepto de salvamento marítimo serán renunciadas si el buque o carga objeto del salvamento era de propiedad de uno de los dos Gobiernos y se estaba usando por sus Fuerzas Armadas para fines oficiales
 - (3) En el caso de daño causado u originado en algunas de las formas previstas en el numeral (1) anterior a otros bienes que pertenecieren a alguno de los dos Gobiernos y estuvieren situados en la República de Panamá, se conviene en que:
 - (a) Cada Gobierno renuncia a reclamaciones cuya cuantía sea inferior a la suma de B/. 1.400.00;
 - (b) las reclamaciones que excedieren de la suma señalada en el inciso (a) anterior serán ajustadas por el Gobierno en contra del cual se presente la reclamación y de no serlo, será ajustada a través de los conductos diplomáticos. Si no se llegare a un acuerdo entre las partes por la vía diplomática, el ajuste de la reclamación será sometido a arbitraje conforme al procedimiento establecido en el Artículo XXXVII del Tratado Concerniente al Canal de Panamá firmado en esta fecha.
 - (4) Para los fines de los numerales (1) y (2) de este artículo, la expresión «perteneciente a un Gobierno», en el caso de un buque, incluye los buques fletados por ese Gobierno sin tripulación ni combustible, o que hayan sido requisados en las mismas condiciones o tomados en presa por dicho Gobierno. (Las disposiciones de este numeral no se aplicarán en la medida en que el riesgo de pérdida o la responsabilidad sean asumidos por persona distinta a tal Gobierno).
 - (5) Los dos Gobiernos renuncian a reclamaciones el uno contra el otro por daños personales o muerte causados a cualquier miembro de sus Fuerzas Armadas y que hayan ocurrido en el desempeño de funciones oficiales.
 - (a) En materia civil, los Miembros de las Fuerzas y los Miembros del Cuerpo Civil estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales de la República de Panamá. Se exceptuarán de esta regla: (1) Los asuntos que surjan en relación con el desempeño de funciones oficiales o (2) cualquier reclamación cuyo pago se haya efectuado en su totalidad.
 - (b) Cuando cualquier bien mueble particular, que éste sujeto a

secuestro o a embargo conforme a las leyes de la República de Panamá, con exclusión de los que estén siendo usados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, se encuentre dentro de las Áreas de Defensa, las autoridades de los Estados Unidos de América, a solicitud de los tribunales panameños, prestarán toda la ayuda a su alcance a fin de que tal bien sea entregado a las autoridades panameñas.

- (7) Las reclamaciones que no tengan origen contractual y que se deriven de actos u omisiones por parte de Miembros de las Fuerzas o Miembros del Cuerpo Civil en el desempeño de deberes oficiales o como consecuencia de cualquier otro acto, omisión o suceso por el cual los Estados Unidos de América sean legalmente responsables y que causen daños en Panamá a terceras personas que no sean los dos Gobiernos, Se transmitirán de acuerdo con las siguientes normas:

- (a) El interesado podrá presentar directamente su reclamación ante las autoridades de los Estados Unidos de América; o
- (b) a menos que se acuerde otra cosa, el Gobierno de Panamá podrá presentar la reclamación por la vía diplomática y, en caso de no llegarse a acuerdo entre las partes, dicha reclamación se someterá a arbitraje conforme a las normas establecidas en el artículo XXXVII del Tratado Concerniente al Canal de Panamá firmado en esta fecha.

El Gobierno de los Estados Unidos de América tramitará otras reclamaciones que no tengan origen contractual y que se presenten contra Miembros de las Fuerzas y del Cuerpo Civil y podrá ofrecer pagos ex gratia en tales casos y por las sumas que determinen las autoridades competentes de los Estados Unidos de América.

- (8) Las autoridades de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América se presentarán cooperación para efectuar una pronta investigación y obtención de pruebas que permita una justa solución de las reclamaciones presentadas conforme a este artículo.
- (9) Las reclamaciones contractuales se resolverán de acuerdo con la cláusula de los contratos relativa a desaveniencias y, en ausencia de tal cláusula, por medio de la reclamación directa a las autoridades de los Estados Unidos de América.

ARTÍCULO XII

El gobierno de los Estados Unidos de América podrá estable-

cer, mantener y manejar sistemas de telecomunicaciones, instalaciones meteorológicas, y obras auxiliares a la navegación, equipos transmisores y receptores de radio, televisión y radar, cables submarinos y subterráneos y otros artefactos electrónicos que se requieran para los fines de este tratado o hacer los arreglos del caso para que los mismos sean manejados para su beneficio. El gobierno de los Estados Unidos de América podrá retener todos los sistemas de comunicación, incluyendo instalaciones electrónicas, frecuencias de radio, intensidad de señales y amplitud de ondas que este usando en la fecha en que este Tratado entre en vigor. El uso de frecuencias de radios, intensidad de señales y amplitud de ondas adicionales será objeto de coordinación con el Gobierno de la República de Panamá conforme al Reglamento de Radio de 1959 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de que se hace mención en el anexo B de este Tratado.

ARTÍCULO XIII

- (1) El Gobierno de los Estados Unidos podrá, dentro de las Áreas de Defensa, efectuar estudios topográficos, hidrográficos y otras investigaciones similares (incluyendo la aerolotogrametría).
- (2) El Gobierno de los Estados Unidos de América también podrá hacer arreglos por medio del Comité Conjunto para llevar a cabo investigaciones sobre el terreno en otras partes de la República de Panamá, casos éstos en los cuales el Gobierno de la República de Panamá podrá designar un representante oficial para que participe en tales investigaciones. El Gobierno de los Estados Unidos facilitará, libre de costo, a la República de Panamá un número razonable de copias de los informes que resulten de las investigaciones así realizadas.

ARTÍCULO XIV

Los Estados Unidos de América podrán establecer y manejar, dentro de las Bases Militares, correos militares de los Estados Unidos para el uso de los Miembros de las Fuerzas, Miembros del Cuerpo Civil y sus respectivos Dependientes. Los Estados Unidos de América podrán permitir a los Contratistas de los Estados Unidos de América el uso de correos militares para correspondencia oficial solamente. Además, podrá permitirse dicho uso a tales otras personas que acuerde el Comité Conjunto.

ARTÍCULO XV

- (1) El Gobierno de los Estados Unidos de América tendrá el derecho a establecer y manejar, dentro de las Bases Militares, tal como se delimitan en el anexo A de este Tratado, actividades tales como comisariatos, tiendas militares, instalaciones de recreo y clubes sociales y atléticos para el uso de los Miembros de las Fuerzas, Miembros del Cuerpo Civil, sus respectivos Dependientes y tales otras personas a quienes mutuamente se acuerde otorgar estos privilegios por medio del Comité Conjunto. Tales actividades y la mercadería y servicios vendidos o prestados por los mismos estarán exonerados del pago de todo impuesto, derechos de importación y gravámenes.
- (2) La venta o servida de bebidas alcohólicas y la política de compra con respecto a la mercancía que ha de ser revendida en los establecimientos mencionados estarán sujetas a los arreglos internacionales vigentes entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América en la fecha en que este Tratado entre en vigor.
- (3) Las autoridades competentes de la República de Panamá y los Estados Unidos de América elaborarán, a través del Comité Conjunto, los procedimientos adecuados de control para prevenir abusos en relación con los privilegios otorgados conforme a este artículo.

ARTÍCULO XVI

Los Estados Unidos de América tendrán el derecho de prestar asistencia médica a las Fuerzas Armadas, Miembros del Cuerpo Civil y sus respectivos Dependientes. Corresponderá a las autoridades de los dos Gobiernos, a través del Comité Conjunto, resolver los problemas que interesen a ambos países relativos al control y prevención de enfermedades y a la coordinación de otros servicios de salud pública, médicos, de saneamiento y veterinaria.

ARTÍCULO XVII

- (1) En la forma en que sea acordada en el Comité Conjunto, las autoridades competentes de la República de Panamá serán notificadas en relación con los permisos y licencias para manejar automóviles expedidos por las autoridades de los Estados Unidos de América a Miembros de las Fuerzas, Miembros del Cuerpo Civil y sus respectivos Dependientes y tales permisos o licencias serán reconocidos como válidos por las autoridades de Panamá; las personas a cuyo favor se hayan expedido los mis-

mos estarán exentas de requisitos de exámenes relativos al manejo de vehículos y de tasas que graven la expedición de permisos o licencias para manejar.

- (2) Los vehículos oficiales que sean de propiedad de los Estados Unidos de América llevarán placas numeradas o distintivos especiales que permitan su fácil identificación.
- (3) Los vehículos privados que sean de propiedad de Miembros de las Fuerzas, Miembros del Cuerpo Civil o de sus respectivos Dependientes llevarán placas expedidas por las autoridades de la República de Panamá, las que serán adquiridas mediante el pago de tasas o impuestos iguales a los que paguen los nacionales de la República de Panamá por dichas placas.

ARTÍCULO XVIII

- (1) Los Miembros de las Fuerzas Armadas, Miembros del Cuerpo Civil y sus respectivos Dependientes acatarán las leyes de la República de Panamá y las estipulaciones de este Tratado, y se abstendrán de toda actividad contraria al espíritu de este Tratado.
- (2) En el ejercicio de los derechos otorgados por este Tratado, así como en el uso de las Áreas de Defensa, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tomarán, dentro de dichas Áreas, todas las medidas factibles de cooperación con miras a proteger la salud pública en la República de Panamá.
- (3) Las autoridades de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América cooperarán para facilitar el cumplimiento de los fines de este Convenio y, a tal fin, adoptarán y harán cumplir las leyes y reglamentos que para ello sea necesario.
- (4) Los Miembros de las Fuerzas sólo podrán poseer y portar armas cuando les sea así permitido por sus órdenes oficiales. Los procedimientos relativos a cualesquiera solicitudes especiales que se presenten a este respecto se acordarán en el Comité Conjunto.
- (5) Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos podrán celebrar acuerdos con la Administración del Canal de Panamá para facilitar el cumplimiento de la misión de tales Fuerzas. Acuerdos de cooperación, incluidos los relativos al otorgamiento de permisos y licencias, podrán ser celebrados con tal propósito. En especial, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos podrán celebrar arreglos mutuamente satisfactorios con dicha Administración relativos al uso de servicios comunales y servicios

públicos tales como suministro de energía eléctrica y agua potable, escuelas públicas, hospitales, sanidad y protección contra incendios. La celebración de tales arreglos no impedirá que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos establezcan y manejen tales servicios cuando así los consideren necesario para el desarrollo de sus actividades.

ARTÍCULO XIX

- (1) Se establecerá un Comité Conjunto que resolverá sobre bases mutuamente satisfactorias todos los asuntos que deban atenderse para dar cumplimiento a este Tratado.
- (2) El Comité Conjunto estará compuesto de un representante designado por el Gobierno de la República de Panamá y uno designado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, cada uno de los cuales tendrá uno o más suplentes. El Comité Conjunto adoptará sus propias reglas de procedimiento y nombrará los subcomités que se requieran. El Comité Conjunto se organizará en forma tal que pueda reunirse inmediatamente, en cualquier momento, cuando así lo solicitare el representante del Gobierno de la República de Panamá o el del Gobierno de los Estados Unidos de América.
- (3) Si el Comité Conjunto no pudiere resolver un problema determinado, referirá el mismo a los Gobiernos respectivos para que se le dé consideración adicional a través de los conductos apropiados.

ARTÍCULO XX

- (1) Este Tratado entrará en vigor en la fecha de la entrada en vigor del Tratado Concerniente al Canal de Panamá firmado en esta fecha.
Este Tratado terminará en cualquiera de las siguientes fechas que sea la última en ocurrir:
 - (a) Cuando transcurra un período de 5 años contando a partir de la fecha de la terminación del Tratado Concerniente al Canal de Panamá que la República de Panamá y los Estados Unidos de América han firmado en esta fecha; o
 - (b) En la fecha de la terminación del Tratado Concerniente a la Construcción de un Canal a nivel del mar que una los Océanos Atlántico y Pacífico, que la República de Panamá y los Estados Unidos de América han firmado en esta fecha; o

- (c) En la fecha en que los Estados Unidos de América ya no estén obligados a defender un canal interoceánico en la República de Panamá conforme a un tratado bilateral entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América distinto a los Tratados mencionados en los incisos (a) y (b) de este numeral y al presente Tratado. (*)

Este Tratado se extiende simultáneamente en español o inglés y las Altas Partes Contratantes convienen en que en la interpretación de cualquiera de sus estipulaciones el texto en español y el texto en inglés se considerarán igualmente válidos.

Firmado en Washington este día 21 de junio de 1967.

.....

ANEXO «A» **Áreas de Defensa**

Las Áreas de Defensa cuyo uso la República de Panamá pone a disposición de los Estados Unidos de América de acuerdo con las estipulaciones de este Tratado son las siguientes:

Bases Militares: es un área en la República de Panamá cuyo uso la República de Panamá pone a disposición exclusiva de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para fines de defensa del canal y fines de seguridad relacionados con la misma.

(Sigue la descripción de las bases militares).

Área para Maniobras: es un área en la República de Panamá con respecto a la cual la República de Panamá concede a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos el derecho de acceso para fines de entrenamiento y maniobras relacionados con la defensa del canal y fines de seguridad referentes a la misma.

(Sigue la descripción de las áreas para maniobras).

Área de Vigilancia: es un área en la República de Panamá con respecto a la cual la República de Panamá concede a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos el derecho de acceso para fines de defensa del canal y fines de seguridad relacionados con la misma.

(Sigue la descripción de las áreas de vigilancia).

Instalación Auxiliar: es un área en la República de Panamá

(*) El numeral (2) del Artículo XX fue modificado según consta en la Nota MNP-12/68, del 3 de enero de 1968 del Embajador Roberto R. Alemán, que aparece mas adelante.

que la República de Panamá destina al establecimiento y manejo de instalaciones auxiliares que se usarán para fines de defensa del canal y fines de seguridad relacionados con la misma y cuyo uso exclusivo, a tales propósitos, otorga a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

(Sigue la descripción de las instalaciones auxiliares).

ANEXO «B»

Uso de frecuencias de radio, intensidad de señales y amplitud de ondas por el Gobierno de los Estados Unidos de América en la República de Panamá.

El uso de las frecuencias de radio, intensidad de señales y amplitud de ondas por el Gobierno de los Estados Unidos de América se coordinará con el Gobierno de la República de Panamá conforme a los siguientes procedimientos:

- (1) Cuando entre en vigor este Tratado, las autoridades de los Estados Unidos de América suministrarán a las autoridades panameñas correspondientes una lista de todas las frecuencias de radio ya asignadas para uso del Gobierno de los Estados Unidos de América en la República de Panamá. Esta lista se preparará de acuerdo con el procedimiento internacional prevaleciente empleado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones e incluirá los detalles de notificación tanto para la notificación de las frecuencias actualmente publicadas en los registros de frecuencias de radio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como para aquellas cuyas notificaciones están en proceso de revisión y preparación para tal publicación. También incluirá detalles concernientes a esas frecuencias asignadas para el uso del gobierno de los Estados Unidos de América en la República de Panamá para las cuales no se considera necesario en este momento el registro internacional y la protección internacional concomitante de interferencias. Las frecuencias cuyas listas han sido así preparadas estarán disponibles para el uso continuo en la República de Panamá por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Las enmiendas a esta lista de frecuencias se llevarán a efecto en la forma señalada más adelante.
- (2) Con anterioridad a la asignación de cualquier nueva frecuencia para uso del Gobierno de los Estados Unidos de América o sus dependencias en la República de Panamá o la modifica-

ción o cancelación de cualquier asignación existente, el Gobierno de los Estados Unidos de América coordinará tal asignación, modificación, o cancelación propuesta, con las autoridades panamenas. El propósito de tal coordinación será el de asegurar la compatibilidad técnica entre las asignaciones de frecuencias de los dos Gobiernos. Las autoridades competentes de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América harán todo cuanto esté a su alcance para resolver los problemas de compatibilidad. Mientras tales problemas estén pendientes de solución las autoridades de los Estados Unidos de América podrán usar las frecuencias en cuestión en plan de prueba siempre y cuando que no se cause interferencia a las operaciones panameñas existentes.

- (3) Una vez coordinado el uso propuesto de las frecuencias, el Gobierno de los Estados Unidos de América remitirá directamente a la Unión Internacional de Telecomunicaciones los documentos de notificación necesarios, en aquellos casos en que se desee una protección internacional de interferencias. Cuando no se desee más la protección internacional de interferencias, el Gobierno de los Estados Unidos de América remitirá directamente a la Unión Internacional de Telecomunicaciones los documentos necesarios sobre notificación de la cancelación. Tales notificaciones se harán conforme a los procedimientos internacionales prevalecientes usados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Conforme a la resolución 5, adoptada por la Conferencia Internacional Administrativa de Radio celebrada en Ginebra, en 1959, los Gobiernos de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América notificarán a la Unión Internacional de Telecomunicaciones que existe un arreglo entre los Gobiernos de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América en relación con la coordinación necesaria del uso de frecuencias, arreglo que, como cuestión de conveniencia administrativa, permite a los Estados Unidos de América remitir directamente a la Unión, para fines de registro internacional, las notificaciones acerca del uso y cancelación de tales frecuencias.

Acuerdo anexo relativo a varios asuntos

Se ha convenido por este medio lo siguiente:

- (a) Las actividades de entrenamiento y coordinación referentes a

las fuerzas militares de países de América Latina que mantienen relaciones de amistad con la República de Panamá y que se lleven a cabo en el momento en que este Tratado entre en vigor, podrán continuarse por un período de diez años, contados a partir de dicha entrada en vigor, período éste que se prorrogará por plazos sucesivos de un año cada uno, a menos que cualquiera de los dos Gobiernos dé aviso al otro, con 12 meses de anticipación, de su deseo de que tales actividades cesen al final del próximo período sucesivo de un año.

- (b) El término «funciones oficiales» que aparece en el párrafo (b) del numeral (2) del artículo X de este Tratado no tiene el propósito de abarcar todos los actos de un individuo en sus horas de trabajo, pero sí tiene el propósito de abarcar únicamente aquellos actos que sean requeridos o autorizados dentro de las funciones que el individuo esté llevando a cabo por motivo de sus deberes oficiales; el concepto «funciones oficiales» si incluye cualquier deber o servicio que sea requerido o autorizado por ley, reglamento, orden superior, o por la costumbre militar; y cuando sea necesario determinar si un supuesto delito tuvo su origen en un acto u omisión durante el desempeño de las funciones oficiales, el oficial en comando del batallón (o alguien en su nombre) a que pertenezca el supuesto transgresor o los supuestos transgresores de la ley, previa recomendación del Oficial Legal o el Letrado Militar de Estado Mayor expedirá certificado al respecto que se entregará prontamente al respectivo Agente del Ministerio Público panameño, y este certificado será debidamente reconocido por las autoridades panameñas. En los casos en que el Ministro de Gobierno y Justicia de la República de Panamá estime que las circunstancias requieren mayor explicación de las funciones oficiales en cuestión, el asunto será considerado por los funcionarios competentes del gobierno de la República de Panamá y la misión diplomática de los Estados Unidos de América dentro de los diez días siguientes al recibo del certificado por el Agente del Ministerio Público.
- (c) La cooperación de que trata el numeral (3) del artículo XVIII de este Tratado incluirá cualquier acción legislativa y demás medidas necesarias por parte del Gobierno de la República de Panamá para asegurar el uso sin obstrucción de las Áreas de Defensa.
- (d) No se efectuarán inspecciones de aduana ni otras inspecciones con relación a los buques, aeronaves, vehículos y equipo a

que se refiere el numeral (2) del artículo VII de este Tratado, excepto las inspecciones que se establezcan en los procedimientos elaborados por el Comité Conjunto conforme a dicho numeral.

- (c) Queda entendido que la aprobación de la Asamblea Nacional de la República de Panamá será necesaria para dar validez a cualquier acuerdo en el sentido de proporcionar a los Estados Unidos el uso de áreas adicionales conforme al párrafo (a) del numeral (5) del artículo II de este Tratado.

• • • • •

Excelencia:

Tengo el honor de referirme al Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América Concerniente a la Defensa del Canal de Panamá y de su Neutralidad firmado hoy y al entendimiento a que han llegado nuestros dos Gobiernos en el sentido siguiente:

- (a) Durante un período por lo menos igual al señalado en el párrafo (d) de esta nota, la República de Panamá mantendrá el área conocida como Río Hato a que se refiere el artículo VIII del Tratado de Mutuo Entendimiento y Cooperación y el Memorándum de Entendimientos Acordados firmado en Panamá el 25 de enero de 1955, exclusivamente como una reserva militar de sus Fuerzas Armadas.
- (b) Dentro del área a que se refiere el párrafo (a) que antecede y por el término de este Acuerdo, los Estados Unidos de América gozarán de los mismos derechos, incluyendo el derecho de uso exclusivo cuando así lo soliciten, y estarán sujetos a las mismas obligaciones que se estipulan en el artículo VIII del Tratado de Mutuo Entendimiento y Cooperación a que se hace referencia en el párrafo anterior. El período a que se refiere el párrafo (a) de dicho artículo VIII, se considerará que no ha corrido mientras el presente acuerdo esté vigente.

La República de Panamá y los Estados Unidos de América designarán sendos representantes en una Comisión Conjunta de Río Hato, la cual será responsable del desarrollo de las actividades que se lleven a cabo conforme a este Acuerdo, del manejo de otros asuntos relacionados con el cumplimiento adecuado de los propósitos de este Acuerdo y de la adopción de las medidas de seguridad que sean necesarias.

- (d) Este Acuerdo estará en vigencia por un período de diez años, período éste que se prorrogará por periodos sucesivos de un año cada uno hasta cuando cualquiera de los dos Gobiernos dé aviso con 12 meses de anticipación de su deseo de dar por terminado el mismo al final del próximo período sucesivo de un año.

Además, tengo el honor de proponer que esta nota y la de respuesta de Vuestra Excelencia aceptando los términos de la misma constituyan un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos que entrará en vigor en la fecha en que los instrumentos de ratificación del Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América Concerniente a la Defensa del Canal de Panamá y de su Neutralidad, sean canjeados.

Acepte Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

8

Tratado del Canal a nivel del mar

ANTEPROYECTO DE TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS CONCERNIENTE A UN CANAL A NIVEL DEL MAR QUE UNA LOS OCÉANOS ATLÁNTICO Y PACÍFICO*

Texto fechado el 21 de junio de 1967
(No. 2)

ÍNDICE

PREAMBULO

ARTÍCULO I	Soberanía de Panamá. Futura concesión del uso de tierras necesarias para el Canal.
ARTÍCULO II	Concesión optativa para la construcción del Canal.
ARTÍCULO III	Construcción. Financiamiento y Tierras.
ARTÍCULO IV	La Comisión del Canal Interoceánico de Panamá; Periodo y remuneración de sus miembros. Instalación de la Comisión.
ARTÍCULO V	El Director General y el Subdirector General de la Comisión.
ARTÍCULO VI	Funciones y facultades de la Comisión.
ARTÍCULO VII	Cooperación con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
ARTÍCULO VIII	Posibilidades de internacionalizar la administración y mantenimiento del canal a nivel.
ARTÍCULO IX	Exoneraciones y privilegios de la Comisión Conjunta del Canal Interoceánico y de sus dignatarios y empleados.
ARTÍCULO X	Peajes y compensaciones para Panamá.
ARTÍCULO XI	Neutralidad del Canal a Nivel.
ARTÍCULO XII	Defensa.

* *Op. cit.*, pp. 3837-3893.

ARTÍCULO XIII	Arbitraje en caso de controversia.
ARTÍCULO XIV	Cooperación mutua para los fines del tratado y para evitar perturbaciones económica a Panamá.
ARTÍCULO XV	Ratificaciones.
ARTÍCULO XVI	Reversión del Canal a Nivel, de las tierras y de los bienes de la Comisión a la República de Panamá.
ARTÍCULO XVII	Entrada en vigor y terminación del Tratado.
ANEXO I	Tierras.
ANEXO II	Facilitación de la construcción del Canal: Trabajos de la construcción, exenciones, contratistas, Comité Conjunto.
ANEXO III	Facilitación del funcionamiento del Canal: inviolabilidad de las Oficinas de la Comisión, exenciones.

• • • • •

La República de Panamá y los Estados Unidos de América, considerando que, en vista de su posición geográfica, el territorio de la República de Panamá reúne las condiciones para la construcción de un canal a nivel del mar entre los Océanos Atlántico y Pacífico.

Considerando que la República de Panamá y los Estados Unidos han acordado explorar las rutas y estudiar los métodos apropiados para construir un canal a nivel del mar en territorio panameño que satisfaga las necesidades futuras de tránsito entre dichos océanos causadas por la expansión del comercio internacional, y

Estando dispuestos a llegar a acuerdos sobre los términos y condiciones que asegurarán la mayor efectividad en la construcción, funcionamiento, mantenimiento y seguridad de dicho canal interoceánico a nivel del mar.

Han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO I

La República de Panamá, en ejercicio de su soberanía sobre las áreas de tierra y agua que, en la forma que más adelante se estipula, han de ser positivas para los fines de la construcción, funcionamiento y mantenimiento de un canal a nivel del mar y, al amparo de sus leyes, garantiza a los Estados Unidos y a la Comisión del Canal Interoceánico de Panamá, establecida conforme al artículo IV de este Tratado, el goce pacífico de los derechos y facultades concedidos a los mismos por el presente instrumento.

ARTÍCULO II

La República de Panamá concede a los Estados Unidos de América el derecho a construir en el territorio de la República de Panamá un canal a nivel del mar que una a los océanos Atlántico y Pacífico. En caso de que los Estados Unidos de América notifiquen a la República de Panamá, dentro de veinte años, contados desde la fecha en que entre en vigor este Tratado, su intención de construir tal canal, el financiamiento, construcción, funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento del canal a nivel del mar serán llevados a cabo conforme a las estipulaciones de este Tratado.

ARTÍCULO III

- (1) Los Estados Unidos prepararán el diseño y efectuarán la construcción del canal a nivel del mar y sus obras y servicios accesorios y auxiliares (que en adelante se denominará la Obra del Canal a Nivel del Mar).
- (2) Los Estados Unidos de América suministrarán el financiamiento para la obra del canal a nivel del mar, y después de consultar con la República de Panamá, podrán ofrecer a otros Estados, organismos internacionales, entidades públicas y privadas o individuos la oportunidad de participar en dicho financiamiento. Los acuerdos pertinentes a los pagos que deban efectuarse a la República de Panamá y que se deriven del funcionamiento del canal a nivel del mar constituirán una parte esencial de los arreglos relativos al financiamiento de la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar. Tales acuerdos pertinentes a los pagos que deben efectuarse a la República de Panamá serán convenidos entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América en el momento en que se hagan los convenios para el financiamiento, tomando en cuenta los principios expresados en el numeral (2) del artículo X de este Tratado (*).
- (3) No obstante las estipulaciones del numeral (2) de este artículo, la República de Panamá podrá, de acuerdo con los Estados Unidos de América, encargarse del financiamiento del canal a nivel del mar, en cuyo caso, los dos Gobiernos harán los ajustes que sean necesarios al presente Tratado.
- (4) (a) Después de terminar la parte de los acuerdos referentes al

(*) El numeral (2) del Artículo III fue modificado según consta en la nota MNP-12/68 del 3 de enero de 1968, del Embajador Roberto L. Alemán que aparece mas adelante

financiamiento que incluya los acuerdos relativos a los pagos que deben efectuarse a la República de Panamá conforme al numeral (2) de este artículo, los Estados Unidos notificarán a la República de Panamá, por lo menos un año antes de la fecha prevista para el comienzo del trabajo, su intención de proceder a la construcción, y podrán comenzar dicho trabajo después de que haya transcurrido un año desde la fecha de tal notificación. En el momento que se efectuó la notificación de su intención de proceder a la construcción, los Estados Unidos de América notificarán a la República de Panamá acerca de los métodos que se emplearán para construir el canal a nivel del mar. Los Estados Unidos de América, igualmente, informarán a la República de Panamá, tal como se estipula en el anexo I de este Tratado, acerca de las áreas de tierra y aguas necesarias para la construcción, funcionamiento y mantenimiento de la obra del Canal a nivel del mar.

- (b) El empleo de métodos nucleares de excavación para construir el canal a nivel del mar estará sujeto a la aprobación de la República de Panamá. Si la decisión fuere la de emplear métodos nucleares de excavación, los dos Gobiernos acordarán las medidas de seguridad que deban tomarse. Tales medidas de seguridad se conformarán alas normas pertinentes establecidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica. El costo de tales medidas de seguridad, incluido el costo de evacuación y reubicación de las personas residentes en la vecindad de lugares en donde se usen dispositivos nucleares para la construcción, serán parte de los costos de construcción de la obra del canal a nivel del mar.
- (5) (a) La República de Panamá proveerá, en la forma estipulada en el anexo I de este Tratado, el uso de las áreas de tierra y agua necesarias para la construcción, funcionamiento y mantenimiento de la Obra del Canal a Nivel del Mar. La República de Panamá también proveerá el uso de las áreas de tierra y agua que sean necesarias para las medidas de seguridad contra los efectos de explosiones nucleares. La República de Panamá proveerá el uso de las áreas de tierra y agua dentro de un año contado a partir del recibo de la notificación a que se refiere el párrafo (a) del numeral (4) de este artículo y cualquiera demora ocurrida en proveer el uso de tales áreas de tierra y agua en exceso de un año, será agregada al perio-

do para el comienzo de la construcción a que se refiere el párrafo (b) del numeral (1) del Artículo XVII de este Tratado. Posteriormente y de conformidad con este Tratado:

- (i) Los Estados Unidos tendrán el uso de las áreas provistas por la República de Panamá para fines de construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar y para medidas de seguridad contra los efectos de explosiones nucleares, y
 - (ii) La Comisión del Canal Interoceánico de Panamá establecida conforme al Artículo IV de este Tratado tendrá el uso de las áreas provistas por la República de Panamá para fines del funcionamiento y mantenimiento de la Obra del Canal a Nivel del Mar.
- (b) Los Estados Unidos de América pagarán a la República de Panamá, como retribución por el uso de las áreas de tierra y agua provistas conforme a este Tratado y sobre las que existan derechos de particulares, una suma que será fijada por la Comisión Conjunta de Tierras establecida conforme al párrafo (e) de este numeral. Toda compensación de esta naturaleza pagada por los Estados Unidos de América a la República de Panamá, constituirá parte de los costos de construcción del canal a nivel del mar. El uso de todas las áreas sobre las que no existan derechos de particulares en la fecha en que se firme este Tratado será otorgado libre costo. La República de Panamá relevará a los Estados Unidos de toda responsabilidad respecto a cualquiera reclamaciones resultantes de la concesión por parte de la República de Panamá del uso de áreas de tierra y agua conforme a las estipulaciones anteriores o existentes con anterioridad al otorgamiento de tal concesión.
- (c) Las áreas de tierra y agua provistas por la República de Panamá para el uso de los Estados Unidos de América en la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar y, posteriormente, para el uso por la Comisión del Canal Interoceánico de Panamá en el funcionamiento y mantenimiento de la Obra del Canal a Nivel del Mar no serán de una extensión mayor de la necesaria para tales fines.
- (d) Los Estados Unidos de América renunciarán a favor de la República de Panamá, libre de costo, al uso de tales áreas de tierra y agua, junto con las mejoras que allí queden, en cuanto determinen que las mismas no son ya necesarias

- para la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar.
- (e) La Comisión Conjunta de Tierras a que se refiere el párrafo (b) de este numeral, será establecida de la manera siguiente: El Presidente de la República de Panamá nombrará dos miembros y el Presidente de los Estados Unidos de América nombrará dos miembros. Si la mayoría de la Comisión Conjunta de Tierras no pudiere llegar a una decisión, el asunto será sometido a un perito en avalúos de tierras, aceptable a la mayoría de la Comisión, quien determinará el monto de la compensación con fundamento en el justo valor que los derechos de particulares que resulten afectados tengan en el mercado al momento de efectuar la notificación de proceder con la construcción de conformidad con el numeral (4) de este Artículo. En caso de muerte, ausencia o incapacidad de un comisionado, o que éste dimitiera, declinara o cesara de actuar, su cargo será llenado mediante el nombramiento de otra persona en la forma arriba indicada. Los gastos de los comisionados serán compartidos, por partes iguales, por los dos gobiernos.
- (6) La República de Panamá y los Estados Unidos de América facilitarán la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar conforme a las estipulaciones del Anexo II de este Tratado.
- (7) Al completarse la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar, los Estados Unidos de América traspasarán:
- (a) A la Comisión del Canal interoceánico de Panamá, todos sus derechos y títulos sobre todos los edificios e instalaciones que los Estados Unidos de América hayan construido como parte de la Obra del Canal a Nivel del Mar y los bienes muebles provistos por los Estados Unidos para el funcionamiento y mantenimiento de la Obra del Canal a Nivel del Mar, y
- (b) A la República de Panamá, a menos que los dos Gobiernos acuerden otra cosa, todos sus derechos y títulos sobre cualquier bien usado en la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar que no sea transferido a la Comisión del Canal Interoceánico de Panamá según el párrafo (a) de este numeral o que no sea removido de la República de Panamá o traspasado a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no pagará ninguna compensación a los Estados Unidos de América por razón de ningún bien traspasado conforme a este párrafo.

ARTÍCULO IV

- (1) Una entidad jurídica internacional que será conocida como la Comisión del Canal Interoceánico de Panamá (que en adelante se llamará la «Comisión») será establecida conforme a este Artículo y será responsable por el funcionamiento y el mantenimiento de la Obra del Canal a Nivel del Mar.
- (2) El órgano directivo de la Comisión lo constituirá una Junta integrada por nueve miembros, cuatro de los cuales serán nombrados por el Presidente de la República de Panamá y cinco por el Presidente de los Estados Unidos de América. Los miembros de la Junta serán nombrados por un período de seis años, sujetos a remoción por justa causa por el Presidente del país que los nombre, quedando entendido que el período de dos de los miembros designados por cada Presidente al entrar en vigor este Tratado será solamente de tres años. Los miembros de la Junta podrán ser nombrados nuevamente.
- (3) En caso de que otros Estados, organizaciones internacionales, entidades públicas o privadas o individuos participen en el financiamiento de la Obra del Canal a Nivel del Mar, representantes de los mismos serán agregados a la Junta que se constituye en el numeral (2) de este Artículo, conforme a los términos de los acuerdos relativos al financiamiento.
- (4) Todo miembro de la Junta podrá ser representado por un suplente nombrado en la misma forma que el principal. Durante el tiempo en que desempeñe sus funciones en la Junta, el suplente tendrá las mismas facultades que el principal; recibirá compensación y asignaciones al mismo nivel que el principal y se le otorgarán los privilegios y exenciones mencionados en el numeral (4) del Artículo IX de este Tratado.
- (5) La compensación y las asignaciones de los miembros y suplentes de la Junta serán establecidas por la Junta y serán pagadas de los fondos de la Comisión.
- (6) La Junta actuará mediante el voto mayoritario de sus miembros presentes que emitan voto, siempre que haya quórum. La mayoría de los miembros constituirá el quórum de la Junta.
- (7) La Comisión será constituida y la Junta será convocada a solicitud de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América, por los menos un año antes de la fecha prevista para la apertura del canal a nivel del mar. Al abrirse el canal a nivel de mar al tránsito, la Comisión asumirá el manejo y uso de la Obra del Canal a Nivel del Mar y de las áreas de tierra y agua

provistas conforme a este Tratado para el funcionamiento y mantenimiento de la Obra del Canal a Nivel del Mar. Se considerará que el canal a nivel del mar estará abierto al tránsito en la fecha en que cualquier buque, cuyo paso esté sujeto al pago de peajes, transite por el canal a nivel del mar.

ARTÍCULO V

- (1) Habrá un Director General y un Subdirector General de la Comisión, uno de los cuales será nacional de los Estados Unidos de América y el otro nacional de la República de Panamá.
- (2) El Director General y el Subdirector General serán nombrados por la Junta por un período de 4 años; podrán ser nombrados nuevamente en sus cargos y ejercerán sus funciones hasta cuando sus sucesores tomen posesión de sus cargos, pero estarán sujetos a remoción por justa causa.
- (3) El Director General será el dignatario ejecutivo de mayor jerarquía de la Comisión y dirigirá sus negocios y actividades y administrará sus asuntos conforme a la política e instrucciones de la Junta. El Director General tendrá supervisión y autoridad generales sobre los demás dignatarios y empleados de la Comisión.
- (4) El Subdirector General reemplazará al Director General durante el tiempo en que esté vacante el cargo de Director General o en caso de ausencia temporal o incapacidad de éste y ejercerá las otras obligaciones que le sean atribuidas.

ARTÍCULO VI

La Comisión tendrá personería jurídica y, en el desempeño de sus funciones conforme a los términos de este Tratado, tendrá el derecho y la facultad de hacer lo siguiente:

- (a) Manejar y mantener la Obra del Canal a Nivel del Mar y efectuar mejoras y adiciones a la misma;
- (b) Tomar todas las medidas referentes a la seguridad de los buques y reglamentar la navegación y toda actividad que pueda interferir con la misma en la Obra del Canal a Nivel del Mar, en los accesos marítimos a la misma desde las aguas profundas hasta el canal a nivel del mar, en las dársenas retardadoras de mareas y en las áreas destinadas al anclaje que sean usadas en el funcionamiento del canal a nivel del mar;
- (c) Establecer, modificar y recaudar peajes y otros gravámenes por el uso de la Obra del Canal a Nivel del Mar de conformidad con este Tratado;

- (d) Pagar por los gastos de administración y efectuar otros desembolsos de conformidad con lo dispuesto en este Tratado;
- (e) (i) Celebrar contratos; (ii) administrar y manejar todos sus derechos de propiedad y otros activos; (iii) solicitar dinero en préstamos y expedir los documentos en que consten sus obligaciones, comparecer en juicio, como demandante o demandada, excepto que la Comisión, sus miembros, dignatarios y empleados no podrán ser demandados en juicios relacionados con el establecimiento, modificación o cobro de peajes u otras cargas relativas al tránsito de naves por el canal a nivel del mar; comprar, vender y de cualquiera otra manera adquirir, arrendar y disponer de bienes; pero con la salvedad de que la Comisión no tendrá el derecho y la facultad de enajenar sus derechos sobre las áreas de tierra o agua suministradas por la República de Panamá conforme a los numerales (4) y (5) del Artículo III de este Tratado, o sobre los edificios y obras traspasados a la Comisión conforme al párrafo (a) del numeral (7) del Artículo III de este Tratado, excepto con el consentimiento de la República de Panamá;
- (f) Nombrar y remover los dignatarios y empleados de la Comisión y determinar sus facultades y deberes; así como establecer reglamentos de trabajo y las condiciones y requisitos de empleo y de servicio de sus dignatarios y empleados;
- (g) Suministrar a los barcos todos los servicios relacionados con el tránsito por el canal a nivel del mar, efectuar reparaciones a los barcos y suministrar las provisiones navales incidentales a dichas reparaciones, y vender agua, combustibles y lubricante a las naves, quedando entendido que será la política de la Comisión la de procurar, cuando ello sea factible, que tales servicios sean prestados por la empresa privada;
- (h) Mantener y manejar las instalaciones y los servicios del canal a nivel del mar relativos a la navegación, abastecimiento de agua y control de inundaciones y efectuar mejoras y adiciones a tales instalaciones y servicios;
- (j) Adquirir mantener y manejar buques, aeronaves y vehículos a motor:
 - (i) Construir o adquirir, establecer, mantener y manejar o suministrar, para el uso y sostén de la obra del Canal a nivel del Mar, las instalaciones y los servicios necesarios para fines de administración; de administración; de comunicación; de transporte; de mantenimiento y reparación; de

construcción; de abastecimiento; de suministro de energía eléctrica; agua potable y otros servicios similares; así como servicios de protección contra incendios:

- (ii) Construir o adquirir, establecer, mantener y manejar o proveer para sus dignatarios, empleados y sus dependientes, instalaciones y servicios para fines educativos y de salud pública, sanidad y hospitalización;
- (iii) Construir o adquirir, establecer, mantener y manejar o proveer, para sus dignatarios, empleados y sus dependientes, instalaciones y servicios de vivienda, abastos y recreo; pero queda entendido, sin embargo, que la Comisión obtendrá tales instalaciones y servicios de la República de Panamá o de fuentes privadas dentro de ella, cuando los miembros puedan obtenerse en calidad que sea satisfactoria para la Comisión y a un costo que no sea mayor que el costo de su prestación por parte de la propia Comisión, y
- (iv) suministrar cualquiera de las instalaciones y servicios, mencionados en los párrafos j (i), (ii) y (iii) anteriores, a la República de Panamá o a los Estados Unidos de América o a cualquiera de sus respectivas dependencias bajo los términos y condiciones que sean acordados por las partes interesadas;
- (k) Adoptar medidas para proteger la Obra del Canal a Nivel del Mar, las cuales deben conformarse y coordinarse con las medidas adoptadas por la República de Panamá para hacer cumplir la ley en la Obra del Canal a Nivel del Mar y con las medidas de defensa y seguridad estipuladas en el Artículo XII de este Tratado. La República de Panamá tendrá la responsabilidad de hacer cumplir la ley en la Obra del Canal a Nivel del Mar;
- (l) Adoptar y administrar todos los reglamentos internos y reglas y desempeñar cualesquiera funciones necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos y facultades señalados en este Artículo, y
- (m) Ejercer cualquiera otra función de acuerdo con lo que se convenga entre las autoridades competentes de la República de Panamá y la Comisión.

ARTÍCULO VII

- (1) La República de Panamá concede a la Comisión el derecho y la facultad de celebrar acuerdos con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América en relación con lo siguiente:

- (a) El uso por parte de la Comisión de las Áreas de Defensa provistas a las Fuerzas Armadas de acuerdo con las estipulaciones del Tratado Concerniente a la Defensa del Canal de Panamá y de su Neutralidad firmado en esta fecha entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América y el uso por parte de las Fuerzas Armadas de las instalaciones y áreas manejadas por la Comisión de acuerdo con las estipulaciones de este Tratado, siempre y cuando que el status señalado a tales áreas por medio de los tratados celebrados por ambos países no sea alterado;
 - (b) el suministro de cualquiera de las instalaciones y servicios que puedan ser mantenidos por la Comisión de acuerdo con las estipulaciones de los párrafos(j) (i) y (j) (ii) del Artículo VI de este Tratado.
- (2) La Comisión y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cooperarán para facilitar el cumplimiento de sus respectivas misiones de acuerdo con los términos de este Tratado y los del Tratado Concerniente a la Defensa del Canal de Panamá y de su Neutralidad, celebrado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América en esta misma fecha, y a tal fin celebrarán arreglos mutuamente satisfactorios para prestarse ayuda recíproca. Tales arreglos podrán incluir disposiciones relativas al pago de cargas razonables.

ARTÍCULO VIII

No obstante lo dispuesto en el Artículo IV de este Tratado, con anterioridad a la fecha en que, según se dispone en el Artículo III de este Tratado, se formalicen los acuerdos relativos al financiamiento de la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar, la República de Panamá y los Estados Unidos de América podrán acordar el establecimiento de una organización multinacional que asuma la responsabilidad de manejar y mantener la Obra del Canal a Nivel del Mar. En caso de que se celebre tal acuerdo, la referida organización ejercerá los derechos y facultades, desempeñará las funciones y gozará de los privilegios y exenciones que mediante este Tratado se le asignan a la Comisión del Canal Interoceánico de Panamá.

ARTÍCULO IX

- (1) (a) La República de Panamá conviene en que ella y las divisiones políticas de la misma no gravarán con impuestos, de-

réchos u otras cargas: la Obra del Canal a Nivel del Mar; las áreas de tierras y agua cuyo uso se concede a la Comisión de acuerdo con las estipulaciones de este Tratado; la Comisión o sus actividades y servicios; las instalaciones, edificios, materiales, equipos, abastos y otros bienes adquiridos o usados por la Comisión en el ejercicio de los derechos y las facultades que se le señalan en este Tratado; los buques y sus cargas, tripulaciones y pasajeros que pasen por el canal a nivel del mar o el uso por parte de buques o sus tripulaciones y pasajeros de las instalaciones o de los servicios prestados por la Comisión. Los dignatarios, empleados y contratistas de la Comisión y los empleados de tales contratistas no estarán exentos del pago de impuestos, derechos y otras cargas, excepto en los casos en que así se especifique en este Tratado. La Comisión pagará al fondo de seguridad social de la República de Panamá las sumas por las cuales sea responsable en relación con aquellos empleados suyos que sean amparados por las disposiciones de las leyes sobre seguridad social de la República de Panamá; además, con respecto a las instalaciones y servicios prestados de acuerdo con las estipulaciones del párrafo j (iii) del Artículo VI de este Tratado, la Comisión pagará a las autoridades de la República de Panamá las cantidades equivalentes a los impuestos, derechos y otras cargas por los cuales la Comisión sería responsable si su situación fuese la de una sociedad anónima comercial ordinaria establecida en la República de Panamá.

- (b) La República de Panamá conviene en que ella y las divisiones políticas de la misma no gravarán con impuestos, derechos u otras cargas los materiales, equipos, abastos y otros bienes, excepto los bienes inmuebles, que sean de propiedad de los contratistas de la Comisión y que sean usados por tales contratistas exclusivamente en relación con trabajos efectuados para la Comisión o para beneficio de ésta.
- (2) La República de Panamá permitirá a la Comisión y a sus contratistas, importar y exportar libre de derecho de aduana, impuestos, derechos o de otras cargas y libres de la obtención de licencias de importación cualesquiera materiales, equipos, abastos u otros artículos que hayan sido usados en el ejercicio de los derechos y las facultades conferidos a la Comisión de acuerdo

con las disposiciones de este Tratado, excepto que la Comisión y sus contratistas obtendrán bienes cultivados, o desarrollados, extraídos de minas, producidos, fabricados o ensamblados en la República de Panamá, o bienes de origen de los Estados Unidos de América que puedan obtenerse en la República de Panamá, cuando la calidad de los mismos sea satisfactoria a la Comisión y el costo de tales bienes para la Comisión, entregados en Panamá, no sea mayor que el de obtenerlos en los Estados Unidos de América.

- (3) El traspaso, dentro de la República de Panamá, por parte de la Comisión o de sus contratistas a cualquier persona (excepto si se trata de traspaso a la República de Panamá o a los Estados Unidos de América o a sus respectivas dependencias) de materiales, equipos, abastos y otros bienes importados de acuerdo con las estipulaciones del numeral (2) de este Artículo, será considerado como una importación del bien objeto del traspaso efectuado del país de origen en la fecha en que se haga el traspaso al adquiriente y éste estará obligado a pagar a la República de Panamá los derechos de aduana y otras cargas que graven la importación del bien adquirido y, si los derechos de importación u otras cargas son fijados ad valorem, los mismos se determinarán a base del valor del bien objeto de la venta en la fecha del traspaso.
- (4) La Comisión, los miembros de la Junta, el Director General, el Subdirector General y los dignatarios y empleados de la Comisión (y sus dependientes) gozarán de los privilegios y exenciones estipulados en el Anexo III de este Tratado.
- (5) La República de Panamá no expedirá ni hará cumplir ninguna ley que, en forma alguna, discrimine contra la Comisión o contra personas que participen en la construcción, funcionamiento, mantenimiento o mejora de la Obra del Canal a Nivel del Mar o bienes que se utilicen para tales fines.
- (6) Las autoridades de la República de Panamá no autorizarán el uso de las áreas de tierra y agua suministradas por la República de Panamá, de acuerdo con las estipulaciones del Artículo III de este Tratado, para los fines del funcionamiento y mantenimiento de la Obra del Canal a Nivel del Mar ni permitirán el desarrollo de actividades de ninguna clase dentro de dichas áreas, excepto de acuerdo con la Comisión; no obstante cuando ello pueda hacerse sin obstruir el funcionamiento y mantenimiento de la Obra del Canal a Nivel del Mar, o los planes

para mejorar o adicionar la misma, o sin obstruir su defensa, la Comisión no negará su consentimiento al desarrollo de actividades propuestas que sean beneficiosas para el crecimiento y desarrollo económicos de la República de Panamá.

ARTÍCULO X

- (1) La Comisión podrá establecer, modificar y cobrar derechos de peaje y cargas afines relativos al tránsito por el canal al nivel del mar de las naves y sus cargamentos, de conformidad con este Tratado y con los arreglos sobre financiamiento que se hayan celebrado de acuerdo con el Artículo III de este Tratado.
- (2) Al recordar los pagos que, de acuerdo con las estipulaciones del numeral (2) del Artículo III de este Tratado, habrán de hacerse a la República de Panamá, se tendrán en cuenta los siguientes principios:
 - (a) Se dará debido reconocimiento al aporte del uso de su territorio hecho por la República de Panamá para los fines de la construcción y el funcionamiento del canal a nivel del mar y a los recursos aportados por otros estados, organizaciones, individuos o entidades para tales fines;
 - (b) el canal a nivel del mar será manejado como una explotación comercial; los peajes serán equitativos y se fundamentarán en un criterio justo y razonable; los intereses del comercio mundial serán considerados y el canal a nivel del mar será manejado eficientemente y los gastos de funcionamiento serán mantenidos al mínimo, y
 - (c) habrá una justa y equitativa distribución de los ingresos entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América y aquellos otros Estados, organizaciones, individuos o entidades que contribuyan con sus recursos a la construcción y funcionamiento del canal.

ARTÍCULO XI

- (1) La República de Panamá declara la neutralidad del canal a nivel del mar.
- (2) La República de Panamá y los Estados Unidos de América convienen en que la neutralidad del canal a nivel del mar; así como la de sus entradas y aguas territoriales adyacentes a las mismas, será mantenida de acuerdo con los principios que han regido al Canal de Panamá desde su apertura.
- (3) El canal a nivel del mar; así como sus entradas y aguas terri-

teriales adyacentes a las mismas, estarán abiertos y libres a los buques de comercio y de guerra de todas las naciones, en términos de completa igualdad y sin discriminación alguna, con sujeción a:

- (a) El pago de los peajes y tasas aplicables.
 - (b) el cumplimiento con las normas y reglamentos aplicables, inclusive aquellas normas y reglamentos que puedan establecerse en tiempo de guerra u otra emergencia, y
 - (c) la obligación de que las naves que usen el canal a nivel del mar no cometan actos de hostilidad en el mismo o en sus entradas o aguas territoriales adyacentes a dichas entradas.
- (4) No obstante cualesquiera otras estipulaciones de este Tratado la República de Panamá y los Estados Unidos de América tendrán derecho en todo momento a que transmiten el canal a nivel del mar los buques (inclusive buques de guerra) que sean de su propiedad o que sean manejados o fletados por dichos países, siempre que sean usados para fines no comerciales, así como las cargas a bordo de los mismos. Tales buques estarán sujetos al pago de los peajes establecidos por la Comisión, pero el pago de tales peajes se hará deduciendo su monto de las sumas que de acuerdo con las estipulaciones de este Tratado se adueñen al país que sea propietario de tales buques o maneje o haya fletado los mismos. Para los fines señalados en el Artículo XII de este Tratado, tales buques tendrán derecho a usar el canal a nivel del mar con prioridad.

ARTÍCULO XII

La República de Panamá y los Estados Unidos de América proveerán lo relativo a la defensa, seguridad, neutralidad y continuidad del funcionamiento del canal a nivel del mar, de la navegación en el mismo y de las obras y servicios accesorios y auxiliares del canal. A tal fin, la República de Panamá y los Estados Unidos de América han firmado en esta fecha un Tratado Concerniente a la Defensa del Canal de Panamá y de su Neutralidad.

ARTÍCULO XIII

- (1) Toda controversia entre los dos Gobiernos relativa a la interpretación o aplicación de este Tratado, la validez de los actos de la Comisión o las omisiones por parte de la Comisión que no sea resuelta mediante la negociación directa, será sometida a arbitraje a solicitud de cualquiera de los dos Gobiernos, de

acuerdo con el procedimiento aquí indicado.

- (2) El arbitraje será efectuado por un tribunal de tres árbitros nombrados como sigue:
 - (a) Cada gobierno nombrará un árbitro dentro del mes siguiente a la fecha en la cual uno de los dos Gobiernos haya hecho entrega al otro de una solicitud de arbitraje. Dentro del mes siguiente a la fecha en que ambos árbitros hayan sido nombrados, los dos árbitros así designados nombrarán a un tercer árbitro, entendiéndose que el mismo no será nacional ni de la República de Panamá ni de los Estados Unidos.
 - (b) Si cualquiera de los Gobiernos dejare de designar un árbitro, o si no se llegare a un acuerdo respecto al tercer árbitro que debe ser designado según se estipula en el párrafo (a) de este numeral, cualquiera de los Gobiernos podrá solicitar a la Corte Internacional de Justicia que designe al árbitro o los árbitros que hagan falta; en caso de que la Corte Internacional de Justicia decline actuar al respecto, la solicitud podrá ser presentada al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos o al Presidente del Consejo de dicha Organización, salvo que la persona a quien se le presente tal solicitud no podrá ser nacional de la República de Panamá ni de los Estados Unidos de América.
- (3) Los gastos del tribunal arbitral, incluyendo los honorarios y gastos de los árbitros, serán compartidos igualmente por los dos Gobiernos.
- (4) Todas las decisiones del tribunal arbitral serán definitivas y obligatorias para la República de Panamá y los Estados Unidos de América y la Comisión.

Nota—: De acuerdo con la Nota MNP-12/68 del 3 de enero de 1968, firmada por el Embajador Roberto R. Alemán, al Artículo XIII se añadió un numeral (5) que quedará así:

- (5) El procedimiento arbitral a que se refiere este Artículo no se aplicará a la concertación de acuerdos, incluyendo los relativos a los pagos que deben efectuarse a la República de Panamá de acuerdo con las estipulaciones del numeral (2) del Artículo III y del Artículo X de este Tratado y a la concertación de acuerdos relativos al uso de excavaciones mediante el empleo de explosivos nucleares, de acuerdo con las estipulaciones del numeral (4) del Artículo III del Tratado.

ARTÍCULO XIV

- (1) La Administración Conjunta del Canal de Panamá establecida de acuerdo con las estipulaciones del Tratado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América Concerniente al Canal de Panamá, firmado en esta fecha, cooperará con la República de Panamá, con los Estados Unidos de América y con la Comisión para facilitar el cumplimiento de los propósitos de este Tratado y, en especial, para facilitar el uso conjunto de las áreas de tierra y agua e instalaciones, así como el acceso a las mismas, que resulte necesario utilizar para los fines de la construcción del canal a nivel concurrentemente con su uso para los fines del funcionamiento del Canal de Panamá. La Administración podrá traspasar a la Comisión las instalaciones y otros bienes necesarios para el funcionamiento y el mantenimiento de la Obra del Canal a Nivel del Mar. Si la República de Panamá no estuviere de acuerdo con la necesidad de tal traspaso, la determinación de tal necesidad será hecha por peritos nombrados por la República de Panamá y los Estados Unidos de América, cada uno de los cuales nombrará dos peritos para tal fin.
- (2) Los Estados Unidos de América cooperarán con la República de Panamá y la ayudarán a resolver los desajustes económicos que puedan ser causados por la construcción o el funcionamiento de un canal a nivel del mar de acuerdo con las estipulaciones de este Tratado. A fin de que se de cumplimiento a esta obligación, los dos Gobiernos se consultarán de cuando en cuando, según ello fuere necesario.

ARTÍCULO XV

Este Tratado será ratificado de acuerdo con los procedimientos constitucionales de los dos Gobiernos. El canje de los instrumentos de ratificación se efectuará en la ciudad de Panamá tan pronto como sea posible.

ARTÍCULO XVI

A la terminación de este Tratado, todos los derechos relativos al uso de las áreas de tierra y agua suministradas por la República de Panamá, de acuerdo con las estipulaciones del Artículo III de este Tratado, que entonces subsistan, revertirán a la República de Panamá; la Obra del Canal a Nivel del Mar pasará al manejo exclusivo de la República de Panamá y todos los bienes de la Comisión serán

de propiedad de la República de Panamá; quedando entendido que las estipulaciones anteriores no implican el pago de retribución alguna por parte de la República de Panamá; quedando entendido, además, que la República de Panamá liberará a los Estados Unidos de América con respecto a cualquiera reclamación que pueda ser presentada por terceras personas relativa a la reversión y traspaso a la República de Panamá de que trata este Artículo. La República de Panamá asumirá el activo y el pasivo de la Comisión, y la Comisión cooperará con miras a disponer lo conducente para arreglar tal traspaso en forma ordenada así como el traspaso ordenado a la República de Panamá de las funciones relativas al funcionamiento y mantenimiento de la Obra del Canal a Nivel del Mar.

ARTÍCULO XVII

(1) Este Tratado entrará en vigor en la fecha de canje de ratificaciones y continuará en Vigencia durante un período de 60 años que se contará desde la fecha en que el Canal a Nivel del Mar sea abierto al tránsito; queda entendido que este periodo no se extenderá más allá del día 31 de diciembre del año 2067, sujeto a las siguientes excepciones:

- (a) Este Tratado expresará cuando haya transcurrido un período de 20 años que se contará a partir de la fecha de su entrada en vigor si, durante tal período de 20 años, los Estados Unidos de América no hubieren notificado, por escrito, a la República de Panamá su intención de construir un canal a nivel del mar que una los océanos Atlántico y Pacífico en la República de Panamá de acuerdo con las estipulaciones de este Tratado; además, este Tratado expirará en cualquier momento en que los Estados Unidos de América notifiquen por escrito a la República de Panamá que han decidido no construir un canal a nivel del mar de acuerdo con las estipulaciones de este Tratado;
- (b) con excepción de lo dispuesto en el párrafo (a) del numeral (5) del Artículo III de este Tratado, este Tratado también terminará si los Estados Unidos de América no hubieren iniciado la construcción de un canal a nivel del mar que una los océanos Atlántico y Pacífico en la República de Panamá, dentro del período de 5 años siguiente a la fecha en la cual los Estados Unidos de América hubieren notificado a la construcción de conformidad con las estipulaciones de este Tratado;

- (c) este Tratado también terminará si los Estados Unidos de América no hubieren completado la construcción del canal a nivel del mar dentro del periodo de 15 años siguiente a la fecha en que hubieren iniciado su construcción. Sin embargo, en caso de que surgieren dificultades u obstáculos imprevistos en la construcción del canal, los plazos señalados en este Artículo serán prorrogados por el periodo adicional para completar la construcción del canal que se determine como necesario por acuerdo entre un número igual de peritos nombrados respectivamente por la República de Panamá y por los Estados Unidos de América.
- (2) No obstante las estipulaciones del numeral (1) de este Artículo, la República de Panamá y los Estados Unidos de América podrán acordar la revisión de la fecha fijada para la terminación de este Tratado con el objeto de dar debida consideración a las circunstancias especiales que surjan debido a las características de la ruta escogida, el método de construcción y el financiamiento de la Obra del Canal a Nivel del Mar.
- (3) Hasta cuando los Estados Unidos de América efectúen la notificación a la República de Panamá conforme a las estipulaciones del Artículo II de este Tratado o del párrafo (a) del numeral (1) de este Artículo, los Estados Unidos de América se abstendrán de construir un canal que una los océanos Atlántico y Pacífico en cualquier país que no sea la República de Panamá o de celebrar acuerdos relativos a tal construcción, y la República de Panamá o de celebrar acuerdos relativos a tal construcción, la República de Panamá se abstendrá de construir un canal en territorio o de celebrar con terceros países o cualesquiera personas, ya sean jurídicas o naturales, acuerdos relativos a la construcción de un canal en su territorio.

Este Tratado se extiende simultáneamente en español e inglés y las Altas Partes Contratantes convienen en que en la interpretación de cualquiera de sus estipulaciones el texto en español y el texto en inglés se consideraran igualmente válidos.

FIRMADO EN WASHINGTON ESTE DÍA 21 DE JUNIO DE 1967

ANEXO I

ÁREAS

- (1) Las áreas de tierra y agua cuyo uso será suministrado para los fines de la construcción de un canal a nivel del mar serán designadas en la forma que más adelante se estipula y de conformidad con las disposiciones del párrafo (c) del numeral (5) del Artículo III de este Tratado, dentro de las siguientes áreas de la República de Panamá:
 - (a) Las áreas situadas dentro de los linderos de la Zona del Canal que fue establecida de acuerdo con las estipulaciones del Tratado celebrado entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América del día 18 de noviembre de 1903, y sus enmiendas, y que sean designadas por los Estados Unidos de América como necesarias para los fines de construcción;
 - (b) Las áreas de tierra y agua situadas principalmente al Oeste de la Zona del Canal y en la vecindad de la misma que, con fundamento en el plano de construcción preparado por los Estados Unidos de América, sean necesarias para los fines de construcción; la extensión de tales áreas será determinada por peritos designados en igual número por la República de Panamá y por los Estados Unidos de América;
 - (c) Las áreas designadas por los Estados Unidos de América como necesarias para los fines de construcción y que están situadas dentro del área que en una distancia de 25 millas se extiende en dirección noroeste y del área que una distancia de 15 millas se extiende en dirección suroeste, distancia que se miden, respectivamente, desde el punto más cercano, al eje del canal a nivel del mar que se proyecte construir en el sitio conocido como la ruta 17. La República de Panamá y los Estados Unidos de América reconocen que la localización de la ruta 17 no se habrá determinado en forma precisa en la fecha en que este Tratado entre en vigor. El eje de la referida ruta 17 se define provisionalmente como una línea que se extiende desde un punto situado en la extremidad este de la Punta Sasardi y corre desde dicho punto en dirección sur 58 grados oeste por una distancia de 21 millas, de allí sigue en dirección sur 27 grados oeste al Golfo de San Miguel y a las extensiones de esta línea hacia el Mar Caribe y el Golfo de San Miguel

hasta la distancia en la cual la profundidad del agua es de 100 pies bajo el nivel de la media marea, o hasta una distancia de 3 millas náuticas, de esta dos últimas distancias la que resulte mayor; y

- (d) Las áreas situadas principalmente en la región del Darién de la República de Panamá que, en adición a las mencionadas en el párrafo (c) de este numeral, sean designadas por un número de expertos nombrados en igual número por la República de Panamá y por los Estados Unidos de América como áreas necesarias para construir edificios, campamentos de construcción, instalaciones de mantenimiento, pista de aterrizaje, caminos, instalaciones para el control de inundaciones y otras instalaciones determinadas que sean necesarias para los fines de construcción.
- (2) Las áreas de tierra y agua cuyo uso será suministrado para los fines del funcionamiento y mantenimiento de la obra del Canal a Nivel del Mar de acuerdo con la estipulaciones del Artículo III de este Tratado serán designada por los Estados Unidos de América dentro de una faja de tierra que se extenderá a lo largo de un kilómetro medido desde los puntos más altos del talud que resulte a cada lado del canal al nivel del mar como consecuencia de los trabajos de excavación; entendiéndose que la República de Panamá suministrará el uso de las áreas adicionales que peritos nombrados en igual uso por la República de Panamá y los Estados Unidos de América señalen, como necesarias para construir edificios, instalaciones de mantenimiento, pistas de aterrizaje, caminos, instalaciones para el control de inundaciones y otros fines específicos relativos al funcionamiento y mantenimiento de la Obra del Canal a Nivel del Mar.
 - (3) Si surgiere alguna controversia entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América relativa a la cuestión de si un área designada para los fines de construcción, funcionamiento o mantenimiento de la Obra del Canal a Nivel del Mar es necesaria o es mayor de lo necesarios para tales fines, el asunto podrá ser sometido a arbitraje de acuerdo con las estipulaciones del Artículo XIII de este Tratado; entendiéndose que en tal caso, el período fijado para la construcción se extenderá durante un período igual al período requerido para la tramitación del arbitraje.

ANEXO II

FACILITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

La República de Panamá y los Estados Unidos de América facilitarán en toda forma la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar y, en especial:

- (1) Los Estados Unidos de América construirán la Obra del Canal a Nivel del Mar y los edificios, instalaciones y otras obras necesarias para la construcción, funcionamiento y mantenimiento de la Obra del Canal a Nivel del Mar conforme a sus planos y especificaciones. Las obras existentes dentro de las áreas de tierra y agua provistas de acuerdo con este Tratado podrán ser utilizadas en el cumplimiento de la obligación de los Estados Unidos de América a que se refiere este numeral. Las áreas de trabajo deberán dejarse en condiciones adecuadas de seguridad que permitan su uso para los fines que se les daba con anterioridad al comienzo de los trabajos de construcción.
- (2) La República de Panamá conviene en no gravar con impuestos, derechos u otras cargas: Las áreas de tierra y agua provistas de acuerdo con este Tratado; los edificios, instalaciones, materiales, equipos, abastos y otros bienes que sean incorporados a la Obra del Canal a Nivel del Mar o usados en tal construcción; a los Estados Unidos de América y a las actividades de construcción que dicho país desarrolle y, con excepción de lo que más adelante se dispone en este numeral, a los contratistas designados de los Estados Unidos de América cuya presencia en la República de Panamá se deba exclusivamente a los fines de dar cumplimiento a contratos relacionados con la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar, o a sus actividades y servicios de construcción desarrollados en beneficio de los Estados Unidos de América o para dicho país, de acuerdo con los términos de tales contratos. Los referidos contratistas quedarán exentos de las obligaciones señaladas por las leyes y reglamentos de la República de Panamá relativas a la obtención de licencias y patentes comerciales, excepto que la República de Panamá podrá requerir que se presente, para su registro, la documentación para acreditar su presencia legal en la República de Panamá. La designación a que se refiere este numeral la harán los Estados Unidos de América y se limitará a los casos en que, como resultado de limitaciones impuestas por las leyes y reglamentos de los Estados Unidos, no sea factible la adjudicación.

cación del contrato mediante licitación pública o aquellos casos en los cuales medie la licitación pública pero la prestación de los servicios en beneficio de los Estados Unidos de América o para dicho país a que se refiere el contrato no pueda obtenerse en la República de Panamá. Las designaciones de contratistas a que se refiere este numeral deberán limitarse a las personas que sean ordinariamente residentes en los Estados Unidos de América (en el caso de sociedades anónimas, las organizaciones de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos de América); sin embargo, los contratistas de terceros países podrán ser designados como tales cuando los servicios que de acuerdo con los términos del contrato deban prestarse a los Estados Unidos de América o en beneficio de dicho país no puedan obtenerse en la República de Panamá. la designación de contratistas será retirada por el gobierno de los Estados Unidos de América en los siguientes casos:

- (a) Cuando se hayan cumplidos los contratos celebrados con los Estados Unidos de América relativos a la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar;
 - (b) Cuando se compruebe que tales contratistas están dedicados a actividades de negocios en la República de Panamá distintas a las relacionadas con los trabajos de construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar, o
 - (c) Cuando tales contratistas se dediquen a cualquier actividad ilegal en la República de Panamá. Ninguna estipulación de este numeral impedirá que la República de Panamá grave los bienes inmuebles pertenecientes a contratistas de los Estados Unidos de América o arrendados por ellos, ya se trate o no de contratistas designados.
- (3) La República de Panamá conviene en permitir y facilitar la entrada expedita a su territorio y salida del mismo de todas las personas (y sus dependientes) que sean contratadas para servir en la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar. Tales personas no tendrán obligación de registrarse como extranjeros residentes en la República de Panamá pero no adquirirán ningún derecho al domicilio o a la residencia permanente en la República de Panamá. Dichas personas gozarán de la libertad de tránsito dentro de la República de Panamá. Al terminar la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar, los Estados Unidos de América, si así solicitare la República de Panamá, tomarán las medidas del caso para facilitar el trans-

porte, con el objeto de que salgan del territorio de la República de Panamá, a todas las personas que hayan entrado a dicha República de acuerdo con este numeral; tal transporte será facilitado sin costo alguno para la República de Panamá, si con anterioridad a la terminación de este Tratado, el status de cualquier persona que haya entrado al territorio de la República de Panamá de acuerdo con este numeral se hubiese cambiado de manera que dicha persona no tuviera ya derecho a tal entrada, los Estados Unidos de América lo notificarán a la República de Panamá y si, transcurrido un tiempo razonable desde la fecha de tal notificación, la República de Panamá solicitare que tal persona salga de su territorio, los Estados Unidos tomarán las medidas del caso para facilitar el transporte necesario para que tal persona salga del territorio de la República de Panamá sin costo alguno para la República de Panamá.

- (4) La República de Panamá, cuando así lo solicitaren los Estados Unidos de América, extenderá visas a las personas que soliciten entrar a la República de Panamá para prestar sus servicios en la construcción del Canal a Nivel del Mar.

La República de Panamá conviene en permitir y facilitar la importación expedita a su territorio y salida del mismo, libre del pago de derechos de aduana, derechos, impuestos y otras cargas, de los materiales; equipos, con inclusión de vehículos, buques y aeronaves; abastos y otros bienes usados en la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar que sean importados por los Estados Unidos de América a sus contratistas o para el beneficio o el uso de los Estados Unidos de América o sus contratistas; la importación y exportación de tales bienes no quedará sujeta a la obtención de licencias. Sin embargo, los Estados Unidos de América y sus contratistas obtendrán tales bienes en la República de Panamá cuando la calidad de los mismos sean satisfactorias a los Estados Unidos de América y sus contratistas y el costo de los mismos no sean mayor que el costo de obtenerlos en algún otro país. La República de Panamá y las divisiones políticas de la misma que gocen de facultad para imponer impuestos se abstendrán de gravar con impuestos o derechos cuya incidencia sobre el costo del bien o servicio objeto del mismo sea fácil de determinar, tales como impuestos sobre las ventas, impuestos de producción, impuestos sobre consumo y otros impuestos o derechos similares, los bienes, servicios o materiales adquiridos o contratados en la

República de Panamá por el gobierno de los Estados Unidos de América o sus contratistas o para el beneficio o el uso del mismo o sus contratistas, cuando tal adquisición o contratación se haya hecho para los fines de este Tratado. Las exenciones aquí concedidas no se extenderán en ningún caso, a las incidencias que el impuesto sobre la renta de la República de Panamá o las contribuciones por concepto de seguridad social puedan tener sobre los precios cobrados por los abastecedores de tales bienes, servicios o materiales.

- (6) Los Estados Unidos de América convienen en cooperar con la República de Panamá a fin de que esta logre los máximos beneficios económicos derivables de la construcción de un canal a nivel del mar de acuerdo con las estipulaciones de este Tratado. A este fin, ambos gobiernos procurarán
 - (a) De conformidad con el numeral (5) de este Anexo, lograr el uso máximo de bienes y servicios de origen panameño, ya sea mediante la utilización de las facilidades de producción que existan en la República de Panamá o mediante la promoción del desarrollo de facilidades adicionales, y
 - (b) De conformidad con normas sanas y económicas seguida en la industria de la construcción, planificar la construcción del Canal a nivel del Mar y el empleo de la mano de obra en forma tal que reduzca al mínimo posible la contracción que ha de producir en la economía la terminación de los trabajos de construcción.
- (7) El personal, equipo, incluido los vehículos, buques y aeronaves, y materiales, abastos y otros bienes relacionados con la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar podrán entrar a las áreas de trabajo y otras áreas de la República de Panamá que se utilicen como auxiliares de los trabajos de construcción y transitar libremente entre ellas y salir de las mismas. Los empleados que presten sus servicios en los trabajos de construcción, que no sean nacionales de la República de Panamá, que no sean ordinariamente residentes de la misma, y que se encuentren en la República de Panamá exclusivamente en relación con los servicios que presten a la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar no estarán sujetos a los reglamentos de la República de Panamá relativos a la obtención de permisos o licencias para ejercer sus profesiones con respecto al trabajo que desempeñan, o los servicios que rinda, en relación con la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar.

- (8) Los empleados civiles de los Estados Unidos de América que sean nacionales de ese país, que no sean ordinariamente residentes de la República de Panamá y que se encuentren en la República de Panamá exclusivamente en relación con los trabajos de construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar, y sus dependientes, disfrutarán de los siguientes derechos en la República de Panamá:
- (a) Libertad de acceso y tránsito entre sus lugares de empleo y residencia y los puertos y aeropuertos de la República de Panamá, y entre los puertos y aeropuertos y puntos situados fuera de la República de Panamá, y tal acceso será libre de costo para los Estados Unidos de América;
 - (b) Exención de la obligación de tomar las medidas legales necesarias para establecer su residencia en la República de Panamá o para registrarse como extranjeros residentes en el país; tales personas no adquirirán derechos a que se les consideren como residentes permanentes o domiciliados en la República de Panamá;
 - (c) Exención del pago de cualquier impuesto a la República de Panamá, o a cualquier división política de la misma, sobre la renta proveniente de sus servicios o empleos relativos a la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar;
 - (d) Exoneración del pago de los derechos de aduanas, derechos, impuestos y otras cargas sobre el mobiliario, utensilios domésticos y efectos personales, incluido los vehículos y partes de los mismos, que sean importados a la República de Panamá para su uso personal o exportados de dicha República, cuando los empleados que sean propietarios de los mismos lleguen por primera vez a prestar sus servicios a la República de Panamá, o dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de su llegada, y
 - (e) Exención de las leyes de seguridad social de la República de Panamá así como de las leyes y reglamentos relativos a los términos y condiciones de empleo.
- (9) Los contratistas designados de los Estados Unidos de América y sus empleados gozarán de los derechos señalados en el numeral (8) de este Anexo, pero los empleados de los contratistas no estarán exentos del pago de impuestos sobre la renta a que se refiere el párrafo (c) del mismo.
- (10) Los Estados Unidos de América y sus contratistas podrán establecer, mantener y manejar sistemas de telecomunicaciones.

instalaciones meteorológicas y obras auxiliares a la navegación, equipos transmisores y receptores de radio, televisión y radar, cable submarinos y subterráneos y otros artefactos que se requieran para los fines de la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar. El uso de frecuencias de radio, intensidad de señales y amplitud de ondas a que se refiere este numeral será objeto de coordinación con el gobierno de la República de Panamá.

- (11) Los Estados Unidos de América podrán establecer, mantener y manejar, en la vecindad de los sitios en que se efectúan los trabajos de construcción, instalaciones para suministrar vivienda y mantenimiento general al personal que participó en la construcción de la Obra del Canal a Nivel del Mar, sin embargo, los Estados Unidos de América deberán obtener tales instalaciones y servicios de la República de Panamá o de fuentes privadas de las mismas cuando la calidad de los mismos sea satisfactoria a los Estados Unidos de América y el costo no sea mayor que el de su provisión por parte de los mismos Estados Unidos de América.
- (12) (a) A fin de facilitar y acelerar la cooperación entre las autoridades de la República de Panamá y los Estados Unidos de América referente al cumplimiento de las estipulaciones de este Anexo, ambos países establecerán un comité conjunto.
- (b) El Comité conjunto estará compuesto de un representante designado por el gobierno de la República de Panamá y de un representante designado por el gobierno de los Estados Unidos de América, cada uno de los cuales tendrá uno o más suplentes. El Comité conjunto adoptará sus reglas de procedimiento y nombrar los subcomités que se requieran. El Comité conjunto se organizará en forma tal que pueda reunirse en cualquier momento cuando así lo soliciten el representante del gobierno de la República de Panamá o del gobierno de los Estados Unidos de América.
- (c) El gobierno de la República de Panamá y el gobierno de los Estados Unidos de América pagarán los sueldos y viáticos de sus representantes respectivos en el Comité conjunto y se distribuirán por partes iguales el costo de funcionamiento de dicho Comité.
- (d) El Comité conjunto podrá invitar a representantes de la Administración Conjunta del Canal de Panamá para que participen en el trabajo del Comité.

- (e) Si el Comité Conjunto no pudiere resolver un asunto sometido a su consideración, dicho asunto será sometido por el Comité a la consideración de los respectivos Gobiernos para que se le dé mayor consideración por medio de los conductos apropiados.
- (13) En este Anexo, el término «contratistas» incluye los «subcontratistas», y «contratistas designados» incluye los subcontratistas que reúnen los requisitos para la designación especificada del numeral (2) de este Anexo y que sean designados de acuerdo con el mismo.

• • • • •

ANEXO III FACILITACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Con el objeto de facilitar el funcionamiento, mantenimiento y las mejoras del Canal se conviene en lo siguiente:

- (1) La sede y las oficinas de la Comisión del Canal Interoceánico de Panamá y los archivos, documentos y correspondencia oficial de la Comisión serán inviolables, salvo los casos en que lo contrario sea aceptado por la Comisión o sea dispuesto mediante orden impartida por escrito por un tribunal competente de la República de Panamá.
- (2) Los miembros de la junta y los designatarios y empleados de la Comisión, así como sus dependientes gozarán de los siguientes privilegios y exenciones en la República de Panamá:
 - (a) libertad de acceso y tránsito entre sus lugares de empleo y residencia y el resto de la República de Panamá sin que se les imponga peaje o cargas discriminatorias;
 - (b) Si tales personas no fueren nacionales de la República de Panamá quedarán exoneradas de la obligación de tomar las medidas legales necesarias para establecer su residencia en la República de Panamá o para registrarse como extranjeros residentes en el país, así como la obligación de prestar servicio militar para prestar otros servicios compulsorios que puedan ser requeridos por la República de Panamá; tales personas no adquirirán derechos a que se les considere como residentes permanentes o domiciliarios en la República de Panamá; y
 - (c) Si tales personas no fueren nacionales o residentes permanentes de la República de Panamá quedarán exoneradas

das del pago de los derechos e impuestos de aduana, importación y exportación y de todos los demás derechos relativos al mobiliario, utensilios domésticos y efectos personales, incluidos los vehículos y partes de los mismos que sean importados a la República de Panamá para su uso personal cuando lleguen por primera vez a prestar sus servicios a la República de Panamá, o dentro de los 6 meses siguientes a dicha fecha, o que sean exportados de la República de Panamá cuando tales personas dejen de prestar servicios a la Comisión o dentro de los 6 meses siguientes a dicha fecha. El traspaso, dentro de la República de Panamá, por parte de dichas personas de cualesquiera de tales bienes, será considerado como una importación, por parte del adquirente, del bien objeto del traspaso, efectuada del país de origen en la fecha en que se haga el traspaso al adquirente y éste estará obligado a pagar a la República de Panamá los derechos de aduana y otras cargas que graven la importación del bien adquirido y si los derechos de importación u otras cargas son fijados *ad valorem*, los mismos se determinarán a base de valor del bien objeto de la venta en la fecha del traspaso.

- (3) Las personas que no fueren nacionales o residentes permanentes de la República de Panamá y que entraren a la República de Panamá con el objeto exclusivo de prestar a la Comisión, o para beneficio de ésta, servicios profesionales cuya prestación estuviere sujeta a la expedición de licencia en la República de Panamá tendrán derecho a que la República de Panamá les expida la licencia para ese fin específico, libre de costo, examen y otros requisitos, previa certificación del caso por parte de la Comisión.
- (4) Los miembros de la junta que no fueren nacionales de la República de Panamá estarán exentos de las leyes y reglamentos de trabajo y de seguridad social de la República de Panamá con respecto a los servicios que presten a la Comisión.

NOTA DEL EMBAJADOR ROBERTO ALEMÁN

Panamá 3 de enero de 1968.

Señor Ministro:

En la reunión celebrada en la ciudad de Nueva York el día 22 de junio de 1967, las Misiones Negociadoras de Panamá y Los Estados Unidos de América acordaron someter a la consideración de sus respectivos Gobiernos los anteproyectos de tratados de fecha 21 de junio de 1967.

Con posterioridad a la reunión aludida, permanecí en la ciudad de Washington por algunos días y, de acuerdo con instrucciones telefónicas que me fueron impartidas por Vuestra Excelencia, gestioné la modificación de algunos de los artículos que aparecen en los anteproyectos de tratados referidos.

Aunque en el curso de las reuniones celebradas por el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores entre los días 25 de julio y 25 de septiembre del año 1967 tuve oportunidad de exponer las modificaciones efectuadas a los anteproyectos de Tratados como resultado de la gestión antedicha, considero conveniente, para la mayor claridad de los archivos de la Misión Negociadora, exponer en esta nota el texto de las modificaciones acordadas que son las siguientes:

**TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
CONCERNIENTE AL CANAL DE PANAMÁ**

El Artículo XXXII quedará así:

TEXTO ESPAÑOL

«ARTICULO XXXII

Si el uso de las áreas de tierras o aguas adicionales a las mencionadas en el Artículo III de este Tratado, y los derechos de acceso a las mismas, fueron necesarios para los fines del funcionamiento, mantenimiento y seguridad del Canal de Panamá, la República de Panamá, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales, acordará con la Administración las medidas que sean aceptables a la República de Panamá y a la Administración, que sea necesario tomar para asegurar tal uso o derecho de acceso.»

* Op. cit., pp. 3909-3915.

TEXTO INGLÉS

«ARTICLE XXXII

Should use or access to areas of land or water other than those defined in Article III of this Treaty be required for the operation, maintenance or security of the Panama Canal, the Republic of Panama, in accordance with its constitutional processes, shall agree with the administration upon such measures acceptable to the Republic of Panama and the Administration as may be necessary to ensure such use or access.»

El párrafo (2) del artículo XXXV quedará así:

TEXTO ESPAÑOL

«(2) Dentro del período de cinco años anteriores a la terminación del Tratado de Defensa a que se refiere el numeral (1) de este Artículo, la República de Panamá y los Estados Unidos de América acordarán, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, las medidas aceptables a ambos gobiernos para asegurar la defensa y seguridad del Canal de Panamá, de su neutralidad, y de su continuidad de funcionamiento.»

TEXTO INGLÉS

«(2) *Within a period of five years prior to the termination of the Defense Treaty referred to in paragraph (1) of this Article, the Republic of Panama and the United States of America will agree in accordance with their respective constitutional processes on arrangements acceptable to both governments to ensure the defense and security of the Panama Canal, of its neutrality, and of its continuity of operation.»*

**TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CONCERNIENTE
A UN CANAL A NIVEL DEL MAR QUE UNA LOS OCÉANOS
ATLÁNTICO Y PACÍFICO**

El numeral (2) del Artículo III quedará así:

TEXTO ESPAÑOL

«(2) Los Estados Unidos de América suministrarán el financiamiento para la obra del Canal a Nivel del Mar, y después de consultar

con la República de Panamá, podrán ofrecer a otros Estados organismos internacionales, entidades públicas y privadas o individuos la oportunidad de participar en dicho financiamiento. Los acuerdos pertinentes a los pagos que deban efectuarse a la República de Panamá y que se deriven del funcionamiento del Canal a Nivel del Mar constituirán una parte esencial de los arreglos relativos al financiamiento de la construcción de la obra del Canal a Nivel del mar. Tales acuerdos pertinentes a los pagos que deben efectuarse a la República de Panamá serán convenidos entre la República Panamá y los Estados Unidos de América en el momento en que se hagan los convenios para el financiamiento, tomando en cuenta los principios expresados en el numeral (2) del Artículo X de este Tratado. Cuando se haya logrado acuerdo con respecto a los pagos referidos en términos aceptables a la República de Panamá y a los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América podrán efectuarse la notificación de su intención de proceder con la construcción de la obra del canal a Nivel del Mar de acuerdo con las estipulaciones de este Tratado.»

TEXTO INGLÉS

«(2) *The United States of America shall provide for the financing of the sea level canal installation and, after consultation with the Republic of Panama, may offer to other States, international organizations, and public or private entities or individuals the opportunity to participate in the financing. Payments to the Republic of Panama to be derived from the operation of the sea level canal shall be an integral part of the arrangements for financing this construction of the sea level canal installations, such payments to be agreed between the Republic of Panama and the United States of America at the time the financing arrangements are made, taking into considerations the principles set forth in paragraph (2) of Article X of this Treaty, and when agreement on such payments shall have been reached on terms acceptable to the Republic of Panama and the United States of America, the United States of America may effect the notification of its intention to proceed with the construction of the sea level Canal installation in accordance with the provisions of this Treaty.*»

Al artículo XIII se añadirá un numeral (5) que quedará así:

TEXTO ESPAÑOL

«(5) El procedimiento arbitral a que se refiere este Artículo no se aplicará a la concertación de acuerdos, incluyendo los relativos a los pagos que deben efectuarse a la República de Panamá de acuerdo con las estipulaciones del numeral (2) del Artículo III y del Artículo X de este Tratado y a la concertación de acuerdos relativos al uso de excavaciones mediante el empleo de explosivos nucleares de acuerdo con las estipulaciones del numeral (4) del Artículo III del Tratado.»

TEXTO INGLÉS

«(5) *The arbitration proceedings referred to in this Article shall not apply to the conclusion of financial arrangements, including payments to the Republic of Panama under paragraph (2) of Article III and under Article X of this Treaty, and to the conclusion of agreements regarding nuclear excavation under subparagraph (b) of paragraph (4) of Article III of this Treaty.*»

TRATADO CONCERNIENTE A LA DEFENSA DEL CANAL DE
PANAMA Y DE SU NEUTRALIDAD

El numeral (2) del Artículo XX quedará así:

TEXTO ESPAÑOL

«(2) Este Tratado terminará en cualquiera de las siguientes fechas que sea la última en ocurrir:

- (a) Cuando transcurra un período de cinco años, contado a partir de la fecha de la terminación del Tratado concerniente al Canal de Panamá, que la República de Panamá y Los Estados Unidos de América han firmado en esta fecha; o
- (b) En la fecha de terminación del Tratado concerniente a la construcción de un Canal a nivel del mar que una los Océanos Atlántico y Pacífico, que la República de Panamá y los Estados de América han firmado en esta fecha.»

TEXTO INGLÉS

«(2) *This Treaty shall terminate on whatever of the following dates that comes last:*

- (a) *Five years after the termination of the Treaty concerning the Panama Canal which the Republic of Panama and the United States of America have signed on this date; or*

(b) On the date of termination of the Treaty concerning the sea level canal connecting the Atlantic and Pacific oceans with the Republic of Panama and the United States of America have signed on this date.»

Durante mi reciente visita a las ciudades de Nueva York y Washington tuve oportunidad de explicar a los negociadores de Estados Unidos de América, y de manera especial al Embajador Robert B. Anderson, las observaciones que en el curso de las reuniones del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores se hicieron con respecto al texto de algunas modificaciones arriba transcritas. El Embajador Anderson manifestó que, guiado por un criterio estrictamente de jurista, él consideraba que los cambios aceptados ya por su Misión eran más claros y precisos que el lenguaje que han sugerido algunos Consejeros del Gobierno Nacional. Añadió que, sin embargo, daría toda la consideración del caso a las sugerencias presentadas o que se le hiciesen para aclarar cualquier punto de los anteproyectos de tratados.

Debo recomendar, para el mejor ordenamiento de los archivos y documentos de la Misión Negociadora, que se preparen nuevas copias de los anteproyectos de tratados que incluyan las modificaciones a que me he referido en esta nota. Con respecto a los anteproyectos en idioma español, recomiendo que se siga el texto acordado con los funcionarios del departamento de Estado como resultado de la revisión de texto efectuada con dichos funcionarios, durante el pasado mes de julio, por el Doctor Manuel Méndez Guardia, el Doctor Carlos Alfredo López Guevara y quien suscribe.

Me permito sugerir a Vuestra Excelencia que las nuevas copias de los anteproyectos de tratados sean repartidas a las personas que han venido participando y coadyuvando en las labores referentes a la negociación de los nuevos pactos.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

ROBERTO R. ALEMÁN
Embajador Especial

A Su Excelencia el señor
Ingeniero Fernando Eleta A.
Ministro de Relaciones Exteriores
Panamá

IV^a Parte

Etapa abrogacionista
e internacionalización
de la lucha
panameña
por su soberanía



1

Rechazo de los Tratados de 1967

FUNDAMENTOS DE LA POSICIÓN DE LA CANCELLERÍA PANAMEÑA EN RELACIÓN CON EL RECHAZO POR PARTE DE PANAMÁ DE LOS TRES PROYECTOS DE TRATADOS DE 1967*

La lucha tenaz y penosa que Panamá sostuvo por más de sesenta años contra las injusticias e iniquidades de la Convención del Canal Istmico, suscrita el 18 de noviembre de 1903, tuvo su culminación en los trágicos, dolorosos y sangrientos sucesos del 9 de enero de 1964, que causaron la ruptura, por parte de Panamá, de sus relaciones diplomáticas con el Gobierno de Washington, ruptura que brindó a Panamá, en medio de la conmoción que creó, la imprevista y oportuna coyuntura para lograr la apertura de negociaciones para un nuevo tratado que sustituyera el de 1903, como condición para reanudar las relaciones diplomáticas.

Durante casi tres meses de contactos, con la mediación de la Organización de Estados Americanos, la tenaz resistencia del Gobierno de los Estados Unidos de América para admitir negociar nuevos convenios, se vio enfrentada por la igualmente tenaz insistencia de Panamá en su inflexible posición.

Cuando todo parecía augurar el más rotundo fracaso de la mediación por estarse disipando las posibilidades de un acuerdo entre los representantes de ambos Gobiernos, hizo el Presidente Lyndon B. Johnson, en conferencia de prensa el día 21 de marzo de 1964, declaraciones de las cuales copiamos las siguientes frases cuyo efecto sedante no se hizo esperar: "Estamos plenamente conscientes de que las demandas que hace el Gobierno de Panamá y la mayoría del pueblo panameño no surgen de malicia o del odio hacia los Estados Unidos de América".

"Tan pronto como sea invitado por Panamá, nuestro Embaja-

* *Revista Lotería* Nº 266-67. Panamá, abril-mayo 1978, pp. 59-85.

dor se pondrá en camino. Designaremos también un representante especial, quien llegará con plenos poderes para tratar cualquier dificultad. Se le encomendará la responsabilidad de buscar una solución que reconozca las demandas razonables de Panamá”.

Tres días después, el Presidente Roberto F. Chiari hizo una declaración a la prensa, de la cual copiamos las siguientes frases:

“...ambas naciones han tenido serias dificultades debido a cláusulas contractuales existentes desde 1903 que lesionan la dignidad de Panamá. Es allí donde está la causa de los graves conflictos”.

“...no comprendo por qué se elude la necesidad de ir al fondo de la cuestión para erradicar las causas de conflicto...”

“Si esto nos ha de llevar a un convenio justo y equitativo, yo estoy dispuesto a actuar en ese sentido”.

Fue así como, después de nuevos esfuerzos mediadores del Consejo de la Organización de Estados Americanos, los representantes de Panamá y Estados Unidos suscribieron el 3 de abril de 1964 una Declaración Conjunta en la cual acordaron los tres puntos siguientes:

1. Restablecer relaciones diplomáticas.
2. Designar sin demora Embajadores Especiales con poderes suficientes para procurar la pronta eliminación de las causas de conflicto entre los dos países, sin limitaciones ni precondiciones de ninguna clase.
3. En consecuencia, los Embajadores designados iniciarán de inmediato los procedimientos necesarios con el objeto de llegar a un convenio justo y equitativo que estaría sujeto a los procedimientos constitucionales de cada país”.

Quedó, pues, claramente entendido que las negociaciones que se iniciaron entre Panamá y Estados Unidos de América en cumplimiento de la Declaración Conjunta de 3 de abril de 1964, tenían por objetivo “procurar la pronta eliminación de las causas de conflicto entre los dos países” mediante “los procedimientos necesarios con el objeto de llegar a un convenio justo y equitativo”.

Después de tres años de negociaciones, el Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Ing. Fernando Eleta, y los negociadores panameños señores Roberto Alemán, Diógenes de la Rosa y Ricardo M. Arias Espinosa, presentaron al Presidente de la República, Don Marco A. Robles, como resultado final de las negociaciones conducidas por ellos, tres proyectos de tratados que deberían ser

firmados simultáneamente, y cuyos títulos son los siguientes:

- “1. Tratado del Canal de Panamá;
2. Tratado para la Construcción de un Canal a Nivel del Mar por Panamá; y
3. Tratado de Defensa del Canal de Panamá y de su Neutralidad”.

El camino más expedito y obvio a seguir para formarse un juicio crítico sobre la aceptabilidad por parte de Panamá de los tres proyectos mencionados, es el de determinar si ellos responden o no a los objetivos o finalidades que tanto Panamá como Estados Unidos pactaron en la Declaración Conjunta del 3 de abril de 1964; es decir, si esos proyectos son “justos y equitativos” para Panamá y si ellos “procuran la pronta eliminación de las causas de conflicto entre los dos países”.

I

Siguiendo la sencilla lógica del silogismo, comenzaremos por buscar, como premisa mayor, cuáles son, para Panamá, las causas de conflicto que tienen su origen en los tratados hoy vigentes con Estados Unidos de América.

Conviene aclarar que estas causas de conflicto aluden únicamente a las relaciones contractuales vigentes que emanan del actual Canal de Esclusas, ya que como el proyecto de Tratado para el Canal a Nivel y el proyecto de Tratado de Defensa aún no han sido firmados, no pueden ellos ser todavía causa de conflictos.

Las causas de conflicto que arrancan de la Convención de 1903 pueden resumirse, por su importancia y trascendencia así:

1a. **La perpetuidad**

Toda estipulación a perpetuidad lleva, en derecho internacional, la semilla de su propia ineficacia por el principio universalmente admitido de *rebus sic stantibus* que deja sin eficacia una estipulación cuando han variado las circunstancias que prevalecieron al adoptarse.

2a. El ejercicio irrestricto de jurisdicción política y autoridad administrativa de Estados Unidos en la Zona del Canal, con exclusión y menosprecio de los derechos que se reservó el soberano territorial. Es lo que un estadista norteamericano llamó “the overwhelming presence of the United States in Panama”. En el Tratado General de 1936, Estados Unidos y Panamá declararon que

"las estipulaciones de la Convención de 18 de Noviembre de 1903 tienen en mira el uso, ocupación y control por los Estados Unidos de América de la zona del Canal y de las tierras y aguas adicionales bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América, para los fines del eficiente mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal y de sus obras auxiliares".

Según esta clara estipulación del Tratado General de 1936, lo que no fuera necesario para mantener, funcionar, sanear y proteger el Canal, quedaba excluido de las estipulaciones de la citada Convención de 1903 y sometido a la jurisdicción y leyes de la República, cosa ésta que Estados Unidos de América se ha negado a reconocer, con lo cual ha creado y mantenido, arbitrariamente, una fuente permanente y abundante de conflictos entre las dos naciones, especialmente en la administración de justicia; en la autoridad de policía; en actividades comerciales e industriales en competencia con Panamá; en la restricción de entrada de productos panameños a los mercados de la zona del Canal, en la evasión de ingresos fiscales de la República; en la inaccesibilidad a la Zona del Canal para los funcionarios panameños que podrían exigir allá el cumplimiento de la ley panameña a personas que están obligadas a acatarla; en la falta de coordinación de actividades administrativas en las áreas colindantes de la jurisdicción panameña con la de la Zona del Canal; en actividades de toda clase (sociales, culturales, científicas, caritativas, religiosas); en la prestación de servicios públicos; y en muchos otros casos análogos que sería muy largo enumerar en este Informe Preliminar.

3a. En el Tratado General de 1936, "en vista de la apertura formal y oficial del Canal de Panamá", Panamá y Estados Unidos de América acordaron suprimir de los fines del Tratado de 1903, la palabra "construcción", quedando así reducidos esos fines al "mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal". No obstante esta estipulación acordada en 1936, Estados Unidos ha continuado, sin consultar y ni siquiera informar a Panamá, efectuando obras de gran magnitud, dentro de la Zona del Canal, que no tienen relación alguna con el mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal, creando y manteniendo así otra fuente inagotable de conflictos entre las dos naciones.

4a. El Tratado de 1903 concedió a Estados Unidos el derecho de proteger el Canal y ese derecho fue regulado por el Artículo XXIII de dicho Tratado, limitándolo a "usar su Policía y sus fuerzas terrestres y navales y para establecer fortificaciones" "para la

protección y seguridad del Canal o de las naves que lo usen, o de los ferrocarriles y obras auxiliares".

No obstante las limitaciones impuestas a Estados Unidos por el citado Artículo XXIII, el Gobierno norteamericano, sin consultar y ni siquiera informar a Panamá, ha hecho grandiosas instalaciones militares, navales y aéreas, dentro de la zona del Canal, que no guardan ninguna relación con la "seguridad y protección del Canal", con lo cual agrava los peligros de Panamá como objetivo militar de represalia y, además, da a Panamá la apariencia desdorosa de que toda la República está supeditada a los intereses militares exclusivos de Estados Unidos, ya sean regionales, continentales o extracontinentales, en los cuales ninguna participación tiene Panamá.

El poderío militar que Estados Unidos despliega dentro del territorio de la República, sin aprobación ni conocimiento de Panamá, es una de las causas más fecundas de conflictos entre el Gobierno y el pueblo de Panamá y Estados Unidos de América.

5a. Insuficiencia de beneficios directos para Panamá

Antes de 1903 la Compañía del Ferrocarril de Panamá pagaba al Gobierno de Colombia una anualidad de US\$250.000.00. Con la Convención de 1903 Panamá perdió esa anualidad por la concesión ferrocarrilera, y Estados Unidos de América se obligó a pagar a Panamá una anualidad de US\$250.000.00 oro, comenzando nueve años después del canje de ratificaciones. Es decir, Panamá nada recibió en concepto de anualidad o de concesión del ferrocarril, durante nueve años. Después de 1939 Panamá comenzó a recibir una anualidad en dólares devaluados, de US\$430.000.00 que eran equivalentes a los US\$250.000.00 oro estipulados en 1903. Desde 1957 Panamá comenzó a recibir, como anualidad la suma de US\$1,930.000.00, de un poder adquisitivo muy inferior a los dólares devaluados de 1939. En el Tratado de 1955, se le exigió a Panamá que rebajara en un 75% el impuesto de licores que eran importados para la zona del Canal, con el resultado de que Panamá perdió, en ese concepto, una suma mayor que los US\$1,500.00 en que fue aumentada la anualidad del Canal.

La desproporción enorme entre los inconmensurables beneficios de todo orden que Estados Unidos ha recibido siempre por razón del Canal, y las mezquinas cantidades pagadas anualmente a Panamá por la concesión que hizo posible la construcción del Canal, ha sido y continuará siendo causa permanente de insatisfacciones de Panamá y de conflicto entre Panamá y Estados Unidos.

6a. Insuficiencia de beneficios indirectos para Panamá

En cuanto a beneficios indirectos provenientes de la operación del Canal, debe recordarse que en el Artículo I del Tratado General de 1936, los dos Gobiernos "declaran su voluntad de cooperar en cuanto les sea factible al propósito de asegurar el goce pleno y perpetuo de los beneficios de todo orden que el canal debe proporcionar a las dos naciones que hicieron posible su construcción". Con respecto a los beneficios recibidos por Estados Unidos, ellos están a la vista en el crecimiento de su marina mercante que ha convertido a ese país en el mayor usuario del Canal, en el crecimiento de su comercio de importación y exportación y, para citar sólo los beneficios de mayor bulto, en la verdad histórica de que el Canal de Panamá fue la llave que abrió a ese país el camino para convertirse en la primera potencia del Mundo.

En cambio, son pocos y dudosos los beneficios permanentes que la República pueda haber recibido indirectamente por la presencia del Canal de Panamá en su territorio. Por el Canal, Panamá perdió sus puertos de Panamá y Colón; por el Canal y su método de operación, Panamá no ha podido desarrollar sus potenciales actividades productivas en el intercambio internacional; por el Canal de Panamá y sus métodos de administración, el Canal es un competidor desleal para el comercio y la industria de Panamá; el Canal, en vez de abrir a Panamá sus puertas hacia el comercio mundial, le ha obstaculizado o cerrado las avenidas que directamente pueden comunicarla con los mercados exteriores de exportación o importación; el Canal de Panamá creó una numerosa clase privilegiada con derecho a abastecerse de todo sin pagar impuestos a Panamá, con lo cual no sólo se privó al comercio panameño de esa clientela de alto poder adquisitivo, sino que se abrieron incontenibles corrientes de contrabandos procedentes de la Zona del Canal; todo lo cual ha sido y sigue siendo una fecunda fuente de conflictos y desavenencias entre los dos países.

Mucho se ha hablado de las entradas que la economía panameña recibe por razón de los salarios pagados en la Zona del Canal; pero no debe olvidarse que esos salarios no son una regalía que paga Estados Unidos, ya que si éste necesita usar la mano de obra panameña, tiene que pagarla porque recibe servicios equivalentes y a veces mayores a los salarios que paga. No podría pretenderse que los panameños estaban obligados a servir de balde al Canal de Panamá como parte de las obligaciones contraídas por Panamá en adición a la concesión canalera.

7a. Por último, para no hacer interminable la lista de causas de conflicto, citamos la mayor causa, la causa constante, la que diariamente ha contribuido a mantener vivo el resentimiento de los panameños y a alimentar en ellos un sentimiento de rebeldía contra la presencia hiriente en parte del territorio nacional de un Gobierno extraño que actúa en forma arbitraria, omnimoda y absoluta con menosprecio de la presencia del soberano territorial. Nos referimos a la conducta invariable del Gobierno de Estados Unidos de América, de interpretar las cláusulas de los tratados vigentes en la forma más conveniente para sus intereses y contraria a los derechos de Panamá e imponer sus interpretaciones arbitrarias e injustas con el poder que tiene, y que Panamá, no ha podido contrarrestar hasta ahora, de excluir y arrojar fuera de la Zona del Canal la presencia oficial de Panamá y la vigencia de nuestras leyes.

III

Habiendo esbozado así, en términos generales siete causas de conflictos entre Panamá y Estados Unidos, dejamos presentada la premisa mayor del silogismo.

Pasemos a la presentación de la premisa menor, comparemos, muy someramente, y con relación a cada uno de esos tres proyectos de tratado, las siete causas de conflicto que hemos listado arriba.

1a. **La Perpetuidad**

Cierto es que al abrogarse, según el proyecto de nuevo Tratado para el Canal de Panamá, la Convención de 1903 se abrogarian, con ella, las cláusulas de perpetuidad que en esa Convención se estipularon. En el nuevo proyecto para ese mismo canal se estipula su posible vigencia hasta el año 2007. En el proyecto de tratado para un canal a nivel del mar, se fija su vigencia en 60 años a partir de la fecha en que comience a operar ese canal a nivel; pero como, según sus estipulaciones, esa fecha podría coincidir con la terminación de la vigencia del nuevo proyecto de tratado para el Canal ahora existente, quiere ello decir que la vigencia del tratado que se celebrara para el canal a nivel del mar, podría prolongarse hasta el año 2067, o sea, por el largo término de 97 años contados a partir del presente año.

La convención de 1903 fue pactada a perpetuidad. Sin embar-

go, en 1936, es decir, 33 años después, fue ella reformada con un nuevo tratado (el Tratado General de 1936); en 1957, es decir, 21 años después del Tratado de 1936 y 54 años después de firmada la Convención de 1903, fue ésta modificada por segunda vez; y ahora, 13 años después de esa segunda reforma, nos encontramos en presencia de nuevas negociaciones, temporalmente suspendidas, con miras a abrogar totalmente esa Convención para sustituirla por tres tratados concurrentes que se celebrarían simultáneamente.

Según el proyecto presentado por los negociadores norteamericanos para la celebración de uno de esos tres tratados (el de Defensa), la duración de éste coincidiría con la terminación del Tratado para la Construcción del Canal a Nivel del Mar, lo que equivale a decir que el primero estaría vigente hasta el año 2067, o sea, por 97 años contados a partir del presente año. Sin embargo, en el proyecto presentado por los negociadores de Estados Unidos para el Tratado de Defensa, incluyeron una cláusula según la cual ese Tratado de Defensa continuaría en vigor, indefinidamente, mientras no se celebrara un tratado nuevo que lo sustituyera, lo que equivaldría a una estipulación de perpetuidad para el Tratado de Defensa que es, precisamente, el que mayor preeminencia le daría al poder de Estados Unidos en el Istmo de Panamá y el que, por tanto, resultaría más hiriente para la dignidad y la soberanía de la República. Panamá no ha aceptado esa propuesta de perpetuidad; pero ésta es clara indicación de las pretensiones de los negociadores norteamericanos.

Si existe ya un consenso entre los dos Gobiernos en el sentido de que la Convención de 1903 debe ser abrogada, cuando sólo habían transcurrido sesenta años desde su firma, no obstante haber sido celebrada a perpetuidad, pretender ahora celebrar tratados que tengan una duración fija de 97 años, es tanto como insistir en pactos de una duración mayor de la que históricamente pueden durar.

Si algo debe haber aprendido la República, a través de las muy duras experiencias sufridas, es que los tratados que se refieren a la presencia, dentro de su territorio, de gobiernos extranjeros, deben contener cláusulas que permitan la revisión de esos tratados por períodos no mayores de veinte o veinticinco años, para ajustarlos a los progresos del derecho internacional y a los cambios en la convivencia pacífica entre las Naciones.

Conclusión:

Esta causa de conflictos subsiste en los tratados estudiados.

2a. Jurisdicción política y autoridad administrativa

No obstante haberse reducido en el Tratado de 1936 las finalidades de la Concesión de 1903 al mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal ya construido en 1936, el Gobierno de Estados Unidos ha continuado ejerciendo la plena jurisdicción política y la autoridad administrativa en la Zona del Canal, con total exclusión de la República de Panamá, aun en los casos y materias no relacionados con las finalidades de la Concesión pactadas en 1936. Esta ha sido la causa de los conflictos someramente explicados en el punto 2o. de la Sección II de este Memorándum.

Todas esas causas de conflictos continuarían vigentes si se adoptara el proyecto de Tratado nuevo para el Canal de Panamá, porque con este proyecto las autoridades panameñas continuarían sin jurisdicción ni competencia para actuar dentro de las áreas del Canal, y Estados Unidos quedaría liberado de las obligaciones y responsabilidades que ahora tiene contraídas por los Tratados vigentes.

En efecto, en la actualidad el Gobierno de Estados Unidos tiene la obligación y la responsabilidad de mantener y funcionar el Canal de Panamá; pero de acuerdo con el proyecto de nuevo Tratado para este Canal, esa obligación y responsabilidad pasarían a una entidad internacional con personería propia que se llamaría Administración Conjunta, de cuya actuación Estados Unidos no sería responsable quedando libre de sus compromisos actuales a ese respecto sin que Panamá tuviera ninguna garantía, con la agravante de que el Gobierno de Estados Unidos tendría el control definitivo de esa Administración Conjunta por el voto mayoritario en las decisiones de la misma, sin asumir ninguna responsabilidad directa por el mantenimiento y funcionamiento del Canal. La única garantía que ahora tiene Panamá para los beneficios que del Canal puede derivar, es la obligación del Gobierno Norteamericano de mantenerlo y operarlo, y esta garantía desaparecería con la creación de la citada Administración Conjunta en la forma indicada en el proyecto.

En la actualidad existe, por razón de los tratados vigentes, una relación y comunicación directas de Estado a Estado, entre Panamá y Estados Unidos, y Panamá puede enderezar todas sus quejas y reclamaciones contra el Gobierno de Estados Unidos, como lo ha venido haciendo, incesantemente, desde que se firmó la Convención de 1903. Pero, con la Administración Conjunta prevista en el proyecto de tratado, Panamá como Estado Soberano territorial tendría en adelante que entenderse, de igual a igual, con esa entidad jurídica de inferior categoría y hasta, someterse a las

decisiones de la misma en la cual el voto mayoritario lo tendrían ciudadanos de Estados Unidos. La posición no podría ser más deprimente y lesiva para la dignidad nacional.

Y, como si todo esto no fuera suficiente, la aludida Administración Conjunta tendría, según el proyecto, atribuciones, funciones y poderes que hoy día no tiene ni aún el Gobierno de Washington, dentro de los tratados vigentes; y muchas actuaciones que ese Gobierno mantiene en la Zona del Canal con violación de esos tratados y que ya han causado conflictos y ocasionado protestas de parte de Panamá, vendrían a quedar coonestadas y revalidadas, con claro retroceso de posiciones que el Gobierno de Panamá ha venido manteniendo con patriótico tesón.

Por ejemplo, para citar una muestra, no obstante la obligación que aparentemente se estipula en el proyecto en el sentido que la Administración Conjunta traspasaría a empresas privadas panameñas las actividades comerciales que ahora se explotan en la Zona del Canal, el mismo proyecto estipula que esa Administración podrá continuar con tales actividades, con la sola obligación de pagar a Panamá sumas equivalentes a los impuestos que Panamá habría percibido si se tratara de empresas privadas, lo cual significaría que esas actividades no estarían sujetas al sistema tributario panameño no quedarían sometidas a la jurisdicción de las leyes y de las autoridades de Panamá, lo cual es una justa aspiración permanente de Panamá.

Conclusión:

Las causas de conflicto por razón de la jurisdicción política y administrativa que irrestrictamente ejerce el Gobierno de Estados Unidos no se resuelven ni se eliminan en el proyecto de Tratado para el Canal de Panamá, sino que por el contrario se agravan.

3a. Ejecución de obras civiles no autorizadas en los Tratados

De acuerdo con el Preámbulo y con el Artículo II de la Convención del Canal Istmico de 1903 Panamá concedió a Estados Unidos el uso, ocupación y control de una zona de tierra y de tierra cubierta por agua "para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección" de "un canal para buques a través del Istmo de Panamá para comunicar los océanos Atlánticos y Pacífico". En virtud de esa concesión los Estados Unidos construyeron el Canal de Panamá que comenzó a operar el 15 de agosto de 1914 y que fue inaugurado oficialmente el 12 de julio de

1920. "En vista de la apertura formal y oficial del Canal de Panamá el 12 de julio de 1920", Panamá y Estados Unidos declararon en el Artículo I del Tratado General de 1936 que las estipulaciones de la Convención de 1903 "tienen en mira el uso, ocupación y control de la Zona del Canal y de las tierras y aguas adicionales bajo jurisdicción de los Estados, para los fines del eficiente mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal".

Como se ve la palabra CONSTRUCCIÓN fue eliminada de los fines para los cuales Panamá otorgó a los Estados Unidos la concesión de 1903. Obsérvese que la concesión de 1903 era para la construcción "de UN CANAL para buques a través del Istmo de Panamá"; y en el Tratado de 1936 los fines de la concesión, ya excluida la palabra CONSTRUCCIÓN fueron para el "mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección DEL CANAL". Es decir el Tratado de 1903 se refería única y exclusivamente AL CANAL que ambos Gobiernos declararon después ya construido en el Tratado de 1936. En consecuencia, las obras que el Gobierno de Estados Unidos quedó autorizado a realizar en la Zona del Canal, a partir del Tratado de 1936 fueron, únicamente, las obras relacionadas con el "mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección DEL CANAL".

No obstante esta clara interpretación de los tratados vigentes Estados Unidos ha continuado, como ya hemos dicho más arriba, efectuando obras de gran magnitud dentro de la Zona del Canal que no tienen relación alguna con los fines para los cuales fue limitada la concesión de 1903, en el Tratado de 1936. Todas esas obras adicionales, no autorizadas por los Tratados han sido realizadas por el Gobierno de Estados Unidos sin consultar ni informar a Panamá, lo cual ha creado y mantenido otra fuente inagotable de conflictos entre las dos naciones. Esta situación se agrava enormemente con la Nota No. 72 de fecha 12 de febrero de 1970 que el Embajador de los Estados Unidos en Panamá envió al Ministro de Relaciones Exteriores, en la cual pretende que el cruce de notas efectuado en 1939 entre el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Panama en Washington y el Secretario de Estado, cruce de notas en el cual se aclara el sentido de la palabra "mantenimiento" incluida en ese Tratado, comprende no sólo obras de mantenimiento del Canal existente sino cualquier otra obra o expansión que el Gobierno americano quiera hacer dentro de dicha Zona. La interpretación que el Señor Embajador de los Estados Unidos pretende dar a la palabra "mantenimiento",

no se ajusta al verdadero sentido del lenguaje usado en el mismo cruce de notas a que él se refiere, lenguaje que lo único que hace es adquirir que la palabra "mantenimiento" incluye construcción y expansión dentro del sentido de mantener el Canal que se declaró ya construido en el Tratado de 1936.

Esta nueva interpretación que el representante del Gobierno de Estados Unidos en Panamá ha querido hacer al cruce de notas arriba mencionado ha venido a agravar, como causa de conflictos entre los dos países, la pretensión que ya, en la práctica, ha llevado a efecto el Gobierno de Washington, de que ese cruce de notas autoriza construcciones expansiones distintas de las que pueden caber dentro del concepto de la palabra "mantenimiento" DEL CANAL.

Esta situación no solamente subsistiría si el proyecto de tratado para el Canal de Panamá fuera aceptado, sino que se haría más desfavorable para Panamá por cuanto que le daría a la entidad que en él se denomina "la Administración Conjunta del Canal" un mayor radio de acción que le permitiría legalizar actividades que ahora se hacen al margen de los Tratados vigentes, y le permitiría también nuevas actividades de construcción a las cuales el Gobierno de Estados Unidos no tienen hoy derecho de acuerdo con esos tratados que hoy rigen.

Conclusión:

Esta causa de conflictos no sólo subsistiría íntegramente en el nuevo proyecto de Tratado del Canal de Panamá sino que se agravaría creando conflictos adicionales a los que ya se han producido en relación con los tratados hoy día vigentes.

4a. **Protección del Canal de Panamá**

Ya se ha explicado que una de las finalidades para las cuales Panamá otorgó a Estados Unidos la Concesión contenida en la Convención del Canal Istmico, firmada el 18 de noviembre de 1903 fue la protección del citado Canal. Dicha Convención estipuló, con toda claridad, los derechos que fueron concedidos por Panamá a Estados Unidos para esa protección, así:

"ARTÍCULO XXIII. Si en cualquier tiempo fuere necesario emplear fuerzas armadas para la seguridad y protección del Canal o de las naves que lo usen, o de los ferrocarriles y obras auxiliares, los Estados Unidos tendrán derecho, en todo tiempo a su juicio, para usar su policía y sus fuerzas terrestres y navales y para establecer fortificaciones con ese objeto".

Ya hemos explicado en la Sección II de este Informe Preliminar, que la forma como Estados Unidos ha interpretado y aplicado este Artículo XXIII de la Convención de 1903, ha sido una de las causas permanentes de conflictos entre las dos Naciones por razón de la preeminencia que el poderío de los Estados Unidos presente en territorio de la República, sin que tal preeminencia, que ha resultado desdorosa para Panamá, pudiera justificarse para las necesidades específicas de proteger el Canal, "si en cualquier tiempo fuere necesario".

En los tres proyectos de tratados que han sido presentados conjuntamente por los Negociadores Panameños y los Negociadores Norteamericanos, la materia relativa a la protección del canal, que en la Convención d 1903 quedó circunscrita en el Artículo XXIII arriba copiado, ha sido dividida en dos partes: a) lo relativo a las fuerzas de Policía ha sido incluido en el Proyecto de Tratado para el Canal de Panamá; y b) lo relativo a las fuerzas militares ha sido incluido en el proyecto de Tratado de Defensa del Canal y de su Neutralidad. Ya hemos explicado que el primero de estos proyectos mantiene y amplía las causas de conflictos que han surgido por razón del ejercicio irrestricto de autoridad política por Estados Unidos en la Zona del Canal, en materias que no guardan relación con las finalidades de la concesión otorgada por Panamá, entre ellas el ejercicio irrestricto de las funciones y servicios de Policía. Veamos ahora cómo pueden compararse las estipulaciones sobre fuerzas militares en los tratados hoy vigentes, con las estipulaciones incluidas en el Proyecto de Tratado de Defensa.

Basta una simple lectura de este último Proyecto de Tratado y de los informes de los Negociadores panameños sobre las numerosas reuniones celebradas con los Negociadores de Estados Unidos y que culminaron con la presentación de los citados tres Proyectos para llegar a la conclusión de que el propuesto Tratado de Defensa no sólo no eliminaría ninguna de las causas de conflictos que la presencia innecesariamente impresionante de actividades militares de todo orden —incluyendo las didácticas y de entrenamiento, que en suelo panameño, ha mantenido el Gobierno de Estados Unidos— sino que, por el contrario, agravaría esas causas ya existentes y agregaría otras nuevas.

En efecto, ese Proyecto de Tratado de Defensa amplía los derechos de Estados Unidos para toda clase de instalaciones defensivas y ofensivas no previstas en los tratados hoy vigentes aumentando los peligros de represalia y riesgos a la población civil; y, lo

que es peor, otorgaría al Gobierno Norteamericano el derecho para utilizar nuevas áreas fuera de la zona del Canal, sin que para ello se requiera la celebración de un nuevo Convenio o Tratado entre los dos países, con lo cual Panamá renunciaría, sin justificación alguna a una de las más valiosas conquistas de la diplomacia panameña logradas con el Tratado General de 1936. Además, el nuevo proyecto de tratado de defensa otorgaría a las fuerzas militares de los Estados Unidos el derecho de tránsito libre e irrestricto en el territorio nacional, sin el previo permiso del Gobierno panameño, que fue otra conquista del Tratado General de 1936.

Conclusión:

El proyecto de nuevo Tratado de Defensa no ha eliminado ninguna de las causas que, desde 1903, vienen dando lugar a conflictos por razón de los privilegios que las fuerzas armadas de Estados Unidos han pretendido arrogarse en el territorio de la República.

5a. Insuficiencia de beneficios directos para Panamá

Ya hemos explicado en la Sección II de este Informe Preliminar, que Panamá no recibió ninguna anualidad por la Concesión del Canal durante los primeros nueve años de vigencia de la Convención de 1903. Desde 1912, Estados Unidos comenzó a pagar una anualidad de US\$250.000.00 oro, igual a la anualidad que la Cía del Ferrocarril de Panamá pagaba a Colombia por la concesión ferrocarrilera, concesión ésta que en 1903 pasó a Estados Unidos sin ninguna compensación en favor de Panamá, lo que quiere decir que Estados Unidos comenzó en 1912 a pagar a Panamá por la Concesión del Canal lo que la Compañía del Ferrocarril de Panamá pagaba al Gobierno colombiano. Desde 1939 hasta 1957 la anualidad fue fijada en el Tratado General de 1936 en la suma de US\$430.000.00 devaluados, equivalentes a los US\$250.000.00 oro estipulados en la Convención de 1903; es decir, hubo aumento en la cantidad de dólares pero no en el valor real de esos dólares, causando a Panamá una pérdida igual a la devaluación progresiva del dólar a partir de esa fecha. A esto se puede agregar que, desde 1904 hasta 1957 el Gobierno de Estados Unidos percibía por alquileres de lotes urbanos en las ciudades de Panamá y Colón, que antes pertenecieron a la Cía. del Ferrocarril de Panamá sin compensaciones algunas para Panamá, todos los años sumas iguales o mayores a la anualidad que, por la Concesión del Canal, pagaban a Panamá.

Quiere ello decir que el Gobierno de Panamá nunca recibió, como beneficios directos por la Concesión del Canal, sumas que alcanzaran siquiera a compensar lo que Panamá dejaba de percibir como consecuencia de esa concesión.

Después de 1957 Estados Unidos comenzó a pagar a Panamá un aumento de US\$ 1.500.000.00 en la anualidad, de acuerdo con el Tratado de 1955; pero como ya hemos explicado, por ese mismo Tratado Panamá dejó de percibir, en concepto de impuesto de importación de licores una suma mayor que dicho aumento.

De acuerdo con el nuevo proyecto de Tratado para el Canal de Panamá, la República recibirá anualmente un pago mayor computado a base de una suma fija por tonelada de carga en tránsito por el Canal; pero la efectividad de esos pagos resulta dudosa porque no se prevé la constante depreciación del poder adquisitivo del dólar norteamericano, con la agravante de que Panamá no tiene participación en la fijación de peajes. Además, la duración máxima del nuevo Tratado para el Canal de Panamá que se firmaría, siguiendo el proyecto presentado, sería hasta el año 2009, pero terminaría antes si el Canal al Nivel del Mar es construido antes de ese año, sin que en ninguno de los tres proyectos presentados para los nuevos tratados se estipulen las ventajas o beneficios que quedarán a Panamá al expirar el nuevo tratado que se firmara para el Canal de Panamá, construyase o no se construya por el Istmo de Panamá el anunciado Canal a Nivel del Mar, ni los remedios que quedarían en favor de Panamá para hacer frente a los graves perjuicios que sufriría con la cesación del Canal de Esclusas y la apertura del Canal a Nivel.

Conviene hacer notar que el proyecto presentado para la construcción de un Canal al Nivel del Mar, no trae ninguna certeza presentado para la construcción de un Canal al Nivel del Mar, no trae ninguna certeza de que ese Canal será construido ni de que, si es construido, ello sea en territorio panameño, y ni siquiera la obligación de Estados Unidos de construirlo. Ese proyecto de tratado está concebido en forma de una opción que Estados Unidos podría ejercer o no, y que para Panamá representa, por no estipularse en él beneficios económicos para Panamá, una enorme y oscura interrogación del futuro de sus derechos e intereses tan arraigados en el destino de la Nación panameña.

En el proyecto de tratado para la defensa del canal no se estipula ningún beneficio directo para la República de Panamá.

Conclusión:

Los tres proyectos de nuevos tratados no resuelven ni eliminan las causas de conflictos que han surgido por razón de la insuficiencia de beneficios directos para la República; por el contrario, esos beneficios directos aparecen en esos proyectos envueltos en densas incertidumbres que son de mal augurio para la República que crearían nuevas causas de conflictos sin que se hubieran eliminado las que ya surgen de los tratados hoy vigentes.

6a. Insuficiencia de beneficios indirectos para Panamá

Ya hemos explicado en la Sección II de este Informe Preliminar que la presencia, dentro del territorio panameño, de un canal interoceánico operado y administrado por Estados Unidos de América, con total y absoluta exclusión del soberano territorial, no sólo no sirve a los fines del desarrollo de la economía nacional, de los servicios que ésta puede prestar al comercio internacional y de los beneficios que aquella puede recibir con el incremento de éste en el tránsito transistmico, sino que, por el contrario, el Canal de Panamá, por la manera como es manejado y administrado, constituye un obstáculo a veces insuperable en el desarrollo de la nacionalidad panameña, en el desenvolvimiento de su comercio internacional y en la adecuada explotación de sus recursos naturales.

Los únicos beneficios indirectos que la economía panameña recibe del funcionamiento del Canal de Panamá, consisten en la venta de servicios de la mano de obra nacional y de muy contados productos agro-pecuarios. Pero, como ya hemos explicado anteriormente, los pagos que la economía panameña recibe con dineros de Estados Unidos, no son una regalía que ese país paga por la Concesión que Panamá le hizo en 1903, sino el pago de servicios y productos que compra porque los necesita y tiene que pagar por ellos un precio que no siempre alcanza al justo valor de los mismos.

Pero, aun estos beneficios indirectos consistentes en el flujo de dólares hacia Panamá, en varias ocasiones han servido de instrumento para reducir el volumen del medio circulante y causar situaciones de crisis o agravar las crisis ya presentadas. Una disminución drástica en esa afluencia de dólares es suficiente para provocar trastornos económicos y sociales en la República. Por ello se explica que la política económica o financiera de la administración del Canal de Panamá, ha sido, en muchas ocasiones, causa de conflictos y trastornos de lenta y demorada recuperación.

Es en este punto donde el horizonte se presenta más turbio para Panamá por el proyecto de construir un Canal al Nivel del Mar dentro o fuera del Istmo, con el consiguiente vertical descenso del ingreso nacional al suspenderse la operación del presente Canal de esclusas.

Ninguno de los tres proyectos de tratados presentados, contiene las medidas de previsión que el cierre del canal de esclusas y la apertura del canal a nivel requieren para evitar un colapso de la economía nacional.

Todos los conflictos que con tanta frecuencia han surgido en los últimos sesenta años por causa de la insuficiencia de los beneficios indirectos que Panamá tiene el derecho de recibir, pero que no recibe, por la operación del Canal de Panamá, serán pálidos comparados con los que ocurrirán cuando, como consecuencia de una inconsulta aceptación de los tres proyectos de tratados, cese de funcionar el presente canal de esclusas y comience a funcionar un canal a nivel del mar aunque se construya en territorio panameño, ya que, si se construyera fuera de Panamá sin que se tomaran las medidas conducentes a soportar el impacto, Panamá podría verse abocada a una depresión más grave y profunda que cualquiera de las que ya abatieron a la población del Istmo en sus cuatrocientos años largos desde la Conquista.

7a. Diferencias de interpretación de los tratados vigentes

La experiencia de Panamá durante los 67 años transcurridos desde la firma de la Convención Istmica de 1903, ha sido, invariablemente, la de que Estados Unidos ha actuado como Juez y parte en la interpretación y aplicación de esa Convención y de los Tratados posteriores que la adicionan o modifican. Estados Unidos ha interpretado y aplicado esa Convención y esos tratados como mejor le ha convenido y a su acomodo, y lo ha hecho con autoridad y poder omnimodos e incontrastables, sin que Panamá haya tenido a su alcance ningún recurso jurídico o político para oponerse a esas interpretaciones desorbitadas y a ejecuciones arbitrarias, que no han tenido ni tienen respaldo dentro del texto y el espíritu de los tratados, rectamente entendidos y rectamente interpretados.

En su impotencia para exigir un trato más justo, Panamá lo que ha hecho es acumular injusticias, agravios y menosprecios que, esporádicamente, han ocasionado explosiones del sentimiento patriótico, con muy pocos beneficios prácticos, pero con una aquilatación cada vez más acerada de sus empeños para la reivin-

dicación de sus justos derechos e intereses nacionales.

Mientras los Estados Unidos se arroguen la unilateralidad en la interpretación de los convenios y tratados, subsistirán todas las causas de conflictos que permanentemente han enturbiado las relaciones entre los dos países y herido la dignidad nacional.

Esa unilateralidad de decisión para Estados Unidos, subsistiría si se firmaran los tres proyectos de tratado a que este Informe Preliminar se refiere, ya que en las pocas instancias en que se prevén posibles arbitrajes, en ellas se trata de cuestiones de orden secundario, pero no de las relativas a la defensa de la soberanía y dignidad de la República.

Y como si esto fuera poco, esos proyectos de trabajos dejarían a la decisión de funcionarios de inferior categoría de ambos Gobiernos, reformas o adiciones a esos mismos tratados, si se llegasen a firmar, con la evidente intención de excluir la intervención de nuestros Órganos Ejecutivo y Legislativo que es a quienes corresponde, conjuntamente, todo lo relativo a la aprobación, modificación o adición de tratados públicos que ya han sido aprobados por ellos.

Conclusión:

Las causas de conflictos que desde 1903 han surgido por razón de la interpretación y aplicación unilaterales de los tratados vigentes, por parte del Gobierno de Estados Unidos, subsistirían y se agravarían en muchos aspectos, si esos proyectos de tratados recibieran la aprobación de Panamá.

IV

En la Sección I de este Informe Preliminar explicamos que "las negociaciones que se iniciaron entre Panamá y Estados Unidos de América en cumplimiento de la Declaración conjunta de 3 de abril de 1964, tenían por objetivo "procurar la pronta eliminación de las causas de conflicto entre los dos países" mediante los procedimientos necesarios con el objeto de llegar a un convenio justo y equitativo".

Terminamos esa Sección I con la afirmación de que "el camino más expedito y obvio a seguir para formarse un juicio crítico sobre la aceptabilidad por parte de Panamá de los tres proyectos mencionados, es el de determinar si ellos responden o no a los objetivos o finalidades que tanto Panamá como Estados Unidos pactaron en la Declaración Conjunta del 3 de abril de 1964", es decir si

ellos han logrado "procurar la pronta eliminación de las causas de conflicto entre dos países".

En la Sección II de este Informe Preliminar explicamos las siete principales causas de conflictos surgidos entre Panamá y Estados Unidos y derivados de los tratados hoy vigentes.

En la Sección III de este Informe Preliminar analizamos las citadas siete causas de conflictos en relación con los tres proyectos de tratados presentados por los Negociadores Panameños y Norteamericanos, y llegamos a la conclusión de que dichos proyectos, si llegaran a celebrarse, no resolverían ni eliminarían ninguna de las siete principales causas de conflictos analizadas.

El silogismo que anunciamos al iniciar la Sección II de este Informe Preliminar, puede, pues, formularse así:

Premisa Mayor:

Las negociaciones iniciadas con la Declaración Conjunta del 3 de abril de 1964 tenía por finalidad expresa: "procurar la pronta eliminación de las causas de conflicto entre los dos países".

Premisa menor:

Los tres proyectos de nuevos tratados sometidos en 1967 a la consideración del Órgano Ejecutivo, no eliminan ninguna de las siete principales causas de conflictos.

Conclusión:

Los tres proyectos de tratados no cumplen con la finalidad de "procurar la pronta eliminación de las causas de conflictos entre los dos países".

Por todas estas razones, Panamá estima que los proyectos de Tratados en cuestión no son utilizables ni siquiera como base de futuras negociaciones.

Panamá, 30 de marzo de 1970.



EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU EN PANAMÁ

2

Discurso del General Omar Torrijos Herrera ante el Consejo de Seguridad de la ONU*

Mi país da las gracias, con la franqueza que caracteriza a este noble pueblo panameño, por la presencia de los representantes de los Estados miembros del Consejo. De igual modo, tengo la certeza de que los hermanos países de la región latinoamericana hacen suyo este honor, ya que ellos sienten el positivo impacto que ocasiona el poder hacernos oír en este amplio escenario mundial.

Esta bienvenida la hacemos extensiva al Sr. Secretario General de la Organización, Dr. Kurt Waldheim, a los distinguidos representantes de los hermanos países de América Latina, al Presidente del Grupo Latinoamericano de las Naciones Unidas, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, a los observadores de los Estados de otras regiones y de otros organismos internacionales, y a la prensa mundial, que tanto coopero con este pequeño país para ponernos en la biografía de la dignidad del mundo.

Vengo a hablarles a nombre de un pueblo que no se alimenta con odio y al que la sencillez de su corazón lo ha hecho perdonar ofensas y enrumbar su destino hacia la consecución de su propia identidad, porque quien tiene la razón no recurre a insultos. Ya lo dijo Martí: «Los pueblos, las naciones o las personas que olvidan las ofensas, es porque tienen muy buena memoria».

Panamá constituye parte muy importante en la historia de la humanidad. Vuestras naves, cuando transitan el Canal, este paso obligado que comunica el Océano Pacífico con el Atlántico, están recorriendo cincuenta millas de nuestra no pacífica historia. Por lo tanto, para nosotros es propicio manifestar cuál es nuestro modo de pensar ante los flagelos que amenazan con destruir la pacífica convivencia del mundo.

* *Revista Lotería* Nº 207. Panamá, marzo 1973, pp. 7-11.

Panamá entiende muy bien la lucha de los pueblos que sufren la humillación del colonialismo: de los pueblos que nos igualan en restricciones y servidumbre, de los pueblos que se resisten a aceptar el imperio del fuerte sobre el débil como norma de convivencia de los países que están dispuestos a pagar cualquier cuota de sacrificio para no ser sometidos por los más poderosos; de los hombres que no aceptan el ejercicio del poder político de un gobierno extranjero sobre el territorio que los vio nacer; de las generaciones que luchan y seguirán luchando por erradicar de su patria la presencia de tropas extranjeras, sin el consentimiento del país ocupado; de los nativos que no admiten ser vistos como inferiores o como animales; de los que luchan por explotar sus propios recursos para su propio beneficio y no para subvencionar la economía de un país prepotente; de los países que no admiten ser exportadores de mano de obra barata; de las masas irredentas que pagan con su sangre la erradicación de la miseria, la injusticia, la desigualdad a que las han sometido los poderosos, nacionales o extranjeros; porque la oligarquía no tiene nacionalidad. El colonialismo es la cárcel del hombre libre.

Impactan el alma de nosotros, los panameños, todas estas situaciones descritas porque en una u otra forma las hemos sentido a través del devenir de nuestra historia republicana.

Panamá confiesa en esta alta tribuna que nosotros no podemos aceptar el sometimiento económico de un país sobre otro, ni la penetración política, cultural y económica, porque esto no es más que neocolonialismo, es decir, un colonialismo depurado, un colonialismo disimulado que se hace presente en nuestro pueblo a través de la ayuda económica condicionada que no busca el desarrollo de nuestro país, sino el control de su pueblo. De todos estos flagelos hemos sido víctimas. Todas estas condiciones que han impedido nuestro desarrollo Panamá las siente como siente la lucha que están librando otros pueblos para erradicar estos mismos males.

Nuestros cementerios de lucha rebelde están llenos de panameños, convertidos en una cruz porque pelearon por el derecho a que la patria decidiera por sí misma su propia norma de conducta, sin injerencias extrañas; por mantener el derecho de los pueblos a escoger libremente sus amigos o sus enemigos; porque nadie le regatee a ningún pueblo del mundo el derecho a la explotación y aprovechamiento de sus propios recursos; porque no se niegue el derecho a elegir nuestra propia forma de vida; porque no se nos presione cuando queremos trazar nuestra propia política internacional y el derecho inherente que tiene cada pueblo a po-

der comunicarse libremente con el pueblo que quiera. Que se respete el sagrado principio de que cada país debe estar en condiciones de elegir los esquemas que quiera, el método de gobierno que quiera, en búsqueda de su propio desarrollo. Que se nos deje, por favor, buscar la receta que cure nuestros propios males.

Me asombro cuando veo que cierto grupo de naciones se escandaliza porque los pueblos reclaman el derecho a explotar sus recursos naturales, las riquezas de sus mares, la riqueza de sus puertos, la riqueza de su suelo, de su tierra, de su mano de obra, de su posición geográfica, en beneficio de sus connacionales y no en contra de ellos. Luchan porque sus recursos no renovables no subvencionen las economías de los países ricos y desean que la riqueza de su suelo tenga la nacionalidad el país que los posea, porque este es un derecho inherente de cada país como inherente es el derecho de Panamá a explotar su posición geográfica en beneficio de su propio desarrollo.

A ciento cincuenta años de independencia de este continente, muchas de estas situaciones aún se mantienen vigentes en este sector latinoamericano. La nacionalización es una figura redundante. Cuando yo veo en la prensa que Chile nacionalizo su cobre, me pregunto: ¿Y no era ese cobre chileno? Cuando yo veo en la prensa que el Perú, con esta nueva generación de oficiales para el cambio, que encabeza ese Gobierno, nacionaliza su petróleo, digo: ¿Y no era ese petróleo peruano? Por eso, la nacionalización de estos recursos no es mas que una figura redundante, porque ellos tienen la nacionalidad del país que los posee.

El despertar de América Latina no debe ser obstaculizado, sino apoyado para poder propiciar la paz. Una nueva conciencia se esta creando en el hombre latinoamericano y solo podrá haber paz si se permite que esta conciencia siga su propio cauce. Quien se opone a esta actitud esta creando la hostilidad que propicia la existencia de convulsiones. Si se nos impide emprender cambios pacíficos, estamos empujando a nuestros pueblos a que propicien cambios violentos.

La lucha que libran los pueblos del tercer mundo por obtener su verdadera independencia política y económica constituye el más digno ejemplo que estamos legando a nuestras futuras generaciones.

Las posiciones adoptadas por los pueblos africanos, que están soportando su pobreza con mucha dignidad, pero sin resignación ni sometimiento, son un ejemplo que debe enseñarse en el aula de clases de nuestros adolescentes.

Los bloqueos y las presiones deben avergonzar más a quien los ejerce que a quien los recibe. Cada hora de aislamiento que sufre el hermano pueblo de Cuba constituye sesenta minutos de vergüenza hemisférica.

Nosotros queremos pedir a las Naciones Unidas que no admitan ser un simple espectador, o que se conforme con el papel de bombero dentro del drama de la humanidad, para que pasen a ocupar un papel más activo en la solución de los problemas reales que viven nuestros pueblos. En la proporción en que esta Organización tenga vigencia, en esa misma dimensión podemos nosotros, los países pequeños, garantizar a nuestros propios pueblos que podrán vivir en paz permanente.

Nuestros problemas son comunes; nuestros deseos son los mismos. La cruz de un patriota caído, en cualquier cementerio del mundo, no es diferente sino igual a las cruces que ha ocasionado en nuestro país la lucha por nuestra verdadera independencia.

Panamá no puede aceptar como norma de derecho internacional las consideraciones por los llamados intereses vitales o seguridad nacional, y no podemos aceptarlas porque sabemos la humillación que hemos sufrido a través de setenta años de vida republicana y porque nos compenetrarnos plenamente con el pensamiento de Amílcar Cabral, ese gran líder independentista del África, cuando dijo: «Solidaridad sin igualdad es sólo caridad, y la caridad nunca ha contribuido al progreso de las naciones ni de los seres humanos. Y seguridad sin igualdad es sólo paternal control autoritario, proteccionismo, colonialismo, y esto está en conflicto con los sentimientos de liberación de las naciones y de los seres humanos.»

El pensamiento de este gran hombre, convertido en mártir tiene completa vigencia dentro del problema que vive nuestra patria.

Si Benito Juárez dijo que «el respeto al derecho ajeno es la paz», ¿por qué no se nos respeta? ¿Por qué se nos provoca? ¿Por qué se nos somete? ¿Por qué no dejan a este pueblo panameño inofensivo, eulórico, que viva en paz?

En el caso particular de nuestro país, que hace setenta años abrió sus entrañas para beneficio de la marina mercante del mundo, y que hoy abre sus sentimientos ante esta histórica tribuna, se nos hace muy difícil comprender cómo un país que se ha caracterizado por no ser colonialista insista en mantener una colonia en el corazón de nuestra patria. Para ese pueblo esto debe ser una ofensa, porque ellos fueron colonia y sintieron lo denigrante de serlo y lucharon heroicamente por su libertad. Altos mandatarios

de Norteamérica: es más noble enmendar una injusticia que perpetuar un error. Al mundo hoy aquí presente le pedimos que nos apoye moralmente, pues la lucha del débil sólo se gana cuando hay un apoyo moral de la conciencia del mundo. Porque ya nuestro pueblo está llegando a un límite de paciencia.

Distinguidos miembros del Consejo de Seguridad; distinguidos invitados: nuestro pueblo quiere que piensen y mediten y se nos dé una respuesta sobre estas preguntas: ¿Es justo no respetar a una bandera que jamás ha sido utilizada como estandarte de una agresión? ¿Será moral negarle a una país sus ventajas naturales que le son inherentes, sólo porque nuestro reclamo lo hace una nación débil? ¿En qué diccionario jurídico moderno se consagra el concepto de perpetuidad como base de negociación?

Por último, como un mensaje muy especial que me ha pedido la ciudadanía, queremos decirle a la conciencia mundial —y que esto quede bien claro en la mente de todos— que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, Estado asociado, colonia o protectorado, ni queremos agregar una estrella más a la bandera de los Estados Unidos.

Resolución de apoyo a la causa panameña*

RESOLUCIÓN CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

GUINEA, INDIA, INDONESIA, KENIA, PANAMÁ, PERÚ, SUDÁN Y YUGOSLAVIA: PROYECTO DE RESOLUCIÓN REVISADO

El Consejo de Seguridad:

Habiendo examinado la Cuestión del Canal de Panamá dentro del tema relativo a las «medidas dirigidas al mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales en la América Latina, en consonancia con los principios y las disposiciones de la Carta».

Recordando que es propósito de las naciones Unidas el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamiento de la paz, de conformidad con los principios de la justicia y del Derecho Internacional,

Teniendo presente que la República de Panamá es el soberano del territorio y que el ejercicio libre y provechoso de la soberanía de los pueblos y las naciones sobre sus recursos naturales debe fomentarse mediante el mutuo respeto entre los Estados, basado en su igualdad soberana (resoluciones 1514 (XV), 1803 (XVII) y 3016 (XXVII)).

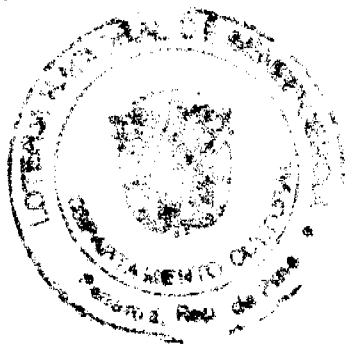
Habiendo escuchado las declaraciones de los representantes de los miembros del Consejo, de Ministros de Relaciones Exteriores de América latina y representantes de otros Estados y organizaciones invitados.

1. Toma nota de que los Gobiernos de la República de Panamá y los Estados Unidos de América, en la «Declaración Conjunta» suscrita ante el Consejo de la Organización de los Estados Ame-

* *Op. cit.*, pp. 309-310.

ricos, actuando provisionalmente como Órgano de Consulta, el 3 de abril de 1964, acordaron llegar a un convenio justo y equitativo para resolver prontamente las causas de conflicto entre ellos;

2. Toma nota de la disposición manifestada por los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República de Panamá de hacer constar en instrumento formal acuerdos sobre la abrogación de la Convención del Canal Ístmico de 1903 y sus enmiendas y la celebración de un nuevo Tratado justo y equitativo respecto al actual Canal de Panamá que llene plenamente las legítimas aspiraciones de Panamá y garantice el pleno respeto a la soberanía efectiva de Panamá en todo su territorio;
3. Exhorta a los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República de Panamá a que prosigan sus negociaciones en un elevado plano de amistad, respeto y cooperación y a concertar a la brevedad un nuevo Tratado con el fin de eliminar prontamente las causas de conflicto surgidas en sus relaciones;
4. Decide mantener la cuestión bajo su consideración.



Cómo fue vetada por Estados Unidos*

VOTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LAS DELEGACIONES DE GUINEA, INDIA, INDONESIA, KENIA, PANAMÁ, PERÚ, SUDÁN Y YUGOSLAVIA.

EL PRESIDENTE:

El Consejo continuará la consideración del tema de nuestro orden del día.

No tengo más oradores inscritos en mi lista. Si ningún otro representante desea hacer uso de la palabra, considerará que el Consejo está preparado para proceder a votar los proyectos de resolución que han sido presentados.

En primer lugar, someteré a votación el proyecto de resolución que figura en el documento S/10931/Rev.1, copatrocinado por las delegaciones de Guinea, India, Indonesia, Kenia, Panamá, Perú, Sudán y Yugoslavia.

Se procede a votación ordinaria.

Votos a favor: Australia, Austria, China, Francia, Guinea, India, Indonesia, Kenia, Panamá, Perú, Sudán, Unión de la República Socialista Soviéticas, Yugoslavia.

Votos en contra: Estados Unidos de América.

Abstenciones: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

* *Op. cit.*, pp. 354.

5

Discurso de Juan Antonio Tack

DISCURSO DE CLAUSURA* DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CELEBRADAS EN LA CIUDAD DE PANAMÁ

POR S.E. JUAN ANTONIO TACK

El Gobierno nacional me distinguió con el alto honor de que les dirija la palabra en esta sesión de clausura de la reunión del Consejo de Seguridad en la América Latina con sede en la ciudad de Panamá.

Cuando América Latina solicitó la presencia en la región de este alto órgano, ejecutó un acto de madurez política. De antemano sabíamos que sería muy difícil examinar a fondo todas las cuestiones, al menos aquellas que están revestidas de un sentido altamente conflictivo con ciertos países de mayor potencialidad bélica, económica y política. Lo más importante era, en consecuencia, llamar la atención de ustedes en la forma más respetuosa, llamar la atención de los países que honrosamente representan y también la atención de la opinión mundial sobre varios problemas de la región que crean un subyacente estado de peligrosidad para el sosiego del mundo.

América Latina demostró un amplio frente de solidaridad en el apoyo brindado a nuestras aspiraciones. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a un continente que está aprendiendo a hablar con voz propia y que lo hace con entonación clara y decidida. No podremos olvidar tales expresiones de solidaridad, que han quedado consignadas en las actas de este Consejo y en nuestra historia patria.

Al evaluar algunos de los resultados finales, no experimentamos de ninguna manera una sensación de frustración. Estamos aplicando una política de prevención en lugar de una política de apaciguamiento. Conocida las causas de los conflictos existentes,

* *Op. cit.*, pp. 389-392.

la opinión pública mundial demandará oportunamente su solución definitiva, porque el hombre de este mundo, en este siglo, quiere ante todo, y por encima de todo, vivir en paz, una paz que advendrá con el pleno desarrollo y con la aplicación estricta de los principios de derecho internacional que en el terreno de los hechos deben regir las relaciones entre los países. Pero, mientras tales metas se alcancen es evidente el repudio cada vez más fuerte de la comunidad internacional al uso de la fuerza o de las presiones económicas o de otra índole ejercidas por el país más poderoso para someter a los más débiles.

Distinguidos representantes: Durante seis días nos hemos sentido honrados con su presencia. Panamá ha vibrado de entusiasmo con el cumplimiento del ideal de Bolívar de ver esta ciudad convertida en la capital del mundo. Al menos lo ha sido durante seis días.

Creemos que al recordar los momentos pasados con nosotros ustedes nos ayudarán a rebatir esta leyenda negra que han tenido interés egoístas y que consiste en afirmar que aquí, en Panamá, nuestra pequeña República, sólo existe un canal rodeado de una selva y que amenazando a la población blanca que opera ese canal viven una nativos semisalvajes, en estado de civilización pre-colombina. Ustedes han visto que la realidad es otra. Al pueblo panameño, a nuestro querido pueblo, tenemos que rendirle el homenaje de un profundo y particular respeto. Ha dado una gran muestra de civismo y ha respondido a la exportaciones de su Gobierno y de su líder para conservar la tranquilidad de espíritu.

Nuestro pueblo demostró que aun en el límite de nuestra paciencia no cometemos actos de desesperación. Hemos cumplido tan solo una etapa más en la larga lucha que venimos librando los panamenos desde 1903 y que culminará cuando recibamos la satisfacción plena de nuestras legítimas e irrefutables aspiraciones y se perfeccione el proceso de nuestra independencia mediante el ejercicio de la jurisdicción sobre la totalidad del territorio panameño y el ejercicio pleno de la soberanía sobre nuestros recursos naturales.

El jefe de Gobierno de nuestro país, General Omar Torrijos Herrera, definió muy claras posiciones de nuestra conducta exterior en su discurso de apertura de esta reuniones. Quiero recordar brevemente esa definición. Dijo el General Torrijos:

«Panamá entiende muy bien la lucha de los pueblos que sufren la humillación del colonialismo, de los pueblos que nos igualan en

restricciones y servidumbre; de los pueblos que se resisten a aceptar el imperio del fuerte sobre el débil como norma de convivencia; de los países que están dispuestos a pagar cualquier cuota de sacrificio para no ser sometidos por los más poderosos, de los hombres que no aceptan el ejercicio del poder político de un gobierno extranjero sobre el territorio que los vio nacer; de las generaciones que luchan y seguirán luchando por erradicar de su patria la presencia de tropas extranjeras, sin el consentimiento del país ocupado; de los nativos que no admiten ser vistos como inferiores o como animales; de los que luchan por explotar su propios recursos para su propio beneficio y no subvencionar la economía de un país prepotente; de los países que no admiten ser exportadores de mano de obra barata; de las masa irredentas que pagan con su sangre la erradicación de la miseria, la injusticia, la desigualdad a que las han sometido los poderosos, nacionales o extranjeros; porque la oligarquía no tiene nacionalidad. El colonialismo es la cárcel del hombre libre.»⁽¹⁾

Igualmente, dijo el General Torrijos:

«El despertar de América Latina no debe ser obstaculizado, sino apoyado para poder propiciar la paz. Una nueva conciencia se está creando en el hombre latinoamericano y sólo podrá haber paz si se permite que esta conciencia siga su propio cauce. Quien se opone a esta actitud está creando la hostilidad que propicia la existencia de convulsiones. Si se nos impide emprender cambios pacíficos, estamos empujando a nuestros pueblos a que propicien cambios violentos.»⁽²⁾

Es claro que las reuniones de Panamá fueron y tenían que ser temporales; pero, permanente es la existencia de la Organización de las Naciones Unidas y de este digno Consejo de Seguridad. Aspiramos a que la distancia no diluya el interés y la buena voluntad de la cual hemos sido testigos. Sólo queremos recordar a tiempo que cualesquiera de los problemas de la región aquí expuestos son potencialmente susceptibles de alterar esta aparente calma, que los profetas políticos de los países interesados en el status quo quieren proclamar como eterna.

(1) S/pv. 1695, pag. 6.

(2) S/PV. 1695, pág. 11.

Quiero expresar nuestro más sentido homenaje de respeto y simpatía al Secretario General, señor Kurt Waldheim.

Deseo dar las gracias más sinceras al personal de la Secretaría por la grande y extraordinaria labor que ha rendido.

Mi pueblo y mi Gobierno están profundamente orgullosos de esta gran victoria moral que hemos obtenido.

Vivimos la hora de la dignidad. Seguiremos la lucha por la liberación nacional, con el apoyo del mundo entero.

Nuestro más emocionado agradecimiento a los dignos Gobiernos del Perú, Guinea, India, Yugoslavia, Indonesia, Kenia, Sudán, Australia, Francia, la Unión Soviética y China, quienes con nosotros, levantaron las trece manos de la dignidad mundial.

Mi Gobierno anuncia que inscribirá oportunamente la cuestión de la Zona del Canal en el orden del día del Consejo de Seguridad. También, oportunamente, inscribiremos el tema en el programa de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estados Unidos vetó el proyecto de resolución en apoyo de la causa panameña, pero el mundo entero vetó a los Estados Unidos.

Declaración Tack- Kissinger 1974*

ANUNCIO CONJUNTO POR SU EXCELENCIA JUAN ANTONIO TACK, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL HONORABLE HENRY A. KISSINGER, SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DEL 7 DE FEBRERO DE 1974, EN PANAMÁ.

La República de Panamá y los Estados Unidos de América han estado abocados a negociaciones para concertar un tratado enteramente nuevo respecto al Canal de Panamá, negociaciones que fueron hechas posibles por la Declaración Conjunta entre los dos países del 3 de abril de 1964, suscrita bajo los auspicios del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos actuando provisionalmente como órgano de consulta. El nuevo tratado abrogaría el tratado existente desde 1903 y sus enmiendas posteriores, estableciendo los requisitos para una relación moderna entre los dos estados basado en el más profundo respeto mutuo.

Desde el fin del pasado mes de noviembre, los representantes autorizados de los dos gobiernos han estado sosteniendo importantes conversaciones que han permitido llegar a un acuerdo sobre un conjunto de principios fundamentales, los cuales servirán de guía a los negociadores en el esfuerzo por concertar un tratado justo y equitativo, que elimine, de una vez por todas, las causas de conflicto entre los dos países.

Los principios que hemos acordado, a nombre de nuestros respectivos gobiernos, son los siguientes:

1. El Tratado de 1903 y sus enmiendas serán abrogados al concertarse un tratado enteramente nuevo sobre el Canal interoceánico.
2. Se eliminará el concepto de perpetuidad. El nuevo tratado relativo al Canal de esclusas tendrá una fecha de terminación fija.
3. La terminación de la jurisdicción de los Estados Unidos en territorio panameño se realizará prontamente, de acuerdo con los términos especificados en el nuevo tratado.

* Ministerio de Relaciones Exteriores. Departamento de Documentos y Archivos.

4. El territorio panameño en el cual se halla situado el Canal será devuelto a la jurisdicción de la República de Panamá. La República de Panamá, en su condición de soberano territorial, conferirá a los Estados Unidos de América, por la duración del nuevo tratado sobre el Canal interoceánico, y conforme se establezca en el mismo, el derecho de uso sobre las tierras, aguas y espacio aéreo que sean necesarios para el funcionamiento, mantenimiento, protección y defensa del Canal y el tránsito de las naves.
5. La República de Panamá tendrá una participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la operación del Canal en su territorio. Se reconoce que la posición geográfica de su territorio constituye el principal recurso de la República de Panamá.
6. La República de Panamá participará en la administración del Canal, de conformidad con un procedimiento que habrá de ser acordado en el tratado. También se estipulará en el tratado que la República de Panamá asumirá la total responsabilidad por el funcionamiento del Canal a la terminación del tratado. La República de Panamá conferirá a los Estados Unidos de América los derechos necesarios para regular el tránsito de las naves a través del Canal y operar, mantener y proteger y defender el Canal, y para realizar cualquier otra actividad específica en relación con esos fines, conforme se establezca en el tratado.
7. La República de Panamá participará con los Estados Unidos de América en la protección y defensa del Canal, de conformidad con la que se acuerde en el nuevo tratado.
8. Los Estados Unidos de América y la República de Panamá, reconociendo los importantes servicios que el Canal interoceánico de Panamá brinda al tráfico marítimo internacional y teniendo en cuenta la posibilidad de que el presente Canal podrá llegar a ser insuficiente para dicho tráfico, convendrán bilateralmente en provisiones sobre obras nuevas que amplíen la capacidad del Canal. Esas provisiones se incorporarán en el nuevo tratado de acuerdo con los conceptos establecidos en el Principio 2.

(Fdo.) *Juan Antonio Tack*, Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, (Fdo.) *Henry A. Kissinger*, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América.

Declaración de Contadora*

(24 de marzo de 1975)

DECLARACIÓN DE CONTADORA del Jefe de Gobierno de Panamá y de los Presidentes de Colombia, Costa Rica y Venezuela

El Jefe de Gobierno de Panamá y los Presidentes de Colombia y Costa Rica, reunidos en la ciudad de Panamá, con la presencia del Presidente de Venezuela y por invitación del Gobierno panameño.

Recordando que en las Reuniones de Cancilleres de Bogotá, Tlatelolco y Washington se proclamó que la Cuestión del Canal de Panamá es de interés común para la América Latina.

Tomando en cuenta la importancia que tiene el apoyo unánime manifestado por la América Latina en favor del ejercicio por la República de Panamá de sus derechos inalienables como soberano territorial en toda la extensión geográfica comprendida entre sus límites con la República de Colombia y la República de Costa Rica.

Teniendo presente que es fundamental para el desarrollo económico de los pueblos el respeto a la soberanía permanente de las naciones sobre sus riquezas naturales y conscientes de que la posición geográfica del Istmo de Panamá constituye el principal recurso natural del Estado panameño y el canal interoceánico, un medio de aprovechamiento de tal recurso, considerando las especiales relaciones de vecindad y amistad entre los Gobiernos y Pueblos de Panamá, Colombia y Costa Rica,

Advirtiendo que el Canal de Panamá, ubicado en territorio panameño, está sujeto a los riesgos y peligros que se derivarían de una guerra nuclear en caso de una conflagración internacional, lo cual expone a los tres países a sufrir consecuencias semejantes, no obstante su fundamental interés en la neutralización de dicho canal y su probada adhesión a los propósitos concertados de las

* Declaración conjunta (Isla Contadora, Panamá 24 marzo 1975). Ministerio de Relaciones Exteriores. Departamento de Documentos y Archivos. Carpeta F.87-B.

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Reconociendo el espíritu de colaboración interamericana de la República de Panamá, como decidida partidaria de los objetivos de la integración de la América Latina, en armonía con los ideales del Libertador,

Convencidos de que sus Gobiernos están en capacidad de acelerar el desarrollo económico de sus países y mejorar los niveles de vida y bienestar de sus pueblos, mediante la promoción de programas de desarrollo de sus áreas fronterizas,

Teniendo en consideración que el 7 de febrero de 1974 la República de Panamá y los Estados Unidos de América suscribieron una Declaración de 8 puntos en la cual se hicieron constar principios fundamentales que servirán de guía a los negociadores de los dos países, en los cuales se determina, entre otras cosas, que el territorio panameño del cual forma parte el Canal de Panamá será devuelto a la jurisdicción de la República de Panamá, y que ésta asumirá la total responsabilidad por el canal interoceánico a la terminación del nuevo tratado.

Han convenido en suscribir la siguiente Declaración:

- I. Los Presidentes de Colombia, Costa Rica y Venezuela reiteran el decidido apoyo de sus respectivos pueblos y Gobiernos a las justas aspiraciones panameñas en la Cuestión del Canal de Panamá, y acuerdan dirigirse a todos los Gobiernos Latinoamericanos con el fin de invitarlos a que desarrollen nuevos esfuerzos para materializar el apoyo ofrecido a Panamá en sus gestiones para concertar un nuevo Tratado del Canal con los Estados Unidos de América, que elimine las causas de conflicto entre los dos países, en armonía con los principios de Derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados.
- II. Inspirado en los principios expuestos, el Gobierno de la República de Panamá, como libre expresión de su voluntad soberana, declara que una vez aprobado un nuevo Tratado del Canal con los Estados Unidos, está dispuesto a llegar a un acuerdo con la República de Colombia y la República de Costa Rica, dirigido a otorgar a estos dos países vecinos los siguientes beneficios:
 1. El tránsito por el Canal de Panamá de los productos naturales e industriales de Colombia y Costa Rica, así como de

- sus respectivos correos, estará libre de todo gravamen o derechos, salvo aquellos que en términos de igualdad se apliquen o pudieran aplicarse a los productos y correos de la República de Panamá.
2. Los nacionales de Colombia y Costa Rica que transiten por la ruta interoceánica panameña, lo harán libres de la imposición de peajes, impuestos o contribuciones, que no sean aplicables a los nacionales panameños, siempre que presenten prueba fehaciente de su nacionalidad.
 3. Los Gobiernos de las Repúblicas de Colombia y Costa Rica podrán en todo tiempo transportar por el Canal Interoceánico sus tropas, sus naves y materiales de guerra, sin pagar peaje alguno.
- III. La República de Colombia declara que una vez concertado por Panamá un nuevo Tratado del Canal con los Estados Unidos de América y perfeccionado el acuerdo a que se hace referencia en la presente Declaración, ella renuncia a todo derecho otorgado por tratado con respecto a materias que son propias de la exclusiva jurisdicción soberana de la República de Panamá.
- IV. Los Gobiernos de los Estados signatarios toman nota con sincera complacencia de los esfuerzos que vienen realizando algunos países de la región para buscarle solución a los problemas del transporte marítimo, dentro del espíritu integracionista de la América Latina, y convienen en consultarse recíprocamente sobre esta importante materia.
- V. Los Gobiernos de Panamá, Colombia y Costa Rica convienen en otorgar especial prioridad a la concertación y promoción de programas de desarrollo de sus áreas fronterizas, con la mira de acelerar el desarrollo económico de sus países y mejorar los niveles de vida y bienestar de sus pueblos.
- VI. Los Presidentes de Colombia, Costa Rica y Venezuela expresan su honda preocupación por la lentitud con que vienen desarrollándose, después de once años de iniciadas, las negociaciones entre Panamá y los Estados Unidos para concertar un nuevo tratado sobre el canal. Destacan asimismo el contraste que existe entre la manera como tres países latinoamericanos han conseguido superar obstáculos, merced a la concepción hemisférica de Panamá, y las excesivas trabas que todavía se interponen en el arreglo del problema canalero, una cuestión que América Latina mira como propia y cree de urgente solución.

Dada en la ciudad de Panamá, capital de la República de Panamá, a los veinticuatro días del mes de marzo del año de mil novecientos setenta y cinco.

Alfonso López Michelsen
Presidente de Colombia

Daniel Oduber
Presidente de Costa Rica

Omar Torrijos Herrera
Jefe de Gobierno de Panamá

Carlos Andrés Pérez
Presidente de Venezuela

**Discurso del General Omar Torrijos Herrera
en la Quinta Conferencia de Jefes de Estado
o de Gobierno de Países No Alineados*
(1976)**

**DISCURSO DEL GENERAL OMAR TORRIJOS H.
EN COLOMBO, SRI LANKA,
ANTE LA REUNIÓN CUMBRE DEL MOVIMIENTO
DE LOS PAÍSES NO ALINEADOS ***

Distinguida Señora Presidente,
Señores Jefes de Estado:

Mi intervención será muy breve. Relataré una anécdota humana y tercermundista con amplia filosofía de liberación, y en la cual intervienen personajes aquí presentes o relacionados con nosotros, que son los que nos han llevado a participar junto a ustedes en esta conferencia cumbre.

Hace ocho años tomamos el poder en Panamá los jóvenes oficiales de las fuerzas armadas. En aquel entonces yo era joven. Y nos propusimos erradicar del país todas las causas de descontento a que nos sometían los políticos corrompidos. Comenzamos así nuestro proceso revolucionario, con los mejores cuadros intelectuales del país.

La más grande razón de descontento, que aún persiste en el país, es la presencia de un enclave colonial de 1,432 kilómetros cuadrados situado en el corazón de nuestra Patria con el pretexto de apoyar el funcionamiento del Canal de Panamá. Panamá, istmo de Centroamérica de 77,082 kilómetros cuadrados y con un millón setecientos mil habitantes, es el país que permitió que le abrieran sus entrañas para facilitar que la marina mercante del comer-

* **Torrijos-Figura-Tiempo-Faena.** En *Revista Lotería*. Número Especial (Agosto 305-septiembre 306-octubre 307-noviembre 308-diciembre 309). Panamá, 1981. Vol. I. pp. 493-95.

cio mundial se despalazara del Atlántico al Pacífico con ocho horas de distancia.

Los Estados Unidos es el país que ocupa esta cintura geográfica con catorce bases militares, un sistema de policía arrogante y agresivo, un sistema judicial y educativo a la norteamericana, comisariatos y correos, que sirven a cincuenta mil privilegiados aislados por una cerca, y que por ser nacidos en ese enclave ostentan la nacionalidad norteamericana y son dueños de todos los beneficios que el tránsito del Canal produce. A nuestro país, por el uso de esta zona, sólo le pagan un millón novecientos treinta mil dólares anuales. Suma ésta que desde hace varios años nuestro pueblo rechazó, porque la dignidad no se alquila.

En 1903 Panamá se separó de Colombia y pidió ayuda a los Estados Unidos para defender nuestro naciente Estado. Esta potencia extranjera nos la concedió, pero se reservó la cintura estratégica usurpando derechos soberanos.

Larga ha sido nuestra lucha y alto el costo social que ha pagado el pueblo, ya que los poderosos siempre ponen la metralla y los débiles los muertos. Como ningún colonialismo tiene justificación jurídica, ellos alegan un derecho como el que a su juicio le asiste a la partera de llevarse al recién nacido si no le pagan el parto.

La indignación de nuestro pueblo avasallado explotó el 9 de enero de 1964 cuando, armado de coraje y patriotismo, marchó pacíficamente a colocar nuestra bandera en la Zona del Canal.

Muchos fueron nuestros muertos. Las ciudades de Panamá y Colón sufrieron la ocupación de las tropas yanquis. Y las madres, esposas e hijos panameños, fueron humillados en su propio teruño. Esto ocasionó que rehiciéramos nuestras fuerzas armadas silenciosamente, y que, cuantros años después, bajo el mando del entonces Mayor Torrijos, asaltáramos el poder y juráramos ante el altar de la Patria que si nuestra generación tenía que morir para que otra generación viviese libre, lo haríamos. Pero esa vez elegiríamos la hora y el lugar en que tendríamos que combatir.

En estas circunstancias apareció en nuestra vida uno de los hombres más dignos y valientes que ha dado este siglo: Josip Broz, Tito. Comenzamos a estudiar su vida y sus luchas, y llegamos a la conclusión de que si este hombre había derrotado a las tropas extranjeras que invadieron su suelo, expulsándolas del mismo, cada uno de nuestros diez mil hombres, miembros de la Guardia Nacional, podría convertirse en un Josip Broz, Tito. Estudiamos así mismo el movimiento de liberación de Argelia en el que un

joven, Houari Boumedienne, que había comenzado con 67 patriotas argelinos, también luchó y se impuso a las divisiones extranjeras. Ho Chi Min, Gandhi, Nahru, Nasser, Kenyatta, igualmente nos demostraron que cuando un pueblo se determina a emprender un proceso de liberación, tarde o temprano obtiene su libertad. Porque aún no se ha descubierto el proyectil que pueda matar a un ideal.

Una tarde de agosto del año de 1972, después de un viaje en avión, auto y barco, me avisa un coronel ayudante: "Pase, General, que el Mariscal Tito lo espera". Cuando yo me vi ubicado en Brioni, frente a Josip Broz, Tito, me sentí disminuido, desarticulado, emocionalmente impactado. No estaba frente a un dirigente, estaba frente a la Historia.

Después de la cena en la que fui honrado por Tito y su compañera, y al plantearle que sólo me quedaban dos alternativas para liberar a mi país: la ruta de Gandhi o la de Ho Chi Min, y que por no tener las virtudes pacifistas del mahatma, me decidía por las guerras del héroe vietnamita, él me contestó, ya no como habla un líder sino como habla un padre: "Mire, joven Presidente, en estos tiempos existen mecanismos de paz que en mi época no existían, y que son capaces de propiciar la erradicación del colonialismo. Tenga fe, que yo lo ayudaré. Y prométame que no cometerá ningún exceso emocional. El Movimiento de los Países No Alineados es la organización que por su naturaleza le dará respuestas a su problema sin costo social".

Es por eso que estamos aquí, ahora ya como miembros plenos, solicitándoles nos apoyen una resolución que ha sido presentada por todos los demás países miembros de la América Latina. Cuando recibamos el consenso de esta cumbre, se llenará mi pueblo de fe y esperanza para llevar esta causa al seno de las Naciones Unidas.

Para terminar, quiero manifestarles a los hermanos del África, que el día que las naciones Unidas ordenen una misión de guerra, nuestras Fuerzas Armadas estarán presentes para erradicar del poder a esa minoría de Rodesia y África del Sur. Nosotros sabemos lo que es el Apartheid, porque es precisamente la discriminación racial lo más avergonzante dentro del área geográfica que parte a nuestro país en dos.

Muchas Gracias.

DECLARACIÓN POLÍTICA*

La Quinta Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados se celebró en Colombo, Sri Lanka, del 16 al 19 de agosto de 1976.

Los siguientes países participaron en calidad de miembros de la Conferencia: Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Benín, Bután, Birmania, Botswana, Burundi, Cabo Verde, República Unida de Camerún, República Centroafricana, Comoras, Congo, República Democrática Popular de Corea, Costa de Marfil, Cuba, Chad, Chipre, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guayana, India, Indonesia, Irak, Jamaica, Jordania, Kampuchea, Kenya, Kuwait, República Democrática Popular de Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, República Árabe de Libia, Madagascar, Malasia, República de las Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Nepal, Níger, Nigeria, Omán, OLP, Panamá, Perú, Katar, Ruanda, República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Singapur, República Árabe de Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, República Unida de Tanzania, Togo, Trinidad, Túnez, Uganda, República Socialista de Vietnam, Alto Volta, República Árabe del Yemen, República Democrática Popular de Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia.

La Conferencia otorgó estatuto especial a Belice, incluido el derecho de voz en la Conferencia Cumbre.

Los siguientes países y organizaciones asistieron a la Conferencia en calidad de observadores:

Barbados, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Granada, México, Uruguay, Venezuela, Congreso Nacional Africano, Primer Congreso Panafricano de Azania, Frente de Liberación de la Costa de los Somalíes, Liga Árabe, Movimiento de Liberación de Djibouti, Naciones Unidas, Organización Popular del África del Sudoeste, Organización de los Pueblos de África y Asia, Organización de la Unidad Africana, Partido Socialista de Puerto Rico, Secretario General de la Conferencia Islámica, Consejo Nacional Africano de Zimbabwe.

Los siguientes países asistieron a la Conferencia en calidad de invitados: Austria, Finlandia, Filipinas, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza.

* *Revista Política Internacional*, No. 634, Año vigésimo-séptimo. Belgrado 5-IX-1976, pp. 19 y 29, respectivamente.

I. INTRODUCCIÓN

1. La Quinta Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no Alineados se celebró en el contexto de una situación internacional caracterizada por una intensificación de la lucha de los pueblos del mundo por su independencia política y económica, por la paz y el progreso y por un orden internacional, político y económico, basado en los principios de la libre determinación, la justicia, la igualdad y la coexistencia pacífica entre los pueblos y países del mundo. La Conferencia advirtió con satisfacción que desde que se propuso por primera vez la política de no alineación hace más de dos decenios, ha demostrado su creciente influencia en la evolución de la situación internacional y que los países no alineados desempeñan un papel constructivo y cada vez más importante en los asuntos mundiales. La no alineación ha llegado a ser uno de los factores más dinámicos para promover la verdadera independencia de los Estados y de los pueblos, y la democratización de las relaciones internacionales para crear condiciones más favorables para la paz, la justicia, la igualdad y la cooperación internacional en el mundo.
2. Los países no alineados han contribuido de manera considerable en sus Conferencias Cumbres de Belgrado, el Cairo, Lusaka y Argel, así como con su acción concertada, a transformar positivamente las relaciones internacionales y a promover la paz mundial. La conferencia consideró que la Cuarta Conferencia Cumbre representó un hito importante en la evolución del movimiento no alineado, por haber reforzado su unidad y solidaridad en sus esfuerzos por promover la paz y la seguridad internacionales dando nuevo impulso a la lucha de los pueblos de Asia, África y América Latina y de otras fuerzas contra el imperialismo, el colonialismo, el apartheid, el racismo, el sionismo y todas las formas de dominación extranjera.
3. Los Jefes de Estado examinaron la evolución de la situación internacional desde que se celebró la Cuarta Conferencia Cumbre y han concluido que los hechos demostraban la bondad de los principios que se reafirmaron y de los programas que se aprobaron en ese período.

La Conferencia acogió con satisfacción el triunfo en la lucha de los pueblos de Kampuchea Democrática, la República Democrática Popular de Laos y la República Socialista de Vietnam con

la agresión imperialista de los Estados Unidos, y el éxito de la lucha de liberación de Guinea-Bissau, Cabo Verde, Mozambique, Angola y Santo Tomé y Príncipe, que ha conducido a la extinción definitiva del colonialismo portugués y a la aparición de estos Estados independientes

La Conferencia acogió con especial satisfacción la derrota humillante de las fuerzas invasoras del imperialismo y del apartheid por el pueblo angoleño. Con igual satisfacción vio la lucha triunfante contra el sionismo y la notable demostración de la capacidad combativa del pueblo árabe en su guerra de liberación de octubre de 1973 contra las fuerzas agresoras israelíes. La Conferencia acogió asimismo con satisfacción el creciente reconocimiento internacional de la Organización de Liberación de Palestina y de los derechos inalienables del pueblo palestino.

La Conferencia estimó que estos acontecimientos han sido los de mayor importancia desde la celebración de la Cuarta Conferencia Cumbre.

[...]

XV. ASUNTOS LATINOAMERICANOS

110. La Conferencia tomó nota con satisfacción del unánime apoyo latinoamericano a las legítimas aspiraciones de la República de Panamá y se sumó a los deseos expresados por los países del hemisferio occidental para que se resuelva esta cuestión en el presente año, en el que se celebra el sesquicentenario del Congreso Anfitriónico de Panamá convocado por el libertador Simón Bolívar.
111. La Conferencia reiteró su firme apoyo y su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Panamá en su justa lucha por lograr la soberanía efectiva y la jurisdicción total sobre la llamada zona del Canal de Panamá.
112. La Conferencia reafirmó el apoyo de los países no alineados al control panameño del Canal de Panamá y reiteró su firme apoyo a todos los esfuerzos que la República de Panamá habrá de hacer ante los foros internacionales, en particular los organismos de las Naciones Unidas.
113. La Conferencia elogió los progresos realizados por el pueblo de Panamá bajo el Gobierno Revolucionario presidido por el General Omar Torrijos Herrera, ofreciéndole todo el apoyo que pueda necesitar cuando se enfrente con cualquier acción que pueda producir su desestabilización.

Discurso del General Omar Torrijos Herrera el 7 de septiembre de 1977

DISCURSO DEL JEFE DE GOBIERNO DE PANAMÁ GENERAL OMAR TORRIJOS HERRERA EN CEREMONIA DE LA FIRMA DE LOS TRATADOS TORRIJOS-CARTER 7 DE SEPTIEMBRE DE 1977*

Señor Presidente de los Estados Unidos:

Abro cita, "Ud. y yo sabemos muy bien cuántos puntos hay en este tratado que todo patriota panameño objetaría". Carta de John Hay, Secretario de Estado de los Estados Unidos al Senador Spooner, enero 20 de 1904". Cierro cita.

Mi presencia en este escenario conjuntamente con los más representativos líderes y estadistas del hemisferio, rubrica la terminación de muchas luchas de varias generaciones de patriotas panameños.

Nuestro pueblo, que ha luchado con tenacidad heroica por perfeccionar su independencia, no tiene ninguna vocación de rencor hacia este pueblo que agigantándose en la era tecnológica abrió las entrañas del istmo de Panamá y comunicó dos océanos en ocho horas de distancia. Sin embargo lo que fue una conquista tecnológica para la humanidad, las deformaciones históricas la convirtieron en una conquista colonial de nuestro país. Y digo deformaciones de la historia porque el mismo Presidente Teodoro Roosevelt públicamente manifestó en Panamá, abro cita: «Señor Presidente Amador Guerrero: Nosotros no tenemos la menor intención de establecer una colonia independiente en el territorio de la Zona del Canal de Panamá. Octubre 18 de 1904», cierro cita.

En el fondo lo que alimentaba la esperanza en el hombre panameño y fortalecía su paciencia durante todos estos años era la firme convicción de que el pueblo norteamericano no tiene vocación colo-

* Revista *Lotería*, Número Especial (Agosto 305-septiembre 306-octubre 307-noviembre 308-diciembre 309). pp. 501-02.

nialista porque ustedes fueron una colonia y lucharan heroicamente por su liberación. Consideramos que Ud., Señor Presidente Carter, al enarbolar la moralidad como bandera en nuestras relaciones está representando el verdadero espíritu de su pueblo.

América Latina nos ha acompañado en forma leal y desinteresada. Sus mandatarios se encuentran en este acto para testimoniar que la religión y la causa del pueblo panameño son la religión y la causa del continente. La presencia de estos mandatarios debe iniciar una nueva y diferente era entre quienes vivimos y dormimos juntos en el continente a fin de que desaparezcan todos los resabios de injusticia que impiden que se nos trate de igual a igual, porque ser fuerte conlleva el compromiso de ser justo y Ud. ha convertido la fuerza imperial en fuerza moral.

Estimado Señor presidente Carter: Hay dos clases de verdades: la verdad lógica y la verdad agradable. En nombre de la verdad lógica quiero manifestarle que este tratado que firmaremos dentro de poco y que deroga el tratado que ningún panameño firmó, no cuenta con un total consenso en nuestro pueblo y no cuenta con un total consenso porque 23 años acordados como período de transición son 8,395 días. Porque permanecen en este tiempo bases militares que convierten a mi país en un posible objetivo estratégico de represalia. Y porque estamos pactando un tratado de neutralidad que nos coloca bajo el paraguas defensivo del Pentágono, pacto éste que de no ser administrado juiciosamente por las futuras generaciones, puede convertirse en un instrumento de permanente intervención.

Sin embargo, lo pactado es producto del entendimiento entre dos dirigentes que creen en la pacífica convivencia de sus pueblos y que reclaman el valor y liderazgo de enfrentarse a sus pueblos sin más armas que la verdad y su profunda convicción de lo justo.

Un plebiscito será el instrumento de ratificación en Panamá que más que un plebiscito será el más puro ejercicio de civismo democrático registrado en la historia política de la República. La ratificación de este país dependerá del consenso del Congreso.

Estimados amigos Senadores: Me despido recordándoles un pensamiento de un prohombre que hoy recobra más vigencia que nunca. Abraham Lincoln dijo, abro cita: «Un estadista es aquel que piensa en las futuras generaciones y un político es aquel que piensa en las próximas elecciones». me voy a mi Patria convencido de que el futuro de nuestras relaciones queda en manos de excelentes estadistas. Muchas Gracias.